

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE AMERICA II
(Antropología de América)



TESIS DOCTORAL

**Conflicto socio-ambiental en el territorio U'wa: un análisis del
conflicto entre indígenas y estado colombiano en torno al desarrollo, el
medio ambiente y la cultura**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Geovanny Durán López

DIRECTOR

Jesús Adánez Pavón

Madrid, 2016



Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Geografía e Historia

Departamento de Historia de América II (Antropología de América)

Geovanny Durán López

**CONFLICTO SOCIO-AMBIENTAL EN EL TERRITORIO U'WA:
UN ANÁLISIS DEL CONFLICTO ENTRE INDÍGENAS Y ESTADO
COLOMBIANO EN TORNO AL DESARROLLO, EL MEDIO AMBIENTE Y
LA CULTURA**

Tesis doctoral dirigida por

Jesús Adánez Pavón

Madrid 2015

“Lo que no consigue ver el mundo es que el drama de Colombia, a comienzos del siglo XXI, sigue siendo el mismo de principios del siglo XX: la ausencia del pueblo en el relato de la nación”
William Ospina.

“Los países más avanzados están conduciendo al mundo al desastre mientras que los pueblos hasta ahora considerados primitivos están tratando de salvar al planeta entero. Y a menos que los países ricos aprendan de los indígenas estaremos condenados todos a la destrucción”
Noam Chomsky.

A mi padre

CONTENIDO

Resumen	15
Abstract	19
Introducción	23
1. Objetivos y planteamiento de la investigación.....	33
1.1. Objetivos	33
1.1.1. General.....	33
1.1.2. Específicos	33
1.2. Metodología	34
2. El “Desarrollo”: historia y crítica de un concepto	43
2.1. El desarrollo económico: Una perspectiva de su desenvolvimiento e influencia en el comportamiento de las sociedades capitalistas	44
2.2. El “Desarrollo”: Debate sobre su concepción desde la antropología en los países del Tercer Mundo	56
2.3. Crisis socio-ambiental, una difícil encrucijada para el desarrollo y crecimiento de los pueblos del mundo.....	71
3. Los u’wa: un acercamiento a su hábitat, historia y cultura	85
3.1. Aspectos generales de los u’wa	86
3.2. Geografía del territorio u’wa	101
3.3. El mundo virtual de los u’wa y la defensa de su territorio	108
3.4. Los u’wa en la Colonia	117
3.5. El pensamiento avanzado de los u’wa	123
4. Contexto histórico del Estado colombiano a partir del siglo XX.....	129
4.1. Lucha por la tierra.....	129
4.2. Grupos armados al margen de la ley: Factor determinante del contexto socioeconómico y político del hábitat indígena	137
4.2.1. Formación de los grupos guerrilleros	137
4.2.2. Evolución del paramilitarismo.....	148

5.	Violencia contra los pueblos indígenas y su situación jurídica en el Estado colombiano	157
5.1.	Problemas agrarios y territoriales y desplazamientos en Colombia	157
5.2.	Formación de las organizaciones indígenas.....	160
5.3.	Violencia contra los pueblos indígenas.....	162
5.4.	Análisis sobre los derechos indígenas en el marco jurídico colombiano.....	192
5.4.1.	Diversidad étnica y cultural	202
5.4.2.	El régimen de tierras y los resguardos	203
5.4.3.	Explotación de recursos naturales dentro de los territorios indígenas ...	205
5.4.4.	Mecanismos de protección.....	207
6.	Violaciones contra el territorio sagrado de los u'wa.....	209
6.1.	El conflicto u'wa con las multinacionales petroleras	210
6.1.1.	Relato de los hechos.....	210
6.1.2.	Análisis de la situación que ha girado en torno al conflicto	217
6.2.	El proceso jurídico de los u'wa y las deficiencias de los amparos constitucional y legal frente al litigio con la multinacional “Occidental de Colombia”	233
6.2.1.	Irregularidades en la consulta previa	249
6.3.	Suicidio colectivo.....	267
6.4.	Diagnóstico de proyectos actuales en territorio u'wa: Peligros para su integridad territorial y cultural	283
6.4.1.	Explotación petrolera	283
6.4.2.	Explotación de gas	296
6.4.3.	Explotación minera	300
6.4.4.	Infraestructura vial	309
6.4.5.	Actividades encaminadas a la mejora del territorio u'wa.....	319
6.4.6.	Parques nacionales	323
6.4.7.	Infraestructura y ecoturismo	330
6.5.	Síntesis de amenazas adicionales a la comunidad	335
6.6.	Visión general de los dirigentes u'wa sobre el desenvolvimiento de las relaciones con los <i>reowa</i> y su posición frente al conflicto.....	341
6.6.1.	El indígena como sujeto ecológico	361

6.7.	Sobre el futuro fortalecimiento de la lucha u'wa en defensa de su territorio	375
6.7.1.	Seguimiento de las amenazas sobre territorio u'wa.....	376
7.	Conclusiones	379
8.	Bibliografía	385

Anexos

Anexo 1: Entrevistas	397
1.1. Entrevista a Claudia Cobaría	397
1.2. Entrevista a Gilberto Cobaría.....	417
1.3. Entrevista a Verito Cobaría.....	423
1.4. Entrevista a Gilberto Arlant, Delegado nacional de población desplazada en Colombia y funcionario de la ONIC.....	431
Anexo 2: Sentencia T-129/2011	439
Anexo 3: Presentación del caso u'wa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – OEA	491
Anexo 4: Sentencia T-387/13	495
Anexo 5: Sentencia SU-039/97	513

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Identificación de las personas que fueron entrevistadas durante la realización del trabajo de campo.....	39
Tabla 2: Violencia política contra pueblos indígenas. 1974-2004. Total por tipo de violación	176
Tabla 3: Violencia política contra pueblos indígenas. 1974-2004. Total por etnia y tipo de violación	177
Tabla 4: Violencia política contra pueblos indígenas 1974-2004. Total y porcentaje de violaciones individuales por departamento y etnia.....	178
Tabla 5: Cronología del conflicto u'wa con las empresas petroleras.....	210

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1: Ubicación de los resguardos u'wa	29
Mapa 2: Municipios con resguardos indígenas u'wa	90
Mapa 3: Violencia política contra pueblos indígenas 1974 Total hechos de violencia por municipios	164
Mapa 4: Violencia política contra pueblos indígenas Periodo 1974-1981 Total hechos de violencia por municipios	165
Mapa 5: Violencia política contra pueblos indígenas Periodo 1992-1996 Total hechos de violencia por municipios	170
Mapa 6: Violencia política contra pueblos indígenas 1996 Total hechos de violencia por municipios	173
Mapa 7: Violencia política contra pueblos indígenas Periodo 1997-2004 Total hechos de violencia por municipios	174
Mapa 8: Bloques petroleros en territorio u'wa	286
Mapa 9: Fases oleoducto Bicentenario.....	290
Mapa 10: Oleoducto Bicentenario en el municipio de Cubará	291
Mapa 11: Títulos mineros en territorio u'wa	302
Mapa 12: Tramos que forman parte del corredor de transporte Caracas-Bogotá-Quito	313

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1: Violencia política contra pueblos indígenas en Colombia. 1974-1991.	
Violaciones individuales según autores	167
Gráfica 2: Violencia política contra pueblos indígenas en Colombia. 1991-1996.	
Violaciones individuales según autores	171
Gráfica 3: Violencia política contra pueblos indígenas en Colombia. 1997-2004.	
Violaciones individuales según autores	181
Gráfica 4: Violencia política contra pueblos indígenas en Colombia. 1974-2004.	
Total casos de violaciones colectivas	183

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Foto 1: Claudia Cobaría con su familia, Gilberto Arlant y el autor	273
Foto 2: Claudia Cobaría.....	273
Foto 3: Verito Cobaría y el autor.....	274
Foto 4: Verito Cobaría, Gilberto Arlant y el autor	274
Foto 5: Verito Cobaría y el autor.....	275
Foto 6: Verito Cobaría.....	276
Foto 7: Verito Cobaría y el autor.....	277
Foto 8: Verito Cobaría y Gilberto Arlant en AsoU'wa	277
Foto 9: Madre u'wa y sus dos hijas	278
Foto 10: Indígena u'wa.....	278
Foto 11: Jóvenes indígenas y el autor.....	279
Foto 12: Madre u'wa y su hijo	279
Foto 13: Familia u'wa con el autor.....	280
Foto 14: Madre u'wa con su hijo.....	280
Foto 15: Indígena u'wa en el Resguardo Unido U'wa	281
Foto 16: Dos hermanas u'wa	281
Foto 17: Niño u'wa en una zona del Resguardo.....	282
Foto 18: Niña u'wa en una zona del Resguardo.....	282
Foto 19: Tramo 1 de oleoducto que atraviesa territorio u'wa	292
Foto 20: Tramo 2 de oleoducto que atraviesa territorio u'wa	292
Foto 21: Puente de la zona.....	317

Foto 22: Construcción de carretera en la zona	317
Foto 23: Joven u'wa atravesando puente en zona de Resguardo	318
Foto 24: Carretera principal del municipio de Cubará	318

Resumen

El reconocimiento de los grupos étnicos, en América en general y en Colombia en particular, tomó auge a partir de la década de los años 70 del siglo pasado, impulsado por organizaciones indígenas con la colaboración de diferentes estamentos sociales. Este proceso empezó por reconocer la diversidad cultural y continuó hasta elevarse al estatus de precepto constitucional, tal como quedó recogido en la Constitución Política colombiana expedida en 1991. Ello, sin embargo, no ha bastado para acabar con el proceso general de destrucción de la población y las culturas indígenas americanas, ahora amparado en modelos de desarrollo que vulneran su cultura y su territorialidad y protagonizado por grandes transnacionales mineras. Para el caso exclusivo de Colombia, los desplazamientos internos, principalmente de indígenas y campesinos, han sido producto del actual conflicto bélico que se ha mantenido por más de setenta años. Además, existen otros factores socioeconómicos, tales como la inequitativa distribución del ingreso y la riqueza, la existencia de latifundios improductivos y de campesinos sin tierra y la presencia de transnacionales mineras con negativo impacto ecológico e inquietantes repercusiones socio-ambientales.

El objetivo de esta investigación, teniendo como referencia los anteriores hechos, es analizar la interacción de los grupos indígenas colombianos con la sociedad y la cultura nacionales, representadas por el Estado y las compañías multinacionales, y el modo en que los valores de esa cultura que aun cabe denominar como occidental cristiana –concepciones económicas, sociales y políticas, sus instituciones constitucionales y legales, y grupos ilegales– han afectado a la cultura ancestral y los derechos territoriales de estas colectividades. Al mismo tiempo, se pretende valorar cuál ha sido su impacto en el medio ambiente, los recursos naturales y la vida de las comunidades indígenas, y las expectativas de desarrollo frente a los proyectos que pretendan realizarse en sus espacios geográficos, teniendo en cuenta, por un lado, la subestimación y desconocimiento de sus costumbres y la explotación desmedida de los recursos y riquezas que se encuentran en sus hábitats. La investigación se centra, como estudio de caso, en el análisis del proceso sufrido por el pueblo indígena u'wa, que habita en el territorio de la República de Colombia en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes.

El estudio parte de una revisión histórica y crítica del concepto de “Desarrollo”, en el Capítulo 2, cuyas características y contradicciones están en la base del conflicto socio-ambiental que afronta actualmente, entre otras, la comunidad indígena u’wa. Tras la revisión, en el Capítulo 3, de los estudios etnohistóricos y etnográficos sobre los u’wa (denominados tradicionalmente “tunebo” en la literatura especializada), los siguientes dos capítulos abordan la violencia que ha caracterizado la historia colombiana a partir del siglo XX y su impacto sobre los pueblos indígenas. El Capítulo 6, por último, se centra en el conflicto u’wa, combinando los resultados de un trabajo de campo de carácter etnográfico entre los u’wa y la revisión de documentación relativa a proyectos y actividades de empresas transnacionales en su territorio.

El trabajo de campo, realizado en la comunidad Cobaría —una de las siete que conforman la actual comunidad indígena—, se orientó a captar la visión de los propios indígenas sobre el conflicto mediante una metodología de tipo cualitativo que incluyó la aplicación de herramientas antropológicas básicas como la observación participante, las guías de observación y las entrevistas estructuradas y semi-estructuradas. Sobre la base de ese trabajo, el Capítulo 6 presenta el discurso de un conjunto de dirigentes u’wa acerca de la naturaleza, de su derecho al territorio, de su papel como garantes de ambos y en contraste con los objetivos de las empresas transnacionales y el Estado y, en general, de sus relaciones con el mundo occidental y sus instituciones; se añade a dicha presentación un examen de las interacciones entre el discurso indígena y el discurso ambientalista global y una discusión sobre las implicaciones de ello. La revisión documental, por su parte, permite realizar un diagnóstico de las actividades desarrolladas por las empresas transnacionales y su repercusión en la integridad territorial y cultural del pueblo u’wa. Como parte del análisis, se hace referencia a la decisión extrema, a finales de la década de 1990, del suicidio colectivo como única alternativa a la resolución del conflicto, de la cual se hizo eco la prensa internacional, y se evalúan las deficiencias e irregularidades de los amparos constitucional y legal frente al litigio con la multinacional “Occidental de Colombia”. Por último, se efectúa una síntesis de las labores menores que se adelantan en la zona y que también representan una amenaza para la colectividad, y una serie de recomendaciones que pueden fortalecer la lucha u’wa en defensa de su territorio.

Los datos e interpretaciones reunidos confirman e ilustran la idea general expresada más arriba: la pérdida del control que los grupos indígenas tenían sobre los recursos básicos para su subsistencia, destruyendo de forma irremediable esas fuentes de riqueza y cambiando, por consiguiente, las costumbres milenarias encaminadas a la preservación de los bienes ofrecidos por la naturaleza. En la controversia que se sostiene actualmente con el pueblo u'wa, la investigación destaca el modo en que la comunidad relaciona su voluntad de preservar los recursos de la naturaleza con una lucha que no sólo protege el espacio físico que habita, sino que se extiende a la conservación del planeta en general, hecho que beneficia a toda la especie humana. Por último, a pesar de la larga lista de actividades que se desarrollan en el territorio de la comunidad u'wa y cuyos objetivos e impacto recoge la investigación, se demuestra que esta colectividad ha sabido solventar las repercusiones negativas que todas ellas han dejado a su paso, gracias a la unidad interna de su comunidad. La fuerza de sus ideas y la asimilación de las mismas por parte de sus habitantes han logrado que sean capaces de superar los obstáculos que han aparecido en su camino y no hayan caído en la desintegración que ha producido la desaparición de otros grupos nativos del país.

Abstract

Socio-Environmental Conflict in the U'wa Territory: An Analysis of the Conflict between Indian and the Colombian State Concerning Development, Environment and Culture

The recognition of ethnic groups in America in general and Colombia in particular took boom from the decade 70s of last century, driven by indigenous organizations in collaboration with different social strata. This process began by recognizing cultural diversity and continued to rise to the status of constitutional precept, as it was reflected in the Colombian Constitution drew up in 1991. This, however, was not enough to end the overall process of destruction of the population and indigenous American cultures, currently connected to models of development which spread to these communities breaking their culture and territoriality, and directed by large transnational companies develop mining extractive processes. For the unique case of Colombia, internal displacements, mainly Indians and peasants, have been the product of the current war that has continued for more than seventy years. There are other socioeconomic factors such as inequitable distribution of income and wealth, the existence of unproductive large estates and peasants without land and the presence of transnational mining companies with a negative ecological impact and disturbing socio-environmental impacts.

The aim of this research, referencing the above facts, is to analyze the interaction of Colombian indigenous groups to society and national culture, represented by the State and multinational companies, and how the values of that culture which can be named as Christian Western economic, social and political conceptions, its constitutional and legal institutions, and illegal-groups have affected the ancient culture and the land rights of these communities. At the same time, it is intended to assess what has been their impact on the environment, natural resources and life of indigenous communities, and development expectations tackle projects that intend to accomplish in their geographical areas, taking into account, first, the underestimation and disregard of their customs and over-exploitation of resources and wealth found in their habitats. The research focuses, as a case study, the analysis of the process suffered by the U'wa indigenous people who inhabit the territory of the Republic of Colombia on the eastern slope of the Andes.

The study starts from a historical and critical review of the concept of "Development" in Chapter 2, whose characteristics and contradictions are on the basis of socio-environmental conflict currently facing, among others, the U'wa indigenous community. After a review, in Chapter 3, of ethnohistorical and ethnographic studies on the U'wa (traditionally called "Tunebo" in the literature), the next two chapters deal with the violence that has characterized Colombian history from the twentieth century and its impact on indigenous peoples. Chapter 6, finally, focuses on the U'wa conflict. The research combines the results of an ethnographic fieldwork among the U'wa and review of documentation on projects and activities of transnational corporations on their territory.

Fieldwork done in the Cobaría—a community of the seven that make up the current indigenous community— was aimed at capturing the vision of the indigenous people themselves about the conflict through a qualitative methodology that included the application of basic anthropological tools such as participant observation, observation guides and structured and semi-structured interviews. Based on this work, the chapter presents the speech of a group of U'wa leaders about the nature of their right to the territory in their role as guarantors of both and in contrast with the objectives of transnational corporations and State and, in general, their relations with the Western world and its institutions; it is added to such presentation, an examination of the interactions between the indigenous discourse and global environmental discourse and discussion on the implications of this. The documentary review, meanwhile, allows an assessment of the activities of transnational corporations and their impact on territorial and cultural integrity of the U'wa people. As part of the analysis, a reference to the extreme decision, at the end of the 1990s, the collective suicide as the only alternative to conflict resolution, which was echoed by the international press is made, and the deficiencies and irregularities are evaluated the constitutional and legal protections against litigation with the multinational "Occidental de Colombia". Finally, a synthesis of the smaller work underway in the area and also are a threat to the community, and a series of recommendations that can strengthen the U'wa struggle in defense of its territory is made.

Gathered data and interpretations confirm and illustrate the general idea: the great indigenous groups have lost the control they had over basic resources for their

livelihood, destroying irretrievably these sources of wealth and changing, therefore, the ancient customs aimed at the preservation of the goods offered by nature. In the controversy that currently holds the U'wa people, the research highlights how the community relates his desire to preserve the resources of nature with a fight that not only protects the physical space it inhabits, but extends to preserve the planet in general, something that benefits the entire human species. Finally, despite the long list of activities taking place in the territory of the U'wa community and whose objectives and impact collects the research, it is shown that this community has managed to overcome the negative impact they have all left to their step, thanks to the internal unity of the community. The strength of their ideas and assimilating them by their inhabitants has managed to be able to overcome the obstacles that have appeared in his way and have not fallen into decay that has produced the disappearance of other native groups in the country.

Introducción

El reconocimiento de los grupos étnicos en Colombia tomó auge a partir de la década de los años 70 del siglo pasado, impulsado por organizaciones indígenas con la colaboración de diferentes estamentos sociales (DANE, 2007: 8). Se inició por reconocer la diversidad cultural y continuó hasta elevarse a la calidad de precepto constitucional, tal como quedó recogido en la Constitución Política –C.P– expedida en 1991, donde se incluyeron alrededor de 30 artículos sobre este tema y sobre sus características y peculiaridades culturales.

Los mandatos constitucionales más explícitos y de mayor impacto sobre el reconocimiento político, cultural, territorial y jurisdiccional, son los siguientes:

Artículo 7º C. P: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

Artículo 10º C.P: El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.

Artículo 13º C.P: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

Artículo 63º C.P: Reglamentado por la Ley 1675 de 2013. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Artículo 68º C.P: Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

Artículo 96º C.P: Modificado por el Acto Legislativo 01 de 2002. Artículo 1º. El Artículo 96 de la Constitución Política quedará así: “Artículo 96. Son nacionales colombianos [...] c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos”.

Artículo 246° C.P: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

Artículo 286° C.P: Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.

En el año 2014 la población colombiana asciende a 45.656.937 habitantes (cifra proyectada a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en 2005 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, cuando se estableció que la población era de 42.888.592 habitantes). Si se tiene en cuenta que la población identificada como indígena estimada, para el último año mencionado, es de 1.392.623, esta corresponde al 3,4% del total de la población nacional (DANE, 2007: 10)¹. Esta población indígena, según el Censo aludido, se encuentra distribuida en 91 jurisdicciones indígenas: achagua, amorúa, andoke, arhuaco, awa, bara, barasana, barí, betoye, bora, cañamomo, carapana, cocama, chimila, chiricoa, coconuco, coreguaje, coyaima-natagaima, desano, dujo, embera, embera katío, embera-chamí, eperara-siapidara, guambiano, guanaca, guane, guayabero, hitnu, hupdu, inga, juhup, kakua, kamëntsá, kankuamo, karijona, kawayarí-cabiyarí, kofán, kogui, kubo, kuiba, kurripaco, letuama, makaguaje, makuna, masiguare, matapí, miraña, mokaná, muinane, muisca, nasa-páez, nonuya, nukak, ocaina, pasto, piapoco, piaroa, piratapuyo, pisamira, puinave, sáliba, sánha, senú, sikuani, siona, siriano, taiwano, tanimuka, tariano, tatuyo, tikuna, totoró, tsiripu, tucano, tule, tuyuka, uitoto, u'wa-tunebo, wanano, waunan, wayuu, wiwa, yagua, yanacona, yauna, yuko, yukuna, yuri, yurutí. Estos son los pueblos reconocidos por entidades del Estado directamente relacionadas con estos temas, como el Ministerio del Interior, Planeación nacional, Ministerio de Defensa y la Organización Nacional Indígena de Colombia.

¹ Es importante señalar que para identificar a la población que se autodenomina como indígena, el censo incluyó la siguiente pregunta: "¿De acuerdo con su CULTURA, PUEBLO O RASGOS FÍSICOS... se reconoce como: 1. Indígena? Nombre del pueblo: _____, 2. Rom o gitano?, 3. Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia?, 4. Palenquero de San Basilio, 5. Negro(a), mulato(a), Afrocolombiano(a) o afrodescendiente?, 6. Ninguno de los anteriores? Y adicionalmente se preguntó para todas las personas ¿Habla la lengua de su pueblo? 1 SI 2 NO" (DANE, 2007: 14).

Ese 3,4% de indígenas en la población total del país se distribuye con cifras relativas desiguales en diferentes regiones de Colombia. Algunas de ellas cuentan con mayoría indígena, como Vaupés y Guainía con el 66,7% y 64,9% respectivamente, situadas al sur-oriental nacional. En algunas otras la población indígena tiene una importancia significativa, como Vichada y Amazona con el 44,4% y 43,4%, respectivamente, situadas en el extremo sur del país; y en el extremo norte la Guajira con el 44,9%; Cauca con 21,6% y Putumayo con 20,9%, en el sur-occidente del país. Además, en todas las poblaciones y ciudades de significativo tamaño, incluyendo a las mayores como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga o Cartagena, se percibe una creciente inmigración originaria de los diferentes pueblos, desplazados por el conflicto armado, que en la mayoría de los casos tiene como objetivo la posesión de los territorios indígenas (DANE, 2007: 29).

A pesar de los avances introducidos en la Constitución de 1991, hasta el presente el reconocimiento político, cultural, jurisdiccional y territorial de los pueblos indígenas no se ha plasmado en realidades, limitándose a poco más que una manifestación retórica de buenas intenciones. La historia de esta sujeción de los indígenas americanos a la estructura y las prácticas de la sociedad en la que se encuentran englobados arranca, como es sabido, siglos atrás. El encuentro de americanos y europeos a partir de principios del siglo XVI no fue lo que idealmente debió haber sido: el encuentro de dos culturas diferentes, con visiones del mundo, imaginarios y valores que analizar, complementar y pulir para tomar lo que valoraran positivamente en un proceso de enriquecimiento recíproco. Fue lo opuesto. Ante la sorpresa y perplejidad de los americanos, los europeos esgrimieron todo su arsenal de violencia para oprimirlos, explotarlos y someterlos a la más extrema servidumbre, desconociendo sus tradiciones, creencias y costumbres para imponer en forma abrupta su religión, sus costumbres y, en general, su cultura. Esta última, desde el punto de vista económico, se basaba en el mercantilismo que consideraba el ‘oro’ como expresión máxima de riqueza y poder; de ahí el ansia sin límite por conseguirlo a cualquier precio, aun contrariando los principios de la propia religión que tan celosamente se les impuso a los nativos.

El exterminio de la población indígena de América ha sido uno de los hechos más deplorables de la historia humana. En la región de Anáhuac (zona donde se localiza la actual ciudad de México), en vísperas de la llegada de los europeos, habitaban veinte

millones de habitantes, un siglo después reducidos a tres millones; entre los incas se estimaban trece millones y solamente quedaron tres millones un siglo después; en Santo Domingo y otras islas del Caribe el exterminio fue completo (Ospina, 2013a: 140). A estos hechos se agrega la imposición, por la fuerza, de las creencias religiosas de los conquistadores, excluyentes y ajenas a sus tradiciones. Pero la agresión no desapareció con el fin de la etapa colonial. Posteriores genocidios, como el de la explotación cauchera de la Casa Arana en los límites entre Perú y Colombia, prolongaron el proceso en el periodo republicano y, más específicamente, a comienzos del siglo XX.

Para el caso exclusivo de Colombia, los desplazamientos internos, principalmente de indígenas y campesinos, han sido producto del actual conflicto bélico, el cual se ha mantenido por más de setenta años a partir del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, líder político de gran arraigo popular, ocurrido en 1948. Los protagonistas principales de este conflicto interno son ‘las guerrillas’, ‘los paramilitares’ –grupos al margen de la ley con gran influjo perturbador, principalmente en los territorios indígenas y de afrodescendientes– y el ‘ejército nacional’ representante de la institucionalidad oficial. Además, existen otros factores socioeconómicos, tales como la inequitativa distribución del ingreso y la riqueza, la existencia de latifundios improductivos y de campesinos sin tierra o la presencia de transnacionales mineras con negativo impacto ecológico e inquietantes repercusiones socio-ambientales.

Todo este cúmulo de factores ha incidido en la conformación del actual ordenamiento socioeconómico, donde los indígenas ocupan una posición subordinada y marginal, no obstante los avances constitucionales y legales en materia de reconocimiento de sus derechos y de sus singularidades culturales. Éstos –conviene insistir– únicamente han tenido hasta el presente un valor nominal, sin ningún efecto positivo tangible en sus derechos y reconocimiento reales.

En este contexto de subordinación, el territorio y la jurisdicción efectiva sobre él han constituido el blanco principal de las agresiones, movidas por el valor económico de su subsuelo, y la principal reivindicación indígena. Para éstos su significado va más allá del dominio administrativo, jurídico o económico. Los pueblos indígenas, antiguos propietarios de los espacios geográficos que ancestralmente han habitado desde mucho antes de la presencia de los europeos, identifican esos territorios como parte fundamental de su historia y como elemento constitutivo de su cultura. Al amparo de su

existencia han podido prevalecer aún rasgos esenciales de su cultura ancestral, si bien inevitablemente influenciados por los de su entorno geográfico y social; las estructuras socioeconómicas de las que dependen sus vidas no pueden subsistir sin ellos (Narváez, 2004: 96); aún más: las propias categorías culturales se relacionan en general con la naturaleza en el marco de una noción de territorio que es en sí misma una idea transmitida culturalmente. El territorio constituye, en síntesis, un componente fundamental de su identidad; de ahí que “las comunidades indígenas son las mayormente afectadas por el deterioro de la naturaleza, considerando que para ellas esta es la base de su existencia física, reproducción biológica e identidad cultural” (Narváez, 2004: 102).

Las grandes empresas transnacionales, con sus actividades de explotación minera, además de imponer sus intereses económicos, contrarios a los de las comunidades indígenas, han causado daños ecológicos irreparables. Según su visión cultural, han herido a la “madre tierra”, lo cual implica que, además del deterioro físico y de su capacidad biológica, resulta ser una grave profanación a una de sus principales deidades. A ello se añade el hecho de que las decisiones políticas que afectan la vida comunitaria y sus relaciones con personas y agentes externos, son adoptadas desde lugares lejanos por personas o entidades que desconocen el diario vivir comunitario y tienen valores y cosmovisión opuestos o diferentes (para el caso de Colombia, desde Bogotá y por burócratas ciudadanos).

Toda esta clase de factores llevaron a los pueblos indígenas a exigir, inicialmente ante los representantes de la Corona española y posteriormente ante las autoridades republicanas, el establecimiento de un auténtico régimen territorial que fuera garantía del respeto de sus tradiciones y valores. En la actualidad, en Colombia, la misma aspiración ha comenzado a ser satisfecha con la promulgación de la Constitución Política de 1991 y de las leyes que le han dado desarrollo; su aplicación efectiva, sin embargo, solo se está logrando a través de una pugna cuyo final, aún no escrito, es incierto.

El objetivo de la presente investigación es indagar en los elementos involucrados en ese conflicto. Se trata de analizar la relación entre los grupos indígenas colombianos y la sociedad y la cultura nacionales, representadas por el Estado y las compañías multinacionales, y el modo en que los valores de esa cultura que aun cabe denominar

como occidental cristiana –concepciones económicas, sociales y políticas, sus instituciones constitucionales y legales, y grupos ilegales– han afectado a la cultura ancestral y los derechos territoriales de estas colectividades. Al mismo tiempo, se pretende valorar cuál ha sido su impacto en el medio ambiente, los recursos naturales y la vida de las comunidades indígenas, y las expectativas de desarrollo frente a los proyectos que pretendan realizarse en sus espacios geográficos, teniendo en cuenta, por un lado, la subestimación y desconocimiento de sus costumbres y la explotación desmedida de los recursos y riquezas que se encuentran en sus hábitats.

La investigación se centra, como estudio de caso, en el análisis del proceso sufrido por el pueblo indígena u'wa, que habita en el territorio de la República de Colombia en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en áreas de los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare, donde el Estado colombiano, a través de la Constitución y las leyes, la presencia de otros grupos paralelos y la explotación minera de las grandes transnacionales del ramo, ha interferido el normal desarrollo de esta etnia, afectando negativamente sus costumbres milenarias, sus derechos territoriales y deteriorando su espacio físico. El grupo étnico se encuentra distribuido en 8 resguardos² (Mapa 1) que se extienden por 12 municipios; sus 28 comunidades ocupan, generalmente, las zonas más apartadas, en territorios que oscilan alrededor de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente oriental de la Sierra Nevada de El Cocuy, si bien se extienden por distintos pisos desde la sierra hasta el piedemonte llanero:

“Asentados sobre la Cordillera Oriental, ostenta todos los climas desde el frigidísimo de los páramos cercanos a la Sierra Nevada de Chita o Güicán, a 5.600 metros sobre el nivel del mar, hasta el cálido de las llanuras vecinas al Arauca” (Márquez, 1981: 15).

² El resguardo indígena, de acuerdo con el Decreto 1088 de 1993, es una institución legal y sociopolítica de carácter especial, que se encuentra conformada por una comunidad o parcialidad indígena, la cual, a partir de un título de propiedad comunitaria, es poseedora de un territorio y se rige para el manejo de éste y de su vida interna por una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales. Así mismo, se “Consagra en el artículo 3º *la protección de los derechos y bienes de las comunidades*. Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la Ley 160 de 1994, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas. Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyen su hábitat, sólo podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos” (Linares, 2004: 160-161).

MAPA 1: UBICACIÓN DE LOS RESGUARDOS U'WA



Fuente: modificado a partir de datos obtenidos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi

El estudio se apoya asimismo, y específicamente, en un trabajo etnográfico desarrollado con personas del Clan Cobaría, que habita en el Resguardo Unido U'wa, municipio de Cubará, localizado en el nororiente del departamento de Boyacá, en las faldas orientales de la Sierra Nevada del Cocuy. En primera instancia, se ha pretendido dar a conocer la situación en la que se encuentra actualmente la comunidad, a través de un seguimiento de su diario vivir y las actuaciones que han llevado a cabo en las últimas décadas, para comprobar, una vez más, que el respeto y la garantía de los derechos en Colombia siguen siendo hechos que encuentran en su paso numerosas barreras para su realización.

Tras la presentación formal de los objetivos propuestos y de la metodología seguida, en el Capítulo 1, el estudio parte de una revisión histórica y crítica del concepto de “Desarrollo”, en el Capítulo 2, cuyas características y contradicciones están en la base del conflicto socio-ambiental que afronta actualmente, entre otras, la comunidad indígena u'wa. Se presenta, en primer lugar, una visión resumida de los modelos económicos que han ido configurándose históricamente al amparo del concepto y de los resultados socio-económicos generales a que ha abocado la aplicación de tales modelos. Se revisan, luego, las tesis de la moderna Antropología del Desarrollo, crecientemente críticas con el economicismo e implicadas en reformular la noción misma de “Desarrollo” teniendo en cuenta los derechos individuales y colectivos de las personas afectadas por los planes que se emprenden en su nombre. Se aborda, por último, la actual crisis ambiental global y los límites y reformulaciones del concepto que se plantean desde la perspectiva de la protección del medio ambiente a escala mundial.

El Capítulo 3 aborda la historia y la cultura u'wa. Aunque los estudios etnohistóricos y etnográficos sobre los u'wa (denominados tradicionalmente “tunebo” en la literatura especializada antigua) no son numerosos, la revisión de diversas fuentes bibliográficas permite caracterizar algunos de los rasgos principales de su cultura y organización social, especialmente en lo relativo a su concepción de la naturaleza y, desde esta, su vínculo con el territorio. La revisión permite también sacar a la luz algunos de los eslabones de la larga cadena de agresiones y reacciones de defensa que el pueblo u'wa ha ido afrontando, al menos, desde el siglo XVIII.

Los siguientes dos capítulos abordan la violencia que ha caracterizado la historia colombiana a partir del siglo XX y su impacto sobre los pueblos indígenas. El primero de ellos traza un panorama sobre los vectores que constituyen el contexto histórico

relevante del Estado colombiano en dicho periodo: la lucha por la tierra y el surgimiento de grupos armados al margen de la ley: guerrillas y paramilitares. Sobre esa base, el Capítulo 5 presenta, en primer lugar, un análisis cuantitativo e histórico de los actos de violencia sufridos por las comunidades indígenas en Colombia desde 1974 hasta 2004; y, en segundo lugar, una revisión de los mecanismos jurídicos de protección en relación con los derechos indígenas surgidos por iniciativa tanto del propio Estado como de organizaciones internacionales.

El Capítulo 6, por último, se centra en el conflicto u'wa. La investigación combina aquí los resultados del mencionado trabajo de campo etnográfico entre los u'wa y la revisión de documentación relativa a proyectos y actividades de empresas transnacionales en su territorio. El trabajo de campo, realizado en la comunidad Cobaría –una de las siete en que se agrupan las 28 comunidades menores anteriormente mencionadas–, se orientó a captar la visión de los propios indígenas sobre el conflicto mediante una metodología de tipo cualitativo que incluyó la aplicación de herramientas antropológicas básicas como la observación participante, las guías de observación y las entrevistas estructuras y semi-estructuradas. Sobre la base de ese trabajo, el capítulo presenta el discurso de un conjunto de dirigentes u'wa acerca de la naturaleza, de su derecho al territorio, de su papel como garantes de ambos y en contraste con los objetivos de las empresas transnacionales y el Estado y, en general, de sus relaciones con el mundo occidental y sus instituciones; se añade a dicha presentación un examen de las interacciones entre el discurso indígena y el discurso ambientalista global y una discusión sobre las implicaciones de ello. La revisión documental, por su parte, permite realizar un diagnóstico de las actividades desarrolladas por las empresas transnacionales y su repercusión en la integridad territorial y cultural del pueblo u'wa. Como parte del análisis, se hace referencia a la decisión extrema, a finales de la década de 1990, del suicidio colectivo como única alternativa a la resolución del conflicto, de la cual se hizo eco la prensa internacional, y se evalúan las deficiencias e irregularidades de los amparos constitucional y legal frente al litigio con la multinacional “Occidental de Colombia”. Por último, se efectúa una síntesis de las labores menores que se adelantan en la zona y que también representan una amenaza para la colectividad, y una serie de recomendaciones que pueden fortalecer la lucha u'wa en defensa de su territorio.

1. Objetivos y planteamiento de la investigación

1.1. Objetivos

1.1.1. General

El objetivo principal de esta investigación es analizar la interacción de los grupos indígenas con la sociedad y la cultura nacionales, representadas específicamente a través del Estado y las compañías multinacionales, y cómo los valores de esa cultura –que aun cabe denominar como occidental cristiana– (concepciones económicas, sociales y políticas), sus instituciones constitucionales y legales, y grupos ilegales, han afectado a la cultura ancestral y los derechos territoriales de los grupos indígenas. Se profundiza en forma específica, como estudio de caso, en la situación del pueblo u’wa (Mapa 1), su interrelación con el Estado colombiano y con las transnacionales mineras; y las expectativas de su desarrollo frente a proyectos mineros, de infraestructura, sociales y eco-culturales, que está previsto realizar en su territorio. A través del estudio sobre la relación que ha sostenido la comunidad con la cultura occidental, se pretende concretar, de forma documentada y analítica, el modo en que este grupo indígena ha sufrido la violación de sus derechos y el modo en que viene resistiéndose a ella.

1.1.2. Específicos

El objetivo general puede desglosarse, desde un punto de vista más específico, en los siguientes objetivos:

- Caracterizar al pueblo u’wa como una cultura que posee una serie de valores altruistas dirigidos a proteger no solo el hábitat donde residen sino el planeta en general. La experiencia de las últimas décadas, con la aplicación de las nuevas teorías de la modernidad y el desarrollo económico en los países del Tercer Mundo, ha mostrado que el pensamiento occidental no solo ha estado equivocado a lo largo de estos años, sino también que ha confirmado que la forma de vida de estas minorías étnicas es un ejemplo a seguir a la hora de preservar el planeta para que las futuras generaciones encuentren un medio sano que les brinde los recursos necesarios para vivir decorosamente.

- Identificar la situación de los pueblos indígenas, particularmente del pueblo u'wa, a partir de su desenvolvimiento histórico dentro del modelo y contexto actuales de la realidad socio-económica colombiana.
- Analizar el impacto sociocultural y socioeconómico de las exploraciones y explotaciones mineras en territorio u'wa.
- Examinar los conflictos socio-ambientales generados por los proyectos previstos que afectan el territorio y población de los u'wa.
- Reconocer, en última instancia, las causas que han conducido a la situación actual de la comunidad y entender el porqué de la lucha u'wa en defensa de su territorio.

1.2. Metodología

La investigación del conflicto socio-ambiental que afronta la comunidad indígena u'wa con la ambición de incluir todos los aspectos relacionados relevantes ha requerido la aproximación desde distintas fuentes. Se ha realizado, en primer lugar, una revisión exhaustiva de los recursos bibliográficos disponibles. El material bibliográfico ha sido recopilado de las principales bibliotecas de la ciudad de Bogotá, de universidades donde sus estudiantes han realizado investigaciones con esta comunidad indígena y de organismos del Estado que adelantan proyectos con los distintos grupos nativos del país. La relación de las instituciones visitadas es la siguiente:

- Biblioteca Luis Ángel Arango.
- Biblioteca Nacional
- Biblioteca Universidad de los Andes
- Biblioteca Universidad del Rosario
- Biblioteca Pontificia Universidad Javeriana
- Biblioteca Universidad Jorge Tadeo Lozano
- Biblioteca Universidad Nacional de Colombia
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi
- AsoU'wa: Asociación Comunidad Indígena U'wa
- Ministerio del Medio Ambiente: Departamento de Acción Social
- Ministerio de Cultura: Dirección de Poblaciones

- Ministerio de Defensa: Departamento de Seguridad y Defensa Nacional
- Ministerio del Interior y de Justicia: Departamentos de Comunidades Indígenas y de Consulta Previa
- Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH
- Academia Nacional de Historia
- Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC
- Corte Suprema de Justicia

Una segunda fuente –cuyos resultados se recogen fundamentalmente en el Capítulo 6– está basada en el desarrollo de un trabajo de campo adelantado con la comunidad Cobaría, una de las siete que conforman la comunidad indígena u’wa. Es importante aclarar que, si bien en el capítulo se incluye información de tipo estadístico que sirve de soporte a los datos recopilados en el trabajo de campo, el método aplicado es de tipo cualitativo, dado que se exploran aspectos sociales de la comunidad con el fin de dar cuenta de la realidad que viven sus habitantes, vista desde la óptica de sus protagonistas.

Como es evidente, el conflicto entre el pueblo u’wa, por un lado, y el Estado colombiano y las transnacionales petroleras, por otro, tiene como base un trasfondo económico, que al día de hoy se presenta como uno de los problemas ecológicos más importantes a nivel mundial, asociado al calentamiento global. Es por eso que ha sido de suma importancia hacer un recuento histórico de los sucesos más importantes del siglo XX, que son los que explican el escenario actual. A su vez, es relevante tener en cuenta la crítica que se hace desde la propia economía y desde la antropología al concepto de “Desarrollo”, porque a partir de esta, se empieza a replantear la forma como se han ejecutado algunos proyectos de corte neoliberal implantados en los países del Tercer Mundo, que no han mostrado los resultados esperados, por la sencilla razón de no tener en cuenta a las poblaciones directamente implicadas.

Han sido varias las herramientas utilizadas en el transcurso del trabajo de campo, a continuación describimos las aplicadas a esta investigación: observación participante, en la cual se ha hecho un seguimiento a las actividades de los informantes para conocer en detalle su diario vivir y así enterarnos de primera mano cómo transcurre una jornada normal en el interior de la comunidad; guías de observación, donde se tiene en cuenta el comportamiento de los indígenas, las relaciones entre ellos, su forma de expresarse, y en

términos generales, el espacio físico donde desarrollan diariamente sus actividades; entrevistas estructuradas, con cuestionarios preparados con anterioridad y dirigidos a responder gran parte de los interrogantes planteados en esta investigación; entrevistas semi-estructuradas y no estructuradas, en las cuales no se ha aplicado un cuestionario predeterminado, pero se han tratado temas que complementan la información proporcionada por las entrevistas estructuradas y; por último, hemos elaborado un diario de campo, en el cual aparece registrada la información producto de la observación participante.

El contacto con la comunidad nos fue facilitado por Gilberto Arlant, líder de la comunidad indígena Kankuamo y Delegado Nacional de Población Desplazada de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC. Desde el año 2010, aproximadamente, Gilberto ha hecho valiosos aportes a nuestro trabajo, dado que por medio de él, logramos conocer la situación actual en la que se encuentran los indígenas de Colombia en el marco estatal, los proyectos que se adelantan actualmente con cada una de las comunidades, a la vez que nos facilitó el acceso a los documentos que reposan en las instalaciones de la ONIC y que no se encuentran en bibliotecas públicas ni en otras dependencias del Estado. De otra parte, fue él quien nos puso en contacto con los dirigentes de la comunidad u'wa, y nos acompañó en los dos viajes que se realizaron a la zona de estudio.

El trabajo de campo en la comunidad se llevó a cabo en dos fases, ambas breves:

1. Una primera visita se realizó entre el 10 y el 17 septiembre de 2011.
2. La segunda salida de campo se llevó a cabo entre el 15 y el 25 de septiembre de 2012.

Se puede tener acceso al territorio u'wa de diferentes maneras. La forma más rápida es a través de un vuelo comercial que parte de Bogotá a Saravena, o Bucaramanga a Saravena, y estando allí se toma un coche particular en la plaza principal del pueblo, que realiza el recorrido hasta la población de Cubará. Estos vehículos hacen su salida cada hora y el trayecto es de aproximadamente cincuenta minutos. Por vía terrestre, hay dos opciones: se puede tomar la ruta que parte por el norte de Bogotá y que pasa por las ciudades de Tunja, Arcabuco, Barbosa, Socorro, San Gil, Bucaramanga, Chitagá, Málaga, Soatá, La Uvita, Espino y Cubará. Este recorrido

dura aproximadamente veinte horas. Esta última fue la forma en que nos desplazamos a la zona de estudio, dado que obtuvimos un permiso especial por parte de los dirigentes de la comunidad, que nos esperaban para el día siguiente, y con esa premura no era factible encontrar un vuelo comercial; fue a través de la Terminal de Transportes Terrestres de Bogotá que obtuvimos billetes en un autobús que partió a las ocho de la noche por el sur de la ciudad, con dirección a Saravena.

Las principales ciudades que se atravesaron en este recorrido fueron: Villavicencio, Acacias, Puerto López, Yopal, Fortul, Saravena y, por último, Cubará. Es oportuno aclarar, como se ha mencionado anteriormente, que el recorrido entre Saravena y Cubará se hace mediante coches particulares, los cuales salen cada hora una vez que han completado un cupo de cuatro personas (tres en la parte de atrás y uno al lado del conductor).

Obviamente, todo ello está sujeto a alteraciones imprevistas. Podemos recordar que, en uno de los viajes realizados, un accidente a las afueras de Bogotá nos obligó a desviar la ruta y tomar la carretera antigua a Villavicencio, retrasando así el viaje tres horas aproximadamente; cabe agregar que, en la misma ocasión, una fuerte lluvia obligó al conductor a disminuir la velocidad. En definitiva, un viaje que debía durar quince horas aproximadamente, duró casi dieciocho: desde las siete y media de la tarde hasta la llegada a nuestro destino a la una de la tarde del día siguiente.

En el primer encuentro con la comunidad, entre los días 10 y 17 septiembre de 2011, hicimos un seguimiento de la vida cotidiana del grupo y las actividades que realizan normalmente, observamos las labores que se llevan a diario en la asociación AsoU'wa, en el internado ubicado en el resguardo El Chuscal y en la farmacia propiedad de la comunidad. A medida que se sostenían diálogos con los habitantes del grupo, fuimos seleccionando las personas con las que se llevaría a cabo una entrevista formal en una próxima visita a la zona. Estas personas fueron Verito Cobaría, cabeza mayor del clan Cobaría, Gilberto Cobaría, presidente de AsoU'wa y Claudia Cobaría, fiscal de AsoU'wa y líder de mujeres dentro de la comunidad. Es obligado señalar que la labor de acompañamiento de Gilberto Arlant fue fundamental para lograr un acercamiento con los líderes antes mencionados, ya que su imagen produjo más confianza y las personas seleccionadas para las entrevistas sintieron más libertad a la hora de expresar sus ideas.

La segunda estancia, entre el 15 y el 25 de septiembre de 2012, se centró en la realización de entrevistas formales con los líderes seleccionados. Dichas entrevistas fueron estructuradas y semi-estructuradas y el tema central de las mismas giró en torno al poblamiento de la zona, los conflictos socio-ambientales y el impacto del modelo económico estatal en la comunidad. La aplicación de estas entrevistas estuvo prevista para la población más adulta, tanto hombres como mujeres, con objeto de obtener una perspectiva amplia.

Durante la estancia fue posible efectuar recorridos por el territorio del resguardo, los cuales han sido respaldados con documentación fotográfica y de vídeo. Para desplazarnos a esta zona fue necesario alquilar un vehículo todo terreno, capaz de atravesar ríos y senderos de difícil acceso. Estos viajes, en su mayoría, los hicimos en compañía de Claudia Cobaría, su esposo y Gilberto Arlant.

Por otra parte, AsoU'wa nos facilitó la documentación más reciente relacionada con proyectos y peticiones realizadas al Estado colombiano. Cabe aclarar que, a la hora de elaborar estos documentos que reflejan las necesidades e inquietudes del pueblo u'wa, contamos con la asesoría del antropólogo Diego López, asesor del grupo indígena y con el cual sostuvimos diálogos para conocer otras facetas de la comunidad.

La estadía en la comunidad nos fue facilitada por la señora Claudia Cobaría. Su vivienda opera como un sitio de paso para los indígenas que presentan algún tipo de dolencia o enfermedad; es en su residencia donde estas personas terminan su etapa de convalecencia para retornar nuevamente al Resguardo.

La observación participante nos permitió complementar la información proporcionada en fuentes secundarias, algunas de ellas aportadas por los propios indígenas con quienes estuvimos en contacto. Así, al reconocer cómo se efectúan las relaciones entre las acciones emprendidas por el Estado y el pueblo u'wa hemos podido obtener mayores elementos de análisis. A pesar de que esta investigación tiene su fundamento en un enfoque antropológico, no puede considerarse una etnografía como tal, dado el período relativamente corto que se ha compartido con la comunidad. A pesar de ello, la realización de los tres tipos de entrevistas aplicadas a este estudio –estructuradas, semi-estructuradas y no estructuradas– y un acompañamiento permanente a algunos de los miembros de la comunidad durante los dos periodos del

trabajo de campo, nos ha permitido obtener información detallada sobre los conflictos socio-ambientales que sostiene el pueblo u'wa, tema central de la presente investigación.

TABLA 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

Nombre	Situación dentro de la comunidad	Razón por la que se le hizo la entrevista	Fecha de la entrevista	Caracterización: hombre/ mujer, edad, actividad que realiza
Verito Cobaría	Líder del clan Cobaría	Ha representado al pueblo u'wa mundialmente y ha internacionalizado el conflicto	20-09-2012	Hombre, 60 años aproximadamente, se dedica a labores agrícolas en una finca de su propiedad ubicada en el Resguardo de la comunidad.
Gilberto Cobaría	Presidente de AsoU'wa	Es el máximo representante de esta institución y ha acompañado a Verito Cobaría a realizar ponencias en Europa para exponer el conflicto que adelanta su comunidad con el Estado colombiano.	22-09-2012	Hombre, 50 años aproximadamente, dirige la Asociación AsoU'wa.

Claudia Cobaría	Fiscal de AsoU'wa	Dentro de la Asociación, realiza funciones de tesorera y se encarga de comprobar que cada miembro de la institución cumpla a cabalidad con sus funciones.	24-09-2012	Mujer, 27 años. Fiscal de AsoU'wa, administra junto a su esposo la farmacia propiedad de la comunidad u'wa y dirige el hogar de paso que ayuda a los indígenas en diferentes necesidades.
Gilberto Arlant	Delegado nacional de población desplazada de la ONIC.	Líder kankuamo con profundo conocimiento de la problemática indígena del país. Conoce al detalle los proyectos que tiene cada comunidad y la situación de la ONIC frente al Estado colombiano.	06-09-2011, 12-09-2012.	Hombre, 51 años, funcionario de la ONIC y propietario de una tienda de artesanías en Bogotá.

Las acciones realizadas por el Estado colombiano han generado una serie de cambios en las actividades tradicionales locales, en la calidad de vida y en su organización social. Estos cambios inciden en la toma de decisiones que afectan al control y acceso a los recursos naturales, particularmente en el caso de las mujeres, que son quienes, según Marta Lamas, han tenido que cambiar, de alguna forma, el rol que han ejercido tradicionalmente en la unidad familiar:

“Las instituciones sexuales y económicas interactúan entre sí. Sabemos, por ejemplo, que las economías capitalistas desarrollan formas características para postergar la gratificación además de divisiones sexuales del trabajo tanto en el hogar como en los centros de trabajo. Las mentalidades resultantes son el producto de complejas interacciones dentro de un sistema social dado. Las razones para un cambio dentro de normas sociales ya prescritas para el

temperamento y la conducta sexuales son igualmente complejas, y los tipos sociales que de ello resultan no pueden entenderse como simples divisiones binarias o reflejos de las diferencias sexuales biológicas” (Lamas, 2000: 2-3).

Es por eso que se ha tratado de no obviar, mediante conversaciones informales, la opinión de los sectores menos escuchados de la población, porque, de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano sobre Desigualdad para América Latina y el Caribe:

“...la posibilidad de que las mujeres se desempeñen en actividades remuneradas se ve obstaculizada por el hecho de que ellas son quienes asumen la carga de las tareas no remuneradas en el hogar. Por ello, el análisis de las desigualdades de género en el uso del tiempo representa un instrumento muy importante para la formulación de políticas públicas que incidan en el ámbito de las familias a fin de promover la conciliación entre el trabajo remunerado y el no remunerado, en los que participan tanto los hombres como las mujeres” (PNUD, 2010: 33).

Las investigaciones sobre el conflicto entre los indígenas y los representantes del Estado colombiano y las transnacionales petroleras han tendido a dejar vacíos a la hora de desarrollar un análisis completo del proceso. El trabajo de campo nos ha permitido superar esa falta, dando prioridad al testimonio de los informantes que han vivido el proceso en el caso u’wa, el cual tiene ya más de veinte años; es a partir de la suma de estos testimonios al análisis de las acciones estatales que puede llegarse a una visión certera de la realidad que se vive en la zona de estudio.

2. El “Desarrollo”: historia y crítica de un concepto

Las características del conflicto entre los pueblos indígenas y los representantes del Estado y las compañías transnacionales guardan una relación directa con las prácticas guiadas por el concepto de “Desarrollo”. Hacia él se orientan los segundos a la hora de planificar sus actividades y en él se amparan a la hora de justificarlas. El concepto actual empezó a configurarse en el siglo XVIII, con un uso metafórico desde su referencia inicial al desenvolvimiento de las facultades fisiológicas y mentales de las personas, y cristalizó su sentido, ya en el contexto de auge del evolucionismo biológico y social a mediados del siglo XIX, para referirse a procesos económicos en un sentido unilineal de progreso económico. No obstante, es importante advertir que las sucesivas crisis experimentadas por la economía capitalista a partir de ese momento han dado lugar a variaciones en el pensamiento liberal en torno a la economía, la sociedad y la política y, por tanto, en la caracterización del concepto mismo y las formas de alcanzarlo.

El presente capítulo revisa, en primer lugar, la historia de las ideas económicas con objeto de identificar las lógicas que subyacen en el liberalismo, el modelo keynesiano y la creación de un nuevo modelo de corte neoliberal; el impacto de este último ha favorecido el crecimiento de varias economías nacionales, entre ellas algunas latinoamericanas, al precio de hacer más profundo el atraso social y económico de los grupos sociales menos favorecidos, haciendo evidente la inequidad distributiva que caracteriza a estos países. El aumento de esas desigualdades económicas y sociales a escala mundial ha marcado profundamente la frontera entre países desarrollados y subdesarrollados.

El capítulo se adentra, luego, en las reformulaciones del concepto de desarrollo ensayadas tanto desde la crítica de sus supuestos pseudo-evolucionistas y homogenizadores como desde la evaluación y superación de sus consecuencias sobre el terreno, en la calidad de vida de personas y comunidades reales. Se analiza, en ese contexto, la función de la antropología y el desempeño de los antropólogos en esta tarea, dado que su compromiso se puede definir como un sistema de intervenciones consistente en el diseño de programas adecuadamente articulados con las comunidades, prevaleciendo el aspecto cultural de las mismas.

El capítulo concluye refiriéndose a un segundo grupo de críticas al concepto heredado de desarrollo: el surgido como reacción a las graves repercusiones socio-ambientales que ha tenido para el planeta. En conjunto estos tres aspectos de la noción de desarrollo y sus efectos –su definición cambiante, su crítica desde la perspectiva de la calidad de vida de las personas y su crítica desde la perspectiva ambiental– trazan el escenario global en el que se han desenvuelto los conflictos socio-ambientales en Colombia y, en particular, el que implica al pueblo u’wa.

2.1. El desarrollo económico: Una perspectiva de su desenvolvimiento e influencia en el comportamiento de las sociedades capitalistas

Este apartado tiene como objetivo presentar los elementos teóricos y conceptuales que fundamentan los comportamientos económico, social y político que caracterizan el modelo de desarrollo capitalista y han dominado su economía desde su momento fundacional, a mediados del siglo XVIII; y presentar su incidencia en las políticas económica y social; y su impacto en la población, principalmente en los sectores menos favorecidos y en los grupos étnicos diferenciados de la cultura dominante.

La situación actual del desarrollo social, económico y político de los pueblos de América Latina, ha sido dependiente y condicionada por las teorías y concepciones que sobre esta materia se han elaborado y propuesto desde los grandes centros de poder mundial, a partir de los años treinta del pasado siglo para facilitar su dominio sobre los diferentes países del mundo.

El capitalismo ha sido el sistema económico dominante desde mediados del siglo XVIII. Sus fundamentos ideológicos y funcionales se encuentran en el texto *Consideraciones sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones*, más conocido como *La riqueza de las naciones*, escrito en 1767 por el economista escocés Adam Smith, donde se sostiene que la libre iniciativa privada, en persecución de la maximización de ganancias y orientada por una *mano invisible* (la libertad de mercados o libre competencia), optimiza la utilización de los escasos recursos disponibles en la economía. Este es el *modelo económico liberal* que esgrime como paradigma principal la no intervención del Estado, su neutralidad frente a la actividad económica, porque, según su concepto, el Estado genera ineficiencia y obstruye la iniciativa privada. De acuerdo con esta tesis, es el individuo, motivado por su interés particular o egoísmo, sin

interferencia externa alguna, quien debe ser el protagonista de la actividad económica, y como tal es el único que está en capacidad de generar riqueza y acumulación de capital (Heilbroner, 1964: 34-67).

La vigencia de este modelo en los principales países capitalistas se extendió hasta fines de la década de los años veinte del pasado siglo. Fue un período de capitalismo extremo en el que se exaltó el individualismo y el egoísmo como motivante y dinamizador de la actividad económica. Una cita de Adam Smith ilustra este criterio: “No esperamos obtener nuestra comida de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero –dice Adam Smith–, sino del cuidado que ellos tienen de su propio interés. No recurrimos a su humanidad sino a su egoísmo, y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de las ventajas que ellos sacarán” (Heilbroner, 1964: 47-48).

Fue un período influenciado por la concepción darwiniana de la selección natural, donde solo sobreviven las especies mejor dotadas. Dentro de este contexto ideológico no existen espacios para la política social ni para las minorías étnicas. De ahí, los salarios de subsistencia, el empobrecimiento de las mayorías trabajadoras y el desconocimiento de la cultura y derechos de las minorías étnicas.

La *Gran Depresión* de finales de los años veinte mostró que el modelo de economía liberal era incapaz e ineficiente para garantizar la acumulación y reproducción capitalista, y el pleno empleo de los recursos. La euforia y optimismo de los felices años veinte (Antoñana, 2013: 10-14), con su exaltación del capitalismo liberal, tuvo como epílogo la gran recesión que se inició en 1929 y se prolongó hasta los inicios de la segunda guerra mundial. Fue una crisis devastadora, inicialmente en Estados Unidos y posteriormente en el resto de países, que tuvo como principales manifestaciones las quiebras empresariales, la caída de las tasas de ganancia, el descenso a los niveles de subsistencia de los salarios, la caída del mercado de valores, la reducción dramática del ingreso nacional, la contracción del comercio exterior, el pesimismo generalizado y el aumento desmesurado de las tasas de desempleo (Heilbroner, 1964: 239-242).

Un primer diagnóstico de la crisis identificó como causa básica la insuficiencia de la demanda agregada, definida como la demanda para inversión y demanda para consumo:

“...la economía dependía de la suma de inversión realizada por las empresas. Cuando la inversión era escasa, reducíase el volumen de la economía; cuando la inversión era elevada, arrastraba consigo hacia arriba a la nación; si la inversión no conseguía *permanecer* alta, daba lugar a que se iniciase la contracción. Riqueza y pobreza, gran prosperidad y escasez, dependiendo todo de la mayor o menor tendencia de las empresas a invertir” (Heilbroner, 1964: 264-265).

Pero

“Y si resultaba imposible estimular directamente la inversión, se podía por lo menos estimular el consumo. Porque, en tanto que la inversión venía a hacer el elemento caprichoso del sistema, el consumo proporcionaba el ancho campo de la actividad económica; por esa razón, los proyectos del W.P.A [Work Progress Administration], tenían por objeto atacar el problema con una espada de doble filo: ayudando directamente a sostener la capacidad de compra de los sin trabajo, y lanzándose en vanguardia de la inversión privada por el camino de la recuperación” (Heilbroner, 1964: 269).

Frente al panorama de insuficiencia de la demanda agregada en los Estados Unidos, un nuevo gobierno, presidido por Franklin Delano Roosevelt, propuso en el año de 1934 el *New Deal* (véase Lekachman, 1970: 121-154), o Nuevo Pacto, que en esencia significó una alteración significativa de los fundamentos y funcionamiento del sistema capitalista. Se abandona entonces el paradigma de la no intervención del Estado y este comienza a desempeñar un papel relevante en la actividad económica.

A partir de esos momentos, teniendo en cuenta, según el diagnóstico prevaleciente, que el origen de la crisis era una deficiencia de la demanda, se procedió a implementar políticas económicas y sociales para incentivarla y, de esta forma, superar la tendencia recesiva. Entre otras, puede señalarse la política de gasto público expansivo a través de la construcción de obras de infraestructura o restauración de las existentes, que activaría la demanda de bienes de inversión (maquinaria, equipos, materiales de construcción) y, con el pago salarial de la mano de obra y con los subsidios a los desocupados, estimularía la demanda de bienes de consumo final; a ello se añadió el control de la tasa de interés para estimular la inversión: en la medida que la tasa de interés descendiera se incentivaría la propensión a invertir; asimismo, se recurrió al montaje de infraestructura de producción y comercialización de productos agropecuarios, con objeto de disminuir costos de producción y reducir los precios de los productos finales (bienes alimenticios y materias primas industriales) de forma que aumentara la capacidad adquisitiva de los salarios y se redujeran los costos de la mano

de obra y de los insumos de la industria, para competir ventajosamente en los mercados de exportación y con las importaciones.

A partir de la conjunción de estos tres elementos (el modelo económico liberal, al que se le atribuye elevada responsabilidad entre las causas de la gran recesión, los factores constitutivos de la crisis –desfase entre la demanda y la oferta agregadas– y las decisiones para superar la crisis), el economista inglés John Maynard Keynes hace su síntesis y racionalización teórica para construir su texto *La Teoría General del Interés, la ocupación y el dinero*, publicado en el año de 1936, que se considera el libro básico de la nueva modalidad capitalista: *capitalismo con intervencionismo del Estado*.

La recuperación económica atribuida al New Deal y la aplicación de la concepción keynesiana, a partir de la segunda mitad de la década de los treinta, lleva a que esta ‘nueva economía’, la del intervencionismo de Estado, se constituya en el modelo económico por excelencia que dominó a partir de esos años el análisis económico y el pensamiento y aplicación de las políticas económicas del mundo capitalista. Posteriormente, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se presagiaba su final a favor de las potencias democráticas:

“...era evidente que había llegado el momento de invitar a los países interesados a una conferencia formal sobre cooperación monetaria internacional. Como consecuencia de una decisión del presidente de Estados Unidos, en mayo de 1944 el secretario de Estado despachó invitaciones a 44 gobiernos (incluyendo al Comité Nacional de Liberación Francesa) para que enviaran sus respectivos representantes a una conferencia, a partir del 1º de julio de 1944, ‘con el objeto de formular propuestas definitivas para un Fondo Monetario Internacional y posiblemente un Banco de Reconstrucción y Fomento’. Además de la conferencia plena, a un grupo limitado de países se le invitó a enviar representantes a una conferencia preparatoria” (Gaviria, 2006: 146).

Estas instituciones determinarían el orden económico capitalista de la postguerra. Los acuerdos del FMI establecen el dólar como unidad de reserva internacional y de relación de paridad con el resto de las monedas del mundo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, como institución financiera para estimular el montaje de proyectos de desarrollo económico y social en los países devastados por la guerra.

En el año de 1945 se expide la Carta de San Francisco que constituye la Organización de Naciones Unidas, ONU, para promover la paz y el entendimiento entre

las naciones y procurar su desarrollo. A partir del año 1947 los Estados Unidos impulsan el Plan Marshall, dentro de la filosofía y objetivos del incipiente Tratado del Atlántico Norte, dirigido a la reconstrucción de los países de Europa Occidental devastados por la guerra. Del seno de la ONU, en el año 1948, surge la creación de las comisiones económicas regionales, para Asia, África y América Latina, que tendrían como objetivo el diseño y promoción de políticas de crecimiento económico y desarrollo social en sus respectivas regiones.

El modelo económico de *Intervencionismo de Estado* consolida su dominio del escenario académico y político de los países capitalistas en el período de la postguerra. El crecimiento económico se acelera, el empleo se amplía y se aprecia una elevación generalizada de los niveles de vida. Se llega a considerar que los años de la década del cincuenta son los años dorados del capitalismo.

Efectivamente, al considerar la demanda como motor de crecimiento económico, las mejoras salariales que aumentan la capacidad de compra de los trabajadores y el acceso a bienes sociales como la salud, la educación y oportunidades de recreación, contribuyen a mejorar sustancialmente los niveles de vida. El Estado participa en la provisión de muchos de estos bienes y regula la actividad de los agentes privados. Se constituye, de esta forma, los que se han denominado *Estados de Bienestar*. Esto es así en los países altamente desarrollados, se insinúa incipientemente en los subdesarrollados, aunque en estos últimos mucho sea solamente retórica.

Por otro lado, dentro de la vigencia del modelo de *capitalismo con intervención del Estado*, es inexistente el reconocimiento de derechos o reivindicaciones de grupos sociales más allá de la diferenciación entre trabajadores y empresarios. La diferenciación por etnias o grupos raciales es irrelevante desde el punto de vista de las políticas económicas y sociales y de sus beneficios. La diferenciación solo está entre quienes venden su fuerza de trabajo y quienes son propietarios de los medios de producción, y los conflictos de intereses entre estas dos grandes fuerzas sociales, sin distinciones raciales o étnicas, ocupa la casi totalidad de las luchas reivindicativas durante la vigencia de este modelo.

No obstante el predominio académico y político del keynesianismo a partir de mediados de la década de los años treinta, en la Universidad de Chicago, en Estados

Unidos, continuaron las interpretaciones y análisis basados en las metodologías y conceptos de la tendencia del capitalismo liberal. En Europa, desde mediados de la década de los años cuarenta, hace carrera el resurgimiento del liberalismo con carácter totalizante para comprender las dimensiones económicas, sociales y políticas, bajo la denominación de Neoliberalismo (liderado, entre otros, por Friedrich Von Hayek, Ludwig Von Mises, Karl Popper, filósofos y economistas de reconocida prestancia académica a nivel mundial), que argumenta que las prácticas del New Deal, del keynesianismo y de la intervención del Estado, son una antesala del totalitarismo. Como fórmula alternativa para conducir armónicamente a la economía, la sociedad y la política por los senderos de la libertad y del progreso, sostenidos, recomiendan tener en cuenta diez principios, conocidos como el “Decálogo Neoliberal” (Gutián y Muns, 1998: 14):

1. Disciplina presupuestaria. No deben existir desequilibrios fiscales; los ingresos del Estado deben ser iguales a sus egresos.
2. El Estado debe reducir sus gastos. Debe eliminar subsidios a la producción y a los sectores sociales.
3. La política fiscal debe financiarse fundamentalmente en impuestos al consumo para no afectar negativamente las iniciativas de inversión.
4. Liberalización financiera con un énfasis especial en que los tipos de interés vengan determinados por el mercado y sean positivos en términos reales.
5. Búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos, en lugar de aspirar a los llamados ‘tipos de cambio de equilibrio fundamental’.
6. Apertura económica.
7. Liberalización de los movimientos internacionales de capital, dirigiéndolos a las actividades más rentables.
8. El sector privado es más eficiente que el sector público. Como tal, la actividad económica debe estar en manos del primero.
9. La intervención de los gobiernos, por lo general, reduce la eficiencia económica y obstruye la iniciativa privada.
10. Debe garantizarse seguridad jurídica en los títulos de propiedad y en la existencia de los negocios legalmente constituidos.

Al término de la década de los años cuarenta, no obstante el prestigio académico de sus líderes y su importancia política, el *Modelo Neoliberal* no tiene acogida porque el éxito económico y social de los estados de bienestar, inspirados en el keynesianismo y en el intervencionismo, hacen improcedente sustituirlo. Pero su contenido es guardado como una importante alternativa política.

Con el paso de los años, a mediados de la década del sesenta, el modelo intervencionista comienza a presentar signos de agotamiento, ineficiencia e insostenibilidad. Y cuando se inicia la década de los setenta, se desatan diferentes manifestaciones de la crisis (véase Giribets, 2009: 10-12):

- Se registra la crisis del dólar y se rompen los acuerdos de Breton Wood suscritos en 1944.
- Se intensifican los déficits fiscales. Los ingresos tributarios son insuficientes para sostener los costos de los estados de bienestar.
- Se contrae el comercio exterior.
- Se inicia la crisis energética con la elevación de los precios de los hidrocarburos, dentro del proceso de contradicciones entre países productores, por lo general subdesarrollados, que fundan la Organización de países exportadores de petróleo -OPEP- y los países consumidores, por lo general países altamente desarrollados.
- Aparece un nuevo sistema productivo con tecnologías más eficientes y menores costos, que hacen obsoletos los procesos vigentes, dando inicio a una nueva revolución tecnológica.
- Dentro del desarrollo tecnológico, el sector de las comunicaciones y del transporte ocupan un lugar destacado, que permite la comunicación al instante en larga y muy larga distancia, que es aprovechado, principalmente, para los intercambios y movimientos mercantiles y financieros, entre lugares remotos. Igual sucede con los transportes. Todo este proceso innovador es el punto de partida de la nueva globalización, que ha continuado avanzando sorprendentemente hasta nuestros días.
- La acumulación de crisis hace insostenible el modelo económico vigente del capitalismo intervencionista y se inicia la adopción progresiva del *Modelo Neoliberal*, cuyo contenido corresponde a las propuestas de su decálogo. Es el

regreso al capitalismo extremo, sustituido, como antes se reseñó, a lo largo de la década del treinta, con la circunstancia, de carácter experimental, de ser pioneros de su adopción la república de Chile bajo la siniestra dictadura del general Augusto Pinochet. Posteriormente, con el ascenso de los conservadores Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos y Margaret Thatcher como primera ministra de Inglaterra, ambos proclives al credo neoliberal, se inicia su imposición a todos los países del mundo.

Consecuencia de la crisis energética es la elevación de costos en los países consumidores que induce a la desaceleración de su crecimiento económico y a un exceso de liquidez en los países consumidores que los induce al depósito en los grandes bancos internacionales. Unido a esto está la suspensión, en 1971, del privilegio exclusivo del dólar como divisa de reserva internacional, que a partir de ese año compartiría con las monedas de otros países altamente desarrollados, produciendo aumento de la liquidez internacional, que también es captada por los grandes bancos. La conjunción de estos dos hechos es una sobreoferta de crédito de la banca internacional que se irriga por todos los países del mundo, principalmente en América Latina, que conduce al gran endeudamiento de la segunda mitad de la década del setenta, cuyo epílogo es la *crisis de la deuda externa* a partir de los primeros años del ochenta.

En efecto, en 1982 la República de México declara su incapacidad para atender los servicios de su deuda externa. A partir de ese momento queda de manifiesto que la situación de México es común a todos los países de la región, con excepción de la República de Colombia, que a causa de la bonanza de los precios internacionales de sus principales productos de exportación (principalmente café y algunos productos ilegales), obtuvo un volumen de reservas internacionales que hizo innecesario el endeudamiento. Muchos otros países de otras regiones también han padecido el flagelo de la deuda externa.

La insolvencia de los países deudores pone en riesgo la estabilidad financiera de los grandes bancos acreedores. La estrategia política de las metrópolis, sede de la casa matriz de los grandes bancos, es el establecimiento de los *planes de ajuste económico*, que serían impuestos, ejecutados y controlados por el Fondo Monetario Internacional, que en esencia tienen los siguientes objetivos (véase Ahumada, 1996: 51-55; Sarmiento, 1990: 10-12):

- Economizar las divisas requeridas para cumplir con las obligaciones de la deuda externa.
- Mantener el equilibrio fiscal, reduciendo el gasto público y aumentando el ingreso tributario a través de impuestos indirectos.
- Eliminar restricciones a los movimientos de capital y liberalizar las tasas de cambio.
- Liberalizar el sistema financiero y los movimientos de la tasa de interés, sometiéndola al comportamiento del mercado.
- Liberalizar el comercio exterior, eliminando restricciones a las importaciones y subsidios, directos o indirectos, a las exportaciones.
- Flexibilizar el mercado laboral para reducir sus costos y procurar la libre contratación entre empleadores y trabajadores.
- Privatizar las empresas de propiedad pública.

En síntesis, estas recomendaciones están en línea con las del *Decálogo Neoliberal*, ubicadas en la más pura ortodoxia económica, cuya aplicación condujo a lo que se ha denominado “*la década perdida de América latina*” por el empobrecimiento económico y el retroceso e inequidad social que ha producido.

A mediados de los años ochenta, un grupo de economistas, ex funcionarios de organismos financieros internacionales –Béla Alexander Balassa, Gerardo Bueno, Pedro Pablo Kuczynski Godard y Mario Henrique Simonsen–, proponen a través del documento denominado *Hacia una renovación del crecimiento en América Latina* una estrategia que contiene:

“...tres elementos centrales para los propios países latinoamericanos: la orientación hacia el exterior de la economía, con énfasis en las exportaciones y en la eficiente sustitución de importaciones; la generación de niveles adecuados de ahorro, primordialmente de fuentes internas pero también externas, y su inversión eficiente y la reorientación del papel del gobierno hacia su ventaja comparativa demostrada de proporcionar servicios y un marco para la actividad económica, y limitando su función como regulador y productor.

Un cuarto elemento crítico, se refiere a, una política de apoyo por los países industriales, sobretudo de Estados Unidos. Las cuatro partes tienen una relación estrecha, y todas son esenciales para emprender una exitosa estrategia de desarrollo en América Latina” (Balassa *et al.*: 1986: 25).

Estas recomendaciones tienen como referencia el caso de países asiáticos como Corea y Taiwán, que a comienzos de la década de los años cincuenta estaban en una grave situación de atraso con relación a los países de América Latina y en la segunda mitad de la década de los ochenta habían superado con creces a estos últimos en materia económica y social. Atribuyen esa mayor eficiencia asiática a una política de apertura económica, de reducción del papel del gobierno en la actividad económica, tal como se señala en la propuesta antes reseñada. Argumento algo deleznable, porque en los países asiáticos la intervención del Estado en apoyo de la industria, la financiación, en educación y muchas otras dimensiones económicas y sociales, ha sido y continúa siéndolo bastante considerable.

Posteriormente, en 1989, se impuso el llamado “Consenso de Washington”, un término acuñado por John Williamson, del Instituto de Estudios Económicos Internacionales. El Consenso surgió de la conferencia “Latin American Adjustment: How Much Has Happened?”, organizada por el mencionado instituto en noviembre de 1989, que reunió a economistas de ocho países latinoamericanos (Bolivia, México, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela) y en la que se pidió a los participantes que en sus informes nacionales hicieran un examen del “nuevo realismo en las políticas económicas de América Latina” (Ahumada, 1996: 54). De esta forma, las políticas de ajuste del FMI se elevan a la categoría de modelo oficial de crecimiento y desarrollo de los países de América Latina, que luego lo serían del mundo entero; son, en resumidas cuentas, la aplicación del *Decálogo Neoliberal*, que a nivel de síntesis, se pueden expresar en cuatro aspectos fundamentales (Gutián y Muns, 1998: 15):

- Un marco macroeconómico equilibrado (*sound*),
- Un gobierno de menor tamaño y más eficiente,
- Un sector privado eficiente y en expansión, y
- Políticas destinadas a la reducción de la pobreza.

A partir de la década de los noventa se destacan en la economía mundial, por su crecimiento económico, China con 1.300 millones de habitantes y la India con 1.100 millones, que por su inmenso peso poblacional y el desarrollo de algunas áreas tecnológicas, políticas, económicas y sociales inquietantes, se convierten en grandes importadores de alimentos y materias primas. Esta mayor demanda de China y la India ha repercutido en los precios internacionales de los productos demandados, lo que se ha

traducido en mayores ingresos de divisas para los países productores, por lo general países subdesarrollados, muchos de ellos situados en América Latina. Una prueba del mejoramiento de la economía de los países asiáticos en los últimos veinte años la ofrecen Drèze y Sen al comparar esta región con el África subsahariana:

“Las condiciones de vida son ahora, en muchos sentidos, considerablemente mejores en el sur de Asia (incluida la India) que en el África subsahariana, en parte como reflejo de una tasa más rápida de mejoramiento durante los últimos veinte años. Por ejemplo, el ingreso per cápita es ahora un 50 por ciento más alto en el sur de Asia que en el África subsahariana, a diferencia de 1990, cuando era más o menos el mismo en las dos regiones” (Drèze y Sen, 2014: 63).

La combinación de estos factores (mayores ventas externas a precios más altos, principalmente a China, India y otros países asiáticos) explica, en gran parte de lo que va corrido del presente siglo, las altas cifras de crecimiento económico latinoamericano, en medio de un crítico entorno recesivo. Este mayor crecimiento contrasta con su rezago tecnológico y la inequidad distributiva.

Durante la vigencia del modelo neoliberal adoptado a partir de las tres últimas décadas del pasado siglo, las desigualdades económicas y sociales, en el mundo entero, se han aumentado sustancialmente, tanto entre regiones como dentro de los países.

En el marco del Foro Económico Mundial (la convocatoria anual que reúne a los potentados del planeta) realizado en noviembre de 2013 en la localidad de Davos –Suiza–, la ONG Oxfam Internacional, en su informe *Perspectivas de la Agenda Mundial 2014*, hizo la siguiente consideración: “Dada la magnitud del incremento de la concentración de la riqueza, la monopolización de oportunidades y la inequidad en la representación política suponen una tendencia grave y preocupante” (Oxfam, 2014: 2). Una muestra inequívoca de cómo la inequidad, en vez de disminuirse, se ha aumentado, está en las cifras que Oxfam (2014: 2-3) presentó en ese evento:

- Casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de solo el 1% de la población.
- La riqueza del 1% de la población más rica del mundo asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial.
- La mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo.

- Siete de cada diez personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 años.
- El 1% más rico de la población ha visto cómo se incrementaba su participación en la renta entre 1980 y 2012 en 24 de los 26 países de que se dispone de datos.
- En Estados Unidos, el 1% más rico ha acumulado el 95% del crecimiento total posterior a la crisis de 2009, mientras que el 90% más pobre de la población se ha empobrecido aún más.

Las cifras revelan un comportamiento económico y social insensible que ha despreciado todo principio ético.

Queda claro que el modelo neoliberal reproduce la filosofía y objetivos del liberalismo económico clásico, que se basan en la maximización de la tasa de ganancia y en la mayor acumulación de capital a partir de la actuación de agentes económicos privados en mercados libres con la más mínima regulación o controles del Estado.

Para el caso colombiano, su complejidad política, la presencia de grupos armados al margen de la ley y sus desequilibrios económicos y sociales, condujeron a que en 1991 la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de producir una nueva Constitución que reemplazara la vigente que se consideraba obsoleta, emitiera una nueva Constitución a la que algunos críticos le han atribuido dualidad ideológica. En efecto, en lo relacionado con todo lo económico (objetivos, estructuras y funcionalidad) su contenido es neoliberal. La estructura de la Banca Central (Banco de la República), la promoción de tratados de libre comercio y la vía libre para la privatización de empresas estatales, así lo confirman.

Pero en lo relativo a derechos políticos, sociales e individuales es garantista. Esta última faceta facilitó que la aspiración ancestral de grupos étnicos minoritarios como los indígenas y afrodescendientes quedara plasmada en el documento constitucional, lo mismo que muchas otras aspiraciones de grupos defensores de derechos humanos y muchas reivindicaciones sociales. En la presentación de la nueva Constitución, el Presidente de la República de ese entonces Cesar Gaviria, expresó: “La nueva Constitución se basará en la democracia participativa, en la que todos los colombianos tomarán parte, en la que las mujeres desempeñarán un papel importante en la vida nacional, en la que los indígenas y otros grupos étnicos minoritarios realmente

contarán” (Ahumada, 1996: 203). Pero, hasta el presente, teniendo en cuenta la dualidad de la estructura constitucional, ha prevalecido su faceta neoliberal.

2.2. El “Desarrollo”: Debate sobre su concepción desde la antropología en los países del Tercer Mundo

En la evolución de la modernidad, el surgimiento del desarrollo ha reconfigurado las antiguas clasificaciones sociales, reordenando y ajustando las diferencias existentes a través de una serie de prácticas que catalogan a la población mundial y a los distintos territorios del planeta, según la dicotomía *desarrollados-subdesarrollados*. Tal dicotomía, aunque reactualiza las asimetrías ya existentes, es un fenómeno que empieza a definirse de forma clara cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial:

“...la aplicación de un conjunto de políticas de desarrollo en favor de la devastada Europa de la posguerra abrió la posibilidad de pensar también en la cooperación internacional con el recién denominado ‘tercer mundo’ como algo posible y deseable. En un escenario internacional caracterizado por la disputa que enfrentaba a los bloques liderados por los EE.UU y la URSS por la hegemonía mundial, dentro del primero se empezaba a producir esa mezcla entre complejo de culpa por la explotación de los países subdesarrollados y el temor a que se expanda entre ellos el comunismo. Esto motivó a una mayor preocupación porque las desigualdades sociales y económicas no se siguieran incrementando. En este contexto se empiezan a desarrollar los primeros programas de antropología aplicada en el tercer mundo.

Asumiendo de manera implícita, y a veces explícita, que los países subdesarrollados lo eran porque no habían llegado todavía a la modernidad y el progreso, estos programas partían por entender el desarrollo como un proceso de evolución unilineal válido para todas las culturas y sociedades del mundo” (Ávila, 2000: 415).

Es así como “Por ello es posible hablar de una globalización hegemónica del desarrollo, en tanto que esta idea ha sido expandida de manera asimétrica, imponiendo en los imaginarios sociales planetarios estas distinciones ontológicas entre sociedades desarrolladas y subdesarrolladas” (Quintero, 2012: 133). En este sentido, a este fenómeno se le ha denominado:

“...localismo globalizado, en el sentido de un proceso por el cual determinado fenómeno representacional se generaliza con éxito a nivel global, y que a pesar de ser producido localmente, va adquiriendo una condición de universalidad que

dicta los términos de la producción de sentidos generando subalternidades, y con ellas impactos específicos en las prácticas locales de dichas subalternidades” (Quintero, 2012: 134).

Desde el punto de vista económico, el “Desarrollo” es entendido como la capacidad que se tiene para elevar el nivel de vida, en todos sus aspectos, de un grupo de personas, una o varias sociedades, teniendo como referencia el mundo occidental. Sin embargo, al analizar su actuación en los distintos países en que se ha tratado de introducir, es posible concluir como primera instancia, que este ha perdido su fuerza a través de los últimos años, dado que ha mostrado su incapacidad para cumplir las metas y propuestas que ha planteado, debido a la aplicación del mismo modelo para diversas sociedades con una evolución histórica y realidades e intereses distintos:

“El ‘american way of life’ se convierte en consigna mundial de desarrollo. Sin embargo, muchas veces no se consideraban los múltiples lazos desiguales existentes entre las sociedades del tercer mundo y del primer mundo, ni que la falta de desarrollo en las primeras era, el menos en parte, producto precisamente del desarrollo en las segundas. Todo lo contrario, se consideraba que las sociedades del tercer mundo eran incapaces de producirlo por cuenta propia, constituyéndose un imaginario que sustentaba la inmutabilidad de los grupos campesinos y la necesidad de propuestas externas para su cambio. Aunque estos primeros programas de desarrollo rural generalmente iban acompañados por sentimientos humanitarios y declaraciones de respeto hacia las culturas de los otros, en la práctica muchas veces no cuestionaban los postulados de esta visión homogenizadora del desarrollo” (Ávila, 2000: 416).

En este sentido, el principal problema del desarrollo ha sido el hecho de plantearse como meta alcanzar ciertos ideales sin tener en cuenta la realidad socioeconómica, cultural, política y ecológica de las sociedades beneficiarias. Así, la pobreza se ha llegado a analizar de forma errada en muchas ocasiones y se le ha llegado a asociar con la carencia de ciertos valores, motivaciones y capacidades. De esta forma, al tenerse una visión unilineal del desarrollo, consistente en la necesidad de introducir los elementos faltantes en una determinada comunidad, se ha llegado a aplicar la misma fórmula desarrollista a sociedades con culturas distintas. Tal fórmula, según Ávila (2000: 417-418), se resume en el mejoramiento de las condiciones sanitarias, de alimentación y vivienda; el aumento de la producción y, por ende, de los bienes de consumo; la lucha contra el analfabetismo; el desarrollo de los medios de comunicación, y la introducción de nuevos valores a los ya existentes en la sociedad.

La relación entre el desarrollo, visto como un aumento de la calidad de vida, y la economía moderna, entendida como un sistema industrial y capitalista, es cada día más insostenible, dado que históricamente y a través de estudios etnográficos se demuestra irremediablemente que el proceso de modernización aplicado en los últimos decenios en la casi totalidad del Tercer Mundo, no solo no ha conseguido eliminar la pobreza y la marginación social, sino que las ha extendido hasta alcanzar una enorme magnitud. “Ante el panorama de diferencias con que la antropología los confronta, los nuevos órdenes de cuño europeo no pueden por menos que admitir una cierta inestabilidad en sus fundamentos, por más que se esfuercen en eliminar o domesticar a los fantasmas de la alteridad” (Escobar, 1999: 42).

La antropología es una disciplina que desde su origen ha estado unida al dominio histórico de Occidente, de la misma forma que lo ha hecho el movimiento desarrollista que se ha intentado implementar en ciertos lugares del planeta. La imagen actual que se tiene del desarrollo se consolidó con el liderazgo, a nivel mundial, de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El proceso que, desde entonces, se ha intentado aplicar en la mayor parte de Asia, África y América Latina, supone una serie de condiciones que han caracterizado a las naciones económicamente más avanzadas del mundo, esto es, alta tasa de urbanización y de educación, industrialización, tecnificación de la agricultura y adopción de los principios y valores de la modernidad. Andreu Viola sintetiza de forma clara las intenciones del proyecto desarrollista en las naciones del Tercer Mundo:

“En general, las definiciones usuales de desarrollo suelen recoger –y a menudo confundir– por lo menos dos connotaciones diferentes: por una parte, el proceso histórico de transición hacia una economía moderna, industrial y capitalista; la otra, en cambio, identifica el desarrollo con el aumento de la calidad de vida, la erradicación de la pobreza, y la consecución de mejores indicadores de bienestar material” (Viola, 2000: 10).

La clasificación planteada en la ideología del desarrollo denota cómo las representaciones e iniciativas de este movimiento están fundamentadas en relaciones de poder extremadamente desiguales y ligadas al actual modelo de dominación global del sistema mundial moderno. De esta forma, se puede apreciar la fuerza del desarrollo, que ha logrado hacer invisibles y comunes las relaciones asimétricas de poder, pudiendo, de

paso, naturalizar la preocupante situación actual del planeta, creando una especie de mito con una profunda eficacia simbólica.

El desarrollo lleva en sí el reconocimiento y la negación de la diferencia, debido a que los habitantes del Tercer Mundo y sus niveles de vida no son considerados iguales que los del Primer Mundo, con lo cual, es por medio que de este mecanismo, que tal diferencia debe ser eliminada. El hecho de que esta dinámica se repita una y otra vez a través de proyectos e intervenciones, y que estos no surtan el efecto esperado, es la clara prueba del fracaso del fenómeno del desarrollo en el mundo y el escenario en el cual se ha formado una nueva tendencia de la antropología contemporánea.

Con el desarrollo surgió, a su vez, el término de “subdesarrollo”, con el cual se definió la situación de los países del Tercer Mundo carentes de recursos, tanto económicos como tecnológicos y humanos calificados, para efectuar una debida explotación de sus territorios que les permitiera elevar su nivel de vida a una cota similar a la de los países del Primer Mundo. A su vez, esta clasificación de los distintos países en desarrollados y subdesarrollados manifiesta la existencia de tres colectividades diferentes entre sí: el Primer Mundo, desarrollado y tecnológicamente avanzado, capaz de ejercer por sí solo un pensamiento utilitario y sin restricciones ideológicas de ninguna índole que limite sus capacidades; el Segundo Mundo, casi inexistente en la actualidad, también desarrollado y tecnológicamente avanzado pero inmerso en una ideología que le impide desarrollar su pensamiento utilitario; y, finalmente, el Tercer Mundo, subdesarrollado, tecnológicamente atrasado, y con una mentalidad tradicional que obstruye posibilidades de desenvolvimiento de un pensamiento utilitario y científico. En este sentido el desarrollo en el Tercer Mundo se entiende como aplicación de una modernidad supuestamente alcanzada por el Primer Mundo en tiempos pasados; actúa también como una máquina homogeneizadora, unificando a vastos grupos poblacionales bajo el título de subdesarrollados o tercermundistas (Quintero, 2012: 134). Gimeno lo ha expresado en los siguientes términos:

“El significado de ‘desarrollo’ es ambiguo y está contestado. Como señalan los postmodernos y la antropología feminista se trata de un concepto que es una construcción social e histórica plagada de asunciones acerca de la inferioridad (atraso, subdesarrollo) de los ‘otros’ (y ‘otras’) que aparecen como objetos a desarrollar gracias a la superioridad de las técnicas y conocimientos de Occidente” (Gimeno, 1999: 24).

Para alcanzar los mismos niveles de vida de Occidente y revertir la situación de atraso que los ha caracterizado, los países del Norte le han impuesto a los del Sur la idea de una orientación económica específica, que solamente es posible obtener aceptando la cooperación externa, la cual se vería representada por instituciones sujetas a los intereses de los países dominantes, tales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, BM, entre otras.

A partir de estos hechos, la figura del desarrollo ha estado ligada, desde un comienzo, a la necesidad de contar con la ayuda internacional, al tiempo que ha planteado como objetivo primario nivelar las condiciones de vida de los países Tercermundistas con las del Primer Mundo, siguiendo el camino que estos últimos recorrieron y que los ha llevado a su privilegiada situación moderna. La forma como se intentó medir este avance a través de los años, fue por medio de indicadores cuantitativos directamente asociados a la riqueza de los países dominantes. “Es indudable que el desarrollo, considerado como un enorme y poderoso conjunto de ideas que ha guiado el pensamiento y la acción por todo el mundo en el siglo XX, constituye un ‘encuentro colonial’ por el que el Norte trata de sacar ventajas de sus relaciones con el Sur” (Gimeno, 1999: 24).

Con estos antecedentes, diferentes pensadores del área social han evaluado con distinto signo este desenvolvimiento histórico. Las evaluaciones negativas ven en esta actuación una clara muestra de neoimperialismo, o una nueva versión del colonialismo, donde los países del Norte continúan ejerciendo su dominio político y económico sobre los países del Sur. Las evaluaciones positivas afirman que no se debe ver este tipo de ayuda con fines netamente explotadores, ya que los proyectos implementados en esas zonas, ante todo, han sido elaborados con buenas intenciones y con el fin de lograr un cambio para mejorar sus condiciones de vida.

Aunque el discurso del desarrollo constituye una amplia visión del mundo, en la medida que reconoce una sola historia de la humanidad y de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, y también asume un modelo único de sociedad considerado como universalmente válido, la realidad muestra que esta ideología adscrita a gran parte de Asia, África y América latina, no se termina de inclinar por un modelo social específico, dejando al descubierto la incapacidad, por parte de los organismos que dictan las políticas y el conocimiento especializado, para solventar situaciones que

conduzcan a una sostenida mejora social, económica y medioambiental. Esta idea se ha visto respaldada con los informes que se han elaborado a lo largo de la década del setenta, donde se hace referencia a la creciente desertización de África y la deforestación de los bosques tropicales, lo cual ha contribuido a ensombrecer la idea de progreso que se tenía y anuncia, de paso, un futuro menos idílico para la humanidad del pronosticado hasta ese momento.

Aunque es bien conocido el papel protagónico que ha desempeñado la teoría económica clásica del capitalismo liberal en la configuración del desarrollo y la difusión, a escala mundial, de la economía de mercado, este hecho ha supuesto:

“...un notable reduccionismo, al identificar la realidad con un número muy reducido de variables cuantificables, ignorando todo aquello (desigualdad social, ecológica, diversidad cultural, discriminación de género) que queda fuera de la contabilidad. El eurocentrismo, por su parte, es otro rasgo inherente del discurso del desarrollo, que desde sus orígenes ha usado el modelo occidental de sociedad como parámetro universal para medir el relativo atraso o progreso de los demás pueblos del planeta” (Viola, 2000: 11-12).

El fracaso de los enfoques de orientación exclusivamente económica empezó a reevaluarse a partir de principios de la década del setenta, incluyendo aspectos sociales y culturales del desarrollo, brindándole, de esta forma, nuevas oportunidades a la antropología. Desde el momento en que las distintas sociedades se vieron expuestas al proceso modernizador, surgieron nuevas problemáticas que requirieron profesionales capaces de relacionar, de forma armónica, la cultura con el desarrollo, dando origen a una nueva disciplina especializada: “la antropología del desarrollo”.

Los años setenta, históricamente, fueron muy importantes. A mediados de esa década, la transformación que se dio en el discurso del desarrollo fue bastante significativa: los factores sociales y culturales pasaron a un primer plano en los planes de desarrollo que se implementaron a continuación. Este cambio de enfoque se produjo después de obtener resultados casi nulos mediante las intervenciones precedentes, basadas en inyecciones masivas de capital y tecnología; por lo cual, el Banco Mundial, en 1973, adoptó una serie de medidas orientadas directamente a combatir el problema de la pobreza. Otras instituciones involucradas en el tema del desarrollo, como la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (US. AID), y algunas oficinas de la ONU, se acogieron a estas nuevas políticas (Escobar, 1999: 47).

La antropología, a través de una nueva vertiente, “la antropología del desarrollo”, se ha inclinado más por la vía práctica y ha analizado directamente el fracaso de proyectos con perfil economicista, proponiendo, a su vez, medidas que permitieran alcanzar objetivos sociales teniendo en cuenta lo cultural. La principal crítica de esta corriente (la antropología del desarrollo), dirigida a los técnicos economicistas señala que ellos desconocen las verdaderas condiciones y necesidades de las comunidades donde se han efectuado las intervenciones desarrollistas. “En los años ochenta, el reconocimiento del relativo fracaso de los proyectos estatales y de las agencias internacionales y la desconfianza de la planificación central, ha producido un cambio de enfoque. Se reivindica ahora el desarrollo local y la necesidad de poner a ‘la gente primero’” (Gimeno, 1999: 20).

Al descubrir esta falencia en la aplicación de los proyectos en aquellas comunidades donde se pretendía lograr una mejora en su calidad de vida, se impulsó la idea de que los grupos pobres debían tener un papel protagónico en los proyectos para obtener un resultado positivo. Fue así como se le dio prioridad a la gente “común”, ideando proyectos que, para tener contenidos sociales y culturales adecuados, debían contar con sus beneficiarios directos. Esta nueva inclinación hizo imperiosa la necesidad de contar con la ayuda de científicos sociales que sirviesen de brújula a los diferentes especialistas (ingenieros, economistas, politólogos, etc) en dicho proceso.

Con el proceso de institucionalización de la antropología como disciplina dirigida a complementar el desarrollo, a partir de los años setenta, se notó un claro aumento del número de investigaciones relacionadas con este tema. A raíz de este enlace, surgieron gran cantidad de textos teóricos y estudios de caso etnográficos sobre diferentes países latinoamericanos, que han hecho uso de paradigmas que van desde la economía política hasta el postestructuralismo.

El compromiso que los antropólogos han adquirido en este sistema de intervenciones consiste en diseñar programas que funcionen y articulen adecuadamente con la comunidad, prevaleciendo el aspecto cultural de la misma. De otra parte, es fundamental la formulación de evaluaciones que proporcionen indicadores verdaderos de los resultados de los programas que se llevan a cabo, aparte del reconocimiento de datos primarios que permiten crear nuevos planes de trabajo y tomar nuevas decisiones. Sin embargo, los antropólogos consideran que su actuación va mucho más allá de estas

tareas concretas, ya que, ante todo, justifican su papel en la capacidad de ofrecer análisis detallados de la organización social que circunscribe los proyectos, para lo cual es imprescindible el trabajo de campo. Son esas razones las que han conseguido ser tenidos en cuenta en el desarrollo de investigaciones con plazos más amplios.

Es así, como hubo una demanda de antropólogos sin precedentes y muchos de ellos empezaron a trabajar en organizaciones para el desarrollo, en las cuales ejercieron la tarea de interlocutores entre las agencias internacionales y las comunidades a donde llegaban los programas de intervención. Otro factor que ha incidido en el crecimiento de la antropología en este campo es la tendencia progresiva hacia la especialización interna de la misma; se evidencia una progresiva consolidación de campos temáticos relacionados con el desarrollo, como la ecología política, los estudios de género y la antropología de la salud. Escobar recuerda que:

“...la plantilla dedicada a Ciencias Sociales creció desde un solitario primer antropólogo contratado en 1974 a los cerca de sesenta que hay en la actualidad. Además, cientos de antropólogos y otros científicos sociales de países desarrollados y en vías de desarrollo son contratados cada año como consultores externos para proyectos puntuales” (Escobar, 1999: 47).

Los antropólogos para el desarrollo, con su labor, sentaron el precedente para crear una base institucional implementada en varios países de Europa y América del Norte. Dos ejemplos claros de lo anterior han sido la creación en el Reino Unido del “Comité de Antropología para el Desarrollo”, en 1997, y el origen del “Instituto de Antropología para el Desarrollo”, en 1976, en Nueva York, con los cuales se ha pretendido favorecer la implicación de la antropología en los países del Tercer Mundo. Todo esto ha logrado que la formación de licenciados en antropología para el desarrollo vaya en continuo aumento, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra, pero esto no significa que actualmente el número de estos científicos ya sea suficiente para la cantidad de trabajo que queda por hacer en los países que lo necesitan.

A partir de la década del ochenta el panorama mundial cambió aún más. La conciencia de que no existe una homogenización social, el fin del colonialismo y el florecimiento de nuevos medios de comunicación son hechos que hicieron emerger a grupos y asociaciones que hasta entonces estaban reducidos al anonimato. Ya desde la década de los setenta, cuando empezaron a surgir las críticas públicas al *imperialismo*

norteamericano, surgió la concepción de las desigualdades de género y salió a flote la discriminación que, por siglos, han sufrido las minorías étnicas del planeta.

La crisis que ha afrontado la actividad desarrollista en los países del Tercer Mundo se debe principalmente a que no existe una verdadera representación de las disciplinas involucradas en este proceso, lo cual ha conducido, a su vez, al replanteamiento general que se tiene del concepto de desarrollo, donde lo más importante es que las minorías sean actores protagónicos de la intervención efectuada en sus territorios y que se tenga en cuenta, de forma prioritaria, su experiencia y su relación con el medio en el cual se han desenvuelto a lo largo de su existencia. Viola comparte la misma posición:

“Una de las consecuencias de la búsqueda de formas alternativas de gestión de los recursos naturales del planeta ha sido el nuevo interés que ha despertado el manejo de la biodiversidad por parte de los pueblos indígenas, abriendo un debate sobre la necesidad de incorporar dicho *conocimiento local* como base de un desarrollo más sostenible” (Viola, 2000: 29).

En el transcurso de los años noventa, a raíz de los múltiples y estruendosos fracasos que tuvieron los proyectos desarrollistas implementados en la gran mayoría de países del Tercer Mundo, empezó a evolucionar una comunidad de especialistas que logró unificar una gran cantidad de estudios teóricos y prácticos sobre el desarrollo y sus políticas. Esa comunidad es conocida actualmente como antropología del desarrollo (Quintero, 2012: 132).

Con el paso de los años, se han intentado utilizar herramientas para realizar de forma óptima los proyectos implementados. Una de ellas ha sido asociar la antropología del desarrollo, vista esta como un cuerpo teórico, con el postestructuralismo (Escobar, 1999: 50-51). En contraposición con otras corrientes de pensamiento como la liberal, que basa sus teorías en el mercado y en el individuo, o la marxista, que se fundamenta en la producción, el postestructuralismo pone el énfasis en el papel del lenguaje y del significado en la construcción de la realidad social. Según esta corriente, el lenguaje y el significado no son un reflejo de esa realidad, sino que son la realidad misma, porque es a través de ellos que se construye la realidad social.

Desde esta perspectiva, se entiende que el desarrollo es resultado de una sucesión de hechos históricos y constituye un instrumento válido para describir la realidad. El desarrollo se ve como un campo heterogéneo y en continuo crecimiento:

“Al margen de que se ha cuestionado agriamente el significado de este término, la idea básica del desarrollo en sí ha permanecido inalterada, el desarrollo considerado como principio central organizador de la vida social, así como el hecho de que Asia, África y América Latina puedan definirse como subdesarrollados y sus poblaciones se hallen irremisiblemente necesitadas de ‘desarrollo’- sea cual sea la forma que este tome” (Escobar, 1999: 52).

En este sentido, el postestructuralismo está encaminado a examinar los fundamentos sobre los que se ha construido el desarrollo y su objetivo ha sido el de desestabilizar esas bases con el fin de modificar el orden social que regula el proceso que se adelanta en las distintas sociedades en que se ha aplicado. Así, desde esta perspectiva, se proporcionan nuevas herramientas para llevar a cabo una tarea que ha sido el centro de la antropología: convertir en extraño lo que siempre ha sido familiar. Para lograr su cometido, aquellos autores comprometidos con esta tarea intentaron convertir el lenguaje tradicional del desarrollo –mercado, población, participación, ambiente, planificación, entre otros– en un lenguaje contaminado.

De otra parte, con el ascenso del postmodernismo se ha criticado la visión aplicada históricamente a las distintas investigaciones que ven al sujeto nativo como un “otro” exótico. El indígena, el negro o el asiático pertenecen a la esfera de lo que se quiere analizar y posteriormente desarrollar; entre tanto, el occidental es visto como el artífice de dicho estudio y el encargado de encaminar por la vía del desarrollo a ese individuo. De esta forma, “El proyecto postmoderno busca realizar una antropología de la modernidad que incluye un análisis antropológico de la propia antropología” (Gimeno, 1999: 21).

Las críticas que han surgido con el paso de los años han hecho que el desarrollo se vaya replanteando, pero en este proceso han brotado nuevos debates que tienen como fin último hacer más efectiva su actuación en los diferentes escenarios donde se ha pretendido implementar. Es por eso que se ha buscado establecer un nuevo campo de relaciones entre las ideas que surgen, las instituciones que las aplican y la forma como se lleva a cabo. Sin embargo, en esta tarea, el ejercicio de las disciplinas científicas se ve evaluado negativamente, dado que se presentan como espacios de conocimiento

neutrales, dedicadas exclusivamente a demarcar las poblaciones de estudio (indígenas, mujeres cabeza de familia, campesinos, etc), reforzando así, las estructuras de poder que han caracterizado las relaciones entre los desarrollados y subdesarrollados.

Los nuevos conceptos que han surgido en los últimos años (progreso, igualdad, modernidad, desarrollo) son el antifaz con el cual se cubren las verdaderas relaciones de dominación de los países del Sur por parte de los de Norte. Para los seguidores de esta idea, es una versión moderna de colonialismo, que debe desaparecer totalmente y así dar paso a una nueva vertiente denominada postdesarrollo, que no necesariamente significa desandar el camino recorrido por el desarrollo, como lo piensan sus defensores, por el contrario, de lo que se trata es de escapar de la connotación negativa que han dejado esos términos por no haber sido realizables. Todo esto se puede conseguir con un enorme esfuerzo de imaginación conceptual donde se pretende que las disciplinas científicas de tipo social, se involucren directamente en los proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones que lo necesitan. En este sentido, Gimeno piensa que:

“Una consideración especial merece la propuesta de Escobar (1992) de desplazar del centro de la reflexión de las ciencias sociales conceptos como ‘comunidad’, que conllevan ahistoricidad, aislamiento y ausencia de cambio, por otros, como ‘movimientos sociales’, que incorporan dinamismo e intencionalidad, y colocan en el centro de la teoría y de las prácticas las expectativas y tácticas de los distintos grupos sociales en la construcción de la sociedad y la participación en el devenir histórico” (Gimeno, 1999: 22).

Otro concepto que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar la crítica que ha surgido a lo largo de los últimos años sobre el desarrollo, es el cambio en el enfoque de género, dado que con la evolución del desarrollo, al mismo tiempo se han elaborado herramientas que presentan efectos diferenciales entre hombres y mujeres:

“La primera aparición explícita de las mujeres como población destinataria de proyectos de desarrollo vino asociada al reconocimiento de sus funciones y responsabilidades reproductoras y, en particular, a la consideración de las madres de escasos recursos como *sector vulnerable*. Cuando los planificadores vieron a las mujeres, la primera necesidad de estas que reconocieron fue la relacionada con el cuidado de su prole. Esta mirada es la base del enfoque del bienestar que caracterizó a las políticas de cooperación implementadas durante la Primera Década del Desarrollo, auspiciada por Naciones Unidas (década de

los sesenta), en el marco de un modelo de desarrollo que priorizaba el crecimiento acelerado del producto nacional” (Murguialday, 2012: 287).

Las corrientes feministas que han dado cuenta de la situación real de las mujeres hacen énfasis en que las instituciones del desarrollo se refieren al papel que desempeñan en la sociedad las mujeres del Tercer Mundo como un hecho natural, reduciendo de ésta forma su dinamismo y creatividad a la simple lucha por la sobrevivencia en una situación de pobreza que se acentúa con la crisis económica reinante en el mundo entero. Así, elaborando un diagnóstico errado de su verdadero papel en la sociedad, se llegan a implementar estrategias de acción que las excluyen de la dinámica social y, por supuesto, pasan por alto sus necesidades e intereses.

El ecofeminismo ha sido la corriente encargada de revelar la forma como han sido excluidas las mujeres del panorama económico y social, principalmente, y toma como alternativa radical, el abandono del desarrollo. Para defender su tesis, sostiene que, a lo largo de la historia, la mujer se ha encontrado subordinada dentro de un sistema patriarcal, característico de la cultura occidental, e impuesto por esta a las demás culturas. En esta imposición, otras esferas se han visto alteradas, ya que se ha sobrepuesto el conocimiento científico y tecnológico al conocimiento tradicional y local.

En este escenario, el aporte de la mujer a su sociedad y su propia cultura es ignorado, no se tiene en cuenta el importante papel que juega en su economía ni la intercesión que efectúa para lograr, o tratar de lograr, una relación armónica entre su grupo y el medio en el cual éste se desenvuelve. “Si tuviéramos que definir con una palabra el rol asignado a la mujer en los programas de desarrollo hasta la década de los setenta, esta debería ser, sin duda, ‘invisibilidad’” (Viola, 2000: 34).

Aproximadamente, hasta mediados de la década de los setenta, el papel de la mujer en la sociedad era totalmente nulo, y el desconocimiento de su importancia se hace latente en la construcción de los indicadores macroeconómicos, como el PIB, que no tuvo en cuenta el trabajo femenino en la economía informal, mucho menos en la formal, o en las actividades de autoconsumo, siendo, todas estas labores, aún importantes, en los países del Tercer Mundo. Otro elemento que favorece esta situación es el concepto de *‘cabeza de familia’*, donde se hace referencia al hombre, que desplaza el papel de la mujer a la esfera de trabajo doméstico y niega así el aporte de esta última

a la subsistencia familiar. Esto se considera un gran error, si se tiene en cuenta, que para ese entonces, una tercera parte de las unidades familiares del planeta estaban encabezadas por una mujer sin apoyo alguno del hombre (Viola, 2000: 35).

Es por eso que se plantea, desde la perspectiva del ecofeminismo, como solución más efectiva, el regreso a una economía de subsistencia, autónoma, descentralizada y autosuficiente, que se rija ante todo en las relaciones humanas. En esta corriente, el conocimiento científico es visto como uno de los principales defensores del capitalismo, que ignora y desprecia el conocimiento local de minorías como indígenas, campesinos y mujeres. “La antropología del género comparte con otras corrientes críticas el convencimiento de la necesidad de descolonizar la antropología en sus asunciones, conceptos y prácticas” (Gimeno, 1999: 22).

La participación de las mujeres ha empezado a tener reconocimiento a partir de los años ochenta, aunque la forma en que se lleva a cabo continua siendo objeto de controversia. Se debe, en parte, al auge de estudios de género que han rebatido muchas de las teorías y prácticas llevadas a cabo por instituciones de desarrollo. Es importante recordar que en ese período, los movimientos de mujeres adquirieron un protagonismo social y político nunca antes visto en América Latina, con el fin de forzar la democratización de sus países, denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos y protestar contra las políticas económicas neoliberales. Así mismo, en esos años, se dio una progresiva feminización con la aplicación de los programas de ajuste impulsados por el FMI, entidad que ha visto cómo a partir de los setenta creció rápidamente la proporción de hogares de bajos ingresos que tienen como cabeza de familia a una mujer, y cómo estos hogares han mostrado un creciente deterioro de su calidad de vida, como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo provocada por la caída de los salarios y la eliminación de subsidios que los favorecían.

En la década del noventa surge un conjunto de enfoques alternativos al modelo de desarrollo, influenciados por la nueva concepción de la mujer manejada por la estrategia Mujer en Desarrollo (MED). Esta nueva perspectiva se encuentra basada:

“...en las experiencias y reflexiones de grupos feministas de América Latina, África y Asia, a los que Murguialday denomina ‘Miradas desde el sur’. Es el caso de la estrategia Género en el desarrollo (GED), desde la cual se hace hincapié en las consecuencias políticas del género y se otorga un lugar central a

la noción de empoderamiento, central en el diseño de políticas de cooperación y formas de medición de la mayoría de las instituciones internacionales de desarrollo. Desde este enfoque se rechaza la universalidad de la categoría ‘mujer’ y se propone observar a las mujeres en el contexto de una estructura que crea diferencias entre ellas en función de su pertenencia étnica, racial, de clase y de edad” (Pérez, 2012: 27).

De otra parte, no solo el ecofeminismo ha producido críticas a la actual postmodernidad, desde la economía política se han generado otras posturas que hacen caer en cuenta de los vacíos y errores en los que se ha incurrido al intentar gestionar solamente por la vía del desarrollo económico la situación de las sociedades menos favorecidas. Una de las principales censuras está encaminada a hacer ver que el postmodernismo se centra menos en las realidades existentes y más en la representación de dicha realidad, lo cual se hace más palpable cuando lo analizado se plasma en documentos donde se termina diluyendo el análisis de la realidad. En este sentido, Arturo Escobar sugiere “...la necesidad de imaginar nuevas narrativas de la cultura y de la vida, en lugar de analizar los procesos concretos en los que se producen los discursos del desarrollo y/o la subordinación de unos colectivos por otros a través de la aplicación de los proyectos” (Gimeno, 1999: 23).

Quizá, una de las repercusiones más fuertes de lo anterior está en que los colectivos muchas veces se han manifestado de forma adecuada y sus voces han sabido manifestar la dura crisis que atraviesan. Pero cuando toda esa realidad debe quedar plasmada en documentos con el fin de solucionarla, los burócratas encargados de efectuar esta tarea, no la ejecutan correctamente y la crisis que se atraviesa y sus necesidades, quedan disueltas sin lograr su verdadero cometido.

Para tratar de superar, de alguna manera, esta situación que limita las posibilidades de avanzar hacia el futuro, los colectivos minoritarios han decidido crear organizaciones de carácter político, sujetas a la misma forma de actuación de tipo occidental, con el fin de tener la representación adecuada en los foros y reuniones de carácter internacional donde se discuten las vías que debe tomar el desarrollo. Es claro, que la situación de abandono por parte del Estado, ha incidido en la politización de las minorías étnicas y de mujeres, principalmente, con el fin de que sean ellos mismos quienes escriban su propia experiencia, y de paso, dicten las directrices y estrategias en los proyectos en los cuales se vean directamente involucrados.

Se puede afirmar que, antes de la década del ochenta, la actitud de la gran mayoría de las minorías étnicas era la de una constante búsqueda de aislamiento, de mantener un ostracismo con respecto al mundo occidental. Sin embargo, ese pensamiento se ha ido transformando en otro que exige mejoras en sus condiciones de vida. Las minorías, actualmente, no rechazan el progreso; al contrario, buscan formar parte de él y reclaman formar parte de la historia y del desarrollo.

Con todo lo anterior, es de suponer que la crítica de la economía política al sistema desarrollista implantado en los países del Tercer Mundo, ha tenido repercusiones positivas, porque obliga a las instituciones intermediarias en este proceso, a que se centren en los problemas y necesidades reales de la vida real de esas personas, y que no se detengan a analizar una serie de conceptos utilizados para designar partes de esos conflictos, que es lo que se ha venido haciendo hasta hace pocos años.

Al mismo tiempo, se ha elaborado una autocrítica dentro de esta corriente, donde se requiere que se deje de lado la posición tajante que ha caracterizado a la economía política consistente en ver la historia de Occidente como una historia lineal, con unos estadios evolutivos generales, que han pretendido ser los de toda la humanidad. Para que los esfuerzos que se han hecho a lo largo de los últimos años tengan resultado positivo, es necesario dar cabida a la construcción de una historia en la que predomine la diversidad de las culturas, donde en su contacto con las culturas del Primer Mundo, han logrado construirse mutuamente.

Sin embargo, desde esta perspectiva se aconseja tener cuidado a la hora de construir y entender dichas historias, dado que, aunque muchos procesos que se adelantan, están ligados a los centros de poder económico, cultural y político, hay ciertos aspectos de la comunidad que no pueden ser explicados en términos de centro-periferia. Es importante, aunque no siempre es fundamental, contextualizar a una determinada población en un espacio más amplio, como por ejemplo, un pueblo indígena o una nación del Tercer Mundo dentro de la cultura de Occidente, pero siempre y cuando ese pueblo o esa nación escriban y marquen las directrices de su propia historia.

Hay que tener presente que, cuando los países dominantes o sus organismos financieros hacen referencia al concepto de desarrollo, éste no solo es un discurso.

Fundamentalmente es una sucesión de actos determinantes de políticas económicas y sociales dirigidas a mantener y consolidar el poder y los intereses de grupos hegemónicos en la búsqueda de maximizar sus tasas de ganancias y acelerar sus procesos de acumulación capitalista. Sin embargo, estas realidades no deben, por un lado, menospreciar las acciones y dinámica de los grupos sociales y comunidades étnicas, ni mucho menos, la capacidad de acción de aquellos sectores que ven vulnerados sus derechos o que constantemente son excluidos de las supuestas ventajas que ofrece el desarrollo; y por el otro, los grupos sociales y comunidades étnicas, frente a la innegable realidad del mundo actual, se ven forzadas a interactuar y a dialogar con los sectores dominantes, pero, en todos los casos, exigiendo el respeto a su dignidad y a su cultura, y procurando la defensa de sus intereses.

En todo este proceso, es de suma relevancia tener en cuenta la forma en que los individuos, grupos y poblaciones se insertan en los diversos proyectos que se adelantan y que les atañen, ya que tal como lo plantea el etnodesarrollo, el reconocimiento de los derechos de las minorías es fundamental para reconocer de hecho y de derecho la condición pluricultural y multiétnica de los estados. En el caso de América Latina:

“...culminados los procesos de reformas constitucionales que reconocen la pluriétnicidad y el multiculturalismo en casi todos los países de la región (Colombia, 1991; Perú, 1993; Paraguay, 1993; Bolivia, 1994; Ecuador, 1998; Venezuela, 1999; México, 2001), estas reivindicaciones siguen constituyendo el cogollo de los debates y los nuevos movimientos sociales aglutinados en torno al reconocimiento a los derechos diferenciales de la población amerindia, nuevas concepciones de ciudadanía, con la participación de antropólogos” (Pérez, 2012: 28).

2.3. Crisis socio-ambiental, una difícil encrucijada para el desarrollo y crecimiento de los pueblos del mundo

Posiblemente, el factor que genera mayores incertidumbres y riesgos para las diferentes formas de vida, entre ellas la humana, ha sido el deterioro progresivo del planeta y de sus recursos naturales. Hasta el presente, la Tierra ha sido el hábitat exclusivo de las diferentes especies vivientes conocidas, pero la destrucción de los diferentes medios de vida es un riesgo global que se extiende, por igual, a todas las naciones del mundo, sin excepción. Uno de los motivos que ha conducido a esta grave situación es la nueva relación que se ha entablado con la naturaleza, en la que ésta ha

sido politizada, convirtiéndola en una mercancía global y una fuente de beneficio económico: “Las nuevas propuestas de productividad están estrechamente vinculadas con las ideas de crecimiento económico y desarrollo aun cuando eso pudiera ocasionar la pérdida en gran escala de biodiversidad o la protección de derechos a minorías étnicas como resultado de un aprovechamiento indiscriminado” (Coral, 2011: 107).

Con respecto a la economía mundial, las decisiones erróneas por parte de los países del Primer Mundo han llevado a países enteros a condiciones de vida infrahumanas, mostrando así un deterioro alarmante en su situación política, social y económica. “Más de la mitad de la población mundial está viviendo en condiciones próximas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, son víctimas de la desnutrición. Su vida económica es primitiva y miserable. Su pobreza es un hándicap y una amenaza, tanto para ellos como para las regiones más prósperas” (Viola, 2000: 14).

Dentro de este contexto, a partir de la difusión y dominio de ideas que identifican el ascenso social con la mayor capacidad de demanda, tenencia y uso de bienes materiales, cada día más diversos y profusos, se ha desnaturalizado y transgredido el legítimo derecho a la satisfacción de las necesidades básicas de una vida digna, para convertirse en una sociedad consumista, donde el mayor valor personal y social es la exhibición de consumos innecesarios de ostentosos bienes, convertidos en símbolo de riqueza y poder. “El modelo de desarrollo no puede ser capitalista, deben buscarse otros modelos, donde se respeten los ríos, las quebradas, las montañas frágiles; o sea el modelo debe ser uno en donde el ser humano pueda vivir respetando la naturaleza y vivir de ella como parte fundamental de la Tierra” (Green, 2010: 320).

Todos estos bienes, que para el mundo occidental son de gran valor y constituyen sus principales intereses, son para las culturas indígenas simples objetos superfluos que no tienen cabida en sus intenciones ni propósitos y, por el contrario, son una barrera que impide la realización de sus objetivos básicos:

“El desarrollo del capitalismo engendra pues un subdesarrollo cada vez mayor de la comunidad indígena, *como ocurre más o menos en todos los órdenes*. De esta manera, el problema indígena es la lucha continua por la simple supervivencia, en un sistema en el que es víctima, como casi todos, de un desarrollo capitalista desigual...El indio libra una batalla perdida desde hace cuatro siglos” (Gros, 1991: 132).

Este escenario crítico puede afirmarse que se deriva de cuatro agentes principalmente: el acelerado crecimiento demográfico, el deterioro de la naturaleza y agotamiento de los recursos naturales, el consumismo y la inequidad distributiva del ingreso y la riqueza. Incontables son los ejemplos que se pueden relacionar con los efectos negativos, tanto social como ambientalmente, que producen los proyectos desarrollistas implementados en los países del Tercer Mundo. En este caso, puede ser representativo el caso de la comunidad arakmbut, en la Amazonía peruana, que ha sufrido la presión ejercida por el mercado para la extracción indiscriminada de oro. Esta actividad, impulsada por el Estado peruano en beneficio de los colonos mestizos y las empresas multinacionales, se traduce en un deterioro irreversible del medio ambiente y de las condiciones de vida del grupo nativo:

“La explotación indiscriminada de los recursos en detrimento de las poblaciones que habitan ancestralmente el territorio, intensificada desde los años noventa hasta la actualidad, ha generado a la par que elevadas tasas anuales de crecimiento del PIB un creciente número de conflictos socio-ambientales protagonizados por comunidades rurales, campesinas y/o indígenas en todos los países de la región” (Pérez, 2012: 29).

Los objetivos de las políticas del crecimiento económico se han concentrado en el mayor aumento de la riqueza material, medida por la evolución del Producto Interno Bruto (PIB). A su vez, la evolución del PIB, en su casi absoluta totalidad, proviene de la aplicación del trabajo humano sobre los recursos de la naturaleza (por lo general finitos y no renovables) para satisfacer las necesidades materiales de la población.

La difusión a escala planetaria de este sistema que mide el bienestar de las distintas sociedades solo a través de un parámetro, en este caso el PIB, es en gran medida excluyente al no tener en cuenta factores tan relevantes en una sociedad como son la desigualdad social, la discriminación de género o la diversidad cultural, lo cual hace que queden por fuera de todo proyecto político los grupos con menos representación, como es el caso de las minorías étnicas. En este sentido, las políticas que se han aplicado a nivel mundial no solo no han conseguido “...eliminar la pobreza y la marginación social, sino que las ha extendido hasta alcanzar una magnitud sin precedentes” (Viola, 2000: 11).

Otro aspecto de gran importancia, a nivel global, es que de acuerdo con las más serias proyecciones, basadas en las tendencias que se han venido registrando, el futuro

de la población es, a todas luces, insostenible. En efecto, la Organización de Naciones Unidas estima que “A nivel mundial, la población sigue aumentando y habrá superado los 9.000 millones en 2050, pero en las regiones más desarrolladas apenas varía y se producirá un notable envejecimiento” (ONU, 2007: 4). Solo la India tendrá cerca de 1.700 millones y será el país más poblado de la tierra, seguido por China con alrededor de 1.500 millones. Algunos estudios estiman que con un crecimiento demográfico del 1%, que se considera moderado de acuerdo con el comportamiento tendencial, en cien años la población del mundo superaría los 18.000 millones de habitantes³.

Para satisfacer sus necesidades, esta mayor población contará, en los años venideros, con la existencia de recursos progresivamente menguados y deteriorados. Este difícil futuro se explica a partir del tratamiento destructivo que se ha infligido a todos los elementos de la naturaleza:

“Si bien en los últimos tiempos hay una inusitada inclinación en mostrar a los gobiernos como entes interesados en la conservación de los recursos naturales (ecogubernamentalidad)⁴, las nuevas tendencias económicas señalan que el crecimiento y la productividad en países pobres dependen en gran parte del aprovechamiento de recursos no renovables como el petróleo y de recursos naturales muy sensibles y ricos en biodiversidad como los bosques y selvas tropicales” (Coral, 2011: 107).

Entre tanto, la dinámica del sistema económico y su lógica reproductiva, basada en el creciente consumo de los bienes y servicios más diversos e inútiles para satisfacer necesidades humanas legítimas, progresivamente se ha venido haciendo más incompatible con la fragilidad de la naturaleza. Las preocupaciones, tanto de los estados nacionales como de los sectores productivos, solo se han ocupado del crecimiento de la productividad, a cualquier precio, mientras que la naturaleza ha sido considerada como

³ El estudio efectuado por Jorge Esquivel Lugardo para la Universidad del Valle de México, mediante el uso de ecuaciones diferenciales, proyecta la población mundial en los próximos 20, 50 y 100 años y pronostica que en el año 2100 la población mundial será de 19.274.339.488 habitantes (Esquivel, 2009: 6).

⁴ La investigadora Astrid Ulloa ha definido la ecogubernamentalidad como “...todas las políticas, los discursos, los conocimientos, las representaciones y las prácticas ambientales (locales, nacionales y transnacionales) que interactúan con el propósito de dirigir a los actores sociales, a pensar y comportarse de maneras particulares hacia fines ambientales específicos (desarrollo sostenible, seguridad ambiental, conservación de la biodiversidad, acceso a recursos genéticos, entre otros)” (Ulloa, 2004: XLII).

un obstáculo que era necesario dominar, con la creencia de que sus recursos eran inagotables:

“Si bien el siglo XX supuso un período de expansión aparentemente sin límites, los primeros años del siglo XXI nos han mostrado los confines de nuestro pequeño mundo. Hemos experimentado apagones regionales provocados por las limitaciones de nuestras fuentes energéticas; hemos visto cómo el agua comienza a escasear y que, para continuar extrayendo petróleo, nos vemos obligados a explotar yacimientos cada vez más recónditos. Una atmósfera que creíamos ilimitada se ahoga tras dos siglos de emisiones de carbono. Incluso la biodiversidad del planeta parece experimentar serios problemas” (Moyer, 2010: 68).

La consecuencia ha sido un creciente desbalance entre la disponibilidad de recursos naturales, muchos en vía de agotarse y otros ya agotados, y los desmedidos consumos, estimulados por su papel de elemento fundamental en la reactivación económica, por las ansias de ganancias de empresarios y productores, y por la exaltación de la cultura consumista como símbolo del poder y el buen vivir.

Sobre el futuro inmediato y mediano del mundo se ha denunciado la grave encrucijada que se cierne sobre su sostenibilidad, si los cada día más acelerados ritmos de consumo y productivismo se hacen incontrolables. El Club de Roma, en un documento titulado “Los límites del crecimiento”, señaló en 1972 que de continuar las tendencias actuales, el planeta estaría abocado a una crisis sin precedentes, que pondría en riesgo la supervivencia de la humanidad; en 1992 reitera sus anuncios en el documento “Más allá de los límites del crecimiento”; y en el 2004 con “Los límites del crecimiento 30 años después” realizó su última advertencia. Algunos sectores han descalificado sus diagnósticos, afirmando que son contrarios al progreso que se merece la humanidad:

“...las principales ciudades del Tercer Mundo, desbordadas por el flujo continuo de migrantes rurales empobrecidos, comienzan a verse rodeadas por enormes bolsas de marginación (*bidonvilles*, *favelas*, *pueblos jóvenes*, etc.), y por si estos factores no fueran suficientemente delatores, la difusión planetaria de imágenes de hambrunas catastróficas, como las del Sahel, Etiopía y Bangladesh, terminaron por disipar muchas de las esperanzas inauguradas por el discurso de Truman. Por último, la crisis del petróleo y la difusión, en 1972, del informe al Club de Roma sobre los límites del crecimiento, dispararon las primeras alarmas sobre el futuro del planeta en caso de mantenerse el modelo de crecimiento

económico sostenido considerado hasta ese momento como la quintaesencia del desarrollo” (Viola, 2000: 18).

A lo anterior debe agregarse la inequidad distributiva del ingreso y la riqueza⁵. En los países ricos y altamente desarrollados, centro de los revolucionarios avances de la ciencia y de las tecnologías innovadoras, su población no excede del 20% con respecto a la total del planeta, pero en ellos se concentra alrededor del 80% de la producción. Muchas de sus ciudades están habitadas por hombres y mujeres individualistas con visibles cargas de miedos, incertidumbres y angustias producidas por una existencia dominada por el productivismo, el lucro, la ostentación y el consumo desaforado.

Mientras tanto, en los países pobres y subdesarrollados, la desigualdad económica y social ha establecido sociedades radicalmente diferenciadas. En un extremo, una minoría privilegiada, cada día más reducida, padece las crisis de las sociedades altamente desarrolladas, si bien en una situación peligrosamente inestable por su realidad inequitativa e insostenible; en el otro extremo, las grandes mayorías empobrecidas, donde el hambre y la ignorancia se manifiestan a primera vista. En el centro, unas clases medias que, pese a que imitan y desean parecerse a los sectores privilegiados, cada día se parecen más a las mayorías empobrecidas.

El énfasis del productivismo y de la exaltación del ‘tener’ como símbolo exclusivo de importancia y dominio, ha establecido una sola dimensión en la existencia de los individuos: producir y consumir. Aparejados a estas tendencias, se han difundido antivalores como la ostentación de bienes materiales, el egoísmo, la envidia, al tiempo que tienden a desaparecer viejas virtudes como la solidaridad y la tolerancia. En ese sentido, el desarrollo económico y social se expresa en el creciente acceso de amplios sectores de la población a los bienes materiales (alimentación, medicamentos, vivienda, vehículos, electrodomésticos y demás bienes de confort) y a la de otros bienes, que como la educación y la cultura, que aunque requieren de una base material para producirse, su contenido es fundamentalmente intangible. Al respecto, el nobel de literatura 2010, Mario Vargas Llosa afirma lo siguiente:

⁵ En relación con este tema, hemos hecho referencia anteriormente (sección 2.1) al informe de la ONG Oxfam Internacional *Perspectivas de la Agenda Mundial 2014*.

“La adquisición obsesiva de productos manufacturados, que mantengan activa y creciente la fabricación de mercancías, produce el fenómeno de la ‘reificación’ o ‘cosificación’ del individuo, entregado al consumo sistemático de objetos, muchas veces inútiles o superfluos, que las modas y la publicidad le van imponiendo, vaciando su vida interior de inquietudes sociales, espirituales o simplemente humanas, aislándolo o destruyendo su conciencia de los otros, de su clase y de sí mismo, a resultas de lo cual, por ejemplo, el proletario ‘desproletarizado’ por la alienación deja de ser un peligro -y hasta un antagonista- para la clase dominante” (Vargas, 2012: 24)

En Colombia, algunos sectores de la población, al querer involucrarse en esta ola consumista y no hacerse partícipes de la construcción de la riqueza nacional, han optado por recurrir al desarrollo de actividades económicamente rentables, pero a su vez al margen de la ley, como el cultivo de hoja de coca y la manufactura de alcaloides, para lo cual han utilizado procedimientos violentos como el desplazamiento de poblaciones indígenas y campesinas con el fin de llevar a cabo libremente su labor, por medio del despojo de sus propiedades ancestrales:

“Se calculaba que para el año de 1993 en Colombia existían 42.000 hectáreas en cultivos de hoja de coca, 8.000 hectáreas de marihuana, 25.000 hectáreas en cultivos de amapola, los cultivos ilegales afectaron 212 municipios del país e involucraron a 300.000 pequeños productores, entre campesinos e indígenas, de los cuales más de la mitad de los pueblos indígenas que existen en el país se encuentran involucrados o afectados por los cultivos ilegales. (Documento Conpes, 1994). Hoy hay por lo menos 75 mil hectáreas sembradas en coca y 20 mil en amapola en 259 municipios” (ONIC, 1998: 139).

En algunos países del Tercer Mundo, donde los desequilibrios sociales son abismales, es común encontrar que los comportamientos dominantes corresponden a un consumismo insustancial donde los pudientes derrochan y ostentan una vida de lujos, mientras que los pobres y los muy pobres carecen de los medios para una vida digna, con el agravante de que estos últimos, más allá de la dignidad, lo que realmente anhelan es tener la vida desenfundada de muchos de los ricos y, por eso, en muchos casos, se entregan a la práctica de actividades ilícitas.

El desmedido crecimiento demográfico, los maltratos a la naturaleza, los consumos desenfundados de significativos sectores poblacionales y la inequidad distributiva del ingreso y la riqueza, han precipitado fenómenos nocivos para la

sostenibilidad de la naturaleza y para garantizar las diferentes modalidades de vida, entre estas, la humana. Algunos de esos fenómenos se señalan a continuación.

El primero de ellos es la contaminación atmosférica, con sus perniciosos efectos sobre la salud y bienestar de los seres vivos (seres humanos, especies animales y vegetales) y todos los demás elementos materiales inanimados, útiles a la vida en sus múltiples manifestaciones. Su principal origen se encuentra en los procesos que implican combustión como los industriales, el automovilismo, la calefacción, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, azufre y otros contaminantes:

El calentamiento global constituye el segundo fenómeno, derivado del anterior. Como es sabido, el calentamiento global es un efecto de la presencia en la atmósfera de demasiados gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono:

“Se calcula que de seguir aumentando el efecto invernadero por culpa de las emisiones de gases contaminantes, antes de fin del presente siglo habrá aumentado el nivel del mar entre 9 y 88 cm. y la tierra será entre 1.4 y 5.8 grados más caliente que en 1990. Habría en el 2050 unos 150 millones de refugiados del clima que buscarán tierras altas con el agua del mar a los talones, mientras que otras especies biológicas animales y vegetales quedarán sepultadas bajo las aguas” (Saavedra, 2005: 19).

El gas proviente de la deforestación, la quema de combustibles, la quema de carbón de las plantas que producen energía eléctrica que emiten 2.500 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono y, la circulación de automóviles que emiten 1.500 millones de toneladas cada año, afectan de forma negativa la actividad agrícola a nivel mundial:

“Los expertos ya han comenzado a investigar la manera en que el calentamiento global afectará a la producción agrícola. Si bien en algunos países el cambio climático provocará estaciones de crecimiento más largas, en otros el calor hará más frecuentes las plagas o los fenómenos meteorológicos extremos. Parece que Rusia y China se beneficiarán al tiempo que India o México experimentarán dificultades” (Moyer, 2010: 72).

Los Estados Unidos, con el 4% de población mundial, son el principal causante del calentamiento global del mundo; produce el 25% de la contaminación originada por las emisiones de dióxido de carbono, emitiendo más cantidades que la China, la India y

el Japón juntos. “Cada año la actividad industrial en América del Norte genera cantidades significativas de sustancias químicas tóxicas, contaminantes atmosféricos, residuos peligrosos y no peligrosos y material radiactivo que deben manejarse para proteger la salud humana y el medio ambiente” (CEC, 2008: 43).

La elevación de las temperaturas derrite los glaciares. Los científicos aseguran que todos los glaciares del Parque Nacional Glacier (uno de los siete parques nacionales de Canadá que contiene zonas glaciares) van a desaparecer antes de 2070 si continúan derritiéndose al ritmo que lo han hecho hasta el presente. “En los últimos tres decenios, el banco de hielo del Ártico se ha reducido en un área promedio anual equivalente a las superficies de Texas y Arizona juntas, y la tendencia de deshielo se acelera” (CEC, 2008: 8). El fenómeno provoca el crecimiento del nivel de mares y océanos; y al derretirse los glaciares, el nivel de los océanos sube y los científicos predicen que lo hará en alrededor de 13 pulgadas antes de 2100.

Este mayor nivel de las aguas oceánicas producirá inundaciones en las zonas costeras de muchos países donde se encuentran localizadas importantes poblaciones, que desaparecerán, haciendo necesario trasladarlas. Este fenómeno reduce la disponibilidad de tierra firme, que, combinada con su menor fertilidad y los avances de la desertización, disminuye las tierras de uso agrícola y ganadero. Se profundiza, de esta forma, el desbalance entre una menor oferta de productos agrícolas y pecuarios y la mayor demanda de los mismos:

“Las comunidades y hábitats costeros son particularmente vulnerables al cambio climático. Los niveles del mar se están elevando a lo largo de gran parte de las costas, y el índice de cambio se acelerará en el futuro, empeorando los efectos de inundaciones progresivas, inundaciones causadas por tormentas y la erosión de la línea costera. Es probable que se intensifique la destrucción infligida por las tormentas, sobre todo en el Golfo y el Atlántico. Aparte del aumento de los niveles del mar, los habitantes y especies silvestres que dependen de la costa se ven amenazados por cambios en la vegetación y un entorno edificado que bloquea la migración tierra adentro” (CEC, 2008: 9-10).

Como es obvio, a medida que pasa el tiempo la población va aumentando, y para satisfacer sus necesidades, contará en los años venideros con la existencia de recursos progresivamente menguados y deteriorados. Esta situación se hace patente en el irremediable deterioro de la capa de ozono; en la desaparición progresiva de fuentes de

agua; en la desertización que reduce la existencia de tierras fértiles disponibles para la agricultura; en el agotamiento de la fauna y la flora; en el calentamiento global que trastorna el clima y desarregla los ciclos de lluvias, aumenta los niveles de los océanos y reduce las tierras habitables y para uso agrícola, altera el caudal de los ríos y corrientes, y produce inundaciones que destruyen cosechas y causan tragedias. Además, es importante tener en cuenta que en lo referente al futuro de la disponibilidad energética, que con el progresivo crecimiento de la población, el consumo de energía será evidentemente mayor que el actual; por lo cual, es de esperar una crisis energética sistémica sin soluciones previsibles:

“...el progreso moderno, ahora lo sabemos, tiene a menudo un precio destructivo que pagar, por ejemplo en daños irreparables a la naturaleza y a la ecología, y no siempre contribuye a rebajar la pobreza sino a ampliar el abismo de desigualdades entre países, clases y personas” (Vargas, 2012: 20).

Los fenómenos naturales, al disminuir gradualmente las áreas productivas para el hombre, crean un conflicto por el dominio de estos territorios, que en el caso colombiano, se ha traducido en una guerra entre los distintos grupos armados al margen de la ley, los cuales luchan por ejercer el control sobre determinados espacios, con el fin de desarrollar cultivos ilícitos, y zonas que faciliten el transporte de alcaloides:

“Los territorios más afectados son los departamentos que comprenden la Amazonía, la Orinoquía, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur del Tolima, Cauca y el Huila, además el norte del Cesar y Nariño; de estos, los departamentos más perjudicados son el Guaviare, Caquetá, Putumayo, donde los fenómenos de colonización para cultivos ilegales se hacen a expensas de los territorios indígenas; el 17% de los cultivos ilegales se localizan en resguardos y reservas indígenas” (ONIC, 1998: 139).

La realidad descrita es alarmante, pero lo más grave es que los signos del presente, es decir, una larga cadena de fenómenos naturales que conllevan a la destrucción de recursos naturales básicos para la subsistencia humana, confirman que los diagnósticos son consistentes.

En cuanto a las causas que han acabado con gran número de especies marinas o las tienen en proceso de extinción y, a su vez, explican el acelerado deterioro de las condiciones de mares y océanos, estas se deben al aumento de la población y la ausencia de instituciones y normas internacionales que prescriban su adecuado tratamiento, que

sean vigilantes, se obligue a cumplirlas y se sancione severamente a quienes las violen. A esto se agrega la mayor industrialización en todos los países, la polución de los ríos, los vertidos de los barcos, las aguas fecales, los millones de millones de toneladas de plásticos que se lanzan a los mares y océanos y el uso irreflexivo de pesticidas, dioxinas y metales pesados.

La gravedad de los desarreglos de la naturaleza hace que el hábitat planetario esté *ad portas* de colapsar y progresivamente deje de ser propicio para las diferentes formas de vida, entre ellas la humana. También confirma que los anuncios desalentadores no son solo expresiones caprichosas de voces pesimistas, porque los registros históricos de la ocurrencia de desastres naturales (huracanes, inundaciones, tsunamis, cataclismos, calentamiento de la atmósfera, reducción de las tierras habitables y cultivables, y la expansión de la desertización, entre otros ominosos signos) indican que su trágica frecuencia aumenta ostensiblemente:

“Existen pruebas alarmantes que apuntan a que el número de desastres registrados prácticamente se ha duplicado en los 20 últimos años y que los costes económicos han aumentado a un ritmo incluso mayor. En 2005, los huracanes Katrina, Rita y Wilma provocaron, en conjunto, pérdidas por un total de 166.000 millones de dólares, cifra nunca vista. Resulta tentador echar la culpa al cambio climático, que ya está afectando las condiciones meteorológicas, pero tienen más peso aún el riesgo y la vulnerabilidad crecientes de las comunidades ante los desastres naturales, sobre todo para los pobres, con la consiguiente acumulación de riesgos latentes”(Basher, 2008: 35).

De acuerdo con lo expuesto, se debe imponer un saneamiento ambiental que tenga como finalidad asear y descontaminar el territorio, la atmósfera y los océanos, y reducir las emisiones de gases invernadero para, progresivamente, rescatar la capa de ozono y preservar la existencia de las condiciones propicias para las distintas formas de vida.

Conseguir estos objetivos hace imprescindible la rectificación de los procesos productivos, de las formas de vida y de los hábitos de consumo con objeto de reducir, hasta el límite máximo posible, las consecuencias contaminantes de la producción, del consumismo y de los hábitos contaminantes de la vida humana, en forma individual y colectiva, a nivel local, regional, nacional y global. Debe ser un compromiso global en

el que queden comprometidos de forma irrenunciable todos los países del mundo, principalmente las grandes potencias por su mayor capacidad de contaminación.

Es imperativo reconstruir la visión del mundo y adoptar las acciones y motivaciones dirigidas a preservar la sostenibilidad del planeta, procurando que el hábitat sea más amigable con las diferentes especies, entre estas, la humana. Asimismo, es necesario empezar a pensar en un “yo colectivo”, donde se incluya a todos los seres humanos, en forma tal que, en vez de la competencia prevalezca la solidaridad y la insignia sea el respeto y la fraternidad entre los individuos y el amor a la naturaleza; gradualmente se debe abandonar la avaricia y la ostentación, y se debe realzar la sencillez. La práctica generalizada de estos valores crearía las bases de una sociedad equilibrada, incluyente, donde desaparecería la pobreza estigmatizante y la riqueza oprobiosa:

“La lucha de los pueblos siempre ha sido en la defensa de los recursos naturales como es el cobre, el petróleo, el carbón, la sal, las plantas medicinales que hacen rico nuestros territorios. Pero nuestra realidad hoy es desoladora: grandes desplazamientos, asesinatos, masacres, simplemente porque reclamamos el respeto a la diferencia, y las cosas se agravan porque la pelea ahora es con las multinacionales, que quieren seguir robando nuestros recursos y lo más grave es (que lo hacen) con el permiso del Gobierno” (Green, 2010: 320).

Es claro que la forma en que se han administrado los recursos del planeta, hasta el momento, no ha sido la más adecuada ni correcta y por eso ahora se pretende seguir el ejemplo de austeridad de los grupos indígenas. El ex presidente estadounidense Harry Truman, en uno de sus discursos, en 1949, manifestó esa necesidad:

“Yo creo que debemos poner a la disposición de los pueblos pacíficos los beneficios de nuestra acumulación de conocimiento técnico con el propósito de ayudarles a satisfacer sus aspiraciones a una vida mejor (...). Lo que estoy contemplando es un programa de desarrollo basado en los conceptos de una negociación equitativa y democrática. Todos los países, incluido el nuestro, obtendrán un gran provecho de un programa constructivo que permitirá utilizar mejor los recursos humanos y naturales del planeta (...). Una mayor producción es la clave para la prosperidad y la paz. Y la clave para una mayor producción es una aplicación más extensa y más vigorosa del conocimiento técnico y de la ciencia moderna” (Viola, 2000: 14).

Han pasado casi setenta años y el discurso del presidente estadounidense se ha convertido en un vacío enunciado retórico, porque la realidad del desarrollo mundial ha

sido contraria al contenido discursivo. La opresión y exclusión de los pueblos y culturas diferentes a la occidental capitalista y cristiana ha anulado espacios para el florecimiento de culturas promisorias con visiones cosmológicas acordes con la requerida sostenibilidad y armonía de la naturaleza y sus especies vivientes, entre éstas, la de los humanos.

Por último, debe tenerse en cuenta que no debe repetirse la experiencia del *Protocolo de Kioto*, suscrito en 1997 dentro del marco sobre cambio climático establecido por la ONU en 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro; o la de los *Objetivos del Milenio*, fijados en el año 2000 con plazo hasta 2015 y suscritos por 189 países miembros de la ONU para resolver problemas sociales y humanos graves sobre equidad y justicia social. A pesar de sus buenas intenciones, se han incumplido en su gran mayoría y solo han sido un discurso sin aplicación real. Es imperativo rescatar valores como el ambiente saludable, procesos productivos no contaminantes, paisajes reverdecidos y ríos, mares y océanos descontaminados.

3. Los u'wa: un acercamiento a su hábitat, historia y cultura

Las investigaciones etnohistóricas y etnográficas sobre el pueblo u'wa no son abundantes y no se remontan más allá de los años setenta. Baste decir, a este respecto, que en el *Handbook of South American Indians* (Steward 1946-59) se menciona a los u'wa –con la denominación de “tunebos”, que es la tradicional en la literatura histórica y antropológica– en nueve ocasiones, siete de las cuales se concentran en el volumen dedicado a la antropología física; en el volumen que abordó las culturas andinas, Kroeber (1946: 893) tuvo que limitarse a señalar su pertenencia a la familia lingüística chibcha y sugerir su menor nivel de organización sociopolítica dentro de dicha familia. Fue la antropóloga británica Ann Osborn quien realizó el primer estudio etnográfico serio entre los u'wa, entre 1971 y 1974, dando lugar a diversas publicaciones monográficas. Por su parte, la antropóloga colombiana Ana María Falchetti revisó la documentación conservada en los archivos y rescató la historia u'wa durante la Colonia. A estas dos figuras se suman otros autores, con trabajos de distinta entidad, que, en conjunto, permiten caracterizar razonablemente su cultura y dar prueba de la particularidad del grupo con respecto a las demás colectividades indígenas del país.

El presente capítulo pretende aproximarse a la cultura y la historia u'wa a partir de esos diferentes estudios. Para trazar una idea clara de los principales elementos que caracterizan la comunidad y conseguir una mejor comprensión de los temas tratados, se han organizado las publicaciones sistemáticamente, de forma tal que se han agrupado de acuerdo a los contenidos que cada una de ellas presenta. Así, podrán observarse, en primera instancia, los elementos generales del grupo nativo y, a continuación, se relacionan las características más relevantes de la geográfica del Estado colombiano para, posteriormente, profundizar en las particularidades del territorio u'wa. Luego se describe el mundo virtual –la cosmología y la mitología– que ha diseñado el grupo nativo, mostrando la complejidad de este aspecto. Posteriormente, a partir de la investigación realizada por Ana María Falchetti, se define la situación de la comunidad en la época colonial; este marco histórico constituye un preámbulo a la situación actual del pueblo u'wa, en la que se profundizará específicamente más adelante, en el Capítulo 6. Por último, a partir de los escritos de William Ospina, se identifica el pensamiento u'wa con las ideas más avanzadas del siglo XIX, expuestas por el pensador Friedrich

Hölderlin, relacionadas con la protección de la naturaleza y el manejo del medio ambiente.

3.1. Aspectos generales de los u'wa

Diferentes autores han desarrollado investigaciones sobre la comunidad u'wa, en las cuales se han tratado de forma general los aspectos más relevantes de su cultura. Tal es el caso de Mariano Ortiz Parrado (s.f.)⁶, quien pretende acercar al lector sucintamente a esta colectividad indígena. Para lograr su objetivo, de forma concisa describe el significado de la palabra *u'wa*, los ubica geográficamente, expone el mensaje de la comunidad para el mundo, y describe otros aspectos importantes, como los mitos de creación, conflicto actual, trabajo, educación y cosmovisión, para que quien se interese por este grupo, pueda formarse una amplia idea y sea capaz de diferenciarlo de otras sociedades nativas.

Es claro, entonces, que el primer acercamiento que se tenga hacia esta colectividad debe partir del significado de la palabra *u'wa*, que quiere decir “gente inteligente que sabe hablar” (Ortiz, s.f.: 3). Esperanza Aguablanca y María Eugenia Romero recogen varios etnónimos relativos a los u'wa y sus vecinos:

“Los Tunebo, como se conocen en la literatura histórica y antropológica, se llaman a sí mismo *U'wa* que quiere decir gente, persona indígena. A los no indígenas los llaman *Rioá*. A los Guahibo los conocen como *Wachuá*. Según Rochereau, se llaman ‘*Uua*, gente inteligente y que sabe hablar’ y a los demás los llaman *liwoa*, es decir ‘la gente de los ríos o sea de los llanos’” (Aguablanca y Romero, 1993: 145).

Además de coincidir con Ortiz en la definición del término, Aguablanca y Romero han dado a conocer otros rasgos culturales que esclarecen este tema y, de paso, giran en torno a la distinción entre los dos grandes grupos que conforman la etnia u'wa, para lo cual hacen referencia a investigaciones realizadas por Ann Osborn, donde se tiene en cuenta la familia lingüística a la que pertenecen y los tres dialectos de cada uno. Sin embargo el padre Francisco Arango, por medio de la Prefectura Apostólica de

⁶ El documento elaborado por este autor no tiene fecha de publicación. Puesto que en él se hace referencia a zonas de resguardo en cinco departamentos del país, las cuales fueron adquiridas después de iniciado el conflicto (véase el Capítulo 6), la fecha del documento ha de ser posterior al año 2000.

Arauca, concluye que hay 26 dialectos en la lengua tuneba, algunos de ellos casi extinguidos (Aguablanca y Romero, 1993: 148).

En lo que se refiere al término “tunebo”, un dato de interés es que éste no aparece en documentos que se elaboraron en tiempos de la Conquista, pero sí en la Colonia, lo cual indica que el nombre les fue asignado en épocas tardías. Por un lado, en los entornos de la Sierra Nevada del Cocuy, “tunebo” es sinónimo de indígena y se utiliza, en términos generales, para designar a los nativos de esta área geográfica. Por eso, al preguntársele a los Kubaruwa si se consideran “tunebos”, ellos responden que su autodenominación es “u’wa”, término que los diferencia de los guahibos o los motilones, dos grupos de la zona pero que difieren en lengua, raza y residencia, además de no ingerir el mismo alimento en los rituales y carecer –a su parecer– de conocimiento mítico. De otra parte, por mucho tiempo han sido designados con este nombre por los españoles, ya que existían unos pequeños insectos (*tunábas*) que emitían una tenue luz intermitente; y se consideraba que los u’wa eran como ellos porque vuelan, cantan y bailan en la noche. Estas actividades, al ser percibidas como hechicería y adivinación, realizadas, particularmente, por los chamanes, eran combatidas y castigadas por los españoles.

Existen, sin embargo, otras hipótesis acerca del origen del término “tunebo”. Una de ellas afirma que esta designación proviene de la palabra *tumará*, la cual ha sido producto de la fama que tiene la cultura de ingerir ciertos alimentos crudos. Osborn (1985: 24) piensa que, entre las posibles hipótesis, una de las más válidas es que los mismos indígenas se han llegado a llamar así, con el ánimo de burlarse unos de otros. En este sentido, “tunebo” guarda relación en lengua u’wa con la palabra *tunába*, es decir, los que vuelan por la noche (cantan y bailan).

Una explicación de tipo mitológico ha sido brindada por un miembro de la comunidad, la cual hace referencia a uno de los alimentos que el grupo consume. Este es un tipo de nuez amarga, que por medio de pequeñas cajas colocadas debajo de cortos chorros de agua, donde habita un pez llamado *tunbura*, pierde su sabor amargo. Ese sabor queda depositado en las cajas, en forma de un líquido blanco, que representa el semen masculino. Según el mito, el *tunbura* es fertilizado por la nuez; los indígenas beben ese líquido y consumen ciertos peces pequeños asociados a esa especie animal. De lo anterior, los indígenas expresan que los grupos están compuestos por lo que

comen, y como este es un mito con una fuerte carga cultural que hace referencia a la fertilidad y a su origen, insinúan, de esta forma, la ignorancia de otras culturas (Osborn, 1985: 24-25).

Los grupos que conforman al pueblo u'wa pueden recibir varios nombres; sin embargo, a nivel ceremonial las designaciones son las mismas siempre. Por lo general, los nombres están asociados con animales y, particularmente, con pájaros. Esta asociación no siempre tiene una implicación totémica, más bien se relaciona con el movimiento territorial de los animales y de la gente que se hace llamar de determinada forma. “Para esta gente, hombres y animales se clasifican de la misma manera; son sus hábitos e historia mítica que los distinguen” (Osborn, 1985: 24).

Para entender el origen del pueblo u'wa, se debe tener en cuenta su cosmología, en la cual se encuentran los mundos de arriba, abajo y el centro, y sus respectivos círculos. Esto, a su vez, conduce a la organización social de la comunidad, donde algunos clanes son de origen masculino y otros femeninos, y de esta división surgen las uniones matrimoniales propias de la comunidad. A continuación se aporta un dato relevante sobre el origen de esta colectividad:

“Cuenta la tradición que los U'wa, es decir, la gente, fueron sembrados en pozos de agua, las lagunas que se ubican alrededor de la Sierra Nevada del Cocuy, por Ruruna, deidad chamánica masculina del mundo de arriba, quien obedecía el pensamiento de *Sira*, el Padre Creador; se dice que siete parejas salieron de las lagunas por el Oriente y empezaron a poblar el Occidente, siempre en torno a la Sierra Nevada. Estas siete parejas se convirtieron posteriormente en siete piedras o menhires que sostienen el mundo y aún hoy en día se conservan en su territorio ancestral” (Eraso, 1997: 25-26).

Por su parte, Ann Osborn (1985), ha indagado sobre los aspectos sociales más relevantes de la cultura u'wa en su libro “El vuelo de las Tijeretas”. Este texto es uno de los documentos contemporáneos más importantes que se han escrito sobre el grupo; cualquier acercamiento teórico a la comunidad hace obligatoria su lectura.

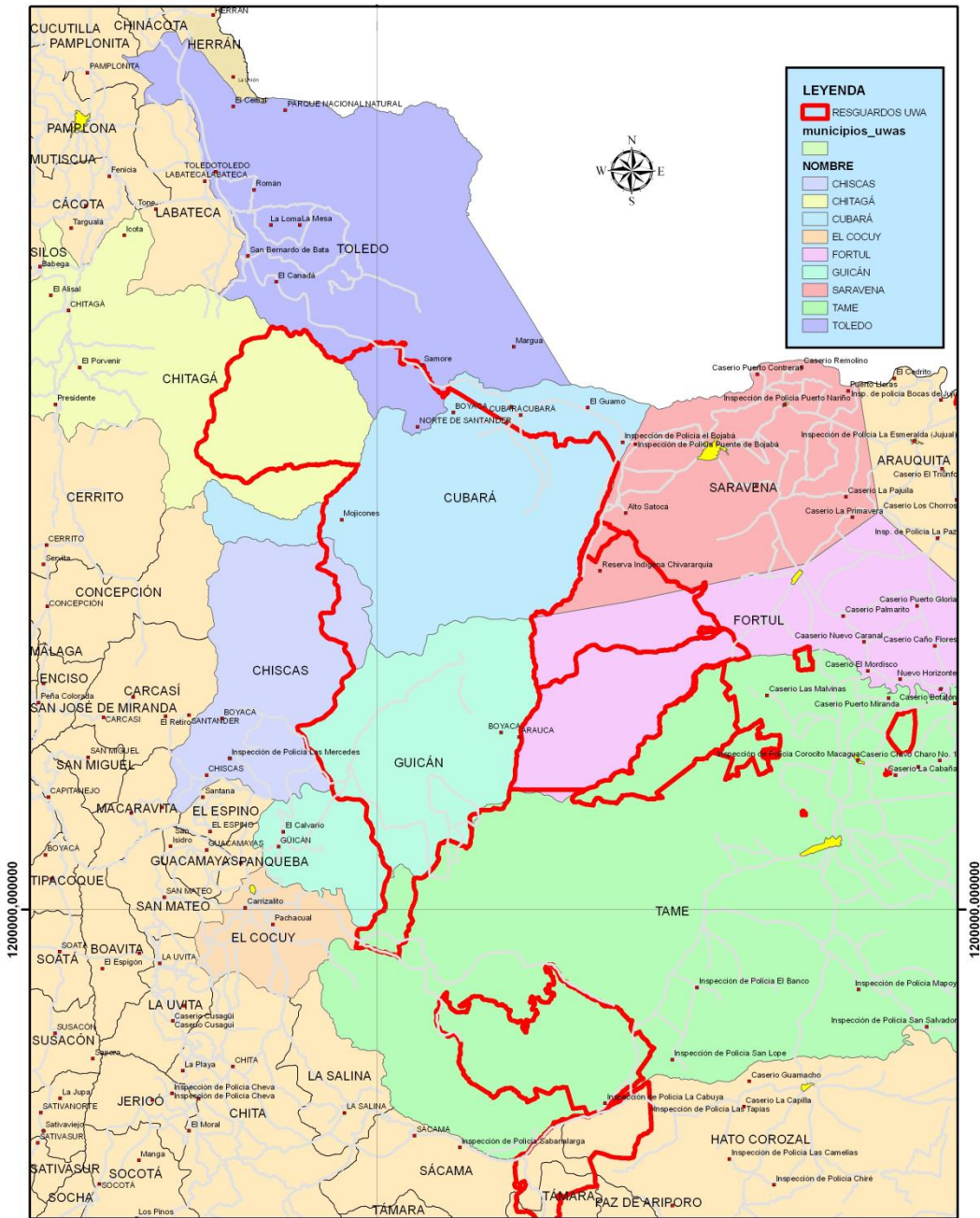
De esa investigación concluye que los u'wa se identifican con el águila tijereta, científicamente conocida como *Elanoides forficatus*, un ave que en Colombia se encuentra en climas cálidos, principalmente en los bosques próximos a la desembocadura de los grandes ríos. Por lo general, se ven grandes bandadas atravesando

los pasos de las cordilleras. Se considera que pueden ser pájaros migratorios del sur de Estados Unidos que se desplazan hasta el norte de Argentina (Osborn, 1985: 17).

En cuanto a su lengua, los u'wa derivan su dialecto de la macrofamilia lingüística chibcha, al igual que los kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta o los warao de las llanuras venezolanas. Sin embargo, su posición geográfica es intermedia, dado que están entre los grupos de habla chibcha del altiplano Cundiboyacense y los de los Llanos Orientales; es por eso que tienen similitudes con unos y con otros. En conclusión, la comunidad vive al nororiente de Colombia, tiene como lengua el u'wajka (alma de la gente), la cual posee tres formas dialectales: Cobaría, Barronegro y Aguablanca.

Sus territorios, antiguamente, eran mucho más extensos, pero con el tiempo han disminuido, siendo los sitios ancestrales los más afectados. Estos se extendían desde Legía, hasta la cuenca del Chicamocha, pasaban por Bucaramanga, continuaban hasta la sierra de Mérida en Venezuela y terminaban en el páramo de Pisba. En el momento de la investigación que llevó a cabo Ortiz –después de 2000–, la comunidad u'wa contaba con aproximadamente cuatro mil habitantes, distribuidos en los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare (Ortiz, s.f.: 4). El Mapa 2 detalla los municipios en los cuales se localizan los actuales resguardos u'wa.

MAPA 2: MUNICIPIOS CON RESGUARDOS INDÍGENAS U'WA



Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia

Los u'wa se han dado a conocer en el mundo entero por su incansable lucha en defensa de la naturaleza. La inflexibilidad de sus decisiones y el no aceptar que los recursos naturales sean vistos como una mercancía ni sean comercializados, ha hecho que el mensaje y pensamiento indígenas trasciendan las fronteras del país. Se considera que “A la comunidad U'wa el título de Guardianes de la Naturaleza se les ajusta a su vivencia, porque ellos mantienen una comunicación estrecha con sus montes, valles, parajes, árboles, animales y rincones de todos los colores del verde que van más allá de toda comprensión y por esto a la cultura occidental se le dificulta entender su relación hombre-naturaleza-vida” (Ortiz, s.f.: 4-5).

Desde 1992, los u'wa han venido luchando con el Estado colombiano y las transnacionales petroleras, con el fin de defender su territorialidad, su cultura y su dignidad ante el etnocidio al cual han sido expuestos, por la defensa del patrimonio ambiental y sociocultural que por siglos han preservado. En este sentido, los dirigentes de la comunidad afirman que:

“Los U'wa recibieron la naturaleza para administrarla con inteligencia y disfrutarla con reverencia sin sentirse al margen de ella, siendo parte de ella, porque está contenida de secretos y poderes, de deidades presentes vestidas de piedra, montaña, árbol, río, amanecer, sólo espera que el hombre esté ahí, desgranando la vida, aportando vibraciones que ha adquirido en su larga tradición histórica” (Ortiz, s.f.: 3).

Este grupo ha recibido la naturaleza para administrarla con inteligencia y disfrutarla con respeto sin sentirse al margen de ella. El medio ambiente está habitado por infinidad de deidades que se encuentran vestidas de piedra, montaña, árbol, estrella, río, amanecer, etc, y solo espera que el hombre aporte sus vibraciones para lograr el equilibrio que mantenga la armonía del planeta. Los conocimientos y vivencias de la comunidad están integrados con la naturaleza, ella es madre y maestra, a la vez; la naturaleza es cultura. Es por eso, que se hace necesario, apoyar los espacios de reflexión sobre las variadas interrelaciones que se establecen en y entre los diferentes grupos y el ambiente natural en el cual se desarrollan.

Para los u'wa, la tierra es su madre y por eso no quieren ni pueden venderla, el hombre blanco no acepta esta decisión, y por eso ellos se preguntan si él sería capaz de vender a su propia madre. Los indígenas desconfían del hombre blanco, *reowa*⁷, dicen que éste utiliza la mentira y disfruta haciéndolo; mata a su descendencia negándole la oportunidad de ver el sol, de respirar, de crecer, de vivir (Ortiz, s.f.: 6). Ellos han crecido respetando lo vivo y lo inanimado, lo conocido y lo desconocido; las leyes del hombre blanco están escritas en papel y han sido dictadas por hombres, las leyes u'wa han sido dictadas por *Sira*, su dios, y están escritas en cada uno de sus corazones. Su misión es narrar la ley, cantarla y cumplirla para así sostener el equilibrio del universo.

En este sentido, el mensaje u'wa es apocalíptico. No se puede cortar el árbol sin que mueran también sus hojas, no se pueden arrojar piedras sin romper la quietud y el equilibrio del agua. Cuando el hombre blanco invade sus sitios sagrados, el fin de la comunidad se acerca, pero también el de la humanidad. “Siempre que el hombre actúe con mala intención, tarde o temprano tendrá que beber el veneno de su propia hiel” (Ortiz, s.f.: 7).

En medio de la preocupación de los indígenas también está la situación futura del hombre blanco. Ellos seguirán su camino, como las aves hacen sus largos viajes sin nada auestas, no guardarán rencor contra el *reowa* porque también es su hermano, pero se preguntan, qué será de la vida de los niños blancos, sin aire que produzcan las montañas, sin el agua pura de los ríos necesaria para poder vivir. Cuando se extingue una especie, el hombre se acerca a su propia extinción, cuando una tribu indígena desaparece, es parte de la humanidad la que efectúa un viaje sin retorno.

Cada vez que deja de existir una especie, el hombre reduce la vida y empieza la lucha por la sobrevivencia:

“Cuando él haya exterminado la última tribu del planeta, antes de empezar a contar sus genocidios, le será más fácil empezar a contar sus últimos días, cuando estos tiempos se avecinen, los vientres de hijas no parirán fruto alguno, y

⁷ El término *reowa* es utilizado por los U'wa de dos formas: por un lado, en masculino, para referirse al hombre occidental, aunque en este caso algunos autores también hacen referencia al término *riowa* o *rioá* (véase, por ejemplo, Headland 1997); y por otro, en femenino como rito de purificación que se lleva a cabo cuando el indígena, después de estar en contacto con la ciudad y para no “contaminar” su entorno natural, debe limpiarse a través de un ayuno.

en sus cada vez más cortas vidas el espíritu de sus hijos no conocerán sosiego cuando llegue el tiempo en que los indios se queden sin tierra, también los árboles se quedarán sin hojas, entonces la humanidad se preguntará ¿por qué?...y sólo muy pocos comprenderán que todo el principio tienen su fin y todo fin su principio, porque en la vida no hay nada suelto, nada que no esté atado a las leyes de la existencia” (Ortiz, s.f.: 7).

Para tratar de evitar este tipo de catástrofes, las diferentes comunidades u’wa conservan un conocimiento sistematizado de los componentes de la naturaleza, este saber sirve para organizar las actividades agrícolas, ganaderas, de cacería y de pesca, entre otras. Se rigen por una serie de indicadores naturales que guían muchas de sus actividades y su vida en general. Uno de ellos son las aves, que indican la llegada de las lluvias, los periodos buenos o malos para cultivar, o las épocas propicias para cazar o pescar. “Los U’wa no solo han aprendido a convivir en armonía con la naturaleza, sino que también han asumido una actitud de investigación científica, tratando de establecer un ordenamiento lógico de sus componentes a través de categorías” (Ortiz, s.f.: 21).

El conocimiento u’wa es religioso, místico y poético, todas las prácticas cotidianas y rituales se hacen con el objeto de cuidar la tierra que les ha dado el padre del cielo eterno *Sira* y *Raira*, la madre celestial. Las actividades culturales que realizan constantemente, mantienen la armonía entre la selva, la huerta, los hombres y los espíritus, y reflejan los actos de los antepasados y de los dioses. La riqueza de sus cantos y sus poesías se remonta a la génesis del universo y es por eso, que la tradición oral u’wa es el principal elemento de aprendizaje de la cultura. Ellos han sabido interpretar los cambios derivados de la conquista española, la época colonial y la vida republicana de Colombia, hechos que tienen un común denominador: la ambición de *reowa* por poseer toda la riqueza del mundo.

Los hombres del maíz, así como se hacen llamar los u’wa, son el soporte del proceso cosmogónico, y tienen como responsabilidad celebrar constantes ofrendas a la tierra para evitar su muerte y la de todos los humanos. El territorio de esta cultura es uno de los últimos ecosistemas importantes que aún se conservan y que representa el 8% de todos los bosques andinos y sub-andinos y páramos húmedos a nivel nacional. Su pensamiento hace recordar, que el eje de la biodiversidad es la cultura, que se traduce en identidad, territorialidad, memoria y ante todo, en valores éticos y estéticos.

Las tradiciones y costumbres que brindan cohesión espiritual y social al grupo están dirigidas por los *werjayas*. Ellos llevan a cabo los ritos de iniciación de los niños u'wa, es decir, el bautizo, el otorgamiento de la sal y los alimentos, el *aya* y la *cócora*, este último, realizado exclusivamente a las niñas cuando entran en la adolescencia. Entre otros ritos donde se hace fundamental la figura de los *werjayas*, se encuentran el *Akaya*, por medio del cual se rinde respeto a las siembras, asegurando abundantes cosechas y buenos frutos en el futuro; o la purificación del *yopo* y del *cuesco*, con fines medicinales, encaminados a curar fiebres, diarreas y otras dolencias menores. En este sentido afirman, que a pesar de que la colonización acabó con el 70% de sus botiquines naturales, aún les quedan plantas y hierbas con las cuales pueden curarse y a las que les hacen determinadas consultas. Los sitios de donde extraen sus medicinas se denominan centros de salud tradicional (Ortiz, s.f.: 28).

La complejidad del pensamiento u'wa, visible en sus ritos de iniciación, sus ofrendas a la tierra, sus cantos a la vida y a todo lo que los rodea, ha tenido como base la organización social y política que los ha regido a lo largo del tiempo, dado que, a partir de esta, se ha producido una especialización en las diferentes labores, que con el tiempo han logrado establecer un orden que se mantiene hasta el presente.

Antiguamente, se hallaban subdivididos en ocho clanes ubicados alrededor de la Sierra Nevada del Cocuy, a través de los diferentes pisos térmicos; estos grupos, nacidos de las lagunas sagradas, mantenían relaciones de intercambio matrimonial entre sí. Hoy, con el proceso colonizador, algunas agrupaciones se han visto reducidas a pequeñas extensiones de tierra, provocando ciertos cambios de tipo social y político, como la predominancia de los matrimonios endogámicos. Otros clanes, como los Bethuwa del Sarare, los Rubalisraya de Güicán y los Shimuwa de Santander, han desaparecido definitivamente (Ortiz, s.f.: 15-16).

En lo referente al tema educativo, prevalece la relación entre el hombre y la naturaleza: en la naturaleza se encuentran las leyes y normas que forman la cosmovisión indígena, también está presente las matemáticas, y en el hombre está el lenguaje, elemento fundamental que le permite la comunicación constante con su medio natural que se puede manifestar en el trabajo, el arte o en cualquier otra actividad. Las áreas en las cuales se forman a los niños desde temprana edad hacen referencia al orden,

mecanismos de producción y desarrollo según niveles de necesidades y resolución de problemas comunitarios (Ortiz, s.f.: 34).

Aguablanca y Romero, a partir de la localización geográfica del grupo nativo y su demografía, han realizado un estudio exhaustivo del número de familias por comunidad y el número de habitantes por hectárea. También denunciaron la situación de desplazamiento que ha venido soportando la cultura por parte de los colonos de la región. Los lugares y rutas que mencionan, tienen la particularidad de ser designados con los nombres que los indígenas les han puesto y dan a conocer la forma como se ha efectuado el poblamiento de la zona.

Es interesante la relación que existe entre el territorio, el sistema productivo y las demás actividades sociales y rituales. Un claro ejemplo de ello es el calendario que han desarrollado, donde los meses tienen una estrecha relación con la luna. A partir de esto, se desarrollan ciertas tareas, al tiempo que se identifica el florecimiento de algunas plantas y la abundancia o escasez de varias especies de animales. Todo lo anterior se encuentra relacionado con los diferentes pisos térmicos que ofrece la Sierra Nevada del Cocuy, lo cual es determinante, en gran medida, en la realización de sus actividades.

En lo que se refiere a la información de tipo etnohistórico, existen datos extraídos de la obra del padre Juan Rivero, “Historia de las Misiones de Casanare y los ríos Orinoco y Meta”, escrita en 1739, donde se logra visualizar la actitud negativa y preventiva de los misioneros hacia los indígenas:

“Muy al contrario de este gentío es la nación Tuneba: no se ha conocido gente más bruta ni más inmunda, ni más amiga de cuentos y de chismes en toda esta serranía; tanto hombres como mujeres andan vestidos con unos sacos de lienzo basto y sucio...de nada cuidan menos que de peinarse, por lo cual tienen los cabellos desgredados y llenos de unos animalillos inmundos; no hay plato más regalado para ellos que un pedazo de carne podrida. Adolecen de cierta enfermedad sucia y asquerosa llamada carate y es a manera de lepra...si una mujer no tiene carate, nadie la quiere por mujer” (Aguablanca y Romero, 1993: 157).

Las injusticias contra la comunidad u’wa no solo se han producido en la Colonia, en la época actual ha sido el Estado colombiano quien se ha encargado de violar los derechos de la colectividad. Como ejemplo de ello, en la década del setenta el grupo indígena manifestó su descontento porque sus reclamos no eran atendidos, y las

peticiones en lo que se refería al tema de salud y sobre las necesidades básicas insatisfechas no se tramitaban de forma adecuada. Por tal motivo, se creó una comisión de 16 miembros nativos que viajaron en 1976, con el fin de sostener diálogos con el entonces presidente Alfonso López Michelsen (Aguablanca y Romero, 1993: 179).

En esta década, las denuncias giraron en torno al desplazamiento ejercido por la colonización espontánea y por los grupos guerrilleros, como uno de los principales factores que los ha afectado, dado que este hecho los ha aislado y dividido entre sí. Todo esto fomentó en la sociedad u'wa nuevas formas de pensar y de vivir, y ha prevalecido la creencia de que el hombre blanco ha llegado a la zona con hambre de riqueza, con deseos de violar a las mujeres y apropiarse de todo lo que encuentra a su alrededor. Su llegada ha traído enfermedades que allí no existían, entre ellas la viruela, y con esta la muerte de las personas más débiles, es decir, los niños y los ancianos, estos últimos, llevándose consigo toda la sabiduría de los antepasados.

Actualmente los u'wa piensan que el gobierno ha cambiado su forma de pensar y sus ideas son buenas, pero para ser atendidos deben hablar en términos occidentales, hecho que los ha obligado a adaptarse a las formas organizativas que el gobierno considera válidas, aunque no se sientan totalmente capacitados para hacerlo, dado que sus miembros no están preparados para desarrollar tareas de esta naturaleza. Es por eso, que lo único que piden es "...el reconocimiento y aceptación como etnia y cultura diferenciada y una posición dentro de la sociedad colombiana acorde con su valor filosófico y cultural que le permita evitar su extinción física y cultural" (Aguablanca y Romero, 1993: 181).

Otro aspecto de gran importancia de esta cultura es su producción material, en la que puede destacarse la construcción de sus viviendas y la elaboración de diferentes productos, como mochilas, cera, miel de abejas y canastos. Sin embargo, a lo largo de su historia, algunas manifestaciones artísticas han logrado reconocimiento, como el desarrollo de la cerámica que, a su vez, ha sido de enorme utilidad a la hora de resolver varias de las inquietudes que han surgido a partir de las investigaciones de otras disciplinas como la arqueología. En este sentido, un estudio relevante ha sido el publicado por Ann Osborn (1979), el cual realiza un análisis sobre la cerámica de los u'wa para responder las incógnitas planteadas por los arqueólogos que han efectuado investigaciones en zonas cercanas al territorio de la comunidad. Las preguntas más

frecuentes que se producen están relacionadas con la utilización de dichas cerámicas, la cantidad fabricada por una determinada comunidad y la densidad de población en relación con esa cantidad.

Es bien sabido, que la gran mayoría de las culturas indígenas, en los últimos tiempos han empezado a reemplazar sus vasijas tradicionales por utensilios de fabricación y materiales modernos, como ollas de aluminio, botellas de vidrio o plástico. Sin embargo, los indígenas u'wa de la Cordillera Oriental boyacense, se han mantenido firmes en ese rechazo, principalmente los miembros más tradicionalistas, lo cual aumenta el valor a la investigación de Osborn, centrada en el clan Cobaría.

Osborn ha estudiado esta manifestación artística de la cultura desde dos puntos de vista: el primero, se dirige a describir las técnicas de alfarería que se aplican en la elaboración de los recipientes, así como la recolección del material que se utiliza, el proceso de elaboración, la duración del trabajo, el tiempo de cocción y una descripción de las vasijas y su decoración. El segundo, va dirigido, por un lado, al uso, gasto y disposición de las vasijas en relación con la residencia y, por otro, al cálculo de los gastos totales, disposición de las vasijas rotas, creencias, simbolismo y mitología.

El proceso de elaboración de un recipiente de cerámica está compuesto por una serie de pasos que deben tenerse en cuenta. Uno de gran importancia se refiere a los depósitos de donde se extrae la materia prima para la fabricación de las vasijas. Se comenta que en la zona son abundantes, a pesar de ser pequeños, y las mujeres, que son parte fundamental en esta labor, cambian constantemente de sitios de extracción en función de la facilidad de acceso al material, aparte de tener en cuenta la pureza, humedad y color de la greda. Sin embargo, los derechos sobre los depósitos están bien determinados:

“Si se encuentran en tierras de propiedad de la mujer, son para el uso de ella y de sus hermanas; si están en las del marido, pertenecen a su cuñada. Cualquiera mujer puede explotar los depósitos existentes en tierras que estén en descanso, pero la que tenga la casa más próxima tiene derechos preferenciales, los cuales son respetados por los propietarios de la tierra. Las hermanas se comunican cuando van a recoger greda y casi siempre lo hacen juntas” (Osborn, 1979: 9).

La labor de la alfarería es minuciosa y en algunas fases se hace agotadora físicamente. Cuando se amasa la greda se deben sacar todas las impurezas que esta trae

y según la cantidad de material que se amase, por lo general, tres o cuatro libras de greda pesada, deben emplearse una, dos o más horas en este proceso, lo cual produce fuertes dolores de espalda. Posteriormente, se lleva a cabo la manufacturación de la vasija, basada en una técnica de enrollamiento, que consiste en superponer rollos de arcilla que le dan forma al recipiente. Las mujeres siempre tienen cerca un calabazo con agua para remojar constantemente la greda y poder sacar las impurezas que vayan saliendo en el proceso.

Una vez terminada la manufactura de la vasija, debe secarse, para lo cual se coloca en tablas dentro de la casa, cerca del fogón donde se preparan los alimentos, para que el humo se impregne y le dé mayor resistencia. El tiempo ideal de secado es de un año, pero casi nunca se utiliza todo este tiempo; este depende de la necesidad que se tenga de utilizar un recipiente, como por ejemplo, una ceremonia para la chicha. Aquí, el secado dura máximo dos días. Por último, debe realizarse la cocción de la vasija, lo cual dura alrededor de media hora. Para hacerse una idea, una mujer puede elaborar un lote de entre diez y dieciséis recipientes de diferentes tamaños, en cuatro o cinco días aproximadamente (Osborn, 1979: 26-27).

En cuanto al tamaño de los recipientes y el uso que le dan a cada uno, se deben tener en cuenta las medidas, el modelo que se aplica a la cerámica y si tiene un tipo de decoración. La investigadora ha indagado acerca de las propiedades químicas y sus porcentajes contenidos en la greda de la región. Así, por ejemplo, ha dado a conocer que la materia prima contiene caolinita, óxido de hierro y cuarzo.

De acuerdo con las creencias u'wa, en la antigüedad solo consumían alimentos crudos, por lo cual, la dieta estaba basada en vegetales y no comían carne. Actualmente, los alimentos se encuentran divididos en tipos de carnes, variedades de pescado y mariscos, legumbres, cereales, huevos, raíces y tubérculos, frutas, azúcares, hojas y flores, variedades de calabazas, hongos y estimulantes medicinales.

Como hecho particular, cuando llega a la comunidad alguna enfermedad, se alimentan de hojas y raíces eliminando la carne y el pescado, descartando los utensilios de cocina que se utilizan regularmente. En los tiempos ceremoniales, acostumbran a apagar los fogones, y en el pasado, rompían las ollas para cocinar y así empezaban de nuevo sin peligro a contaminarse.

Osborn (1979: 59-60) señala, sobre la base del contenido de los mitos, que los u'wa creen que en la antigüedad vivían de la misma forma que los animales, es decir, sin fuego y sin alimentos cocinados; la costumbre de que el enfermo coma únicamente alimentos crudos le lleva a concluir que, en el pensamiento u'wa, cocer los alimentos e ingerir carne, puesto que no era la práctica de los ancestros, implica correr riesgos que se traducirían en enfermedades. Es relevante dejar claro que lo relacionado con la tarea de cocinar y los recipientes utilizados para este fin tienen un carácter femenino, al igual que la alfarería, que es una labor exclusiva de la mujer.

Las investigaciones arqueológicas han tratado de esclarecer, por un lado, los sitios ancestrales donde se llevaban a cabo los diferentes rituales, a partir de algunos textos Kubaruwa (Cobaría), es decir, mitos cantados por los indígenas. De otra parte, se ha efectuado un reconocimiento para ubicar los sitios de vivienda antiguos, recolectando, a su vez, material cultural para ampliar el conocimiento que se tiene del pueblo u'wa. De esta forma, se ha planteado la tarea de identificar los grupos del pasado que han conformado esta cultura, de acuerdo a documentos y haciendo uso de la memoria de los nativos. La metodología que ha utilizado combina los datos arqueológicos con los antropológicos, teniendo como punto de referencia la información recogida dentro del clan Cobaría, con el cual se interpretan hechos del pasado, e inclusive del presente, que generan alguna duda.

Es importante tener en cuenta que al desarrollar este ejercicio con la metodología empleada, se ha podido correr el riesgo de haber hecho malas interpretaciones por los enormes espacios de tiempo y la flexibilidad del ajuste cultural a distintas influencias, produciendo cambios socio-culturales. Sin embargo, se han podido detectar estructuras de pensamiento que han sido resistentes al tiempo, lo cual es evidente cuando en el cuerpo de los mitos se reconocen rituales y relaciones sociales que siguen vigentes en la actualidad.

De esta forma, el punto de partida de estos análisis ha sido el tiempo anterior y posterior a la Conquista que, sin duda, fue una época de muchos cambios en la cultura. Como es lógico, para entender la mitología u'wa, Osborn ha tomado como base investigaciones pasadas y se ha valido de la observación participante para lograr absorber los datos más importantes resultantes de la tradición oral, la descripción de mitos y los comentarios hechos por sus creadores.

De otra parte, la investigadora ha realizado una introducción de los grupos u'wa que figuran en los mitos. Aunque muchos de ellos se han extinguido, se relacionan 16 nombres entre los cuales también se encuentran algunas parejas. Analizando los mitos, la investigadora concluye que formalmente han existido ocho grupos, los cuales se han dividido en dos. Los grupos formales han tenido su residencia alrededor de la Sierra Nevada del Cocuy y los grupos relacionados han formado una conexión entre los u'wa y otras tribus vecinas (Osborn, 1985: 27).

Para una mejor comprensión de estos temas, se hace relevante tener en cuenta los aspectos fundamentales de la organización social, ya que los textos mitológicos tratan sobre grupos de gente que han sido documentados en secciones anteriores. En este sentido, se pueden advertir diferentes clases de composición, por ejemplo, no solo hay linajes unilineales, esto, con el fin de distribuir el poder entre los diferentes grupos y dentro de cada uno.

En cuanto a la residencia, los clanes u'wa residen en diferentes zonas altitudinales y los movimientos por tierras altas y bajas se deben más a razones ceremoniales que materiales. El principal factor que determina los sitios de vivienda, es que el año se encuentra dividido en cuatro estaciones, cada una con su sitio específico, lo que hace que los grupos en la antigüedad se repartieran por zonas, una prueba más para demostrar que en ningún momento han sido nómadas, como lo pensaban los conquistadores. Otro aspecto que también se ha tenido en cuenta a la hora de ubicar a las familias en determinados sitios, es por motivos políticos, dado que los diferentes grupos tenían que depender de que dominaran una zona principal, para obtener los bienes necesarios que les permitieran llevar a cabo sus ritos. Así, los grupos tenían acceso a sitios ceremoniales que pertenecían a otros, produciéndose de esta forma una especie de intercambio ceremonial. Estos lugares sagrados estaban señalados por menhires (Osborn, 1985: 32).

La combinación del estudio de la mitología con los datos aportados por la arqueología, ha permitido hacer la transcripción de una parte del mito llamado Aya, que incluye secuencias de nombres geográficos. El producto de este ejercicio ha sido cotejado con los chamanes y otros indígenas que habitan las tierras Kubaruwas, al tiempo que Osborn se ha desplazado a las zonas mencionadas en el texto para hacer un

reconocimiento de las evidencias arqueológicas y así ubicar las residencias de los antepasados u'wa.

Por lo que respecta al mito Aya, este significa Mandamiento y se encuentra dividido en cuatro partes, de las cuales Las Tijeretas es la cuarta. Los protagonistas son tres clases de tijeretas llamadas U'wa, Kwenotha y Erata, los tres, de sexo masculino. Los informantes insisten en que hay un cuarto pájaro de sexo femenino llamado Bok'showa, pero este no aparece en los cantos porque no puede volar más alto que los árboles. En el texto mitológico se describen varias deidades y el parentesco existente entre ellas; también se mencionan los elementos valiosos para ellos, entre los cuales se cuentan coronas, collares y el yopo. De otra parte, el esquema del escrito, consiste en una secuencia de nombres divididos por un estribillo; son tres partes las que lo componen y se piensa que cada una de ellas corresponde al territorio de un grupo, lo cual se hace importante a la hora de identificar los grupos que forman la tribu y aquellos que se encuentran relacionados.

En conclusión, “El vuelo de las tijeretas” es la parte de un mito principal, y su estudio se ha hecho indispensable porque es clave para entender muchos aspectos de la cultura y, por medio de él se pueden interpretar otros mitos. Analizando las tijeretas, se piensa que “...estas aves representan shamanes vestidos de pájaros, pero esto no implica un pensamiento totémico; toman una forma que les permite cubrir grandes distancias para documentar su universo, lo conocido y lo imaginado. El vehículo que hace el vuelo posible, es el yopo, droga que todavía es ingerida y también suministrada por shamanes” (Osborn, 1985: 135).

3.2. Geografía del territorio u'wa

Antes de profundizar en la topografía del territorio u'wa, es oportuno contextualizar dicha zona en el territorio nacional, para lo cual se relacionarán, como primera medida, los principales elementos que caracterizan la geografía del Estado colombiano.

Como es sabido, Colombia está situado en la parte septentrional y noroeste de América del Sur, su extensión es de 1.138.914 kilómetros cuadrados, divididos en 862 municipios (Guhl, 1967: 16); es el cuarto país más grande de este subcontinente,

después de Brasil, Argentina y Perú. Tiene 2.900 kilómetros de costa, de los cuales 1.600 Km. pertenecen al Mar Caribe y 1.300 Km. al Océano Pacífico. El Estado colombiano se encuentra dividido en cinco regiones naturales continentales y una región natural insular, las cuales se diferencian entre sí, por sus características heterogéneas en cuanto a relieve, clima, vegetación y clases de suelo. Estas son:

- Región Amazónica: Parte sur de la región oriental de Colombia que se caracteriza por ser una región plana de baja altitud. Es también conocida como la región de la Selva Amazónica de Colombia.
- Región Andina: Corresponde a la parte colombiana de los Andes, incluyendo los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena.
- Región Caribe: Comprende las llanuras costeras del Caribe colombiano y los grupos montañosos de la región que no pertenecen a la cordillera de los Andes como los Montes de María y la Sierra Nevada de Santa Marta.
- Región Pacífica: Corresponde a las llanuras costeras del Pacífico colombiano y los grupos montañosos de la región que no pertenecen al sistema montañoso de los Andes, en particular la Serranía del Baudó.
- Región Orinoquía: Norte de la región oriental de Colombia, región plana de baja altitud. Puede denominarse como la cuenca plana del Río Orinoco o como la región de Llanos Orientales de Colombia.
- Región Insular: Está compuesta por el Archipiélago de San Andrés y Providencia en el Mar Caribe occidental y las Islas de Malpelo, Gorgona y Gorgonilla en el Océano Pacífico.

A su vez, el territorio colombiano se encuentra dividido en dos grandes regiones por su relieve: el occidente dominado por los Andes y sus estribaciones en las llanuras costeras del Pacífico y el Caribe, y el oriente dominado por las planicies de los ríos Orinoco y Amazonas. La Cordillera de los Andes tiene su final en la parte más septentrional de Suramérica, es decir, Colombia, donde se ramifica en tres vertientes:

“Los Andes, al entrar a Colombia, no han perdido nada de volumen, y poco en altura, pero pierden su unidad estructural por la típica trifurcación de los Andes Colombianos en las cordilleras Occidental, Central y Oriental” (Guhl, 1967: 17).

Esta división de los Andes colombianos se origina en el Nudo de los Pastos y el Nudo de Almaguer o Macizo Colombiano. El Macizo Colombiano es conocido también como la Estrella Fluvial de Colombia porque es en ese punto donde nacen importantes ríos que desembocan en el Océano Pacífico como el río Patía; en el mar Caribe, como los ríos Cauca y Magdalena; y en el río Amazonas, como el río Caquetá.

La Cordillera Oriental se divide, a su vez, cerca de la frontera con Venezuela en dos ramales: la Serranía de los Motilones que marca la frontera con Venezuela, entre los departamentos de El Cesar y Guajira y el estado venezolano de Zulia, y la cordillera de Mérida que penetra en territorio venezolano. En esta Cordillera se localiza el Altiplano Cundiboyacense, con altitudes superiores a 2.500 metros sobre el nivel del mar y el espacio natural del Distrito Capital de Bogotá y la ciudad de Tunja. Fue allí donde se estableció una de las culturas más importantes de Suramérica, los Muiscas.

Por su parte, “Las cordilleras Occidental y Central corresponden al tumor formado por la invasión inicial del magma durante el mesozoico” (Guhl, 1967: 29-30). En su origen se dividen los dos valles más grandes de Colombia: el Valle del Río Cauca y el Valle del Río Magdalena. De otra parte, en la Cordillera Central se encuentran los nevados del Ruiz, de Santa Isabel y del Tolima. Las tres cordilleras con sus valles forman la Región de los Andes de Colombia y concentran la mayor parte de la población del país.

Las cumbres más altas de Colombia son los picos Colón y Bolívar localizados en la Sierra Nevada de Santa Marta y que tienen una altura de 5.775 metros sobre el nivel del mar. Entre los principales sistemas montañosos costeros se encuentran la antes mencionada Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María y la Serranía del Baudó. Con respecto a volcanes y zonas sísmicas, el territorio colombiano hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo cual hace que su sistema montañoso y algunas islas sean de origen volcánico.

Entre los volcanes más importantes se pueden destacar los volcanes Chiles, Galeras, Puracé y Coconutos. Los nevados son otra característica fundamental del

relieve nacional, muchos de ellos con nieves y hielos perpetuos de origen glaciar, aunque lamentablemente, en la actualidad, a raíz del calentamiento global, se encuentran en proceso de deshielo. Son importantes los nevados de Cumbal, del Huila, del Tolima, de Santa Isabel y del Ruiz, principalmente. Es importante mencionar en la zona oriental del país la Sierra de la Macarena, localizada en el departamento del Meta. Por otro lado, en el departamento del Vichada pueden apreciarse formaciones del escudo de las Guayanas.

Del clima se puede decir, que Colombia está ubicado sobre la línea ecuatorial, con un 90% de su territorio al norte de la misma y el departamento del Amazonas, al sur del país, por debajo de ésta; lo cual le confiere una variedad topográfica que abarca desde selvas húmedas y llanuras tropicales, hasta páramos y nieves perpetuas. Por lo tanto, las variaciones climáticas no obedecen a estaciones sino a la altitud, donde la temperatura desciende aproximadamente 6° C. por cada 1.000 metros que ascienda. Al nivel del mar, la temperatura está alrededor de los 30° C.

Si bien el territorio está completamente en la zona intertropical, los climas de las diferentes regiones varían considerablemente gracias a las diferentes altitudes que pueden ir desde el nivel del mar hasta los casi 6.000 metros de altitud. “El muy variado clima del país está determinado por el relieve y los fenómenos de sequía, humedad, calor, frío y viento; en unión con el suelo producen la vegetación, expresión típica del clima de cada región” (Guhl, 1967: 65).

Los climas colombianos se pueden clasificar de la siguiente manera: tropical húmedo, en el área de Chocó; clima seco, relacionado con los desiertos, el cual se da en zonas como la península de La Guajira; clima templado, generalmente húmedo en invierno y seco en verano, como en la ciudad de Medellín; clima de montaña, que varía según la zona, por ejemplo, puede ser frío como en la ciudad de Bogotá o páramo (superior a 3.000 metros de altitud), donde se encuentran nieves y hielos permanentes como en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Aunque en Colombia no hay estaciones y el clima de cada región se mantiene relativamente estable durante todo el año, se presentan ligeras variaciones según sea la época de temporada seca o de temporada de lluvias. “En los países de la América tropical la baja latitud está compensada por la altura sobre el nivel del mar desde el

punto de vista de las variaciones climáticas. Así que la altitud y la gran variedad ecológica en las áreas interandinas son determinantes para la vida” (Guhl, 1967: 74).

En lo que respecta a su hidrografía, el país está surcado por muchos y caudalosos ríos. Las tres vertientes principales son: Oeste, Norte y Este. La vertiente Oeste es muy estrecha, lo cual no permite la formación de grandes ríos, por lo que solo se pueden destacar el Patía y el San Juan, seguidos del Baudó, Nariño, Micay y Mira. Por su parte, la vertiente Norte está formada principalmente por el río Atrato y el Magdalena que es el más largo y caudaloso del país; también los acompañan los ríos Cauca y Funza, éste último muy reconocido por el Salto de Tequendama. La vertiente Este, se encuentra formada por numerosos ríos como el Arauca, Inírida, Meta, Vichada y Guaviare, los cuales vierten sus aguas en el río Orinoco. También se pueden encontrar por esa zona los ríos Vaupés, Guainía, Apaporis, Negro, Caquetá y Putumayo, tributarios del río Amazonas. Por otro lado, abundan las lagunas, siendo principales la de Fúquene, Tota, La Cocha, Zapatosa, la Ciénaga de Betancí y la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Es importante tener en cuenta, que la zona amazónica también posee una gran riqueza hídrica. Las aguas del Amazonas forman una cuenca de 6.878.761 kilómetros cuadrados compartida con Brasil, Ecuador y Perú, y podría ampliarse su extensión si se incluye la hoya del Orinoco y las Guayanas, territorios que poseen las mismas características del mundo amazónico. William Ospina (2004) hace referencia al gran número de ríos, grandes y pequeños que se encuentran en la zona:

“Incontables arroyos van formando miles de corrientes y éstas centenares de caudales que se vierten en el gran río Amazonas, que arroja al Atlántico en su desembocadura 100.000 metros cúbicos de agua por segundo, y que avanza con sus aguas pardas, que han disuelto barrancos y montañas de un día, hasta trescientos kilómetros mar adentro durante las aguas altas, mientras que en los períodos de estiaje, o de mínimo caudal, puede percibirse el influjo de las mareas oceánicas hasta 700 kilómetros antes de la desembocadura” (Ospina, 2004: 40).

El área geográfica que comprende el territorio del pueblo u’wa (zona de Resguardo y territorio ancestral), se encuentra enmarcado por la Sierra Nevada del Cocuy, con 5.439 metros, la cual está formada por rocas de arenisca que han logrado resistir por mucho tiempo a la erosión (Guhl, 1967: 45). Se caracteriza por poseer pronunciadas variaciones topográficas en distancias muy cortas.

A los 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la zona occidental de la Sierra se encuentran tres importantes valles: Güicán, Cocuy y Chiscas, los cuales están surcados por afluentes que desembocan en el río Chicamocha, al occidente de la zona. “Los U’wa habitan, en la actualidad, la cordillera oriental de los Andes colombianos, en el punto donde ésta comienza a desvanecerse hasta convertirse en las tierras bajas del suroeste de Venezuela, entre los 72°32’ y 72° de longitud oeste y los 7° y 6°30’ de latitud norte” (Osborn, 1995: 21).

Sobre los 3.000 m.s.n.m, se encuentra la zona de páramo, caracterizada por tener una vegetación muy particular, siendo ésta el preámbulo a los picos nevados que alcanzan alturas de hasta 5.600 m.s.n.m:

“Por encima de los 3.000 metros está el páramo con su fauna y flora características. Esta última incluye unos pocos árboles bajos y retorcidos, frailejón y otras plantas adaptadas a las difíciles condiciones climáticas. Los suelos son de turba, saturados de agua y en general inadecuados para la agricultura. La región no es habitada en forma permanente” (Osborn, 1995: 40).

Por su parte, la zona oriental de la Sierra, que comprende una altitud entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m, es de clima templado y por allí cruzan ríos que descienden hacia el piedemonte andino. Por último, la franja que comprende este piedemonte se caracteriza por poseer un bosque tropical, siendo ésta el área intermedia entre las abruptas montañas y las zonas bajas de topografía plana y clima cálido, vecina a los llanos orientales.

El orden de carácter territorial al cual ha estado sujeto el pueblo u’wa, se deriva de principios ancestrales persistentes a través de su historia. Sus territorios localizados alrededor de la Sierra Nevada del Cocuy les han pertenecido desde tiempos remotos:

“El hábitat U’wa está definido por la Sierra Nevada de Chita o Cocuy, que es su centro. La montaña principal llamada *Raiana* y el lago denominado *Bekana* son el centro del mundo. Las rutas de acceso a la Sierra parecen haber sido los pasos de poblamiento y comunicación con el mundo exterior. Estos son: el de Pamplona, o sea el del Sarare; el de Chita, o sea el de Casanare y el del piedemonte de la cordillera Oriental” (Aguablanca y Romero, 1993: 149).

La mitología de su cultura describe cómo los dioses repartían los terrenos entre los distintos grupos de la comunidad. Cada uno de ellos tenía derecho a un territorio dividido en diferentes asentamientos que ocupaban en distintas épocas del año. De la

misma forma, también poseían sitios comunales donde se llevaban a cabo rituales que reunían a los grupos que vivían en zonas más alejadas. “Lo que más han perdido, es territorio ancestral que iba desde Legía, hasta la cuenca del Chicamocha, pasando por Bucaramanga, siguiendo hasta la sierra de Mérida en Venezuela, y el páramo de Pisba” (Ortiz, s.f.: 4).

Actualmente, su territorio comprende una extensa región que abarca los municipios de Cubará y Güicán en el departamento de Boyacá; Concepción y Cerrito en Santander, Toledo y Chitagá en Norte de Santander; Saravena, Fortul, Tame y Arauquita en Arauca; y Sácama en el Casanare (Ortiz, s.f.: 4).

El territorio que se localiza alrededor de la Sierra Nevada del Cocuy es cruzado por una serie de ríos que tienen su origen en las distintas lagunas de la zona de páramo, a más de 3.500 m.s.n.m. Las leyendas predicen, como se ha expuesto anteriormente, que en estas lagunas nacieron sus antepasados, dado que las deidades decidieron dar vida a un hombre y una mujer en cada laguna. Con respecto a las zonas de montaña, parte de los grupos u’wa viven cerca del pueblo de Cobaría, ubicado a 1.300 m.s.n.m., los suelos de la zona montañosa están formados por arena, arcilla y una mezcla de tierra orgánica:

“...su capa vegetal es muy poco profunda y, por ende, inadecuada para fines agrícolas. Los *Kubaruwa* procuran dejar estas áreas bajo la protección permanente del bosque, que les sirve de techo, para evitar su erosión. Allí se aprovisionan de leña, de materiales para la construcción de viviendas y cazan animales, aunque éstos últimos están prácticamente extinguidos” (Osborn, 1995: 37).

En lo que se refiere a la ubicación de los clanes Tegría, Cobaría y Bókota, estos se encuentran asentados en la vertiente nororiental de la Sierra Nevada del Cocuy, en las cuencas del alto río Arauca, el río Cobaría y el río Bojabá, este último conocido también como Cubujón o Cubugón en su parte alta y Báchira en su parte media. Otros clanes del nororiente, conocidos como los Unkasía y Agua Blanca, se encuentran actualmente organizados en familias dispersas, muchas de ellas ocupando zonas aledañas a la cuenca del río Cubujón.

De la misma forma, los grupos del piedemonte y las zonas bajas del oriente, conocidos como San Miguel y Calafita ubicados en la cuenca del río Banadía, han sufrido la misma suerte; también aquellos que ocupaban la parte alta de los ríos Tame y

Macaguane, y los de la cuenca del río Casanare y sus tributarios. Por su parte, otros grupos se extinguieron de forma definitiva, como fue el caso de los Betoyes o Pedrazas quienes estaban ubicados al norte del río Arauca y los Sínsigas cuyo territorio estaba en la vertiente nororiental de la Sierra Nevada, exactamente en la parte alta de la cuenca del río Bojabá.

Los u'wa han sabido a través de los siglos la verdadera extensión de su territorio ancestral. Según la relación que poseen, éste incluía las zonas altas de la vertiente occidental de la Sierra Nevada del Cocuy, incluyendo los ríos cuyas fuentes están en la parte alta de la Sierra Nevada y que descienden hacia el occidente conformando la cuenca del río Nevado, afluente del Chicamocha:

“El territorio que figura en los mitos cantados, que los *Kubaruwa* aseguran fue habitado por los U'wa, llega hasta Táchira en Venezuela; en Colombia incluye a Chinacota, Málaga, Oiba, Shioma (posiblemente la actual Chimá), Bucaramanga, Chiscas, Chita, Salinas de Chita, Güicán y, en el piedemonte oriental, Támara, Tame y Morcote” (Osborn, 1995: 55).

Los antiguos clanes Betabuwa y Ruba, cuyos territorios se encontraban en las zonas de Chiscas y Guicán, respectivamente, con el tiempo perdieron sus tierras. De todos modos, antiguamente los u'wa dominaron un área más extensa que incluía, hacia la parte norte, la cuenca del río Margua, el alto río Arauca, y sus afluentes, especialmente los ríos Chitagá y Valegra, donde en el presente existen importantes asentamientos ancestrales que han sobrevivido a través de los siglos.

3.3. El mundo virtual de los u'wa y la defensa de su territorio

Un elemento de notable importancia e interés del pueblo u'wa es su mundo virtual. Ann Osborn (1995) analizó esta parte de la cultura a través de un viaje a la Sierra Nevada del Cocuy que duró un año (cuatro estaciones). En este lapso de tiempo, los nativos explotan los tres pisos térmicos que componen el nevado y en los cuales celebran sus mitos cantados con una secuencia de gran significado para ellos. Este, al ser un pueblo dedicado exclusivamente a la agricultura, se desplazan constantemente en las tres zonas altitudinales de la Sierra Nevada, y solo en contadas ocasiones explotan algunos recursos del área de los llanos y las tierras altas; que utilizan para recolectar productos específicos y efectuar intercambios.

Las leyendas, extraídas del conocimiento de los *werjayas*, contienen la percepción que los indígenas tienen del universo, y por medio de estas, explican sus actividades, el ciclo de la reproducción humana y el uso de los recursos naturales. A través de la poesía que se encuentra inmersa en sus cantos, esta sociedad busca mantener el equilibrio y la armonía que garantizan el misterio de la vida, la continuidad de las noches y los días.

Según Osborn, para introducir de una forma adecuada al lector en el mundo virtual de los u'wa, se debe abordar el tema desde tres perspectivas. La primera consiste en una descripción del medio físico que habita la colectividad. Se reseñan en su investigación, las etnografías que revisó para ampliar su documentación y los trayectos que tuvo que recorrer para llegar hasta la comunidad Cobaría, clan en el que basó su estudio. A medida que transcurre el recorrido, va describiendo los paisajes, las actividades que allí se realizan y los productos agrícolas típicos de cada zona:

“Para llegar donde los Kubaruwa caminamos desde Güicán por una ruta que cruza el páramo y baja luego por la ladera hasta el pueblo de Cobaría. Esta es una ruta tradicional de los Kubaruwa y de los Kaibaká, a la cual se refieren algunos mitos en los que se cantan los nombres de los lagos, montañas y ríos situados a lo largo de su recorrido. La caminata por esta ruta toma unos cuatro días” (Osborn, 1995: 21).

En los llanos y el piedemonte, se encuentran plantaciones de yuca, maíz, coca, alucinógenos y conchas para fabricar collares; en las zonas de montaña, también se puede encontrar maíz, frutos silvestres, además que es una zona apta para la caza; y en las tierras altas como los páramos, se puede obtener sal y comercializar mantas y elementos utilizados en los rituales. Un hecho que se ha logrado comprobar en esta primera parte, es que el cultivo de algunos productos como el maíz, no depende de las condiciones climáticas; realmente, las cosechas son actividades que se programan a propósito, con el fin de que coincidan con la celebración del mito cantado y su ritual correspondiente.

Osborn, ha profundizado en la forma como los indígenas llevan a cabo esta labor y describe su método particular de cultivo, que consiste en cortar la vegetación, dejar que se pudra, volver a rozar y posteriormente sembrar en el terreno sin limpiarlo previamente, ya que este sirve de abono:

“Para volver a cultivar las tierras agrícolas, después de un descanso de varios años, se cortan primero los arbustos y plantas en un área de unas cuatro a seis hectáreas. Este material vegetal se pica en pedazos pequeños para que, mediante su descomposición, contribuya a enriquecer la capa vegetal” (Osborn, 1995: 47). “Los Kubaruwa no queman las rozas. Después de limpiar el terreno de la manera descrita lo dejan unos tres meses, al cabo de los cuales cortan y pican la nueva vegetación surgida. Luego siembran o plantan entre el material vegetal en descomposición” (Osborn, 1995: 48).

Otro tema de interés en este primer aparte, es el análisis que se hace del sistema de parentesco de los clanes u’wa. Se considera que la comunidad tiene en cuenta la ideología y la idea de mezclar ciertos elementos, como los líquidos corporales, el alma o el fuego, a la hora de celebrar las relaciones matrimoniales. También observa, que la regla que predomina en este tipo de relaciones consiste en devolver una criatura al grupo de parientes de donde se tomó uno de los esposos. En este sentido, se trata de un intercambio directo de cónyuges y uno retardado de criaturas; fenómeno, que la investigadora ha reconocido más importante que los acuerdos entre familias de enlazar a dos de sus miembros. “Un aspecto de este principio básico de las alianzas matrimoniales es que algo no se debe combinar con lo mismo, sino con su opuesto: *Kubina* con *Ruya*, por ejemplo. Esto significa que si un hombre nace en el este, y es por tanto *Kubina*, se debe casar, en principio, con una mujer nacida en el oeste y *Ruya*” (Osborn, 1995: 68).

De esta forma, el matrimonio está correlacionado con la distribución geográfica de los grupos y con la división física del poblado, que a su vez muestra la influencia cosmológica a la hora de segmentar la zona en tres áreas residenciales, la de arriba, la de abajo, y la del centro; esta última, siendo la mezcla de las dos anteriores. En palabras de la autora:

“Mi hipótesis a este respecto es que el piedemonte y la zona de montaña forman el territorio U’wa por excelencia, el cual está relacionado, en términos cosmológicos, con el mundo del medio. Las llanuras, por una parte, y las tierras altas del altiplano y el páramo, por otra, se relacionan respectivamente y mediante la misma lógica con los mundos de abajo y de arriba. El mundo del medio está habitado por mortales, mientras los de abajo y de arriba lo están por inmortales; cada uno de ellos depende de los demás para su existencia” (Osborn, 1995: 15).

La segunda parte que se debe abordar en este reconocimiento virtual está dedicada a la mitología cantada, pero, para llegarla a entender de forma correcta, se hace una descripción general de la cosmología y los rituales de soplar. En lo que se refiere a la cosmología, esta tiene en cuenta los tres tipos de mundo u'wa (abajo, medio y arriba) y las esferas de color que cada uno contiene.⁸ Un aspecto particular, es la forma como conciben el universo, muy similar a como lo ven otras culturas amerindias. En este caso, lo imaginan como una casa, donde ellos ocupan la posición central, que les permite forzar a los mundos de arriba y abajo a cooperar en las actividades de cantos y rituales.

En lo concerniente a los rituales, se describen varios de los mitos cantados que se desarrollan en un orden específico. Para esto, Osborn ha revisado la bibliografía relacionada y, por medio de esta, ha podido entender el ciclo anual de las cuatro estaciones que los indígenas llevan a cabo. Con lo anterior, ha pretendido borrar las fronteras que se crean entre la cultura material, su mitología y las actividades rituales, cuando se llevan a cabo estudios sobre una sociedad y su cultura. Las fronteras se disuelven cuando la visión cósmica de los habitantes implica desplazamientos geográficos. De esta forma, la investigadora propone, que los mitos cantados se deben estudiar en relación con el lugar, la época y la actividad estacional asociada a su celebración, ya que estos elementos se encuentran completamente interrelacionados (Osborn, 1995: 13).

De la misma forma, llega a sostener que las actividades agrícolas en los diferentes niveles altitudinales, tienen una explicación religiosa, ya que en esos espacios se proyecta la imagen de su cosmos. La explotación de los diferentes recursos naturales

⁸ Ann Osborn, se ha introducido en la cosmología de la cultura, para dar a conocer al lector el universo U'wa, y mostrar que a partir de allí han organizado su vida social. En el siguiente aparte, se puede concretar esta idea:

“En el principio, el universo U'wa comprendía dos esferas: un mundo de arriba, seco, luminoso y con fuego y un mundo de abajo, oscuro, húmedo y vacío. Estos dos mundos eran estáticos y estaban separados. Después hubo movimiento y los mundos de arriba y de abajo se encontraron; de su conjunción surgió el mundo del medio. El comienzo de cada mito cantado se refiere a este momento inicial y hace énfasis en su significado, desprendiendo de él la necesidad de la acción que se desarrolla en el mito y su ritual.

Estos mundos (esferas o firmamentos) están identificados y asociados con colores. Al mundo de arriba se le conoce también con el nombre de Blanco y al mundo de abajo se lo llama Rojo. Cuando se mezclan, surgen Azul y Amarillo” (Osborn, 1995: 73).

no se rige por las necesidades materiales de la sociedad, sino por sus creencias y la forma como ellos han configurado su universo real e imaginario. En este sentido, el concepto de reciprocidad es fundamental para mantener el equilibrio que los indígenas siempre buscan con sus acciones: la tierra les ofrece ciertos frutos en determinadas épocas del año, algunas especies de animales y de peces; y de la misma forma, ellos deben responder a esos favores que reciben, tomando esos productos solo cuando la naturaleza se lo permite.

El equilibrio es sinónimo de armonía y se crea mediante una relación dinámica entre el mundo de arriba con el de abajo, es decir, el de las deidades con el de los mortales. Esto es posible a través de las actividades que los u'wa llevan a cabo en todos los niveles, lo cual prueba una vez más, que su régimen económico se hace más entendible a partir de la comprensión de su sistema de creencias.

Osborn ha creído conveniente estudiar de forma conjunta los mitos y no aisladamente, porque estos de una u otra forma se encuentran relacionados, ya sea por medio de sus deidades o por las actividades físicas que llevan a cabo. Cuando realiza esta tarea, enmarca su análisis en un contexto histórico y cronológico de la sociedad, al tiempo que ubica los sucesos en un punto geográfico específico. Así, considera que cualquier mito u'wa solo es entendible cuando se contextualiza con su entorno.

La tercera fase que se debe seguir en este análisis, hace referencia a algunos mitos específicos y los rituales que se encuentran relacionados. Estos han sido ubicados en los períodos del año que se llevan a cabo, para dar a conocer la interpretación que los u'wa hacen de los movimientos del sol, los fenómenos celestes y los cambios climáticos presentes en ese espacio temporal. Posteriormente, se debe tener en cuenta el marco social de los mitos, es decir, los cambios de residencia y las actividades que desarrollan en ese lapso de tiempo, para así poder dar una explicación que abarque todo el contexto.

Como última medida, la investigadora ha efectuado un análisis general del escenario virtual, donde tiene en cuenta las deidades que participan en él y las personas que han intervenido en los rituales. En este punto, se resalta la importancia de los mitos dentro del grupo cuando afirma que:

“Para los *Kubaruwa* la celebración de los mitos cantados asegura la continuidad del universo. El cantar mantiene a las deidades en movimiento y en acción, al

tener que realizar y repetir ciertas hazañas que están narradas en los mitos. Desde el punto de vista social, el mito cantado es el lenguaje de las deidades y en él se expresan todas las leyes *U'wa* (Raiya: riqueza); su celebración es la forma de mantenerlas” (Osborn, 1995: 93-94).

Del estudio elaborado por Osborn se puede concluir que los mitos de cada estación se relacionan entre sí, pero la interpretación, insiste, debe hacerse a partir de los datos etnográficos, que no son los mismos de las mitologías. Añade que cada mito enseña algo nuevo, y al reunir todos los mitos de una estación, estos representan el ciclo total de la vida de una persona, con la particularidad de que existe en cada período del año un tipo de comportamiento específico para esa época. También reitera la idea de que tanto la agricultura como otras prácticas generadoras de vida, se llevan a cabo con el fin de asegurar la continuidad del pueblo *u'wa*, de sus deidades y de la naturaleza en general.

Por su parte, Ana María Falchetti (2007) ha recogido el pensamiento mitológico *u'wa*, a partir de un seguimiento al grupo nativo desde los tiempos coloniales.

En ese sentido, la autora comenta que, cuando los españoles llegaron a América, se desarticuló la organización tradicional de las sociedades nativas y, con el paso del tiempo, se afianzaron los elementos que unirían por siempre las dos culturas. “Los pueblos de un continente donde se pensaba distinto se enfrentaron a la llegada de creencias foráneas y al avasallador empuje de los colonizadores para erradicar sistemas de pensamiento autóctonos” (Falchetti, 2007: 11).

Lamenta que las sociedades occidentales que habitan América en la actualidad vean la historia de estas sociedades nativas como algo ajeno, y que piensen que su historia comienza con el descubrimiento del continente americano por parte de los europeos. “Somos, al fin y al cabo, herederos de la tendencia occidental a negar lo distinto, a ocultar el pensamiento del otro, y esa actitud nos ha escindido de nuestro pasado, de nuestra historia cultural con las enriquecedoras mezclas y transformaciones, y nos ha lanzado a una carrera hacia el futuro sin el sustento de la memoria” (Falchetti, 2007: 12).

Falchetti piensa, que el pensamiento mítico no opera mediante un proceso intelectual de clasificaciones y conceptos abstractos como lo hace el pensamiento occidental según su orientación positivista y racional. La percepción, a través de los

mitos, de la realidad que caracteriza el pensamiento indígena, se basa en un conocimiento intuitivo que le da preponderancia a la experiencia y pertenece a la esfera de lo espiritual. La conquista española ocasionó el encuentro entre sistemas de pensamiento diferentes en su esencia, estructura, expresión, lenguaje y en su percepción del mundo; es por eso, que los pueblos indígenas, a través de los siglos han creado estrategias para defender y ajustar sus creencias al mundo cambiante que les ha tocado vivir.

Sin embargo, a pesar de utilizar mecanismos que les permiten en gran medida conservar sus costumbres, los u'wa de hoy son diferentes a sus antepasados. La Conquista, la pérdida de gran parte de sus territorios y el contacto con el mundo occidental, han modificado muchos aspectos de su organización tradicional. Quienes mejor conservan sus tradiciones, están en el corazón de su territorio, en la parte nororiental de la Sierra Nevada del Cocuy; a esta zona no alcanzaron a llegar los conquistadores europeos y se lograron mantener totalmente aislados hasta comienzos del siglo XX, cuando muy pocos grupos de colonos consiguieron llegar a esas tierras.

La alarma que se despertó entre los u'wa en épocas coloniales por la ocupación de su espacio ancestral, es la misma que hoy sienten, al ver el progresivo deterioro ambiental resultante de una larga colonización de siglos:

“Muchas lecciones podemos tomar de un sistema de pensamiento que ha defendido, durante largos siglos, la búsqueda constante del frágil balance en las relaciones de la gente y de ésta con la naturaleza y el cosmos, en vista de la creciente preocupación por el deterioro del medio ambiente ante una explotación exagerada, el hambre que asedia a la humanidad, la multiplicación de conflictos, y los cambios climáticos incontrolables y destructores que expresan una alarmante ruptura del equilibrio. Aquellos sistemas de pensamiento milenarios regían un orden social y un modo de vida basados en principios que son universales” (Falchetti, 2007: 15-16).

Durante la época colonial los caciques orientaron la vida de las comunidades y guiaron a los líderes u'wa que eran cristianos y que servían de puente entre la cultura y los gobernadores europeos del sistema político. En la actualidad, existen mujeres chamanes y su conocimiento en este arte se mide en términos de palabras que se van superando hasta llegar al nivel máximo que es la octava palabra, equivalente a los *werjayas*, poseedores del poder político y religioso. Como su conocimiento emana

directamente de los orígenes del universo y procuran mantener un control sobre las energías positivas y negativas existentes, su capacidad de mediación es alta, y por eso, los dirigentes u'wa que forman parte de la Asociación de Cabildos, antes de tomar cualquier decisión se dirigen a estas figuras de gran importancia dentro de la comunidad.

En lo que respecta al pensamiento tradicional u'wa, una de las ideas más claras que existen en su universo ideológico, es que la tierra no es una propiedad material que puede ser delimitada y sujeta a transacciones comerciales. Su territorio les ha pertenecido desde siempre y el orden que allí se ha impartido deriva de una ley ancestral más antigua que el mismo planeta. Todas estas percepciones se pueden encontrar en los distintos cantos que anuncian la historia de la comunidad.

El derecho a la tierra les ha sido negado constantemente por las directrices divinas que tienen sobre el poblamiento del territorio: los u'wa, desde siempre han utilizado un sistema de poblamiento móvil que ha sido combatido desde la época de la Conquista, dado que los constantes desplazamientos estacionales fueron motivo de confusión para los españoles, quienes a veces los encontraban en algunos sitios y después estos se hallaban desiertos. Así, los colonizadores alegaron que los indígenas no podían exigir un pedazo de tierra por no poseer una organización territorial similar a las existentes en Europa.

Sin embargo, Falchetti ha descrito todos los sitios que han pertenecido a los u'wa; describiendo las actividades rituales que allí se llevaban a cabo, la distribución de las personas por zonas, y cómo algunos de estos sitios dejaron de pertenecer al grupo por acciones coloniales como la encomienda.

A lo largo de los siglos, se ha dado una constante lucha por la defensa del territorio, por parte de los dirigentes de la comunidad. Tal fue el caso de Pantaleón Chapetón, un líder indígena que:

“...no desmayó nunca en su defensa del territorio de los U'was. Se presentó en 1790 ante el Superior Tribunal, y en 1795 reiteró sus quejas en Santafé, compareció ante el virrey Ezpeleta, y logró su nombramiento como teniente de los U'was de Chiscas así como amparos sobre esas tierras; éstos no fueron efectivos en la práctica, dado que las autoridades locales no ejecutaron las

órdenes del Superior Gobierno y favorecieron a los vecinos españoles que habían adquirido tierras” (Falchetti, 2007: 38).

Aún contra su voluntad, a través de la historia se ha efectuado la colonización de grandes extensiones de su territorio ancestral, lo cual ha originado continuas divisiones en algunos clanes y la extinción definitiva de otros, produciendo a su vez, la ruptura del funcionamiento integral de su estructura social. Este fenómeno ha provocado, al mismo tiempo, la migración de indígenas que en muchos casos han retornado a sus sitios de origen, y así han conseguido que la cultura u’wa se conserve.

A través de los siglos han tenido que luchar contra la división impuesta por la Colonia, porque la visión occidental ha visto la naturaleza como una fuente de recursos y la tierra como un inmueble que le pertenece a una persona individual, y no ha dado cabida para la percepción indígena que ve el territorio como un espacio integral, comunal, donde lo sagrado, lo humano y lo espiritual son indivisibles. La pérdida de gran parte de su territorio ancestral, de su sistema de poblamiento estacional y la delimitación en resguardos, han hecho que los grupos se separen entre sí y que se pierda la conectividad y la acción cultural integrada y comunitaria que los ha caracterizado.

Los esfuerzos que se han venido haciendo desde la década de los setenta por recuperar su territorio no han sido suficientes: en 1970 lograron la adjudicación del Resguardo Cobaría-Tegría-Bókota-Rinconada, y en 1987, la Organización Regional Indígena U’wa del Oriente Colombiano, centralizó la recuperación y unificación del territorio. Al mismo tiempo, han recibido reconocimientos internacionales como el premio Bartolomé de las Casas, en España, y el premio de Medio Ambiente Goldman, en Estados Unidos, con los cuales han comprado más tierras. Sin embargo, el enfrentamiento con la Occidental Petroleum Corporation, OXY, ha delimitado nuevamente los predios que les pertenecen, ya que se les ha adjudicado nuevas tierras, pero no han podido habitarlas por hacer parte de la reserva natural del Parque Natural Nacional El Cocuy.

Por último, se ha querido denunciar la irregularidad de todo el proceso que se ha llevado a cabo en torno a las exploraciones sísmicas. Los límites ficticios que se elaboraron alrededor del Resguardo Unido U’wa se han creado con la idea de poder efectuar las perforaciones petroleras tranquilamente, pero esos mapas:

“...muestran una serie de líneas imaginarias según un ordenamiento teórico desligado de un contexto geográfico y humano.

No aparecen allí nombres que permitan al observador ubicarse en el espacio, ni asentamientos indígenas o campesinos; no aparece la Sierra Nevada del Cocuy con su quebrada topográfica, sus numerosas cuencas, sus sitios poblados” (Falchetti, 2007: 64).

Lo anterior va en contra de la posición indígena, negando el orden tradicional y sagrado de sus asentamientos indígenas, ubicados a lo largo de los ríos, que favorece el manejo integral y equilibrado de las cuencas y de los distintos niveles ecológicos por parte de los grupos humanos.

3.4. Los u’wa en la Colonia

La llegada de *reowa* al territorio u’wa sucedió en los años de la Conquista, cuando los españoles se asentaron en la sabana de Bogotá, donde los indígenas enviaron una delegación con el fin de defender sus predios, pero ya era demasiado tarde. Parece ser que los *werjays* pronosticaron esta situación mucho antes de que sucediera. La entrada oficial de los españoles a la zona que habitan los nativos fue en 1539, cuando Pedro Rodríguez de Salamanca y Alonso Martínez Cobo establecieron la primera encomienda denominada Encomienda de Chita (Eraso, 1997: 29).

El abuso contra la comunidad se extendió a lo largo de la época colonial. El maltrato, el exceso de trabajo y la represión política, religiosa y social, provocaron la huida de muchos indígenas a las zonas más escarpadas de la Sierra Nevada del Cocuy, estimulando la creación de latifundios y zonas de resguardos. Los nativos que no quisieron sujetarse al dominio español fueron considerados hechiceros y brujos, situación que se ha extendido hasta la historia más reciente de Colombia, cuando a comienzos del siglo pasado continuaron llegando misiones a la zona, con el fin de imponer la cultura occidental e impedir que desarrollaran sus costumbres, entre ellas su lengua. Sin embargo, no solo la imposición de una cultura o el quitarles sus tierras, han sido las únicas consecuencias negativas del contacto con el hombre blanco; la violencia generada por este y las enfermedades que ha traído consigo, como el sarampión o la viruela, han arrasado una parte importante de la población más joven.

Sin embargo, a pesar de todos los efectos negativos que ha tenido el encuentro con el hombre blanco, los u’wa siguen conservando su pensamiento y sus costumbres.

En su concepción sigue vigente la creencia ancestral que la naturaleza, los animales, el hombre y las plantas, se encuentran totalmente compenetrados, de ahí que toda actividad que realicen está regida por una regla natural, como es el caso de la movilidad en los diversos pisos altitudinales en la Sierra Nevada, que se efectúa en dirección contraria al sol según el ritmo de las cuatro estaciones (Eraso, 1997: 37).

En la época colonial, los chamanes desempeñaban un papel de gran importancia dentro la cultura, dado que han sido ellos, a lo largo de la historia, el enlace entre el mundo sobrenatural y el terrenal. De esta forma, estos personajes han sido famosos y perseguidos, ya que sus capacidades adivinatorias y hechiceras les han permitido ganar una fama que ha superado los límites de la región.

Entre las tesis existentes, se sostiene que la llegada de los europeos al continente americano hizo que los pueblos indígenas se vieran enfrentados a una serie de creencias foráneas y a la idea por parte de los colonizadores, de erradicar los sistemas de pensamiento autóctonos, con el fin de imponer el suyo de corte occidental. “En el continente americano se pensaba distinto. El sistema de pensamiento ancestral de los pueblos indígenas posee una lógica propia, codificada en mitologías que encierran su manera de explicar el mundo y conforman la estructura unificadora que guía todos los aspectos de la vida humana” (Falchetti, 2003: 9).

La visión integradora del pensamiento indígena americano, dirigida principalmente por el conocimiento chamánico, ha sido transmitida a sus integrantes mediante el lenguaje de los mitos, desde siempre, y ha contrastado con la visión utilitaria de la naturaleza favorecida por el mundo occidental que defiende el dominio del hombre sobre el medio natural, justificando sus nociones de progreso y desarrollo, además de su inclinación por lo individual y lo privado.

Falchetti da cuenta de la importancia del conocimiento chamánico y los mitos y cantos en la evolución de la cultura u'wa. Comenta que los mitos constituyen el centro de la práctica chamánica y su aplicación es visible en todos los aspectos de la vida de la gente. El pensamiento mítico está dirigido hacia la integración, el conocimiento intuitivo, lo sagrado y la conservación, lo cual, lo distancia del pensamiento occidental que se basa en el conocimiento racional y la visión utilitaria del medio ambiente.

La esencia de las antiguas mitologías tiende a perdurar, aunque ciertas influencias externas van modificando gradualmente la manera como los pueblos indígenas interpretan sus propias creencias. Es por eso, que se piensa que los estudios de caso específicos, pueden arrojar nuevas luces sobre esos procesos transformadores, y la búsqueda de documentación histórica permite hacer una aproximación a los procesos que influyeron en la formación del carácter de los pueblos americanos, cuyo estudio es necesario para entender a los grupos nativos actuales. De esta forma, a partir del análisis del relato del cacique Toroá, un texto histórico de finales del siglo XVIII, la autora analiza la extensión del territorio ancestral de los u'wa y da a conocer la forma como los indígenas intensificaron su lucha por defender algunos de sus asentamientos tradicionales.

Falchetti afirma, que el pensamiento occidental de los conquistadores, hizo que los u'wa empezaran a ser desplazados, poco a poco, de sus tierras. En la segunda mitad del siglo XVIII, esta situación se hizo perceptible, cuando les fue arrebatado parte de su territorio ancestral, ubicado entre la zona de Chiscas y Güicán, en la vertiente oriental de la Sierra Nevada del Cocuy.

Como respuesta a estos sucesos, la comunidad indígena que tenía sus propios dirigentes, muchos de ellos cristianos, le encargó a estos la tarea de asumir la dirigencia total de la comunidad en la defensa de sus creencias ancestrales y su territorio. Los líderes tenían conocimiento de muchas de las costumbres europeas, que les fueron de gran utilidad a la hora de actuar como intermediarios entre su pueblo y la autoridad colonial. Así mismo, por saber desenvolverse en el círculo de la cultura dominante, eran vistos de forma positiva entre sus congéneres, además, que no les hacía falta abandonar sus raíces étnicas. La importancia de estos personajes no fue poca para los miembros de su comunidad, dado que redactaron incontables memoriales e hicieron viajes a Santafé, con el fin de obtener apoyo y protección del Superior Gobierno, para intentar recuperar las tierras perdidas. Entre sus luchas también se cuenta, la búsqueda de la libertad de aquellos indígenas que seguían sometidos a trabajos forzados, y el mantenimiento de las creencias tradicionales del pueblo en general:

“En tiempos coloniales, los ‘caciques chapetones’ y demás u'wa que ocuparon cargos públicos formaron el puente entre las comunidades indígenas y el gobierno español. Al tiempo que conocieron a fondo las creencias, costumbres y lengua de los españoles, esos dirigentes u'wa cumplieron una función mediadora

gracias a su conocimiento sobre dos sistemas de pensamiento, dos modos de vida y dos lenguas; sin embargo, ellos acudían a los caciques mayores depositarios del conocimiento ancestral para defender a los u'wa teniendo como base su propia ley consignada en la mitología” (Falchetti, 2003: 209).

Un año importante en el que sucedieron varios hechos trascendentales fue 1784, cuando varios dirigentes indígenas redactaron un documento dirigido al Superior Gobierno colonial español, con el fin de solicitar el respeto por sus tierras y su cultura. La misiva fue de enorme valor, ya que en el momento de escribirla, Andrés Munar, Antonio Munar y Juan Ramón Caballero, líderes comunales de Güicán, fueron apoyados por el cacique Francisco Toroá, principal autoridad tradicional de Cubujón, una de las regiones de la zona nororiental de la Sierra Nevada del Cocuy, que mantenía buena parte de su territorio ancestral y sus creencias tradicionales. El cacique Toroá, poseedor de gran prestigio entre la comunidad aborígen, encabezó la carta que demostró el dominio que tenía sobre el pensamiento ancestral, a la vez que dio a conocer la poca sabiduría por parte de los dirigentes de Güicán sobre la lengua castellana y las creencias cristianas.

En su mensaje, el cacique Toroá y los demás dirigentes justifican el derecho de la comunidad a sus tierras mediante el relato de uno de sus mitos escrito en castellano. La traducción lingüística y cultural fue efectuada por ellos mismos, ya que uno de sus objetivos era intentar equilibrar las creencias indígenas y cristianas.

El relato hace referencia a mitos propios que describen la creación del mundo, el poblamiento de su territorio y la distribución de los terrenos a los distintos clanes por parte de las deidades. Estos mitos han sido conservados hasta la actualidad por los grupos más tradicionales. Sin embargo, es importante aclarar, que el personaje mítico que distribuye el territorio a los indígenas en el relato del siglo XVIII, se asemeja con el capitán y encomendero español Martín de Mendoza de la Hoz y Berrío, quien protegió a los u'wa contra los abusos de los vecinos no indígenas y los amparó en sus tierras de occidente, un siglo antes. Tal parece, que el capitán Berrío entró a formar parte de la mitología indígena de la época y ha logrado trascender a través del tiempo hasta encontrarse en algunos de los mitos contemporáneos (Falchetti, 2003: 169-170).

El escrito presentado por el cacique Toroá, a finales del siglo XVIII, se basa en la mitología de los u'wa, que no es más que el fundamento del derecho sagrado de los

indígenas a sus tierras y exalta su propio sistema jurídico, que a su vez ha sido milenario y se apoya en la ley ancestral. Los dirigentes tratan de explicar al virrey, con su relato, por qué poseen ese derecho, al tiempo que intentan articular la parte de su sistema jurídico milenario referido a sus tierras con el sistema jurídico español.

Es por eso, que en aquel entonces, centraron su defensa en los documentos que habían recibido por parte de las autoridades españolas y que reafirmaban el derecho del grupo sobre las tierras de sus antiguos resguardos. Estos documentos fueron amparos otorgados por visitadores, los cuales consistían en una serie de providencias emitidas por los despachos del Superior Gobierno de Santafé y Reales Provisiones de protección a los indígenas. De aquí, que la comunidad interpretara tales amparos como la ratificación, por parte de las autoridades españolas, del derecho ancestral de los indios sobre sus tierras.

Aunque para ellos el derecho milenario estaba basado en la fuerza de una antigua cosmovisión que legitimaba su defensa, intentaron equilibrar su sistema de pensamiento con el europeo para así lograr el libre desarrollo de la vida de su gente. Sin embargo, la realidad de esa época estaba determinada por el pensamiento español, mezclado con el mundo mestizo, ambos dispuestos a destruir la organización territorial que los indígenas habían mantenido por siglos.

De esta forma, tuvieron que enfrentarse, por un lado, a un sistema colonial que menospreciaba sus derechos milenarios sobre sus territorios y, por otro, a una población mestiza y a una casta criolla que estaban a favor de la propiedad privada de la tierra. El resultado fue una confrontación ideológica que promovió una persecución contra los líderes indígenas que organizaron la defensa de sus zonas tradicionales. Esta situación condujo a incontables rebeliones que fueron registradas a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Sobre la base de estos hechos coloniales que resaltan la defensa del territorio u'wa por parte de sus dirigentes, una de las conclusiones de Falchetti es que, al ser ésta una cultura más evolucionada que otros grupos indígenas en el contenido y proyección de su pensamiento, lo menos que se podía esperar era un fuerte enfrentamiento ideológico con la cultura europea en la época colonial, principalmente en la segunda mitad del siglo XVIII. “De esta manera, junto con la lucha por las tierras, se dio la

confrontación que, para utilizar la expresión que los u'wa han empleado, sería una 'guerra del conocimiento'" (Falchetti, 2003: 210).

Al final, los u'wa no han tenido más remedio que ir abandonando, gradualmente, gran parte de su territorio ancestral que se encontraba ubicado en la región occidental de la Sierra Nevada del Cocuy. Algunos de los que habitaban estas tierras se trasladaron de forma definitiva a la zona oriental y otros decidieron integrarse a la población mestiza que poco a poco iba ganando terreno en la zona de Chiscas y Güicán.

El desplazamiento continuó durante la guerra de independencia, época en la cual, eligieron como destino la zona central del nororiente de la Sierra Nevada, región que, hasta comienzos del siglo XX, permaneció bastante libre de la colonización por parte de grupos que no pertenecían a los u'wa. Sin embargo, este territorio poco a poco ha empezado a ser poblado, también, por familias campesinas, las cuales se han visto favorecidas con la construcción de carreteras como la de Pamplona-Arauca, o la ampliación del mismo hasta el río Cubugón.

Otro elemento que hay que tener en cuenta en el momento de analizar los factores que han generado la expansión de los grupos mestizos, es la labor de los misioneros que han impulsado la evangelización de los grupos nativos que habitan estos territorios. "En 1922, se creó una Junta Diocesana de misiones que abarcaba las zonas de los ríos Valegra, Margua y Cubugón y, en 1924, se instaló la misión del Sarare en Santa Librada, la cual posteriormente sería trasladada a Chuscal, sobre el río Cobaría, en la zona central de los terrenos de los U'wa" (Falchetti, 2003: 211).

Falchetti concluye, que debido a todos estos procesos que la comunidad ha tenido que soportar a lo largo de los siglos, algunos grupos u'wa se han extinguido, otros se han ido a las grandes ciudades, y otros, como los Cobaría o Bókota, han fortalecido sus creencias y, a partir de los años setenta del pasado siglo han iniciado procesos de recuperación y unificación de sus territorios, presentando diversas quejas ante diferentes estamentos gubernamentales.

En este sentido, la década de los ochenta es particularmente importante en los avances que la comunidad ha hecho al respecto, dado que, con la Organización Regional Indígena del Oriente Colombiano, en 1987 se han logrado establecer los cabildos en las comunidades y se han centralizado las actividades relacionadas con la

recuperación de tierras, orientadas a la búsqueda del saneamiento total de los resguardos y su ampliación para cubrir toda esta zona de comunidades u'wa.

Falchetti comenta, que aunque no hace parte de su investigación el discutir la situación actual del pueblo u'wa:

“...el estudio de documentación histórica y de la rica información que nos ofrece la misma tradición de este pueblo indígena, muestra cómo durante cuatrocientos años los U'wa siempre han mantenido la vigencia de una causa que hoy se ha internacionalizado. Esto se debe a la fuerza de su herencia cultural, a su orgullo como pueblo indígena y a su admirable capacidad para adaptar sus demandas y explicaciones a circunstancias históricas y escenarios particulares, asumiendo siempre el difícil reto de tender un puente entre culturas y pensamientos diferentes” (Falchetti, 2003: 212).

3.5. El pensamiento avanzado de los u'wa

Actualmente, en el planeta predomina de forma visible la necesidad de proteger el medio ambiente. Esta preocupación que ha sido el centro de atención en las últimas décadas, ha surgido por el claro deterioro de la naturaleza y la manifiesta reducción de los bienes de consumo. Hace un par de siglos, el interés por este tipo de hechos solo lograba la atención de una inmensa minoría que, quizá como lo ha afirmado William Ospina (2013a), estaba más adelantada a las corrientes de pensamiento de su época. Tal sería el caso del pensador Friedrich Hölderlin, condiscípulo de Hegel, que desde el siglo XIX ya vislumbraba una corriente ideológica que, para aquel entonces, no tenía ningún tipo de validez, pero que en la actualidad, ha ocupado toda la atención del hombre, advirtiéndole a la humanidad de los peligros que se ciernen sobre el planeta.

Es evidente el cambio de pensamiento que ha tenido la humanidad con el paso del tiempo. Lo que hace unos siglos tenía un enorme valor económico y era codiciado por las sociedades que dominaban el mundo, hoy ha dejado de tenerlo para dar paso a otro tipo de bienes que logran el interés de la humanidad. Un claro ejemplo de ellos fue la incursión que realizó Gonzalo Pizarro en 1542, en busca del país de la canela. Esa travesía, en busca de un elemento de la naturaleza, la canela, demuestra que el mundo antiguamente tenía ciertos valores que en la actualidad han perdido vigencia. En aquella época, la canela era una especia tan codiciada como el oro y Pizarro, al no encontrar en

Suramérica la variedad que se producía en Asia, dio la orden de asesinar a gran parte de los indígenas que hicieron parte de la expedición.

Los conquistadores, muchas veces, estuvieron equivocados: Colón, por ejemplo, durante un tiempo, al navegar por las orillas del Orinoco, pensó que cruzaba el continente asiático; negando así, lo que le era desconocido. Es por eso que a muchas de las poesías de aquella época no se les reconoció su belleza y su grandeza, como fue el caso de algunas escritas por Juan de Castellanos, quien se atrevió a ver, por primera vez, lo que había en América y describió lo desconocido por Europa en términos amerindios, haciendo que los críticos y eruditos del viejo continente no le diesen el valor que merecía. Hubo muchos personajes de aquella época que quisieron dar a conocer al resto del mundo las maravillas y la naturaleza de América, como Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, Gonzalo Fernández de Oviedo, o José Celestino Mutis; pero más pudo la labor de aquellos que cubrieron con el ropaje de la civilización, lo que consideraban que no estaba civilizado; se pretendió europeizar el paisaje, las costumbres, las instituciones y los proyectos (Ospina, 2013a: 173). Lo peor de todo, es que aún cuando ya habían transcurrido varios años después de ocurrida formalmente la independencia política, esa costumbre persistió en los países americanos, y se siguió creyendo que Europa y su cultura eran superiores, impidiendo a las nuevas naciones ver el enorme potencial de las culturas que las conformaban.

A pesar de mantenerse esa tendencia en Europa, hubo personajes en aquella época, en los cuales se despertó una sensibilidad diferente a la persistente en aquellos tiempos, que les permitió descubrir nuevas cosas en el mundo. Es en este punto donde es pertinente hablar de Alejandro de Humboldt, el naturalista alemán, que fue capaz de reconocer la riqueza natural de los vastos territorios americanos, al tiempo que fue el fundador de la geografía moderna.

Sin embargo, es a finales del siglo XVIII, cuando un grupo de intelectuales del viejo continente, argumentaron la necesidad de sostener un nuevo tipo de relación con la naturaleza, donde habría que dejar de lado la sensación de que ésta solo era proveedora del bienestar humano y un recurso más para el hombre satisfacer sus deseos. Era necesario ver el planeta como una fuente de belleza, con un sentido de gratitud hacia él y hasta como un objeto sagrado.

Para ese entonces, se empezaron a intuir las amenazas y peligros sobre el agua y la vegetación, sobre el equilibrio y el clima planetarios; y fue cuando surgió la figura de Friedrich Hölderlin, que fue más sensible a todas esas amenazas; le bastó mirar a la sociedad de su tiempo para darse cuenta del camino que seguía el mundo. Es por eso que Ospina llega a afirmar que la obra de Hölderlin no estaba destinada para los hombres de su tiempo, sino más bien, para aquellos que habitan el planeta a comienzos del siglo XXI:

“...en la obra de Hölderlin se siente continuamente la gravitación de tales peligros, y puede decirse que toda su poesía es un constante recordar que el mundo y el tiempo son nuestro reino pero también nuestra responsabilidad; que a nuestras manos han sido confiadas las cosas y los símbolos; que nos han sido dados el lenguaje, ‘el más peligroso de los bienes’, la memoria, que es la madre de las artes, y el don de presentir, de conmovernos y compadecer. Y que, desdeñando esos dones con los cuales se construye el sentido de nuestra aventura, una morada verdadera en la tierra, la humanidad más bien se ha envanecido de sus méritos, de sus conocimientos y de sus destrezas, hasta creer que es ella quien hizo el milagro, quien inventó el agua y los colores, el fuego y el amor, las montañas y las tempestades” (Ospina, 2013a: 179).

Hölderlin intenta, a través de sus escritos, expresar a la humanidad la necesidad de vivir respetuosamente y con gratitud en el planeta; y Ospina, por su parte, coincide en las mismas afirmaciones. Comenta, por ejemplo, que el agua embotellada es un mérito, pero el agua como tal es un don que todos deben apreciar, porque el hombre puede vivir sin adelantos electrónicos pero no sin el precioso líquido. Se puede vivir sin aviones, pero nunca sin un aire respirable. Desafortunadamente, en la época actual, la industria le sonríe a lo que el hombre crea y transforma, y en ese acto irrespeta y degrada todo aquello que es realmente valioso, es decir, el aire, el agua, los bosques y hasta los sentimientos.

Hölderlin, en sus escritos dio a entender, que se debe tomar conciencia, que la mayor responsabilidad que tiene el hombre es el mundo en el que reside. Las criaturas, según Hölderlin, solo persisten en lo que son y alcanzan su plenitud porque se acogen a los poderes de los que dependen: la flor es bella porque florece bajo el sol. El hombre hace lo contrario, todo aquello de lo que depende, quiere dominar; ese es el patético egoísmo de la cultura occidental, y sobre todo de lo que hoy expresivamente se llama sociedad de consumo (Ospina, 2013a: 181).

Curiosamente, Ospina ha visto que casi dos siglos después, la antropóloga inglesa Ann Osborn, encontró la cultura de los u'wa, con una idea de pensamiento similar, capaz de respetar la naturaleza y todo lo que les rodea. A Osborn le llamó la atención los cantos u'wa, repletos de nombres monocordes, que al comprobar lo que eran, descubrió que eran sitios identificados con menhires, que las águilas tijeretas recorren cada año, en su travesía que comienza en Norteamérica y termina en el norte de Argentina. Ese acto de dar un nombre a cada sitio no es un hecho aleatorio, es la forma como ellos han sacralizado su territorio, que en últimas era lo que pedía Hölderlin, pero desafortunadamente nunca fue escuchado.

Para el autor, es asombrosa la forma como se sigue descalificando la forma de pensar y de actuar de culturas indígenas como los u'wa o los kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta. Comunidades que reconocen la riqueza de sentidos del mundo natural y que viven diariamente con un alto sentido de responsabilidad con respecto al medio en el que se desenvuelven, son formas de vida despreciadas por la actitud utilitaria, lucrativa e irreflexiva de la sociedad industrial, que amenaza con destruir muchas regiones del planeta:

“Por ello es urgente preguntarse cómo, a pesar de las sabidurías de los pueblos nativos en todas las regiones del mundo, de sus mitologías y de los innumerables conocimientos adquiridos por la observación a través de los siglos, hemos terminado construyendo una idea del desarrollo fundada en la imitación de los modelos ilustres y subordinación de unas regiones a las prioridades de otras” (Ospina, 2013a: 185).

Ospina afirma, que la aplicación por décadas de un modelo de desarrollo urbano e industrializado, aunque lleno de buenas intenciones, pero siempre indiferente al sabio conocimiento de los grupos nativos, en lo que se refiere al manejo del entorno y equilibrio naturales, ha aumentado los índices de pobreza, al tiempo que ha producido la deforestación y la destrucción del entorno: “... se abre camino avasalladoramente en el mundo la desaparición de la naturaleza en el discurso de los teóricos y de los técnicos, para ser reemplazada por el discurso omnipresente del medio ambiente y de la bodega planetaria de recursos” (Ospina, 2013a: 191).

La prosperidad material de unos pueblos ha provocado la ilusión dócil de otros, que piensan que la única manera para alcanzar el equilibrio político, la paz social y la

prosperidad material, es a través del recorrido del mismo camino que llevaron a cabo aquellos que se encuentran en una, supuesta, mejor posición.

4. Contexto histórico del Estado colombiano a partir del siglo XX

Antes de abordar la violencia ejercida en Colombia sobre los pueblos indígenas y, en concreto, sobre los u'wa, se hace necesario revisar las causas más relevantes que han motivado el fenómeno general de la violencia en el país. El presente capítulo aborda esa revisión a través de dos factores. El primero de ellos –tratado aquí más brevemente– es la lucha por la tierra, que ha desencadenado los mayores actos de barbarie de la historia colombiana y está en la base de la confrontación entre el Estado y el grupo nativo. El segundo es el conflicto armado entre el propio Estado, los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares, el cual, aunque ha afectado a todos los sectores del país, ha resultado ser un elemento determinante del contexto socioeconómico y político del hábitat indígena

4.1. Lucha por la tierra

“Desde el comienzo de nuestra historia, cierta gente se acostumbró a robar algo que no es posible llevarse para ninguna parte, que tiene que permanecer allí donde estaba. Se acostumbró a cometer robos que no es posible ocultar, a robar lo que enseguida se advierte que ha sido robado. ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo logran que esos robos sean enormes, persistentes, eficaces e impunes? El que logre explicarlo habrá llegado al alma de nuestra sociedad, a la clave de nuestra identidad, al secreto mejor guardado de nuestra nación” William Ospina

En la historia de Colombia se pueden destacar varios periodos de violencia, que han derivado, en su gran mayoría, del problema de la tenencia de la tierra. A lo largo del siglo XX, pero más aún después de los años cincuenta, los campesinos e indígenas se han visto inmersos en una situación de pobreza extrema, a la vez que han sido víctimas de todas las violencias que han azotado al país. Estos factores condujeron a que en muchas ocasiones se hayan visto obligados a tomar las armas para defenderse y, en incontables casos, a luchar por conseguir un mediano bienestar social y económico:

“...el descontento se manifestaba en formas de disputas sobre títulos de propiedad, conflictos entre propietarios y arrendatarios y movimientos de campesinos que invadían porciones no utilizadas o subutilizadas de grandes haciendas. Los disturbios agrarios serios no ocurrían en todo el país sino en áreas específicas, pero reflejaban la presión que ejercía la creciente población

rural, cuyas necesidades no eran satisfechas por los patrones de tenencia de la tierra existentes" (Bushnell, 2011: 267).

En el país ha existido la constante propensión, impulsada por los grupos terratenientes, a concentrar en pocas manos la propiedad de la tierra, hecho que ha sido respaldado casi siempre por el Estado, teniendo como objetivo el control de territorios estratégicos de elevado valor económico o que puedan brindar recursos de diferente índole, ya sean mineros, de aguas, áreas para futuros proyectos viales o energéticos, entre otros. En estas circunstancias, es obvio que el dominio que se tenga sobre grandes extensiones de tierra es un determinante de gran importancia del poder político y económico.

La tierra es el factor de producción por excelencia de la economía campesina y la distribución de su propiedad es, también por excelencia, fuente de conflicto. Si se analiza la historia del país, los conflictos de mayor relevancia, tanto sociales como bélicos, se deben a la desigual distribución de la tierra. Como ejemplo de lo anterior, se puede mencionar la Masacre de las Bananeras que siguió a una huelga de trabajadores empleados por la United Fruit Company (véase, por ejemplo, Bushnell, 2011: 257-258).

La concentración de la tenencia se vinculó además, históricamente, con la subexplotación. En las primeras décadas del siglo XX, cuando la inactividad de más de la mitad de las tierras de cultivo generó un alza en las tasas de desempleo rural y, por ende, un creciente índice de pobreza, se vio la necesidad de impulsar una ley agraria que corrigiera esta situación. En este contexto se expidió la Ley 200 de 1936 o “Ley de Tierras”, que constituyó el primer intento de alterar la estructura agraria y fue resultado de una concertación con el entonces floreciente movimiento campesino. Su contenido tuvo aportes positivos, como el de exigirles a los terratenientes que demostraran la legitimidad de sus títulos, abriendo con ello la posibilidad de una redistribución de la propiedad, si bien remediar la subexplotación fue uno de sus objetivos principales:

“La Ley 200 de 1936 expresaba en forma ambigua las dos vías que podía seguir el desarrollo del capitalismo en el campo colombiano. Si por una parte se prescribía la distribución de aquellas tierras que no estuvieran explotadas por sus dueños, por la otra se le otorgaba a los grandes propietarios un plazo de diez años para que se decidieran a explotar sus predios en forma capitalista, es decir, con base en el trabajo asalariado” (Kalmanovitz, 1985: 342).

La ley dio origen a la creación de jueces especiales para dirimir conflictos territoriales; se sustentó en el concepto de función social de la propiedad privada (en este caso la tierra), contenida en la reforma constitucional del mismo año; y se introdujo la figura de extinción de dominio. A pesar de la enorme resistencia que encontró por parte de los terratenientes, supuso el punto de partida de posteriores reformas.

La Ley 100 de 1944 buscó anular los efectos de la Ley de 1936, declarando de conveniencia pública los contratos de aparcería y creando, de esta forma, una atadura más del campesinado al dominio terrateniente. Solo posteriormente, con la expedición de la Ley 135 de 1961, producto de presiones tanto de diferentes sectores nacionales como de la comunidad internacional, se fundó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, que, como su nombre indica, procuraba producir una importante transformación agraria. Entre sus propósitos estaba el de modernizar la forma en que los terratenientes explotaban sus tierras, los cuales, de no hacerlo, se exponían a que se les aplicase la extinción de dominio. Sin embargo, “La reforma agraria se acometió desde una perspectiva estrecha y sacrificando a muy pocos terratenientes. El gasto social se incrementaba en parte apelando al déficit fiscal. Eran todas, pues, reformas que implicaban un costo bajo para las clases dominantes” (Kalmanovitz, 1985: 421).

La creación del INCORA no supuso la solución del conflicto agrario. Para proceder a la extinción de dominio, la ley imponía una serie de requisitos muy difíciles de cumplir; por otra parte, el poder político de los terratenientes impedía la adecuada realización de procedimientos administrativos y judiciales dirigidos a satisfacer adecuadamente los objetivos de la política agraria contenidos en la ley; la junta directiva de la institución estaba integrada mayoritariamente, además, por representantes de los terratenientes, mientras que la representación del campesinado era exigua; la política agraria general y la del Instituto, en particular, estaban altamente politizadas y su ejecución burocratizada respondía a sus propios intereses, por lo general cruzados con los de los terratenientes.

Más adelante, en 1967, se constituyó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, institución que sirvió de medio para que el presidente de turno, Carlos Lleras Restrepo, lograra presionar al país y, de esta forma, impulsar la reforma agraria que se afianzó con la Ley 1 de 1968, la cual se centró, básicamente, en los

predios inadecuadamente explotados y en la entrega de tierras a los campesinos que las trabajaban.

La política agraria de la década de los años sesenta tenía dos objetivos. Por un lado, introducir la producción agroindustrial de alto rendimiento, de corte capitalista, dirigida a producir insumos para la industria nacional y como contingentes de exportación; y, por el otro, la producción campesina de productos de consumo final, con asistencia técnica suministrada por el Estado y canales eficientes de comercialización, para abastecer los mercados locales:

“Si bien puede afirmarse rotundamente que en Colombia la causa fundamental del auge fue resultado de la creciente demanda externa, tal avance no hubiera sido posible si no se hubiera afianzado en la economía nacional un proceso de desarrollo capitalista, mayor división del trabajo manufacturero y agrícola, aumento de productividad, etcétera, durante los años cincuentas y sesentas” (Kalmanovitz, 1985: 453).

No obstante los objetivos de la política, sus resultados fueron muy cuestionables. Se constituyó en un medio para que los terratenientes se desembarazaran de terrenos estériles, vendiéndolos al INCORA para que fuesen suministrados a los campesinos sin tierra, lo cual, unido a la ausencia de medios financieros, de asistencia técnica, de canales de comercialización y de infraestructura social y física, contribuyó a la pobreza extrema del campo y al éxodo de campesinos a las ciudades para engrosar los cordones de miseria que las circundaban.

El panorama en la década de los setenta no fue más alentador, debido a que en 1972 se inició, bajo el mandato del presidente Misael Pastrana Borrero, una contrarreforma agraria que apoyó de forma abierta la gran propiedad como soporte del desarrollo agroindustrial, dirigiendo, de esta forma, el crédito financiero y muchos otros recursos del Estado hacia su promoción, al tiempo que solo se brindaban mini-programas de asistencia técnica y líneas marginales de crédito al campesinado. Para reforzar esta tendencia de desarrollo capitalista del campo, se firmó un acuerdo en enero de 1972, denominado “Pacto de Chicoral”, que eliminaba los riesgos redistributivos de efectuar legalmente expropiaciones si los predios no eran debidamente explotados: “Sobre la base del consenso acordado en Chicoral en 1972, las clases dominantes le dieron entierro a la reforma agraria, comprometiéndose a garantizar la no expropiación

de los terratenientes y un trato represivo a las aspiraciones de los campesinos pobres” (Kalmanovitz, 1985: 456).

En los años siguientes no se produjeron cambios que favorecieran en algún sentido a los campesinos. Por el contrario, las leyes que se expidieron posteriormente únicamente mostraron la continuidad en la forma en que se venía desarrollando el sistema agrario. La Ley 6ª de 1975, por ejemplo, legalizó nuevamente la aparcería y, aunque buscaba modernizar las relaciones entre propietario y aparcerero, el principio de sujeción no fue eliminado. “En 1974, la administración López confirmaba esta orientación mediante su proyecto de ley sobre aparcería que estipulaba la no intervención oficial incluso en las regiones de mayor atraso” (Kalmanovitz, 1985: 456).

En 1975 se aplicó el programa denominado Desarrollo Rural Integrado, que en última instancia resultó ser un sustituto de la reforma agraria y mantuvo invariable la situación precaria del campesinado. A partir de ahí el problema se mantuvo en segundo plano durante varios años. Fue a partir de 1982, con la Ley 35 y el Plan Nacional de Rehabilitación, cuando se retomó el tema agrario, siendo una de las novedades la compra de tierras a precios de mercado a los campesinos.

Posteriormente, la crisis se fue profundizando debido al control de las zonas de cultivos ilícitos:

“Durante el decenio de 1980, Colombia cobró renombre mundial debido a la producción y exportación de drogas prohibidas. El fenómeno dio origen a numerosos informes exagerados sobre la importancia de la droga para la economía colombiana y sus ramificaciones políticas y sociales. En todas partes se oía o se leía que la cocaína había desplazado al café como primer rubro de exportación y que los narcotraficantes ‘controlaban’ todo el país” (Bushnell, 2011: 366).

Por otra parte, se acentuó entre los terratenientes la pretensión de expandir sus propiedades, al tiempo que las grandes multinacionales buscaron apropiarse de diversas zonas con el fin de explotarlas agrariamente o aprovechar su riqueza natural. Todo lo anterior ha conducido a una gran crisis humanitaria que tradicionalmente han padecido los sectores campesinos, pero que se ha agravado en los últimos sesenta años, donde las élites de las distintas regiones defienden a toda costa su poder político y económico vulnerando los derechos básicos de los grupos menos favorecidos.

El interés de los grupos al margen de la ley –narcotraficantes, paramilitares, guerrilla y delincuencia común– por mantener el control de territorios estratégicos ha expandido el conflicto de tal manera que ha conducido al desplazamiento de comunidades enteras, liquidando a las organizaciones campesinas, ejecutando a opositores políticos y, en síntesis, acabando con todo aquello que pueda perturbar los planes del grupo dominante en la zona:

“Las personas que se habían enriquecido con el narcotráfico empezaron a comprar grandes propiedades que sus antiguos dueños, cansados ya de la extorsión de la guerrilla, estaban ansiosos por vender. Los nuevos compradores, sin embargo, se mostraban reacios a tolerar exigencias relacionadas con ‘impuestos revolucionarios’; por otra parte, ya contaban con armas modernas y organizaciones para resistir a la guerrilla. Los nuevos propietarios empezaron a trabajar con finqueros y ganaderos legítimos, así como con la policía regional y el Ejército, para crear fuerzas de autodefensas rurales. En poco tiempo, grandes extensiones de tierra volvieron a ser seguras para el pastoreo y la agricultura; pero también se hacían cada vez más peligrosas para cualquier persona sobre la que recayera la mínima sospecha de simpatía, colaboración o pertenencia a la guerrilla” (Bushnell, 2011: 374).

El escenario cruel que se vive día a día en las zonas rurales ha generado la reacción de diferentes grupos y movimientos sociales que exigen una solución negociada al conflicto, para así tratar de alcanzar una justicia social que beneficie a las víctimas de esta barbarie. Dada la necesidad apremiante, se ha esbozado, aunque muy tímidamente, un proyecto de reforma agraria con el fin de solucionar los problemas generados en torno a la repartición de la tierra, al tiempo que brindar condiciones de vida dignas para el campesinado. Estas políticas han presentado dificultades de tipo administrativo y fiscal y han originado la reacción violenta de los sectores que se le oponen, originando un nuevo foco de violencia que ya contabiliza víctimas entre los campesinos que lideran el proceso.

La Constitución Política de 1991 hace referencia tanto a los derechos que tienen los campesinos de llevar una vida digna, como a la protección del medio ambiente rural, partiendo del principio de igualdad social que debe existir en toda sociedad democrática moderna. Pero este enunciado, en la realidad, es solo una ficción y ha sido un derecho del que pocos ciudadanos han gozado. Particularmente han sido graves los problemas de desigualdad en la propiedad territorial y la subutilización de la misma, que son factores manifiestos a lo largo del tiempo y se han presentado de forma constante.

Como se puede notar, la tierra ha sido a lo largo de la historia de Colombia un activo de fácil negociación, donde los campesinos y pequeños propietarios han visto día a día cómo sus actividades son vulneradas constantemente, obligándolos en muchos casos a vender sus predios a precios irrisorios, o a desplazarse a otras zonas, abandonando, sin más, aquello por lo que han luchado toda su vida. Los hechos violentos que han tenido origen y connotaciones de tipo político y económico, entre los que se pueden destacar la denominada “Época de La Violencia” —entre 1948 y 1958— y posteriormente la generada por los grupos al margen de la ley, han repercutido en el despojo de pequeños productores, que han tenido que ver cómo sus tierras dejan de pertenecerles para formar parte de las posesiones de los latifundistas:

“Característicamente, más que a una división de la sociedad en dos campos diferenciados, asistimos a una multiplicidad de guerras parciales o sectoriales: por la tierra o por plantaciones de cultivos ilícitos; por centros energéticos y por los recursos de ellos extraíbles; por territorios convertidos en enclaves, de cierta manera sacralizados, en los cuales está prohibido el acceso a los otros; por el acceso a armas y a sus rutas de aprovisionamiento. A todas estas guerras parciales se suma la delincuencia, que alimenta esas guerras o se beneficia de ellas” (Sánchez Gómez, 2003: 113).

Es claro, que desde que se expidieron las primeras leyes agrarias en la década del treinta hasta el presente, Colombia ha llevado a cabo, en forma neta, un invariable proceso de contrarreforma agraria, que lo único que ha producido es una mayor concentración de la propiedad territorial. A partir de los años cincuenta del siglo pasado, pero especialmente en la primera década del presente milenio, este hecho se ha visto favorecido por la actuación del Estado, que con la excusa de adelantar la lucha antissubversiva ha desplazado a millones de campesinos, obligándolos a abandonar sus predios, que en muchos casos, posteriormente se han utilizado para la producción de palma aceitera y cultivos de grandes extensiones. De otra parte, en los últimos años, la economía agraria se ha visto sacudida por la corrupción a través del programa “Agro Ingreso Seguro”⁹ que ha otorgado cuantiosas subvenciones, con recursos públicos y en forma fraudulenta, a capitalistas del campo.

⁹ Programa implantado por el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. La Procuraduría General de la Nación detectó irregularidades en la

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta las recomendaciones de la comunidad internacional, dio origen al Estatuto de Desarrollo Rural, que compiló todas las normas referentes a la reforma agraria, dejando en un estado de vulnerabilidad a la población rural, dado que dichas normas no ofrecían garantías ni soluciones al problema de pobreza y marginalidad que se ha vivido en el campo. El Estatuto pretendió viabilizar el subsidio para los proyectos agrarios mediante convocatorias públicas abiertas, con el fin de otorgar el auxilio a los proyectos más rentables. De esta forma, es lógico entender que los campesinos pobres y sin tierra no tuvieron la menor posibilidad de acceder a los créditos, quedando así sin posibilidad alguna de realizar su propia producción y por ende sin ningún medio de subsistencia.

Con el fin de resarcir toda esta cadena de anomalías y desafueros, particularmente los asesinatos y los desplazamientos forzosos ocurridos durante décadas, se ha expedido la Ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, que tiene como objetivo adoptar medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Esta ley, impulsada para su aprobación en el legislativo por el gobierno del actual presidente de la república Juan Manuel Santos, muestra un avance en el sentido de tener en cuenta, por primera vez, a las víctimas del conflicto, que forman parte de los sectores sociales menos favorecidos.

A pesar de las buenas intenciones que lleva consigo esta ley, no termina de ser justa, dado que se limita a recuperar, por decirlo así, aquellas propiedades que fueron arrebatadas a los campesinos a partir del 1º de enero de 1985, sin tener en cuenta que, para ese entonces, la propiedad territorial ya se encontraba altamente concentrada. Sin embargo, una solución que se ha planteado para eliminar los límites temporales, sería el de la reivindicación de las víctimas por actos criminales, de vejación, desplazamiento o cualquier otra acción que haya lesionado su integridad personal. De todos modos, es preocupante la acción criminal que se ejerce contra aquellos que pretenden alcanzar reparaciones ya sea de derechos, integridad o propiedades. Los que llevan a cabo este

ejecución del programa relacionadas con la contratación, numerosos actos de corrupción como beneficios injustificados a familias específicas de terratenientes, falta de supervisión de los programas y aumento indebido de los recursos destinados al programa.

tipo de violencia son grupos perversos, protegidos por fuerzas oscuras que se niegan a perder los privilegios que hasta el momento han ostentado.

En la actualidad existen en Colombia varias asociaciones campesinas como la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, la Asociación Campesina del Catatumbo, la Asociación Campesina de Arauca, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la Asociación Campesina del Valle del río Güéjar, entre otras. Los campesinos pertenecientes a estos grupos coinciden en la búsqueda de un modelo de desarrollo que tenga como elemento central la economía campesina, complementada con técnicas agroindustriales y de explotación a gran escala, partiendo de la base que el campesino es un individuo más productivo que el terrateniente.

4.2. Grupos armados al margen de la ley: Factor determinante del contexto socioeconómico y político del hábitat indígena

La historia colombiana se ha caracterizado por la presencia recurrente de la violencia en sus ámbitos político, social y económico. Ha sido una influencia transversal que ha incidido, desde la formación misma de la nacionalidad, en el devenir institucional y las relaciones sociales, políticas y económicas entre todos los estamentos y grupos, legales e ilegales, de su sociedad. Con el paso del tiempo, los actos de barbarie se han acrecentado, con marcadas tendencias políticas de izquierda (los grupos guerrilleros) y de derecha (los paramilitares), a partir de los años cincuenta del siglo pasado. La presencia agresiva y delincuencial de estos movimientos se ha centrado en áreas rurales, particularmente en las regiones que tradicionalmente han sido asentamientos indígenas. De ahí que el conocimiento de sus características fundamentales sea esencial para conocer el contexto socioeconómico y político que le corresponde afrontar a los diferentes grupos indígenas en el territorio colombiano.

4.2.1. Formación de los grupos guerrilleros

En el actual territorio colombiano surgió, en la época de la independencia, la primera república llamada por algunos historiadores “La Patria Boba”, la cual fue derribada por la ofensiva de Pablo Morillo, dentro de lo que se ha denominado el proceso de reconquista español de sus posesiones en el continente americano. Este hecho indujo a que los patriotas, en primera instancia derrotados, se refugiaran en los

Llanos Orientales y se organizaran en grupos guerrilleros contra las fuerzas invasoras. Por este suceso es posible situar el origen de la “guerra de guerrillas” en la guerra de Independencia, es decir, en el propio origen de la nacionalidad colombiana:

“La ola de ejecuciones era ya de por sí lo suficientemente aterradora, y peor todavía era el hecho de que los impuestos habían sido elevados para pagar el costo de la represión. El descontento popular con estas medidas había estimulado la formación de guerrillas patriotas, que eventualmente podrían apoyar a un ejército invasor. Indirectamente, la lucha guerrillera produjo la más prominente heroína del movimiento independentista colombiano, Policarpa Salavarrieta, que no se enroló en ningún destacamento armado sino que servía como enlace y como informante en la capital, hasta que fue descubierta y encontró su lugar en el registro honroso de los mártires” (Bushnell, 2011: 78-79).

A lo largo de los siglos XIX y XX, la lucha de los campesinos por la tierra ha sido la principal causa de la gestación y organización de los diferentes movimientos armados. La lucha del indígena y del campesino surge como movimiento social a partir de la toma de conciencia sobre la contradicción entre la existencia de extensos latifundios improductivos de propietarios absentistas y una inmensa población de campesinos sin tierras y de minifundistas empobrecidos, dentro de la concepción de que la tierra debe ser para quien la necesite y la trabaje y no un medio de atesorar riqueza o de generación de poder político.

En la época colonial, la Corona Española promovió la distribución de predios sin obedecer a ninguna racionalidad económica y mucho menos de justicia social, dando origen, de esta forma, a una distribución excluyente, inequitativa y antieconómica de la propiedad territorial. La situación se agravó a lo largo del siglo XIX, cuando, en el contexto de las sucesivas guerras civiles, una de las formas de recompensar a los guerreros fue la entrega en propiedad grandes extensiones de tierra. Este hecho se ha prolongado a lo largo del siglo XX hasta el presente con las diferentes formas de violencia, que en la mayoría de los casos se ha dirigido a la expropiación y expulsión de campesinos para el ensanchamiento de la propiedad latifundista:

“El latifundismo toma revancha dentro de esa violencia contra el campesinado que había conquistado una gran cantidad de tierras, sobre todo en el período de López Pumarejo. Fue el ajuste de cuentas del latifundismo contra el campesinado, utilizando la violencia política. Por eso la violencia se convierte en

una enorme empresa de despojo. Las gentes tenían que abandonar sus tierras porque les amenazaban su vida o atentaban contra ella” (Alape, 1985: 73).

Este es el contexto estructural que subyace a lo largo de todo el proceso de confrontaciones que caracteriza la historia nacional. El Estado y sus diferentes poderes se han constituido en el mayor de los casos en representación de los propietarios latifundistas; particularmente a partir de la tercera década del siglo XX, se hizo eco de movimientos políticos de sectores urbanos, complementados con las tendencias internacionales de modernización económica, social y política, prevalecientes. Todo ello da origen a proyectos reformistas que, para el caso de la tierra, se han traducido hasta el presente en avances y retrocesos legislativos que han sido completamente insustanciales e, incluso, abiertamente regresivos, frente a la crítica realidad del sector.

Los grupos insurgentes que surgieron en el país a mediados del siglo XX, derivados de todo el problema de la tenencia de la tierra, no iban tras la defensa de los principios políticos que más tarde les caracterizaría; el objetivo en sus comienzos, antes que recuperar sus tierras, era defender la vida y crear los mecanismos para salvarla a toda costa. Los asesinatos por aquel entonces, alrededor de la década de los años cincuenta, eran perpetrados por cualquier individuo, ya fuera éste policía, militar o civil, creando así un clima de temor, tensión y venganza. El pueblo tranquilo de mucho tiempo atrás se fue transformando en un pueblo violento y cruel, donde se perseguía al rival político y se buscaba destruir todo lo que le perteneciese, incluyendo su descendencia:

“La violencia se extendió por toda la geografía patria con la velocidad de la lluvia. Se buscaba con afán al contrincante político. Su presencia señalaba caminos, penetraba las veredas, inundaba los pueblos con el ‘boleteo’. Antes había sido la amenaza verbal de los discursos. Ahora eran los hechos; los señalamientos, cuando se representaban físicamente por un hombre joven que como el ángel de la muerte, tocaba las cuerdas de su guitarra y cantaba una canción frente a la puerta de una casa, para indicar con su voz quién sería la víctima al día siguiente. Los presagios habían desaparecido” (Alape, 1985: 69).

De esta forma, las familias dirigieron su destino hacia la selva y las montañas; se aprovisionaron de lo estrictamente necesario y, por física seguridad, fueron eliminando todo aquello que los pudiera delatar, incluyendo los animales. En tales circunstancias, durante el día se utilizaba el lenguaje de las miradas y las señas y solo por la noche surgían nuevamente las palabras. La gente estaba llena del dolor de saber que sus

tierras, sus pertenencias y sus costumbres ya no eran más suyas; fue entonces cuando se inició el rompimiento de los núcleos familiares y tanto los hijos como los padres tuvieron que buscar cada uno su propio camino.

Fue en aquellos tiempos cuando se hizo necesaria algún tipo de organización dentro de los diferentes grupos; no podían seguir viviendo en la clandestinidad. Había que defenderse y actuar, lo cual hizo obligatoria una instrucción de tipo militar. Los primeros instructores fueron campesinos reservistas del ejército; surgieron figuras en la historia colombiana como la de Antonio Pérez, quien huyó de la zona de Barrancabermeja después de organizar la resistencia popular que se impuso en la zona petrolera con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Llegó al sur del Tolima para transmitir sus conocimientos, obtenidos con su rango de sargento primero en el ejército, a las primeras guerrillas comunistas y liberales que se crearon de forma espontánea por la necesidad de sobrevivir. A lo largo y ancho del país, muchas de esas guerrillas fueron verdaderos clanes familiares. Por ejemplo, la zona de los Llanos orientales estaba dominada por los Fonseca, los Bautista y los Parra principalmente. En el sur del Tolima eran de reconocida fama los Loaiza y los García. En la zona del viejo Caldas, el difunto Manuel Marulanda Vélez, hoy conocido como Tirofijo y cuyo nombre original era Pedro Antonio Marín, creó la primera guerrilla liberal con catorce de sus primos, dando inicio, de esta forma, a su actividad combatiente.

La guerrilla también surgió en los pequeños poblados y su acción militar pretendía la defensa del pueblo, de las masas; es decir, su mentalidad se fue ampliando y ya no se pensaba en uno sino en todos, se había colectivizado la vida y las necesidades dejaron de ser particulares para convertirse en generales:

“Y en ese devenir de la migración campo-campo, la población y la guerrilla aprenden otro lenguaje: ya lo mío no es mío sino de todos, no soy yo sino somos nosotros. La sal era para todos y no para uno. Se había colectivizado la vida como la muerte, las necesidades eran del común. Y detrás de esas forzadas evacuaciones, como huella indeleble, miles de pisadas y de objetos regados, los que no se pudieron cargar definitivamente” (Alape, 1985: 71).

Los movimientos guerrilleros en Colombia no fueron inventados por una izquierda que buscaba la toma del poder, como se ha querido dar a entender por algunos sectores políticos y de dominio de la opinión nacional; su origen se produjo como una respuesta a la violencia que ejercían los ricos y aquellos que detentaban el poder. Desde

la época colonial, las rebeliones y protestas contra el sistema han sido reprimidas de forma violenta, ya sea por el asesinato o el desplazamiento de familias o grupos enteros. Las guerras que se han dado a lo largo y ancho del país han sido interpretadas como conflictos entre los dos partidos dominantes, pero se puede decir que su raíz se debe a las profundas desigualdades sociales y económicas que caracterizan a la sociedad colombiana, y al hecho de que una minoría siga arraigada en el poder sin brindar opciones para mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos.

La resistencia popular en forma de guerrilla comenzó a finales de 1949, en diciembre exactamente, y no fue producto de un plan ideado, simplemente fue una lucha que tuvo origen en los Llanos orientales, donde un grupo de liberales, en su mayoría militares que simpatizaban con el liberalismo, pretendían dar un golpe militar como respuesta popular a la política sanguinaria impartida por el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. En su desarrollo, esa respuesta violenta toma características sociales y económicas. “El golpe falló, pero de este intento se desprendió la primera resistencia armada que comenzó en los Llanos Orientales y luego se fue extendiendo por otros lugares del país, Sur del Tolima, la zona de Urrao en Antioquia, Carare en Santander, etc” (Alape, 1985: 73).

La violencia se acrecentó en los Llanos Orientales porque se dio a conocer en la zona la actividad que estaba desarrollando el gobierno de Ospina Pérez en los pueblos y en las veredas de la cordillera. El gobierno estaba armando grupos civiles de conservadores en alianza con la policía y las alcaldías. Se estaba despojando a los campesinos de sus bienes, se les obligaba a pagar contribuciones forzosas en ganado o en especie, y también se estaba desarmando a la gente, quitándoles las escopetas o revólveres y, por último, se iban eliminando a los campesinos y ciudadanos que tenían alguna influencia política.

Los movimientos guerrilleros, en su origen y en su desarrollo, han sido movimientos campesinos que, ligando el problema de la tierra a las distintas motivaciones políticas, han hecho de esta lucha su razón de ser. Los años cincuenta del siglo pasado se caracterizaron por haber dado origen a numerosos grupos campesinos en distintas zonas del país que, en un principio, buscaban protegerse de la mano asesina de los terratenientes de las zonas que habitaban. De esta forma surgieron los primeros grupos guerrilleros, conocidos por aquel entonces como “Repúblicas Independientes”,

que eran aquellos que no entregaron sus armas cuando los dos partidos dominantes, el liberal y el conservador, firmaron el acuerdo que los llevaría a alternarse el poder en el “Frente Nacional” –concluyendo así el periodo conocido como “Época de la Violencia” para dar pie a una renovada violencia–:

“Pero, a comienzos de 1964 o desde finales de 1963, comenzó en nuestro país una campaña de carácter muy particular, que la encabezaba el senador Álvaro Gómez Hurtado, campaña que él llamó ‘Contra las Repúblicas Independientes’. Sostenía el senador Gómez Hurtado que había en Colombia una serie de regiones donde las autoridades colombianas no podían ejercer su jurisdicción; que estaban gobernadas por antiguos guerrilleros; que se trataba de repúblicas independientes; que era necesario someterlas a sangre y fuego, según el lenguaje que le gusta al senador Gómez Hurtado, por una operación del Ejército” (Alape, 1985: 243).

El desarrollo político de los distintos grupos fue disímil. En algunos casos no se dio la toma creciente de conciencia y no pasaron del entusiasmo partidista; por eso, sus uniones con grupos de mayor tendencia izquierdista no duraron. Las guerrillas de los Llanos orientales alcanzaron mayor claridad y un nivel político más alto, a pesar de lo cual tampoco se logró construir un amplio movimiento de masas; los frentes de lucha y las comunidades de apoyo carecieron de programas que condujeran al poder.

Poco antes de empezar la década de los sesenta nació otro tipo de guerrilla, ya no de carácter partidista, sino inspirada en principios de reivindicación social, de subversión contra la injusticia, con programas que contemplaban la lucha de clases y la lucha contra el dominio de Estados Unidos. Su apoyo era el pueblo y buscaban el respaldo de la base popular realizando una intensa labor de politización. De esta forma, se pasó del inmediatismo al compromiso revolucionario en un camino sangriento y cruel. Las guerrillas de las zonas de La Colorada, departamento de Santander, posteriormente las del sur del Tolima, más tarde las de los Llanos orientales, las de Urrao y Yacopí, fueron guerrillas liberales que evolucionaron hasta convertirse en guerrillas revolucionarias.

Es sabido que en estas acciones se llegaron a arrasar comarcas completas, como fue el caso de la población de Sabanalarga en Upía. La actividad de la policía se intensificó en los pueblos liberales del norte de Boyacá y la cordillera en general se inundó de puestos policiales con el fin de acabar físicamente con las mayorías políticas

liberales, de modo que en las siguientes elecciones las gentes amedrentadas votaran para salvar sus vidas y por las listas del partido de gobierno. Ejerciendo ese tipo de violencia, la policía y los grupos aliados con ella se inclinaron por la violación de mujeres y el homicidio se convirtió en algo cotidiano que se elevó hasta transformarse en arrasamientos colectivos.

A raíz de las incursiones policivas en la población de Sabanalarga, donde fue asesinado un gran número de personas y se incendiaron casi todas las viviendas, los hermanos Bautista, por su propia iniciativa, iniciaron operaciones guerrilleras armadas contra los puestos de policía e incluso contra algunos del ejército. Independientemente de la situación que se estaba difundiendo en la zona de Upía, en Orocué, Casanare y Cumaral también estaba ocurriendo el mismo fenómeno; en esta última, eran los hermanos Parra quienes realizaban operaciones semejantes a las de los Bautista, pero ya en inteligencia, aliados con el capitán Alfredo Silva, en respuesta a las agresiones de los Chulavitas, policías conservadoras oriundas de un municipio de ese nombre.

Encontrar varios miembros de una misma familia realizando incursiones subversivas fue un fenómeno que se hizo común en la Época de la Violencia en Colombia; Guzmán Campos explica las motivaciones que conllevan a esta situación: “Por lo general, cuando acaece un desplazamiento colectivo, los miembros de la familia permanecen juntos y siguen ayudándose y defendiéndose, así sea en condiciones muy precarias. Pero si la migración es a alguna ciudad, la familia sufre un impacto tan serio que prácticamente se atomiza” (Guzmán *et al.*, 1988 T. I: 281).

Todo este clima tuvo su origen en el comienzo del periodo denominado de La Violencia, en el que ésta tuvo el carácter político de enfrentamiento entre liberales y conservadores. Fue mediada la década de los años cuarenta cuando la Dirección Liberal Nacional optó por dar un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Ospina Pérez, hecho que sería consumado por algunos sectores del ejército que se habían formado en los sucesivos gobiernos liberales. El encargado de planear y llevar a cabo el golpe sería Plinio Mendoza Neira, jefe liberal que había sido ministro de Guerra en años anteriores y quien además tenía vínculos con militares de todos los rangos. La fecha pactada fue el 27 de noviembre de 1949, cuando se vieran agotadas todas las posibilidades de convivencia con el gobierno, que para ese entonces había clausurado el parlamento y restringido los derechos ciudadanos. En síntesis, se trataba, según los

conspiradores, de derrocar una dictadura fascista y, para tal fin, todos los preparativos se realizaron, se alertaron a todas las guarniciones del país pero de un momento a otro la Dirección Nacional Liberal dio la contraorden y el golpe se frustró. Solo el capitán Alfredo Silva, comandante de la base aérea de Apiay, en Villavicencio, por falta de información acerca de la cancelación del golpe, se tomó con su tropa la ciudad de Villavicencio reduciendo a la policía local, abriendo las cárceles y dando libertad a los presos políticos. Estos hechos llevaron a que el pueblo lo rodeara en su causa y le manifestara su apoyo. En su acto rebelde, también se tomó las oficinas de la Intendencia y fue al poco tiempo cuando tuvo noticias que no se había llevado a cabo el golpe. El capitán, al verse solo en su levantamiento, optó por pedirle a la gente que lo seguía que lo acompañara a Puerto López donde finalmente se entregó a sus mandos inmediatos. La gente que colaboró en la rebelión supo de los últimos sucesos y, en general, todo el territorio de los Llanos orientales entendió que el siguiente paso a dar era el de crear un ejército liberal y popular, dirigido por mandos militares o civiles que condujeran a esas fuerzas en su lucha contra el gobierno, ya que este se había declarado en dictadura, y así se respondía al tiempo al golpe que se había frustrado por orden de los jerarcas liberales.

En los años siguientes se dio inicio al Frente Nacional, el cual fue un grave error en el desarrollo de la vida política del país, porque con éste se estaba considerando que la violencia de aquellos años tenía su origen en la inequitativa distribución de los cargos burocráticos entre liberales y conservadores; se pensaba que eliminando esta desigualdad se pondría término a la inestabilidad social del momento. Esta fórmula cerró el cauce a la formación de nuevas alternativas políticas, con ideales distintos a los ya existentes, dejando en el ambiente nacional la idea de que el sistema que se estaba aplicando era antidemocrático:

“Liberales y conservadores se resignaban a acordar, por medio de consensos, las políticas económicas y sociales y a repartirse milimétricamente la burocracia del gobierno. No había allí iniciativas audaces ni una línea política definida que pudiera ser desarrollada por los cuadros y mandos medios de una determinada fracción política” (Kalmanovitz, 1985: 415).

Por tales motivos, la lucha de las guerrillas se fue transformando de una manera inconsciente, donde inicialmente el enfrentamiento que existía se debía a una disputa por la tierra y por defender la vida misma. Una vez acabada la lucha entre los partidos, la violencia tomó otros cursos; algunos de los integrantes de las distintas guerrillas

decidieron pactar la paz y otros, que se negaron a hacerlo, se inclinaron hacia partidos distintos de los tradicionales haciendo que la racionalización de su lucha perdiera la razón de ser, precisamente, con la aplicación del Frente Nacional.

En la historia de la guerrilla colombiana se pueden diferenciar dos períodos: el primero, que va desde 1948, o desde el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán hasta 1958; y el segundo que se extiende desde 1958 hasta la fecha actual. En su primera fase, la organización era básicamente un grupo partidista, ya fuera guerrilla liberal o conservadora, y su evolución en la segunda fase hasta el presente se debe a un cambio en sus ideas y concepciones políticas, aparte de poseer nuevas tácticas, otras estrategias y obviamente mejores armas:

“En Colombia, factores endógenos como la violencia partidista de mitad del siglo XX, sumando a la influencia de otros exógenos como la revolución cubana dieron sustento a la aparición en los años 60 de grupos guerrilleros de diferente corte. Desde el Marxista-Leninista de las FARC, pasando por el Maoísta EPL, hasta el guevarista ELN” (Urueña, 2009: 45).

A comienzos de los años sesenta hay una aparente quietud en el campo. El primer gobierno del Frente Nacional está desarrollando su política de pacificación y rehabilitación y algunos grupos armados se acogen a ella, aunque en paralelo a este proceso ha surgido el fenómeno del bandolerismo:

“La época en que surgen estos bandoleros fue principalmente en el gobierno del presidente Lleras Camargo, quien trató de salvar definitivamente al país de la violencia, o de dar por terminada la violencia, propiciando una nueva amnistía, dictando nuevas normas generosas, yendo más allá de Rojas, porque la complementó con un ‘Plan de Rehabilitación’ de las zonas afectadas por la violencia y asignó importantes recursos a esa rehabilitación. Unos respondieron a ese esfuerzo y otros no. Allí comenzó a perfilarse la tercera rama de las guerrillas liberales, las que abiertamente se fueron al bandolerismo y que podemos ubicarlos en su mayoría al norte de la vía Girardot-Ibagué- Armenia” (Alape, 1985: 213).

Las guerrillas de mayor experiencia de la zona sur del Tolima y Villarrica, se transformaron en núcleos de autodefensas y es en esta fase donde se vislumbran los primeros pasos de las guerrillas revolucionarias marxistas, o las ya mencionadas Repúblicas Independientes. Tales grupos llegaron a tomar cuerpo de forma definitiva en las Organizaciones de Autodefensa de Sumapaz, las cuales tenían un carácter civil-

militar. Es importante anotar que estos grupos también recibieron a finales de la década del cincuenta el nombre de “liberales sucios”, por la lucha que entablaron contra el régimen militar-conservador del general Rojas Pinilla.

En los primeros años de la década del sesenta, surgió uno de los primeros movimientos populares que se organizaron en el área urbana, el llamado “Frente Unido del Pueblo”, liderado por el padre Camilo Torres. La FUP y las Repúblicas Independientes fueron objeto de amenazas, hecho por el cual el sacerdote revolucionario tomó la decisión de retirarse al campo y unirse a un grupo que dio posteriormente origen al Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Este movimiento, inspirado en la Revolución Cubana y unido a la resistencia campesina, surgió de un foco guerrillero ubicado en la zona de Norte de Santander y se caracterizó por proclamar la estrategia del Che Guevara para derrocar al gobierno que ejercía el poder en ese momento. La simpatía hacia el movimiento insurgente entró en ascenso cuando se incorporó a sus filas el religioso en 1965:

“Un hecho decisivo en la historia de nuestra organización y del proceso revolucionario colombiano fue la incorporación de Camilo Torres a la guerrilla y su muerte en combate. Este paso alumbró el camino de los cristianos indicándoles que no sólo pueden sino que deben ser revolucionarios, amplió las filas de la revolución colombiana y le dio a esta una nueva dimensión, señaló caminos prácticos en la relación marxismo-cristianismo” (Alape, 1985: 281).

Años más tarde, en 1967, con la división internacional de los partidos comunistas entre “Pro soviéticos” y “Pro Chinos” nace una tercera organización: el Ejército Popular de Liberación, EPL, de pensamiento maoísta y que en poco tiempo logra extenderse, particularmente en algunos departamentos de la costa Atlántica:

“El partido nace de un rompimiento que se da en la primera mitad de la década del 60 en el seno del partido Comunista Colombiano. El rompimiento parte de fenómenos de incidencia en la problemática nacional y también de la acción de los fenómenos internacionales, dentro del contexto de la lucha de clases en el panorama colombiano” (Alape, 1985: 297).

Otras organizaciones se desarrollan durante los años 70 y 80. Se distinguen de las anteriores por su pensamiento político y su forma de accionar. La más importante de ellas es el Movimiento 19 de Abril, M-19, muy popular a nivel internacional por sus acciones espectaculares como las tomas de la Embajada Dominicana, el 27 de febrero

de 1980, y del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, a la vez que hizo muy notoria su presencia a nivel urbano, como en el residencial barrio Policarpa Salavarrieta, ubicado al sur de Bogotá:

“Hay que partir del hecho de que el movimiento 19 de abril, M-19, surge a la vida política y militar del país en 1973 y aparece con características muy nuevas que es lo que origina la inicial confusión de los sectores tradicionales de la vida política e ideológica de Colombia. La izquierda organizada, encuentra frente a la aparición del M-19 un desconcierto. Aparentemente no es muy claro por qué surge de repente una nueva agrupación guerrillera que opera inicialmente en zonas urbanas; segundo, que actúa político-militarmente para participar en elecciones y, tercero, que esa participación en elecciones de un movimiento político-militar urbano es en función de un movimiento populista, apoyando el candidato de ese momento de ANAPO que era María Eugenia Rojas” (Alape, 1985: 314).

A comienzos de la década del ochenta surgió el Partido Revolucionario de los Trabajadores, exactamente en 1982, y se dio por la evolución de una tendencia escindida del Partido Comunista a mediados de la década anterior. Por otra parte, para protegerse de las constantes incursiones de las fuerzas armadas, de los paramilitares y también de la guerrilla, los indígenas paeces, a instancias del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, reactivaron en 1981 los grupos de autodefensa dirigidos desde las bases. A su vez, dieron origen a un núcleo coordinador que fue el germen del Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), que comenzó a operar en 1984 y consistía en un grupo armado defensivo sometido a la autoridad de las comunidades. Sobre Quintín Lame, William Ospina afirma:

“Un indio que arañaba la tierra ajena alzó un día los ojos del surco y se preguntó por qué, si ya todos éramos iguales ante la ley, los blancos tenían derecho a la tierra de sus padres y los indios nunca. Allí desapareció el indiecito que arañaba la tierra y surgió Manuel Quintín Lame, el más grande luchador por los derechos de los indígenas que tuvo Colombia en tres siglos. Aprendió a leer y a escribir, leyó los códigos, estudió las leyes, organizó a las comunidades, aprendió el arte exasperante de redactar memoriales, instaurar demandas, solicitar audiencias, invocar derechos, reclamar, exigir” (Ospina, 2013b: 57).

4.2.2. Evolución del paramilitarismo

El origen de las organizaciones armadas al margen de la ley enfrentadas a la guerrilla puede remontarse a la aparición de grupos como los Chulavitas y los Pájaros en la propia época de La Violencia:

“Nace en el occidente de Caldas y es perfeccionado en el Valle. Integra una cofradía, una mafia de desconcertante eficacia letal. Es inasible, gaseoso, inconcreto, esencialmente ciudadano en los comienzos. Primero opera solo en forma individual, con rapidez increíble, sin dejar huellas. Su grupo cuenta con automotores y ‘flotas’ de carros comprometidos en la depredación, con choferes cómplices en el crimen, particioneros del despojo. Se señala a la víctima, que cae infaliblemente. Su modalidad más próxima es la del sicario” (Guzmán *et al.*, 1988 T. I: 165).

Estos grupos se mantuvieron, a partir de entonces, en paralelo a las fuerzas armadas del Estado. La acción militar siempre ha estado presente en la lucha, pero quienes la han alimentado, al igual que la resistencia del campesino hacia la guerrilla, han sido estos grupos irregulares. El ejército se ha mantenido de alguna manera fuera de la disputa, realizando sus operaciones dentro de unos márgenes definidos; los fomentadores del enfretamiento, de forma constante, ha sido este tipo de bandas al margen de la ley:

“Desde comienzos de los años 60, a raíz de la visita practicada a Colombia por la Misión Yarbrough del ejército estadounidense (febrero/62) y de las directrices secretas que dejó consignadas dicha Misión, el Estado colombiano adoptó una estrategia contrainsurgente paramilitar, ya desde antes de que surgieran las guerrillas de este ciclo (1964-65)... Tomando como fuente 6 manuales (1962, 1963, 1969, 1979, 1982, 1987) se puede rastrear la concepción que hay allí de la población civil y su papel en la guerra, y concluir que se la define por dos miradas: 1) debe ser vinculada a la guerra (paramilitarismo); 2) debe ser el blanco principal de la guerra contrainsurgente (guerra contra los movimientos sociales o posiciones inconformes con el statu quo)” (Pachakuti, 2004: 9).

Desde la época de La Violencia, estas asociaciones irregulares se han formado a través del pago de favores políticos, saldados con recompensas económicas como la tierra, sustento del que se han sostenido. Han sido estas congregaciones las que han mantenido a raya a la oposición, no con fusilamientos, sino con ejecuciones extrajudiciales y sistemáticas. Allí donde hay presencia guerrillera, siempre hay grupos

paramilitares financiados fundamentalmente por terratenientes, comerciantes, transportadores y por empresas petroleras o empresas eléctricas.

El Estado siempre ha jugado el papel ambiguo de apoyarlos y no comprometerse, incluso ha encontrado fórmulas para hacer de esta ambigüedad una institución: las organizaciones autodefensivas de los campesinos. Es decir, a los campesinos se les permite tener armas y organizarse contra la guerrilla, como una forma de autodefensa; sin embargo, bajo esta fórmula ha ido creciendo y desarrollándose otra forma de delito que es lo que hoy se conoce como el paramilitarismo.

Desde comienzos de la década de los sesenta, la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado han sido formados bajo los parámetros de la doctrina de la seguridad nacional y la aplicación de los fundamentos del conflicto de baja intensidad. Dentro de tal propósito se han implementado mecanismos prestos a la eliminación del “enemigo interno”, representado en la existencia del comunismo, la subversión o la insurgencia:

“Como su nombre lo indica la contrainsurgencia no tiene otra razón de ser que la lucha en contra de las organizaciones armadas que tienen como fin subvertir el orden establecido mediante un proceso revolucionario que potencie la lucha de clases y la derrota última de la burguesía a manos de las capas sociales históricamente desfavorecidas” (Urueña, 2009: 35).

Así, en el marco de dicha estrategia, a comienzos de la misma década se recomendó por parte de asesores militares norteamericanos la conformación de organizaciones de tipo antiterrorista que combatieran los grupos comunistas. En desarrollo de tal propósito es dictado el decreto 3398 de 1965, el cual fue convertido posteriormente en legislación permanente a través de la ley 48 de 1968, por medio de la cual se dio el fundamento legal para la organización de la defensa nacional, la defensa civil y la promoción en la organización de las autodefensas.

Bajo el amparo de dichas normas, e inclusive yendo más allá de ellas, miembros de la fuerza pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron a habitantes en zonas de conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población dentro de la confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha contrainsurgente:

“La táctica de utilizar a la población civil en las actividades armadas estuvo recomendada desde los primeros manuales (originados en USA y Francia, en 1962-63) asumidos como guías para la acción. El Decreto 3398 de 1965, convertido en Ley 48 de 1968 autorizaba a los comandantes militares a entregar armas de uso privativo de las fuerzas militares a civiles (art. 33 parágr. 3) y al gobierno a convocar a la población civil para acciones armadas (art. 25)” (Pachakuti, 2004: 12).

Como propósito encubierto del accionar criminal de estos grupos aparece el amedrentamiento de la población con el fin de generar una atmósfera de miedo y temor que implicara la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, impidiendo la libre expresión de la inconformidad social. Se ha constatado hasta el día de hoy que los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos como la explotación de recursos naturales –entre ellos el petróleo y el carbón– y la tutela de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.

En la geografía nacional las autodefensas no han tenido un solo modelo o método de acción, sino que éste ha estado determinado por el nivel de conflicto en la región, teniendo en cuenta el nivel de organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y el accionar de la fuerza pública. En tal sentido, los grupos de autodefensas se pueden crear por tres causas principales: a) a partir del involucramiento de la población; b) por la conformación de una estructura permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción; c) por la contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que formen parte del grupo permanente.

La contratación de mercenarios extranjeros por parte de sectores económicos dominantes y de altas personalidades de la política colombiana, los cuales han intervenido en el entrenamiento de los grupos paramilitares y de militares en diferentes técnicas en el empleo y manejo de armamento sofisticado, es una actividad que ha surgido en la década del ochenta en el país:

“...la contratación de mercenarios internacionales para entrenar y/o apoyar a los paramilitares marcó también históricamente el auge del paramilitarismo a finales de los 80, a pesar de ser algo expresamente prohibido por el artículo 47 del Protocolo I a los Convenios de Ginebra de 1949...Las tres confesiones de

gestores del paramilitarismo en la experiencia piloto de Puerto Boyacá incluyen en sus relatos la presencia de mercenarios israelíes, ingleses y australianos, especialmente las confesiones del Mayor Óscar Echandía Sánchez y la del Capitán Luis Antonio Meneses Báez...Según el testimonio de Echandía, fue el Capitán Luis Meneses quien contrató en Panamá al mercenario israelí TEDDY MELNICK y a través de él a YAIR KLEIN y a ABRAHAM TZEDAKA, pero ya antes ACDEGAM había hecho contactos con mercenarios británicos a través del Capitán Luis Guillermo Tarazona” (Pachakuti, 2004: 83).

Las autodefensas en la zona del Magdalena Medio¹⁰ (primera región de Colombia en la que surgieron estos grupos al margen de la ley) empezaron con el malestar de la gente por el abuso del IV Frente de las FARC-EP contra los propietarios de esa zona¹¹. Las reiteradas vacunas o impuestos, se habían convertido en algo insostenible y el que se negaba a pagarlas lo secuestraban. Los mismos propietarios, antes de que la guerrilla se volviera insaciable, hacían contribuciones voluntarias para que los muchachos, como eran llamados, limpiaran su territorio de cuatreritos y asaltantes:

“Ante la presencia de grupos guerrilleros (particularmente las FARC y ELN) que extorsionaban a los terratenientes de la zona, los narcotraficantes optaron por financiar a grupos paramilitares para impedir la compra de predios por parte de pequeños propietarios, con el fin de evitar una infiltración subversiva que socavara sus riquezas” (Urueña, 2009: 89).

En un comienzo, los grupos paramilitares estaban conformados por rebuscadores y personas que en su gran mayoría se ganaban la vida en oficios varios. Se piensa que las autodefensas no nacieron por una orden militar, ni apoyados por los militares; su origen fue civil. El ejército se involucró posteriormente al ver que, a pesar de las precarias condiciones de los grupos de autodefensa, los cuales no tenían buenas armas ni táctica, ni helicópteros, eran más efectivos que ellos en la lucha contrainsurgente. De

¹⁰ Desde comienzos del siglo XX, el Magdalena Medio ha sido una zona atrayente para los habitantes de otras regiones del país. El interés reside en las riquezas naturales del suelo y subsuelo de ese territorio, además de la existencia de numerosas industrias en muchos de sus municipios. Petróleo, palma africana, algodón, ganadería, oro y cemento, son el principal motor de la economía local (Urueña, 2009: 88).

¹¹ Entre los propietarios del Magdalena Medio se contaban muchos narcotraficantes, que con el fin de legalizar sus fortunas, compraron tierras en la zona, dada su cercanía a Medellín, al tiempo que era un área selvática con bajo control militar y poseía un fácil desplazamiento por el río Magdalena (Urueña, 2009: 89).

esta forma, algunos militares de baja graduación, entre ellos tenientes y capitanes, se acercan a la nascente asociación para coordinar un trabajo en equipo.

Posteriormente, los grupos que estaban conformados recibieron una serie de estímulos que lograron convertirlos en una fuerza más organizada. El ejército decide entrenarlos y armarlos bien para incorporarlos en una estrategia de guerra contra las FARC-EP. El éxito obtenido hace que los llamen de otras regiones como el Putumayo, Huila, Santander, los llanos del Yará, el oriente de Caldas, Antioquia y el sur de Córdoba.

Una de las tácticas empleadas con mayor frecuencia por parte de este grupo armado ha sido la habitual intimidación a la población mediante el porte de listas donde se amenaza a los habitantes, y en general se les instiga para que se integren al proyecto paramilitar o, de lo contrario, pueden terminar siendo desplazados a otras regiones del país o, en el peor de los casos, siendo asesinados. Los grupos considerados como autodefensas, entre los cuales se cuentan las patrullas de campesinos organizados, están protegidos por el ejército; la promoción que se hace para inducir a la población a que ingresen a sus filas es a través del ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios:

“Ya el Manual de 1962 aconsejaba: ‘Para disminuir el requerimiento de unidades militares, se ha visto que es de gran ayuda el empleo de policía civil y de individuos de la localidad que sean simpatizantes de la causa amiga (...) Los individuos de la localidad de ambos sexos que han tenido experiencia o entrenamiento como soldados, policía o guerrilleros, deben ser organizados dentro de la policía auxiliar y las unidades de voluntarios de cada ciudad (...) necesitarán apoyo de las fuerzas militares (...) el apoyo es normalmente necesario en el abastecimiento de armas, municiones, alimentos, transporte y equipos de comunicaciones’” (Pachakuti, 2004: 12-13).

Respecto a su relación con la fuerza pública, se ha determinado que llevan a cabo patrullajes conjuntos, utilizando en diversas ocasiones a la población civil para que les acompañe en los mismos. Los dirigentes o comandantes paramilitares son transportados en helicópteros del ejército y las bases militares han sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de estas estructuras criminales.

El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e instituciones del Estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido

obligado a pagarles en una serie de impuestos ilegalmente recaudados para el mantenimiento de estos grupos. Tal es el caso de los proyectos implementados en los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucuri, en Santander, y de algunos municipios del departamento de Casanare, aledaños a la explotación petrolera de Cusiana:

“Bajo el mismo principio rector de vincular a la población civil al conflicto armado, ya como combatientes, ya como combatidos, se han desarrollado en Colombia diversos modelos de paramilitarismo. El que fue tomando cuerpo en los municipios de Santa Helena de Opón, El Carmen y San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, desde comienzos de los 80, tenía la característica de involucrar a toda la población civil de la zona, de manera imperativa, como paramilitares, pero además era un modelo que pretendía autofinanciarse imponiendo contribuciones obligatorias a todos los pobladores” (Pachakuti, 2004: 67).

Para la conformación de estos grupos ha sido importante la participación de sectores que controlan el negocio de las esmeraldas, además del narcotráfico y los terratenientes de distintas zonas del país, los cuales han actuado de común acuerdo con la fuerza pública en cuanto a la dotación de armamento, entrenamiento, financiamiento y acciones encaminadas a ejercer control en determinadas regiones.

Muchos de los líderes de las autodefensas actuales son antiguos narcotraficantes o, en su defecto, lo continuaban siendo, y a través del tiempo han sostenido una batalla constante con la guerrilla. Esta querella ha surgido de la extorsión que han ejercido los grupos subversivos sobre ellos, al tiempo que han efectuado el plagio de varios traficantes de estupefacientes para captar enormes cantidades de dinero. De otra parte, los narcotraficantes han invertido grandes capitales en las zonas de cultivo y en haciendas ganaderas, creando así una fuerte competencia con los insurgentes por el control de las zonas fértiles y las rutas para transportar el alcaloide:

“En la experiencia del Magdalena Medio, sobre todo, los escuadrones de la muerte tomaban la defensa de la población civil como un objetivo secundario. El hecho de ser impulsados por las élites locales y no primordialmente por los ciudadanos del común perfilaba el accionar de ejércitos que más que la protección de la vida, honra y bienes de los pobladores, buscaba la conservación de un sistema económico pre-capitalista, sustentado en la concentración histórica de los medios de producción. La protección de economías legales e ilegales que absorbían poca mano de obra y sí mucho territorio” (Urueña, 2009: 133).

Con respecto a los campos de acción, estos grupos han actuado especialmente en zonas como Urabá, Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de acción ha estado enmarcada en la realización de ejecuciones selectivas, hasta la realización de masacres indiscriminadas, victimizando a niños, ancianos y mujeres embarazadas, como en las matanzas de las poblaciones de Segovia, Honduras, La Negra, El Tomate, Trujillo y Pueblo Bello, donde utilizaron los más execrables métodos de tortura como el desmembramiento de las víctimas:

“La crueldad fue un ingrediente fundamental del modelo trujillense de paramilitarismo,ocluyendo la vía judicial y disciplinaria como posible freno a la barbarie. El caso excepcional de DANIEL ARCILA, quien horrorizado por los efectos de sus informes, ya que pudo presenciar en directo los descuartizamientos efectuados por el Mayor Urueña y huyó del ámbito de control de los victimarios para denunciar la barbarie en numerosas instancias de la justicia” (Pachakuti, 2004: 72).

Pese a que los organismos de control y de la rama judicial han sido ampliamente documentados sobre la conformación de estos grupos, sus mecanismos de financiamiento, su relación con la fuerza pública y su responsabilidad en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, la gran mayoría de los hechos permanecen en la impunidad y, al contrario, altos oficiales de la fuerza pública directamente relacionados con hechos violentos han sido ascendidos y los grupos paramilitares han extendido su accionar y poderío en el territorio nacional, recibiendo, además, un tratamiento benigno por parte de las autoridades estatales:

“Resultan tan avanzados los síntomas de la paramilitarización del país y su incrustación en las altas esferas del poder colombiano, que entre el 18 y 19 de septiembre (2004) la embajada de los Estados Unidos convocó en Cartagena a representantes de la política, las autoridades públicas y los medios de comunicación para hablar del tema. En este foro, las autoridades señalaron que de acuerdo al mapa que maneja la Casa de Nariño, 49 bloques paramilitares hacen presencia en 26 de los 32 departamentos del país y en 382 de los 1.098 municipios. Eso equivale a 13.500 hombres distribuidos en un 35 por ciento del territorio nacional. Notorio crecimiento frente a los 3.000 hombres que según el Ministerio de Defensa tenían los paramilitares en 1995, además, han pasado del control militar al político y social, concluyeron los participantes” (Pachakuti, 2004: 73-74).

La actitud de los últimos gobiernos de negar los diversos grados de conexión entre los grupos de particulares armados y las unidades militares, con el consentimiento

o la tolerancia de los altos mandos del ejército, los ha conducido a evitar a toda costa la discusión sobre la acción paramilitar, con la consideración de que se trata de una conjura de la guerrilla colombiana para minar la legitimidad de las fuerzas armadas gubernamentales:

“El grado de infiltración en instituciones nacionales y locales como la Fiscalía General de la Nación y sus seccionales, la fuerza pública, las entidades promotoras de salud, las administraciones municipales y departamentales, y el Congreso de la República, no solo hablan de un poder paramilitar sino de todo un poder paraestatal” (Urueña, 2009: 162-163).

De otra parte, ha sido un motivo de preocupación para los colectivos defensores de derechos humanos la aprobación del Decreto 3567 del 11 de febrero de 1994, denominado Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, por el cual se pueden expedir licencias de funcionamiento a cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias de vigilancia y seguridad privada en el área donde tiene asiento la comunidad, pudiendo operar con o sin armas. Ese mismo año, el entonces ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, informó al país de la puesta en ejecución del programa de cooperativas rurales de seguridad, que luego fueron denominadas “asociaciones”, las cuales, a juicio de las ONG de derechos humanos, tienen el serio riesgo de convertirse en formas legalizadas de grupos paramilitares para realizar acciones armadas ofensivas contra la población civil que sea considerada simpatizante o colaboradora de los grupos guerrilleros.

Años más tarde, el gobierno del ex presidente Uribe Vélez se pronunció al respecto. En respuesta a las preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad colombiana sobre las asociaciones de seguridad rural, manifestó que las autoridades militares y de policía ejercerían un celoso control sobre dichas asociaciones para que no desbordaran el marco de su acción, en apariencia circunscrito a labores de información a las autoridades y dotadas con armas de defensa personal.

Al respecto, es preciso anotar que resulta difícil aceptar que un gobierno pueda comprometerse a mantener el control sobre la acción de dichas asociaciones, para evitar que se conviertan en formas legalizadas de paramilitarismo, si se tiene en cuenta que uno de los argumentos de las autoridades estatales para explicar la ausencia de resultados positivos en la lucha contra este fenómeno es precisamente que las

autoridades militares y de policía han estado imposibilitadas para controlarlas. La prueba de que muchas de las actuaciones del paramilitarismo se llevaron a cabo con la permisividad de las fuerzas estatales radica en las declaraciones de algunos líderes de las autodefensas que han sido capturados:

“Tanto el Magdalena Medio como el Nordeste Antioqueño se hicieron famosos en los años 80 y 90 por los baños de sangre a que fueron sometidas sus gentes en el accionar conjunto de militares y paramilitares. Si bien Puerto Boyacá fue un punto fuerte de referencia, el modelo paramilitar se expandió en todo este territorio controlado por la brigada N° 14 del ejército. Poco a poco se fueron conociendo y esclareciendo episodios sangrientos, pero la detención de ALONSO DE JESÚS BAQUERO AGUDELO, líder paramilitar ampliamente conocido en la zona con el alias de ‘BLADIMIR’ o ‘El Negro Bladimir’, permitió esclarecimientos que dejaron a descubierta una poderosa estructura paramilitar amparada por el ejército” (Pachakuti, 2004: 29).

Diferentes observadores de derechos humanos, en referencia al caso colombiano, recomiendan desmontar los grupos paramilitares e investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad provenientes de estos grupos; igualmente se considera que debe impedirse la presencia y actuación de mercenarios en el territorio nacional. Además, deben hacerse reales las órdenes de captura existentes contra miembros de grupos paramilitares, al tiempo que se debe investigar y sancionar a sus patrocinadores, integrantes y miembros de las autoridades que han intervenido en su promoción y/o protección.

Con la idea de que la justicia recayera sobre los promotores de la degradación política y social en Colombia, se ha creado en 1987 una comisión dirigida a formar un banco de datos sobre derechos humanos y violencia política. La idea surgió a raíz del ascenso en las estadísticas de hechos violentos, advertido por el aumento de denuncias de torturas infligidas a miles de prisioneros políticos por agentes del Estado, y que en los años ochenta superó unos umbrales que en pocos países se habían alcanzado. El trabajo que se ha realizado al respecto comprende un marco conceptual que contempla las violaciones a los derechos humanos fundamentales, las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, la violencia político social y las acciones bélicas que responden a métodos no proscritos en los conflictos armados (Pachakuti, 2004: 86).

5. Violencia contra los pueblos indígenas y situación jurídica en el Estado colombiano

El objeto de este capítulo es elaborar un balance de la situación indígena en Colombia a partir de los años setenta, década en la cual los grupos indígenas empezaron a tener una participación activa en las decisiones políticas del país¹². En primera instancia, se alude a la situación indígena derivada de la problemática agraria, territorial y de desplazamiento en Colombia –ya analizada en el capítulo anterior en términos globales–, la cual, indiscutiblemente, ha generado numerosos actos de violencia en el país. A continuación, se describe el escenario que ha dado origen a las diferentes organizaciones indígenas y los principales hechos de violencia contra las comunidades nativas. Después, se hace un reconocimiento del marco jurídico colombiano y la normativa encaminada a la preservación y defensa de los pueblos indígenas, con el fin de caracterizar el contexto que define legalmente la situación de dichos pueblos en el panorama nacional, haciendo referencia específica, por último, a las consecuencias negativas que produce la sobreexplotación de recursos naturales en los territorios indígenas y a los mecanismos legales de protección para regular estas actividades.

5.1. Problemas agrarios y territoriales y desplazamientos en Colombia

En el caso concreto de Colombia, la forma en que se ha poblado el país y se ha organizado la estructura económica, social y política, ya desde los tiempos de la colonización española, ha creado las bases de un problema agrario y territorial que hasta el presente sigue sin resolverse. Este proceso, que ha sido revisado en el capítulo anterior, ha implicado directamente en sus dos vertientes a los indígenas. Se trata de un conflicto agrario desde la perspectiva del indígena o el campesino excluido de su acceso a la tierra; es un problema territorial cuando los indígenas son despojados del dominio sobre el espacio que habitan colectivamente; la expulsión o el desplazamiento de una población constituyen tragedias reales que, obviamente, se entrelazan con ambos problemas e inciden, en particular, en la segunda.

¹² A partir de esta década, los indígenas son considerados actores sociales, los cuales centran su discurso en la defensa de la autodeterminación e identidad, reivindicando sus territorios y autonomía. Los diálogos y negociaciones que llevarán a cabo en adelante, estarán basados en el reconocimiento de la diferencia, imagen que la misma historia se ha encargado de construir (Coral, 2011: 109).

Tres son los hitos principales que históricamente han contribuido a configurar la situación indígena actual. El primero responde a la serie de procesos de expropiación y desterritorialización de los pueblos indígenas desencadenados con la expedición de la Ley 11 de 1821 que consideró a los grupos nativos en igualdad de condiciones frente a los demás colombianos, ordenando la repartición de sus resguardos, empujándolos, de esta forma, a las áreas montañosas y boscosas, y expulsándolos de las tierras productivas que les pertenecían, o convirtiéndolos en jornaleros, aparceros u otras variantes de la economía campesina. El segundo fenómeno fue la ampliación de la frontera agrícola y la colonización campesina que se produjo desde mediados del siglo pasado, afectando de forma directa a los territorios indígenas. Esta vez fueron los campesinos desplazados por la violencia política de los años cincuenta quienes vieron en los territorios de las comunidades de la zona andina un refugio, así como en las fronteras de selva y tierras bajas habitadas por los grupos aborígenes, dando pie a nuevas realidades conflictivas. El tercero, y más reciente, se corresponde con la crisis agraria que se vivió en la década de los setenta, desencadenada por la colonización de las zonas de cultivos ilícitos, proceso que abarcó gran parte de los territorios baldíos y áreas altas de montaña, muchos de los cuales eran colindantes con territorios indígenas o han sido espacios tradicionales de algunos de estos pueblos:

“Para nosotros los pueblos indígenas, los cultivos ilegales nos han significado grandes pérdidas de territorios, disminución de los recursos alimentarios por la contaminación, la tala de bosques y los daños a la fauna. Por otra parte nos ha traído la división de la comunidad, el debilitamiento de la autoridad tradicional, la cultura y de los lazos familiares, porque cada vez son más los compañeros indígenas que trabajan como jornaleros en las plantaciones de ilícitos, descuidando sus familias y abandonando las prácticas productivas tradicionales, obligando a cambiar la dieta tradicional” (ONIC, 1998: 140-141).

El proceso de colonización campesina de mediados del siglo pasado fue producto de diversos fenómenos de exclusión con expectativas sociales de inclusión a medio plazo; sin embargo, dicha colonización muestra que su forma fundamental fue el establecimiento de economías locales y regionales de pequeña escala, en pocas ocasiones integradas a los circuitos nacionales y que se caracterizó por aplicar estructuras políticas de corte gamonal. Este proceso fue determinado por el deseo expansivo de los terratenientes y de modernización del Estado y fue avanzando por los

caminos que poco a poco abrían los colonos, que a su vez rechazaban los modelos autónomos y pretendían apoderarse de los territorios de los indígenas:

“El avance de la colonización sobre territorios indígenas y la falta de apoyo por parte del Instituto de Reforma Agraria (INCORA) para adelantar el saneamiento y constitución de resguardos, constituye el principal factor de pérdida de territorio de los pueblos indígenas. En regiones como el Caquetá o el Cauca continuamente se ha dado la presencia de colonos que buscan tierras para el establecimiento de cultivos ilícitos, que conlleva el desplazamiento de los indígenas de sus territorios o su sometimiento como trabajadores” (ONIC, 1998: 94).

En una situación política de estas características, la izquierda revolucionaria de la época, basada en los principios de la revolución cubana –y siguiendo cauces similares a los ocurridos en otros países del Tercer Mundo como Angola, Mozambique o Vietnam (Gros, 1991: 126)–, propuso una estrategia que consistía en la defensa de las economías campesinas mediante grupos armados milicianos que se manifestaron enemigos de toda autonomía territorial en el marco del Estado. Fue así como los territorios indígenas fueron incluidos tanto en la estrategia de la insurgencia como en la del Estado.

De esta forma es como se da el surgimiento de las FARC-EP, en los años sesenta, en el sur del Tolima. Sus antecedentes fueron grupos de guerrillas liberales compuestos, en forma significativa, por campesinos y por indígenas de la región. Esta guerrilla se expandió a las zonas de colonización del piedemonte amazónico, acompañada en su dinámica de formación por indígenas pertenecientes a las comunidades indígenas pijao y nasa que se desplazaron a los departamentos del Meta, Vichada y Caquetá. De igual forma, el EPL tuvo sus inicios en el Alto Sinú y en las sabanas de Córdoba y Sucre, y sus acciones bélicas coincidieron con las luchas indígenas por la recuperación de los territorios del Gran Resguardo Zenú.

Similar fue el proceso de asociación en la conformación territorial indígena en los departamentos del Cauca y Nariño, y posteriormente en Vichada. En esas zonas, los indígenas aprovecharon las crecientes luchas campesina y guerrillera para lograr la expansión y recuperación de sus territorios. Por lo tanto, es común que los grupos armados al margen de la ley, en la actualidad, se encuentren realizando incursiones en territorios de comunidades indígenas, teniendo en cuenta que en algunos casos ellos han llegado a constituirse en el centro de las acciones armadas.

5.2. Formación de las organizaciones indígenas

Aunque se tiene como período de origen de las actuales organizaciones indígenas la década del setenta del siglo pasado, ha de recordarse que los movimientos indígenas hicieron sus aparición en la historia de Colombia en la época colonial, cuando las luchas de estos pueblos por sus territorios comenzaron a tener resultados positivos en el ámbito legal, es decir, alrededor de 1781, cuando el gobierno de turno les devolvió algunos de los terrenos colectivos. Desde finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, empezaron a considerar a los integrantes de estas minorías “ciudadanos”, y bajo el principio de igualdad, se intentó integrarlos a través de la abolición del tributo, la remuneración del trabajo y la privatización de sus territorios con el fin de convertirlos en propietarios. De esta forma, los resguardos debían ser disueltos, hecho que produjo la oposición de algunas comunidades que alegaban ser poseedores de un derecho ancestral:

“Estas políticas originaron diversas reacciones a nivel nacional: en la zona norte los resguardos se disolvieron, mientras que en el suroccidente se opuso resistencia al proceso. Asimismo, la propiedad de la tierra no aumentó el número de propietarios indígenas, por el contrario, sus tierras fueron asimiladas por las haciendas y latifundios, convirtiéndolos en peones, agregados, terrazgueros o concertados. En 1837 los indígenas estuvieron en contra de la disolución de sus territorios colectivos antes recuperados” (Ulloa, 2004: 27).

Pero fue en la década del setenta del siglo XX cuando la lucha por la tierra y la conservación de la misma cristalizó como elemento común entre indígenas y campesinos, por un lado, y los grupos ecologistas, por otro; ello explica que se hayan asociado en muchas ocasiones, ya fuera para recuperar territorios perdidos o por satisfacer las necesidades que derivan de la posesión de un territorio. Fue en esa década cuando, como ya se ha afirmado anteriormente, los indígenas empezaron a ganar protagonismo en el plano político colombiano y cuando sus reclamaciones empezaron a girar en torno a la autonomía y la posesión del territorio, haciendo énfasis en la diversidad étnica (Coral, 2011: 111). En estas circunstancias y con esos objetivos nacieron las actuales organizaciones indígenas que, luchando contra el poder de los terratenientes, dieron vida a un proyecto de corte autonómico y de reconstrucción social:

“Desde los años setenta, debido a las fuertes presiones ejercidas sobre sus tierras y estilo de vida, las organizaciones indígenas incipientes a nivel regional, nacional e internacional se han visto fortalecidas por su alianza con el movimiento ecológico. También pudieron aprovechar el espacio abierto a las organizaciones de la sociedad civil como resultado del proceso de democratización en muchos países de la región. Este proceso de fortalecimiento de las organizaciones indígenas y la creación de redes a nivel de base va acompañado de un importante proceso de revitalización cultural en el que la generación de indígenas más jóvenes y educados desempeña un papel importante.

Dadas las presiones sobre las tierras, los recursos y el modo de vida indígenas, las poblaciones autóctonas son importantes aliadas del movimiento ecológico para la conservación de la diversidad biológica y la gestión sostenible de los ecosistemas frágiles. El mensaje de los pueblos indígenas ha sido puesto de relieve en importantes reuniones internacionales, como la Cumbre para la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. Además, las Naciones Unidas creó un grupo de trabajo sobre los derechos indígenas, proclamó el año y la década de los pueblos indígenas y en 1989 se aprobó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independiente” (Deruyttere, 1997: 9).

La década de los años setenta y comienzos de los ochenta fue, pues, la época de consolidación de las principales organizaciones indígenas de Colombia, entre ellas el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC (1971), y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC (1982), las cuales se han mostrado como entidades dinamizadoras de los procesos reivindicatorios y de resistencia que adelantaban los pueblos indígenas colombianos a lo largo del territorio nacional, para demandar del Estado colombiano medidas de protección para sus territorios ancestrales, entidades culturales y derechos fundamentales:

“Durante los años 70, en América Latina, las organizaciones de base indígenas y sus luchas y reclamos por la diferencia y la identidad, expresadas en movilizaciones políticas que tendían hacia la reconfiguración de su realidad social, tuvieron una diseminación internacional. Durante este tiempo las acciones de los indígenas comenzaron a ser consideradas un tema válido de investigación para los teóricos que analizaban acciones colectivas. Algunos estudiosos de los movimientos sociales creen que sólo hacia la década de 1970 los pueblos indígenas y sus acciones, relacionadas con sus derechos, comenzaron a tener participación política en términos modernos y a tener un impacto político profundo dentro del Estado-nación. Desde entonces, los movimientos indígenas están siendo analizados como actores políticos que han ayudado a cambiar desde nociones de identidad hasta nociones legales, al

confrontar y cuestionar, por ejemplo, las jerarquías autoritarias” (Ulloa, 2004: 17).

El surgimiento de las organizaciones indígenas contó con el apoyo de intelectuales, antropólogos, miembros de la Iglesia, campesinos y algunos aliados internacionales. En este sentido, es importante tener en cuenta el encuentro que tuvo lugar en Barbados, en 1971, donde un grupo de antropólogos, principalmente latinoamericanos, discutieron la problemática de los pueblos indígenas de la región amazónica (Grupo de Barbados 1975). Desde aquel entonces, este grupo hizo varios comunicados denunciando la situación social, económica y política de los indígenas, teniendo diversas repercusiones en las organizaciones indígenas e instituciones académicas y estatales (Grupo de Barbados, 1979, 1994).

Ese intento de salvaguardar el derecho a la tierra y su conservación tuvo como respuesta numerosos actos de violencia contra las comunidades propiciados por sectores económicamente dominantes de algunas zonas del país:

“En la primera etapa de ascenso del actual movimiento indígena colombiano, la violencia que se ejerce contra la población indígena proviene del poder gamonal aliado con la fuerza pública, que actúa fundamentalmente en defensa de intereses territoriales directos. Los datos disponibles en el Sistema de Información sobre Pueblos Indígenas de CECOIN sobre hechos ocurridos en la última parte de esta fase inicial, señalan a terratenientes, colonos y grupos armados al servicio de éstos como los directos responsables de la mayoría de asesinatos políticos, al tiempo que las amenazas y detenciones arbitrarias corresponden a la fuerza pública. Esta situación es consistente con el propio desarrollo del conflicto armado colombiano, en el cual el poder terrateniente se comportaba esencialmente como poder local” (Villa y Houghton, 2004: 30).

5.3. Violencia contra los pueblos indígenas

Los hechos violentos sufridos por los indígenas en Colombia han sido revisados en diferentes investigaciones (véase, especialmente, Kalmanovitz, 1985; Villa y Houghton, 2004) que nos permiten mostrar un panorama de su distribución temporal y espacial a nivel nacional.

En este orden de ideas, casi la totalidad de las violaciones contra pueblos indígenas en el año de 1974, punto de partida de este análisis histórico, corresponde a indígenas nasa del Cauca, víctimas de represalias llevadas a cabo por la policía unida a

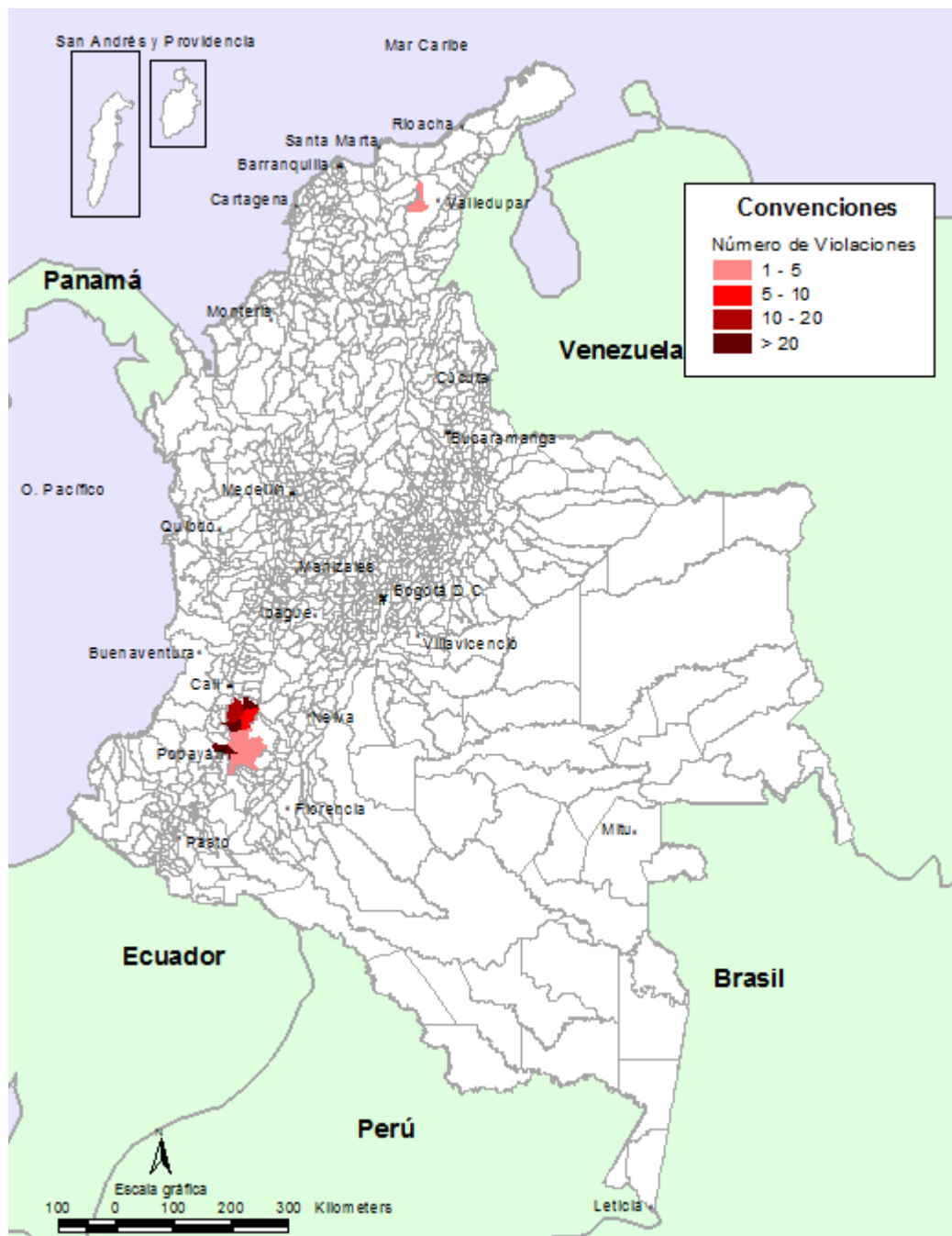
las fuerzas privadas de los terratenientes. Por su parte, 1975 es especialmente crítico, dado que ocurre una matanza de emberá katíos en el departamento del Chocó por parte de terratenientes que pretendían ejercer el control de la producción de oro de los indígenas. Ese mismo año, los coconuco de Puracé son agredidos por la fuerza pública y el brazo armado de los terratenientes, estas agresiones se dieron como respuesta a la recuperación de predios realizadas por los indígenas. En los dos años siguientes, tanto los nasas como los indígenas coconucos siguieron siendo víctimas de las agresiones por parte de los latifundistas y la policía, que reprimieron la acción de recuperación de tierras en distintos puntos del departamento del Cauca (Villa y Houghton, 2004: 30).

El escenario que vivió Colombia a finales de la década del setenta, en el periodo presidencial de Turbay Ayala, 1978-1982, con la aplicación de políticas de corte dictatorial, propició las detenciones arbitrarias en muchos casos acompañadas de torturas, de las cuales muchos integrantes de las comunidades indígenas del país fueron víctimas:

“Su respuesta a los conflictos sociales, agudizados por las medidas neoliberales, fue la militarización de la vida civil. Se estableció por decreto un ‘Estatuto de Seguridad’ que violaba sistemáticamente el habeas corpus de la ciudadanía, cercenaba las libertades de expresión y movilización, ordenaba juzgar a los civiles en cortes militares con limitado derecho a la defensa y restringía los derechos gremiales básicos de los trabajadores. Los movimientos guerrilleros fueron combatidos con políticas de guerra. Desde ‘la violencia’, superada parcialmente por los acuerdos del Frente Nacional, no se había llegado hasta el extremo de institucionalizar la tortura en el país. Abundan las evidencias, documentadas por la organización Amnistía Internacional, de que en los cuarteles se violentaba física y psicológicamente a los sospechosos de pertenecer a movimientos guerrilleros” (Kalmanovitz, 1985: 526).

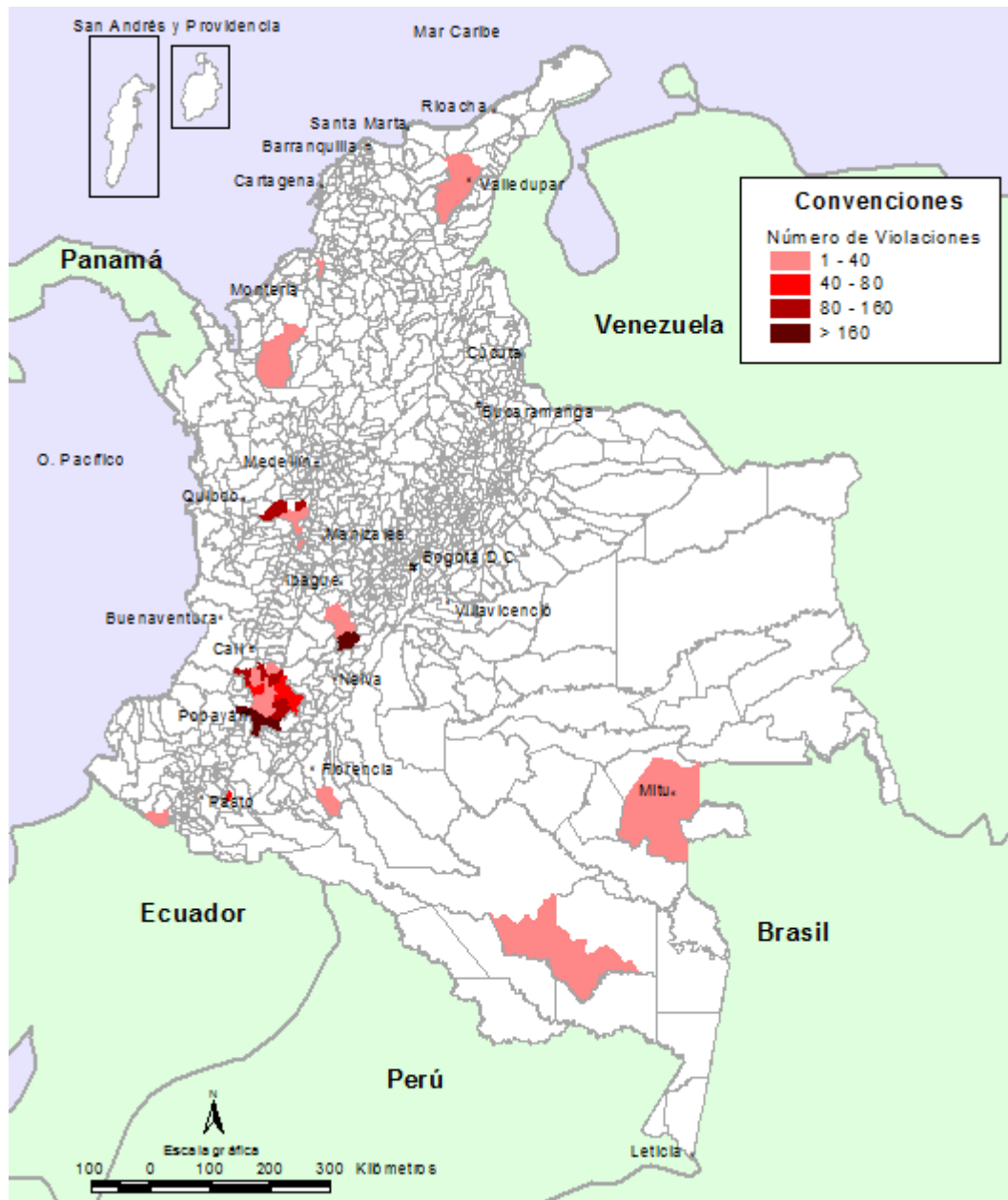
Entre los torturados se encontraron muchos indígenas acusados de pertenecer o colaborar con los grupos insurgentes diseminados por la amplia geografía del país. Los pueblos indígenas que han sufrido en mayor grado estos hechos violentos son los habitantes de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Antioquia, Tolima, Caldas, Chocó y Vaupés. En los mapas 3 y 4, se muestra la localización geográfica de estos hechos.

**MAPA 3: VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS,
1974 (TOTAL HECHOS DE VIOLENCIA POR MUNICIPIOS)**



Fuente: Villa y Houghton, 2004: 30

**MAPA 4: VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS,
PERIODO 1974-1981 (TOTAL HECHOS DE VIOLENCIA POR
MUNICIPIOS)**



Fuente: Villa y Houghton, 2004: 34

La década del ochenta se caracteriza por la ampliación de hechos violentos a nuevas comunidades y departamentos donde anteriormente no había manifestaciones de este tipo. Es así como, entre 1985 y 1986, son protagonistas los indígenas emberá, dujos, emberá katío, pijaos y, entre 1987 y 1988, aparecen por primera vez en el departamento del Amazonas los tikunas que sufrieron una masacre por parte de funcionarios de la policía relacionados con narcotraficantes que operaban en la zona.

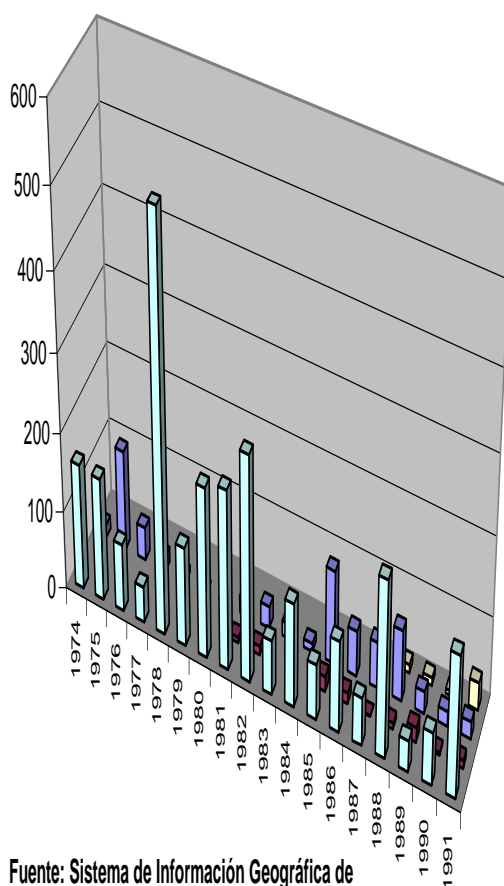
Otra institución del Estado, el ejército, ha realizado operaciones en el Pacífico, zona ya bastante azotada por otros actores del conflicto como los grupos patrocinados por narcotraficantes y terratenientes:

“En estos años, en mayor grado, debieron vivir la violencia los pueblos indígenas de Chocó y Cauca, especialmente como resultado de la intervención del Ejército y de otros actores violentos (terratenientes y narcotraficantes). Esta etapa parece detenerse hacia 1989 y 1990, con un último coletazo en 1991, cuando las matanzas de indígenas Nasa por paramilitares y las detenciones y asesinatos de Pijaos por las fuerzas del Estado, disparan los registros” (Villa y Houghton, 2004: 31).

A partir de los datos aportados por la Gráfica 1, se puede deducir que existe una constante en la autoría de los hechos violentos, señalando básicamente a los grandes terratenientes, narcotraficantes y, en algunos casos, a colonos medianos y grupos armados que serían los precursores de los paramilitares. Es importante hacer notar que muchos de los conflictos por tierras en esta época fueron resueltos violentamente por las distintas fuerzas armadas del Estado:

“En la década de los ochentas, podemos afirmarlo, el país está bien lejos de la felicidad después de un siglo de desarrollo capitalista. Fieramente dividido entre los que lo tienen todo y los que nada tienen, entre campesinos sin tierra y terratenientes a los que les sobra, entre la patronal y los trabajadores, entre ejército y movimientos guerrilleros, entre Estado y oposición, el país se enfrenta, además, a una crisis económica profunda y protractada” (Kalmanovitz, 1985: 521).

**GRÁFICA 1: VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS
INDÍGENAS, 1974-1991. (VIOLACIONES INDIVIDUALES SEGÚN TIPO
DE ACTORES)**



Fuente: Sistema de Información Geográfica de
Pueblos Indígenas de CECOIN

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Actores Estatales	160	156	86	46	523	126	216	227	284	69	131	70	115	60	221	39	66	177
Grupo insurgente								7	11			19	14	1	8	19	4	10
Otros Actores Violentos	17	129	43	19	8	4	2	21	28	19	11	119	58	58	90	28	19	22
Paramilitares														55	11	10	6	35

Fuente: Villa y Houghton, 2004: 36

Entre los años 1990 y 1994, a diferencia de lo visto en años anteriores, se puede notar una clara disminución de las acciones bélicas por parte de los grupos al margen de la ley y de las fuerzas armadas estatales. Quizá por estar en curso la creación de una nueva Carta Política, los distintos actores vieron la posibilidad de que sus necesidades pudieran ser atendidas en el nuevo escenario político que se gestaba para el país.

Los primeros años de la década del noventa, además de caracterizarse por una aparente tregua entre los principales actores del conflicto armado, también tuvieron un carácter especial por la continuidad en las acciones tendientes a la recuperación de tierras por parte de algunas comunidades indígenas, lo mismo que por la búsqueda del reconocimiento legal de sus territorios y gobiernos propios. Un importante paso dado en aquel periodo, en lo concerniente a la defensa de sus derechos, fue la participación indígena en la Asamblea Nacional Constituyente realizada en 1990:

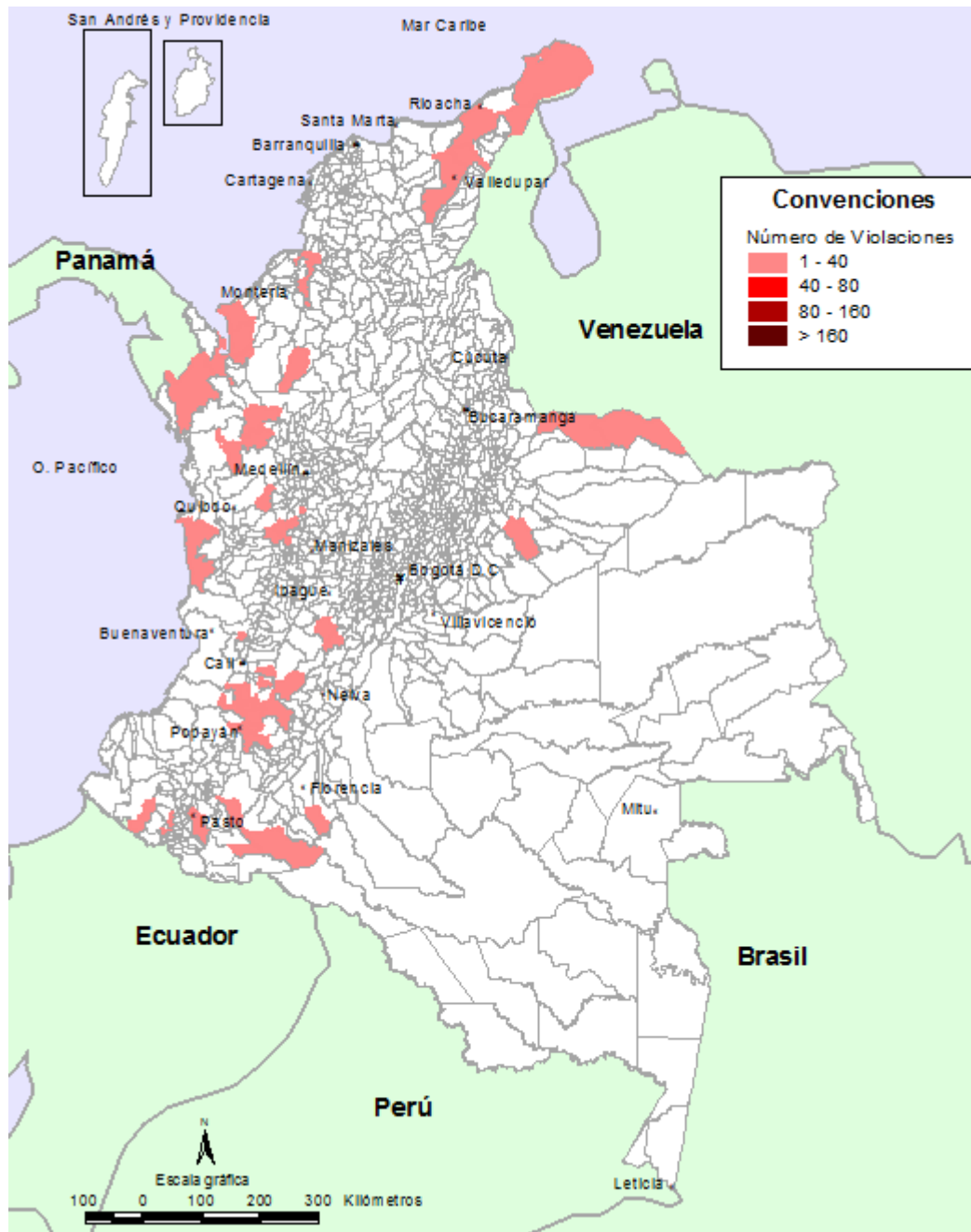
“...en la Asamblea Nacional Constituyente, elegida el 9 de diciembre de 1990, se percibe un nuevo ambiente favorable para la causa indígena, con una participación activa de sus representantes elegidos por votación popular. Propuestas como el carácter multiétnico y pluricultural de la nación, la protección de los recursos naturales y de sus riquezas culturales, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los grupos étnicos y de sus territorios como entidades territoriales autónomas, fueron escuchadas en este foro, en su mayoría tuvieron gran acogida y quedaron consignadas en el texto final” (Penagos, 2001: 11).

Para las comunidades indígenas, en general, los años comprendidos entre 1992 y 1996 formaron parte de un período de expectativa y optimismo ante los derechos constitucionales conquistados y fue creciente su participación en el escenario político nacional. Con motivo de la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América, gran parte de las organizaciones indígenas se implicaron en la formulación de propuestas de ordenamiento territorial y la construcción de espacios de diálogo con el Estado, dando cabida a la entrada de organizaciones y líderes en las actividades electorales, donde intervino un gran número de dirigentes indígenas. A pesar de ser esta una época de relativa paz, entre 1997 y 2004 se puede advertir la incorporación de algunos pueblos nativos en el conflicto nacional, determinándose, de esta forma, sus inclinaciones políticas.

Los actos violentos que se ejercen en adelante son de tipo, principalmente, político. En este sentido, con respecto a las fases de ascenso del movimiento indígena, la primera en la década del setenta hasta 1982, y la segunda de 1982 hasta 1991, la violencia que se ejerce es de corte gamonal. Los terratenientes y algunos narcotraficantes en ascenso económico, dueños de grandes extensiones de tierras, iniciaron una serie de persecuciones contra sectores indígenas, con el fin de identificar aquellos que cuestionaban su poder político y control territorial. Es claro que en estos años aún era marginal la situación de los movimientos indígenas dentro de la política nacional, por lo cual, su principal enemigo era el poder político local que estaba representado, en términos generales, por los terratenientes.

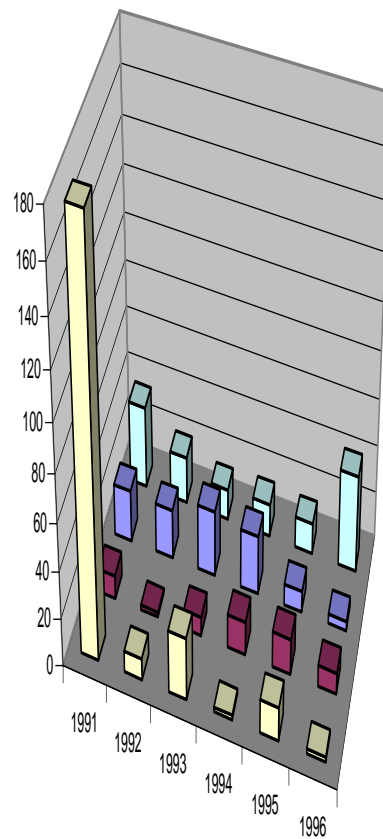
La aparición de los indígenas en el escenario político nacional a través del proceso constituyente, dio una pausa a las luchas que venían llevando a cabo; de hecho, entre 1992 y 1996 se crea un contexto de legitimidad y se le da prioridad a sus derechos sobre los intereses de los terratenientes, quienes se formaron una nueva visión sobre los pueblos indígenas del país, tratándolos ahora como los nuevos actores políticos que había que subordinar o simplemente destruir. Del Mapa 5 se puede concluir que 1996 se muestra como uno de los años en que disminuyeron las situaciones violentas contra los grupos nativos del país con respecto a los años posteriores, aunque fue el pueblo zenú quien sufrió un mayor número de asesinatos perpetrados por paramilitares y grupos subversivos, en lo que puede haber sido la batalla entre los dos movimientos por el control de los pueblos indígenas, siendo los paramilitares los que lograron el control territorial en el departamento de Córdoba. Por su parte, la Gráfica 2 representa claramente los hechos violentos que han cometido los grupos al margen de la ley en este período.

**MAPA 5: VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS,
PERIODO 1992-1996 (TOTAL HECHOS DE VIOLENCIA POR
MUNICIPIOS)**



Fuente: Villa y Houghton, 2004: 40

**GRÁFICA 2: VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS
EN COLOMBIA 1991-1996. VIOLACIONES INDIVIDUALES SEGÚN
ACTORES**



Fuente: Sistema de Información
Geográfica de Pueblos Indígenas de
CECOIN

	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Actores Estatales	177	9	26	2	14	2
Grupo insurgente	10	2	8	14	15	9
Otros Actores Violentos	22	21	28	25	9	4
Paramilitares	35	20	13	14	13	41

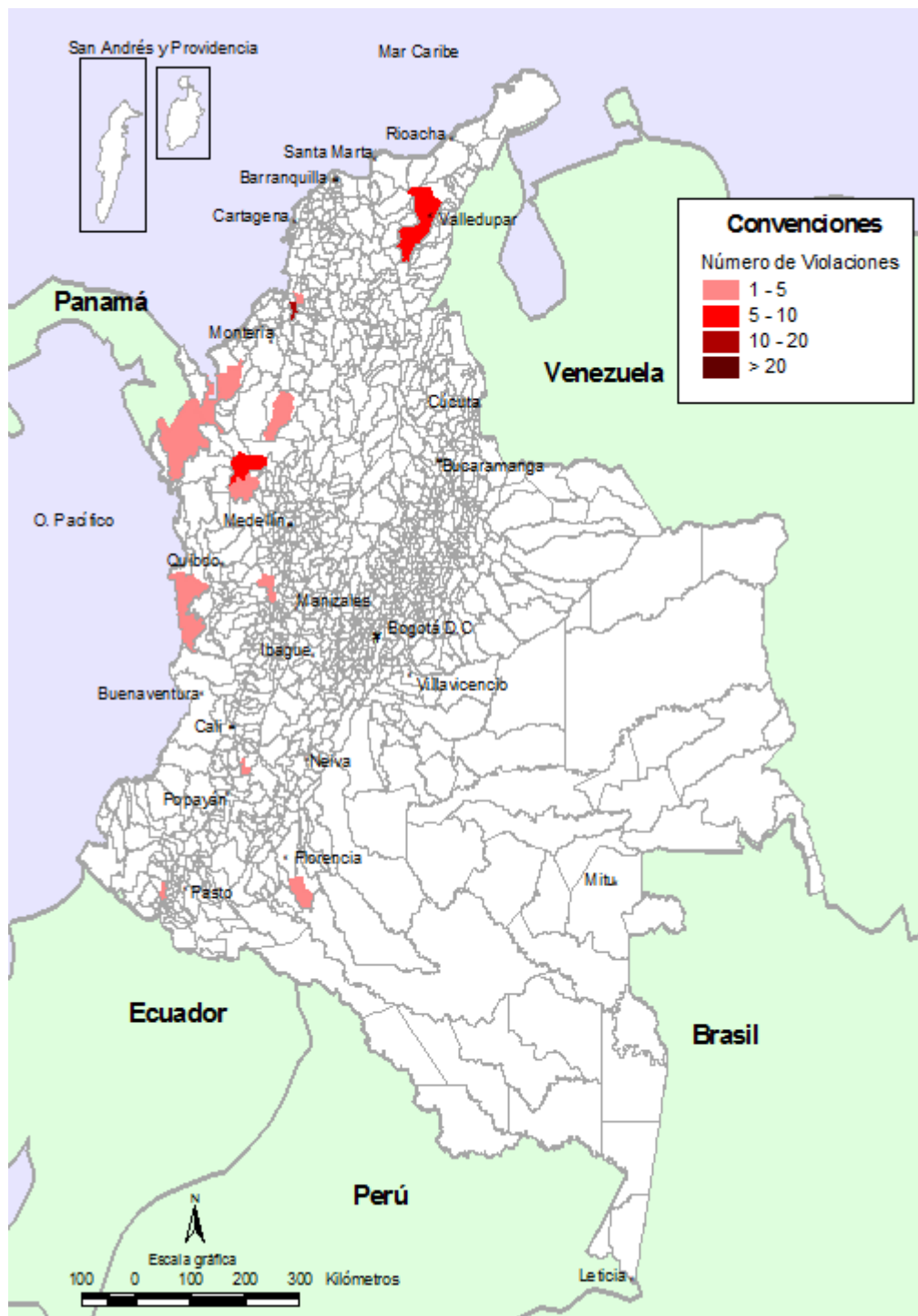
Fuente: Villa y Houghton, 2004: 38

Comparando los mapas 6 y 7, se puede deducir que en 1996 solo se registran hechos de violencia en 14 municipios de 9 departamentos, mientras que entre 1997 y 2004 el número de municipios se eleva a 44 en 16 departamentos, lo cual muestra que el incremento de la violencia e inseguridad a que se ha visto sometido el país se ha triplicado en pocos años. Según el mapa que representa el período 1997-2004, puede notarse el crecimiento de tres corredores estratégicos: uno en el norte, que comprende la zona del Gran Urabá, sur de Bolívar y Cesar, dominado por los paramilitares; otro que comprende la zona del piedemonte del Putumayo, dominado por las FARC-EP; y un tercero que busca la salida al Pacífico, atravesando el sur del Tolima, norte del Cauca, sur del Valle y el Macizo colombiano.

En el período comprendido entre 1997 y 2004, las comunidades nativas se integran a la dinámica de guerra del país, dado que se ven obligadas a defender una lucha que en muchos casos trasciende sus territorios e intereses locales. “La breve tregua post-constitucional termina en 1997, cuando se inicia un fuerte incremento de la violencia política que se sostiene hasta el presente. A partir de entonces los territorios indígenas que son afectados por hechos de violencia coinciden con las del conflicto general, a diferencia del primer período cuando tienen una geografía y dinámica específicas” (Villa y Houghton, 2004: 41).

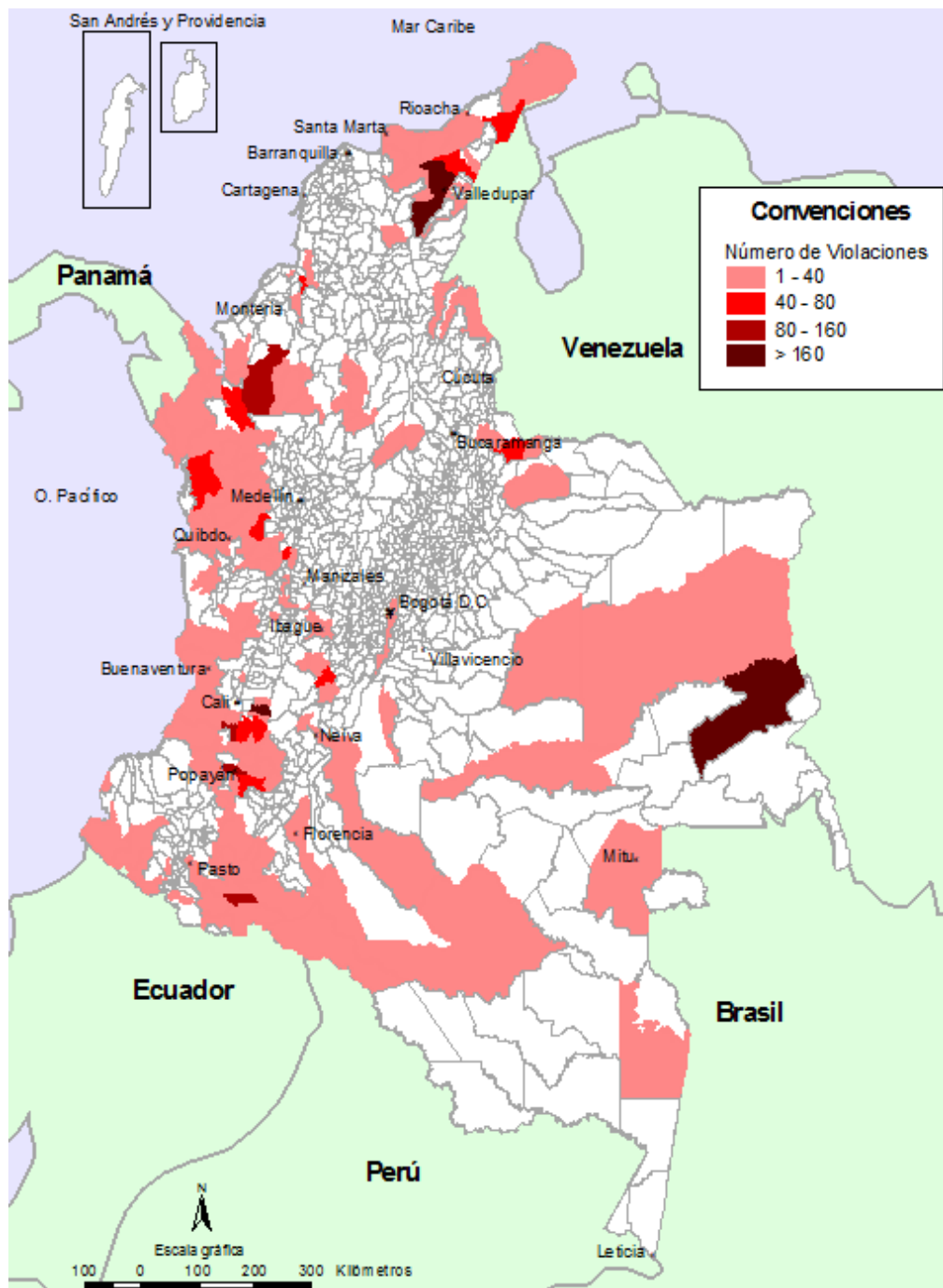
La evolución del conflicto armado en Colombia, no solo expresa la violación de los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, sino que también representa un papel fundamental en la conformación del Estado y de la sociedad civil en general, definiendo la territorialidad y la economía, y articulando los modelos sociales rural y urbano, en los cuales los grupos indígenas hasta ese momento no habían tenido participación alguna.

**MAPA 6: VIOLENCIA POLITICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS
1996 TOTAL HECHOS DE VIOLENCIA POR MUNICIPIOS**



Fuente: Villa y Houghton, 2004: 42

**MAPA 7: VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS
PERIODO 1997-2004 TOTAL HECHOS DE VIOLENCIA POR
MUNICIPIOS**



Fuente: Villa y Houghton, 2004: 52

A partir de las Tablas 2, 3 y 4, se puede concluir que la participación indígena en el escenario político del país ha aumentado considerablemente, pero así mismo se ha intentado anular su intervención eliminando muchos de los líderes de las diferentes comunidades. De las 6.745 violaciones registradas en el período comprendido entre 1974 y 2004, son 1.889 los asesinatos políticos contra dirigentes y autoridades, de los cuales, la mayor parte de homicidios se han perpetrado en los grupos que pertenecen a la franja del Pacífico y la zona Atlántica.

De la misma forma, Los datos recopilados desde 1997 a 2004, representados en la Gráfica 3, señalan como principal responsable de los actos violentos contra la población indígena a los grupos paramilitares, aunque muchos de esos casos no fueron reivindicados por estas agrupaciones ni pudieron ser identificadas por las víctimas debido al proceso de unificación de mando dentro de las autodefensas que operaban en la zona.

En Antioquia la responsabilidad de los hechos es repartida entre la insurgencia y los paramilitares, mientras en el Chocó la gran mayoría son atribuidos al ejército y los paramilitares, demostrando así que en la primera región la lucha se ha llevado a cabo por tratar de ganar las bases de apoyo, mientras que en el Chocó la mayoría de las incursiones han sido orientadas a castigar y a generar terror en la población, buscando con todo esto que la insurgencia pierda la hegemonía territorial que había logrado hasta entonces.

TABLA 2: VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS
1974-2004 TOTAL POR TIPO DE VIOLACIÓN

Año	ASESINATOS POLÍTICOS	DESAPARIC. FORZADAS	HERIDOS	SECUESTRO	VIOL. SEX. / TORTURA	AMENAZA INDIVIDUAL	DETENCIÓN ARBITRARIA / RETENCION	TOTAL
1974	17		3		3		154	177
1975	5		19		137		124	285
1976	10		43		9	2	65	129
1977	9		14		7	3	32	65
1978	6		1	1	247		276	531
1979	4	1	9		13		103	130
1980	11		12		64		131	218
1981	21		3		18	14	199	255
1982	45		17		9	2	250	323
1983	19	1	19		21		28	88
1984	13		21		63	25	20	142
1985	27		113				68	208
1986	27	1	48		8		103	187
1987	93	9	27		16		29	174
1988	90	21	15	4	60	6	134	330
1989	43	11	7		9	4	22	96
1990	36	3	1		17		38	95
1991	52	1	3	6	99		83	244
1992	49	1	1			1		52
1993	50	8	1		5	2	9	75
1994	49	1	4		1			55
1995	30	1		1	11		7	50
1996	39	2	11	4				56
1997	110	19	14	10	20	39	11	223
1998	76	25	10	10	8	59	2	190
1999	62	17	23	37		15	17	171
2000	121	12	65	7	6	30	131	372
2001	182	18	23	5	23	42	101	394
2002	293	18	24	13	48	37	13	446
2003	183	14	22	4	39	54	214	530
2004	117	44	31	28	48	57	129	454
Total	1889	228	604	130	1009	392	2493	6745

Fuente: Villa y Houghton, 2004: 22

**TABLA 3: VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS.
1974-2004 TOTAL POR ETNIA Y TIPO DE VIOLACIÓN**

	ASESINATOS	DESAPARICIONES	HERIDOS	SECUEST.	VIOL. SEX.	AMENAZAS	DETENC. ARBITR.	TOTAL
	POLITICOS	FORZADAS			TORTURAS	INDIVIDUALES	RETENCIONES	
Étnia								
NASA (PAEZ)	565	43	135	30	173	109	1359	2414
PIJAO	71	9	190		399	28	458	1155
EMBERA KATIO	203	56	31	37	126	93	107	653
EMBERA CHAMI	115	24	11	3	56	28	85	322
KANKUAMO	228	11	14	11	16	8	18	306
SENU	91	4	20	4	39	4	96	258
EMBERA	61	10	11	5	51	31	53	222
COCONUCO	12	1	13		34		117	177
WAYUU	90	31	28	8	16	3		176
U'WA (TUNEBO)	5	3	59		11		27	105
WIWA (ARZARIO)	49	9	2		25	2	9	96
YANAACONA	11		2	1		14	45	73
PASTO(QUILLACINGA)	34		12	1	3	2	20	72
INGA	50	2	1	1		7	2	63
ARHUACO (IUKA)	25	6	1		9	10	10	61
KOREBAJU	13			5	9	14	10	51
AWA (CUAIKER)	47		6	3	4	1	1	62
GUAMBIANOS	23	4	4	4	10		2	47
TIKUNA	24		21					45
NO-INDÍGENA	10			2		13	17	42
MULTIÉTNICO DE VAUPÉS	3		3	12			19	37
WOUNAAN (WAUNAAN)	5	3	1		7	14		30
EPERARA SIAPIDARA	17		6		5			28
DIJOS	3		1		2		21	27
SIKUANI (JIVE)	17		5				4	26
BETOYE	8	1	6		5			20
TULE (KUNA)	12	2	2					16
PUINAVE	6		4			1	3	14
KOGUI	5		3			6		14
KOFAN	12		1					13
SIONA	7	2	2			1	1	13
YUKUNA	4	3	5		1			13
KUBEO	10					1		11
KARIJONA	5				5			10
TUCANO (DESEA)	6				3			9
BARI (MOTILON)	5		1			1	1	8
UITOTO	7							7
GUAHIBOS	5		1					6
TOTORO	6							6
CHIMILA (ETTE E'NEKA)	2	3				1		6
PIAPOCO (DZASE)							6	6
OTROS/SIN IDENTIFICAR	5				1		1	7
YUKO (YUKPA)	4							4
KAMENTZA	3						1	4
KURRIPAKO	1		2	1				4
KUIBA	2							2
MAKAGUAJE	1	1						2
MIRAÑA				1				1
DESANO	1							1
NUKAK (MAKU)				1				1
Total general	1889	228	604	130	1010	392	2493	6746

Fuente: Villa y Houghton, 2004: 24

**TABLA 4: VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS
1974-2004. TOTAL Y PORCENTAJE DE VIOLACIONES
INDIVIDUALES POR DEPARTAMENTO Y ETNIA**

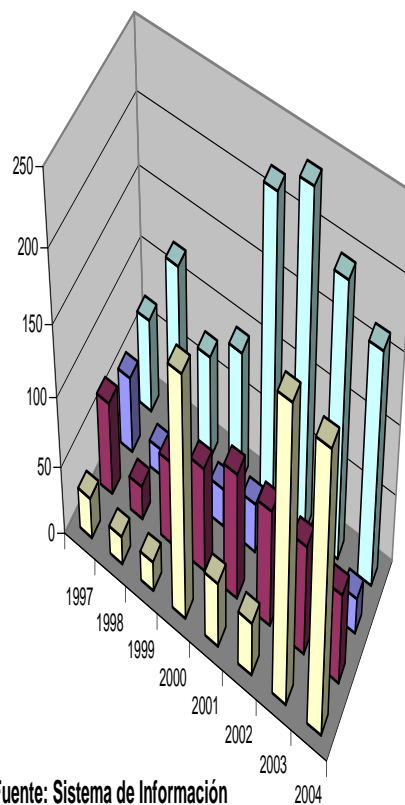
Departamento	Etnia	1974-2004		1997-2004	
		Total	% del total	Total	% del total
CAUCA	NASA (PAEZ)	2136		614	
	COCONUCO	177		3	
	GUAMBIANOS	47		17	
	YANACONA	40		40	
	EPERARA SIAPIDARA	10			
	NO-INDÍGENA COLABORA	9			
	INGA	9		9	
	TOTORO	6		1	
	EMBERA	1		1	
Total CAUCA		2435	36,1	685	24,64
TOLIMA	PIJAO	1154		87	
	NASA (PAEZ)	16			
	NO-INDÍGENA COLABORA	1		1	
Total TOLIMA		1171	17,36	88	3,17
CHOCO	EMBERA KATIO	303		78	
	EMBERA	174		165	
	WOUNAAN (WAUNAAN)	30		24	
	TULE (KUNA)	10		9	
	EMBERA CHAMI	3			
	NASA (PAEZ)	1		1	
	ARHUACO (IJKÁ)	1			
Total CHOCO		522	7,74	277	9,96
ANTIOQUIA	EMBERA KATIO	212		185	
	EMBERA CHAMI	97		5	
	EMBERA	45		39	
	NO-INDÍGENA COLABORA	25		25	
	SENU	6		1	
Total ANTIOQUIA		385	5,71	255	9,17
CORDOBA	SENU	240		52	
	EMBERA KATIO	134		130	
	NO-INDÍGENA COLABORA	3		3	
Total CORDOBA		377	5,59	185	6,65
CESAR	KANKUAMO	303		256	
	ARHUACO (IJKÁ)	35		22	
	WIWA (ARZARIO)	7		7	
	YUKO (YUKPA)	4		1	
	NO-INDÍGENA COLABORA	2		2	
	EMBERA KATIO	1		1	
Total CESAR		352	5,22	289	10,4

LA GUAJIRA	WAYUU	175		119	
	WIWA (ARZARIO)	89		63	
	KOGUI	5		5	
	KANKUAMO	1		1	
Total LA GUAJIRA		270	4	188	6,76
PUTUMAYO	NASA (PAEZ)	93		90	
	INGA	51		39	
	AWA (CUAIKER)	47		47	
	YANACONA	33		33	
	KOFAN	13		10	
	SIONA	13		13	
	PASTO (QUILLACINGA)	12		12	
	UITOTO	5		5	
	KAMENTZA	4		3	
	EMBERA KATIO	3		3	
	NO-INDÍGENA COLABORA	2		2	
	EMBERA	1		1	
Total PUTUMAYO		277	4,11	258	9,28
VALLE DEL CAUCA	NASA (PAEZ)	138		117	
	EMBERA CHAMI	7		5	
	EMBERA	1		1	
Total VALLE DEL CAUCA		146	2,16	123	4,42
CALDAS	EMBERA CHAMI	121		54	
Total CALDAS		121	1,79	54	1,94
RISARALDA	EMBERA CHAMI	94		66	
Total RISARALDA		94	1,39	66	2,37
NARIÑO	PASTO (QUILLACINGA)	60		17	
	EPERARA SIAPIDARA	18			
	AWA (CUAIKER)	14		13	
Total NARIÑO		92	1,36	30	1,08
BOYACA	U'WA (TUNEBO)	87		64	
Total BOYACA		87	1,29	64	2,3
CAQUETA	KOREBAJU	51		21	
	INGA	2		2	
	MAKAGUAJE	2			
	OTROS/SIN IDENTIFICAR	1		1	
	NASA (PAEZ)	1		1	
	UITOTO	1		1	
	PIJAO	1		1	
Total CAQUETA		59	0,87	27	0,97
HUILA	DUJOS	27			
	NASA (PAEZ)	27		27	
Total HUILA		54	0,8	27	0,97
VAUPES	COMPLEJO MULTIÉTNICO	37		37	
	KUBEO	6		3	
	DESANO	1			
Total VAUPES		44	0,65	40	1,44
MAGDALENA	ARHUACO (IUKA)	25		20	
	KOGUI	9		3	
	CHIMILA (ETTE E'NEKA)	6		6	
Total MAGDALENA		40	0,59	29	1,04

NO DEFINIDO	TIKUNA	35			
	TULE (KUNA)	4		4	
Total NO DEFINIDO		39	0,58	4	0,14
ARAUCA	BETOYE	20		20	
	SIKUANI (JIVE)	3			
	TULE (KUNA)	2			
	U'WA (TUNEBO)	2		2	
	GUAHIBOS	2			
	KUIBA	2			
Total ARAUCA		31	0,46	22	0,79
GUAINIA	PUINAVE	13		10	
	PIAPOCO (DZASE)	6		6	
	KUBEO	5			
	KURRIPAKO	4		3	
Total GUAINIA		28	0,42	19	0,68
AMAZONAS	YUKUNA	13			
	TIKUNA	10			
	MIRAÑA	1		1	
	UITOTO	1			
Total AMAZONAS		25	0,37	1	0,04
NORTE DE SANTANDER	U'WA (TUNEBO)	16		16	
	BARI (MOTILON)	8		8	
Total NORTE DE SANTANDER		24	0,36	24	0,86
GUAVIARE	KARIJONA	10			
	TUCANO (DESEA)	9			
	GUAHIBOS	4			
	NUKAK (MAKU)	1		1	
Total GUAVIARE		24	0,36	1	0,04
META	SIKUANI (JIVE)	16		9	
	NASA (PAEZ)	2		2	
Total META		18	0,27	11	0,4
SUCRE	SENU	12		3	
Total SUCRE		12	0,18	3	0,11
VICHADA	SIKUANI (JIVE)	7		5	
	PUINAVE	1		1	
Total VICHADA		8	0,12	6	0,22
BOGOTA D.C.	INDIGENAS RESIDENTI	2			
	KANKUAMO	2		2	
	WAYUU	1		1	
Total BOGOTA D.C.		5	0,07	3	0,11
CASANARE	OTROS/ SIN IDENTIFIC	4			
Total CASANARE		4	0,06		0
SANTANDER	INGA	1		1	
Total SANTANDER		1	0,01	1	0,04
Total general		6745	100	2780	100

Fuente: Villa y Houghton, 2004: 59, 60, 61, 62

**GRÁFICA 3: VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS
EN COLOMBIA 1997-2004. VIOLACIONES INDIVIDUALES SEGÚN
ACTORES**



Fuente: Sistema de Información
Geográfica de Pueblos Indígenas
de CECOIN

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Actores Estatales	30	21	22	172	47	39	207	197
Grupo insurgente	68	25	61	76	91	84	79	65
Otros Actores Violentos	56	20	12	28	36	85	49	26
Paramilitares	69	124	76	96	220	238	195	166

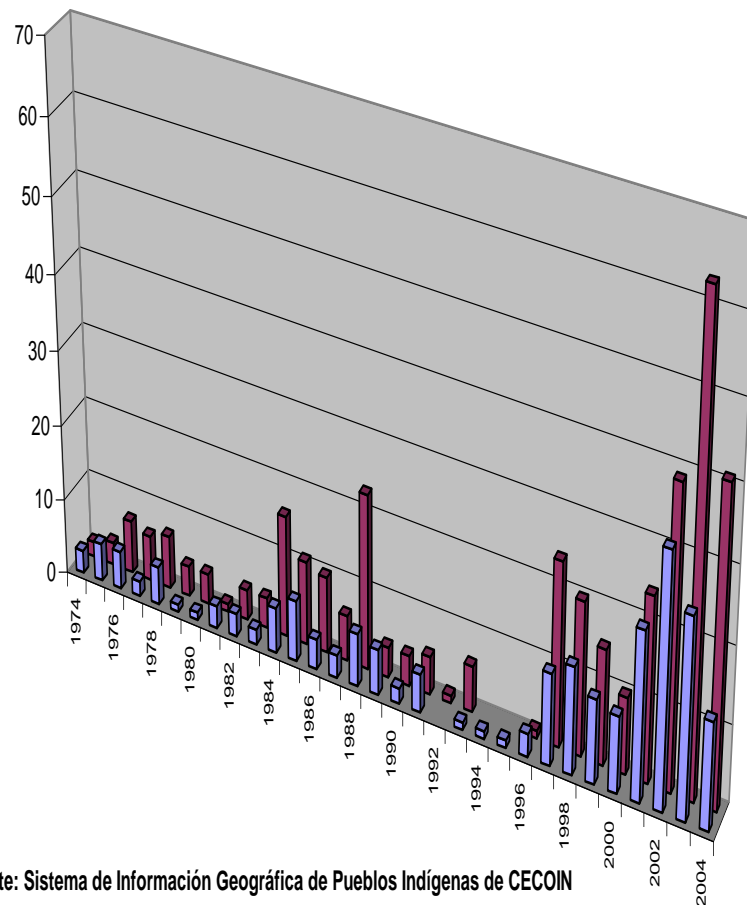
Fuente: Villa y Houghton, 2004: 44

De otra parte, la Gráfica 4 evidencia el aumento de la violencia entre 1996 y 2004, donde el hecho más relevante en lo que se refiere al 2003 es la aparición de las fuerzas militares y los paramilitares como responsables de más del 83% de los desplazamientos masivos, con el 55% bajo responsabilidad de los primeros y el 28% por parte de los segundos. Las anteriores cifras constituyen un antecedente al ascenso de Álvaro Uribe a la presidencia en el 2002 y el respaldo de su gobierno a las fuerzas militares a través de su estrategia de “Seguridad Democrática”. El apoyo a las acciones llevadas a cabo por los paramilitares se afirma en la postura política oficial de no distinguir entre combatientes y no combatientes, a la vez que promueve la participación de la población civil en la guerra.

En este período, se ha caído en el fallo de reconocer el conflicto como esencialmente político, sin contar con los intereses económicos de los actores armados. Si no se tienen en cuenta todos los factores que participan en la disputa, no es posible determinar la relación que existe entre una guerra económico-política y el papel de los distintos grupos indígenas. En este hecho ha radicado gran parte de las prevenciones existentes en las comunidades y líderes indígenas, que ven con desconfianza una errada interpretación de la guerra, donde no se ha tenido en cuenta que lo que buscan los actores armados es el dominio de sus territorios con el fin de obtener enormes beneficios económicos. “...los campesinos que viven en la selva no tienen rentabilidad alguna cuando siembran y comercializan sus productos agrícolas, para sobrevivir se ven obligados a sembrar coca, que es el único producto rentable” (ONIC, 1998: 141).

De esta forma se comprueba cómo una guerra política se transforma en una lucha donde la disputa por recursos económicos acapara gran parte de las acciones militares, y en la cual la violencia contra las distintas comunidades pareciera confirmar el carácter político de la misma. Por lo tanto, dos componentes se logran identificar al respecto: la existencia prolongada del conflicto de forma encubierta, y la rápida escalada del mismo en los últimos años.

**GRÁFICA 4: VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS
EN COLOMBIA 1974-2004. TOTAL CASOS DE VIOLACIONES
COLECTIVAS**



Fuente: Sistema de Información Geográfica de Pueblos Indígenas de CECOIN

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Amenaza Colectiva	3	5	5	2	5	1	1	3	3	2	6	8	4	3	7	6	2	5		1	1	1	3	12	14	11	10	22	33	26	14
Acciones Bélicas	2	3	7	6	7	4	4	1	4	4	16	11	10	6	23	4	4	5	1	6			1	24	20	15	10	24	39	63	41

Fuente: Villa y Houghton, 2004: 50

Por efecto de la prolongación de la guerra, los actores principales del conflicto se han encontrado durante años en un estado “cómodo”, que les ha permitido reproducirse y crecer sin ponerse en riesgo los unos con los otros, haciendo que la insurgencia ejerciera un control en las zonas de colonización, los militares dominaran los espacios de latifundio, el Estado lograra reproducir su relativo control, y la actividad económica se desarrollara sin grandes traumatismos. Estas condiciones terminaron creando un sistema de guerra que adoptó una lógica más allá de las intenciones y los intereses de los actores. Todo lo anterior indica que ha habido un fracaso de las instituciones, de los canales y de los mecanismos políticos prevalecientes para mediar y arbitrar conflictos entre grupos sociales y políticos antagónicos.

Esta situación, aunque nunca ha querido ser aceptada por el gobierno colombiano, se ha puesto al descubierto cuando han entrado en escena los grupos de narcotraficantes y paramilitares, dispuestos a luchar por el control de las zonas claves para el cultivo, fabricación y transporte de drogas:

“El gobierno colombiano ha incrementado el gasto público, como pretexto utiliza la disculpa del narcoterrorismo, y la erradicación de los cultivos ilegales invirtiendo grandes recursos en infraestructura militar y de seguridad, sacrificando la inversión social, mientras a las comunidades indígenas no se les ha hecho efectivo su derecho al 2.0% del presupuesto del producto interno bruto” (ONIC, 1998: 140).

La incorporación del narcotráfico y el paramilitarismo al sistema en la década del ochenta, ha logrado intensificar la dinámica del conflicto en los años posteriores. En ese contexto, los planes de los actores han provocado la utilización de todos los recursos para la guerra, incluidas las personas que deben formar parte de los medios para realizarla. En la primera fase quedan subordinadas las razones económicas y políticas a la lógica de la guerra; sin embargo, a medida que se desarrolla la disputa, es claro que lo primero que se intenta defender son los intereses económicos de los actores, por lo cual, son estos términos los que dirigen los hilos de la controversia:

“En cuanto a los paramilitares, tienen respaldos muy sólidos en nuestras altas esferas económicas, políticas y militares y una estrategia y táctica común con las fuerzas del Estado y el poder económico. Por supuesto que no se van a desmovilizar antes de que lo haga la guerrilla, pero además tienen otras funciones que cumplir como por ejemplo limpiar de población no controlada las zonas de interés estratégico, para beneficio de sus patrocinadores. Es probable

que a muchos de los que apoyan les convenga la paz, pero siempre y cuando no tengan que pagar un mayor precio por ella” (ONIC, 1998: 62).

En el caso de los pueblos indígenas, el ataque a sus gobiernos y territorios tiene sentido al ser vistas las comunidades como obstáculo para el logro de los intereses propios del sistema de guerra: el impedir el reclutamiento de jóvenes indígenas, la prohibición del paso por sus territorios y la escasa disponibilidad alimentaria. De esta forma, los actores armados hacen una revisión de las posiciones políticas indígenas para concluir quién está a su favor y quién no.

La orientación político-militar basada en el control territorial y de sus habitantes, característica del Estado colombiano, choca con el pensamiento indígena. Entre los intereses militares de los actores armados, está la aplicación de una estrategia basada en el reclutamiento forzoso de hombres, buscar el control y neutralización de las fuerzas enemigas, el suministro de infraestructura de guerra, lograr el control de zonas propicias que les permita la movilidad para llevar a cabo sus acciones y el repliegue en caso de sufrir alguna ofensiva por parte del adversario. Todo lo anterior obliga a realizar prácticas de imposición, incorporación, asesinatos selectivos e intervención en los ámbitos de los gobiernos autónomos como los de los grupos indígenas, produciendo la degradación del conflicto y mostrando desprecio por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario:

“...todos los actores armados van a seguir la guerra según su propia lógica. Tal vez la estrategia básica, común a guerrillas y autodefensas, sea la acumulación de poder territorial. Se trata de dominar amplias zonas donde sea nula la presencia del adversario y donde la población necesariamente esté subordinada a los mandos del grupo respectivo.

Para los pueblos indígenas esta situación es fuente de continuo y grave conflicto, pues en defensa de su autonomía se han negado pacíficamente a someterse a la fuerza militar sea esta legal o ilegal” (ONIC, 1998: 62-63).

Es bien sabido que las comunidades nativas en Colombia siempre han manifestado su deseo de mantenerse al margen del conflicto; sin embargo, la incursión de las guerrillas, los paramilitares o el ejército en sus territorios, muchos de ellos sagrados, lo mismo que el ataque a sus líderes y autoridades, como método para desplazar a comunidades enteras con el fin de apropiarse de sus zonas y explotar de forma indebida los recursos naturales, o peor aún, pretender aniquilar sus autoridades tradicionales, ha hecho inevitable, a menos que abandonen sus territorios, la inclusión

total de estos grupos aborígenes en la lógica de la guerra y la imposibilidad de excluirse de ella:

“Creemos que lo que hace el gobierno frente a la población desplazada son paliativos de agua tibia, que no resuelven las causas que origina el desplazamiento y de las políticas que están originando el desplazamiento en Colombia. Hoy las cifras siguen ubicándonos en ser el segundo país que produce más desplazamiento en el mundo. Y aseguramos que mientras continúe la política de seguridad democrática, la aplicación del plan guerrillista, Plan Colombia, las fumigaciones, y se estén generando acciones legislativas que deterioran y vulneran el derecho de los campesinos, afrodescendientes e indígenas, como es el caso del Estatuto de Desarrollo Rural, el desplazamiento continuará en ascenso y sin remedio alguno” (INIPU, 2008: 5).

La guerra en la que los pueblos indígenas se han visto involucrados es en gran medida la misma que sufren las poblaciones campesinas y algunos pobladores de centros urbanos. Esto significa que una comprensión adecuada de la guerra sufrida por los grupos nativos en sus territorios, puede ayudar a entender el modo en que evoluciona el conflicto en otras colectividades sociales, los intereses que se ponen en juego, los ordenamientos del territorio que determinan la acción de los actores armados y, en general, la guerra más allá de las articulaciones que ésta propicia con un territorio o un complejo cultural.

La memoria de los grupos indígenas está llena de hechos violentos y de resistencia a los mismos: abarca cinco siglos que se iniciaron con la Conquista, siguieron con la Colonia y han atravesado la época republicana hasta el presente. En todo este período, el despojo territorial, la imposición política y la obligada integración cultural, han sido los fenómenos que han dirigido la relación de estas comunidades con el mundo occidental.

Al final, recorrer la historia de Colombia descubre más de 120 pueblos indígenas, pero solo hoy sobreviven 91, de los cuales, unos se encuentran en procesos de transformación cultural involuntaria, casi la mitad en situaciones de riesgo de desaparición física, y la gran mayoría refugiados en zonas de baja capacidad agro-productiva:

“La explotación de recursos naturales en los territorios indígenas ha sido un factor que ha afectado negativamente a los pueblos indígenas desde las épocas

de la conquista, el saqueo de recursos, la venta de los mismos y los mecanismos de guerra sucia implementados por las empresas transnacionales y el gobierno colombiano en contra de los Pueblos Indígenas como habitantes ancestrales de estos territorios, para apoderarse de los recursos naturales, ha sido una amenaza permanente para la pervivencia de los pueblos, afectando la cultura, la autonomía, el gobierno propio y el territorio; además las políticas estatales actuales excluyen, niegan y limitan nuestros derechos, hasta el punto de que en la actualidad en nuestro país hay 18 pueblos indígenas en peligro de extinción” (INIPU, 2008: 18).

Desde el punto de vista formal, a lo largo del siglo XX, las comunidades nativas en Colombia han participado reiteradamente en el desarrollo político del país, hecho que se resalta en el ordenamiento territorial actual y la Constitución Política de 1991, donde, por lo menos a nivel retórico, ocupan un importante lugar en la estructura estatal. En los últimos años se han producido cambios en lo referente a su reconocimiento territorial. En la actualidad disponen, en el plano formal, de áreas resguardadas en una extensión cercana al 27% del territorio nacional, en las que se ejerce una relativa autonomía del gobierno indígena. De acuerdo con la normatividad expedida, pudiera deducirse que estos pueblos gozan en Colombia de condiciones satisfactorias que garantizan la reproducción de sus culturas, pero la realidad enseña de manera dramática todo lo contrario.

Los dos períodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) han sido vistos por los pueblos originarios como una etapa donde ha reinado el despotismo y se han ignorado sus derechos. El escándalo por los vínculos de numerosos políticos con los grupos de paramilitares ha acabado de destruir la poca buena imagen que se tenía de Colombia en el exterior:

“Estamos altamente preocupados por el gran escándalo de la parapolítica oficial que vivimos en Colombia, que compromete las estructuras de gobernabilidad y de credibilidad del actual gobierno, sumada a la alta corrupción, y el engaño a la comunidad internacional tratando de mostrar su buena imagen y de ser un gobierno ‘democrático, respetuoso de los derechos humanos’, cuando al contrario viola los tratados y convenios internacionales. Un ejemplo de ellos es tener 33 senadores y congresistas detenidos por el apoyo al paramilitarismo y al narcotráfico, y más de 64 miembros del Congreso se encuentran en investigación preliminar; sumado a las acciones del presidente de la república el cual ofreció prebendas a los congresistas para que le aprobaran su actual reelección presidencial, cometiendo el delito de cohecho, y el día 22 de abril, es detenido el

ex-vicepresidente del Senado, Mario Uribe, primo hermano del Presidente, por los delitos de concierto para delinquir, conformación y apoyo a los grupos paramilitares” (INIPU, 2008: 6).

El 13 de septiembre de 2007, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual es una herramienta que permite comprender la construcción de los estados modernos y plurinacionales, contribuyendo a la supervivencia de los pueblos indígenas del planeta. Sin embargo, a pesar de establecerse a nivel mundial este tipo de instrumentos que están a favor de los pueblos indígenas y promueven su defensa, el panorama de los grupos nativos en Colombia es preocupante, dado que en el momento hay 19 comunidades al borde de su extinción: guanano, wiba, sikuani, sáliba, maiben, masiwuare, yamalero, tsiripo, yaruro, amurua, wipiwi, eduria, cofan, carijona, guyabero, bora, nukak maku y siriano (INIPU, 2008: 6).

Las principales razones que los tienen al borde de su desaparición son la violencia social y política, la escasa protección por parte del Estado de sus derechos, el desplazamiento ocasionado por los distintos grupos armados que los obligan a abandonar sus territorios, el hambre y la desnutrición, el constante asesinato de sus miembros y el desconocimiento de su identidad cultural.

El gobierno, en vez de reconocer los derechos promulgados mundialmente, como la mencionada Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, considera que algunas de sus normas son inconstitucionales porque entiende que, para mantener la protección ciudadana, incluyendo la de los indígenas, no debe realizar consultas a los grupos nativos antes de que las fuerzas armadas puedan entrar en sus territorios, si se trata de su seguridad.

En este sentido, las comunidades alegan que no existe justificación alguna para que haya bases militares en los cabildos, escuelas militarizadas, desplazamiento forzado y asesinatos de sus habitantes por incursiones militares en sus territorios. De otra parte, la Declaración también ha planteado que los pueblos indígenas tienen el derecho de poseer, desarrollar y controlar sus áreas tradicionales y los recursos naturales allí existentes. Por su lado, en oposición a lo promulgado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Estado colombiano ha consagrado constitucionalmente que el subsuelo y los recursos naturales no renovables son de su propiedad, al tiempo que es

el encargado de conservar y garantizar su utilidad pública en beneficio de toda la nación.

Los pueblos nativos consideran que la posición del Estado encaminada a controlar los recursos naturales en territorios indígenas, no es más que un pretexto que abala el saqueo y la explotación de dichas riquezas por parte de las multinacionales: “Muy a menudo, dicho tecnocentrismo es, también, un *etnocentrismo tecnológico*, basado en la creencia en la ineficiencia de las tecnologías locales y en la intrínseca superioridad de todo producto de la tecnología occidental” (Viola, 2000: 49).

Entre el 2007 y 2008, el gobierno, junto con el congreso de la república, inició un proceso de contrarreforma, con el fin de poder, legalmente, violar los derechos territoriales de las comunidades, a través del Estatuto de Desarrollo Rural y la Ley Forestal. De esta forma, se estarían negando los preceptos constitucionales de Colombia, donde se reconoce al país como una nación multiétnica y pluricultural, al tiempo que se estarían desconociendo los compromisos adquiridos en el artículo 40 de la Carta Andina que han aceptado los países latinoamericanos sobre la promoción y protección de los derechos humanos y que se refieren a la adopción de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de las Naciones Unidas (INIPU, 2008: 12).

Excluir a los pueblos nativos de toda toma de decisiones políticas, al igual que la violación permanente a sus derechos, es una forma de violencia que se ejerce permanentemente por parte del Estado. El conflicto que se adelanta en la actualidad en Colombia es, ante todo, una guerra de ideologías e intereses nacionales e internacionales, que ha alcanzado las fronteras de los territorios indígenas, afectando profundamente su diario vivir y su propia existencia:

“Es una guerra que desconoce nuestra existencia y nuestros derechos, por eso nos excluye de los diálogos que adelantan entre ellos, pero que nos incluye en las agendas de las negociaciones. Esa guerra está negociando no solo los territorios indígenas, sino también nuestro futuro y nuestra vida misma. En el área de distensión de San Vicente del Caguán negociaron territorialidad indígena sin que esto haya sido concertado con las autoridades indígenas” (OPIAC, 2010: 344).

La visión de los pueblos originarios colombianos es ajena a la generada por el conflicto que se desarrolla en el país; esta última, tiene como propósito mantener el control territorial de grandes extensiones, incluidas las áreas indígenas con fines, principalmente, económicos. Las comunidades se niegan a participar en los diferentes diálogos, porque para ellos eso sería aceptar que están negociando los predios que ancestral y legalmente les pertenecen. Por eso, su exigencia es única e inmodificable: solicitan que la guerra salga de sus territorios para continuar con su ritmo normal de vida, al tiempo que exigen detener los bombardeos y fumigaciones a los cultivos considerados ilícitos que acaban con los recursos naturales y su fuente de vida.

El gobierno, en su intento de lograr la paz con los distintos actores armados, ha creado el Consejo Nacional de Paz, pero presenta el vacío de poseer una mínima representación de las comunidades negras y de los pueblos indígenas; es por eso que, aunque se han iniciado diálogos para dar término al conflicto, las masacres no han disminuido; al contrario, parece que han aumentado:

“Se ha definido que en el Consejo Nacional de Paz del actual Gobierno haya la participación de un indígena, lo cual no ha garantizado el respeto a nuestros territorios, como lo muestra el recrudecimiento de los bombardeos, la intensificación de las fumigaciones y la violación permanente de los derechos humanos.

La participación indígena en el Consejo Nacional de Paz o en el Comité Nacional de Paz y en las mesas de negociación entre el Gobierno y los actores armados nos comprometería como parte de las opiniones, las apreciaciones y las conclusiones que se vayan tomando en esos espacios. Este comprometimiento con la firma de decisiones en este espacio propiciaría la justificación de mayores agresiones hacia nuestra integridad y hacia nuestra autonomía” (OPIAC, 2010: 345).

Los pueblos milenarios colombianos han construido su propia historia desde mucho antes de tener contacto con el hombre blanco. Hoy en día, todos coinciden en el dolor y la angustia que sienten al tener, por obligación, que tratar con la cultura occidental y su modelo económico de desarrollo que no respeta su cultura ni la relación armónica que sostienen con la naturaleza. El hombre blanco no es capaz de entender que no existe una ley natural, no hay “...en ninguna parte que se diga que las plantas, el agua, los animales, la naturaleza, son para una sola comunidad, para una sola familia, sino que todas las cosas bellas que hoy existen en nuestro Universo está pensado para la humanidad, para el colorido de la naturaleza” (Green, 2010: 306).

Los grupos originarios de América han entendido que los seres de la naturaleza deben compartir en conjunto las alegrías y tristezas, y que las obras que se realicen deben ser para agradar a los dioses, siempre pensando en la preservación del planeta; es por eso que la tradición oral dentro de estas comunidades es muy importante, porque el sentido de respeto que tienen los indígenas hacia la naturaleza y las demás personas lo transmiten de generación en generación:

“La historia de los pueblos indígenas debe mirarse como un patrimonio de la humanidad, que aporta, que da directrices políticas para un cambio de conciencia a la humanidad, para que exista armonía entre los seres. En ese sentido conocer, contar y vivir la historia de los pueblos indígenas debe mirarse como un aporte al resto de la población colombiana y al mundo” (Green, 2010: 307).

Quizá el artículo de la Constitución Política que más decepción ha causado a los pueblos nativos en general, ha sido el artículo 7, en el que se afirma que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Para ellos, ese derecho contemplado en la máxima norma del país, que ha tenido que ser luchado y negociado por muchas personas y organizaciones, al final se ha quedado plasmado en un papel y su ejecución no ha sido efectiva. Por eso, los indígenas de Colombia no desfallecen a la hora de reclamar éste derecho, con el fin de lograr un país constitucionalmente armónico, donde prime la democracia, se respeten las diferencias y se proteja ante todo el medio ambiente. Para ellos, la principal causa de los problemas del país es el sistema político que impera, que tiene poco interés en resolver los problemas sociales de la nación.

Las organizaciones indígenas colombianas sienten una diferencia con respecto a los movimientos de otros países latinoamericanos, en el sentido de que ellos son más estrictos y radicales en sus posiciones: para ellos, el indígena es bueno y el hombre occidental es malo, por eso ellos hablan de practicar un indigenismo puro, en el cual no existe la posibilidad de sostener buenas relaciones. En Colombia, el pensamiento es contrario: en sus convicciones sí hay espacio para la solidaridad, donde, a partir de la organización indígena, entendida esta como un espacio pedagógico, se ha logrado entender la complejidad de la problemática colombiana y el sentido de la permanente lucha de los pueblos nativos (Green, 2010: 311).

Cuando se refieren al derecho de respetar las diferencias entre los individuos y grupos, las comunidades están solicitando que se respete la forma como ven y tratan la naturaleza, no solo que se respeten sus territorios, sino que se les permita seguir llevando a cabo sus prácticas, que siendo conscientes, han sido más razonables y saludables para el planeta que las efectuadas por la cultura occidental:

“Tenemos una oportunidad histórica de que los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios de este país y de América como apego a la madre naturaleza, los conocimientos del desarrollo sostenible, el conocimiento de la medicina tradicional, sus distintas formas de ceremonias y rituales alrededor de la naturaleza, sean un norte y un aporte para los colombianos, si queremos realmente que el planeta Tierra siga existiendo y que nuestros recursos naturales sean un patrimonio para las futuras generaciones y para el mundo” (Green, 2010: 308).

Las diferentes organizaciones indígenas que han surgido desde los años setenta, han buscado desarrollar principios fundamentales como la unidad; aunque existen 92 comunidades distintas y casi todas tienen su propio idioma, los problemas son comunes y ello hace que se unan para mostrarle al país que sí es posible lograr una unidad en medio de la diversidad.

Por último, otro principio fundamental que no ha sido respetado por el Estado es el territorio, que es para ellos un espacio donde la cultura evoluciona: el pensamiento y los conocimientos ancestrales van dirigidos a inculcar a los habitantes el papel que cumplen en el planeta, que no es otro que la defensa de la Madre Tierra:

“En torno a ella debemos unificar estos criterios como movimiento indígena, para salvar la biodiversidad del planeta Tierra. Por eso la bandera de los pueblos fue la recuperación de los territorios ancestrales para que fueran titulados, saneados, ampliados y reestructurados. La respuesta de los gobiernos han sido masacres, asesinatos selectivos de líderes a lo largo y ancho de Colombia; pero seguimos con la lucha, porque reclamar el territorio es reclamar a nuestra Madre Tierra” (Green, 2010: 310).

5.4. Análisis sobre los derechos indígenas en el marco jurídico colombiano

Aunque Colombia se ha caracterizado históricamente por la pluralidad cultural de su población, esa realidad no ha sido reconocida constitucionalmente hasta 1991. La Constitución de 1886 –la que estuvo vigente hasta 1991– describía al país como una

nación católica y culturalmente homogénea. El no reconocer la diversidad cultural y, por supuesto, las distintas colectividades de indígenas como grupos étnicos con una serie de derechos, fue el producto de ser considerados seres incapaces durante cinco siglos de subordinación. La idea que se tenía en los diferentes organismos del Estado es que las comunidades indígenas eran sociedades incipientes o salvajes en proceso de civilización. Desde el primer contacto con los europeos, siempre se consideró que los indígenas no eran capaces de hacerse cargo de sus propios asuntos, y de ahí surgió el comportamiento paternalista de las instituciones occidentales, entre ellas la Iglesia, hacia estas minorías:

“La construcción de la identidad del indígena americano como un bárbaro incapaz, salvaje, plagado de costumbres aterradoras y apenas con una mínima capacidad de raciocinio proporcionó a la empresa colonizadora el conocimiento necesario para justificar la dominación física y espiritual que se estaba forjando” (Ariza, 2004: 10-11).

La imagen que se creó en torno al indígena fue aceptada como algo natural que libró a la mayoría de las personas de la pregunta embarazosa acerca de la dominación histórica sobre la que se estaban construyendo las nuevas sociedades americanas. De esta forma, la independencia no fue un acto emancipador para todos los americanos, la imagen degradada no cambió; al contrario: siguió vigente en los nuevos sistemas legales de los estados nacientes, que poco a poco se fueron construyendo sobre la base de la exclusión de los indígenas, que eran vistos como un obstáculo para lograr la modernización y como un impedimento para conseguir la unidad nacional.

Actualmente, el respeto por los derechos humanos y la exaltación de la igualdad son conceptos que han permeado la organización social y política de todas las sociedades modernas. Para el caso colombiano, ha sido un proceso que se ha extendido en forma creciente a lo largo del siglo XX, y ha tenido su máxima expresión con la promulgación de la ya mencionada Constitución Política de 1991, donde se contempla un significativo conjunto de derechos que retóricamente favorecen a sus diferentes estamentos sociales. Puede decirse “retóricamente” porque en la práctica, teniendo en cuenta el perfil ideológico de la Constitución, se privilegia en grado sumo la libertad económica, que conduce a que los derechos de los sectores minoritarios o menos favorecidos queden subordinados a los intereses del gran capital, como ha sido el caso de varias comunidades indígenas frente a las grandes transnacionales mineras.

Hoy en día, como fruto de la lucha de varios siglos por hacer valer sus derechos, la mayoría de los países de América Latina ha adoptado disposiciones relacionadas con los indígenas en sus constituciones nacionales. El país que tomó la iniciativa en este aspecto fue Guatemala, que en 1945 introdujo en su texto constitucional normas concernientes a sus etnias, si bien tuvieron un periodo de vigencia breve. Los países de la región han seguido este ejemplo, especialmente en la década de los noventa.

El reconocimiento constitucional que se le ha dado a la jurisdicción de las comunidades indígenas en Latinoamérica, se caracteriza por tener como base la afirmación de los estados como naciones pluriétnicas y multiculturales, a partir de las cuales se reconoce una serie de derechos, en su mayoría colectivos, y cuya temática se compone de contenidos territoriales, culturales, políticos y de autonomía:

“Las jurisdicción indígena en el ordenamiento jurídico colombiano no es una novedad. Las Leyes de Indias reconocían la autoridad de los Cabildos Indígenas facultándolos para sancionar a los miembros de sus comunidades que cometieran faltas. Esta disposición es mantenida en el proyecto de la Regeneración de finales del siglo XIX mediante la Ley 89 de 1890. Pero es en la Constitución de 1991, con la participación de líderes indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente, que se hace un reconocimiento constitucional de la jurisdicción especial indígena y se faculta a las autoridades de los diferentes cabildos a impartir justicia conforme a los usos y costumbres ancestrales” (Carrillo, 2009: 93).

El reconocimiento en la legislación colombiana de estas dos instituciones, los resguardos y los cabildos, dirigidas a proteger la vida y bienes de los indígenas, demuestra, en gran medida, la presencia del pensamiento filosófico-político que inspiró su creación, en clara oposición a las doctrinas individualistas que impulsaban el libre comercio, la privatización y libre disposición de los bienes, la abolición de la propiedad colectiva de la tierra y la desaparición de los gobiernos de comunidades con algún grado de autonomía para el manejo de sus asuntos internos. De igual forma, se demuestra la prevalencia de los principios del Derecho de Gentes, en el desarrollo del pensamiento jurídico colombiano, dado que a lo largo del pasado y aún en el presente, se ha apoyado el mantenimiento de resguardos y cabildos, y favorecido su creación en los pueblos indígenas donde no existían.

Un factor determinante en los avances de la constitucionalidad indigenista del país es la inquebrantable voluntad de los pueblos indígenas colombianos –que puede

rastrearse desde el momento de la Conquista, el período colonial y lo transcurrido de la República— de defender el derecho de preservar sus formas de organización social, de propiedad colectiva de la tierra¹³, de gobierno y de las expresiones fundamentales de sus culturas tradicionales. La constante de esta voluntad ha sido, en términos generales, la resistencia pacífica a todos los intentos de diferentes grupos sociales y del Estado para imponer la reducción o integración de los pueblos indígenas a modelos económicos, políticos, religiosos o culturales ajenos a sus tradiciones:

“Los pueblos indígenas creemos que la autonomía es una forma de ejercer la autodeterminación, de decidir por nosotros mismos. Cuando hablamos de autodeterminación muchos creen que nos queremos independizar, formar otro Estado, una ‘república independiente’. Pero no, no queremos eso. A los pueblos indígenas no nos interesa separarnos de Colombia ni cambiar sus fronteras. Lo que nos interesa es ejercer nuestra autonomía aceptando estar dentro de la República de Colombia y respetando la estructura del Estado, pero éste también tiene que respetar nuestras estructuras de gobierno y nuestra autonomía para decidir” (ONIC, 1998: 48).

La prueba más clara de esta resistencia es la conservación, por parte de estas comunidades, de una gran parte de su patrimonio cultural ancestral y de las formas asociativas de propiedad de la tierra de los resguardos, del trabajo comunitario, y de las formas independientes de gobierno a través de los cabildos. De igual forma, la resistencia también se aprecia en las innumerables acciones administrativas, jurisdiccionales y policivas entabladas por estas comunidades contra las leyes, actos administrativos y procedimientos que han tratado de alcanzar la reducción territorial, económica y cultural de sus pueblos.

Aunque los procedimientos de reclamación han sido casi siempre pacíficos, el deseo de mantener su identidad étnica, en ocasiones, también los ha inducido a actuar de forma violenta, especialmente en coyunturas adversas para sus aspiraciones o con ocasión de momentos históricos que les abrieron alguna perspectiva de reivindicación. Para dar un ejemplo, se puede hacer referencia a la contienda civil que, en 1861, le dio el triunfo al General Tomás Cipriano de Mosquera donde, bajo su mando, sirvieron bajo la promesa de atención a sus problemas de tierra. De forma similar, indígenas de

¹³ Para ampliar la información relacionada en torno a los derechos a la propiedad colectiva del territorio de los grupos étnicos, puede remitirse a la Sentencia T-387/13 en el Anexo 4.

diferentes zonas del país actuaron en la Guerra de los Mil Días, desarrollada a fines del siglo XIX y comienzos del XX.

En los años veinte del siglo pasado, como respuesta a las políticas encaminadas a acabar con los resguardos y cabildos, se presentó el alzamiento dirigido por Manuel Quintín Lame que puso en serio riesgo la tranquilidad pública del Cauca. El nombre del caudillo indígena caucano sirvió de bandera al movimiento armado y, en la década de los años ochenta del siglo pasado, un grupo con ese nombre hizo presencia en ese mismo departamento.

La voluntad de los pueblos nativos colombianos ha sido constante en el mantenimiento de la identidad de su pasado cultural y destino histórico, que les compromete a proteger y salvaguardar, como su patrimonio más valioso, la tierra y las costumbres de sus antepasados. Sin embargo, lejos de buscar el quebrantamiento de la unidad nacional, la lucha indígena ha estado directamente orientada a salvar y mantener las bases que identifican el pasado común con la sociedad colombiana, como una de las raíces más importantes de su origen. Sin duda alguna, la aceptación de éstas bases y raíces, constituyen el fundamento más sólido de la unidad nacional:

“...los indígenas deben ser considerados como pueblos, es decir, como sujetos colectivos inscritos como tales en una lógica que debería armonizar la igualdad con la diferencia. Esta dialéctica no puede ser asumida de una manera simple, sino que implica complejas definiciones y decisiones cuando se entra en la casuística” (Sánchez Botero, 2010: 47).

Como ejemplos más representativos de la voluntad nacionalista unitaria de los pueblos indígenas, se pueden señalar dos casos. Uno, es el de los indígenas cuna que, como muestra de solidaridad cuando, en el año de 1903, el país padeció la desmembración del departamento de Panamá, llegaron a Bogotá, desde el lejano Darién, a ofrecer al gobierno nacional el aporte de sus hombres y sus armas rudimentarias para recobrar el dominio político de ese departamento. Otro caso de gran relevancia ha sido el de los pueblos nativos del sur del país, pobladores de la riveras de los departamentos de Caquetá y Putumayo, que han participado heroicamente en la salvaguarda de esa parte del territorio nacional, que comprende por lo menos una cuarta parte del total de la actual superficie territorial.

Como se puede notar, si se tienen en cuenta los hechos más relevantes de la historia colombiana, directamente relacionados con la evolución de la legislación indigenista, desde la resistencia de sus pueblos hasta la integración de los mismos por la defensa de su patrimonio, que comprende sus territorios y sus valores culturales, el nuevo orden constitucional que ampara a los indígenas, es el resultado de un proceso de más de quinientos años de esfuerzos. El proceso que culmina en 1991, en concreto, no puede entenderse sin la existencia de las organizaciones creadas en las décadas de los años setenta y ochenta, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, que marcó el inicio de estos movimientos, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.

La Carta Política de 1991 fue forjadora de cambios fundamentales en este tema, porque estableció los lineamientos generales que el legislador y la comunidad colombiana debían seguir respecto a las poblaciones indígenas. Esto fue producto de años de trabajo y de una metamorfosis en la mentalidad política de los colombianos. Si se analiza la Constitución Política de 1886, en ninguno de sus apartes hace referencia alguna a estos grupos, encomendando estas particularidades a las leyes ordinarias, porque dicha Carta fue hecha para los ciudadanos, es decir, para la élite de un país oligárquico, donde el indígena no tenía un lugar. Referente a la Constitución de 1991:

“El hecho de que la reforma constitucional haya sido impulsada y organizada por medio de decretos de estados de excepción muestra que la Constitución fue concebida como un instrumento de pacificación, como una medida adecuada para restablecer el orden público turbado. La edificación del nuevo orden, por tanto, requería establecer una clara distinción frente al antiguo régimen de la Constitución de 1886 cuyo marcado carácter centralista, conservador y autoritario había sido señalado por muchos como uno de los principales factores que había sumido a Colombia en esta nueva, pero a la vez recurrente, crisis de legitimidad” (Ariza, 2004: 51).

En la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros fueron electos el 9 de diciembre de 1990, se percibió un nuevo ambiente, favorable para la causa indígena, donde la participación activa de sus representantes se produjo por votación popular¹⁴.

¹⁴ Esta fue la primera vez en la historia política del país donde se eligieron tres candidatos indígenas para un cargo de representación popular: Lorenzo Muelas, candidato por la comunidad indígena de los Guambianos, Cauca; Francisco Rojas Birri, por parte del grupo Emberá, Chocó, y Alfonso Peña

Los principios en los que se erigió el nuevo orden constitucional tienen su base en el carácter multiétnico y pluricultural de la nación, la protección de los recursos naturales y de sus riquezas culturales, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los grupos étnicos y de sus territorios como entidades territoriales autónomas. Al final todos los temas fueron escuchados y tenidos en cuenta, quedando plasmados en el texto final.

Con la promulgación de la Carta Política, el 4 de julio de 1991, se inició una nueva etapa en Colombia donde, a partir de ese momento, se considera al país como una nación pluriétnica y multinacional, producto de la convivencia de los distintos grupos étnicos que la conforman, donde todos los habitantes se consideran en igualdad de condiciones, de acuerdo con sus características, intereses y necesidades, pero siempre reconociendo lo que es más importante, su derecho a ser diferentes:

“el Estado colombiano reconoció que la nación no solo estaba compuesta por un solo grupo humano, sino que estaba integrada por diferentes grupos étnicos con características diferentes en cuanto a su cultura, costumbres, cosmovisión, modo de vida, etc.; es así como el artículo 7º consagra la diversidad étnica y cultural como principio fundante de la nación colombiana” (Linares, 2004: 74-75).

Por su parte, el artículo 7º de la Constitución hace referencia a esos derechos y puede tomarse como punto de partida para analizar las consecuencias que tiene este precepto, ya que decir que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, tiene grandes alcances, algunos provistos por el constituyente y otros a cargo del legislador, pero todos para ser cumplidos por la totalidad de los colombianos.

De esta forma, la Constitución Política de 1991 ha sido el medio por el cual se ha dado una renovación política y social en Colombia. A medida que ha pasado el tiempo, la Carta Magna se ha constituido en el espacio donde no solo se consagran los derechos, sino también el lugar donde pueden hacerse posibles los sueños, deseos y expectativas de gran parte de la sociedad colombiana. Los contenidos de tales sueños, deseos y expectativas, como es obvio, son múltiples, diversos y heterogéneos, al igual que la composición social del Estado colombiano (Uribe, 2003: 247).

Chepe, candidato por la comunidad indígena Paéz en el departamento del Cauca, y representando al movimiento Quintín Lame.

Es evidente la creciente importancia que han ido adquiriendo los diversos grupos indígenas en la mayoría de países latinoamericanos donde, en algunos de ellos, se puede percibir una activa participación, producto de un largo proceso motivado por diferentes factores, según el país de que se trate. Es relevante destacar los casos de Colombia, en 1991, y de Ecuador, en 1998; los indígenas ecuatorianos, de forma muy similar a lo ocurrido en Colombia, tuvieron una participación directa y activa en la elaboración de su Carta Política y, ya antes de iniciarse éste proceso constituyente, tenían elaborado un texto constitucional integral adaptado a sus necesidades, del cual se extrajeron varios artículos. En lo que se refiere a Colombia:

“En 1991 se convirtieron en sujetos jurídicos de orden constitucional al serles reconocidos más de dos decenas de derechos; además, la Corte Constitucional ha producido jurisprudencia innovadora sobre el significado de las sociedades indígenas para el ordenamiento jurídico como estructuras portadoras de derechos específicos” (Castrillón, 2008: 157-158).

La nueva Constitución colombiana ha reconocido de forma legal la jurisdicción especial indígena, la cual puede ser ejercida por los grupos dentro de su ámbito territorial y de acuerdo a sus costumbres y procedimientos. Según lo anterior, el derecho de los pueblos nativos se ve fortalecido y posee la plena facultad de decidir sobre su destino e integridad social y económica a partir de sus preceptos culturales. Según Libardo Ariza, los indígenas fueron explotados simbólicamente para representar el espíritu tolerante y pluralista del nuevo orden constitucional; en ese sentido, los nativos han sido presentados en el proceso constituyente como un símbolo de reconciliación histórica, dándose lugar a una nueva política de conservación cultural basada en la protección de aquellos grupos que tienen la capacidad de hacer actual un pasado histórico (Ariza, 2004: 11).

Sin embargo, el sistema previsto para los pueblos indígenas está fuertemente ligado a un régimen jurídico que obedece a las lógicas economicistas y políticas de una sociedad capitalista contradictorio con la filosofía milenaria indígena:

“...en esa medida, la competencia para ejercer la justicia dentro de los territorios indígenas estará mediada por la capacidad de cumplir con los requisitos exigidos para la coordinación con la justicia ordinaria, y la constante confrontación entre el principio a la diversidad étnica y cultural y el principio al desarrollo y progreso social moderno” (Carrillo, 2009: 94).

En las últimas décadas, al ver que sus derechos no han sido totalmente respetados y su voz no ha alcanzado la fuerza suficiente para ser escuchada por los diferentes estamentos de la sociedad, los indígenas han tratado de ser escuchados internacionalmente, y su queja siempre ha sido una: el no reconocimiento de sus derechos por parte del Estado colombiano:

“...el Estado día a día atenta contra los derechos de los indígenas, desconociendo su autonomía y vulnerando sus derechos fundamentales. Inclusive que los pocos logros consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales y en diferentes leyes y normas, son desconocidos a diario y debemos inclusive acudir en muchas ocasiones a la justicia, y hasta a las vías de hecho para poder conseguir el cumplimiento de nuestros derechos y el respeto por todo lo que nos pertenece y que hace parte de nosotros” (ONIC, 1998: 54).

Todo este desarrollo legislativo en Colombia se relaciona con procesos paralelos es el escenario mundial. 1977 fue el año de la internacionalización de los pueblos indígenas con la Conferencia internacional de organizaciones no gubernamentales sobre la discriminación de los pueblos indígenas en América.¹⁵ Su presencia se ha notado en diferentes organismos como la Organización de Naciones Unidas, ONU, o la Organización de Estados Americanos, OEA, donde se han tomado medidas para reconocer los derechos de estas comunidades. Los principales documentos que se destacan en este ámbito son los Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

La relevancia del Convenio 107 de 1957 se debe a que fue el primer documento internacional que trató el tema de los derechos indígenas. En este convenio se hizo referencia a los derechos sobre la tierra, las condiciones laborales, la salud y la educación, entre otros. Sin embargo, más adelante este Convenio presentó deficiencias, ya que tenía un carácter integracionista y de alguna forma paternalista, razón por la cual,

¹⁵ Esta Conferencia supuso la llegada de las comunidades indígenas a la ONU, donde fue una sorpresa para todos que no se presentaran como minorías étnicas, ni expusieran sus problemas desde el punto de vista del racismo o la discriminación, sino que se llamaron a sí mismos pueblos y naciones invadidas y colonizadas, y reclamaron ante la comunidad internacional que se les devolviese la libertad (Sánchez, 2010: 41).

después de varios años de reformas, se adoptó el Convenio 169 de 1989, cuyo principal aporte fue el relacionado con la consulta¹⁶, señalado en los artículos 6 y siguientes:

“En el Convenio 169 de 1989, que fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, sobresalen cinco grandes puntos: a) el reconocimiento de los indígenas ante la normatividad internacional; b) el reconocimiento de los pueblos indígenas como ‘miembros de una comunidad nacional’; c) el paso de destinatarios de políticas a sujetos activos con autonomía de la voluntad para participar en las políticas que los afectan; d) la estrecha relación indígenas-medio ambiente y e) la tierra y el territorio de los pueblos indígenas” (Sánchez Botero, 2010: 42).

La consulta ha sido un instrumento de gran importancia, aunque en la práctica ha presentado problemas de tipo jurídico a la hora de otorgar licencias ambientales a las empresas que las solicitan. Una de las dificultades va dirigida a los temas formales o procedimentales: cuándo se debe realizar la consulta, en qué lugar y a quiénes se les debe efectuar, ya que hay que dejar claro desde el comienzo quiénes son los representantes legales de las comunidades afectadas:

“Con el Convenio 169 los indígenas han pasado de sujetos pasivos receptores de políticas a sujetos colectivos con autonomía para decidir si están interesados, y de qué manera, en particular de las políticas que los afectan directamente. Mientras el Convenio 107 y la Recomendación 104 de 1957 hacían referencia a los indígenas como la ‘población en cuestión’, considerándolos como sujetos pasivos de dichas normas generales, el Convenio 169 de 1989 los reconoce como sujetos activos de derechos y obligaciones, con autonomía de su voluntad. Por eso los denomina a lo largo del Convenio como ‘los pueblos interesados’” (Sánchez Botero, 2010: 48-49).

Sin embargo, pueden surgir inquietudes antes de llevarse a cabo una consulta, como es el caso de las que se realizan en territorios donde existen varias etnias. Aquí surgen los interrogantes acerca de cómo se concilian los diferentes intereses de las comunidades consultadas, o cómo se puede entender que en una consulta existan varias partes centradas en los mismos intereses. En este punto es importante tener en cuenta que, para dar solución, entre otros, a este tipo de inconvenientes, las consultas deben ir

¹⁶ La consulta es el mecanismo por medio del cual, el Estado o la empresa que desea intervenir en determinado territorio, pone en conocimiento al grupo indígena afectado, de los métodos que se pretenden llevar a cabo, comunicándoles el plan de trabajo en su integridad y de esta forma se les da a conocer los beneficios y los aspectos negativos que les atañen.

acompañadas de un estudio de impacto económico y social, donde es importante la intervención de las comunidades involucradas:

“Artículo 7º [Decreto 1397 de 1996]. Licencias ambientales. No se podrá otorgar ninguna licencia ambiental sin los estudios de impacto económico, social y cultural sobre los pueblos o comunidades indígenas, los cuales harán parte de los estudios de impacto ambiental. Los estudios se realizarán con la participación de las comunidades, sus autoridades y organizaciones” (Linares, 2004: 171).

Por último, también pueden generarse problemas después de realizada una consulta, ya que en el momento en que la autoridad administrativa toma la decisión que fuere, se debe elegir de forma adecuada a los actores que se encarguen de ejecutarla, realizándoles constantemente un seguimiento que garantice el cumplimiento de los principios consagrados en dicho convenio.

A continuación, se hace una síntesis de las normas constitucionales que tratan los principales asuntos indígenas, para lo cual se han agrupado de acuerdo a los objetivos y postulados del constituyente.

5.4.1. Diversidad étnica y cultural

Uno de los puntos más destacado de la Constitución de 1991 ha sido el reconocimiento, por primera vez, de la diversidad étnica y cultural de la Nación. Sin embargo, esta no ha sido solo la labor de los tres constituyentes indígenas que participaron en la Asamblea que dio origen a la Carta Política. Esta ha sido más bien la introducción de un hecho que se ha afirmado en casi todas las tendencias políticas de América Latina desde la década de los ochenta.

La tendencia generalizada a reconocer constitucionalmente la diversidad cultural, puede tener su comienzo en los cambios políticos del capitalismo y en las nuevas luchas sociales y transformaciones culturales que se han venido produciendo en las últimas décadas, y que han dado origen a la figura de sujeto de derecho:

“En la época del liberalismo clásico, el sujeto de derecho se circunscribía únicamente al sujeto propietario, y en esa medida se era ciudadano. Posteriormente, en un complejo proceso de luchas muy ligadas al movimiento obrero y a sus partidos, se incluyó, lentamente, otro sujeto que reclamaba su reconocimiento como sujeto de derecho y, como tal, ciudadano. Así, se fue construyendo desde las últimas décadas del siglo XIX y primeras del veinte un

sujeto de derecho más amplio, pero exclusivamente masculino, con capacidad de decisión política” (Sánchez Botero, 2010: 88).

Como es claro, todos los principios y normas relacionados con el tema indígena forman parte del desarrollo de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas de Colombia. Para entender de forma más clara este postulado, seguidamente se citan algunas normas como ejemplo:

- Decreto 715 de 1992. Por el cual se crea el Comité nacional de derechos Indígenas.
- Decreto 1087 de 1993. Por el cual se declara el año de los pueblos indígenas de Colombia.
- Decreto 0804 de 1995. Por el cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos.

En numerosas oportunidades, la Corte Constitucional ha reconocido la importancia de la diversidad étnica y cultural al confirmar la existencia en el país de 91 grupos étnicos que hablan 64 lenguas diferentes, y que representan a 1.400.000 mil habitantes, aproximadamente, lo cual es un reflejo de la diversidad étnica del país y de su invaluable importancia cultural¹⁷. De esta forma, la Corte define la diversidad como formas de vida y concepciones del mundo no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría de la población en aspectos de raza, religión, lengua, economía y organización política¹⁸.

5.4.2. El régimen de tierras y los resguardos

Para finales del siglo XIX, con la consagración de la ley 89 de 1890, algunas normas dieron origen a una serie de derechos dirigidos a las comunidades indígenas, entre los que sobresalen la facultad de tener un gobierno interno a través de los cabildos, y el derecho a la propiedad privada colectiva de la tierra e institucionalidad en resguardos. La creación de los cabildos indígenas surgió a partir del concepto de incapacidad que se tenía de los indígenas, con lo cual, estos eran territorios o zonas destinadas a las misiones eclesiásticas y dirigidas por el gobierno. En este sentido, en el país no existía el reconocimiento de las culturas indígenas, estas eran vistas como

¹⁷ Corte Constitucional, Sentencia T-380 de 1993.

¹⁸ Corte Constitucional, Sentencia T-605 de 1992.

parcialidades, y la noción de grupos étnicos no se había desarrollado aún (Linares, 2004: 144).

Las siguientes son las normas más relevantes que se crearon en el siglo pasado en Colombia y que hacen referencia a la defensa de los territorios indígenas:

- Ley 200 de 1936 o “Ley de Tierras”. Dirigida a limitar los latifundios, castiga a los terratenientes por poseer tierras inexploradas y en situación de abandono mediante la extinción de dominio privado, colocando en práctica el principio de la función social de la propiedad.
- Ley 135 de 1961. Delimitó las tierras baldías asignándoles el carácter legal de reservas indígenas, reconocidas para que los indígenas tuviesen el derecho al usufructo mientras se sometía el terreno a la conformación de Unidades Agrícolas Familiares.
- Decreto 1809 de 1993. Por el cual se dictan normas fiscales relativas a los territorios indígenas. Modificado por el Decreto 0840 de 1995.
- Decreto 1088 de 1993. Regula la creación de las asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales indígenas.
- Ley 160 de 1994. Sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino.
- Decreto 2164 de 1995. En su artículo 21 se encuentra una definición de resguardo indígena. En este sentido la Corte Constitucional ha definido en forma precisa este concepto:

Un resguardo no es una entidad perteneciente al Estado sino una forma de propiedad colectiva de la tierra. La propiedad colectiva que surge del resguardo es desarrollo de varios artículos del Convenio 169 de la OIT, mediante el cual los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras¹⁹. “Para la Corte Constitucional la propiedad que ejerce una comunidad indígena sobre un resguardo es una propiedad que se rige por el artículo 58 de la Constitución Política, lo cual equivale a reconocer que dicha propiedad colectiva es un derecho-deber con la esencia y naturaleza de la propiedad privada romano-germánica” (Linares, 2004: 183).

¹⁹ Corte Constitucional, Sentencia T-257 de 1993.

5.4.3. Explotación de recursos naturales dentro de los territorios indígenas

A partir de un análisis realizado por los constituyentes sobre las condiciones de vida de los integrantes de los grupos étnicos en Colombia, se llegó a la conclusión de que la Constitución Política de 1886 y los ordenamientos derivados de esta, no garantizaban el bienestar de estas poblaciones ni reconocía plenamente sus derechos. Es por eso, que en la nueva Carta Política quedaron explícitos los derechos y deberes de las personas y del Estado con respecto a este tema. A continuación se detallan los artículos dirigidos a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente²⁰:

- Art. 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y natural de la Nación colombiana.
- Art. 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
- Art. 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
- Art. 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
- Art. 95. ...Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: ... 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; ... 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
- Art.330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: ... 5. Velar por la preservación de los recursos naturales.

Otras disposiciones que regulan el manejo de los recursos naturales son:

²⁰ Constitución Política de Colombia (2004). Defensoría del pueblo.

- Decreto 2811/74 del Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente. Es una de las principales normas encaminada a la protección de los recursos naturales del Estado, entre los que se pueden contar los resguardos indígenas. De esta forma, el artículo 27 hace mención de las obligaciones que tienen las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, de declarar cualquier obra que planea o decida realizarla, y que esta produzca algún tipo de deterioro ambiental. En la misma dirección, el artículo 28 comenta que para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier otra actividad que pueda producir deterioro a los recursos naturales o al ambiente, será necesario el previo estudio ecológico y ambiental, para la obtención de la respectiva licencia. En ese estudio, además de las repercusiones físicas, se tendrán en cuenta, los factores económicos y sociales que puedan incidir en la región (Correa, 1997: 4-5).
- Ley 21 de 1991. Adopta el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
- Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente.
- Decreto 1320 de 1998. Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. Este tema ha sido objeto de grandes controversias que han sido zanjadas por la Corte Constitucional. En diferentes pronunciamientos, ha señalado la importancia del derecho a gozar de un ambiente sano, derecho que debe estar en armonía con otros principios constitucionales.

La aplicación de la consulta a las comunidades indígenas que pueden resultar afectadas con motivo de la explotación de los recursos naturales, debe basarse, principalmente, en la adopción de relaciones de comunicación y entendimiento, regidas por el mutuo respeto y la buena fe entre la comunidad y las autoridades públicas, tendientes a buscar, por un lado, que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos de explotación de los recursos naturales en los territorios que les pertenecen y, por otro, que de la misma forma la comunidad sea informada con todo detalle sobre la manera en que la ejecución de dichos proyectos puede conllevar una afectación o deterioro de los elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, económica y política y, por ende, son la base de su subsistencia como grupo humano con características singulares.

Es importante también que se le dé al colectivo indígena afectado la oportunidad para que libremente y sin interferencias de ninguna naturaleza pueda, mediante la convocatoria de sus integrantes o representantes, valorar conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, al tiempo que pueda ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo que concierna a la defensa de sus intereses y al pronunciamiento sobre la viabilidad del mismo.

5.4.4. Mecanismos de protección

Los dos mecanismos de protección principales recogidos en la legislación a partir de 1991 se relacionan con el servicio militar y con la capacidad de jurisdicción indígena.

La norma que consagra la exención de prestar el servicio militar fue demandada por violar los artículos 7, 68 y 70 de la Constitución Política, por lo cual, la Corte Constitucional se pronunció al respecto. Al diferenciar a los indígenas de los demás ciudadanos respecto a la prestación del servicio militar, considera la Corte que el legislador procedió razonablemente porque actuó en función de un fin constitucionalmente legítimo, como es la defensa de las minorías, a fin de proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana:

- El literal b) artículo 7 de la Ley 48 de 1993, consagra la exención de prestar el servicio militar en todo tiempo y de pagar una cuota de compensación militar para los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica.
- En cuanto al tema de la jurisdicción indígena, diversas normas le han reconocido valor a ésta y la han incluido como parte de la organización jurisdiccional del país. Es el caso de los nuevos códigos Penal y de Procedimiento Penal, Decretos 599 y 600 de 2000, respectivamente, así como la Ley 585 de 2000 por medio de la cual se derogan, modifican y suprimen algunas disposiciones de la Ley 270 de 1996 y Decreto 2699 de 1991.

En cuanto al tema de la jurisdicción indígena, la Corte se ha pronunciado en diversas oportunidades estableciendo aspectos como las reglas de interpretación, sus elementos y límites; esto significa que la capacidad que tengan las comunidades de ejercer su autoridad dentro de sus territorios está supeditada al orden jurídico nacional:

“...la posibilidad de ejercer la autoridad en el territorio indígena estará mediada por su capacidad de entablar una relación solidaria con el ordenamiento jurídico tradicional, que implique la salvaguarda de principios mínimos que irradian todo el sistema jurídico, hecho que otorga a cambio la minimización de las restricciones que se le imponen al ejercicio jurisdiccional especial indígena” (Carrillo, 2009: 97).

Con estas nuevas disposiciones, los diferentes gobiernos han ido adoptando sus políticas durante sus respectivos períodos presidenciales, de lo cual se puede resaltar que durante el gobierno de César Gaviria se introdujo una de las principales herramientas en materia indígena como es el Convenio 169 de la OIT, mediante la Ley 21 de 1991. También es importante señalar que en el período presidencial de Ernesto Samper, el Plan Nacional de Desarrollo, llamado “El salto social”, aprobado por la Ley 188 de 1995, estableció en su artículo 7, que el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural era una condición necesaria para el desarrollo. De acuerdo con esto, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, por medio del Documento 2773 de 1995 aplicó el “Programa de apoyo y fortalecimiento étnico de los pueblos indígenas de Colombia”.

6. Violaciones contra el territorio sagrado de los u'wa

“Los U'wa somos gente de paz, gente de bien. Nuestro territorio es realmente un paraíso. Hago un llamado internacional para que ayudemos entre todos a cuidar y a proteger la naturaleza, porque tanto ella como el oxígeno son para protegerlos y no para destruirlos. En un ambiente sano hay una buena salud y un buen vivir, sobre todo, porque las generaciones no sufren de tantas enfermedades. Para el país, para el mundo y para España, pido nuevamente que nos ayuden a proteger la naturaleza”
(Claudia Cobaría, Líder Indígena U'wa, septiembre de 2012).

El análisis del conflicto socio-ambiental en el caso del pueblo u'wa permite observar cómo los factores principales de esta controversia se han materializado y encontrado en un proceso particular a partir de los primeros años de la década del noventa. Las páginas siguientes hacen, inicialmente, una presentación detallada del conflicto, dejando clara la arbitrariedad que ha cometido el Estado colombiano junto con las multinacionales petroleras, al permitir y ejecutar las labores de exploración y extracción de hidrocarburos en el territorio de la comunidad sin su consentimiento. A continuación, se recogen las deficiencias experimentadas, en el caso concreto de los problemas con la empresa Occidental de Colombia –filial de la multinacional Occidental Petroleum Corporation (OXY) con sede en California–, en la aplicación de las previsiones constitucionales y legales sobre la jurisdicción indígena y la consulta previa; se hace referencia, asimismo, al anuncio de la drástica decisión del suicidio colectivo por parte de los u'wa ante la imposibilidad de lograr una solución justa frente a la violación de su territorio.

Una vez expuestos los elementos que componen el conflicto, se elabora un diagnóstico de los demás proyectos extractivos, de infraestructuras y de conservación que se llevan a cabo en el territorio de comunidad: la explotación minera, de gas, de petróleo, la construcción de nuevas carreteras en la zona, el manejo del agua, su participación en el manejo del Parque Nacional Natural El Cocuy, los asuntos relacionados con el ecoturismo y, adicionalmente, se hace una revisión de las amenazas adicionales que se ciernen sobre el territorio u'wa. Luego, se hace un análisis de la visión que en la actualidad mantienen los dirigentes u'wa acerca del mundo occidental, sobre su propio mundo y en torno a las relaciones entre ambos, todo ello sobre la base de las entrevistas mantenidas con algunos de esos dirigentes en 2011 y 2012. Seguidamente se efectúa una revisión sobre las concepciones acerca del indígena como

sujeto ecológico. Por último, el capítulo concluye con la identificación de vías de acción necesarias para fortalecer la lucha del grupo en defensa de su territorio y la conservación de los recursos naturales.

6.1. El conflicto u'wa con las multinacionales petroleras

6.1.1. Relato de los hechos

El conflicto u'wa con las multinacionales petroleras tuvo su periodo de mayor intensidad en la década de 1990 y estuvo jalonado por una serie de decisiones por parte del Estado y recursos de la comunidad u'wa en escenarios nacionales e internacionales contra dichas decisiones (ver Tabla 5). Partimos aquí de una reconstrucción de ese proceso, para, luego, detenernos en su análisis.

TABLA 5: CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO U'WA CON LAS EMPRESAS PETROLERAS

7 de abril de 1992	Firma de acuerdo entre Ecopetrol y OXY para empezar a buscar hidrocarburos en la zona denominada Bloque Samoré
Septiembre de 1993	Presentación del estudio “Declaratoria de efecto ambiental”
Octubre de 1993	Presentación del estudio “Estudio ecológico y ambiental”
10-11 de enero de 1995	Primera consulta previa
3 de febrero de 1995	Mediante la resolución 110 se expide la primera licencia ambiental
10 de agosto de 1995	Acción de tutela del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá
22 de agosto de 1995	Solicitud de acción de nulidad de la licencia, por parte del Defensor del Pueblo, ante la Corte Constitucional
12 de septiembre de 1995	Tutela número 137
12 de septiembre de 1995	Se ordena una consulta acorde con la Ley 121 de 1991 (Tribunal Superior de Santafé de Bogotá)
14 de septiembre de 1995	Providencia emitida por el Consejo de Estado, en la cual se muestra el desacuerdo con la Corte Constitucional, donde para esta última, la consulta previa es un derecho fundamental, mientras que para la primera es solo un recurso con el cual se informa a la

	comunidad sobre las repercusiones de las actividades que se adelanten en su territorio.
19 de octubre de 1995	La Corte Suprema de Justicia revoca la decisión del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
16-17 de agosto de 1996	Declaración de los <i>werjayas</i> y los cabildos u'wa
3 de febrero de 1997	Resolución 110 de la Corte Constitucional, que deja sin efecto la licencia ambiental en territorio u'wa y ordena la realización de una nueva consulta previa en un plazo de 30 días
3 de febrero de 1997	Sentencia SU-039/97 de la Corte Constitucional que decreta la realización de consulta previa ante la explotación de recursos en resguardos indígenas
28 de abril de 1997	Denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA)
14 de mayo de 1997	Presentación del caso por parte de la ONIC en la Comisión Quinta del Senado de la República
14 de mayo- 22 de mayo de 1997	Primer viaje a Colombia del equipo del proyecto OEA/Harvard para evaluar el caso u'wa
30 de julio y 3 de agosto de 1997	Segundo viaje a Colombia del equipo del proyecto OEA/Harvard
Septiembre de 1997	La comisión evaluadora de la OEA con participación de la Universidad de Harvard solicita la suspensión de los trabajos exploratorios
1998	Anuncio de la decisión de suicidio colectivo por parte de la comunidad u'wa
16 de octubre de 1998	Solicitud de la segunda licencia para realizar exploraciones dentro del Bloque Gibraltar, a 500 metros de distancia del Bloque Samoré. Se solicita cuando se han trazado nuevos límites del territorio u'wa
Fines de 1998	Inicio del proceso de ampliación del Resguardo Unido U'wa, con participación de la Pontificia Universidad Javeriana
22 de agosto de 1999	Ampliación del Resguardo Unido U'wa
Agosto de 1999	Las empresas petroleras solicitan el ajuste de las coordenadas del Bloque Samoré
21 de septiembre de 1999	Licencia de explotación en el Pozo Gibraltar
Febrero de 2002	Manifestación pacífica de la comunidad donde mueren tres niños ahogados

Los antecedentes de este conflicto se remontan al momento en que las petroleras Occidental Petroleum Corporation, OXY, y la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, vieron en esta zona del país una de las más importantes fuentes de riqueza, sin contar que formaba parte del territorio de la comunidad indígena u'wa y que las labores que en adelante se llevasen a cabo afectarían el entorno social del grupo nativo.

El caso u'wa gira en torno a las exploraciones sísmicas realizadas en el Bloque Samoré, nombre con el cual ha sido denominada la zona en la que se realizarían las labores extractivas. De esta forma, puede afirmarse que el conflicto inició el 7 de abril de 1992, cuando ECOPETROL firmó un contrato con OXY para dar inicio a las labores de búsqueda de hidrocarburos, no sin antes tramitar la correspondiente licencia ambiental ante el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente,INDERENA. Una vez finalizado este trámite, el Ministerio del Medio Ambiente autorizó a la multinacional Occidental de Colombia para que llevara a cabo los trabajos en un lugar que la comunidad indígena ha denominado su “territorio ancestral”.

A lo largo de este conflicto se han expedido dos licencias ambientales: La primera fue otorgada el 3 de febrero de 1995 para realizar exploraciones en el Bloque Samoré; y la segunda se concedió el 21 de septiembre de 1999, autorizando a la petrolera a realizar exploraciones en el Pozo Gibraltar I. Con respecto a esta última, fue concedida: “...una segunda licencia ambiental –otorgada a las petroleras, pocos meses después de la ampliación del resguardo– para llevar a cabo trabajos de exploración en un lugar ubicado en el Bloque Samoré y que se conoce como ‘El Pozo Gibraltar I’ (a 500 metros del límite del resguardo ampliado)” (Uribe, 2005: 29). Debido a las inconsistencias que se produjeron en la emisión de la primera licencia, en lo que se refiere a la consulta previa, en la segunda intervinieron la Dirección General de Asuntos Indígenas y el Incora, entidades a las cuales se les consultó si en el territorio donde se quería explorar existía un resguardo establecido. Al negar la existencia de un grupo indígena en la zona, la licencia fue concedida y, los indígenas, como muestra de su inconformidad, realizaron el bloqueo de algunas carreteras de la región, suspendieron la mesa de negociaciones y, por último, dieron a conocer unas Cédulas Reales, otorgadas por la Corona española en la época colonial, que demuestran el derecho de propiedad de la comunidad sobre esos predios.

En lo que concierne al otorgamiento de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Medio Ambiente a la multinacional Occidental de Colombia Inc., para poner en marcha el proyecto “Exploración sísmica Bloque Samoré”, existen varios elementos que muestran su clara deficiencia. En primer lugar, la empresa petrolera, a partir de los dos estudios que presentó en los meses de septiembre y octubre de 1993 (“Declaratoria de efecto ambiental” y “Estudio ecológico y ambiental”) no realizó una investigación que tuviese en cuenta las particularidades de la comunidad y el impacto negativo que la implantación de un proyecto de este tipo podía tener.

De otra parte, el obligado proceso de consulta previa fue irregular; las reuniones en las que dicha consulta se realizó –el 10 y 11 de enero de 1995– no se diseñaron para que la comunidad emitiera un juicio al respecto o evaluara la situación, sino que, por el contrario, se reunió a unos cuantos indígenas, los cuales ni siquiera eran autoridades u’wa, para informarles de lo que se iba hacer en un futuro en la zona. Aquí se les expuso una serie de actividades y términos que los indígenas desconocían totalmente y, por lo tanto, no estaban en capacidad de decidir si aquello era bueno o malo. A su manera de ver, se les engañó.

Por tal motivo, con el fin de hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes, los indígenas interpusieron una serie de recursos legales, entre ellos varias tutelas, en los cuales fueron asesorados por el Defensor del Pueblo. En este proceso se emitieron varios fallos, unos a favor de la comunidad u’wa y otros en su contra. Para Robayo (2001), este problema ha surgido por el choque de visión entre dos culturas autónomas, donde las dos posiciones son válidas. Con respecto a los beneficios para el país, el desarrollo del proyecto le podría devolver a Colombia la autosuficiencia en materia petrolera, lo cual le significaría ingresos a la región de 1,4 billones de pesos por concepto de regalías, y al Estado cerca de 900 millones de dólares por año, hasta el 2020 (Robayo, 2001: 31). En contraposición se encuentra el razonamiento de los indígenas y su estrecha relación con la naturaleza. Para ellos, las nociones de equilibrio, pureza y conservación, revisten gran importancia; el petróleo forma parte de ese equilibrio, por cuanto es considerado la sangre de la Madre Tierra, y un proyecto de esta naturaleza implicaría cambios en la corteza terrestre, provocando la consecuente destrucción del paisaje y el ecosistema, lo cual, a su vez, desmejoraría la calidad de vida y la cultura de este pueblo.

Robayo afirma que a partir de la relación especial que tienen los indígenas con la naturaleza, surge la idea de progreso de los u'wa, diferente a la que tiene el hombre de Occidente: ellos tienen su pensamiento dirigido a preservar el medio ambiente. “Su obligación es cuidar, no maltratar a ningún ser vivo, no sacar nada que no pueda ser recuperado en el futuro; por eso para el u'wa es prohibido matar y su único poder es la sabiduría” (Robayo, 2001: 22). Las actividades de la comunidad que están relacionadas con el medio ambiente se hacen siempre con la intención de preservar la naturaleza. De esta forma, se pretende que con las actividades agrícolas, la tierra se regenere y dé siempre buenos frutos. Lo mismo se hace con la caza y la pesca, prácticas donde se respetan las leyes que la naturaleza les impone.

Con el fin de preservar su territorio y detener las actividades de la petrolera OXY en la zona, el 10 de agosto de 1995 se interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, el 22 del mismo mes se solicitó la acción de nulidad contra la Resolución 110²¹ ante el Consejo de Estado, alegando que se consideraba inconclusa la consulta previa y se vulneraban, de esta forma, los derechos de la comunidad. La respuesta a la tutela se obtuvo el 12 de septiembre y en esta se le dio la razón a la comunidad indígena, ordenando, de paso, la inaplicación transitoria de la Resolución 110 y la realización de la consulta previa (Robayo, 2001: 28). Es importante aclarar que el fallo emitido por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, el 12 de septiembre, ordenó que la nueva consulta previa que se llevase a cabo debía cumplir con los requisitos enunciados en la Ley 121 de 1991.

Al no estar de acuerdo la OXY con la decisión tomada, la empresa decidió impugnar la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, quien dio un dictamen el 19 de octubre de 1995 a favor de la petrolera, dejando sin efecto la decisión tomada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. De otra parte, la Defensoría del Pueblo solicita a la Corte Constitucional la revisión de las anteriores decisiones, con lo cual, el 3 de febrero de 1997, este organismo revoca el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia y confirma la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que defiende los derechos de los u'wa.

²¹ Para leer el documento completo, remítase a la Sentencia SU-039/97, en el Anexo 5.

De esta forma, la Corte Constitucional, en términos generales, propone que se realice una nueva consulta previa en un plazo de treinta días, donde la comunidad tenga una participación activa en el proceso sin que se circunscriba a los trámites administrativos, sino que su actuación sea directa en este proceso, para ser enterados, debidamente, de los mecanismos, actividades y procesos que adelantase el proyecto, así como de los medios para expresar sus inquietudes y defender sus intereses. Para los indígenas, este canal de comunicación no ha sido suficiente, porque ellos están regidos por una ley ancestral que no permite que la tierra sea violentada ni explotada bajo ningún concepto; es por ello que no están de acuerdo con las leyes occidentales que se dictan al respecto, dado que éstas no se encuentran en concordancia con el pensamiento indígena.

El 14 de mayo de 1997, funcionarios de la ONIC hicieron una presentación del caso en la Comisión Quinta del Senado, con el fin de darlo a conocer en otras instancias gubernamentales, aunque días antes, el 28 de abril, los dirigentes de la comunidad, al ver que el conflicto no tenía una solución clara, denunciaron los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos²². En lo que se refiere a esta última denuncia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, pidió a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos que invitara a la Universidad de Harvard para que conjuntamente evaluaran la situación y efectuaran las recomendaciones pertinentes para solucionar de la mejor manera el conflicto. El equipo del Proyecto OEA/Harvard viajó a Colombia entre el 14 y el 22 de mayo de 1997 y nuevamente entre el 30 de julio y el 3 de agosto del mismo año, con el fin de llevar a cabo la evaluación y considerar la viabilidad del proyecto Bloque Samoré. Al final, los organismos internacionales junto con la Universidad de Harvard concluyeron, en términos generales, que debía suspenderse la ejecución de los planes de exploración y explotación de petróleo dentro del Bloque Samoré, como paso inicial para crear mejores condiciones en caso de reiniciar las mismas actividades en épocas futuras (Eraso, 1997: 48-49).

²² El documento presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – OEA puede ser revisado en el Anexo 3.

Aunque varios sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional han estado a favor del pueblo u'wa, la licencia otorgada a la OXY para la explotación de hidrocarburos en territorio u'wa ha vulnerado los derechos de esta colectividad, con lo cual, en 1998 se hizo el anuncio de un suicidio colectivo por parte del grupo indígena, de no revocarse las actividades exploratorias que se habían adelantado en la región. Los argumentos ancestrales, étnicos y políticos del grupo nativo demuestran que es válida su posición de acuerdo al derecho humanitario, pero para aquellos que tienen intereses económicos en esta situación, dicho enfoque carece de sustento.

Los *werjayas* y los cabildos del pueblo u'wa han llevado a cabo reuniones en repetidas ocasiones con el fin de hacer valer sus derechos; una de las más destacadas fue la de los días 16 y 17 de agosto de 1996, en el municipio de Cubará, con el fin de dar a conocer al país y al mundo su pensamiento. En síntesis, la comunidad en su totalidad comparte la idea de defender la naturaleza y todo lo que a ella pertenece. Hacen referencia a la obligación que se ha creado el Estado con la Constitución de 1991 de defender los derechos especiales de los pueblos indígenas y, de no cumplir el gobierno, ellos prefieren una muerte digna y por eso se inclinan por el suicidio colectivo. Con la realización de estas actividades en su territorio, se violan los preceptos normativos, tanto nacionales como internacionales, que tutelan a los pueblos indígenas, tales como la Constitución Nacional, la legislación indígena vigente, la Ley 99 de 1993, el Decreto 710 de 1990, la Ley 160 de 1994 y la Ley 21 de 1991, que acoge el convenio de la OIT.

A pesar de que el conflicto ha traspasado la frontera nacional y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con un grupo investigativo de la Universidad Harvard han intercedido a favor de la comunidad dándole la razón, las empresas transnacionales del petróleo no han abandonado las actividades de explotación de hidrocarburos en la zona y han solicitado al gobierno colombiano la aprobación de una nueva licencia ambiental, esta vez para realizar la exploración en el sitio denominado “Pozo Gibraltar I”, la cual fue concedida el 21 de septiembre de 1999. Como era de esperarse, la comunidad ha reaccionado ante estos hechos que vulneran la seguridad tanto de su territorio como de su cultura, y se ha manifestado en diversas ocasiones. Una de especial importancia se llevó a cabo en febrero del 2002, en la cual murieron tres niños del cabildo ahogados. Los indígenas

han culpado de estos hechos al ejército que, según ellos, los reprimió cuando ellos solo estaban efectuando una protesta pacífica.

Los años sucesivos han hecho que el conflicto gire en torno a los límites del Resguardo Unido U'wa, dado que en parte de éste es donde se ha llevado a cabo la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, para la comunidad ese espacio es de gran importancia, ya que son sitios donde se efectúan ceremonias de valoración del territorio y se realizan cantos para felicitar a la madre tierra. Como es obvio, las comunidades indígenas continúan con la resistencia, exigiendo legalmente la restitución de los predios que les corresponde y solicitan que se acate la decisión tomada por la Corte Constitucional en el auto 004 emitido el 29 de enero del 2009 en defensa de las comunidades indígenas, que a causa del conflicto armado se encuentran en vía de extinción, entre ellas la comunidad U'wa.

6.1.2. Análisis de la situación que ha girado en torno al conflicto

Para lograr entender el por qué el conflicto ha llegado a tales dimensiones, es necesario detallar el papel de cada uno de los actores del conflicto, nacionales e internacionales y la forma como se han implicado, teniendo en cuenta las causas de esta discrepancia, los efectos positivos y negativos y el impacto cultural que se produce al implementar un proyecto de tal envergadura en la zona. De esta forma, al estudiar los anteriores hechos, se hace evidente que el Estado ha mostrado graves inconsistencias a la hora de valorar y aplicar los mecanismos legales utilizados en este caso, como es el otorgamiento de las licencias ambientales, generando, así, un retroceso en la relación Estado-indígenas.

En este sentido, Robayo ha realizado un análisis *stakeholder*, que más adelante será tratado y en el cual, a partir de la visión que gira en torno a la administración de empresas, se pueden determinar las repercusiones para los actores que participan en la ejecución de ciertas empresas. Con un estudio de esta naturaleza se puede esclarecer si es posible la viabilidad de un proyecto como el que se ha desarrollado en territorio u'wa. En este caso, en particular, ha sido valiosa la información que se ha extraído de la entrevista con el sociólogo Pedro Cortés, quien estuvo involucrado directamente en el caso y cuyas explicaciones fueron de gran ayuda para aclarar la posición de la comunidad y las consecuencias del conflicto (Robayo, 2001: 34). De este análisis se

concluyó que nunca se le exigió a la compañía que respondiera por los daños derivados de sus operaciones –como ha ocurrido otras muchas veces en la historia de Colombia–, porque lo único que interesa es el beneficio económico del ejercicio de ciertas actividades. Con este hecho, una vez más los colombianos entran en un retroceso en lo que se refiere a los avances que manifestó la Constitución de 1991 que hacen énfasis en la identidad nacional, el derecho a ser diferente y el respeto a la diversidad cultural.

Eraso (1997) exploró también los elementos y el transcurso de este conflicto medioambiental, partiendo de la idea de que la efectividad del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, así como la conservación de la riqueza de la nación colombiana, dependen del respeto que la sociedad y el Estado tengan para con los pueblos indígenas. La autora expuso la posición u'wa, mostrando su preocupación al tener como precedente los graves daños que sufrieron otras culturas, como los motilón-barí, ingas, sionas, kofán o yariguí, por implementar proyectos similares en sus territorios. Por ese motivo, los dirigentes u'wa interpusieron los recursos legales ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, con el fin de revocar la licencia adjudicada a la multinacional petrolera. Como señaló Eraso, las decisiones contrarias sobre el mismo caso por parte de diferentes tribunales de justicia colombianos evidencian la clara lucha de intereses entre algunos sectores de la sociedad nacional.

Desde el punto de vista sociocultural, son evidentes los vacíos dejados con la ejecución del proyecto; al no contarse con estudios anteriores de tipo etnográfico y antropológico sobre la comunidad, elaborados por investigadores especializados, se ignoraban los principios y leyes que rigen al grupo nativo. En ese sentido, Eraso ha subrayado las repercusiones negativas que ha sufrido la comunidad, producto del contacto con la cultura occidental y la ejecución de las exploraciones sísmicas en su territorio. En primer lugar, los u'wa ven este proceso el regreso de la época colonial a sus tierras. De aquí se pueden derivar otros efectos perjudiciales como el alcoholismo, la prostitución y la mendicidad, consecuencias que sufrió el pueblo sikuani con el proyecto Caño Limón Coveñas adelantado por la Occidental. En lo que respecta al factor económico, el ingreso al territorio de personas ajenas a la comunidad puede implicar formas de explotación y de producción no adecuadas, produciendo así el agotamiento de los recursos de fauna y flora que tradicionalmente han permitido la subsistencia de la comunidad (Eraso, 1997: 62).

Por su parte, Correa (1997) ha descrito los proyectos de la Occidental de Colombia para los cuales elINDERENA y el Ministerio de Medio Ambiente otorgaron licencias ambientales. De su investigación se puede resaltar el seguimiento que se hace al equipo interdisciplinario que aprobó dichas licencias, en el cual intervinieron profesionales del área de psicología social, biología, geología e ingeniería forestal; al mismo tiempo, relaciona las fechas en las que se llevaron a cabo los trabajos de campo y los temas que se trataron en esas jornadas del 10 y el 11 de enero de 1995.

La investigadora, al relacionar de forma pormenorizada la descripción de los proyectos, también incluyó en su estudio los temas que tales proyectos no tuvieron en cuenta y que produjeron un impacto negativo, en este caso, sobre la cultura u'wa. Como ejemplo de lo anterior, afirma que en uno de los proyectos, en lo que se refiere a los impactos en la matriz de interacción, solo se tuvieron en cuenta las acciones relacionadas con campamentos, trochas, helipuertos, perforación, registro y las medidas de manejo ambiental; sin embargo, se dejaron de considerar aspectos fundamentales que estaban relacionados con la mano de obra, disposición de basuras, disposición de aguas residuales y demanda de bienes y servicios por parte de la mano de obra.

Un hecho relevante es el incremento sustancial en la población inmigrante que se ha desplazado a la zona con el fin de buscar una oportunidad laboral; hecho perjudicial para la cultura u'wa, que en ese entonces no superaba los 5.000 habitantes. Otro elemento analizado hace referencia a los estudios ecológicos y ambientales que llevaron a cabo los proyectos; en este aspecto se concluye que los datos aportados por tales investigaciones son insuficientes para el otorgamiento de una licencia ambiental, dado que no se logra identificar y evaluar de forma objetiva los impactos reales que ha tenido que enfrentar la comunidad por su ejecución. Como hecho particular, denuncia que en los estudios adelantados en la zona, no participó ningún antropólogo y el equipo de investigación solo realizó un trabajo de campo de ocho días, tiempo insuficiente para elaborar un informe detallado y objetivo sobre un área tan extensa (en este caso, 185.688 hectáreas, según C.T. 025/94 delINDERENA, ya que el estudio no señaló la extensión) (Correa, 1997: 15).

De esta forma, Correa ha mostrado con su investigación que ha habido claras irregularidades en los procesos de evaluación de los proyectos interpuestos por la Occidental de Colombia y el otorgamiento de sus respectivas licencias. A su vez, deja

en evidencia que los organismos del Estado encargados de arbitrar los procedimientos correspondientes no han cumplido de forma satisfactoria con su labor. En el caso delINDERENA, la entidad excluyó a las autoridades indígenas y organismos mediadores, como la ONIC, de la toma de decisiones, teniendo en cuenta que estos sucesos se llevaron a cabo cuando ya estaba vigente la Constitución Política de 1991. Por su parte, la Occidental de Colombia también ignoró los derechos de la comunidad u'wa y trató, a su vez, de evitar cualquier obstáculo legal que se interpusiera en su camino.

Ha resultado “...incomprensible que la autoridad ambiental de Colombia del momento, acepte el Estudio Ecológico Ambiental presentado por Occidental y lo equipare al Estudio de Impacto Ambiental exigido por el art. 57 de la ley 99 de 1993, cuando éste no cumple los mínimos requisitos” (Correa, 1997: 21). Por lo tanto, la autora recomienda que de acuerdo a los artículos 8 y 95 de la Constitución Nacional y del artículo 69 de la Ley 99 de 1993, los colombianos soliciten la revocatoria de la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente a la Sociedad Occidental de Colombia Inc.

En lo que respecta a las pesquisas llevadas a cabo por González (1996), además de indagar por las acciones públicas y las tutelas interpuestas por los dirigentes indígenas, dirigidas a revocar los permisos concedidos a la multinacional OXY para realizar exploraciones sísmicas en el territorio de la comunidad, no ha pasado por alto el pensamiento u'wa, enfrentando así, la posición del Estado con la del grupo nativo.

En esa dirección, el autor afirma que los países del Tercer Mundo, desde los años cuarenta han venido luchando por alcanzar los niveles de vida de los países del Primer Mundo. El concepto utópico de desarrollo ha dictado las directrices de estos gobiernos, a los cuales se les ha vendido la idea de que, para llegar al estado deseado, deben aumentar los niveles de producción, claves para la prosperidad y la paz en todo el mundo.

El crecimiento económico como objetivo único del desarrollo ha sido el centro de críticas desde la década del sesenta, por lo cual, ha sido necesario que el concepto se concilie con otros ideales, tales como la equidad, el desarrollo social y humano, la sostenibilidad de la diversidad cultural y, por supuesto, la sostenibilidad del medio

ambiente. Este ensayo se esfuerza por profundizar este último aspecto y analiza si el conflicto u'wa se resuelve a través del Desarrollo Sostenible:

“El argumento del cual parte este texto es que el discurso del Desarrollo Sostenible presenta el conflicto en torno a la problemática ambiental como uno de carácter fundamentalmente económico, susceptible de ser trabajado y resuelto con el andamiaje conceptual e instrumental de la teoría económica convencional. Se plantea como reacción a esta posición que la problemática ambiental refleja múltiples tipos de conflicto, de diversa naturaleza, que complejizan el asunto y que presentan serias limitaciones a la solución económica del problema” (González, 1996: 8).

El autor ha enmarcado el conflicto u'wa dentro del contexto mundial que transcurre a partir de la segunda mitad del siglo XX, el cual puede ser identificado con los altos niveles de pobreza que han caracterizado al planeta en ese momento y que tiene sus orígenes varias décadas atrás. En ese sentido, con el objetivo de erradicar la pobreza, lo que se ha provocado es un deterioro ambiental sin precedentes que no ha logrado su cometido, y sí ha originado un uso indiscriminado e irracional de los bienes y recursos que ofrece la naturaleza. De acuerdo a lo anterior, la pobreza radica en la falta de desarrollo, el cual es imposible lograr sin crecimiento económico. “Al eliminar la pobreza se estaría eliminando la principal causa de la destrucción del sistema natural” (González, 1996: 10).

Después de saltar la alarma en la década del setenta con relación a la escasez de productos, se ha propuesto dar marcha al proyecto del desarrollo sostenible, que tiene como objetivo fundamental lograr el uso eficiente de los recursos naturales. En esta propuesta, la naturaleza se convierte en una forma de capital y se incorpora a los mecanismos de producción. Con estas nuevas políticas, la idea de escasez absoluta que dominó los setenta, fue reemplazada por la idea de una escasez relativa, donde las posibilidades de sustitución permitirían superar los obstáculos naturales al crecimiento:

“Así, tenemos que el desarrollo sostenible marca una nueva fase en la era del desarrollo, en la que el conflicto planteado a comienzos de los años setenta se resuelve al convertir la naturaleza en un objeto económico. Sin embargo, al analizar más detenidamente la problemática ambiental que se vive a todo nivel, se observa que más que un objeto económico la naturaleza se ha convertido en un sujeto político, fuente de una gama de conflictos, dilemas y paradojas que no necesariamente quedan resueltos con la propuesta de desarrollo sostenible” (González, 1996: 11-12).

Una vez creado el escenario desde la óptica del crecimiento económico y el desarrollo sostenible, en el cual el autor enmarca la problemática de la comunidad indígena, éste hace una aproximación a la lucha por la tierra, el territorio y la biodiversidad en la historia de Colombia, como causas determinantes en el desarrollo del conflicto u'wa. En este sentido, la primera conclusión a la que llega, es que la disputa por el control de los recursos es casi tan antigua como la sociedad misma, aunque son recientes algunos aspectos puntuales del conflicto y que están directamente relacionados con la naturaleza y el tema ambiental. De esta forma, puede afirmarse que las luchas agrarias en Colombia, antes de esta controversia, han sido fundamentalmente sociales y no agroecológicas. Es por eso que los conflictos entre campesinos, terratenientes, ejército, arrendatarios, colonos y otros actores, se han producido, por decirlo así, en una hoja en blanco, donde en ningún momento se han tenido en cuenta los accidentes geográficos de los sitios donde se han desarrollado, es decir, un río, una montaña, un valle, etc, lo cual quiere decir, por un lado, que el espacio como tal no ha sido suficientemente problematizado y que en Colombia, a pesar de esta querella, aún falta crear puentes que unan lo social con lo natural.

La tierra ha sido el centro de numerosas disputas humanas después del descubrimiento y desarrollo de la agricultura, con lo cual, la creación de la propiedad privada y la mercantilización de la tierra, han llevado a juridizar esa disputa. En lo que respecta a Colombia, desde que esta se ha convertido en un Estado independiente, la lucha por la tierra ha sido el eje central de la historia, pero se ha dejado en el olvido la lucha por el territorio, la cual ha aparecido a finales de los ochenta con las discusiones sobre la descentralización y el reordenamiento territorial en relación con los pueblos indígenas y las etnias afrocolombianas. De esta forma, la problemática en cuestión empezó a tomar tintes políticos.

Con el desarrollo de la biotecnología y el descubrimiento de la biodiversidad como bien jurídico con consecuencias económicas, la tierra ha sido desplazada de su centro de poder y de riqueza, y es vista como un medio de acumulación asociado a la tecnociencia. Con el surgimiento de esta corriente de pensamiento, de paso, ha cobrado auge el concepto de biodiversidad cultural:

“En la medida que, a finales del siglo XX, la naturaleza está globalmente humanizada, la biodiversidad empieza a ser reconocida como biodiversidad

cultural. Y en la medida que en las áreas silvestres reconocemos la presencia de pueblos que conviven con la selva vemos que su subsistencia depende también, ya sea de la adaptación o literalmente del enriquecimiento de la biodiversidad” (Palacio, 1996: 24).

Palacio considera que existen cuatro elementos básicos que no se pueden ignorar a la hora de tratar el tema ambiental; estos se refieren a la relación entre el sujeto y su entorno, entre la sociedad y la naturaleza, entre el hombre y la naturaleza, y entre el ecosistema y la cultura (Palacio, 1996: 27). Afirma, que la naturaleza es construida social y culturalmente; y es por eso, que al analizar este tipo de relaciones, la dimensión del concepto de cultura se amplía para incluir dentro de ella esos factores jurídicos, político-institucionales, la mentalidad colectiva y la economía política del desarrollo. Es evidente, que esta no es la única forma de abordar la cultura y su relación con el tema ambiental o con la naturaleza misma, pero al ceñirse a esta óptica, Palacio abre el camino para exponer la situación política y jurídica del conflicto u’wa.

El problema en torno a la explotación de petróleo en territorio u’wa es visto como un choque entre sistemas de representación y cosmovisiones. De un lado, a nombre de una supuesta modernidad, se arrasan culturas y biodiversidad para desarrollar la economía. En esa misma orilla prevalece el mercado, la ganancia, la opulencia, contaminación, escasez, hambre y desolación. Al otro lado, se encuentra la racionalidad mítica, la espiritualidad, la diversidad, la representación simbólica, y elementos como tierra, agua, sol, ríos, universo, animales y personas. Estos últimos, son los valores que el pueblo u’wa representa.

Las denuncias interpuestas ante los diferentes organismos del Estado no han tenido efectos favorables para la comunidad, como es el caso de la sentencia del 14 de septiembre de 1995, mediante la cual se deniega la acción de nulidad contra la licencia ambiental, recurso interpuesto por el entonces Defensor del Pueblo, Jaime Córdoba. Las autoridades tradicionales u’wa aducen que la prospección sísmica viola su cosmogonía milenaria; ellos son diferentes y habitan un mundo distinto al del hombre blanco, por eso, su forma de concebir el mundo difiere de la del mundo occidental “...no sólo son dos formas diferentes de entender el mundo y de establecer relaciones entre cultura y naturaleza; sino que se contraponen dos formas de administrar y gobernar” (Uribe Hermocillo, 1996: 180).

Con respecto a las instituciones del Estado y su posición frente al conflicto, estas se encuentran divididas, dado que, aunque elINDERENA estimó viable la ejecución de los estudios sísmicos por parte de la OXY, la Dirección General de Asuntos Indígenas ha observado con extrañeza los estudios de impacto ambiental, ya que estos carecen de profundidad e ignoran la cosmovisión, los elementos culturales, sociales y económicos de los pueblos indígenas.

Afortunadamente para el pueblo u'wa, el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, en su providencia del 12 de septiembre de 1995, falló a su favor, haciendo notar que el país tiene el propósito de ofrecerles a los grupos indígenas, las garantías para que su vida se vea libre de perturbaciones provenientes del resto de la población y que puedan incidir de forma negativa en su cultura, religión, costumbres, lugares y elementos sacralizados en sus creencias. Por tal motivo, se dio la orden de acatar la Ley 121 de 1991 que hace referencia a la participación de los indígenas en las decisiones que se tomen sobre sus territorios.

Las acciones interpuestas por parte de la comunidad en los años siguientes, lograron hacer eco en ciertos estamentos del Estado y, en algunos casos, detuvieron las exploraciones sísmicas, aunque en otros se ha producido el efecto contrario que ha sido el de dar vía libre a los trabajos exploratorios. Aparte de la Ley 121 de 1991, que favorece la posición de los indígenas, y la sentencia del 14 de septiembre de 1995, que niega los derechos de la comunidad, se resalta como acción pública relevante la Resolución N° 110 del 3 de febrero de 1997, que deja sin efecto la licencia ambiental a la Sociedad Occidental de Colombia Inc. expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. En esta resolución, se hace un recuento de todos los artículos y leyes que, al ser ignorados, vulneran los derechos de las minorías étnicas del país.

Otra acción que se ha mostrado a favor de los intereses de los u'wa, ha sido la tutela con número de radicación 137, interpuesta el 12 de septiembre de 1995, la cual está basada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, que ofrece la posibilidad a los ciudadanos de entablar este tipo de acciones cuando sientan que sus derechos son vulnerados. En esta demanda, se resolvió la defensa del derecho fundamental a la vida, en nombre de la comunidad u'wa, y se apela al artículo 6 de la Ley 21 de 1991, que en síntesis, propone hacer partícipes directos a los grupos nativos en los proyectos que se adelanten en sus territorios.

Entre las organizaciones indígenas que se han pronunciado en este sonado caso se encuentra la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC (1997), que preparó una presentación en el debate de la Comisión Quinta del Senado de la República, el 14 de mayo de 1997, y que fue expuesta en la Cámara de Representantes el 21 de mayo del mismo año.

A partir de los hechos históricos que se refieren a la explotación de petróleo en los territorios de diferentes grupos indígenas del país, la ONIC sostiene que, con la llegada de las compañías petroleras a Colombia entre las décadas del veinte y sesenta del siglo pasado, las actividades que se llevan a cabo traen repercusiones negativas para los grupos nativos que las enfrentan, como ha sido el caso del grupo motilón-barí de Norte de Santander o los kofán en el Putumayo. Sin embargo, el caso más grave puede ser el de los yariguíes, en la zona de Barrancabermeja, donde, con la implantación de uno de los primeros contratos en 1915, “Concesión de Mares”, se produjo la temprana desaparición de la cultura hace más de cincuenta años.

Así mismo, existen otros casos en diferentes zonas del país, donde además de llevar a cabo los proyectos de extracción de petróleo, se les ha prestado todo el respaldo y protección a las empresas, por parte del gobierno, con el fin de repeler la hostilidad de los indígenas que moran en esas regiones. Las cifras referentes a las muertes producidas por los enfrentamientos ya eran superiores y las causas escalofrantes:

“...fueron muchos los Barí-Motilón que cayeron bajo las armas oficiales, pero también un gran número de ellos tuvo una de las muertes más dantescas de que se tenga noticia: sucumbieron achicharrados en las mallas electrizadas de los campamentos de la compañía. Por su parte, para 1939, 250 obreros de la compañía habían sido flechados mortalmente” (ONIC, 1997: 2).

Son diversas las denuncias que expone la ONIC, las más preocupantes están relacionadas con la disminución de la población indígena en varios departamentos del país. De otra parte, las labores de extracción han acabado con las fuentes hídricas de algunas zonas como el Putumayo, donde muchas de ellas se han reducido a alcantarillas de residuos y productos químicos de estas empresas. En esta zona, también es común encontrar plantaciones de hoja de coca y laboratorios dedicados a la producción de cocaína; por eso, estas áreas, comúnmente son roseadas con productos químicos, entre ellos el glifosato, con el fin de erradicar esta actividad, pero al mismo tiempo, repercute

negativamente en la fauna y flora, donde cada vez se hace imposible recuperar la diversidad biológica que las ha caracterizado.

Los engaños a los grupos indígenas, por parte de las compañías petroleras, han sido muy frecuentes. Entre ellos está el sucedido a comienzos de la década del ochenta, donde la empresa Occidental de Colombia adelantaba trabajos de exploración en los resguardos Sáliba de la zona de Orocué, en Casanare. Los indígenas pensaban que también obtendrían un beneficio y, por eso, un cacique pidió bultos de cemento que al final no llegaron a su destino. Cuando se iniciaron las obras de extracción, las aguas se contaminaron y muchos animales murieron. Después de varios años, la empresa KELT, con la idea de continuar con las actividades de extracción, cargó con el costo de los animales muertos e hizo regalos de navidad, pero la desintegración de las comunidades que habitaban en la zona ya se había producido (ONIC, 1997: 5).

Es importante tener en cuenta la relación que se crea entre las culturas afectadas, las empresas petroleras que operan en los territorios indígenas y el nombre de los proyectos que se adelantan en cada región. Al mismo tiempo, es relevante la información recopilada por la ONIC, porque a partir de ella se ha podido crear un marco histórico donde se han relacionado gran cantidad de fechas, empresas y personas naturales que se han dedicado al negocio de la exploración y extracción de hidrocarburos. Así por ejemplo, se encuentra vinculada la empresa British Petroleum con el proyecto extractivo Cusiana y los indígenas Sáliba y Sikuni; o, la compañía OXY con su proyecto Caño Limón, en la zona de Arauca, afectando a los u'wa de esa región.

En términos generales, desde 1915, año en que empezó a explotarse el petróleo en Colombia, las consecuencias para los grupos indígenas han sido nefastas, dado que casi siempre se han llevado a cabo estas actividades en sus territorios. Se ha podido ver la reducción de los territorios de estas minorías y en varios casos la extinción de las mismas; ha habido violencia, colonización, encarecimiento de la vida, aculturación, contaminación ambiental, reducción de bosques y, por consiguiente, de fauna acuífera y terrestre, invasión de áreas sagradas, como en el caso de los u'wa, y la inducción a participar en actividades ilícitas con el fin de subsistir.

La Constitución Política de 1991, indudablemente, ha sido un hecho histórico para los pueblos indígenas en Colombia, que han venido luchando por sus derechos de forma más organizada desde comienzos de la década del setenta. Ser reconocidos constitucionalmente abre nuevas perspectivas para estos grupos, haciendo que el país se encuentre en un nuevo escenario que es el de la pluriculturalidad y la diversidad étnica.

El proceso que se debe seguir para que la mentalidad del país cambie de forma positiva es lento; la sociedad, poco a poco, debe asimilar el nuevo esquema que tiene en cuenta a todos los individuos y grupos por igual, al tiempo, que debe desprenderse de su pasada estructura, basada en un pensamiento unificador y homogenizante, encaminado a cumplir con los formalismos, más que con los derechos de los ciudadanos:

“Para nosotros, la Constitución de 1991 es como un pacto, donde todos aceptamos que se dan por terminados los 500 años de invasión, que los pueblos indígenas podemos tener seguridad de que no seguiremos siendo desalojados de nuestras tierras ni saqueando nuestros recursos, y a la vez que se posibilitará la reconstrucción de nuestras sociedades. Recuperada la tranquilidad y recorrida la prevención, los indígenas podemos contribuir a la construcción del país, desde nuestros conocimientos y desde el inmenso patrimonio que ha logrado preservarse bajo nuestra custodia” (ONIC, 1997: 9).

Al ser imprescindible la necesidad de hacer valer la igualdad y dignidad de las culturas que conforman el país, el artículo 70 de la Constitución Política cobra gran importancia, dado que garantiza la interrelación de las mismas de forma armoniosa y con el apoyo del Estado. Que este hecho se cumpla es fundamental para lograr un debido desarrollo social en Colombia; son 81 pueblos indígenas, donde cada uno hace un aporte importante a la preservación de los recursos naturales, el medio ambiente y la biodiversidad y, el conocimiento que cada grupo comparta, ayuda a que el país ingrese de forma más directa en el siglo XXI.

En materia de reconocimiento social los cambios son evidentes, pero aún persiste el problema de la violencia contra los indígenas. Desde la aprobación de la Constitución de 1991 hasta el desarrollo de la investigación llevada a cabo por la ONIC en 1997, se habían producido 243 asesinatos a dirigentes indígenas por reclamar territorios que les pertenecían; lo peor de todo, es que ninguno de los crímenes se ha esclarecido y el problema de la tierra sigue vigente. De otra parte, en aquel entonces, las instituciones relacionadas con el tema de la tierra, como el INCORA, sufrieron recortes

de hasta el 55% de su presupuesto, lo cual afectó a los grupos nativos, dado que sus problemas al final no encontraron solución. Así mismo, se han fusionado varias instituciones, y algunos de los proyectos de adquisición de predios para las comunidades han quedado en el limbo por el cierre de los departamentos encargados de impulsar dichas propuestas.

La ONIC ha querido dejar claro el mensaje de los líderes u'wa en torno al conflicto adelantado con la multinacional OXY: con la naturaleza no se hace negocio, ni mucho menos con los elementos sagrados como el petróleo. El extraerlo induce a perder el equilibrio existente en la tierra y conlleva al fin del planeta. Las exploraciones se han llevado a cabo en su territorio ancestral, hecho que no permiten bajo ningún punto de vista y, de paso, el Estado no soluciona el problema de la tierra, lo cual se traduce en la violación a sus derechos como minoría étnica y los expone a la extinción definitiva. Al notar tantas irregularidades, la comunidad considera que las leyes del Estado colombiano no están bien elaboradas, existen muchas contradicciones dentro de ellas, y como ejemplo de ello, hacen énfasis constantemente en la consulta previa que se llevó a cabo con el grupo, donde no se siguieron los lineamientos exigidos por la ley y, aun así, esta actuación fue avalada por el gobierno nacional:

“...en Colombia las cosas se hacen al revés. Y en cierta medida, si no fuera del interés de las multinacionales la mayor disponibilidad sobre el territorio nacional, tiene razón la Occidental de Colombia en su comunicado de prensa del 21 de abril pasado, cuando dice que no es culpa de la compañía que el Gobierno contrate bloques de exploración y explotación petrolera en regiones donde hay resguardos indígenas. El Gobierno Nacional debiera tener en cuenta el respeto y la protección de los territorios indígenas al diseñar sus políticas de explotación de recursos naturales. Es decir, el Gobierno debiera ceñirse a la Constitución y a la Ley. Pero no, por el contrario, el Ministro de Minas presenta al Congreso de la República un proyecto de nuevo Código de Minas, en cuya exposición de motivos se plantea sin ningún recato que el gran problema para la minería en Colombia son las normas constitucionales y legales sobre el medio ambiente y sobre territorios de los grupos étnicos” (ONIC, 1997 11-12).

El conflicto u'wa puede ser abordado desde diferentes ópticas. Una de ellas, la capitalista, comenta que desde épocas antiguas, cuando se empezaron a intercambiar los excedentes de producción, esas transacciones se hicieron con el fin de producir un beneficio para aquel que había invertido algún tipo de capital en esa actividad. Con las experiencias históricas de los últimos tiempos, por ejemplo, la caída del muro de Berlín

o el colapso de la URSS, la competencia intensiva y el libre mercado han hecho presión sobre los costos de trabajo y los niveles de salario, elevando los índices de desempleo en muchos de los países industrializados.

En el caso u'wa, la preocupación de la comunidad va mucho más allá de la perforación de los pozos petroleros y las actividades que giran en torno al sistema económico occidental. Sus ideas se enmarcan en un sistema de pensamiento integrador centrado en la búsqueda del equilibrio y de la conservación del medio ambiente según lo dicta la ley natural. Esta es la esencia que dirige el pensamiento de las autoridades tradicionales y guía la resistencia de la colectividad, pero por la ignorancia y desinformación sobre sus ideas, se quiere hacer ver esta posición como concepciones que van en contra del progreso.

Las empresas occidentales tienen el firme propósito de maximizar sus utilidades y valor financiero en beneficio de sus socios y accionistas sin tener en cuenta que forman parte de una sociedad mayor, que su desenvolvimiento no es aislado del entorno en que operan, sino que toda decisión que se tome afecta a los ciudadanos en general. A partir de estas consideraciones, en la década de los ochenta se empezó a utilizar, en el campo de la administración de empresas, el término *stakeholder*; *stake* se puede definir como algo de valor que está en riesgo, ya sea capital humano, físico o financiero, y la palabra en su conjunto se refiere a las personas o grupos que tienen algo que perder o ganar como resultado de las actividades que se lleven a cabo. Dentro del campo abarcado por el término, pueden distinguirse dos clases de personas o grupos: una de voluntarios, que son los que deciden arriesgar algo para obtener un beneficio, como los inversionistas, y otra de involuntarios, que son los que están expuestos a los beneficios o consecuencias negativas del proceso sin haberseles consultado sobre si querían participar o no. En este segundo grupo se puede encontrar a la comunidad y al medio ambiente. De todo lo anterior ha surgido el modelo *stakeholder*, como una red de trabajo que envuelve un gran número de participantes e intereses, recibiendo cada uno de ellos diferentes tipos de impacto según la actividad que desempeñen (Robayo, 2001: 2).

De otra parte, es importante notar que las sólidas argumentaciones de los autores del conflicto, es decir, de los representantes del Estado y de las multinacionales petroleras, las certezas y seguridades que han querido mostrar siempre sobre el

conocimiento del tema, parecieran llenarse de sombras y dudas cuando sale a flote la realidad multicultural –expuesta, por ejemplo, por Verito Cobaría a lo largo del conflicto– que no hacen otra cosa que desafiar los discursos y lenguajes políticos con los que Occidente ha construido su mundo. A partir de los argumentos que presentan cada una de las partes, Uribe (2005) ha elaborado un discurso que identifica como causa principal del conflicto, las concepciones distintas que se tienen del mundo por parte de los dos grupos intervinientes en esta querella. Los u’wa están arraigados en lo tradicional, lo histórico y cultural; y el Estado colombiano y las multinacionales petroleras en el concepto de “lo moderno” (Uribe, 2005: 36).

De otra parte, los u’wa sienten que la violación a su territorio no solo se produce por la extracción de hidrocarburos. Los grupos armados al margen de la ley y las fuerzas armadas estatales incursionan frecuentemente en sus predios, motivo por el cual expresan constantemente el deseo de mantenerse al margen de una guerra que forma parte de la cultura de los *reowa*.

Los pensamientos opuestos dificultan la posibilidad de llegar a un acuerdo, por eso se considera como una eventual salida el apelar a la justicia distributiva y a las tesis de John Rawls sobre los bienes primarios: “De este modo la justicia en la distribución de derechos y de bienes se fundaría sobre la base de un mínimo social para que todos puedan realizar sus proyectos de vida, o en su defecto, de aquello que impediría que cada cual sea quien quiere ser” (Uribe, 2005: 37).

A las propuestas de Rawls se puede agregar el punto de vista de Habermas que hace referencia a la imparcialidad, afirmando que no es ocultando información como se garantiza la justicia para todos, sino, precisamente, poniendo a consideración de todos aquello que vale para cada uno, es decir los propios intereses y las propias orientaciones valorativas. En este sentido, a través de lo dicho por cada uno, cabe la posibilidad de activar en todos lo que Habermas llama “sensibilidad hermenéutica”. Así, “...la sensibilidad hermenéutica puede entenderse como una disposición moral para ponerse solidaria y participativamente en el lugar del otro” (Uribe, 2005: 56).

De la propuesta de Habermas surge la pregunta que se plantean la gran mayoría de nativos del país ¿Cómo ser colombiano y al mismo tiempo indígena? Con este interrogante, realmente lo que se quiere es dar solución al dilema que surge en el

interior de las comunidades indígenas en Colombia, especialmente los u'wa, sobre cómo acogerse a las normas dictadas por la Constitución Política, que están basadas en el respeto a la diversidad cultural y la identidad étnica, y al mismo tiempo respetar las suyas. Dicho de otra forma, ¿cómo relacionar sin que se contrapongan las leyes de los hombres con las leyes de los dioses?

En 1997, a partir de las deliberaciones de la Corte Constitucional con respecto al caso u'wa, una de las principales inquietudes que surgieron se refiere a cómo se puede resolver, dentro del marco constitucional, el conflicto que se suscita por la explotación de los recursos naturales en territorio indígena, y la protección que el Estado debe dispensar a dicha comunidad, con el fin de preservar su identidad e integridad étnica, cultural y social.

La sentencia que se emitió en este sentido deduce que el instrumento básico que se debe utilizar para preservar la totalidad de los valores de una cultura, es la participación activa, la cual:

“...no se reduce a una serie de mecanismos que satisfagan la posibilidad de que los representantes de las comunidades indígenas intervengan en una serie de actos administrativos en los que se les notifique sobre los efectos que para ellos acarrearía la ejecución del proyecto. Quienes como representantes de la comunidad tomen parte en una consulta sobre la explotación de recursos naturales en su territorio deben, en primer lugar, estar enterados de los mecanismos, actividades y procedimientos que se requieren para realizar el proyecto; en segundo lugar, deben tener la información necesaria para juzgar en qué medida la explotación de los recursos puede afectar su cohesión social, económica y cultural; y, en tercer lugar, deben tener una clara oportunidad para expresar sus inquietudes y defender sus intereses” (Uribe, 2005: 85-86).

Para intentar encontrar una solución a los interrogantes que surgen de las decisiones de la Corte Constitucional y de la posición de la comunidad, Uribe recurrió a las propuestas de algunos filósofos multiculturalistas como Charles Taylor y Luis Villoro, que hacen reflexiones sobre la autonomía de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos sobre el territorio. También ha tenido en cuenta la tesis de Habermas sobre la tensión que se produce en la relación facticidad-validez, que entienden el conflicto como un fenómeno que se genera cuando los ideales de la sociedad están plasmados en forma de ley, pero en el momento de hacerse efectivos se desvinculan de la realidad.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en esta discusión es el análisis de la justicia distributiva de Rawls, vista desde la óptica de la teoría del bienestar, como uno de los pilares de los derechos de las minorías étnicas, buscando así crear una idea del bien que beneficie a los actores del conflicto. En esta tarea, Uribe compara las teorías clásicas sobre el utilitarismo con las más modernas expuestas por Amartya Sen, aunque en ello detalla que Sen, a pesar de mostrar un avance en el reconocimiento de la pluralidad de visiones que existen acerca del concepto de bienestar, no logra llegar al punto donde se encuentran los elementos que para los u'wa no son negociables ni se pueden reducir al término de posesiones.

El motivo por el que no se puede llegar a un consenso de los elementos anteriormente expuestos, es que existe una clara diferencia entre la concepción que se tiene de los bienes en disputa por parte de los actores del conflicto. Es así, como surge la contradicción entre petróleo y *Ruira*, en la cual, el primero es para el Estado colombiano y para la multinacional OXY un bien negociable con un alto valor monetario; para los u'wa, el segundo es la sangre de la Madre Tierra que, bajo ningún concepto, puede comercializarse porque es fundamental para mantener el equilibrio del universo y ayuda a sostener a todos los seres vivientes que habitan el planeta.

Aunque la justicia distributiva ha sido de gran utilidad a la hora de definir muchos derechos económicos y sociales, y amplió la esfera humana dentro de la sociedad occidental, siguen quedando por fuera de este entorno las comunidades y grupos que han decidido vivir por fuera del sistema capitalista y no ingresar su economía en los sistemas de mercado occidentales, porque su riqueza y bienestar se encuentran en la conservación de los recursos que preservan el equilibrio del mundo.

Uribe recuerda el mito u'wa de la creación, donde se expresa, que al comienzo solo estaba *Sira* en el planeta, y todo en él era muy seco; por eso se decidió que había que llevar el *Ruira* (petróleo) a *Iyara* (el lugar sagrado), para dar origen a los ríos y las lagunas. Este mito, intenta explicar que todo lo que es sagrado para los indígenas, representa aproximadamente cinco mil millones de pesos anuales para el Estado colombiano, con lo cual, es claro que el valor que ambas sociedades le asignan a este bien, hace imposible que se pueda llegar a algún tipo de conciliación.

6.2. El proceso jurídico de los u'wa y las deficiencias de los amparos constitucional y legal frente al litigio con la multinacional “Occidental de Colombia”

Al ser tratado el tema jurídico que ha girado en torno al conflicto u'wa, aun hoy los indígenas de la comunidad se muestran escépticos en cuanto a la efectividad de la aplicación de las normas. A pesar de la creación de un nuevo escenario político con la Constitución de 1991, donde las minorías étnicas cumplen un papel protagónico en las decisiones que les atañen y son poseedores de una participación que antes carecían, la sensación que tienen es que sus derechos siguen sin cumplirse y el gobierno colombiano le ha dado prioridad a una serie de razones económicas que van en contra del pensamiento y ley ancestrales:

“Nosotros pensamos que en la Constitución las leyes están claras, lo que sucede es que ningún gobierno ha cumplido, incluso a los mismos blancos, que para nosotros somos todos iguales aunque ellos tienen su propia cultura y su propia lengua, el mismo gobierno no les ha cumplido. Nosotros creemos que la Constitución es una ley que debería respetarse porque se equipara con lo que para nosotros es la Ley de Origen. Pero realmente el gobierno nunca la respeta, ellos acomodan la ley para el beneficio de unos cuantos y los demás quedamos por fuera. Si el gobierno nos cumpliera como realmente lo ordena la Constitución, estuviéramos bien pero lamentablemente se violan nuestros derechos, y además, cada día van cambiando las leyes, y para los U'wa un mandato no se puede cambiar porque es un dictamen que el hombre debe cumplir” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Partiendo de la base de que la función principal de los clanes que conforman la comunidad u'wa es la de proteger el planeta, con la connotación de que ellos han centrado todos sus mitos y creencias en esta misión, Ungar y Arrieta (2004) comentan que el deber de conservar el lugar donde viven ha determinado gran parte de las acciones legales que han entablado y, de paso, le ha dado sentido a su vida. En este sentido, a continuación se hace un seguimiento del curso que ha tomado el conflicto y se han tenido en cuenta varias interpretaciones que se han hecho del caso u'wa.

Como ya se ha señalado, en 1992, el Ministerio del Medio Ambiente emitió una licencia a la multinacional Occidental de Colombia para llevar a cabo trabajos de exploración en el Bloque Samoré. Esta extensa zona geográfica ubicada en el nororiente colombiano hace parte del territorio ancestral de los indígenas u'wa:

“Las comunidades indígenas han tenido problemas relacionados con la propiedad sobre los territorios en los que habitan, problema que se inicia desde la llegada de los españoles y que actualmente se ha visto agudizado con la presencia de multinacionales petroleras y colonos que llegan detrás de estos proyectos. En el presente caso, inicialmente la falta de claridad con respecto a los límites del territorio U’wa, fue una de las principales fuentes de este conflicto, ya que el Estado no había reconocido los derechos que esta comunidad tenía sobre un extenso territorio” (Penagos, 2001: 37).

Con el propósito de impedir que la multinacional OXY entrara a su territorio, el pueblo u’wa, en 1995, interpuso una acción de tutela solicitando la autonomía sobre toda la región. Como respuesta, la Corte Constitucional, en 1997, emitió un fallo del cual se desprendieron numerosos debates en torno al tema del multiculturalismo en Colombia. La pregunta sobre la cual giró la discusión en la Corte Constitucional, teniendo en cuenta la preservación y los derechos de los indígenas, fue: ¿Cómo se resuelve, dentro del marco constitucional, el conflicto que se origina con motivo de la explotación de recursos naturales y la protección especial que el Estado debe dispensar a las comunidades indígenas, a efecto de que conserven su identidad e integridad étnica, cultural, social y económica? (Uribe, 2003: 250).

Del anterior cuestionamiento surgen dos argumentaciones principales que se desarrollan a partir de la concepción que se tiene sobre los derechos indígenas y su relación con la legislación estatal. Por un lado, se entiende por “derecho indígena” al conjunto de libertades y facultades otorgadas y reguladas por la legislación estatal a los grupos que conforman estas etnias. De otra parte, los derechos de estas comunidades son vistos como parte del derecho consuetudinario, sea este reconocido o no por el derecho estatal oficial.

Independientemente, de la concepción que se tenga sobre la validez o no del derecho indígena, surge, a su vez, la idea de la autonomía y la participación, que pueden llegar a ser juntos con el derecho a la vida, los pilares sobre los que se ha construido la estructura indígena en Colombia. En este sentido, la respuesta a la pregunta formulada por la Corte es clara: el instrumento básico para preservar la identidad de la comunidad u’wa es la participación activa. Ésta:

“... no se reduce a una serie de mecanismos que satisfagan la posibilidad de que los representantes de las comunidades indígenas intervengan en una serie de actos administrativos en los que se les notifique sobre los efectos que para ellos

acarrearía la ejecución del proyecto. Quienes como representantes de la comunidad tomen parte en una consulta sobre la explotación de recursos naturales en su territorio deben, en primer lugar, estar enterados de los mecanismos, actividades y procedimientos que se requieren para realizar el proyecto; en segundo lugar, deben tener la información necesaria para juzgar en qué medida la explotación de los recursos puede afectar su cohesión social, económica y cultural; y, en tercer lugar, deben tener una clara oportunidad para expresar sus inquietudes y para defender sus intereses” (Uribe, 2003: 250-251).

La Corte Constitucional ha tenido en cuenta los derechos indígenas, especialmente los que hacen referencia a la debida ejecución de la consulta previa y, por eso, revocó las sentencias que se profirieron con el fin de continuar con la ejecución del proyecto. Sin embargo, la Corte ordenó efectuar una nueva consulta en un plazo de treinta días, anulando así la licencia otorgada a la Occidental que permitía iniciar los trabajos de exploración en la zona.

Se debe tener en cuenta que con el proceso de consulta previa, además de informarse a la comunidad interesada sobre los proyectos que se pretenden realizar en su territorio y que estas evalúen los aspectos positivos y negativos que en el futuro se pueden generar, se busca mantener un diálogo intercultural donde no se trate de imponer la voluntad de una cultura sobre otra, sino que se llegue a un consenso donde ambas partes salgan beneficiadas.

Esto, sin embargo, parece muy poco viable, dado que, el campo en el que el Estado ha buscado sostener un diálogo con la comunidad no es el más adecuado para que ésta exponga las razones por las cuales se oponen a las labores de exploración y explotación de hidrocarburos. Lo anterior quiere decir que mientras el Estado da razones de tipo técnico y pone en conocimiento del pueblo u’wa los pasos a seguir en la ejecución del proyecto, ellos solo entienden que el petróleo es la sangre de la madre tierra y ven esta actividad como el medio para que el mundo occidental siga imponiendo su sistema económico que lo único que ha hecho, y está demostrado, es destruir a pasos agigantados el planeta:

“Con lo sagrado no se negocia; el petróleo es algo muy sagrado que los U’wa llamamos RUIRIA. RUIRIA es la sangre de la madre tierra, gracias a él se mantiene la vida de animales, hombres, plantas y espíritus. Si se saca Ruiria del mundo, éste se contaminará, pero si se saca RUIRIA del corazón del mundo, éste no podrá sostenerse; los *werjayas* no tendrán la capacidad de mantener la

vida ni el orden y así la vida no tiene sentido, los U'wa seremos recogidos por el padre eterno, por Sira. Si se explota lo sagrado se derrumban las bases del pensamiento tradicional; se pierde el respeto por los hermanos, por los padres y por los Ancestros; si se explota Ruiria se viola la Ley Tradicional, que es la Ley del Padre eterno y de la Madre Tierra, son las Leyes de la Naturaleza, La Ley de Origen de los U'wa" (ONIC, 1997: 13).

"La explotación de animales y montañas ¿dónde van a criar?, ¿quién la va a detener? Temblor está listo para movernos porque el padre del cielo dijo que autoriza al temblor, si el gobierno es capaz, el temblor tiene todo el corazón aquí, tiene sus códigos tradicionales.

El temblor está listo para movernos por misma ley y causa del gobierno, ¿cuánto no está avanzao abajo el río Arauca? ¿Cuántas inundaciones? Él está bravo con todo el gobierno y con nosotros, no podemos engañar a los espíritus del mundo porque tienen su propia prensa...

Los ríos con su prensa estudian cómo se hacen los trabajos; por eso los ríos Cobaría y Cubugón ya se están fallando, en el último año han formado cada uno represas, eso es una muestra para nosotros, todos.

Pobres los indios tradicionales, los sabios allá trabajando para que no suframos y si gobierno va a explotar que vea a ver que todos vamos a sufrir.

¿Cuántos carros, cuántos buses no se han matado? Allá el río Róyota hace su retén, río ha revocado buses, gente, tierra... política no es sólo de nosotros, los Espíritus del mundo son muy politiqueros, por eso tenemos que ayudarnos bastante con todos los indios de Colombia...El Padre nos ha ayudado porque no estamos revueltos, porque conservamos la tradición" (Werjayas, Cabildos, Cabildo Mayor, Equipo de Etnoeducación, 1996: 202-203).

Como respuesta al fallo que emitió la Corte Constitucional sobre dar treinta días para que se realizase la consulta previa, los u'wa elaboraron varios comunicados en los que se mostraron insatisfechos con la decisión de la Corte. Para la comunidad, el derecho a la participación no soluciona el verdadero problema; la consulta solo conllevaría a que los u'wa entraran en largas consideraciones con el Estado y, al final, ninguno de los dos actores aceptaría las razones del otro.

En este punto de la discusión, es relevante tener en cuenta la pregunta ya planteada de Ángela Uribe: ¿Cómo ser colombiano y al mismo tiempo indígena? Se supone que en el Estado colombiano prima el interés general sobre el particular, pero a la vez éste se encuentra en el deber de proteger a las minorías étnicas, entre las cuales se cuenta el pueblo u'wa. Entonces, cuáles son las razones por las cuales el Ministerio del Medio Ambiente concedió una licencia a la multinacional OXY para realizar

exploraciones en territorio u'wa, sabiendo que tenía como prioridad proteger la integridad de la comunidad.

En ese sentido, el Estado presenta en su totalidad razones económicas para desarrollar el proyecto; por su parte, los indígenas exponen razones de tipo cosmogónico que les impide aceptar que proyectos de esta naturaleza se lleven a cabo en su territorio. Para el Estado, el hallazgo de hidrocarburos en la zona de Samoré le podría devolver al país la autosuficiencia en materia petrolera, generándole ingresos a la región por el orden de los 1,4 billones de pesos en regalías y al Estado cerca de 900 millones de dólares por año, hasta el 2020. En contraposición, para los u'wa, el medio ambiente y la naturaleza, en general, revisten gran importancia; su tarea es la de mantener el equilibrio y propiciar el desenvolvimiento correcto de los procesos que lleva a cabo el universo. El petróleo hace parte esencial de esa estabilidad, por cuanto es considerado la sangre de la madre tierra, extraerlo significaría el derrumbe de la cultura, la muerte de los u'wa y de la especie humana (Robayo, 2001: 31-32).

Al analizar los intereses de los actores del conflicto, en este caso, de las transnacionales, éstas vieron como principal obstáculo, el hecho de tener que explorar en territorio indígena, porque aquello les supuso adelantar previamente el proceso de consulta previa, con el cual la comunidad debía asegurarse el control de sus predios y la posibilidad de participar en las decisiones que le afectaran. Esta obligación surgió del artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, suscrito por Colombia, y el artículo 330 de la Constitución Política (Ungar y Arrieta, 2004: 23).

En un comienzo, la ley decía que para que la consulta previa fuera legal, debía contar con el aval de la comunidad que permitiera que se realizasen labores en sus tierras y, en esa decisión, se contaría con la asesoría de la ONIC y con la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. Al final, el INDERENA cambió ese concepto técnico, considerando como suficiente el aval por parte del estamento gubernamental y excluyendo directamente al pueblo u'wa y a la ONIC.

Entre todos los procesos que tuvo que superar la comunidad para hacer valer sus derechos, el mayor obstáculo que tuvo fue el lenguaje, ya que el castellano no es su lengua materna, y algunos de sus integrantes lo aprendieron a hablar hace pocos años. Otra de las dificultades en esta disputa:

“...es que las entidades estatales no fueron sensibles a la particular organización de la comunidad, pese a que según los textos legales la *consulta* debería serlo. Como bien lo señaló posteriormente la misión enviada por la OEA (Proyecto OEA/Harvard), los U’wa si tienen una estructura de gobierno que les permite tomar decisiones, pero el Estado debe reconocerla y diseñar una consulta que se adecue a ella” (Ungar y Arrieta, 2004: 28).

Un fenómeno que influyó de forma determinante en este conflicto, fue el escándalo promovido por los medios de comunicación, lo cual hizo de éste, un caso de interés internacional. Los u’wa, además de la alianza que crearon con algunos medios, contaron con el apoyo de congresistas como Lorenzo Muelas y Jesús Piñacué, que desde su posición en el gobierno, lucharon porque se ejerciera un control efectivo sobre el proceso de realización de la consulta previa. En la búsqueda de hacer valer sus derechos, también recurrieron al Defensor del Pueblo, quien mediante la acción de tutela, solicitó la acción de nulidad de la licencia ambiental el 22 de agosto de 1995.

Después de librar una larga lucha por la defensa de su territorio, los u’wa perdieron la batalla en los tribunales y cortes del país, quienes autorizaron a la OXY a continuar con las labores de exploración. Sin embargo, la lucha no paró allí; los indígenas tocaron las puertas de varios organismos internacionales, entre los cuales, fue una comisión de la Universidad Harvard la que concluyó que en el proceso burocrático se habían vulnerado los derechos de los indígenas y, por lo tanto, el desarrollo del proyecto no era viable sino se llevaba a cabo de forma correcta el proceso de consulta previa. Esto significó una conquista para la comunidad, ya que al final la Corte Constitucional tuvo que reconocer que son titulares del derecho a la supervivencia cultural y del derecho a ser consultados. Lo más importante de todo, es que los u’wa han aprendido cuáles son los mecanismos jurídicos con los que cuentan, al tiempo que han aprendido a usarlos y saben para qué sirven.

Ungar y Arrieta, para crear un antecedente histórico, se han remontado hasta finales del siglo XIX, donde ha quedado expuesta la situación excluyente que atravesaron las comunidades indígenas a partir de la expedición de la Constitución de 1886, que al ser esta de tipo conservador, implantó en el país un Estado confesional con una religión y una lengua oficial, que eximía del proyecto social a las minorías étnicas por considerarlas inmaduras culturalmente y por verlas incapacitadas para integrarse de forma adecuada a la sociedad. Esta situación, al ser aparentemente negativa, resultó ser

benéfica para los grupos nativos, porque así, se les permitió conservar sus tradiciones, lo cual no hubiese sucedido con el triunfo del proyecto liberal que hubiera provocado su desaparición, dado que éste tenía como meta civilizarlos, desarrollarlos e integrarlos definitivamente a la vida de la sociedad mayor (Ungar y Arrieta, 2004: 21).

Si se retrocede en el tiempo, a lo largo del siglo XX, las diferentes protestas que llevaron a cabo los grupos nativos fueron en torno a la defensa de la tierra; solo a partir de las décadas del setenta y ochenta fue cuando se centraron en luchar por otros aspectos como la adecuación de los servicios públicos y de salud a sus propias necesidades. Con la Constitución de 1991, donde se define a Colombia como un Estado pluralista y multicultural, las minorías étnicas enfocaron su interés en mantener, antes que nada, el derecho a ser diferentes culturalmente y poder autogobernarse. Quienes ejercieron de forma más activa este recurso, fueron algunos grupos del departamento del Cauca y la comunidad indígena u'wa del nororiente del país.

La década del noventa del siglo pasado, fue una época de grandes transformaciones institucionales, en la cual se pudo apreciar la agitación de varios sectores de la sociedad, que exigían cambios inmediatos en las decisiones o situaciones que les afectaban directamente. Es así, como entre muchos casos, pudo verse como grupos indígenas cuestionaban la actuación del Estado y de las compañías petroleras por las exploraciones y extracciones en sus territorios. En conclusión, los grupos indígenas, a partir de la segunda mitad del siglo XX, inician a nivel internacional un proceso de universalización de sus derechos, donde las políticas del país sufrieron cambios positivos que se hicieron más evidentes con el establecimiento de la Constitución de 1991, dado que las anteriores constituciones eran integracionistas y, por lo tanto, ignoraban los derechos de las minorías étnicas. Esta situación de reconocimiento, también, fue posible gracias a la expedición de los Convenios 107 y 169 de la OIT, que otorgaron a estas comunidades una importante herramienta para defender sus intereses.

Por su parte, María Fernanda Penagos (2001), al remontarse a los antecedentes del pueblo colombiano, ha podido comprobar que no se pueden aplicar modelos sociales y políticos de igualdad en una sociedad tan diversa. El trato que deben recibir los pueblos indígenas que se han caracterizado en las últimas décadas por hacer valer sus derechos y la defensa del medio ambiente, debe ser distintos del resto de colombianos. El sostén de los derechos indígenas se resume en tres pilares: identidad cultural, el

derecho a la tierra y, la garantía de poder ejercer su propia jurisdicción. Estas directrices se han visto convertidas en normas legales, a través de los mandatos de la Constitución Política de Colombia, del Convenio 169 de 1989 de la OIT y la Ley 21 de 1991.

A través de sus pesquisas, Penagos declara que las injusticias cometidas contra las culturas indígenas de Colombia se remontan hasta la época de la Conquista, donde los grupos nativos empezaron a ser vistos, únicamente, como mano de obra barata, y los intereses se centraron en la tenencia de la tierra. Todo esto provocó el atraso de estas minorías por no estar incorporadas a la vida nacional. Sin embargo, cuando se les intentó dar un espacio en la sociedad, no se hizo de la forma más adecuada:

“...las principales normas adoptadas por el Estado colombiano desde la época de la Independencia hasta antes de la Constitución de 1991 se caracterizaron por su carácter integracionista, es decir, buscaban que el indígena hiciera parte de la realidad nacional, olvidando sus diferencias principales. Otra de las características que se encuentran en la normativa indígena, se refiere al interés del Estado de proteger la mano de obra indígena y la forma como se va a determinar la tenencia de la tierra indígena. Por último, se observa una fuerte presencia e intervención de la iglesia en la toma de decisiones y ejecución de las mismas, especialmente en materia de educación y gobierno dentro de las comunidades indígenas” (Penagos, 2001: 10).

La Constitución de 1991 ha sido determinante en el trazo de los límites que debían tener los legisladores y la comunidad colombiana, a la hora de interrelacionarse con los grupos nativos, ya que ha sido clara en su artículo 7º, donde el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural del país. Sin embargo, la investigadora analiza la situación indígena en otros países latinoamericanos, y subraya que ha sido Guatemala el pionero en materia de defensa de estas comunidades, cuando ha introducido, en 1945, en su texto constitucional normas dirigidas a estos grupos.

Es evidente el cambio positivo que se ha dado en la mayoría de los países latinoamericanos, ya que la participación indígena, en la actualidad, es notoria. Se destaca el caso ecuatoriano con la elaboración de su Carta Política en 1998, la cual ha tenido un proceso similar al colombiano, y donde las minorías de ese país tuvieron una actuación directa en la elaboración de un documento que se adaptase a sus necesidades. En el campo internacional, las normativas más relevantes son los Convenios 107 y 169 de la OIT; el Convenio 107 de 1957, que es el primero en tratar el tema de los derechos

indígenas; y la Declaración de los Derechos de las Poblaciones Indígenas de la ONU y la OEA.

Con la Constitución Política de 1991, los ciudadanos han adquirido el derecho a expresarse, ya que esta ha sido la herramienta que le dio voz a los grupos que siempre estuvieron en silencio. La inconformidad que reinó por varios siglos, se hizo evidente en los años ochenta, cuando se señalaron como los dos principales factores generadores de violencia, las condiciones de extrema pobreza de buena parte de la población y la exclusión política.

Al identificarse estos dos factores como los principales causantes de la crisis establecida, el gobierno decidió crear políticas que beneficiasen a los sectores menos favorecidos de la sociedad. De esta forma, se buscó adoptar medidas redistributivas, se crearon sistemas eficientes de seguridad social, se generó más empleo, se crearon programas para la asistencia de personas desvalidas y se trataron de disminuir las barreras para poder participar en las decisiones del país. La forma como se hizo efectiva esta nueva vía fue a través de la Constitución de 1991, que además de garantizar los derechos ya expuestos en la Constitución de 1886, creó otras figuras como la acción de tutela para que los ciudadanos pudiesen hacer valer sus derechos de forma directa.

Sin embargo, pasados más de diez años de haberse instaurado la nueva Carta Política, la evaluación que se ha hecho en torno a la situación social del país concluye que en el único aspecto que se ha avanzado ha sido en la participación ciudadana; es decir, se ha producido la “...apertura de espacios para fortalecer la democracia participativa como complemento de la democracia representativa” (Ungar y Arrieta, 2004: 4). No obstante, esto no ha sido suficiente porque los verdaderos problemas del país no se han solucionado, se ha producido una pérdida de credibilidad y legitimidad en las instituciones políticas, ha habido un aumento de la corrupción y es evidente la creciente incapacidad del Estado para enfrentar, de forma efectiva, los problemas críticos de Colombia como son la pobreza, la violación de los derechos humanos y la violencia.

Uribe (2003), reconoce que la Constitución de 1991 es el escenario donde se han creado las expectativas, los sueños, los deseos y hasta las frustraciones de gran parte de la sociedad colombiana. Pero, todos esos sentimientos y relaciones entre los

colombianos se producen en instancias que no alcanza a contemplar el derecho, creando, por así decirlo, el estadio que Jürgen Habermas bautizó como “tensión entre facticidad y validez”, expuesto en el aparte anterior (Uribe, 2003: 247).

La realidad que contiene las expectativas y las formas de vida de los ciudadanos se confronta de manera problemática con los ideales expresados en forma de ley, haciendo que, para los escépticos, el derecho se convierta en un simple discurso enfrentado a una pluralidad desordenada de otros discursos, que se desvincula de los entornos a los que supuestamente responde y, pierde, de paso, el contacto con los sistemas de acción que constituyen la vida social. En este sentido, Uribe considera valioso rescatar ese estadio donde constantemente se reafirma la tensión entre lo fáctico y lo válido, dado que así el derecho deja de ser un discurso aislado y la Carta Constitucional de 1991, no llegaría a ser lo que Borges diría, un episodio más de la literatura fantástica (Uribe, 2003: 249).

Es por eso que nuevamente surge la pregunta: ¿cómo ser colombiano y al mismo tiempo indígena? Dado, que la Corte Constitucional está concebida como una de las principales instituciones del Estado que promueve y respalda la unidad nacional, desde el punto de vista de éste órgano, esta “...no se garantiza al margen de la posibilidad de que la diversa población colombiana se sienta representada por las instituciones del Estado” (Uribe, 2003: 252).

Otro cuestionamiento que se hace con respecto a la Constitución de 1991, plantea el dilema de que Colombia es un Estado organizado en forma de república unitaria, pero a su vez es descentralizado y pluralista. Los dos polos de tensión apelan, por un lado, a los valores institucionales, y a la diversidad cultural, por otro. En este sentido, la contradicción surge en que, de acuerdo con la Constitución, el Estado se consagra como participativo y pluralista, sin embargo, ni la diversidad ni la participación pueden pasar por encima del interés general; por lo tanto, se concluye, que mientras la Constitución no se aclare en qué sentido hay que entender la expresión “interés general”, siempre habrá que interpretarla como “interés particular”.

Como se puede comprobar, las bases hermenéuticas no son suficientes para aclarar el estado conflictivo del caso u’wa. En este sentido, se debe dar por sentado que el respeto a la diversidad supone la aceptación de cosmovisiones y estándares

valorativos que son contrarios a los valores de la ética universal. La aceptación de dichas cosmovisiones brinda la posibilidad de que los bienes que se disputan las culturas en controversia puedan ser puestos en un mismo contexto, el cual, pueda presentar la información suficiente a las dos partes para que estas puedan emitir juicios valorativos que les permita tomar una decisión justa.

Uribe ha intentado mostrar cuál debe ser el límite de la aceptación que deben tener las concepciones del mundo distintas a la universalista. Para desarrollar su argumento, describe el mito U'wichita, que hace referencia al origen de los u'wa y el poblamiento de la tierra por ellos. Relata la ley que los rige y hace énfasis en el petróleo y en la necesidad de protegerlo, de no derramarlo, porque éste es la sangre de la Madre Tierra; acabar con él significa destruir el planeta. La autora narra la forma en que los u'wa, por medio de sus cantos, advierten a la humanidad del grave peligro que se corre. Por eso, los indígenas no paran de cantar, y es el chamán, es decir, "*Bita Werjaya* es, pues, quien instaura y prolonga la necesaria integridad entre la cultura material, la mitología y el ritual" (Uribe, 2003: 256).

En este sentido, la tesis hermenéutica propone la posibilidad de colocar los bienes en conflicto bajo un mismo escenario, que sería en este caso, la forma de la ley. Para ello, se remonta al artículo 2 de la Constitución, donde se hace explícita la idea de facilitar a todos la participación en las decisiones que les afectan. Es así, como el Estado imparte el bien para todos, de forma general, pero Uribe concluye que esta forma de la ley no es propiamente la mejor para el pueblo u'wa, dado que, mientras la Corte Constitucional no entienda que lo que está en juego en el caso u'wa es mucho más que un asunto de participación, de nada servirán los diálogos por constantes que ellos sean.

Del anterior ejercicio hermenéutico se concluye que deben extraerse dos elementos positivos del conflicto: lo bueno del mito y lo bueno de la ley, pero entre ellos, la tensión entre facticidad y validez termina por disolverse. Es por eso, que se sugiere reducir la forma de la ley a la participación, al tiempo que sería necesario reducir lo mítico hasta poderse extraer lo mejor de él, que en este caso sería, la preservación del planeta.

Con el argumento anterior se rebate la tesis propuesta por Habermas, relacionadas con la tensión entre facticidad y validez; por lo cual, es necesario tener en

cuenta los términos comunidad y sociedad. El desarrollo que surge a partir de estas dos ideas se remonta a las referencias históricas más antiguas donde se tiene en cuenta el término *Koineia*, con el cual Aristóteles se refiere a todas las formas de socialización humanas, es decir, aquellas que están basadas en acuerdos y en procesos naturales. Para mostrar la diferencia existente en ambos conceptos, Uribe tiene en cuenta la aclaración que hace Axel Honneth en su libro *Comunidad: esbozo de una historia conceptual*:

“Debe denominarse ‘comunidad’ a aquella forma de socialización en la que los sujetos, en razón de su procedencia común, proximidad local o convicciones axiológicas compartidas, han logrado un consenso implícito y con él llegan a sintonizar criterios de apreciación; mientras que con ‘sociedad’ se alude a aquellas esferas de socialización donde los individuos concuerdan en consideraciones racionales ajustadas a fines, con el objeto de obtener la recíproca maximización del provecho individual” (Uribe, 2003: 261).

A partir de este análisis, y dado el carácter heterogéneo de la composición social en las naciones contemporáneas, o en aquellas donde son notorios los efectos de la modernización, la autora se plantea una nueva pregunta desde otra perspectiva: ¿Cómo debe la sociedad entender sus relaciones con la comunidad? Uribe considera al respecto, que los procesos que guían estas relaciones pasan por los intentos de hallar formas de integración social, en un espacio donde no todos son hombres blancos, hombres mayores, indígenas, y por sobre todo, no todos viven guiados por la fascinación ante la posible presencia de un poder sobre humano que tiene dominio sobre lo natural. En la misma línea, Habermas se cuestiona, sobre cómo puede en estos términos establecerse la validez de un orden social plural; y, a su vez, ofrece la respuesta afirmando que, la validez se consigue extrayendo del escenario de los juicios lo que es bueno para unos y lo que es bueno para otros.

Como conclusión, la autora ha pretendido, a partir de tesis como las de Habermas, borrar el escepticismo sobre los esfuerzos de la ley y de la jurisprudencia, en el propósito de hacer que lo diverso se integre en un mismo proyecto democrático. La actitud del indígena u’wa debe verse como una forma de enriquecimiento moral que puede complementar al hombre occidental y no como un individuo con una barrera inaccesible con el cual no se puede llegar a algún acuerdo (Uribe, 2003: 264).

Una vez desarrollado el anterior análisis filosófico sobre la relación de la comunidad u’wa y el Estado colombiano, a continuación se hace una relación de los

derechos de los pueblos indígenas, en los cuales se tienen en cuenta los derechos sociales, económicos, culturales y aquellos inherentes al territorio. De esta forma, se hace un recuento y un análisis de las leyes y normas relacionadas con este tema, donde se retoma la legislación expedida, a partir de las tutelas o querellas que ha presentado la comunidad indígena y, por las cuales, la Corte Constitucional u otro organismo judicial del Estado hace su pronunciamiento respectivo.

Para Linares (2004), los derechos de los pueblos indígenas pueden apreciarse desde una perspectiva jurídica pluralista estatal, ya que están enmarcados dentro del conjunto de prerrogativas y facultades otorgadas en la legislación estatal a los individuos y grupos de estas etnias y, también, desde el punto de vista de su propio sistema jurídico, es decir, el derecho consuetudinario, sea este o no reconocido por el derecho estatal oficial. Entre las dos ópticas, prevalece la primera pero, a la vez, se deben crear los medios para incorporar y validar el derecho tradicional de las minorías al sistema jurídico nacional, donde la autonomía y la participación sean los dos elementos sobre los cuales se fundamente esa relación.

Como es sabido, los principales avances que se dieron en torno al reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas surgieron con la Constitución de 1991 donde, por primera vez, se admitió que Colombia no estaba conformada por una sociedad homogénea sino por diferentes grupos étnicos con características diferentes en cuanto a su cultura, costumbres, cosmovisión y modos de vida. El artículo 7° de la Constitución confirma esta diversidad y el artículo 330, advierte de la autonomía de esos grupos. Sin embargo, la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias ha señalado diversas conductas que muestran la violación de los derechos fundamentales de varios pueblos indígenas por parte del Estado, como el desconocimiento de las decisiones de sus autoridades tradicionales, el irrespeto a las mismas, el quitarle valor a sus costumbres, la interferencia en los procesos de elección de sus gobernantes y el ignorar la facultad que poseen para administrar su propia justicia (Linares, 2004: 75-76).

Entre los documentos internacionales que se deben destacar por su gran interés en la defensa de los pueblos indígenas se encuentra el, ya mencionado, Convenio 169, producto de septuagésimasexta conferencia general de la OIT, que se realizó en Ginebra en 1989 y que estuvo dirigida exclusivamente a la autonomía de los pueblos indígenas y tribales existentes en países independientes.

Dentro de las normas nacionales que tienen en cuenta la autonomía de estos grupos, se pueden destacar los decretos 1088 de 1993, 1397 de 1996 y 804 de 1995. El primero hace alusión a que las asociaciones de cabildos tienen su propia personería jurídica; el segundo se refiere a la obligación por parte de las autoridades de la república de abstenerse en intervenir en las decisiones de los gobiernos indígenas y; por último, el decreto 804 de 1995 hace mención de la autonomía en los principios que rigen la etnoeducación. A estas legislaciones se une el decreto 2164 de 1995 que reconoce la naturaleza jurídica de los resguardos indígenas.

Igual importancia tiene el contenido de la Ley 21 de 1991, donde se ordena a los distintos gobiernos adoptar medidas encaminadas a proteger, de forma generalizada, los derechos de los pueblos indígenas y garantizar su integridad. Al mismo tiempo, se exige, que a través de las diferentes instituciones estatales, se salvaguarde a las personas, bienes, trabajo y medio ambiente, de los grupos nativos. En estas normas también se tienen en cuenta las condiciones sociales, culturales, la educación y la medicina tradicional, que no implica necesariamente el abandono al derecho de contar con el servicio de medicina occidental garantizado por el Ministerio de Salud.

Como es claro, aunque las leyes occidentales protegen los derechos de estas minorías, también regulan las actuaciones de las mismas. Tal es el caso de la Ley 734 de 2002, que en su Artículo 25, dice que los recursos públicos que sean destinados a grupos indígenas y que sean administrados de forma irregular por sus autoridades, en la compra de bienes muebles o inmuebles para uso personal, o se paguen festejos o agasajos, o tengan un destino diferente para el que se han entregado, será objeto de investigación disciplinaria por parte de los organismos de control del Estado y será sancionada disciplinariamente la autoridad indígena que haya efectuado dicha malversación (Linares, 2004: 81-82).

A pesar de haber normas explícitas que son imperativas en lo que se refiere al respeto que debe tener el gobierno nacional hacia las leyes y autoridades indígenas, existen debates donde se pone en tela de juicio esta autonomía y, por lo cual, la Corte Constitucional ha debido pronunciarse constantemente. Un ejemplo claro de esta situación son las tutelas interpuestas por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, IPUC, contra las autoridades tradicionales de la comunidad indígena Arhuaca de la zona

oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. En este sentido, el organismo judicial profirió el siguiente enunciado:

“...El principio de diversidad étnica y cultural otorga a las comunidades indígenas, un estatus especial que se manifiesta en el ejercicio de facultades normativas y jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus valores culturales propios. Igualmente, la Carta les confiere el derecho de gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; consagra una circunscripción electoral especial para la elección de senadores y representantes; y, les garantiza el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios” (Linares, 2004: 87-88).

El Estado colombiano reconoce que la capacidad de coerción social de las autoridades de algunos pueblos indígenas sobre sus miembros, se ha perdido por el efecto del sometimiento del grupo étnico al orden colonial y su posterior integración a la vida republicana. Por tal motivo, los organismos estatales encargados de aclarar esa situación, coinciden en que a mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor debe ser su autonomía, siempre y cuando, se ciñan a los estrictos parámetros señalados por la Constitución y la ley, manteniendo de esta forma la unidad nacional:

“...La autonomía política y jurídica de las comunidades indígenas, entendida como la capacidad para gobernarse y ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito de su territorio, puede ser ejercida de conformidad con sus costumbres, siempre y cuando éstas no sean contrarias a la Constitución y a la ley, tal como lo disponen los artículos 246 y 330 de la Carta, pues, en relación con las comunidades indígenas, la propia Constitución consagra un régimen de conservación de la diversidad dentro del marco de la unidad” (Linares, 2004: 89).

La jurisprudencia relacionada con los grupos indígenas y las minorías étnicas, aparte de dar a conocer los límites de las autoridades de esos grupos, también señala los elementos que deben comprender para ejercer de forma efectiva su autoridad. Así, se describen las formas de gobierno y las funciones que deben cumplir, las autoridades propias, haciendo referencia a las personas elegidas por la comunidad para dirigir los destinos de la misma y, la facultad de administrar justicia en el interior de las comunidades dentro del marco del Estado colombiano, siendo este una organización política de carácter pluralista.

Al analizar los derechos inherentes al territorio, Linares ha regresado al pasado y se ha situado en la época de la Conquista donde ha notado la forma como los indígenas perdieron muchas de sus tierras, dado que los monarcas españoles promulgaron disposiciones especiales para la adjudicación de terrenos a sus súbditos, otras para sí y otras donde los nativos conservaban el control sobre sus predios. Con la Constitución Política de 1991, "... según la cual 'el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana' ha contribuido sin duda a acentuar el clima de respeto e intereses para los diferentes componentes de nuestra nacionalidad" (Linares, 2004: 143).

El procedimiento que se debe llevar a cabo para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas, debe estudiar en profundidad normas de gran importancia en la defensa de los derechos indígenas sobre sus territorios, como la mencionada Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT, las leyes 145 de 1994 y la 191 de 1995, los decretos 2663 de 1994, 2664 de 1994, 2666 de 1994 y el 2164 de 1995, este último relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas.

Se puede concluir de todo lo anteriormente expuesto que, a pesar de estar suficientemente regulada la normativa dirigida a la protección de las minorías étnicas, es evidente que priman los derechos del resto de los colombianos sobre los de la comunidad, dado que, de todas formas, las actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales en el territorio u'wa han continuado sin tenerse en cuenta las razones expuestas por los nativos.

De esta forma, el tener que convivir con una petrolera y demás empresas occidentales, con objeto de la explotación de recursos, constituye para ellos una profanación que día a día coloca en riesgo la identidad cultural de la colectividad. Dicha identidad se fundamenta en la ley ancestral, que es la que dirige el mundo u'wa. El hecho de poseer una ley tan antigua significa para ellos que es la Madre Tierra quien dicta todas las políticas, esto es, la política sobre los ríos, la política sobre los temblores y la política sobre el petróleo. Si los magistrados y demás funcionarios del Estado no son capaces de reconocer la estrecha relación entre la ley ancestral, la identidad cultural y la supervivencia física de la comunidad, ¿cómo pueden aceptar los u'wa aquello que

se resuelve en el fallo, y cómo el Estado colombiano le dará el valor que se merece al pensamiento mítico de la comunidad?

6.2.1. Irregularidades en la consulta previa

La Corte Constitucional pertenece al grupo de instituciones que deberían promover y respaldar el carácter plural de la composición social en Colombia. Sin embargo, la unidad nacional no puede garantizar que los diferentes grupos que conforman la población colombiana se sientan representados por las instituciones del Estado. Los u'wa, ante el fallo emitido por la Corte en 1997, se han cuestionado si el derecho a la diversidad efectivamente se ejerce en Colombia o simplemente son palabras escritas sobre un papel. Es por eso que, en primera instancia, han recurrido a la Defensoría del Pueblo, la cual:

“...estimó que se vulneraron los derechos que la Constitución de 1991, con fundamento en el reconocimiento de Colombia como una Nación multiétnica y pluricultural, les concedió a las minorías étnicas colombianas.

Dichos derechos son el derecho al territorio, concebido como la base del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural; a la autodeterminación; a la lengua; a la cultura étnica, es decir, a la protección de los usos y costumbres de las culturas de los pueblos indígenas; a los recursos naturales y a los beneficios de su explotación, según el cual la explotación de recursos no puede desproteger la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y el derecho a seguir viviendo, referido a la subsistencia del pueblo indígena como una comunidad de características culturales particulares” (Eraso, 1997: 43).

Al analizar algunos artículos de la Constitución de 1991, se pueden identificar varios conceptos que se confrontan entre sí. Por ejemplo, del artículo 1º puede surgir la pregunta: ¿cómo es posible que Colombia sea un Estado organizado en forma de república unitaria y a la vez sea descentralizado y pluralista? En este sentido, se deben tener en cuenta los dos polos que surgen al contraponer la unidad nacional, que hace referencia al interés general, con la diversidad cultural, que constituye los valores comunitarios y tradicionalistas de las minorías étnicas en Colombia.

Lo anterior muestra la contradicción existente entre conceptos que exponen que, por un lado, el Estado es participativo y pluralista y, por otro, que ni la diversidad ni la participación pueden estar por encima del interés general. Mientras no se tenga claramente definido en la Constitución el sentido que se le da a la expresión “interés

general”, y no se delimite de forma específica con el concepto de “interés particular”, seguirá existiendo el debate entre qué derecho prima más que otro.

De todo esto se puede concluir, que aun cuando la Constitución colombiana brinda un cuadro de derechos a las minorías culturales y además consagra toda una serie de garantías para promoverlos, lo cierto es que las comunidades indígenas no se sienten plenamente reconocidas. De ahí que la supuesta unidad en la diversidad no puede ser entendida más que como la expresión de una incongruencia nacional. Pero, algunos organismos del Estado, como la Corte Constitucional analizan la situación y la resuelven con la conciliación de los dos intereses nacionales legítimos:

“...por un lado, el que reconoce la necesidad y el beneficio, en términos de desarrollo económico, de la explotación de los recursos naturales y por otro el que preceptúa que el Estado debe otorgar una especial protección a las comunidades étnicas en general e indígenas en este caso específico, para que las mismas puedan conservar su identidad e integridad étnica, cultural, social y económica, como parte de la riqueza de la Nación colombiana” (Eraso, 1997: 44-45).

El respeto a la diversidad supone la aceptación de cosmovisiones contrarias a los valores de la ética oficial. Para poner los bienes en disputa bajo un mismo escenario, es necesario tener en cuenta las dos caras del conflicto. La parte positiva de las leyes occidentales se deriva de la intención con la que se ha constituido el artículo 2º de la Constitución. En este precepto está explícita la idea de que uno de los fines del Estado es facilitar a todos la participación en las decisiones que les afectan. La forma de la ley, en ese sentido, se concibe como uno de los instrumentos con los cuales cuenta el Estado para realizar el bien, de forma objetiva, permitiéndole a un individuo o un grupo tomar parte en las decisiones que le atañen.

El mecanismo de participación que se aplicó, de forma incorrecta, al caso de la comunidad indígena u’wa fue el de la consulta previa, que es un procedimiento especial desarrollado en virtud del principio constitucional de la participación social dentro de un Estado Social de Derecho participativo y pluralista. De forma concisa, Sánchez Botero define este mecanismo haciendo referencia especialmente a la explotación de los recursos del subsuelo, que son el motivo por los que se ha creado la controversia entre la multinacional OXY y el pueblo u’wa:

“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades” (Sánchez Botero, 2010: 50).

Con la ejecución de la consulta previa, uno de los fines primordiales del Estado es garantizar la participación de todas las personas en las decisiones que los afecten en la realidad política, cultural y social de la nación. Este mecanismo, que se encuentra consagrado en el artículo 330 de la Constitución Política y en el artículo 76 de la ley 99 de 1993, establece que la explotación de los recursos naturales no debe afectar la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas.

Dado que el Ministerio del Medio Ambiente dio por realizada la consulta previa, concedió a la multinacional OXY la licencia ambiental para que iniciase las labores de exploración y extracción de hidrocarburos en la zona del Bloque Samoré. Sin embargo, es evidente que el proceso que se debió seguir no se llevó a cabo:

“Los días 10 y 11 de enero de 1995 se realizó una reunión, cuyo objeto era, precisamente el de *‘realizar la consulta establecida en el artículo 6 y 15 (sic) de la Ley 21 de 1991 y en el artículo 76 de la Ley 99/93...’*. Dicha reunión contó con la participación de algunos miembros de la comunidad indígena U’wa, funcionarios de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de Minas y Energía, de Ecopetrol y de la Occidental de Colombia, Inc. y se llevó a cabo en español, con traducción al uw’aka” (Eraso, 1997: 40).

Las autoridades gubernamentales y los representantes de Ecopetrol y de la OXY se presentaron a la reunión con las ideas claras que querían exponer en la mesa de negociación:

- Informar a la comunidad u’wa sobre una decisión ya tomada por el gobierno nacional de realizar actividades de exploración de hidrocarburos en áreas en las que se encontraba establecida tal comunidad.

- Explicar de forma somera y en un lenguaje técnico, con el fin de lograr una escasa comprensión por parte de los indígenas, los trabajos que se iban a llevar a cabo.
- Acordar con los indígenas la manera en que los trabajos de prospección sísmica se realizarían dentro de sus territorios, procurando no afectar su integridad social, cultural y económica.

“En tanto las reuniones preliminares habían tenido un carácter marcadamente informativo, los u’wa nunca se acercaron al tema con la conciencia de que se trataba de una *consulta*, pensaron que el propósito únicamente era transmitir información que les brindaba la OXY. De hecho, la reunión celebrada los días 10 y 11 de enero de 95 también se dedicó primordialmente a presentar información. El tiempo con el que contaron los indígenas presentes para analizarla y fijar una posición fue mínimo.

La primera y principal dificultad en estas reuniones fue el lenguaje; buena parte de los u’wa no hablan español, y quienes lo hacen, lo aprendieron como su segunda lengua. Como lo sostuvo meses después John Landaburo, quien había sido el director del Programa de Traducción de la Constitución de 1911 a 12 lenguas indígenas, en un proceso solicitado posteriormente por la Defensoría del Pueblo, los procesos de comunicación interculturales suelen ser demorados y dispendiosos, además de suponer traductores bilingües suficientemente ilustrados. La información presentada comprendió temas tan complejos como la política petrolera nacional, el manejo en hacienda pública de las regalías, la jurisprudencia constitucional sobre el carácter multicultural del Estado o la explicación técnica de la prospección sísmica, temas que incluso para un hablante cuya primera lengua sea el español, son difíciles de comprender en sólo una mañana” (Ungar y Arrieta, 2004: 26-27).

La consulta que se fundamentó en los tres presupuestos anteriormente enunciados –informar de una decisión ya tomada, explicar de forma somera y acordar el modo de ejecución– estuvo plagada de múltiples defectos que se tradujeron en la violación de varios derechos constitucionales y legales del pueblo u’wa:

“En el sentir del pueblo U’wa, el proceso que culminó con el otorgamiento de la licencia ambiental a la sociedad Occidental de Colombia Inc. presentó una serie de deficiencias, especialmente en torno a la consulta previa. Además consideran que no ha existido diálogo intercultural en igualdad de condiciones, que no se ha tenido en cuenta su pensamiento tradicional, que no se dio la información completa del proyecto y que no se habló con los *werjayas*, que eran quienes expondrían las conclusiones del pueblo en torno al proyecto” (Robayo, 2001: 27-28).

Dentro de los fallos cometidos es necesario precisar algunos aspectos. En cuanto al estudio de impacto ambiental, es importante resaltar el engaño con el cual se actuó sobre el pueblo u'wa, al dársele a conocer a los representantes de la comunidad un documento que contenía innumerables conceptos técnicos de difícil comprensión para ellos, sobre un proyecto en cuya planeación ellos jamás tuvieron participación alguna y en el que no se tomaron en cuenta los impactos sociales y culturales de las actividades de exploración sísmica y todas sus consecuencias sobre la integridad de la comunidad.

El hecho de que no haya existido participación indígena en la realización de tal estudio hizo que se omitieran aspectos tan importantes e imprescindibles como un análisis detallado de la cultura u'wa y de su realidad socioeconómica, con el fin de observar los posibles efectos de la realización del proyecto de exploración sísmica en el territorio de dicha etnia, y su incidencia sobre su integridad en todos los aspectos:

“La consulta la hacen aquí en el territorio U'wa, realmente cuando empezamos la lucha, nos fuimos a protestas, bloqueamos varias vías, y tuvimos mucho apoyo de los campesinos de Arauca porque ellos ya han sufrido el mismo proceso, han sido desplazados; por eso ellos nos dijeron que nos aportaban yuca y plátano para que nos alimentáramos. También tuvimos apoyo de organizaciones sociales e hicimos reuniones con las autoridades, las cuales exigieron que viniera el presidente de la república a hablar con los U'wa. Así se hizo una asamblea en El Chuscal y vino un delegado de la presidencia y el ministro de medio ambiente.

Los U'wa leyeron su corazón y advirtieron la visión con la que él venía que era otra. Por eso, los U'wa dijeron, que no se había hecho una consulta y que el gobierno quería hablar pero ahora éramos nosotros los que no queríamos hacerlo, porque nosotros pensamos que para qué íbamos a sostener diálogos, para qué se iba a hacer una consulta si no nos iban a cumplir con las promesas que nos iban a hacer” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Aunque en el caso u'wa es evidente que el mecanismo de participación propuesto por la consulta previa no es la solución para dirimir el conflicto, dado que para ellos la extracción de la sangre de la madre tierra (petróleo) bajo ningún concepto es negociable, sí es prioritario que en la promoción de otros proyectos con otras comunidades del país se dé la participación de estas y que no se limite su intervención únicamente a la reunión o reuniones de la consulta, sino que, por el contrario, se extienda, inclusive, a los estudios que deben ser realizados por la empresa solicitante de

la licencia ambiental, lo que facilitaría la protección de los derechos de las minorías étnicas involucradas en este tipo de procesos.

Retomando las reuniones que se efectuaron en enero de 1995, en ellas se informó sobre los posibles impactos que el proyecto podría causar dentro de la zona del Resguardo y se aclaró que en caso de que se produjeran daños, ellos serían subsanados por la sociedad beneficiaria de la licencia. En este punto es importante hacer notar que la licencia otorgada violó, en primera instancia, la soberanía que tiene la comunidad sobre su territorio, promulgado en el artículo 22 del Decreto 2164, proveniente de la reglamentación parcial de la ley 160 del 3 de agosto de 1994, dado que no se contó con la aprobación indígena para llevar a cabo las exploraciones sísmicas. El artículo del decreto afirma lo siguiente:

“Manejo y administración: Las áreas que se constituyan con el carácter de resguardo indígena serán manejadas y administradas por los respectivos cabildos o autoridades tradicionales de las comunidades, de acuerdo con sus usos y costumbres, la legislación especial referida a la materia y a las normas que sobre este particular se adopten por aquellas” (Linares, 2004: 86; cursiva y subrayado en el original).

Lo anterior quiere decir que en ningún momento se cuestionó a la comunidad sobre el hecho de si estaba interesada o no en la realización de un proyecto que seguramente iba a traer repercusiones negativas para sus habitantes. Ahora, también surge la pregunta sobre cómo la multinacional iba a enmendar daños irreparables como la llegada de un gran número de personas a la zona, en busca de una nueva oportunidad laboral, y que posiblemente se asentarían allí definitivamente.

De otra parte, las autoridades del gobierno llegaron a la supuesta consulta con la idea preconcebida de que primaba la propiedad del Estado sobre el territorio nacional y sobre el subsuelo por encima de los derechos de la comunidad indígena, por lo cual en ningún momento trataron de concertar con ella sobre el modo más adecuado de llevar a cabo las actividades de prospección sísmica en sus territorios. De esta forma, se ha violado el derecho que la comunidad tiene de velar por la preservación de uno de los recursos del subsuelo que se encuentra en su territorio:

“Si bien el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos no renovables –art. 332 C.N., con respecto a los recursos naturales que se encuentren dentro

de los territorios indígenas, la Constitución previó para su manejo y explotación normas especiales de administración, conservación y custodia.

En primer término asignó a los Consejos Indígenas entre sus competencias y atribuciones específicas, las de velar por la preservación de esos recursos –art. 330-5 C.N.-. Se impone como carga estatal y social la conservación y protección de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas, como condición de viabilidad de la explotación de esos recursos naturales en los territorios que esas poblaciones ocupan –Parágrafo art. 330 C.N.-” (Córdoba, 1996: 211).

Es claro que aunque el resultado de una consulta previa no debe ser necesariamente el llegar a un acuerdo absoluto sobre los puntos debatidos, al menos si deben existir fórmulas de consenso con el fin de lograr la protección de los derechos y la integridad de las minorías afectadas por una decisión administrativa y por la realización de una serie de actividades dentro de sus territorios, situación que en ningún momento se dio en el transcurso de este caso.

Entre otros motivos, se observa que la consulta previa tampoco cumplió con los fines perseguidos por tal mecanismo de participación, porque la forma en que se realizó deja ver claramente que su objeto se limitó a llenar una formalidad legal para el otorgamiento de la licencia ambiental a la empresa Occidental de Colombia Inc., y no a buscar la efectiva participación de la comunidad indígena con el fin de proteger su integridad y sus derechos como minoría étnica. Lo anterior se demuestra en el hecho de que los representantes de los diferentes ministerios presentes en los días en que se llevaron a cabo dichas reuniones, advirtieron inicialmente que la consulta no era para pedir permiso al grupo local para llevar a cabo las actividades de exploración sísmica dentro de sus territorios, pues tal decisión ya había sido tomada por la administración, sino que de lo que se trataba era de darles a conocer el proyecto a realizar y sus efectos. De ahí que se confirme, una vez más, que no se dio a la comunidad u’wa un espacio de participación suficientemente amplio y libre para dar a conocer sus opiniones y objeciones respecto a los trabajos de prospección del Bloque Samoré:

“Los U’wa han redactado un documento en el cual colaboró el doctor Evaristo Tegría, abogado indígena U’wa que trabajó en AsoU’wa. Él, con otros doctores redactaron el documento en el que se expresa claro porqué la comunidad no fue a la consulta previa, porque en ella nos iban a preguntar lo que queríamos, y lo que queremos es la no explotación en nuestros territorios, y no nos iban a dar ninguna solución. El gobierno solo quiere explotar y nosotros lo único que

queremos es que nos respeten nuestro territorio y que no lo exploten. Eso es lo único que nosotros tenemos que hablar con el gobierno” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Aún más, las reuniones que se produjeron no pueden ser definidas como una consulta previa, en tanto que de ellas no se obtuvo ninguna decisión por parte de los asistentes, ya que la resolución de otorgar la licencia a la OXY fue tomada previamente a los días en que se realizaron esos encuentros. En este sentido, uno de los objetivos principales de la consulta previa, que es el de llegar a una decisión conjunta que interprete la voluntad de los participantes, no se cumplió.

Como prueba de lo anterior, un elemento que no se tuvo en cuenta a la hora de conceder finalmente la licencia ambiental, fue que en los días 10 y 11 de enero de 1995, no se llegó a un acuerdo definitivo y por eso se pactó una nueva reunión para discutir nuevamente lo relativo al proyecto del Bloque Samoré, encuentro que tampoco se llevó a cabo. En este caso la pregunta más oportuna sería, ¿si quedaron asuntos pendientes que debían ser discutidos y nunca se aclararon, porqué el Ministerio del Medio Ambiente decidió otorgar la licencia ambiental al solicitante?

Otro punto deficiente se relaciona con que en ningún momento se tuvo en cuenta la manifiesta oposición de la comunidad al proyecto que pretendía realizar la Occidental de Colombia Inc. No hubo un instante en que se les permitiera, en las reuniones de enero de 1995, exponer el significado que para sus integrantes tiene el planeta y sus componentes. Es necesario tener en cuenta que para la comunidad el territorio no es un simple objeto sobre el cual se ejerce un dominio, sino que éste es la esencia de la vida y la fuente que alimenta a todos los seres vivos, por lo que, en caso de sufrir algún cambio contrario a su visión tradicional, repercutiría en sus aspectos cultural, social, económico, étnico y territorial:

“La Occidental y Ecopetrol dicen que los U’wa no quisimos ir a la consulta, y es porque nosotros tenemos claro que con ellos nunca íbamos a tener una solución, entonces para que nos íbamos a desgastar. Nosotros sabemos que no somos dueños de la tierra, ni el Estado tampoco, si nosotros lo fuéramos, decidiríamos qué hacer con ella. Pero la tierra no la hizo el hombre, la tierra la hizo Dios para que el hombre viviera en ella, nos la dio prestada, porque nosotros estamos en un mundo prestado. Nosotros vivimos y nos morimos y lo que queremos dejarles a nuestros hijos es un ambiente sano, una tierra sana, no contaminada ni enferma.

Pero lamentablemente el gobierno no entiende nuestra posición” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Con respecto a los representantes indígenas que asistieron a las reuniones de la supuesta consulta previa, estos no eran los líderes de los diferentes grupos que conforman el clan U’wa, por lo que no eran los más indicados para defender los intereses y derechos de los que gozan como minoría étnica:

“Se está hablando de indígenas que en la colonización se fueron a vivir a la ciudad y ya han perdido su cultura, su tradición, su posición y sobre todo, ya no tienen respeto a la Ley de Origen. Algunos de ellos han dicho que debemos sentarnos en la mesa de negociación, que no podemos seguir siendo pobres ni debemos seguir viviendo en la selva. Es por eso que a ellos la comunidad los ha sacado y han perdido todo el derecho U’wa. Han sido muy pocas personas, yo diría dos o tres, y ya no viven aquí, viven en Bogotá o en Bucaramanga y no son considerados indígenas. Quisieron tomar la vocería por los U’wa pero la comunidad les dijo que éste no era su problema, el problema era de la comunidad y ellos ya se habían ido del territorio. La voz y la palabra la tienen las autoridades U’wa y no personas particulares” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

En tales reuniones hubo numerosas presiones que impidieron la efectiva participación de la comunidad, afectando así sus derechos al debido proceso, a la autonomía y a la participación ciudadana.

También es relevante tener en cuenta que, al haberse realizado una consulta previa sin la asistencia a ella de los líderes, se generó una división interna entre los que estaban a favor de las labores de exploración y los que se oponían rotundamente:

“En el presente caso se encuentran las dos situaciones. Existe una parte de los indígenas U’wa, específicamente aquéllos que viven en la zona de frontera con el blanco y que han trabajado con éste, que han recibido incentivos de la Occidental, como becas de educación. Además, han sido señalados por otra parte de la comunidad como aquellos indígenas que con su asistencia han avalado la reunión de consulta de 1995, lo que ha traído división interna en parte de la población U’wa” (Penagos, 2001: 41).

Por otro lado, no se dio la presencia de entidades estatales como la Defensoría del Pueblo o de alguna institución internacional que defendiera los intereses de la comunidad y que pudiese dialogar con los funcionarios del Estado y de las empresas petroleras en igualdad de condiciones; de esta forma, los u’wa no fueron lo

suficientemente informados del mecanismo de participación que se estaba aplicando, y por eso no pudieron hacer un debido uso de él. Finalmente, existieron barreras interculturales y multiétnicas que impidieron que la consulta se llevara a cabo en su debida forma y en beneficio de los derechos constitucionales y legales de la comunidad u'wa.

Con todos estos precedentes, es evidente que en la supuesta consulta realizada al pueblo u'wa, se ocultó la información que podría haber ayudado a la comunidad a tomar una decisión más objetiva sobre el conflicto, al tiempo que se encubrieron las exigencias de normas internacionales, de la Constitución Política y demás leyes nacionales vigentes en materia de participación dentro del contexto de un Estado que nominalmente reconoce la biodiversidad y la realidad pluricultural:

“Se trata de que las comunidades comprendan el alcance de las empresas por acometerse, su mecanismo de acción, sus proyecciones en el campo ambiental, para que frente a todos esos factores puedan deducir si hay o no riesgo para el hábitat donde se gesta y se desarrolla su existencia” (Rangel, 1996: 223).

Desde el momento mismo en que se le otorgó la licencia ambiental a la OXY para la puesta en marcha de las actividades de exploración, los u'wa han manifestado, a través de sus representantes, el rechazo total al proyecto, y extendieron sus quejas, inicialmente, ante diferentes instancias nacionales para dar a conocer los inconvenientes que presentan al respecto:

“...la comunidad en los años de 1999 y 2000 llevó a cabo movilizaciones y protestas, se mantuvo contacto con muchas ONG internacionales desde AsoU'wa. La misma ONIC documentó a la comunidad y estuvo pendiente de todo lo que pasaba con el grupo indígena. El escándalo se ha detenido porque la Occidental dijo que se iba de la zona pero los aparatos siguen ahí y ahora sacan gas. Ellos están haciendo las cosas en silencio, sin consultarnos a nosotros.

AsoU'wa, bajo el mandato de Gilberto Cobaría, se preocupa por la situación del pueblo U'wa. A través de las asambleas y reuniones se cuestiona qué pasa con nosotros y nos damos cuenta que están jugando con nuestra comunidad. Ellos piensan que no nos damos cuenta de lo que sucede pero vemos más allá de lo aparente” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Al no ser atendidos sus reclamos, los líderes de la comunidad acudieron a la Defensoría del Pueblo, la cual consideró que la decisión tomada por el Ministerio del Medio Ambiente vulneraba el debido proceso, el derecho a la vida, la participación

social y comunitaria y la integridad social, cultural, étnica y económica de la cultura indígena u'wa. Por lo tanto, la Defensoría interpuso el 10 de agosto de 1995 una acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, el cual, posteriormente, en fallo del 12 de septiembre de 1995 ordenó que se llevara a cabo la consulta previa y declaró la inaplicación de la licencia.

La acción de tutela que se interpuso tuvo los siguientes argumentos:

“El proyecto de exploración, y eventual futura explotación de hidrocarburos en zona geográfica nacional que comprende territorios reservados para el hábitat de comunidades indígenas, natural y previsiblemente ha de tener importantes y profundas consecuencias en la ecología, la cultura, la economía y el ordenamiento social de aquéllas, pues no resulta difícil vaticinar que los trabajos que se realicen no sólo afectarán la estructura geológica de esos territorios y la fauna y flora que allí se dan sino que causarán impacto en las costumbres, la lengua, las tradiciones, la cosmovisión y las instituciones familiares y tribales porque no en vano se produce el encuentro de una cultura y una civilización con otras” (Rangel, 1996: 220).

Por su parte, la Occidental de Colombia Inc. impugnó, a través de otra tutela, esa decisión ante la Corte Suprema de Justicia, la cual emitió un fallo el 19 de octubre de 1995 revocando la decisión tomada por el Tribunal Superior, fundamentándose en que la resolución era exclusivamente jurisdicción de lo contencioso administrativo, el cual era el único que podía declarar la inaplicación de la licencia. A continuación, la Corte Constitucional, en sentencia del 3 de febrero de 1997, reconociendo los derechos vulnerados a la comunidad indígena u'wa, aceptó que la consulta no había sido realizada hasta el momento y fijó un plazo máximo de treinta días para llevarla a cabo. Por otro lado, paralela a esta decisión, la Defensoría del Pueblo, en uso de la acción de nulidad, demandó ante el Consejo de Estado la licencia otorgada a la OXY por el Ministerio del Medio Ambiente.

Después de que ambas partes interpusieron varios recursos, al final se aprobó la licencia ambiental nuevamente, con el argumento de que primaba el interés general de los colombianos sobre el derecho de la comunidad indígena u'wa, y que era legítimo el dominio del Estado sobre el territorio nacional y su propiedad sobre el subsuelo. Con esto, se dejó el camino libre a la OXY para ingresar a territorio u'wa y ejecutar el proyecto de exploración sísmica.

En vista de que los mecanismos internos para la protección de los derechos de los u'wa se agotaron, la comunidad envió una carta al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos pidiéndole que solicitara al gobierno nacional la adopción de medidas adecuadas para prevenir la evidente violación de derechos y garantías del pueblo indígena, consagrados en la Convención Americana sobre Derecho Humanos que protege la integridad cultural de las comunidades indígenas:

“Las redes de apoyo y contactos establecidos por la comunidad, le permitió utilizar los recursos humanos y materiales de las ONG's amigas, como la *Rainforest Action Network* (RAN), para globalizar su lucha, haciendo *lobby* y activando órganos de *accountability* a nivel internacional. Los líderes de la comunidad viajaron a Washington D.C. a presentar una queja formal ante la OEA” (Ungar y Arrieta, 2004: 49).

El dar a conocer este conflicto a nivel internacional, y una posible demanda ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, son hechos que hacen evidente la magnitud e importancia del caso u'wa para las minorías étnicas del país, en tanto que se convierte en un precedente para la efectiva protección de los derechos fundamentales y colectivos de las comunidades indígenas en el país, pues la presión internacional hace ver al Estado colombiano la necesidad de brindarles espacios adecuados de participación en las decisiones sobre proyectos que afecten los recursos naturales existentes dentro de sus territorios y su integridad a cualquier nivel.

La solicitud hecha por el gobierno nacional a la Organización de Estados Americanos, OEA, para que emitiera un concepto tendiente a dirimir el conflicto, dio como resultado el estudio elaborado por la Universidad de Harvard en septiembre de 1997, donde se solicita a la OXY suspender de forma inmediata las exploraciones y buscar un acercamiento con los u'wa con el fin de obtener su consentimiento para la realización de tal proyecto. De otra parte, la comunidad indígena presentó en su momento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una carta con el fin de imponer una sanción moral al gobierno colombiano por la violación de los derechos y garantías reconocidos internacionalmente a las comunidades nativas:

“...los U'wa han interpuesto una demanda ante la Corte Internacional Interamericana para exigir la no explotación petrolera. Así se le exige al gobierno que proteja nuestro Resguardo y que nos devuelva los territorios que

nos han pertenecido de mucho tiempo atrás. De esta forma, la Corte le exige al Estado que nos devuelva lo nuestro y le dice que tiene que comprarnos algunos territorios para que estos pasen a ser parte de nuestra propiedad, todo esto dentro de un plazo de ocho años que terminó en 2008” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

A finales de 1998 se inició un proceso con el gobierno nacional, representado por el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades indígenas u’wa, quienes acordaron avanzar hacia la ampliación y constitución del Resguardo Unido U’wa. Fue así como después de múltiples reuniones y un estudio realizado por el Cabildo Mayor U’wa, la Pontificia Universidad Javeriana y el INCORA, se concertó un territorio fundamental para la supervivencia de la cultura y la conservación del medio ambiente. El 22 de agosto de 1999 el gobierno hizo entrega oficial del Resguardo el cual pasó de tener 69.500 hectáreas a una extensión de 220.275 hectáreas.

Aparentemente, la adjudicación de nuevas tierras a la comunidad u’wa fue un acto de justicia por parte del Estado con el grupo nativo, en el cual se dio cumplimiento a los artículos 63 y 329 de la Constitución de 1991. Sin embargo, existen dos factores que muestran que esta actuación no fue del todo congruente con lo expresado en esos artículos. Por un lado, se adjudicaron tierras que legalmente ya le pertenecían a la comunidad y que fueron reconocidas por la Corona española en tiempos coloniales; y segundo, la extensión del terreno adjudicado no corresponde al verdadero territorio que los u’wa, con el paso del tiempo, han perdido. Es por eso, que en la actualidad los líderes del grupo solicitan al Estado, no que se les adjudiquen predios dispersos, sino la totalidad de la zona, ya que esta pertenece a su territorio ancestral:

“Por tanto, si tratándose de particulares la propiedad de la tierra en América solo podía demostrarse frente a España con el título formal de adjudicación hecha entre otros por venta u ocupación con la consiguiente explotación económica, tratándose de los indios esa propiedad se demostraba con la simple ocupación, porque la Corona reconoció la ocupación de los indios sobre sus tierras como título de propiedad al que ella aducía sobre las que sus conquistadores les iban arrebatando por la fuerza” (Linares, 2004: 143).

Retomando los hechos referentes a la licencia ambiental que avalaba las exploraciones, supuestamente solucionado el problema de tierras por parte de la comunidad indígena, el Bloque Samoré fue el primer sector que se le concedió a la OXY para que empezara a realizar exploraciones, aunque dentro de este quedaran parte

de las tierras del Resguardo indígena y del Parque Nacional del Cocuy. Como consecuencia de ello, fueron reducidas las exploraciones de la OXY a la línea comprendida entre la carretera que une a Pamplona y Samoré.

El Resguardo Indígena U'wa fue constituido en 1975, pero el territorio ancestral es mucho más amplio que el adjudicado en agosto de 1999. Aledaños a ellos, el INCORA compró terrenos de 30.000 hectáreas de extensión que fueron entregados a la comunidad, los cuales se encuentran ubicados en la zona de Güicán. Antes de dicha gestión, los indígenas poseían 90.000 hectáreas de tierra solamente:

“Nosotros nos constituimos como Resguardo del pueblo U'wa con la resolución 56 expedida por el gobierno en el año 99 y por medio de ésta queremos unir las comunidades existentes en los departamentos de Santander, Norte de Santander y el municipio de Guadalajara. Al salir la resolución, se ha constituido como un solo Resguardo pero para que éste sea definido como tal debe hacerse el saneamiento, lo cual se consigue comprando las mejoras o los terrenos a los campesinos y terratenientes que queden dentro de ese Resguardo, y esta es la fecha que el gobierno no ha cumplido, ellos afirman que si lo hacen aunque la realidad es otra” (Gilberto Cobaría, septiembre, 2012).

El estudio que adelantó la Universidad Javeriana determinó que el área que los indígenas demandaban es la denominada zona de Línea Negra, con una extensión de 200.000 hectáreas, aproximadamente. Sobre esos linderos que determinó la Universidad y que fueron concertados con la comunidad a través del Ministerio del Medio Ambiente, se produce la ampliación del Resguardo, realizada por la junta directiva del INCORA, con el fin de dar solución al problema de la explotación petrolera que se tenía proyectada, esta vez, en el Bloque Gibraltar cerca a Cubará.

El territorio que los indígenas u'wa estaban solicitando fue legalizado por el INCORA, pero cuando el Ministerio del Medio Ambiente otorgó la licencia a Ecopetrol para que se iniciase la explotación de petróleo, los indígenas manifestaron que hasta allí llegaban los límites de sus tierras de Resguardo pero sus territorios ancestrales se extendían hasta Venezuela y por ende ellos no permitían que en el sector de Gibraltar se realizaran explotaciones petroleras.

En agosto de 1999 y como consecuencia de la ampliación del Resguardo, la empresa Occidental de Colombia solicitó al Ministerio del Medio Ambiente el ajuste de las coordenadas del Bloque para la perforación exploratoria del denominado Bloque de

Gibraltar, reduciéndose esta de 21,3 km² a 14,8 km², área que no comprometía al nuevo Resguardo indígena. Posteriormente el 21 de septiembre de 1999, mediante la resolución 788, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales y sociales pertinentes, el Ministerio del Medio Ambiente expidió una nueva licencia ambiental y estableció un plan de manejo ambiental para la perforación exploratoria de un pozo en el área del Bloque de Gibraltar.

Para atender el proceso de licitación, el gobierno acordó que se hiciera a través del Ministerio del Medio Ambiente, por lo cual se hicieron una serie de reuniones entre el ministro y las autoridades u'wa y sus representantes para definir cuáles eran los límites del Resguardo, sobre todo en la parte superior que es donde se han presentado la mayor parte de los conflictos. De esta forma, los indígenas acordaron con el Ministerio que los límites que se habían establecido inicialmente en el estudio del convenio con la Universidad Javeriana y las gobernaciones, era la frontera que ellos aceptaban como válida y que con eso se estaban atendiendo sus necesidades de tierra.

El petróleo es considerado por el gobierno colombiano como el producto comercial más importante. El Estado percibe que la explotación de petróleo es un paso crucial para el desarrollo y la modernización en una economía global. Colombia es considerada uno de los exportadores más importante de Suramérica; para el año 1995 aumentó su explotación en un 30% y esperaba doblarla en los cinco años siguientes. Para ese entonces, tenía reservas probadas de dos billones de barriles sin incluir el 1,5 billones de barriles que la empresa Occidental consideraba que se encontraba bajo el suelo del Bloque Samoré:

“El Estado colombiano y el gobierno nos reconoce como cultura y reconoce nuestros territorios pero lamentablemente nunca nos vamos a sentar y a ponernos de acuerdo porque una cosa es lo que ellos piensen y otra la visión inteligente que tenemos los pueblos indígenas y el pueblo U'wa principalmente. El gobierno solo piensa en vender y llama desarrollo de la economía a lo que nosotros llamamos explotación. Ellos quieren vender todo lo de la naturaleza, en cambio, para los U'wa nada es negociable. Lo que es el petróleo, la naturaleza y el agua, son fuentes y son sagrados porque eso lo creo Dios para que el hombre pudiera vivir y no lo explotara” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

La expansión de la industria petrolera en Colombia comenzó con el descubrimiento de Occidental del enorme yacimiento petrolero de Caño Limón en 1984.

A ellos siguieron rápidamente los descubrimientos de la British Petroleum de los yacimientos de Cusiana y Copiagua. No obstante, las áreas que rodean estos proyectos de grandes dimensiones económicas, los pueblos que las habitan en Arauca y Casanare, sufren uno de los niveles más altos de pobreza y violencia en el país.

La ONIC, en 1997, realizó un estudio acerca del impacto de las actividades petroleras sobre los distintos pueblos indígenas en Colombia. Haciendo referencia a los grupos que han sufrido la ejecución de estos proyectos en sus territorios, comenta:

“Los pueblos indígenas fueron completamente desarticulados: Identificarlos como pueblos es difícil. Solo quedan comunidades dispersas. Las grandes casas desaparecieron, así como las extensas parentelas trashumantes del esplendor de los ritos, solo sobreviven ceremonias aisladas, y en ocasiones ofrecidas al comercio. La transformación alimentaria fue completa. Las comunidades perdieron la caza, la pesca y las semillas o frutos. Tuvieron que cambiar de dieta. Y así mismo perdieron en buena parte sus elaborados lenguajes. Ya no queda taitas que se conviertan en tigre” (ONIC, 1997: 3).

La guerra que actualmente se encuentra en curso en Colombia y la constante violación de los derechos humanos han impactado también en la industria petrolera. En los primeros meses de 1998, varias compañías petroleras, incluyendo Dutch, Shell y British Petroleum, anunciaron su intención de recortar la exploración y las actividades vinculadas a la producción, incluso vender sus intereses y marcharse de allí. La reducción en la exploración ha significado un retraso en el aumento de las reservas probadas de Colombia, y los funcionarios del gobierno llegaron a advertir en su momento que si esa tendencia continuaba, sería necesario importar petróleo en el futuro.

Un estudio de la Universidad de Harvard ha tratado de hacer entendible la problemática que vive Colombia en este aspecto. Basado en datos de 97 países en vía de desarrollo, los investigadores norteamericanos han confirmado que existe una relación negativa entre la dependencia de un país de la exportación petrolera y su desarrollo posterior. Países como México, Nigeria, Guyana y Zaire, todos ricos en recursos naturales, han ido de crisis en crisis mientras sus pueblos continúan asolados por la pobreza. La experiencia ha demostrado que la actividad petrolera contribuye negativamente al desarrollo económico y social sostenible, a largo plazo.

Bajo estos criterios, lo único cierto es que en el mundo ha existido en los últimos años la idea errada de pensar que los recursos naturales, como medio para alcanzar la

modernización, son una tabla de salvación capaz de sacar de la pobreza al país que los posea:

“...la evidencia histórica y etnográfica demuestra de forma inapelable que el proceso de modernización aplicado durante los últimos cincuenta años en la práctica totalidad del Tercer Mundo, no solamente no ha conseguido eliminar la pobreza y la marginación social, sino que las ha extendido hasta alcanzar una magnitud sin precedentes” (Viola, 2000: 11).

En lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas y concretamente en el territorio u’wa, los demás pueblos aborígenes consideran que este caso no es único en el mundo. El problema de los megaproyectos mineros, petroleros o de bioprospección, está generalizado en el resto del planeta, precisamente los megaproyectos de las multinacionales como la OXY, Monsanto, o en el caso de las semillas, como es el caso de Novartis, está invadiendo todos los territorios indígenas de los cinco continentes. Por eso, los grupos aborígenes, en general, ven con mucha preocupación la situación que se está viviendo y, desde esa preocupación, las demás comunidades se hacen solidarias con la causa u’wa. Los indígenas piensan que la disputa que los u’wa han emprendido desde 1992, es una lucha y un reclamo justos.

Cuando, el 7 de abril de 1992, la multinacional Occidental Petroleum firmó el contrato con Ecopetrol para llevar a cabo la exploración sísmica del Bloque Samoré, la petrolera solo le estaba dando importancia a los beneficios económicos de la explotación. Afirmó, en aquel entonces, que este yacimiento contenía aproximadamente 1.500 millones de barriles de petróleo o el equivalente a tres meses de producción de Estados Unidos²³. De esta forma concluyó que el país debía tomar conciencia de lo que estaba rechazando; pero las repercusiones sociales y culturales que afectaban a la comunidad indígena no fueron tenidas en cuenta, y cuando se hizo referencia al tema, manifestaron que era inconcebible pensar que una multinacional pretendiera acabar con una cultura o, lo que es peor, matar a más de cinco mil personas.

²³ Ramírez, Carolina, Quiroga, Marilyn. Conflicto U’wa-OXY. Pontificia Universidad Javeriana. Santafé de Bogotá, Octubre de 1999. Documento audiovisual.

Como bien sabe Occidental, la infraestructura petrolera ha actuado como un imán para la violencia; las instalaciones de OXY y de Caño Limón en Arauca, las cuales producen casi un tercio de las exportaciones petroleras en Colombia, fueron atacadas en sus primeros once años de existencia 508 veces. Esta campaña le costó al gobierno y a las compañías petroleras más de 1.500 millones de dólares y ha producido el derrame de más de 1,7 millones de barriles en el suelo y ríos colombianos:

“...nos oponemos a la explotación de petróleo, porque cuando empiezan las exploraciones hay mucha violencia en la zona y hay muchos desplazamientos, sobre todo en la parte baja del territorio U’wa, que es donde el gobierno dice que se encuentra el petróleo” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

El grave daño al medio ambiental causado por las instalaciones de Caño Limón constituye la base de un juicio que Occidental Petroleum y sus socios han enfrentado en Bogotá. El juicio busca forzar a las compañías para que pongan en vigor las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y pagar por los daños y costos que rescaten y remedien las áreas afectadas:

“El gran temor del pueblo U’wa es que con la exploración y explotación petrolera le suceda lo mismo que a sus vecinos los compañeros indígenas de la zona de influencia de Caño Limón, en Arauca, proyecto petrolero compartido entre la OXY y la Shell, y explotado desde época reciente.

Los pueblos indígenas Sikuni, Betoyes, Hitnu o Macaguanes, Hitanú o Iguanitos, y Dome Jiwi o Playeros, genéricamente conocidos como Guahibos, pasaron de ser los dueños de las sabanas a convertirse en los limosneros de las flamantes capitales petroleras. La política oficial ha sido de mayor crueldad: encerrar en unas cuantas decenas de hectáreas a pueblos tradicionalmente nómadas. ¿En qué se diferencia esto de las Guahibiadas de los años 70? Negados sus derechos ancestrales, circunscritos a mínimas reservas y resguardos y bajo el terror que todavía les producen las armas, los pueblos indígenas de Arauca afrontaron la llegada de las compañías petroleras en la peor de las condiciones. Y por eso, aparte de los Yukpas, de los Kofán y de los Chimila, los compañeros indígenas Guahibos de Arauca son de los pueblos que se llaman en vía de extinción en Colombia. Como resultado de la explotación petrolera de Caño Limón” (ONIC, 1997: 6).

Los indígenas u’wa afirman que su posición nunca se va a negociar ni se va a comprar. La vida no se compra, la vida no se vende; ellos preguntan al gobierno colombiano qué vale más si el petróleo o la vida de una sociedad. Si el petróleo prevalece y es más valioso que la vida, así será para el mundo occidental, y si el

gobierno colombiano comparte esa inhumana visión, en la cosmovisión del pueblo u'wa la vida tiene un valor supremo, superior a cualquier otro, y los u'wa van a reclamar y a llegar hasta las últimas consecuencias.

6.3. Suicidio colectivo

La lucha de los u'wa, más que para conservar su territorio, ha sido para proteger el petróleo, *ruiria*. Para ellos, éste le da la fuerza a todo lo existente en el planeta, es decir, los árboles, los animales y la especie humana; sin embargo, el gobierno no tiene conciencia de ello. Este es un recurso sagrado que no puede extraerse, porque de la misma forma que un humano moriría si le extrajesen toda su sangre, el planeta también se debilitaría y moriría junto con todas las especies que lo habitan. Es por eso, que todas las actividades de la comunidad están encaminadas a salvaguardar la naturaleza y todo lo que les rodea:

“Uno de nuestros principales pensamientos sobre la tierra es que ésta es un ser vivo y es nuestra madre. Eso ha determinado nuestras prácticas agrícolas, nuestras actividades culturales como la caza, la pesca, la recolección y el comportamiento ritual. Bajo este concepto algo claro para nosotros cuando trabajamos, cuando celebramos los ayunos, cantos y bailes tradicionales, es que estamos cuidando de este mundo, de la tierra nuestra madre” (Werjayas, Cabildos, Cabildo Mayor, Equipo de Etnoeducación, 1996: 192).

La explotación de recursos naturales, aparte de haber traído efectos catastróficos para la cultura u'wa y sobre todo para el medio ambiente, ha favorecido la llegada de personas foráneas a la zona, las cuales se han dedicado a sobreexplotar y destruir el medio ambiente transformando, con ello, el diario vivir de la comunidad local. Los estragos de la colonización producen desde el completo agotamiento de los recursos de fauna y flora, hasta la pérdida de la identidad, sin contar con la introducción de enfermedades incurables que en poblaciones como los u'wa, con escasos recursos tecnológicos, han adquirido proporciones de grandes epidemias:

“Cuando las comunidades pierden sus tierras por medio de acciones violentas o coercitivas, pierden su vitalidad, pues al ser despojadas de sus territorios, no sólo son despojadas de lo material, sino que también son despojadas de su identidad y su historia, es decir, son despojados del orden que por generaciones han construido en una relación no antagónica con la naturaleza” (Idárraga *et al.*, 2010: 28).

Es por eso, que en 1998, al ver que todos los recursos que impusieron ante los organismos de justicia del Estado no tenían un resultado favorable, la comunidad tomó la decisión extrema del suicidio colectivo:

“Los dirigentes U’WA, ante la muerte segura, al perder nuestras tierras, el exterminio de los recursos naturales, la invasión de nuestros sitios sagrados, la desintegración de nuestras familias y comunidades, el silenciamiento de nuestros cantos y el desconocimiento de nuestra historia, preferimos una muerte digna, propia del orgullo de nuestros antepasados que retaron el dominio de los conquistadores y misioneros: el Suicidio colectivo de la comunidades U’WA” (Uribe Hermocillo, 1996: 177).

“...el final de los U’wa es cuando se muera el último U’wa del planeta tierra, cuando eso suceda, quedará el gobierno solo para que pelee con la oscuridad y los temblores... nuestro territorio será destruido y los U’wa dormirán en paz... y no habrá más sufrimiento... y el gobierno tendrá a quien explotar... nosotros los indígenas cuidamos la sangre de la tierra, por el bien de todos, incluyendo blancos, campesinos que viven en este planeta llamado Tierra” (Werjayas, Cabildos, Cabildo Mayor, Equipo de Etnoeducación, 1996: 196).

Ante este panorama incierto y desolador, los u’wa decidieron oponerse radicalmente a cualquier tipo de exploración y particularmente a la explotación petrolera, tanto en aquellas áreas donde tienen títulos jurídicos que legalizan su propiedad como en aquellas áreas en proceso de recuperación. Por todo lo anterior, los u’wa pensaron en poner en práctica una antigua forma de resistencia, y manifestaron públicamente que, ante la muerte segura por la pérdida de sus tierras y el exterminio de su historia, prefieren la muerte digna de toda la comunidad que acabe con todo el grupo y la lucha que han llevado por siglos en defensa de su territorio:

“La decisión del suicidio colectivo se tomó en los años 1998 y 1999 cuando la comunidad indígena se da cuenta por primera vez que sus territorios están amenazados y que hay más terrenos que están en la mira de ser explotados. Nosotros pensamos que, si ya sufrimos una vez la colonización y nos quisieron acabar y despojar nuestro territorio, hoy viene la multinacional que para nosotros es el monstruo más grande, significando eso que se nos lleven el petróleo y nos quiten el territorio, pues preferimos morir todos.

Eso fue un impacto grande porque los U’wa estaban mucho más entregados a la cultura, estaban dentro de sus tierras y pocos habían salido de ellas, por eso fue una decisión colectiva en la que decidimos que preferíamos morir a entregar nuestras tierras. Esa decisión ya se ha dejado de lado porque ahora hay mucha

gente por fuera y en ese momento fue una decisión fuerte porque la gente estaba muy arraigada al Resguardo, lo cual hacía que lo defendieran a toda costa.

Desde el año 2000 hasta ahora la situación ha cambiado porque muchos indígenas se han asentado en el casco urbano, ha habido mucho mestizaje, aunque internamente en nuestros territorios, la posición de la gente que vive allá sigue siendo la misma, prefieren morir antes que perder el territorio. De todos modos, la posición general de todo el pueblo U'wa es la misma, no queremos perder nuestro territorio y en el fondo todos pensamos lo mismo, morir antes que nos despojen nuestras tierras” (Claudia Cobaría, Septiembre, 2012).

Es evidente la importancia de este caso, tanto a nivel nacional como internacional, dado que gracias a él se ha sentado un precedente que hace clara la exigencia de reconocimiento y respeto que debe existir en todo el planeta por las minorías étnicas en relación con las decisiones administrativas que afecten su integridad étnica, cultural, social y económica. En Colombia, tales decisiones se toman teniendo como prerrequisito obligatorio la consulta previa a las comunidades indígenas, con el fin de que estas tengan un medio por el cual logren conocer y participar en los proyectos que eventualmente se realicen en los territorios que les pertenecen, al tiempo que puedan opinar con respecto a ellos, y si es el caso, puedan oponerse a su realización y llegar, en la mejor de las circunstancias, a un acuerdo con las autoridades competentes y con la empresa interesada, en beneficio de los intereses de todas las partes involucradas.

La importancia para la comunidad radica en que se le garanticen sus derechos a la participación en las decisiones administrativas que los afecten, el derecho al debido proceso, a la autonomía, al territorio, a la biodiversidad y a la integridad cultural, social, étnica y económica. Mediante este caso se muestra la importancia del reconocimiento constitucional de la biodiversidad, y la eficacia de tal reconocimiento a través de los diversos mecanismos de participación destinados a lograr la protección de las garantías de quienes hacen parte de las comunidades indígenas.

La larga lucha que ha emprendido el pueblo u'wa en defensa de su territorio, ha demostrado que el sistema jurídico en Colombia, aún no se cumple de forma correcta. Desafortunadamente, en la sociedad colombiana imperan los intereses económicos y son las clases dominantes las que determinan como se administra la justicia en el país; la norma está amañada de forma tal que beneficie a los dueños del capital, sin importarles en lo más absoluto la suerte de las minorías que, generalmente, son grupos con escasos recursos para ejercer su defensa.

Este tipo de acciones ha llevado a que toda una comunidad tome la extrema decisión de quitarse la vida antes de perder lo que legítimamente les corresponde. Puede decirse, que afortunadamente han sabido expresar su deseo y han tocado las puertas de organismos internacionales que ejercieron la debida presión sobre el gobierno colombiano para que ese hecho nefasto, el suicidio colectivo, no se llevara a cabo. “Los U’wa no somos niños, tenemos una sola palabra, preferimos una muerte digna y entregar nuestros espíritus al Padre, que morir a manos de quienes nos explotan” (ONIC, 1997: 19).

El desarrollo de este proceso le ha brindado un reconocimiento a la biodiversidad y a la integridad de las comunidades indígenas, dándoles un enfoque político que ha logrado detener las actividades de exploración sísmica del Bloque Samoré. De otra parte, se le está asegurando a la comunidad la obligación que tiene el Estado de proteger sus derechos y garantías como consecuencia de su situación especial dentro del contexto nacional.

En ese sentido, a raíz de que este caso saliera a la luz pública internacional, los u’wa han mostrado –lo que también puede ser un útil precedente y estímulo para los integrantes de otras comunidades indígenas que en adelante se vean enfrentados a situaciones similares– que su territorio y cultura difícilmente podrán ser vulnerados, como consecuencia de posibles acciones violatorias de sus derechos ancestrales, si recurren con firmeza a los medios constitucionales y legales pertinentes y a la solidaridad nacional e internacional.

Por último, el resultado del proceso garantiza a las comunidades indígenas que se hallen en circunstancias de indefensión frente a decisiones administrativas, tal como ha sucedido en este conflicto, que en adelante su participación será efectiva dentro de los mecanismos legales existentes para tal efecto, y que tal participación no se limitará simplemente al momento en que se lleve a cabo la consulta previa, sino que su intervención se hará efectiva desde el inicio mismo de los estudios de impacto ambiental dentro de los cuales la presencia de la comunidad se hace totalmente indispensable, con el fin de que tales estudios no se queden en el puro aspecto técnico del proyecto que se pretende iniciar, sino que también tengan en cuenta los impactos socioculturales y económicos que afecten al grupo aborigen.

Para la normatividad y jurisprudencia ambientales, la importancia del caso de la comunidad indígena u'wa radica en que brinda bases suficientes para reglamentar el mecanismo de las consultas previas, de tal modo que esto no se convierta en una simple formalidad legal requerida para el otorgamiento de licencias ambientales, sino que, por el contrario, sea un efectivo mecanismo de intervención de las minorías étnicas en relación con las decisiones sobre aquellas actividades a realizar dentro de sus territorios, de tal modo que tengan la oportunidad de defender sus derechos y su integridad a todos los niveles.

Por otro lado, quedan aclarados los artículos 330 de la Constitución Política Nacional, el 76 de la ley 99 de 1993 y el 6 del Convenio de la OIT adoptado, a nivel nacional, por la ley 21 de 1991, en razón de que la consulta previa debe ser un mecanismo que debe brindar una efectiva y real participación a las comunidades indígenas y no como una simple formalidad que debe cumplirse antes de la decisión administrativa en relación con una licencia ambiental solicitada para la ejecución de proyectos dentro de territorios indígenas. De todos modos, en la sentencia SU-039 de 1997²⁴ de la Corte Constitucional, se brindan algunos parámetros para la realización del mecanismo de participación, concluyendo que en caso de que no se pueda llegar a una concertación entre las partes en él intervinientes, la autoridad ambiental se encuentre en condiciones de tomar una decisión que produzca el menor grado de consecuencias negativas para la comunidad indígena involucrada.

Otro aspecto importante para la normatividad es el que permite poner en un plano de igualdad los derechos y garantías de las comunidades indígenas en relación con el derecho de propiedad que tiene el Estado sobre el territorio nacional y su subsuelo, de tal modo que en virtud de este no se lleguen a violar los derechos constitucionales y legales de las comunidades. Además, es importante resaltar que no siempre prima el interés general sobre el particular, dado que en virtud de aquel no pueden ser violadas las garantías constitucionales de las minorías, y menos cuando estas se hallan en un estado de debilidad e indefensión manifiesta frente al contexto en que se desarrollan.

²⁴ Véase Anexo 5.

Finalmente, el caso estudiado hace notar a las autoridades ambientales que la participación de las comunidades indígenas debe ser prioritaria, y que su intervención debe hacerse notar desde el momento en que el solicitante de la licencia comienza a realizar los estudios de impacto ambiental, para así incluir en él todo un análisis de la realidad social y cultural del grupo afectado, de tal modo que al definir los posibles impactos del proyecto que se va a realizar se tengan en cuenta los efectos que este puede causar sobre la integridad de dichas minorías y las medidas adecuadas para mitigarlos y reducirlos al máximo.

Por lo tanto, es imprescindible que los estudios de impacto ambiental se realicen con la intervención efectiva de representantes de la comunidad indígena o de un experto en su cultura, que tenga conocimiento de sus tradiciones y su cosmovisión y pueda evaluar de forma imparcial los posibles efectos negativos que el proyecto podría causar sobre tal comunidad.

Como se comentó anteriormente, uno de los principales errores que se cometió a la hora de solicitar la licencia ambiental por parte de la OXY, fue que en los estudios de impacto ambiental no se contó con la colaboración de un científico social que lograra un acercamiento con la comunidad intervenida. Quizá, este hecho servirá como precedente para que en el futuro el vacío que pueda causar la ausencia de un profesional de este tipo no se produzca:

“Los expertos empezaron a aceptar que los pobres —especialmente los pobres de las zonas rurales— debían participar activamente en los programas si se pretendía alcanzar algún resultado positivo. De lo que se trataba era de ‘dar prioridad a la gente’. Los proyectos debían tener contenido social y ser culturalmente adecuados, para lo cual debían tomar en consideración e implicar a los beneficiarios directos de un modo sustancial. Estas nuevas preocupaciones crearon una demanda de antropólogos, sin precedentes” (Escobar, 1999: 47).

Foto 1: Claudia Cobaría con su familia, Gilberto Arlant y el autor



Foto 2: Claudia Cobaría

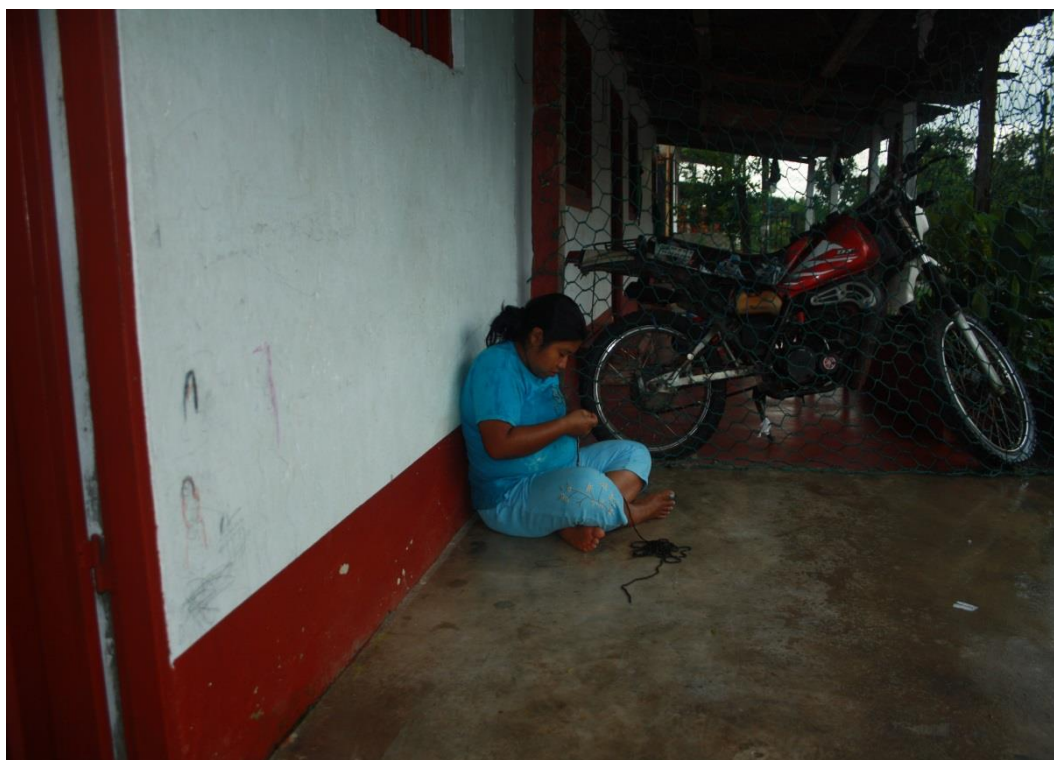


Foto 3: Verito Cobaría y el autor



Foto 4: Verito Cobaría, Gilberto Arlant y el autor



Foto 5: Verito Cobaría y el autor



Foto 6: Verito Cobaría



Foto 7: Verito Cobaría y el autor



Foto 8: Verito Cobaría y Gilberto Arlant en AsoU'wa



Foto 9: Madre u'wa y sus dos hijas



Foto 10: Indígena u'wa



Foto 11: Jóvenes indígenas y el autor



Foto 12: Madre u'wa y su hijo



Foto 13: Familia u'wa con el autor



Foto 14: Madre u'wa con su hijo



Foto 15: Indígena u'wa en el Resguardo Unido U'wa



Foto 16: Dos hermanas u'wa



Foto 17: Niño u'wa en una zona del Resguardo



Foto 18: Niña u'wa en una zona del Resguardo



6.4. Diagnóstico de proyectos actuales en territorio u'wa: Peligros para su integridad territorial y cultural

Las amenazas actuales contra la comunidad u'wa están ligadas a megaproyectos de infraestructura vial, actividades mineras, petroleras, de oleoductos y gaseoductos. En los párrafos siguientes se parte de un análisis sobre las repercusiones que genera el desarrollo de actividades de esta naturaleza en la zona, y a partir de este, se hace una identificación de los proyectos que se adelantan actualmente y también de aquellos sobre los cuales no existe un conocimiento claro sobre su ejecución o desarrollo futuro. A continuación se describen las labores que se llevan a cabo en el territorio y que se han reconocido como amenazas al grupo indígena, los actores que se relacionan y los riesgos que representan para la comunidad.

6.4.1. Explotación petrolera

La explotación de petróleo en Colombia es una actividad que se inició a comienzos del siglo XX, exactamente en la zona de Barrancabermeja:

“En 1905, el Gobierno Nacional suscribe un contrato con Roberto de Mares, mediante el cual le otorga en concesión las zonas petroleras de Barrancabermeja. En 1906 se inician las exploraciones, en 1916 se declara oficialmente el éxito de los trabajos en la Concesión de Mares y en 1917 se dispara el primer pozo petrolero” (Dureau y Flórez, 2000: 4).

Con el descubrimiento de los yacimientos de Caño Limón, en Arauca (1983) y Cusiana, en Casanare (1989), la zona de los Llanos orientales, específicamente el piedemonte llanero, cobró especial importancia. A raíz de estos nuevos hallazgos, la extracción petrolera, aunque ha sido una actividad lucrativa para el país, es el principal factor generador de amenazas tanto en el territorio u'wa como en las demás comunidades indígenas que habitan el territorio nacional. Los proyectos relacionados con la extracción de crudo han representado un conflicto permanente para los grupos nativos colombianos:

“La experiencia acumulada desde cuando comenzaron las explotaciones de petróleo en el país es que los pueblos indígenas hemos llevado la peor parte en todos los sentidos, hasta el punto de que para varios de nuestros pueblos la llegada de las compañías en los años 20 y 60 de este siglo XX significó enfrentarse a la realidad de la invasión, el despojo y el genocidio que otros

pueblos habían experimentado 400 años atrás. Pueblos como los Motilones Barí del Norte de Santander y los Kofán del Putumayo dan cuenta de este desastre” (ONIC, 1997: 1).

“Cuando entra la compañía Occidental y empieza a tener contactos con nosotros, en los años 89 o 90, aproximadamente, el pueblo U’wa comienza desde ahí ese rechazo, sabiendo que lo que ellos ofrecían no era gratis, sino que detrás de todo esto había un interés. Es así como desde el 94 nos hemos podido dar cuenta del interés que tenía la OXY que quería entrar a nuestro territorio y empezar a hacer las exploraciones sísmicas. De ahí en adelante empieza la campaña fuerte a nivel local, nacional e internacional, en defensa de la naturaleza y en defensa del pueblo U’wa como tal.

Es así como logramos obtener mucha solidaridad de diferentes grupos sociales y se lanza una gran campaña donde al final la OXY deja la concesión, la cual es tomada posteriormente por Ecopetrol. Ecopetrol continúa con sus acciones y en el 96 o 98 ellos manifiestan no encontrar petróleo sino gas en una finca que había sido adquirida por la Asociación y sin embargo la petrolera viola esa propiedad privada. Hasta la fecha, seguimos en el mismo pleito, se han interpuesto acciones legales y se están adelantando actualmente procesos jurídicos porque nosotros no tenemos la capacidad jurídica para dirimir ese tipo de casos” (Gilberto Cobaría, septiembre, 2012).

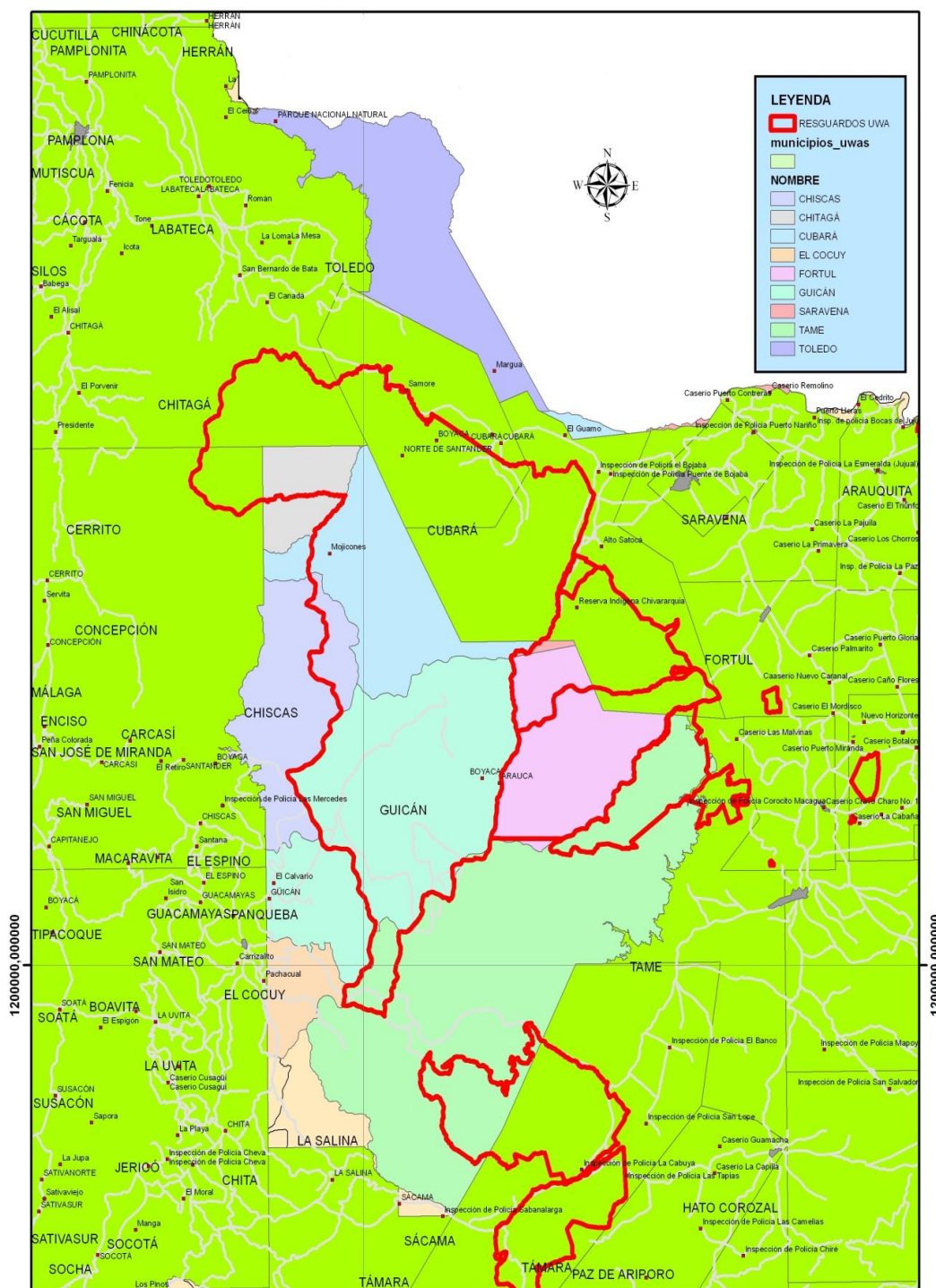
Una vez tenidos en cuenta estos breves antecedentes, a continuación se hace una revisión de la actividad petrolera en la región, con lo cual, el Mapa 8 empieza por describir las zonas habitadas por la comunidad u’wa que se enfrentan a la explotación de este producto. La información, que ha sido suministrada por Claudia Cobaría, corresponde a un documento inédito de la comunidad indígena, en el cual se exponen las amenazas que sufre el pueblo u’wa en el presente. Por último, se hace una revisión de los riesgos que implica para la colectividad la ejecución de estas labores en su territorio.

Ronda Petrolera 2010

La extracción petrolera en el territorio u’wa se concentra en la vereda Cedeño, donde se encuentran ubicados los pozos Gibraltar, explotados por Ecopetrol. Para el “Open Round 2010”, ronda abierta 2010, se encuentran dos bloques de la cuenca correspondiente a la cordillera occidental que cruzan parte del territorio del Resguardo; estos eran los bloques COR19 y COR20, los cuales no fueron asignados en dicha ronda, en la cual se concedieron 78 bloques en todo el país.

De estos 78 bloques se asignaron 6 a la zona, que aunque no pasan por los predios de la comunidad, se encuentran rodeando el Resguardo Unido U'wa; estos bloques son el COR24, LLA38, LLA39, LLA5, LLA6 y LLA11. La adjudicación de un séptimo bloque asignado, el LLA1, fue revocada posteriormente. Dentro de los bloques asignados se pueden identificar diferentes tipos de áreas, cuya diferenciación se realiza de acuerdo a las características geológicas y exploratorias del bloque, lo cual se corresponde con el tipo de contrato que se realice. Estas áreas son:

MAPA 8: BLOQUES PETROLEROS EN TERRITORIO U'WA



Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia

- “Tipo 1 o mini ronda de E&P²⁵ en seis regiones del país: Catatumbo, Valle Superior del Magdalena, Valle medio del Magdalena, Cordillera Oriental, Caguán y Putumayo; la mayor parte de ellas, exceptuando Caguán y Putumayo, son históricas regiones petroleras y por ende, contienen suficiente información geológica y sísmica.

- Tipo 2 o de E&P en cuencas con nueva prospectividad. Como su nombre lo indica se perfilan como zonas con un importante potencial petrolero, entre ellas están: Chocó (sub cuencas de los ríos San Juan y Atrato), Guajira, Llanos Orientales, Urabá, Tumaco, Sinú, zona de San Jacinto, y Valle inferior del Magdalena.

- Tipo 3 o Contrato de áreas especiales TEA. Su objetivo principal consiste en evaluar el potencial hidrocarbonífero de un área e identificar prospectos para celebrar un eventual contrato de E&P sobre una porción o la totalidad del área contratada. La oferta consiste en bloques en las siguientes regiones: Caguán – Putumayo, Chocó (sub cuencas de los ríos San Juan y Atrato), Guajira, Llanos Orientales, Urabá, Tumaco, Sinú (San Jacinto), Valle inferior del Magdalena, Cesar-Ranchería, Cauca (zona del río Patía), Los Cayos, Vaupés-Amazonas y Cordillera Oriental.

Empresas extranjeras con bloques asignados en territorio u’wa

Meta Petroleum Corp. Es una filial de Pacific. Rubiales, su origen es canadiense y su sede principal está ubicada en Toronto. El 26% pertenece a accionistas colombianos. Es el segundo mayor productor de gas y petróleo del país. En 2009 operaba 35 bloques petroleros, 7 en producción y 28 en exploración. En 2011 poseía 40 bloques con 8 en producción.

En Campo Rubiales y Campo Piriri, Meta Petroleum cuenta con 80 pozos productores de petróleo. Su participación en los oleoductos de los Llanos orientales, Guaduas- La Dorada, ODC, OAM y Promigas, es del 35% en una extensión de 235 km.

²⁵ Contrato E&P: Este modelo se aplica para los contratos que se suscriben como resultado de un proceso de asignación directa. En los casos de los procesos competitivos, el contrato que se suscribe es el que se publica y hace parte de los términos de referencia. El contratista desarrolla el programa de trabajo que hace parte de los compromisos del contrato, con autonomía y responsabilidad exclusiva.

De otra parte, es propietaria de Pacific Stratus y Kappa Energy Holdings que producen 250.000 barriles diarios. Dentro de sus objetivos está el exportar gas a Centroamérica, el Caribe y Japón y construir un puerto para llevar a cabo esta labor.

Vetra Energy. Multinacional de origen venezolano, con un alto porcentaje de capital español. Tiene como principales accionistas a Inveravante, corporación procedente de España y Vetra Energy Group.

Stetson Oil y Gas. Empresa proveniente de Canadá, su participación solo se lleva a cabo en el bloque petrolero LLA11.

Hocol Hocol S.A. Empresa colombiana adquirida en su totalidad por Ecopetrol a la firma francesa Maurel & Prom. Sus actividades se concentran en el departamento del Huila, en los campos San Francisco, Balcón, Palermo y la Hocha; y los Llanos orientales, con 6 contratos de asociación en el departamento del Casanare y las poblaciones de Estero, Garcero, Orocué, Corocora y Guarrojo. Posee también una participación del 36.12% en el Oleoducto Alto Magdalena y del 21.72% en el Oleoducto de Colombia. En 2008 llegó a ser la séptima compañía más grande del país y ocupó el tercer puesto en actividades exploratorias.

Ronda Petrolera 2012

La Ronda Petrolera 2012 se lanzó el 21 de febrero de 2012 y las adjudicaciones, como declaración de áreas desiertas, se realizaron en el mes de noviembre del mismo año. En esta ronda son 4 los bloques petroleros que pueden significar una amenaza para el territorio u'wa: 2 de ellos Tipo 1 que se encuentran en la cuenca de los Llanos (LLA51 y LLA70), y otros dos Tipo 3 que se encuentran en la cuenca de la cordillera oriental (COR45 y COR25).

Oleoducto Bicentenario. Este proyecto es desarrollado por la empresa Bicentenario de la cual son socios Ecopetrol, Pacific Rubiales, Petrominerales, Hocol, Grupo C&C, Energía Barbados, Rancho Hermoso S.A. Canacol Energy Ltd. y Vetra Exploración & Producción Colombia; cuatro de ellas, Ecopetrol, Pacific Rubiales, Hocol y Vetra Exploración, también poseen bloques petroleros asignados en territorio u'wa. El objetivo del Oleoducto Bicentenario es el de transportar hidrocarburos provenientes de la cuenca de los Llanos orientales en Casanare hasta el terminal

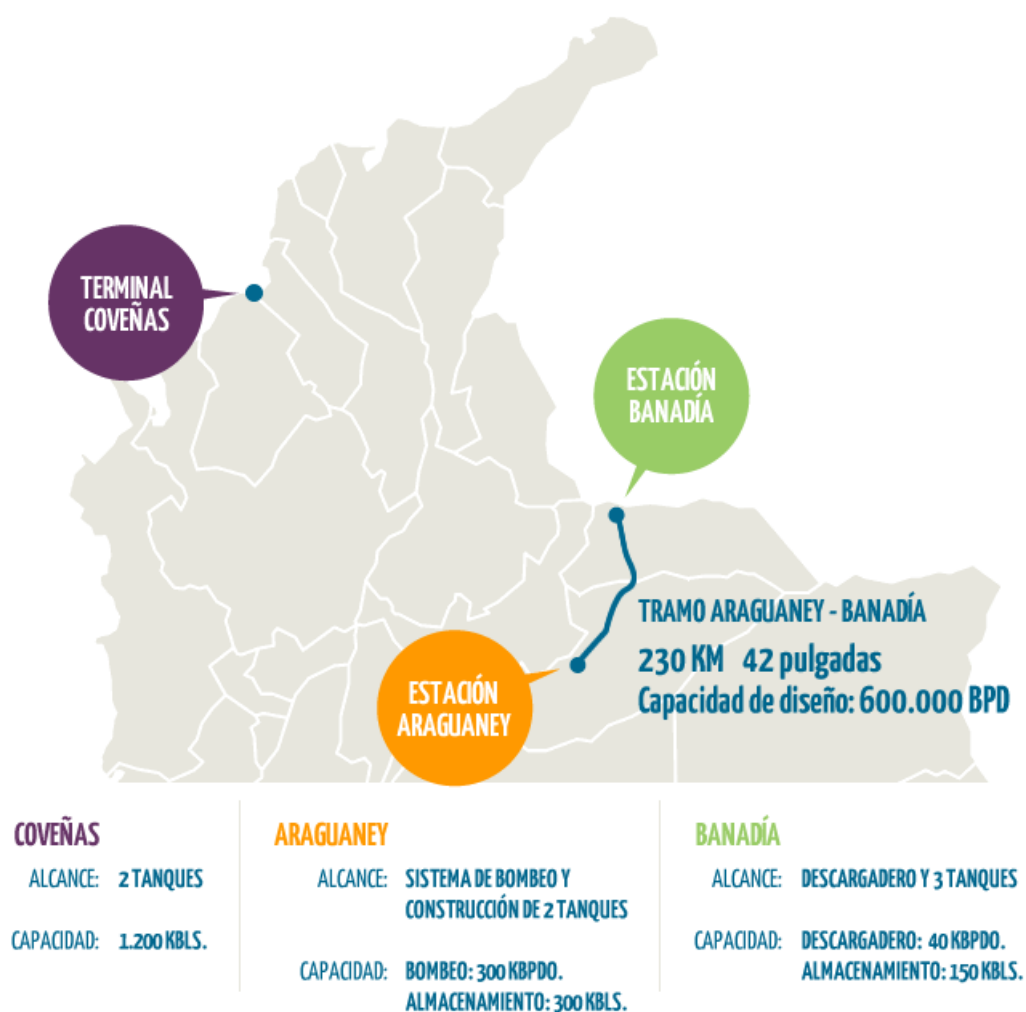
marítimo de Coveñas, en el departamento de Córdoba, al norte del país, con una longitud total aproximada de 960 Km, al tiempo que busca fortalecer la infraestructura de hidrocarburos en Colombia, con un costo estimado de US\$4.200 millones.

Este oleoducto se construirá en tres etapas diferentes: un primer tramo entre la estación de bombeo petrolera entre Araguaey, localizada en el departamento de Casanare y Banadía, situada en el departamento de Arauca, de aproximadamente 200 km, el cual ya posee licencia ambiental y se ha iniciado su construcción; un segundo tramo de 394 km que sale de la estación Banadía hasta Ayacucho, ubicada en el departamento del Cesar; y una tercera fase que sale de esta estación y llega a Coveñas. La idea es transportar el petróleo producido en Casanare por medio de un oleoducto, ya que actualmente se está haciendo a través de camiones y esto, según la empresa, aumenta los riesgos ambientales de forma considerable.

El II tramo de este oleoducto pasa a través de 4 departamentos, 17 municipios y aproximadamente 151 veredas, estando ubicadas 7 en el municipio de Cubará: Bojaba, Royota, La Esperanza, El Guamo, La Gaitana, Caña Guata y Puerto Nuevo. El tramo dos que es el más cercano al Resguardo, pasa por los departamentos de Arauca y Boyacá, la parte occidental de Norte de Santander y el municipio de La Gloria en Cesar.

En este momento el proyecto se encuentra en la etapa de investigación, actualmente se adelanta el estudio de impacto ambiental por parte de la empresa Consultoría Colombiana. Ya existe un trazado preliminar que sale de Saravena, pasando por Samoré, sube a Toledo llegando a Tibú y empata con Coveñas. En el sector de Banadía irá paralelo al oleoducto de Caño Limón Coveñas, y a la altura del sector de las playas de Bojaba se separan debido a la presencia del Resguardo Unido U'wa y la ampliación de éste, tratando de no afectar el territorio de la comunidad. Por medio de los mapas 9 y 10, se puede detallar la trayectoria que sigue el oleoducto Bicentenario por el territorio nacional.

MAPA 9: FASES OLEODUCTO BICENTENARIO



Fuente: Presentación de la empresa Bicentenario a Comunidad indígena U'wa

MAPA 10: OLEODUCTO BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ



Fuente: Presentación de la empresa Bicentenario a comunidad indígena U'wa

Foto 19: Tramo 1 de oleoducto que atraviesa territorio u'wa



Foto 20: Tramo 2 de oleoducto que atraviesa territorio u'wa



Riesgos que implica para la comunidad la extracción de hidrocarburos

Por lo general, cuando se trata un tema referente a la explotación de un determinado recurso natural, tiende a contemplarse solamente la situación económica; sin embargo, la repercusión social es mucho más grave de lo que puede parecer al desarrollarse una labor de esta naturaleza, y por lo cual, es un asunto de primer orden que debe ser tratado con especial atención:

“En lo que se refiere a la cuestión del petróleo, los estudios que hace el gobierno junto con las multinacionales sobre las exploraciones sísmicas, ellos dicen hacerlas fuera del Resguardo, pero aun haciéndolas fuera, nosotros somos conocedores del tema y sabemos que las consecuencias son negativas tanto social como culturalmente” (Gilberto Cobaría, septiembre, 2012).

Un problema que ha tenido que enfrentar, no solo la comunidad u'wa sino también el gobierno nacional, es la incursión de los grupos armados al margen de la ley y las diversas actividades delictivas que han llevado a cabo, traducidas principalmente en ataques terroristas a los oleoductos de la zona, secuestros extorsivos, asesinatos selectivos, reclutamiento de indígenas y civiles en sus filas y desarrollo de cultivos ilícitos.

En zonas como Arauca, donde la comunidad u'wa tiene parte de su Resguardo, cuando se descubrió el petróleo, es decir, hacia 1983, la población era reducida y su área geográfica muy grande. En 1986, cuando Caño Limón inició su producción, introdujo a la región que, en ese entonces, era muy pobre y atrasada, una bonanza estimada en US\$195 millones durante cinco años para el gobierno regional (Pearce, 2005: 40). Este elevado aporte económico desató la llegada de inmigrantes que, a su vez, fueron alentados por el INCORA, facilitándoles tierras para que las trabajaran. Con el tiempo, ese grupo se tornó cada vez más organizado y mantuvo el flujo de los recursos en la región.

La asignación de nuevos bloques petroleros sobre la zona del Resguardo Unido U'wa o sobre regiones aledañas, a parte de las anteriores, tiene otro tipo de repercusiones que van más allá del simple desarrollo de la actividad. La extracción del petróleo puede considerarse uno de los principales factores que potencian el desarrollo de otros proyectos de infraestructura ligados a la explotación de éste recurso, entre ellos, el desarrollo del oleoducto Bicentenario, la planta de gas de Gibraltar y el gasoducto

entre Gibraltar y Bucaramanga. El oleoducto Bicentenario que pretende transportar petróleo desde los pozos de Casanare a otras zonas del país, tiene dentro de sus inversores a cuatro empresas que también les fueron asignados bloques petroleros que pueden afectar al territorio u'wa:

“...la naturaleza no renovable de los recursos del subsuelo y su condición de negocio con participación mayoritaria de empresas foráneas, hace que la política minera colombiana esté llena de acciones contrarias no sólo a los intereses de las comunidades sino de la población en general. Antes de que entrara en vigencia la Ley 685 de 2001 (actual Código de Minas), existían condiciones jurídicas que representaban al país una mayor participación en la renta de los recursos naturales. Pero la legislación vigente, modificada durante el gobierno de Andrés Pastrana con la asesoría del BM, plantea un tremendo retroceso jurídico” (Idárraga *et al.*, 2010: 31-32).

Ello es muestra de que la extracción de petróleo y gas continuará en sus tierras. Los pozos de Gibraltar, explotados desde la década de los 90, hoy continúan representando una de las amenazas más significativas para la comunidad y su territorio, siendo la extracción de estos productos uno de los hechos que la comunidad denuncia como los factores más preocupantes relativos al mantenimiento del equilibrio natural. La permanencia de dicha amenaza durante 20 años y su proyección a 15 años más de explotación de gas indica que la asignación de nuevos bloques petroleros es seguramente la amenaza a más largo plazo sobre el territorio u'wa.

La diferencia sustancial de visiones y fines últimos del territorio y de los recursos naturales, entre los u'wa y las autoridades nacionales y las transnacionales, ha sido uno de los motivos para la militarización del territorio u'wa, lo que a su vez produce un riesgo constante frente al conflicto armado. Todo esto ha generado casos de violación de derechos humanos contra integrantes de la comunidad, permaneciendo algunos de ellos en la impunidad:

“Aquí hay que tener claro que a partir de los ochenta es cuando empiezan a surgir los diferentes grupos armados en la zona y en los noventa es cuando más se agudiza la situación. Ya en el 95 y 2000 es cuando se nota mayor influencia y penetración de la guerrilla, paramilitares y fuerzas armadas.

De qué manera nos afecta, pues cuando se atiende a la fuerza pública, de la misma manera hay que atender a la guerrilla y viceversa. Como se dice, ellos tiran la pelota de aquí para allá y ahí es cuando dicen, cómo a ellos sí y cómo a nosotros no. Pero ya ha habido varias maneras por las cuales han querido

penetrar en nuestro territorio, y nosotros de una u otra forma también tenemos nuestras propias costumbres y nuestra organización interna, y son las autoridades tradicionales, por medio del cabildo mayor y la asociación del mismo, que nos ha tocado ponerle frente a la situación pero de una forma pacífica, con respeto y haciéndoles ver a todos que nuestro territorio no es una zona de violencia, es un territorio sagrado y donde se destaca la parte de la espiritualidad; y en ese sentido, podemos decir que por medio del diálogo hemos logrado cambiar un poco la situación de forma positiva” (Gilberto Cobaría, septiembre, 2012).

“Este piedemonte llanero ha sido siempre una zona abandonada, muy apartada y no era conocida hasta hace relativamente poco tiempo. No se sabía si pertenecía a Boyacá, a Santander o a Norte de Santander. Todo esto ha venido a conocerse cuando Ecopetrol ha descubierto que aquí había petróleo y empezó a hacer estudios sísmicos. Han ido hasta Arauca que se encuentra a cuatro horas de distancia de Cubará y eso ha hecho que se despertaran los grupos armados, específicamente el ELN y la fuerza pública quienes han andado por la línea del Resguardo invadiendo y pasando por nuestro territorio, realizando incursiones en él. Por eso, cuando ha habido protestas contra Ecopetrol, a nosotros nos han señalado también y nos han dicho que nuestros territorios son zonas de paso y que los distintos grupos se refugian allí” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Se puede notar, que fuera del peligro que para los u’wa conlleva extraer el petróleo del subsuelo, dado que así se rompe el equilibrio natural que hay sobre la tierra, el desarrollo de esta actividad ha traído a la comunidad el fin de su tranquilidad en otros sentidos: por un lado, al ser una zona tan rica en recursos naturales, los diferentes actores intervinientes en esta situación la codician, ya sea para explotar sus riquezas o para emprender allí nuevas empresas, como el cultivo y procesamiento de drogas alucinógenas. De otra parte, al generarse nuevas fuentes de empleo, la difícil situación del país permite que la mano de obra que se contrate se haga a bajos costos y, por lo tanto, sean los sectores más bajos de la sociedad los que acudan a estas fuentes de ingreso, obligando a las empresas contratadoras a reforzar la seguridad en las áreas de trabajo:

“La acumulación de riquezas, la concentración de la tierra, los cambios en los usos del suelo y la mano de obra barata –o mejor, abaratada por el gobierno-, han consolidado un escenario de saqueo que se asegura con la militarización desproporcionada, la cual se ejecuta no sólo con el recurso de las fuerzas armadas regulares sino también de compañías privadas de seguridad y de grupos paramilitares” (Idárraga *et al.*, 2010: 30).

6.4.2. Explotación de gas

La explotación de gas se ha convertido en una de las principales actividades que violan el territorio u'wa. Al desarrollar esta práctica, los indígenas consideran que se está cometiendo la misma transgresión que cuando se explota el petróleo. Entre los factores que más los afectan está la militarización y la incursión de grupos armados al margen de la ley al interior del Resguardo:

“...habría que añadir los nexos de algunas empresas con grupos armados a los que financian con el fin de asegurar sus intereses sobre el territorio y minar las resistencias a los proyectos y que serían responsables de crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, masacres y desplazamientos masivos. Según un informe del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas (ONU, 2009), los pueblos originarios consideran a las industrias extractivas en la actualidad, como la principal amenaza a su supervivencia, según el documento, las industrias mineras, petroleras y de gas tienen un impacto negativo sobre estos pueblos y sus territorios y son la causa fundamental de violaciones de derechos como la autodeterminación, el derecho a la tierra/territorio y los recursos naturales, la salud, la cultura, la soberanía alimentaria, el acceso al agua y otros asociados al desplazamiento forzado, las masacres y la militarización de sus territorios” (Duro, 2014: 10).

Sin embargo, al exponer sus quejas ante el organismo de Estado competente, han recibido como respuesta la negativa terminante del abandono de las fuerzas armadas de la zona, alegando que, incluso se está velando por la seguridad de la comunidad:

“El Ministerio de Defensa puntualizó que las fuerzas militares tienen jurisdicción en todo el territorio colombiano y por tanto las tropas no pueden ser retiradas de territorio indígena. Adicionalmente, informó que el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas no es absoluto, por lo que el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas tiene límites. Agrega que la institución ha implementado una política específica de protección a las comunidades indígenas, la cual consta en la directiva permanente Núm. 1630, Política sectorial de reconocimiento, prevención y protección a las comunidades de los pueblos indígenas.”²⁶

La explotación minera, en el actual Plan Nacional de Desarrollo (2010 – 2014) “Prosperidad para todos”, según el lenguaje oficial, es considerada una de las

²⁶ Sentencia T-129/11. Pág. 101.

“locomotoras” promotoras del desarrollo económico nacional. Pero a la vez, ha sido la única estrategia que ha funcionado plenamente, no obstante los pronunciamientos en su contra hechos por diferentes sectores sociales, de científicos y de grupos de ecologistas. En la economía global, el agotamiento de los recursos naturales y las ansias de ganancias de las empresas transnacionales, impulsa a su explotación por encima de consideraciones sociales, ecológicas, etnográficas y de cualquier otro orden.

Los u’wa, a partir de las experiencias sufridas por otras comunidades del país y por la suya propia en relación con la explotación del petróleo, saben claramente los perjuicios que esta actividad produce dentro de un grupo indígena:

“Afirmar como lo hace la compañía, que el impacto social y ambiental de sus explotaciones sería mínimo, es simplemente ignorancia. En este caso es necesario analizar no sólo la explotación directa, que de hecho acabaría con nuestra cultura, sino también a todos los hechos que la acompañan (Colonización, migración de población, inflación, violencia, enfermedades, etc.); todo esto por experiencia propia lo hemos vivido los U’wa y todos los indígenas del país” (Werjayas, Cabildos, Cabildo Mayor, Equipo de Etnoeducación, 1996: 195).

La extracción de gas en los pozos de Gibraltar se realiza con la finalidad de transportarlo hasta Bucaramanga; de esta forma, son tres las empresas que están vinculadas directamente a dicha extracción: Ecopetrol se encarga de producirlo; Unión Temporal Gas Gibraltar se encarga de operar la planta de Gas Gibraltar, y TransOriente transporta el producto a través del gasoducto Gibraltar-Bucaramanga:

“Supuestamente la OXY se fue de la zona pero le ha vendido las acciones a Ecopetrol que está sacando el gas de los pozos de Gibraltar para llevarlo a TransOriente. Ahora se dice que hay concesiones y licencias para explotar, pero nosotros no tenemos la certeza de eso, pero sí sabemos que están invadiendo nuestros territorios” (Claudia Cobaría, Septiembre, 2012).

La planta de gas de Gibraltar se construyó con la finalidad de explotar los pozos Gibraltar 1, 2 y 3, de tal manera que el proyecto de extracción del producto cuenta con dos fases, la primera correspondiente con la construcción de la planta que finalizó el 26 de noviembre de 2010 y su segunda fase que corresponde a 15 años de operación y mantenimiento de la planta que comenzó el 14 de Octubre de 2011. Sin embargo, la proyección de explotación de gas en su máxima capacidad es de 30 millones de pies cúbicos de gas/día en 21 años.

En esta planta se producen 3 tipos de gas: gas natural apto para ser transportado y consumido. Condensado y derivado del petróleo, al ser combinado con el crudo mejora su calidad y agua de tipo industrial que se genera en mínimas cantidades, la cual es almacenada y transportada posteriormente para su tratamiento. Si la planta llega a su nivel máximo de 30 millones de pies cúbicos de gas/día produce 680 barriles de condensado/día.

La comercialización de gas es, en últimas, lo que determina el nivel de explotación diario del mismo, siendo actualmente de 14 millones de pies cúbicos por día en promedio, ello implica que se genera menos condensado y así mismo menos aguas industriales. Pero además de ello, el nivel de explotación también determina la quema de gas; si la planta llega a su capacidad máxima no es necesario quemar gas, por tal razón, de acuerdo al nivel actual de explotación se queman en promedio 200 mil pies cúbicos de gas por día.

Quema de gas en Gibraltar

La quema de gas producida por la planta de gas de Gibraltar en su máxima capacidad de operación produciría 13 mil toneladas anuales de CO₂, de tal manera que existe el proyecto MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio, que a través del cambio de tecnología a una denominada Twister Supersonic Separator, que solo se usa en seis países, posibilita la reducción de emisiones de carbono por eficiencia energética.

El proyecto MDL es conocido como “Mejora de la eficiencia energética mediante la implantación de la tecnología actual más eficiente en una nueva Planta de Gas en Gibraltar”, y puede llegar a tratar 30 millones de pies cúbicos de gas, con lo cual se contempla un ahorro de combustible estimado en 11.800 toneladas de combustible al año, logrando una reducción de 30.760 toneladas de CO₂ al año.

Gasoducto

El gasoducto Gibraltar–Bucaramanga construido y operado por la empresa TransOriente, tiene 174 Km de longitud y una inversión de 45 millones de dólares. Atraviesa parte del territorio ancestral de los u’wa pero no alcanza a afectar la zona de resguardos, y por lo tanto, de acuerdo con el concepto del Ministerio del Interior, no es necesario llevar a cabo una consulta previa con la comunidad. Se considera que el

gasoducto posee un alto nivel de riesgo debido a que no está construido sobre una zona plana sino sobre un área con topografía escarpada que puede ser susceptible a movimientos telúricos o al invierno.

El gasoducto consta de diferentes tramos: el tramo No.1, Gibraltar–Alto de la Virgen, con una extensión de 31.9 Km, se consideraba que afectaba al Resguardo a la altura de la vereda Santa María del municipio de Toledo, sin embargo, para evitar su paso por el sector, fue desviado su trayecto. El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, exigió a la empresa que debía sensibilizar a sus trabajadores en el sentido de que el acceso al territorio u’wa era restringido. Frente a ello el MAVDT, a través de la Sentencia T-129/11, manifiesta:

“...en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control adelantó visita de seguimiento ambiental al proyecto los días del 28 de febrero al 4 de marzo de 2011, durante la visita la empresa informó que se acogió el código de conducta de la empresa Ecopetrol respecto a la comunidad indígena U’wa presentes en la zona de Gibraltar y que todo el personal vinculado de las zonas aledañas al Resguardo fueron capacitados sobre dicho protocolo”²⁷

A este gasoducto se le otorga licencia ambiental a través de la resolución 0602 del 27 de marzo de 2009 en la cual consta la siguiente descripción del proyecto:

Objetivo: Construcción del “Gasoducto Gibraltar-Bucaramanga” en tubería de 12”, con una longitud aproximada de 172 km, con el fin de transportar el gas que se produce en el campo Gibraltar hasta la estación El Palenque, ubicada en la zona industrial de Chimitá en el municipio de Bucaramanga.

Localización: El Gasoducto Gibraltar–Bucaramanga pasará por 2 corregimientos y 54 veredas de los municipios de Toledo, Labateca, Chitagá y Silos, pertenecientes al departamento de Norte de Santander; y los municipios de

²⁷Sentencia T-129/11.

La referida sentencia se ha elaborado a partir de los principios fundamentales de la Carta Política contemplados en el artículo séptimo, referente a la protección de minorías raciales y culturales, el cual establece que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. De ese artículo se extraen elementos esenciales como el reconocimiento estatal y la protección a la diversidad étnica y racial. Así, la Carta Política, sobre la base de los principios de dignidad humana y pluralismo, reconoce un estatus especial de protección con derechos y prerrogativas específicas a las comunidades étnicas para que bajo sus usos y costumbres hagan parte de la nación. De otra parte, la diversidad cultural está relacionada con las representaciones de vida y concepciones del mundo que la mayoría de las veces no son sincrónicas con las costumbres dominantes o el arquetipo mayoritario en la organización política, social, económica, productiva o incluso de religión, raza, lengua, etc., lo cual refuerza la necesidad de protección del Estado sobre la base de la protección a la multiculturalidad y a las minorías.

Para leer la sentencia completa, remitirse al Anexo 2.

Tona, Piedecuesta, Floridablanca, Girón y Bucaramanga del departamento de Santander.

Empresa comercializadora del producto: Sociedad Transportadora de Gas del Oriente S.A. E.S.P. Se dedica al transporte de gas combustible mediante la construcción, operación y mantenimiento de gasoductos troncales y ramales. Posee 5 accionistas, cada uno con una participación del 20%.

Otras empresas que participan en el proyecto: Promigas S.A. E.S.P, Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P, Corporación Financiera Colombiana S.A., Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y Terpel Bucaramanga S.A.²⁸

6.4.3. Explotación minera

Una de las actividades económicas, a nivel mundial, que más destrucción puede producir tanto al planeta como a los ámbitos socio-ambientales de las comunidades donde se desarrolla es la extracción de minerales y recursos energéticos. Entre los principales impactos ambientales de la actividad minera se cuenta la construcción de infraestructuras y minas necesarias para el emprendimiento; la disminución de los bosques producto de la deforestación, que puede llegar a eliminar la pesca, la caza y la producción de plantas comestibles y de uso medicinal y cultural; efecto que también puede ser producido por el uso indiscriminado de sustancias tóxicas como el cianuro, arsénico, mercurio o plomo, que elevan las tasas de contaminación de suelos, agua y aire y que afectan a la población animal, humana y vegetal (Duro, 2014: 9).

Desde que se inició la minería en Colombia, esta actividad ha sido defendida por el Estado, el sector privado y las empresas transnacionales, a través de un discurso que ha girado en torno a la modernidad. A partir de esta perspectiva, el ejercicio de la minería a gran escala, se ha presentado como una labor que cumple un papel civilizatorio dentro de la sociedad que la desarrolla, elevando el nivel de vida de sus habitantes e introduciéndolos en el mundo capitalista. Sin embargo, lejos de traer riqueza, desarrollo y bienestar a las zonas donde se ejerce, la extracción de recursos minerales ha traído consigo miseria y una enorme destrucción socio-ambiental. “La extracción minera en Colombia se inscribe en un contexto geopolítico bastante

²⁸ Para ampliar esta información, remítase a la página web: <http://www.transoriente.com.co>

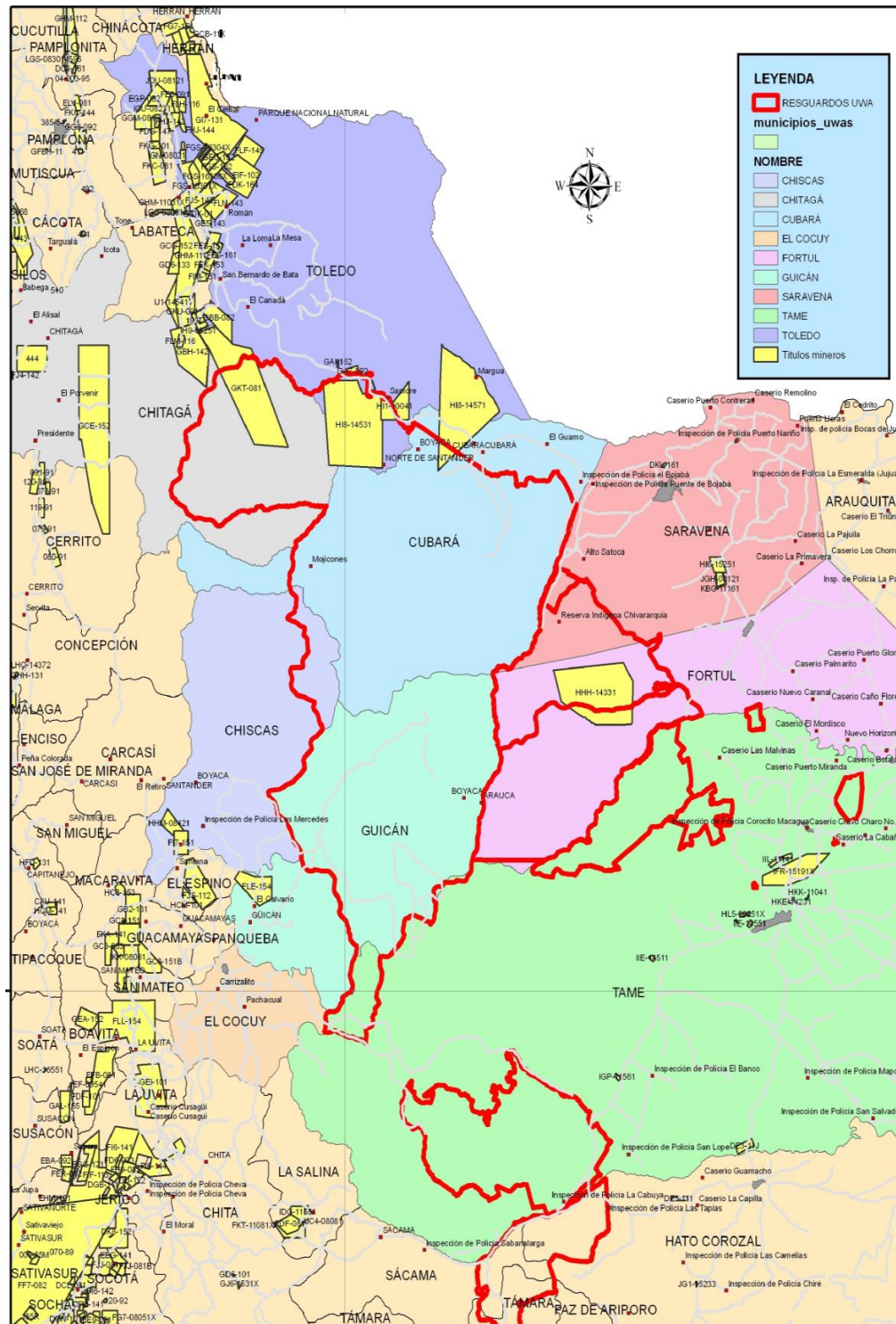
complejo, subordinado a un modelo económico que aumenta las brechas de inequidad e injusticia a nivel nacional y global” (Idárraga *et al.*, 2010: 26).

A pesar de llevar consigo todos estos factores negativos, las comunidades indígenas han logrado fusionar de forma armónica su identidad cultural con el territorio donde se encuentran asentados; el medio ambiente y la naturaleza, sus principales fuentes de vida, son para ellos elementos sagrados y su valor se ha reconocido en la Constitución Política, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, las empresas multinacionales, a través de un discurso que ha vendido la idea de llevar el desarrollo a los países del Tercer Mundo, se han valido de otros organismos como la OMC y los TLC para vulnerar la soberanía y los derechos de estos pueblos, además de las alianzas y las prácticas ilegales que realizan constantemente para adquirir los títulos mineros y cambiar la legislación existente con el fin de reglamentar nuevos usos del suelo (Idárraga *et al.*, 2010: 49).

A continuación se presenta a través del Mapa 11, el desarrollo de esta actividad en el área que habita la comunidad u’wa. Los distritos mineros del norte de Boyacá y Pamplona fueron constituidos en 2008. Existen títulos y solicitudes para extraer carbón y materiales de construcción por parte de particulares y una empresa localizada dentro del territorio que comprende el Resguardo Unido U’wa. Sin embargo, actualmente no se registra una actividad minera constante dentro de los predios indígenas:

“No solo los U’wa, las demás culturas indígenas del país deben también mirar de donde vienen los mineros y las personas que van a cada territorio a explotar los recursos naturales. Ellos son los que realmente nos perjudican y tanto las leyes como los valores culturales que tenemos no nos están sirviendo de nada. El Resguardo es un sitio que tenemos que cuidar y cuando se habla de salvaguardar el territorio se hace referencia a salvar y guardar lo que nos pertenece” (Verito Cobaría, Septiembre, 2012).

MAPA 11: TÍTULOS MINEROS EN TERRITORIO U'WA



Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia

Proyectos mineros en territorio del Resguardo Unido U'wa

Como se acaba de mencionar, sobre los títulos que se encuentran dentro del Resguardo no se evidencia una actividad minera constante. Sin embargo, es importante resaltar que en su mayoría son personas naturales las que los poseen, existiendo solo una empresa en uno de los títulos y dos empresas con solicitudes, lo cual puede indicar, que esta actividad se puede estar llevando a cabo en menor escala.

Como no es claramente perceptible la dimensión de la actividad minera que se está desarrollando en el momento, se presume que por ahora no se va a presentar una explotación de grandes dimensiones. De acuerdo al seguimiento que se le ha hecho a esta práctica en la zona, se aclara que hasta el 2010, de acuerdo con el informe “Minería de Hecho en Colombia”, realizado por la Defensoría del Pueblo, no se reportaron actividades de esta naturaleza en los municipios de Toledo y Chitagá, en los cuales se concentran los títulos y solicitudes mineras que pueden afectar el territorio u'wa.

En total son 19 las solicitudes que se cruzan con el Parque Nacional Natural El Cocuy en un área de 512.5 km²: 7 títulos que interfieren en el Resguardo Unido U'wa en un área de 149.2 km² y 12 solicitudes con un área de 179.9 km², lo que equivale a un 6.8% del territorio titulado y 8.2% del territorio solicitado, con lo cual se estaría pretendiendo destinar un 15% del territorio a la actividad minera²⁹. Los criterios que se han tenido en cuenta para la identificación de un distrito minero son:

1. El tipo de material y mineral y el volumen de producción.
2. El grado de concentración minera frente a zonas relativamente homogéneas y uniformes.
3. La tradición minera de las comunidades locales y regionales.

Distritos mineros

El territorio u'wa colinda con dos regiones que actualmente corresponden a dos distritos mineros: una de ellas se ubica al nororiente del Resguardo en el departamento

²⁹ Información suministrada por Claudia Cobaría.

de Norte de Santander que corresponde al Distrito Minero de Pamplona; la otra, al sur del Resguardo en el departamento de Boyacá, que corresponde al Distrito Minero de Norte de Boyacá. En estas regiones se puede identificar un alto número de títulos mineros.

Sin embargo los distritos mineros corresponden, no únicamente a la región en la cual se ubican los títulos mineros, sino que corresponden a un grupo de municipios en los que se concentra la actividad minera, razón por la cual, aunque no existe superposición de gran cantidad de estos títulos con el territorio u'wa, sí existe una trasposición de los distritos mineros con el territorio de Resguardo:

“...nuestra protesta no es solo por el petróleo, sino por los demás recursos mineros que hay dentro del Resguardo, porque para nosotros, cada mineral de estos, tiene un significado de complemento para el mantenimiento del equilibrio” (Gilberto Cobaría, Septiembre, 2012).

Distrito Minero Pamplona. Ubicación: Municipios de Chitagá, Toledo, Silos, Mutiscua, Pamplona, Chinacota, Cucutilla, Bochalema, Qurania y Cachira.

Área: 5.216 km.

Producción: Los minerales con mayor nivel de explotación en el territorio son el carbón, roca fosfórica y calizas, sin desconocer con ello que exista la presencia de otros de menor proporción. El Distrito Minero de Pamplona, en conjunto, con el Distrito Minero de Cúcuta ocupan el tercer lugar en exportaciones de carbón del país, luego de Barrancas y Jagua de Ibirico; también los productos cerámicos y otros manufacturados de la arcilla están bien posicionados en el mercado nacional e internacional.

Infraestructura: La mayor cantidad de carbón de estos dos distritos se exporta por Venezuela; también, se desarrolla la vía transversal del Catatumbo, Tibú-Convención-Ayacucho-La Mata, por lo cual existe la necesidad de transportar el material hacia un puerto colombiano.

Distrito Minero Norte Boyacá. Ubicación: 23 Municipios de las provincias de Gutiérrez, Norte, Valderrama y la Libertad. Corresponden a Chiscas, Güicán, El Espino, Panqueba, El Cocuy, San Mateo, Cuvarachia, Tipacoque, Boavita, Soata, La Uvita,

Susacón, Jericó, Chita, Sativa norte, Sativa Sur, Socotá, Paz del Río, Socha, Beteitiva, Tasco, Pisba y Paya.

Área: 5.879 km.

Producción: Dentro de la zona que cubre el Distrito Minero de Norte de Boyacá se encuentran grandes yacimientos minerales de carbón térmico, carbón metalúrgico, antracitas, hierro, arenas y material de construcción:

“El potencial de carbón metalúrgico del Distrito Minero de Norte de Boyacá de acuerdo a datos del INGEOMINAS (2004), es de 80 millones de toneladas de reservas medidas, 303 millones de toneladas de reservas indicadas y 302 millones de toneladas de reservas inferidas.

En la actualidad los municipios en los cuales se encuentran explotaciones de carbón son: Beteitiva, Boavita, Chiscas, Chita, El Espino, Jericó, La Uvita, San Mateo, Sativa Norte, Sativa Sur, Socha, Socotá, Tasco” (Incoplan S.A., 2010: 79).

Los carbones que yacen en el Distrito Minero presentan las siguientes clasificaciones:

- Carbones altos volátiles (26-32%)
- Carbones medios volátiles (22-26%)
- Carbones bajos volátiles (17-22%)
- Con humedades entre 4 y 5%
- Azufre entre 1 y 1,2%
- Índices de hinchamiento mayores de 3,5
- Cenizas: máximo 10%

La distancia al puerto es de 1.000 kilómetros, la producción actual de la zona está en el orden de unas 80.000 toneladas mensuales (Incoplan S.A., 2010: 80).

Infraestructura: En 2008, en Bucaramanga se constituyó la Corporación para el Desarrollo del Ferrocarril Carare que pretende transportar minerales del nororiente del país.

Daños que le ocasiona a la comunidad u'wa el desarrollo de esta actividad

Es evidente el efecto negativo que tiene el desarrollo de esta actividad al interior de la comunidad u'wa, sin embargo, ellos que se han proclamado defensores incansables de la naturaleza, ven con enorme preocupación la utilización masiva de agua requerida en la labor extractiva, que en ocasiones puede limitar el acceso a este producto por parte de las poblaciones de la zona, imposibilitando otras actividades como la agricultura y la ganadería. El impacto no solo se refleja en su territorio y los recursos que éste posee, sino que también afecta a estas colectividades desde el punto de vista físico y social:

“Los impactos negativos en la salud humana, en estrecha correlación con el daño ambiental, refieren sobre todo al aumento de enfermedades respiratorias y dérmicas en las áreas de afectación, sin embargo el caso más preocupante y en ascenso, son los reportes de la aparición de cánceres en áreas de extracción sobre todo petrolera y carbonífera. Los efectos socio-culturales sobre las comunidades han sido también ampliamente reportados, el empobrecimiento masivo, con la disminución de la producción local de alimentos identitarios, la desnutrición, con la pérdida de la soberanía alimentaria, la monetarización de las economías y la desintegración social, la pérdida de identidad cultural y la deslegitimación de las autoridades tradicionales, el aumento de la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y la drogadicción son consecuencias reincidentes” (Duro, 2014: 9-10).

El ejercicio de la extracción minera ha condenado a los países del sur a ser productores de estas materias, dado que en ellos la actividad se desarrolla a bajo costo. Por lo general, las relaciones laborales que sostienen las compañías transnacionales en el territorio donde se desarrolla la actividad económica, son precarias. Las comunidades locales que son contratadas, se caracterizan por ser mano de obra no calificada, lo cual los obliga a ofrecer sus servicios a cambio de una baja remuneración siendo, de paso, sometidos a sistemas de dependencia como las cooperativas de trabajo asociado o los contratos por servicios, que facilitan la subcontratación y transgreden la dignidad laboral y el derecho a la seguridad social. Es de esta forma como la población acaba perdiendo su autonomía económica y queda sometida, de forma total, a las reglas laborales impuestas por la empresa contratadora.

Colombia, por ser un país con una riqueza natural tan amplia y variada, ha permitido que esta labor se lleve a cabo tanto de forma legal como ilegal, haciendo que

la inversión extranjera siempre tenga los ojos puestos en el territorio nacional, a pesar de haber un alto índice de violencia y una guerra “declarada”. La constante inversión por parte de las empresas extranjeras, también se debe a que existe en el país una solidez macroeconómica, producto de otras actividades como el narcotráfico, la ganadería extensiva y los cultivos de amapola, entre otros que, sin duda, es un elemento atractivo para que se siga invirtiendo allí.

El Estado no ha tenido el control suficiente sobre esta práctica, lo cual ha generado la corrupción manifestada de diferentes formas: apropiación del patrimonio público, concentración de la labor en pocas familias o pequeños grupos, sobornos, crímenes para extender el poder sobre el negocio y violación a los derechos humanos. Realmente, la actitud del Estado, más que manifestar una falta de control, ha mostrado un comportamiento servil y subordinado frente al sector privado nacional y las empresas transnacionales que, en últimas, han terminado dirigiendo el sistema legal de la actividad, por medio de la asociación con funcionarios estatales incapaces de establecer en este campo la soberanía de la nación, ya que casi siempre han trabajado en el sector privado.

Las consecuencias socio-ambientales que genera la minería están estrechamente relacionadas con los aspectos económicos y políticos de las regiones donde se desarrollan. El discurso capitalista con el cual se ha intentado establecer esta práctica, ha dado como resultado una serie de hechos violentos que afectan directamente a las comunidades locales e indiscutiblemente repercute en las futuras generaciones:

“La influencia decisiva que han tenido las empresas transnacionales en múltiples regiones de Colombia ha potenciado la violencia, pues inevitablemente se convierten en protagonistas de la guerra interna que ha tenido como eje histórico la disputa de recursos y territorios. De esta manera, los grandes proyectos mineros han generado cambios en los usos y en la tenencia de la tierra. Para las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, la vida es imposible sin el territorio, entendido no sólo como un espacio, sino como un lugar con todos sus atributos simbólicos y materiales” (Idárraga *et al.*, 2010: 26).

Algunas administraciones estatales como los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, han cambiado el panorama que tradicionalmente se ha visto en la minería desde sus inicios. Como bien se ha dicho, ésta ha estado ligada a la tenencia de la tierra y a la aplicación de la violencia con el fin de mantener el control de la

actividad. La política guerrerista de ese gobierno y las dinámicas de la guerra exageraron la presencia militar del Estado, beneficiando principalmente a los terratenientes y a las empresas privadas, nacionales y transnacionales, perjudicando gravemente las políticas sociales:

“...la mayoría de las operaciones militares que ha adelantado el ejército nacional en diversas regiones del país, ha estado articulada con el fortalecimiento de grupos paramilitares en esas mismas regiones donde el Estado parece haber logrado el control. La persuasión coercitiva y militar usada por las empresas y el Estado hace que los procesos de consulta previa que se debe hacer a las comunidades locales sobre los proyectos extractivos, resulten ser imposiciones que buscan que éstas ayuden a visualizar el territorio para organizar los proyectos pero no para permitirles decidir si están de acuerdo o no con la ejecución de los mismos” (Idárraga *et al.*, 2010: 28).

De otra parte, en los últimos años se han intentado hacer ciertas reformas a la Constitución de 1991, con el fin de establecer de forma legal un Estado guerrerista a favor del sector privado e impedir que se logre en el país un desarrollo integral y sostenible. “Las legislaciones son fiel testimonio de la mala venta que ha hecho el país de sus recursos no renovables” (Idárraga *et al.*, 2010: 31).

Las modificaciones a la legislación minera no están marcadas por directrices en beneficio de la nación, como se supone debería ser; el poder económico y político del modelo neoliberal que sustenta el capital transnacional, ha permitido que sean instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, BM, o la Organización Mundial del Comercio, OMC, las que subordinen al Estado colombiano, obligándolo a promulgar medidas de regulación que favorezcan la competencia de precios, facilitando así la inversión extranjera y yendo en contra de los intereses de la región y sus habitantes.

El código minero por el cual se rige la actividad actualmente, ha provocado la desaparición de la minería a pequeña escala de la cual dependían miles de familias en el país. Al preferirse en Colombia la minería a gran escala y la inversión extranjera, se han creado mecanismos que permiten adjudicarle a las grandes empresas terrenos y yacimientos, y renovar los contratos hasta por veinticinco años más, lo cual le cierra las puertas, de forma definitiva, a los pequeños mineros, alegando que son ellos quienes, con sus prácticas primitivas, hacen más daño al medio ambiente.

A partir de los numerosos estudios que han surgido en las últimas décadas, a raíz de la necesidad de proteger el planeta y conservar los recursos naturales, se ha podido comprobar que el desarrollo de la minería a gran escala es la que mayor impacto negativo produce al medio ambiente. En este sentido, además de ser el Estado un títere de las instituciones extranjeras, ha mostrado su incapacidad para asegurar que la actividad minera se desarrolle respetando las condiciones básicas para proteger la naturaleza. La prueba de la pésima gestión que están llevando a cabo los organismos nacionales en este sector es la adjudicación de títulos mineros que ha hecho Ingeominas en el 40% del total de los páramos del país y el 15% de los parques nacionales que contienen una enorme riqueza representada en recursos naturales (Idárraga *et al.*, 2010: 33).

6.4.4. Infraestructura vial

Colombia, al acogerse a los programas de desarrollo que se han venido implementando en las últimas décadas, ha logrado el crecimiento y fortalecimiento comercial e industrial de algunos sectores urbanos localizados en las zonas andinas y costera, descuidando las zonas fronterizas y creándoles, de paso, la responsabilidad de mantener la soberanía e integridad territorial. Sin embargo, la legislación colombiana, con la expedición de la Ley 10 de 1983, ha estado dirigida a promover el desarrollo de dichas zonas con la creación de corporaciones autónomas, de una secretaría de fronteras y la realización de un régimen de estímulos e incentivos fiscales, de fomento, crédito y comercialización. Pero, a pesar de ello, los resultados obtenidos han sido escasos.

Con el fin de fomentar el crecimiento económico del país, el Estado ha comprendido que es necesario contar con una infraestructura que facilite el flujo de productos y controle la actividad, reduciendo, a su vez, el desarrollo de actividades ilícitas y de orden público:

“El Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 ‘Cambio para construir la Paz’ estableció aquellos sectores y productos que compiten con el exterior como el motor de crecimiento de la economía nacional. Para este fin, se definió que las estrategias empresariales y económicas deberían venir acompañadas por una política de desarrollo de infraestructura que conectara los centros productivos de la nación con los mercados internacionales” (Conpes, 2002: 3).

Con el mismo objetivo, el Consejo Nacional de Política Económica y Social dio origen al documento CONPES 3527 del 23 de junio de 2008, por medio del cual se promueve la política de competitividad a nivel nacional, buscando de esta manera que el país aumente su participación en el escenario económico mundial. Así, el documento sigue las pautas de la Política Nacional de Competitividad, PNC, aprobada por la Comisión Nacional de Competitividad, CNC, el 13 de julio de 2007, donde la Comisión ha establecido cinco reglas básicas para promocionar la política de competitividad en Colombia: desarrollo de sectores con miras a la expansión mundial; expansión de la productividad y el empleo; brindar a los diferentes sectores potencialmente económicos una formación empresarial y laboral; fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación; y crear estrategias paralelas que promuevan la competencia y la inversión:

“Con las mejoras en competitividad, se pretende que el país esté en la capacidad de generar oportunidades de empleo formal, así como la posibilidad de hacer frente a la pobreza y la desigualdad, por lo tanto se le asigna un papel importante en el desarrollo socioeconómico y la prosperidad colectiva” (Incoplan S.A., 2010: 160).

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo ha plasmado unas directrices para mejorar el estado de la infraestructura, dando especial importancia a aquellas vías que favorezcan el comercio exterior o que comuniquen los principales centros poblacionales con las regiones apartadas y de conflicto. Este aspecto fue tenido en cuenta en el Plan de Expansión de la Red de Carreteras 2000-2002, en lo referente al mejoramiento de la infraestructura vial nacional.

Con motivo de la reunión llevada a cabo en Brasilia, en septiembre de 2000, donde se reunieron los presidentes de América del Sur, se reafirmó el espíritu de expansión comercial de los países de la zona, por lo cual se consideró necesario adecuar las condiciones para acceder al actual contexto de globalización, competitividad y sostenibilidad, a través de un proceso de modernización de la infraestructura existente que debe incluir aspectos tales como la conformación de redes de comunicación que articulen mejor el uso de las vías terrestres, fluviales, marítimas y aéreas, favoreciendo el dinamismo del comercio e inversión en la región; y la priorización de iniciativas nacionales o bilaterales que ya están en marcha y que contribuyan a la modernización de la red de infraestructura de integración. En ese sentido:

“...uno de los objetivos al desarrollar el corredor de integración de transporte Caracas – Bogotá – Quito, es mejorar las condiciones de transporte terrestre internacional por territorio colombiano. El alcance inicial del proyecto es mejorar, a corto plazo las condiciones de comercio entre Venezuela, Ecuador y Colombia, y en el mediano y largo plazo se prevé que la conexión de este corredor con otros tramos del Eje Andino mejore la conexión terrestre entre los países de la Comunidad Andina, y a través de ellos con los países del Mercado Común del Sur (Mercosur)” (Conpes, 2002: 5).

Frente al desarrollo de infraestructura en territorio u’wa, es importante tener en cuenta que se encuentra dentro de la zona en la que se contempla el desarrollo de proyectos de infraestructura de integración regional contemplado en el IIRSA, que buscan, como se acaba de explicar, fortalecer el flujo del mercado internacional entre la frontera con Venezuela y el centro y suroccidente del país, lo cual es un factor que determina que la carretera La Soberanía se constituya como un corredor estratégico. Además de fortalecer el comercio internacional, los proyectos de infraestructura en la región también están dispuestos a dar desarrollo a otros relacionados con la extracción de materias primas en la zona:

“Con el decreto 2010 de 1994 se creó el Consejo Nacional de Competitividad. A partir de noviembre de 1998, con la expedición del decreto 2222 de 1998, la Comisión Mixta de Comercio Exterior asumió las funciones del Consejo de asesoría al Presidente de la República en los temas de productividad y competitividad. La Comisión planteó y promovió el desarrollo del Plan Estratégico Exportador 1999-2009 y, como parte de este plan, en el año 1999 el Ministerio de Comercio Exterior lanzó la Política Nacional de Productividad y Competitividad (PNPC)” (Incoplan S.A., 2010: 160).

Los dos proyectos de infraestructura vial (la carretera binacional entre Venezuela y Colombia y el mejoramiento de la carretera La Soberanía que corresponde al Tramo La Lejía – Saravena) que se están llevando a cabo en la zona que habita la comunidad u’wa representan amenazas para ésta, dado que mientras se encuentren en obras de construcción o mejoramiento, el grupo indígena queda incomunicado con los pueblos aledaños, dificultándose así la consecución de algunos productos básicos para su sostenimiento:

“Entre los problemas que tenemos está el de los derrumbes que taponan los caminos. Para el gobierno esto no es grave porque las mercancías que deben venir aquí se transportan por otro lado pero eso hace que suban los precios y pobre de nosotros los campesinos que tenemos que sacar el dinero para pagar los

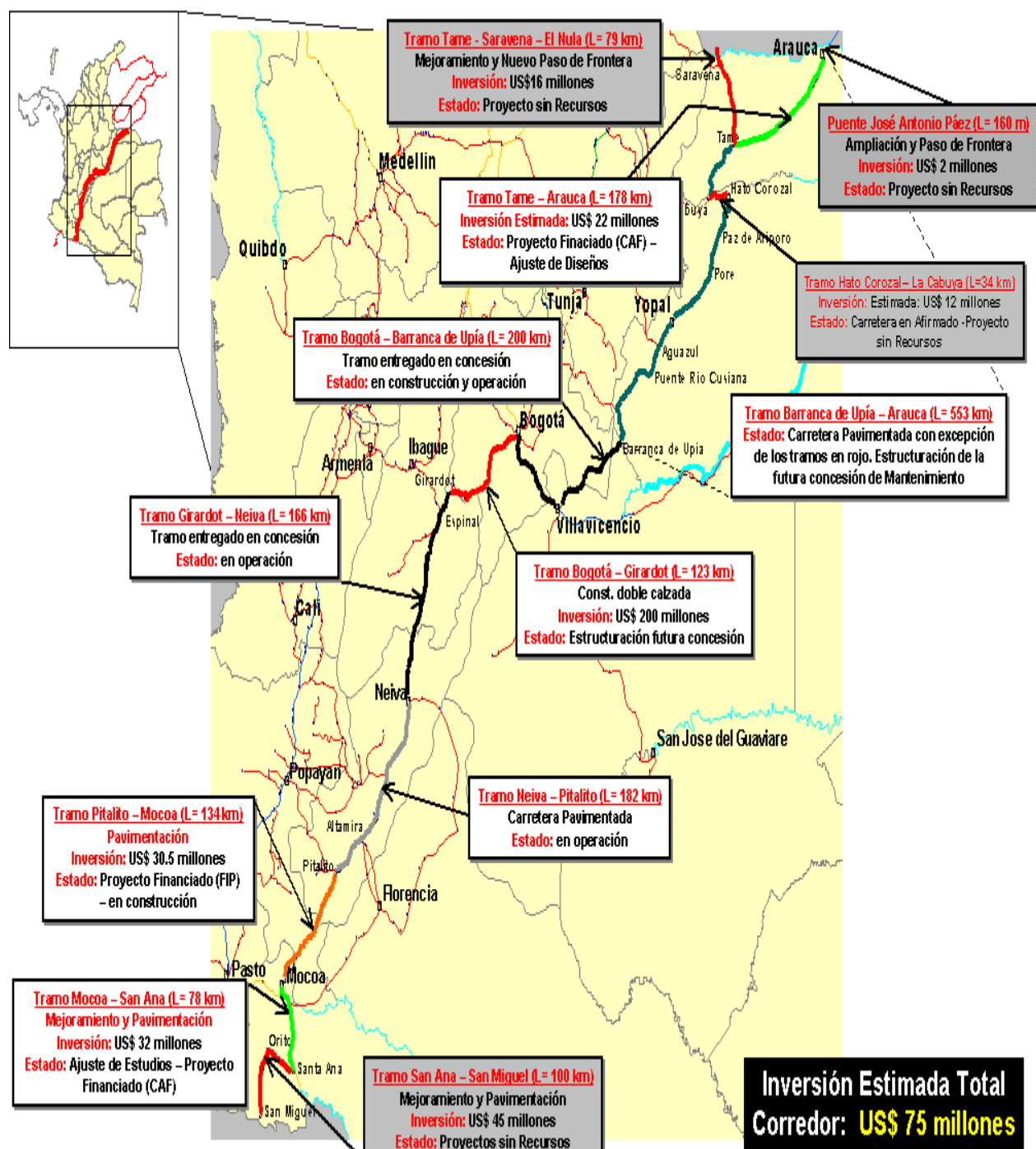
alimentos a un costo más alto. La naturaleza por su parte también hace sus propios retenes naturales y toca pasar de un lado a otro en canoa, esto significa que ella también reclama lo suyo y presiona al gobierno para que tome decisiones y solucione los problemas” (Verito Cobaría, Septiembre, 2012).

Carretera binacional, Tramo Vial Saravena – El Nula

Dentro del plan denominado Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que reúne proyectos de infraestructura en 12 países, se encuentra la construcción de la carretera binacional Nula-Saravena con una distancia de 79 Km, la cual incluye la construcción de un puente internacional sobre el río Arauca que tendría una distancia aproximada de 500 m con accesos en el Estado de Apure, Venezuela y el Departamento de Arauca, Colombia. Este proyecto requiere de una financiación de 16 millones de dólares, pero aún no se ha determinado una fuente precisa para financiarlo.

El proyecto es, a su vez, parte del corredor alterno Caracas-Bogotá-Quito y su objetivo consiste en lograr que un vehículo de carga gaste 16 y no 30 horas en recorrer Colombia desde el paso de frontera con Venezuela hasta el paso de frontera con Ecuador. El Mapa 12 representa gráficamente el recorrido que haría la carretera a través del país.

MAPA 12: TRAMOS QUE FORMAN PARTE DEL CORREDOR DE TRANSPORTE CARACAS-BOGOTÁ-QUITO



Fuente: Documento Conpes 3153.

En Colombia la responsabilidad del proyecto recae sobre el Departamento Nacional de Planeación, que mediante el documento Conpes 3153 de 2002 “Autoriza a la Nación para contratar créditos externos hasta por US \$75 millones, destinados a financiar el corredor de integración de transporte Caracas-Bogotá-Quito” (Conpes, 2002: 11). Dentro de este corredor la región norte se ubica en los departamentos de Arauca, Casanare y la zona oriental del departamento de Boyacá en la cual se ubica el proyecto identificado como el tramo “Tame-Saravena-El Nula y Puente Internacional sobre el río Arauca.”

Dentro del IIRSA, este proyecto se encuentra dentro del Grupo 3 denominado Conexión Venezuela-Colombia; el IIRSA se divide en diferentes Ejes de Integración y Desarrollo (EID), los cuales corresponden a la organización del espacio suramericano que concentran poblaciones, producción y flujos de comercio potenciales de la región, y que han de desembocar hacia un estándar común de calidad de servicios de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones.

La vía atraviesa, en su totalidad, los territorios del pueblo de los Betoyes y algunos grupos de Guahibos y los bloques petroleros del departamento de Arauca. Todo el territorio de este pueblo se encuentra superpuesto por los bloques petroleros Capachos, operado por la Repsol; Rondón, Cosechas, Caporal y Chipirón o Cravo Norte, operados por la OXY; Llanero 1 y 5, en poder de la ANH, Agencia Nacional de Hidrocarburos; esos mismos bloques serán los favorecidos por la construcción de la carretera. El Resguardo Genareros, de tan solo 123 hectáreas, será atravesado por la vía; en tanto la construcción de la obra, junto con las concesiones de los bloques petroleros, mantienen suspendido el proceso de titulación de las comunidades de Betoyes y Laguna de Lipa, una extensión de 10.880 hectáreas solicitadas por los pueblos Betoyes e Hitnu hace más de diez años.

La ruta es una derivación de la que desde Ciudad Guyana conecta con Acarigua y continúa por el norte de Colombia, Paraguachón-Santa Marta, claramente asociada al cinturón petrolero venezolano. Además de esta conexión con la industria de los hidrocarburos, la carretera espera potenciar la expansión del llamado “Cinturón Palmero” que afectará los territorios de los sikuani, cuiva, u’wa y macaguaje, ubicados en la parte más cercana al piedemonte llanero.

Es importante resaltar que la mayor parte de los recursos ejecutados en la primera parte de implementación de las obras estuvieron a cargo del Batallón de Ingenieros del ejército. Aunque en la segunda etapa la contratación la hizo directamente el departamento, éste se encuentra intervenido por el gobierno central, que considera la región como una zona de guerra, lo cual explica el constante estado de ocupación militar que vive la región desde el 2002, año en el que casi la totalidad del aparato administrativo civil fue sustituido por las fuerzas armadas. Esta vinculación entre la fuerza pública, las áreas petroleras y la construcción de infraestructura que beneficiará a las mismas, evidencia una relación que ha sido denunciada reiteradamente por las organizaciones populares y de derechos humanos de la zona como propiciadora de violencia política. Uno de los casos más críticos fue la masacre efectuada el 13 de diciembre de 1998 contra un grupo de Betoyes a manos de soldados del ejército, que produjo el desplazamiento a Tame y Saravena de más de 500 indígenas.

Carretera La Soberanía – Tramo La Lejía - Saravena

La carretera La Soberanía hace parte de uno de los programas de infraestructura vial denominado “Corredores arteriales complementarios para la competitividad”. Este sistema vial forma parte de un proceso de consolidación y fortalecimiento de las redes de carreteras, donde el único propósito es optimizar la movilidad, conectividad, producción y comercialización entre las diversas regiones de Colombia. El gobierno nacional ha identificado la necesidad de fortalecer esta red, ya que así es posible lograr una integración tanto regional como nacional, en el marco de la competitividad del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010:

“...el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura vial es un importante aporte al fortalecimiento de la competitividad, por lo cual se impulsará la consolidación de corredores que soportan carga de comercio exterior y que conectan los principales centros de producción y consumo con los puertos marítimos, aeropuertos y pasos de frontera a través del programa Dobles Calzadas para la Prosperidad. En este sentido, se dará prioridad a la terminación de proyectos, promoviendo la homogenización de la capacidad vial” (Conpes, 2011: 6).

Se ha previsto el desarrollo del programa con el fin de consolidar una red de transporte eficiente, que con adecuados niveles de servicio y de capacidad, facilitará la movilidad de pasajeros y la conexión de los centros de producción con los centros de

consumo y con los corredores de comercio exterior. El proyecto se desarrolla en el marco del Convenio Interadministrativo 0267 de 2009, entre el ejército (ejecutor), el Ministerio de Transporte (promotor), el Instituto Nacional de Vías (asesor técnico y financiador) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (gerente integral), para lo cual se ha contemplado invertir \$116.398 millones de pesos en la construcción de la carretera La Soberanía, con una duración de cuatro años.

En dicho convenio se resalta la idoneidad del ejército para la ejecución de las obras. Dentro del área de influencia de las citadas vías, el ejército cuenta con unidades de ingenieros militares, con plenos recursos de ingeniería y experiencia comprobada en la ejecución de las obras de similar naturaleza como la vía Tame-Arauca, por lo cual es posible cumplir con el doble objetivo de efectuar la ejecución técnica de los proyectos y brindar la seguridad requerida en las zonas sensibles en materia de orden público.

La información brindada por funcionarios del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, a las autoridades u'wa, deja claro que la zona de ejecución del proyecto que puede tener alguna implicación sobre el territorio u'wa está entre los puntos PR 72 y PR 139 que corresponden al tramo entre el Alto de la Virgen y Bojabá.

Entre el tramo del Alto de la Virgen y Cubará se tienen contempladas obras de mejoramiento y la reconstrucción del puente Cubugón. Aunque, en el actual convenio no se contempla ninguna obra de construcción, es posible que en un futuro se desarrollen obras de ampliación de la vía. Como dato adicional a esta investigación, se tiene conocimiento de que en el tramo entre Cubará y Bojabá se contemplan obras de pavimentación de la carretera.³⁰

³⁰ Información suministrada por Claudia Cobaría.

Foto 21: Puente de la zona



Foto 22: Construcción de carretera



Foto 23: Joven u'wa atravesando puente en zona de Resguardo

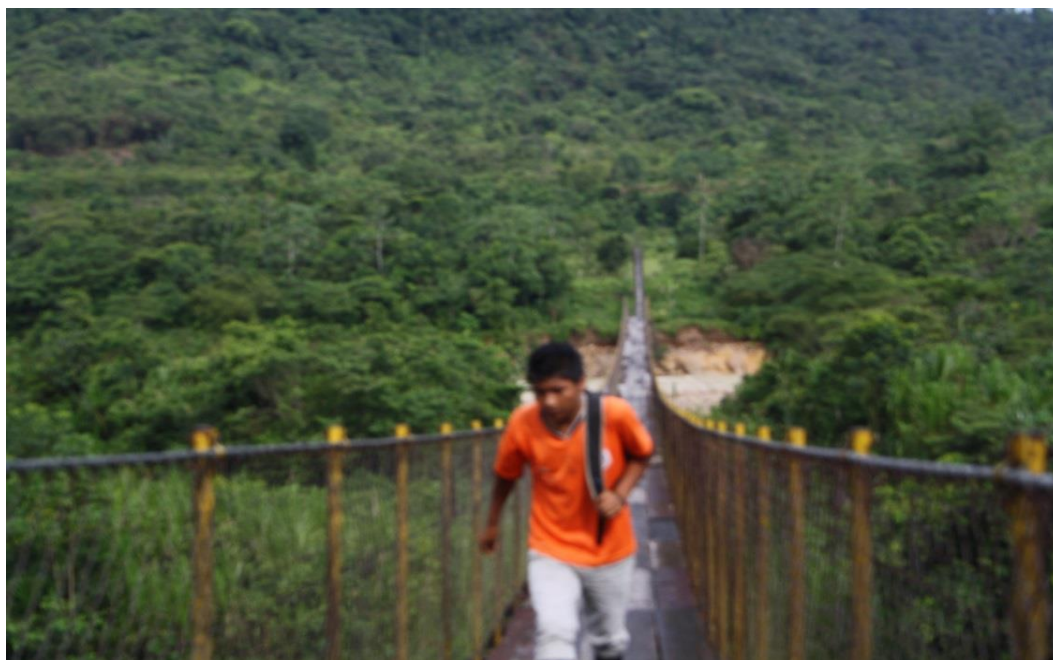


Foto 24: Carretera principal del municipio de Cubará



6.4.5. Actividades encaminadas a la mejora del territorio u'wa

La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en febrero de 1993, adelantó una investigación sobre ordenamiento territorial indígena con el pueblo u'wa, con el fin de constituir el Resguardo Único U'wa. Inicialmente, se pretendía abordar asuntos relacionados con la educación, salud y tierras, pero el Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo, IDEADE, en mayo del mismo año, vinculó al Comité Interinstitucional de Apoyo a las Comunidades Indígenas del Pueblo U'wa, un programa que estaría dirigido por la Gobernación de Boyacá. De esta forma, mediante la financiación de las gobernaciones de Boyacá, Santander y Norte de Santander, se lanzó la idea de crear el Resguardo, para lo cual fue necesario buscar las propuestas sobre formulación de proyectos para esa zona.

El proyecto elegido debía cumplir con unos requisitos básicos consistentes en la información general sobre la zona de estudio, el reconocimiento de los actores intervinientes y la tarea que cada uno debía desempeñar, definiendo de qué forma se podía llevar un manejo adecuado de la región teniendo en cuenta las ideas de cada uno de los participantes, y reconociendo la responsabilidad y la capacidad de cada sector involucrado para mantener un diálogo intercultural objetivo, es decir, indígenas u'wa, campesinos y representantes del Estado.

Las actividades que se llevaron a cabo, estuvieron enfocadas por un lado, en la obtención de información, para lo cual se consultaron libros, documentos, informes y revistas; y por otro, en el análisis de los problemas, donde se aplicó la observación directa y se realizaron tres talleres de análisis e identificación de alternativas en las poblaciones de Güicán, Báchira y Chuscal. El grupo investigador estuvo compuesto por dos antropólogos, dos representantes de la comunidad u'wa, un abogado, una socióloga, un biólogo, un agrónomo y un comunicador social. De los datos recopilados se pudo calcular, que para ese entonces vivían en la zona 4.244 habitantes que formaban 847 familias pertenecientes a la comunidad u'wa. También se pudo inferir, que los clanes más tradicionales son los Cobaría, Bókota, Tegría y Aguablanca.

Por último, los talleres tuvieron como objetivo principal “Identificar junto con los U'wa, los campesinos y las instituciones ambientales (Parque Nacional Natural El Cocuy, corporaciones y municipios) los criterios ambientales, socioeconómicos,

culturales y normativos que deben considerarse para la elaboración del Plan de Manejo del área del Parque Nacional Natural el Cocuy (PNN EL COCUY) que se superpone con el Territorio U'wa" (IDEADE, 1997a: 8). Es evidente, que los talleres también buscaron recoger las impresiones de los indígenas, estableciendo sus principales necesidades y creando mecanismos para la toma de decisiones. Para el desarrollo de estas jornadas, se elaboró un programa que determinó las actividades que se llevaron a cabo cada día.

En otros proyectos, el IDEADE ha cambiado la perspectiva de investigaciones posteriores, como es el caso del realizado por el Consejo Regional de Política Económica y Social, CORPES para el Centro Oriente, con el fin de integrar tanto al Estado colombiano, a los campesinos de la región y al pueblo u'wa, para que entre todos intenten recuperar, manejar y conservar los territorios del Parque Nacional Natural El Cocuy, que también hacen parte del Resguardo.

Los indígenas u'wa, sobre todo, desde la segunda mitad del siglo pasado, han denunciado constantemente la entrada de colonos con ganados a sus tierras, lo cual, además de arrinconarlos, ha provocado daños en las montañas ocasionando derrumbes y aniquilando especies animales y vegetales. Tanto el Estado como el grupo indígena coinciden, en que las partes altas del territorio perteneciente a los nativos, es decir, las comunidades de Cobaría, Tegría, Bókota, Rinconada, Báchira y Aguablanca, son consideradas sagradas, y por lo tanto, no deben ser manipuladas de ninguna forma. Por fortuna, en este caso, han coincidido dos corrientes distintas de pensamiento con las mismas intenciones: destinar esas tierras a la conservación (IDEADE, 1997a: 3).

Los u'wa piensan que la sociedad de los *reowas* quiere proteger la riqueza natural de esta zona, y los expertos coinciden en afirmar, que este es uno de los pocos territorios donde la mano del hombre ha causado pocos estragos, gracias a que la mayor parte del tiempo ha estado habitada por el grupo indígena, y sus prácticas tradicionales, tanto de caza, pesca y recolección, han ido a favor de los procesos naturales. Los indígenas piensan, que lo que para el hombre blanco es un parque, para ellos es una zona sagrada, pero no porque el gobierno lo haya decretado así, sino que es un concepto establecido desde que el mundo existe, porque ha sido *Sira*, su dios, quien lo ha dispuesto, como ha permitido también que el agua siga fluyendo de las lagunas, los

animales no mueran por no vivir en su hábitat y para que los nevados se sigan conservando.

Como se puede apreciar, los u'wa han vivido en una constante lucha con el hombre occidental por proteger los recursos naturales de la zona: se han opuesto a la tala masiva de bosques y la explotación maderera incontrolada, a la pesca con dinamita, y se han convertido en los defensores de selvas, ríos y páramos que son la base de una de las reservas naturales más importantes del planeta.

Para dar desarrollo al proyecto dirigido a conservar los territorios del Parque Nacional Natural El Cocuy que se superponen con los del Resguardo, los investigadores del CORPES han recorrido la zona con el fin de detectar los principales problemas y ofrecer las posibles soluciones. Al equipo de estudio se unieron varios integrantes de la comunidad indígena y dos científicos del Instituto Humboldt, encargados de reconocer las especies de animales y plantas de la zona y los mecanismos para su conservación.

En el transcurso del viaje por la zona que se ha intentado conservar, se describen los accidentes geográficos que atraviesan y, de paso, se han comentado las actuaciones de los colonos que van en detrimento de los recursos naturales. Tal es el caso, de la costumbre que adquirieron de secar algunos pantanos y quemar frailejones con el fin de obtener pastos para alimentar el ganado. Los indígenas han expuesto que el frailejón es vital para el abastecimiento del agua de todo el país; el proceso para que estos alcancen una altura de tres metros que es lo habitual, tarda muchos años, y su quema se puede efectuar en tan solo unos minutos. Se hace énfasis, en que lo que hace unos años era un solo bosque, ahora se encuentra interrumpido por zonas de cultivo y potreros de clima frío que en términos de beneficios naturales, no ofrecen ninguno.

Los u'wa han adoptado algunas técnicas de cultivo, propias de los colonos. Entre ellas se encuentra la quema del monte, que muchas veces provoca dificultades porque no lo hacen de la forma adecuada y terminan quemando más terreno del deseado. Cuando realizan esta actividad en áreas muy inclinadas o cerca de los ríos, al poco tiempo se producen derrumbes. Un método tradicional, aprendido de los padres y abuelos, pero que los indígenas de hoy no aplican, es el de hacer las quemas por la noche para mantener el control, al tiempo que en estas se deben utilizar guardarrayas. El no aplicar estos procesos ancestrales, puede provocar deslizamientos de tierra útil, hacer

desaparecer los bosques que protegen las corrientes de agua y, por ende, producir avalanchas que pueden colocar en peligro la vida de los habitantes de la región.

Al seguir avanzando en el recorrido por la zona, se ha podido notar la existencia de sitios donde los bosques y las selvas se encuentran en un mejor estado de conservación, como las tierras de Bókota, Tegría y Zulía; esto se debe, a que los indígenas no queman los terrenos ni talan los árboles, lo único que hacen es tumbar las ramas que al pudrirse sirven de fertilizante para la tierra, y una vez cultivada y cosechada la dejan descansar por lo menos diez años hasta una nueva siembra.

Entre los hecho más importantes de este viaje se destacan las actividades que se realizaron con los participantes de las distintas comunidades u'wa. En resumen, se han reunido en “Casa Roja” para desarrollar tareas que les permitió a los indígenas mejorar algunos aspectos de su vida diaria, como por ejemplo, crear un calendario con su diario vivir que incluye ceremonias, épocas de cultivo, de caza y cuando trasladan el ganado de un sitio a otro. De otra parte, a los representantes del organismo gubernamental les fue de provecho la visita, porque con ayuda de los nativos pudieron elaborar un mapa que ubica los sitios de vivienda, las zonas de cultivo, los caminos, las áreas donde pasta el ganado y demás espacios utilizados por la comunidad. Al mismo tiempo, con la ayuda de imágenes, los u'wa reconocieron los animales que habitan su territorio, y de paso, han identificado los que cazan, los que consideran perjudiciales y las temporadas del año en que abundan; lo mismo se hizo con las plantas.

Un tema de interés que ha sido tratado en esta jornada fue el relacionado con los bosques. Verito Cobaría, afirma están preocupados por la tala de árboles porque así disminuyen los animales terrestres y las aves, haciendo que se tengan que buscar otros medios para subsistir como la pesca, que al ser excesiva por parte de colonos colombianos y venezolanos, conlleva a reducir de forma acelerada este recurso.

La pérdida de tierras es una de las principales preocupaciones de la comunidad indígena. Afirman, que al margen de aplicar las técnicas ancestrales, o que se exploten otros recursos naturales de forma excesiva, el principal problema que tienen es la escasez del territorio. El gobierno y los colonos pueden pensar que los predios del Resguardo son amplios, pero realmente no son todos productivos. Hay espacios donde no se puede cultivar por su aridez, otros son sagrados y no se debe ingresar en ellos ni

siquiera para tomar plantas medicinales y otros ya están adjudicados a algunas familias. Por eso, ellos pidieron al INCORA, cuando este existía, que comprase a los colonos las tierras que ancestralmente les pertenecían y recuperarlas de esta forma. “...los U’wa han sabido hasta donde llegan sus territorios. Se trata de un orden que no es de origen humano sino que fue instaurado en la creación del mundo” (IDEADE, 1997a: 13).

Como conclusión, las ideas que se han propuesto para un manejo adecuado de los proyectos que se adelanten en la zona, han girado en torno a establecer responsabilidades en tres direcciones: qué deben hacer los campesinos, qué les corresponde a los indígenas y cuál es el papel de los funcionarios del Estado y sus obligaciones. De esta forma, se ha esperado un compromiso de cada una de las partes involucradas en la preservación del parque, a lo cual los u’wa han respondido, que son ellos los que deben dirigir las acciones que, en adelante, se pretendan llevar a cabo.

Por último, no deja de percibirse una clara desconfianza dentro de la comunidad, dado que, por más de veinte años, han visto como el gobierno no ha cumplido con muchas de las promesas que les han hecho. Es por eso que resaltan la necesidad de tomar como directriz en cada paso que se dé, el origen cultural de los u’wa, para que se actúe de la misma forma como lo harían sus ancestros.

6.4.6. Parques nacionales

Desde comienzos del siglo XX, en Colombia se empezaron a promulgar decretos relacionados con bosques y aguas, pero desde la segunda mitad del siglo pasado, las acciones han estado orientadas a la preservación de la naturaleza. En este sentido, se han creado instituciones encargadas de controlar las actuaciones relacionadas con el manejo de los recursos naturales, entre ellas, el Instituto de Recursos Naturales,INDERENA, adscrito al Ministerio de Agricultura.

Con la promulgación de la Ley 2ª de 1959, referente a las zonas de reserva forestal de la nación, se declararon las siete grandes reservas forestales: el Pacífico, la zona Central, el río Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de Los Motilones, la Sierra Nevada del Cocuy y la Amazonía. Estas zonas de reserva forestal se encuentran actualmente vigentes y sus áreas se consideran patrimonio forestal del país.

Una institución internacional de gran importancia relacionada con el tema ambiental, es la “National Environmental Policy Act” (NEPA), promulgada en Estados Unidos el 1° de enero de 1970. Su importancia reside en que, a partir de sus políticas generales, se empieza a crear la conciencia mundial sobre la responsabilidad que tienen las generaciones, de usufructuar la naturaleza sin degradarla y sin poner en riesgo la salud o la seguridad de los individuos. Señala a las generaciones contemporáneas como administradores encargados de dar un adecuado manejo a los espacios naturales, para que las poblaciones futuras reciban un ambiente sano.

Es esta institución la que empieza a exigir las evaluaciones de impacto ambiental para cualquier obra o proyecto que pueda alterar el medio ambiente. Es importante aclarar, que para ese entonces (comienzos de los años setenta), los factores técnicos y económicos dominaban el proceso de toma de decisiones en los proyectos que se adelantaban. Sin embargo, ya avanzada esta década, fue cuando se empezaron a introducir nuevos elementos en la evaluación de impactos ambientales, tales como, cambios físico-químicos, biológicos, socio-económicos y culturales que puedan afectar las relaciones humanas, por la ejecución de un determinado proyecto. Así, se piensa que “...el medio ambiente es el entorno vital, o sea el conjunto de factores físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que interaccionan con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia” (Correa, 1997: 4).

Dentro de la normativa que se deba destacar por su importancia en la defensa del medio ambiente, está la ley 23 de 1973, encaminada a prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente, al tiempo que pretende la conservación y restauración de los recursos naturales renovables, buscando preservar la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional. Otra reglamentación relevante es el decreto 2811/74, en el cual se determinan los medios de desarrollo de la Política Ambiental, así como obliga a toda persona natural o jurídica a declarar la ejecución de una obra que pueda causar un posible deterioro ambiental y el peligro que esta conlleva.

A pesar de haberse creado una legislación relacionada directamente con el tema ambiental, Correa (1997) considera que la aplicación de estas normas a casos específicos ha sido muy pobre, debido, concretamente, al bajo nivel jerárquico del INDERENA, a su falta de capacidad de control sobre los recursos asignados y,

fundamentalmente, a la falta de participación de las comunidades involucradas en los proyectos. No obstante, los mayores avances que se han conseguido en lo que se refiere a la conservación del medio ambiente, se han dado a partir de la década del noventa con la aplicación de la Constitución de 1991, la promulgación de la ley 99 de 1993 y con la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 1993, intentando, de esta forma, subsanar los vacíos de años anteriores. También, es notoria la forma como se han venido incluyendo en los programas de los últimos gobiernos la gestión y protección de los recursos naturales, por lo cual se han venido aplicando estrategias de política ambiental orientadas, por una parte, a la consolidación de un sistema nacional de áreas protegidas, y a construir nuevas alternativas de desarrollo local cuyo objetivo sea la protección de dichas áreas (Saavedra, 2005: 21).

Parque Nacional Natural el Cocuy

El Parque Nacional Natural el Cocuy se constituyó mediante la resolución 156 del 6 de Junio de 1977 para formar parte del Sistema Nacional de Parques, el cual tiene como objetivo “conservar los valores sobresalientes de fauna y flora; perpetuar en un estado natural muestras de comunidades bióticas, regiones radiográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies silvestres amenazadas de extinción y proteger ejemplares de fenómenos naturales, culturales, históricos y otros de interés.”³¹

El área del parque es de 306.000 hectáreas, que en la actualidad ocupa cinco resguardos indígenas u'wa: Resguardo Unido U'wa, Valles del Sol, Civariza, Laguna Tranquila y Angostura. En total son aproximadamente 141.528 hectáreas compartidas entre el Parque Nacional Natural el Cocuy y los resguardos de la comunidad. El área de traslape con el Resguardo Unido es de aproximadamente 92.000 hectáreas; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN ha definido la importancia de esta zona por contener en ella parte una de las principales culturas indígenas del país:

“...casi el 30% del PNN El Cocuy (92.000 has) contiene un remanente de cultura Chibcha propia de los Andes, los Uwa, con rasgos –en algunos de sus asentamientos- muy tradicionales y otros en transición constante a un sistema

³¹ Resolución Ejecutiva No. 156 del 6 de junio de 1977.

indígena-campesino. Sin duda, son ‘restos’ de una tribu que ha venido luchando desde tiempo atrás -incluso con los españoles- por conservar su territorio y su cultura mostrando procesos de resistencia cultural. El territorio habitado por la etnia Uwa ha sido considerado dentro de uno de los más diversos de los Andes ya que el manejo vertical de pisos térmicos entre los 400 y los 5.200 m.s.n.m., lo hacen acreedor de un alto nivel de heterogeneidad ecológica” (UAESPNN, 2005-2009: 6-7).

El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural el Cocuy 2005-2009, menciona que la ocupación permanente de zonas del parque por parte de los indígenas u’wa y los usos dados al territorio por parte de los mismos, es más amigable con el entorno que algunas prácticas culturales asociadas a los sistemas productivos no u’wa. Reconoce una realidad biocultural que forma parte del Parque y entre uno de sus principales objetivos de conservación está el proteger el territorio u’wa que en él se encuentra.

A su vez, se han identificado 11 amenazas prioritarias, dentro de las cuales, las más relevantes son la fragmentación sociopolítica en los distintos clanes u’wa, la pérdida de conocimiento tradicional por parte de algunas comunidades aborígenes, la tala de especies de bosque andino por parte de colonos con valor cosmogónico para el grupo, y otras relacionadas con la quema, la degradación de cuerpos de agua, el pastoreo extensivo y el turismo mal dirigido:

“El territorio Uwa que es también objeto de conservación del PNN Cocuy, está afectado por formas de subsistencia que amenazan la movilidad vertical y hacen que los uwa se vuelvan más sedentarios con procesos de adopción de prácticas campesinas. Las cuencas principales en las partes altas están afectadas por quemadas y pastoreo intensivo de ovejas/vacas. Algunas especies arbóreas representativas del bosque andino son utilizadas para el comercio, esta situación ha aumentado la frontera de explotación maderera con sus concomitantes conflictos de uso” (UAESPNN, 2005-2009: 7).

Si se tiene en cuenta la totalidad de amenazas que existen sobre la comunidad u’wa, posiblemente, las mayores presiones al territorio indígena están dadas por los proyectos de desarrollo, básicamente de explotación petrolera, y por los grupos armados. Estos elementos extraños a la cultura u’wa son los que más deterioran la gobernabilidad de las distintas comunidades sobre sus predios, ya que los insertan en situaciones y lógicas totalmente contrarias a sus creencias y modos de relación con la naturaleza.

Es de resaltar que es el mismo Estado, el que a pesar de tener la obligación constitucional de proteger la diversidad cultural de la nación, está promoviendo proyectos de explotación de recursos naturales en los territorios de grupos nativos, a sabiendas de que los impactos negativos que tienen estos proyectos en la cohesión social y cultural de las comunidades locales, no solo son para los indígenas sino también para los grupos de campesinos. Sin embargo, lo más preocupante es que el gobierno sigue empeñado en la ejecución de dichos proyectos a pesar, incluso, de la solidaridad internacional manifestada al pueblo u'wa:

“Así, a partir del reconocimiento de la diferencia, se crea para el Estado e incluso los particulares, la obligación constitucional de adelantar acciones firmes en orden a obtener condiciones efectivas que favorezcan a los grupos culturalmente diferenciados. Esta directriz constitucional reviste la mayor trascendencia en el proceso de construcción de una nación multiétnica y pluricultural e implica no solo evitar conductas discriminatorias, sino realizar acciones positivas tendientes a permitir la realización de los derechos de los que son titulares todos y cada uno de los pueblos indígenas que como sociedades culturales diversas, realizan aportes fundamentales a la construcción de la nación colombiana” (Eraso, 1997: 51-52).

No obstante, el entorno económico global existente en el Parque el Cocuy, según los enunciados oficiales, se pretende cumplir con los siguientes objetivos:

- Crear un ordenamiento ambiental de los páramos existentes en el área protegida y su zona de amortiguación, con participación de sus pobladores y usuarios, apoyado en sistemas agrarios sostenibles para la conservación.
- Lograr un ordenamiento ecoturístico del Parque Nacional Natural el Cocuy, fortaleciendo procesos y actores sociales relacionados, y articulando proyectos regionales.
- Construir de forma concertada un régimen especial de manejo del área traslapada entre el Parque Nacional Natural El Cocuy y los resguardos u'wa.
- Diseñar un ordenamiento ambiental de los ecosistemas boscosos del área protegida, a partir del manejo de recursos naturales por parte de pobladores, usuarios y autoridades ambientales, generando, de ésta forma, un conocimiento sobre la realidad ambiental de dicha área y su contexto.

Escenario sobre el tema ambiental en el mundo

En las últimas décadas, mundialmente se han venido registrando profundos cambios a nivel ambiental, producto de las múltiples necesidades que la especie humana ha creado con el paso de los años, afectando negativamente los diversos ecosistemas terrestres y marinos, amenazando el equilibrio del planeta y, por consiguiente, de la humanidad.

De esta forma, se percibe el efecto negativo para las diferentes sociedades, cuando se intenta aplicar en ellas conceptos incompatibles como progreso, desarrollo económico e industrialización, con otros como derecho sostenible y preservación del medio ambiente:

“...no cabe duda que la problemática ambiental en el ámbito universal, regional y local es un tema de gran trascendencia para el desarrollo y futuro de las naciones, caracterizándose este como un tema eminentemente político, entendida la política como la capacidad de orientar el desarrollo, en tanto que la crisis y el drama de la conservación continúa, no siendo siquiera un problema de conciencia ambiental, sino de poderes, pero de manera desafortunada, la conciencia ambiental en nuestro medio posee muy escaso poder político, lo que significa una gran calamidad para la persistencia de los recursos naturales, para el desarrollo y para el futuro de los pueblos y de la humanidad en su conjunto” (Saavedra, 2005: 18).

Los problemas ambientales generados por las pésimas políticas impuestas por los estados del Primer Mundo, no pueden seguir pasando inadvertidos, dado que progresivamente van influyendo de forma negativa en las condiciones de vida de sociedades rurales y urbanas, afectando su seguridad alimentaria, la calidad de los servicios que perciben y reduciendo los recursos naturales necesarios para una vida digna.

Al seguir aumentando el efecto invernadero por la emisión de gases contaminantes, el resultado que se obtiene es el cambio climático que ocasiona enormes tragedias naturales, que a su vez, reduce las áreas geográficas ricas en recursos imprescindibles para el sostenimiento de las especies animal y humana.

Las principales causas que han conducido a la grave situación ambiental en el planeta son las altas tasas de crecimiento poblacional, la falta de conciencia ambiental,

la ausencia de compromisos políticos y éticos por parte de los gobiernos, la escasa inversión en ciencia y tecnología dirigidas a mejorar el uso del medio ambiente, la pobreza generalizada, y en el caso colombiano se puede añadir, el narcotráfico, la corrupción y la presencia de grupos armados al margen de la ley que impiden la promoción de un desarrollo sostenible basado en los principios de conservación y uso racional de los recursos naturales.

Colombia, al igual que otros países de América Latina y del mundo, en forma retórica, lo mismo que casi todas las naciones del planeta, ha adoptado las políticas internacionales dirigidas a la conservación y manejo de los recursos naturales, participando en las reuniones más importantes de las últimas décadas, como la Reunión de Estocolmo en 1972, la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, la Cumbre de Johannesburgo en 2003 y el Protocolo de Kioto en 2005. Sin embargo, al mantenerse en esta línea, ha llevado a que el Estado se acoja a los diferentes convenios emitidos por organismos internacionales dedicados a la conservación del medio ambiente como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN; World Wildlife Fund for Nature, WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza); o la Food and Agriculture Organization, FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura). De la misma forma, ha tenido en cuenta las políticas de organizaciones como la OIT (Organización Internacional del trabajo), la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OIMT (Organización Internacional de las Maderas Tropicales).

Este esfuerzo realizado por el Estado colombiano, aunque recibe ayudas para la inversión ambiental por parte de países desarrollados como Holanda o Alemania, por el hecho de no tener las herramientas suficientes para llevar a cabo una justa distribución de su riqueza natural para el disfrute de las generaciones futuras, hace que el escaso poder político y de negociación termine, al igual que los demás países pobres, destruyendo u ofreciendo al mejor postor sus recursos naturales (Saavedra, 2005: 20).

En Colombia, la legislación que regula en la actualidad el medio ambiente, ha sido el resultado de enormes cambios que se han generado desde la década del cincuenta, con el establecimiento de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). La primera etapa, que culminó en 1986 con la creación de 18 entidades adscritas al Departamento Nacional de Planeación, principalmente con funciones de desarrollo y planificación regional y con una jurisdicción sobre el 35 por ciento del

territorio nacional, se caracterizó por la creación de políticas destinadas a problemas puntuales como el manejo de la cuenca del río Cauca, el control de la erosión en el eje cafetero y en Bucaramanga, los incentivos al desarrollo del canal interoceánico en el Chocó y el manejo de las cuencas de los ríos Magdalena y Sinú, entre otros.

6.4.7. Infraestructura y ecoturismo

Dentro de los proyectos relacionados con el Parque que pueden considerarse una amenaza para el territorio u'wa, también se encuentra la construcción de un teleférico que subiría a los picos del Parque Nacional Natural el Cocuy. Sin embargo, éste no es un proyecto real y la expectativa sobre el mismo corresponde quizás a que en algunas ocasiones se ha presentado como propuesta de campañas políticas. La indagación realizada a la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia revela que evidentemente no existe ninguna propuesta para un proyecto de infraestructura de tal naturaleza.

En relación con la construcción de infraestructura del Parque Nacional Natural El Cocuy, se manifiesta que se están desarrollando adecuaciones en cabañas ya existentes que no se encuentran dentro del área del Parque.

Ecoturismo

En marzo de 2004, en Tailandia se llevó a cabo el Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo de la OMT, con el fin de mejorar las prácticas de sostenibilidad en turismo. En la reunión se hizo énfasis en el equilibrio que debe haber entre los aspectos ambientales, socioculturales y económicos del turismo, así como la necesidad de aplicar los principios de sostenibilidad en el desarrollo de esta labor. La Organización Mundial del Turismo, OMT, ha marcado las pautas sobre las que se debe desarrollar esta actividad:

“Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluido el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo” (De Duque y Ochoa, 2008: 9).

Desde la formulación del Plan de Manejo Del Parque Nacional Natural el Cocuy 2005-2009 se contempla la necesidad de llevar a cabo actividades ecoturísticas en el Parque, situándose como objetivo prioritario la necesidad de organizar el desarrollo ecoturismo de la Sierra Nevada del PNN El Cocuy, articulándolo con el grupo de empresas turísticas de la región:

“...el tema del ecoturismo es visto como la mejor oportunidad de obtener dinero aprovechando lo existente en el Parque. Aunque al momento de este análisis, los impactos generados por un turismo desordenado y mal dirigido no estén entre los cinco más urgentes por su nivel de impacto, es necesario ordenar y monitorear la actividad para proteger los valores paisajísticos, especialmente los relacionados con la Sierra Nevada” (UAESPNN, 2005-2009: 8).

“Es por eso, que el presidente de AsoU’wa se queja y entabla una demanda. Expone la situación internacionalmente y dice que el problema no se ha acabado, sigue y estamos en la mira del gobierno, porque para ellos poder desarrollar proyectos como el de los parques necesitan de nuestro territorio indígena, incluso el tema del Nevando del Cocuy, que forma parte de nuestro territorio ancestral, sigue con el mismo problema” (Claudia Cobaría, Septiembre, 2012).

Actualmente, se está preparando una resolución que reglamentaría la actividad ecoturística en inmediaciones de la Sierra Nevada, en el área del Parque Nacional Natural el Cocuy. De momento, son tres los senderos autorizados para el desarrollo de actividades recreativas:

“Púlpito del Diablo, ascendiendo por los senderos del Valle de Lagunillas, la Piedra del Alto del Conejo o desde la hacienda La Esperanza, ascendiendo por el sitio Cueva Blanca hasta encontrar el sendero de la Piedra del Alto del Conejo; ascenso por la Laguna Grande de la Sierra, ascendiendo por el sendero de la hacienda La Esperanza y Ritakuwa Blanco, ascendiendo desde las cabañas por el sendero que conduce hasta el sitio conocido como Playitas; únicamente por estos senderos se autoriza el tránsito de caballos y visitantes con o sin guía. Los senderos que conducen a la parte oriental de la Sierra Nevada están sujetos a concertación con la comunidad indígena uwa. Los demás sitios de la Sierra Nevada podrán ser objeto de visitancia únicamente para montañistas con experiencia y acompañados de una persona conocedora del sitio a visitar” (UAESPNN, 2005-2009: 30).

Aunque se está reglamentando la actividad ecoturística, la comunidad ha logrado determinar que existe este tipo de práctica en la zona de Resguardo que corresponde a la parte oriental del nevado. En este sentido, el pueblo u’wa manifiesta su preocupación al

no ser debidamente informados por las instituciones competentes del Estado, ya que así se demuestra, una vez más, que se sigue utilizando su territorio en prácticas occidentales que quebrantan el sentido que ellos le dan a la tierra.

No obstante, los indígenas no rechazan totalmente el desarrollo de esta actividad si en su práctica se respetan las riquezas naturales existentes en la zona y la cultura occidental se compromete a su conservación. De todos modos, es fundamental la comunicación que se tenga con la comunidad, dado que hay que tener en cuenta que legítimamente ese territorio les pertenece y las medidas que se tomen sobre él son de su interés:

“El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere de un seguimiento constante de los impactos, para introducir las medidas preventivas que resulten necesarias y mitigar los efectos negativos sobre el atractivo” (De Duque y Ochoa, 2008: 9).

Manejo del Agua

El agua es uno de los recursos más escasos del planeta, la demanda del líquido es superior a las reservas existentes, por lo cual, el hombre debe tomar conciencia de la necesidad imperante de usarla de la forma más adecuada. Se puede vivir sin petróleo, sin gas, sin aparatos tecnológicos, sin coches, sin muchas cosas materiales, pero sin agua es imposible la vida:

“Los ecosistemas de agua dulce se ven diariamente amenazados tanto en su calidad como en su cantidad, muchas veces de forma irreversible, debido a diferentes factores asociados al crecimiento demográfico y a las actividades humanas, entre las que se encuentran el desarrollo de infraestructura (presas, canales, diques, desvíos, etc.), el exceso de explotación de recursos pesqueros, la introducción de especies exóticas, la descarga de contaminantes y la transformación de tierras (deforestación, agricultura, crecimiento urbano)” (Contraloría General de la República, 2007: 175).

Según el informe de la CEPAL emitido en 2007, la demanda de agua crece al doble del crecimiento poblacional; en Colombia, a pesar de ser una de las potencias hídricas del mundo, ocupando el puesto 24 entre 182 naciones, cada colombiano posee, en la actualidad, 40.000 metros cúbicos de agua al año, pero de no llevar un correcto

uso del producto a mediano plazo, en el 2020 la capacidad que dispondría cada ciudadano se reduciría a 1.890 metros cúbicos del líquido al año (Contraloría General de la República, 2007: 176).

Controlar el nivel de consumo y hacer un promedio de lo gastado en los últimos años, es una tarea imposible de llevar a cabo, dado que el país no cuenta con un sistema de información continua y sectorial de uso del agua, al tiempo que no ha contabilizado históricamente la cantidad consumida. De contarse con esas cifras, podría ejercerse un control sobre los sectores que más consumen el producto y se podría planificar, de cierta manera, el futuro a mediano plazo para que Colombia no se vea envuelta en una crisis por la falta del líquido.

Para el caso u'wa, el territorio de la comunidad está alimentado por las aguas provenientes de la Sierra Nevada el Cocuy, que alimentan las cuencas de los ríos Casanare, Arauca y Chicamocha a través de numerosos ríos, a la vez que forman numerosas lagunas. El área total de las lagunas de alta montaña en Colombia es de 13.500 hectáreas, de las cuales 8.700 hectáreas corresponden a la Cordillera Oriental, es decir el 64%:

“Para los U'wa, el agua no tiene precio, el agua es nuestra fuente de vida para tomar y subsistir. Nosotros dijimos que el agua se puede vender pero con ese dinero se pueden hacer obras de mejora, sin embargo, el servicio del agua aquí es demasiado caro. Desde que esto sucede, nosotros no vemos apoyo en ningún sentido por parte del alcalde, que es una persona que nos ha visto crecer como campesinos, ha visto como hemos emigrado. Es por eso, que si no vemos un apoyo por parte de él, mucho menos por otros entes estatales. Sin embargo, algunas ONG si se han solidarizado con nuestra causa” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Plan Maestro de Agua

El Plan Maestro de Agua del municipio de Cubará se formuló en el año 2008 con un costo de 11.841 millones de pesos destinados principalmente a obras en el casco urbano e incluía la construcción de una nueva bocatoma que actualmente se encuentra en territorio del Resguardo Unido U'wa. Con motivo de la adscripción del municipio al Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico en el departamento de Boyacá, en 2009 se reformuló el Plan Maestro que se entregó en mayo de 2012 y definió una nueva bocatoma en Caño Quemado, lugar donde existe un acueducto de la

comunidad indígena. Este acueducto tiene una antigüedad de 8 años, abastece de 35 a 40 usuarios ubicados en las veredas El Chuscal, Fátima, Santa Helena, La Misión y La Pradera, dentro de los que se encuentran dos centros educativos, un centro de salud, un internado y una casa comunal indígena:

“Actualmente nuestra preocupación no es por el petróleo, nuestra preocupación ahora es por el medio ambiente y por el agua. Ahora han descubierto muchos minerales y nosotros tenemos que negociar con el gobierno y defender nuestro territorio. Ahora lo más importante es el agua y ha llegado una fundación que dice que va a comprar oxígeno para que los campesinos lo conserven y van a pagar por él, pero esa es la excusa para entrar en nuestro territorio” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

El municipio de Cubará se adscribe al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de Boyacá mediante el Convenio N° 037 del 5 de agosto del 2009. En diciembre de 2009, Corporinoquía expide la resolución No. 700.41.06.152 mediante la cual se otorga permiso temporal de ocupación de cauce para la ejecución del Plan Maestro. En esta resolución se menciona que en la visita se pudo evidenciar que aguas abajo de donde se piensa ubicar la nueva bocatoma para el acueducto de Cubará existe una bocatoma de fondo a escasos 30 metros donde, según versión de la ingeniera Adriana Torres, funcionaria de la Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Cubará, corresponde a un acueducto de la comunidad indígena u'wa que abastece el Resguardo el Chuscal. Frente a ello, en reunión con la Alcaldía de Cubará, la ingeniera sostiene que es un error declarar que la bocatoma se piensa ubicar aguas arriba del acueducto existente, que, por el contrario, el acueducto de Cubará se proyecta aguas abajo del acueducto ya existente.

Sin embargo, como consecuencia de la adscripción del municipio de Cubará al Plan Departamental de Agua de Boyacá, la empresa decide a finales de 2010 actualizar el Plan Maestro, para lo cual la Gerencia Asesora del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, PDA, Aguas Para Boyacá, realiza el contrato de consultoría 013-2011 con el Consorcio EM Boyacá. Esta actualización contempla un Plan Maestro por más de 12 mil millones de pesos y tiene como único objetivo la ubicación de la nueva bocatoma a Caño Quemado, denominado erróneamente como Caño Cristales. Actualmente el municipio de Cubará cuenta con

2.500 millones de pesos asignados que el municipio priorizará para el cambio de bocatoma, el cambio de redes y la optimización de la planta de tratamiento.

6.5. Síntesis de amenazas adicionales a la comunidad

Además de las amenazas que se han expuesto a lo largo de este documento, existen otro tipo de riesgos que ponen en peligro la integridad del pueblo u'wa, como es el caso de la imposición de la religión cristiana, el control y manejo inadecuado de uno de sus recursos más preciados, el agua, la seguridad de sus habitantes, la biodiversidad y, quizá el más importante, la autoridad legítima sobre su territorio y su soberanía ambiental:

“En este proceso, es necesaria la valoración real del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas sobre la naturaleza, y tomar conciencia de que no sólo el método científico occidental es idóneo para investigarla, conocerla, manejarla, protegerla. Cada pueblo indígena posee un saber directo y milenario sobre el medio ambiente de su región, sobre las distintas especies y su utilidad, unido a la conciencia de que cada ser vivo cumple una función específica en el complejo entramado de la biodiversidad, y que la extinción de tan sólo uno de ellos produce un grave desequilibrio” (Falchetti, 2007: 68-69).

El desarrollo de diferentes tipos de proyectos en la zona no debe identificarse, únicamente, como una amenaza a las condiciones ambientales o geográficas del territorio, sino en un sentido más amplio; representan una amenaza tanto para las condiciones biofísicas del mismo como para la cultura y cosmovisión u'wa, principalmente, porque en su mayoría, los proyectos aquí mencionados, representan un quebrantamiento del equilibrio natural que la ley ancestral determina y así mismo una amenaza a los lugares y elementos sagrados de los indígenas:

“Los U'wa tenemos una forma muy especial de controlar el medio donde vivimos. Nuestro comportamiento con respecto a éste se explica en los mitos, creencias, usos y costumbres, cuya antigüedad es la misma del origen de nuestro mundo, de nuestra población y de nuestra cultura, nuestra misión en esta tierra ha sido la de mantener el equilibrio del origen” (Werjayas, Cabildos, Cabildo Mayor, Equipo de Etnoeducación, 1996: 191).

“...la violencia que se ha desatado en las ciudades a raíz del desarrollo de los megaproyectos, es un factor que se ha extendido hasta nuestras tierras. Nosotros, si tenemos que culpar a algo o alguien es al desarrollo de los megaproyectos; cuando estamos libres de ellos, en la zona, sabemos que no hay presencia de

fuerzas armadas, pero cada vez que se dice que va a haber un proyecto, es cuando sufre nuestra sociedad, ya que se involucran en nuestro territorio los grupos armados” (Gilberto Cobaría, septiembre, 2012).

Existen algunos elementos que históricamente han afectado el territorio y cultura u’wa. Estas amenazas han estado marcadas por la visión del desarrollo y el progreso, y a estas les antecedieron amenazas como la de la evangelización, que fue una de las acciones que con su llegada generó conflicto en la comunidad por el tipo de cultura y prácticas que difundían. El ejercicio de la evangelización aún hoy sigue presente en su territorio debido a las transformaciones que promovió, las cuales las identifican con la construcción de los primeros caminos pavimentados, escuelas, conventos o puentes, en general, pequeñas obras de infraestructura que generaron un cambio en las prácticas cotidianas de vida de la comunidad, como lo era, por ejemplo, el uso de los caminos tradicionales:

“Cuando llegó la religión católica a nuestras tierras, ellos nos obligaron a hacer muchas cosas y también nos castigaron. Ellos nos decían que éramos satánicos, que éramos demonios, que le rendíamos culto al diablo. Entonces, lo que hicieron fue decirles a las personas de nuestra comunidad que salían de aquí, que nosotros invocábamos al diablo y ellos eran hijos de Dios. Por eso muchos eligieron ese camino, decidieron quedarse en Cubará y no volver al resguardo, e incluso muchos han llegado a negar hasta su misma raza y se han avergonzado de ella.

En la Asociación lo que hacemos es aclarar las cosas, quitarles a las personas esos malos pensamientos. Cuando uno sale del Resguardo no debe tener dudas sobre lo que siempre ha pensado, debe tener una posición clara y saber qué es lo que debe defender. En las reuniones comunitarias se sensibiliza a nuestros jóvenes, se les dice que tenemos una cultura, una visión y unos mandatos propios. La religión católica también tiene sus propios mandatos, pero lo importante es convivir y saber respetar las costumbres ajenas” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Actualmente, el crecimiento económico como modelo de desarrollo imperante y su sostenibilidad fundamentado en la explotación de recursos naturales determina una ambiciosa mirada hacia el territorio u’wa como sitio estratégico, como una región valiosa para la extracción de recursos como el petróleo y el gas y, además, fundamental para el transporte de crudo extraído de la región oriental del país hacia los puertos del norte. De esta forma, la zona es prioritaria para el fortalecimiento del comercio exterior, principalmente con Venezuela; y para la comunicación de esta frontera con el centro y

suroccidente de Colombia. Esta visión se encuentra en directa contradicción con la visión que los u'wa tienen de su territorio como un territorio sagrado esencial para la continuidad de su vida y su cultura:

“La defensa por la naturaleza del pueblo U'wa no ha sido una cuestión de ayer. Esta viene desde la creación del mundo. La visión que nos ha llegado de nuestro señor Sira, es la defensa, protección y cuidado de nuestra madre naturaleza y de todos los elementos que para el mundo de occidente o para los no indígenas, es lo que se define como riquezas, y dentro de ello se incluye la parte petrolera. El petróleo, como es bien sabido, es la sangre que fluye por toda nuestra madre naturaleza y ayuda al mantenimiento de la misma. Todo este pensamiento proviene de nuestros ancestros y es parte de nuestra tradición” (Gilberto Cobaría, septiembre, 2012).

En lo que se refiere a la seguridad de sus habitantes, con el paso de los años y el ingreso de nuevos grupos armados al margen de la ley, como el paramilitarismo, los movimientos guerrilleros se han visto en la necesidad de buscar nuevas formas de reclutamiento y financiamiento económico para estar en capacidad de combatir al ejército y las autodefensas. La forma más común de reclutar personal, es a través de promesas que, por lo general, no se cumplen, y en las que se garantiza una mejora en el nivel de vida de los reclutados y sus familias; de ahí el alto nivel de desertión entre las filas subversivas. En lo que se refiere a los grupos indígenas, muchos han terminado formando parte de estos movimientos, o han realizado con ellos algún tipo de alianzas al ver esa posibilidad como un medio para defender los derechos que consideran vulnerados por parte del Estado:

“Otra cuestión importante que hemos planteado es que nuestros jóvenes, ya sea hombres y mujeres, no pueden formar parte de las filas de ningún ejército, ya sea al margen de la ley o no, y pedimos que se nos respete esa decisión. Lo otro que decimos es que nuestro territorio no es territorio de campamentos ni de lugares de entrenamiento. Las vías y los caminos son libres, si la guerrilla pasa, nosotros no podemos decirles que no pueden pasar por allí, porque lo que dirán es que el ejército tampoco podría realizar el mismo trayecto” (Gilberto Cobaría, septiembre, 2012).

Sin embargo, además de los secuestros extorsivos, los asesinatos selectivos y las vacunas³², el nuevo mecanismo de financiamiento de los grupos subversivos, consistente en el cultivo y procesamiento de narcóticos, ha sido un hecho perjudicial para las comunidades aborígenes, no solo de esta zona sino del país entero. En muchos casos, han expropiado sus territorios y han acabado con los recursos naturales que son necesarios para su subsistencia:

“Los costos ambientales son incalculables, en un año se talan alrededor de 5.000 hectáreas de bosques para dedicarlos a los cultivos ilegales. En la producción y elaboración de la cocaína se usan alrededor de treinta productos químicos altamente tóxicos, estos generalmente son vertidos a las fuentes de agua y suelo. A esto contribuye el Gobierno Colombiano utilizando grandes cantidades de controladores de malezas como el Paraquat, Glifosato, y Teburiton, para fumigar y erradicar los cultivos de coca, amapola y marihuana, violando toda norma ambiental, sanitaria y de coordinación interadministrativa. Estas sustancias en los Estados Unidos se clasifican como altamente tóxicas y pueden producir efectos de intoxicación, pérdida de la visión, de las funciones nerviosas y motrices en los seres humanos, trastornos en el embarazo y efectos nocivos en la flora y en los peces” (ONIC, 1998: 140).

“Antiguamente teníamos ríos limpios y puros, hoy en día de eso ya no queda nada, todos se encuentran totalmente perjudicados y es una situación que venimos denunciando desde 1995, cuando los araucanos empezaron a fumigar los cultivos de coca que les pertenecían a los grupos armados al margen de la ley, y los U’wa no estábamos de acuerdo con esa acción porque perjudicaba otros recursos de la naturaleza” (Verito Cobaría, septiembre, 2012).

Con respecto al control de las fuentes de agua y la biodiversidad del territorio u’wa, estos elementos constituyen una de las amenazas que por el momento no presenta mayor riesgo, pero, poco a poco, pueden gestar conflictos con lesiones considerables para la comunidad. Aunque no se pueden identificar grandes megaproyectos que pretendan privatizar las fuentes de agua, es necesario señalar que existe el germen de conflictos por el manejo de este recurso. Es el caso del Plan Maestro de Cubará que busca definir una nueva bocatoma en la vereda El Chuscal ubicada en el Resguardo

³² Cobro de cierta cantidad de dinero a terratenientes, ganaderos y empresarios de las zonas rurales, con el fin de que el grupo al margen de la ley respete su integridad, la de sus trabajadores y sus bienes materiales.

Unido U'wa, siendo preocupante el hecho de que actualmente el municipio está adscrito al Plan Departamental de Agua de Boyacá:

“En el caso de los U'wa, dentro de su plan de gobierno, se ha creado el proyecto del Plan Maestro de Privatización del Agua en Cubará; se va a vender a una multinacional que va a aportar seis mil millones de pesos para instalar las tuberías y privatizar el servicio. Es injusto que se haga esto en un municipio tan pequeño y en una población tan pobre, sobre todo cuando el agua viene del mismo territorio U'wa” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Las amenazas relacionadas con el control de las fuentes de agua y la biodiversidad tienen de fondo un conflicto y amenaza mayor relacionada con la autonomía del pueblo u'wa y más concretamente con la autoridad ambiental sobre su territorio. Las prácticas que lleva a cabo el hombre blanco en la zona perjudican gravemente el ecosistema de la región, y parece ser que solo la comunidad es capaz de entender el daño que estas actividades ocasionan. El asentamiento de grupos de colonos en las áreas que pertenecen a la Sierra Nevada del Cocuy y la manera de obtener los recursos para su subsistencia, no es la más adecuada, porque en vez de procurar que estas riquezas se reproduzcan y que no se note su ausencia, las especies vegetales y animales se encuentran con un espacio cada vez más hostil para su supervivencia:

“Los indígenas narran que cuando los colonos tumbaron los árboles, la caza se intensificó en las pocas zonas de bosque que iban quedando. Lo anterior significó una reducción de los animales terrestres y, en consecuencia, un aumento de la cacería de aves. Si la caza se ha reducido, lo mismo ha pasado con la pesca. Por un lado, pescadores no indígenas –colombianos y venezolanos– usan chinchorros. Pero algunos indígenas también abusan en los caños donde está autorizada la pesca, y usan atarrayas. El resultado es que, por la pesca excesiva, la cantidad de peces está disminuyendo” (IDEADE, 1997b: 12).

Además de los anteriores, el progresivo cercamiento de la comunidad es una de las consecuencias nefastas, que ha traído la ejecución de algunos proyectos implementados en la zona, como la construcción del gasoducto y el oleoducto Bicentenario, que fueron diseñados con el fin de no comprometer las tierras del Resguardo Unido U'wa, dado que, de lo contrario, era necesario llevar a cabo el proceso de consulta previa. Este hecho evidencia dos elementos que son de gran relevancia. El primero es que no existió reconocimiento en ningún sentido por parte de las entidades estatales ni por parte de las empresas presentes en el territorio indígena, de lo que significa para la cultura su espacio geográfico y la naturaleza en general, lo cual ha

conllevado a que los proyectos desarrollados en la zona solo contemplaron los requerimientos de algunas autoridades como el Ministerio del Medio Ambiente, en lo que se refiere al desarrollo del estudio de impacto ambiental o, del Ministerio del Interior, en relación con el desarrollo de medidas de la consulta previa, sin por ello atender a los requerimientos de las autoridades del Resguardo ni tener en cuenta los intereses del grupo nativo. Lo anterior hace referencia, específicamente, a la explotación petrolera en el territorio u'wa, por lo cual, los dirigentes de la comunidad, a través de la ONIC lanzaron un comunicado expresando la sensación de engaño que les produjo el encuentro con los representantes del Estado y las multinacionales petroleras:

“A principios de 1995, las comunidades u'was fueron citadas a la ciudad de Arauca para informarles acerca de las labores a adelantar por la petrolera. Engañosamente, se recogieron firmas de asistencia y ahora se hacen aparecer como aprobación por parte de la comunidad al proyecto” (ONIC, 1995: 1).

El segundo elemento consiste en que estos se desarrollan en las zonas aledañas al Resguardo, con lo cual puede estar presentándose un fenómeno de presión en los límites de los predios indígenas, produciéndose un proceso de cercamiento. Entre las actividades que producen el aislamiento está la asignación de bloques petroleros en Boyacá, Norte de Santander, Arauca y Casanare, la construcción del gasoducto en la parte norte, el oleoducto Bicentenario y el pozo Gibraltar que a su vez determinan el alto grado de militarización del territorio. Por el noroccidente y suroccidente del Resguardo se produce una presión cada vez mayor por el desarrollo de actividades mineras y más específicamente por la extracción de carbón que pretende ser llevada a cabo en las zonas de páramo.

Por último, en la parte suroccidental, específicamente en la zona de la Sierra Nevada El Cocuy, la actividad ecoturística es bastante dinámica. Aunque “El ecoturismo es definido por la Sociedad Internacional de Turismo como viajes responsables a áreas naturales con cuidado del ambiente y sostenimiento del bienestar de los habitantes locales” (Saavedra, 2005: 179), para los indígenas, esta actividad sobre su territorio es vista como una violación constante a su espacio sagrado. Para el Estado esta zona es un negocio, para los u'wa es su vida y su lucha es por respetarla y hacerla respetar, no ingresando en los lugares no permitidos y siguiendo las leyes impuestas por su dios Sira para la conservación de todo lo que allí existe:

“Lo que para los ‘blancos’ es el Parque, para los U’wa es Sisuma, su zona sagrada de máxima restricción. Y es zona sagrada no desde 1977, cuando por un decreto se declaró la creación del Parque, sino desde que Sira –Dios- creó el mundo. Y es sagrada no porque el Gobierno lo haya querido sino porque Sira así lo dispuso: para que los páramos, que regulan las corrientes de agua, no sean dañados. Para que los bosques puedan seguir ofreciendo los animales de cacería; para que en las lagunas se siga asistiendo al nacimiento eterno de los ríos” (IDEADE, 1997b: 4).

Por otra parte, la presencia del Parque Nacional Natural El Cocuy y el desarrollo de proyectos de ecoturismo en la zona, puede significar el inicio de una mayor presión sobre el territorio u’wa con el fin de vincularlo a mercados de venta de servicios ambientales o proyectos relacionados con los mercados de carbono, debido a que el programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, siendo el financiador de estos proyectos en Colombia es, actualmente, una de las organizaciones que está promoviendo la vinculación de territorios indígenas a este tipo de mercados.

De esta forma, es claro que el fenómeno de desplazamiento ha sido gradual desde la época de la Colonia, ha conllevado progresivamente al traslado de varias comunidades u’wa hacia las zonas altas de sus territorios en las cuales habitan actualmente y que son reconocidas como el Resguardo Unido U’wa.

6.6. Visión general de los dirigentes u’wa sobre el desenvolvimiento de las relaciones con los *reowa* y su posición frente al conflicto

Las relaciones económicas, sociales y políticas de los pueblos indígenas de América con las instituciones dominantes: primero, en tiempos de la Conquista; después, durante la época colonial; y por último, en los doscientos años de historia republicana, se han caracterizado por las agudas contradicciones que se reflejan en una visión radicalmente opuesta sobre la conducta humana respecto a la naturaleza, y en los intereses y motivaciones que impulsan su diario vivir, plagando su historia común de situaciones y acontecimientos violentos. En este sentido, un ejemplo claro del pensamiento de los grupos indígenas de Colombia es el pueblo guambía, ubicados en la zona suroccidental del territorio nacional, quienes a través de su ley *K Misak*, exponen una serie de antecedentes que representan el sentimiento las minorías étnicas:

- “1. En la conquista invadieron nuestros territorios, saquearon nuestro patrimonio natural, generaron el genocidio de pueblos milenarios, acabaron con muchas de nuestras culturas, con su organización social, política y económica, por eso los gobiernos del mundo tienen la gran deuda histórica y ecológica, que deben efectuar su indemnización a nuestros pueblos.
2. En la colonia continuaron con el proceso exterminador de los pueblos en resistencia, con la usurpación de sus territorios, acorralándolos en pequeñas áreas denominadas resguardos, siguieron saqueando la madre naturaleza causando su deterioro y esclavizando y explotando a nuestros antepasados e imponiéndoles sus ideas, su política y su religión.
3. En las guerras de independencia nuestros abuelos participaron directa y masivamente, colocando muchos muertos, pensando que al liberarse del yugo español se acabaría la esclavitud, se obtendría la libertad y se retomaría El camino ecológico y las nuevas tendencias de explotación de recursos naturales el camino propio, volviendo a los territorios que les habían sido usurpados, pero lo único que sucedió fue que cambiamos de amo, porque después de la independencia siguió el sistema esclavista, colonialista, exterminador y aniquilador.
4. Con la República se impusieron nuevas leyes, normas y decretos destinados a liquidar los resguardos existentes, a declarar los territorios indígenas como baldíos, y a nuestros abuelos como salvajes y menores de edad, favoreciendo a los hacendados terratenientes y a la iglesia en su tarea de reducción de los salvajes a la ‘vida civilizada’.
5. La violencia generalizada que ha vivido el país durante los siglos ha causado grandes desplazamientos de pueblos indígenas, con lo cual se busca ocupar nuestros territorios para continuar saqueándolos en beneficio de las diferentes fuerzas con sus grupos armados y las transnacionales apoyadas por el estado colombiano y , en consecuencia, la resistencia por la vida y existencia de los pueblos indígenas se ha vuelto cada vez más difícil y compleja, porque nuestros pequeños territorios se han convertido en escenarios de guerra, causando daños irreparables a nuestro patrimonio cultural y natural, a nuestra economía, nuestra salud y nuestros sistemas organizativos y sociales propios.
6. En 1991 participamos en la constituyente y la Constitución resultante nos reconoció algunos derechos, pero esto no ha sido más que un engaño, porque el proceso de exterminio de nuestros pueblos en todos los campos continúa” (Cabildo de Guambía, 2007; ver también Coral, 2011: 108-109).

El gobierno u’wa, conocido como Autoridad Tradicional U’wa, se basa en el liderazgo espiritual de los *werjayas*, ancianos sabios, y los *carecas*, estos últimos hechiceros u hombres de medicina, cuya tarea es la de conocer la historia de los u’wa y las necesidades actuales de su pueblo. Entre sus funciones también está la de meditar sobre su origen y comunicarse con los espíritus de las montañas y los ríos. Su papel en el desarrollo del conflicto que sostiene la cultura nativa con la multinacional OXY es

fundamental, dado que son ellos quienes dirigen el pensamiento general de la comunidad y marcan el camino que el grupo debe seguir para lograr defender lo que por tradición les corresponde. Los *werjayas*, al ser los guías espirituales de su cultura, rescatan los valores que han dirigido a la comunidad desde sus orígenes y reconocen que los bienes materiales y el exceso de los mismos no están dentro de sus prioridades, diferenciándose en esto del mundo occidental; saben qué es lo que motiva a la cultura occidental:

“En todo el mundo lo que se reconoce ahora como sagrado es el *Mercado*, la *Mercancía*, el *Dinero* y el *Capital*. Nuestras culturas los conocen, pueden utilizarlos, pero no los reconocen como dioses, ni como jefes, ni como sagrados. Esos poderes entran con fortaleza a destruir lo que tenemos, a exigirnos que les rindamos culto, a desterritorializarnos nuevamente, a sacarnos de las selvas, las montañas y los desiertos; a matar los peces y las aves, las aguas y el aire. Es la segunda conquista” (ONIC, 1998: 113).

Los u’wa, al igual que todos los pueblos indígenas, participan de una historia común. Como ya se ha señalado, son un pueblo indígena cuya lengua pertenece a la macro familia lingüística chibcha, con tres variantes dialectales llamadas Cobaría, Barro Negro y Agua Blanca. Esta comunidad indígena es de arraigo milenario y tiene como parte de su riqueza cultural el mito, la canción y la poesía, los cuales son considerados valores que reafirman constantemente sus orígenes e identidad cultural y, al tiempo, son un medio para rescatar la historia que a través de los últimos cinco siglos ha intentado ser borrada por el *reowa*. Ana María Falchetti ha expresado esta idea como sigue:

“Durante casi quinientos años los uwas han defendido su memoria histórica – fundamento de la identidad y de los valores profundos de una sociedad– rescatada a través de los largos años de estudio de sus chamanes y de su método pedagógico que utiliza los mitos para interpretar, transmitir y enseñar su propia historia. Se han negado a dejar morir los principios básicos y universales –identidad, equilibrio, reciprocidad, equidad– que deben regir el orden social en la búsqueda de su funcionamiento armónico. También han comprendido que para sobrevivir y adaptarse a situaciones históricas distintas, el pensamiento mítico ancestral debe transformarse a sí mismo y apropiarse de la historia, con la intención política de reconstruir la identidad y la cultura desde su misma esencia, para así relacionarse con otra gente en el marco de la autenticidad y el respeto por la diferencia, en su búsqueda constante de modelos de vida que permitan inventar un futuro armónico” (Falchetti, 2007: 16).

Su tradición oral ha sabido asimilar los sucesos de la conquista, de la época colonial y de la vida republicana, fenómenos que identifican bajo un denominador común, la ambición de ‘*reowa*, el hombre blanco’, que solo se ha interesado por la posesión de riquezas. No obstante, después de cinco siglos de explotación, los u’wa aún subsisten porque no han renunciado a sus cantos y rituales, de los cuales los dos más importantes son los mitos cantados de *reowa*³³, que corresponden al ritual de soplar y conciernen principalmente a procesos de purificación, y el Aya, que se celebra después de la *reowa* para el reordenamiento del universo y los seres que en él existen:

“La *reowa* es el ayuno, y consiste en la purificación del hombre cuando éste entra en contacto con la naturaleza. Son los ritos de purificación que realiza el hombre para cumplir con la naturaleza; cuando el hombre va a entrar en la cultura, o sea, cuando se va a la selva, se piensa que si ha estado en la ciudad o en occidente, debe hacer una serie de ayunos y rituales para purificarse. Todo eso significa la *reowa*” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

La cultura u’wa de selva y montaña, a través de sus cantos y rituales, mantiene la comunicación y el equilibrio con los diferentes niveles del universo. Es una sociedad flexible y sin estratificaciones, que solo le concede preeminencia al saber ancestral manejado por los *werjayas* o líderes espirituales. Sus prácticas culturales mantienen el equilibrio con la selva, la huerta, los hombres y los espíritus:

“Los U’wa vienen desde siglos atrás cuidando del mundo material y del mundo espiritual, toda la vida, logrando una armonía entre el pueblo y el medio ambiente; articulando concepciones sobre la naturaleza, la tierra, los animales, los dioses y los hombres, todo esto narrado en grandes ciclos de mitos cantados que se celebran continuamente a lo largo del año. Formando un complejo de sistemas asociado a prácticas sociales, individuales y colectivas, que rigen el trabajo agrícola, patrones nutricionales, consumo de alimentos, el ceremonial de los ritos de paso y procreación” (Ortiz, s.f.: 13).

“La armonía es no contaminar, mantener un ambiente sano, un ambiente de equilibrio, un ambiente puro; un ambiente donde no haya tantas enfermedades, y la contaminación sea mínima, entonces así se logra la armonía, se respeta la naturaleza y se siente la pureza en ella. Se trata de respetar, porque hay partes de la naturaleza que no se pueden tocar, que no se pueden tumbar, que no se pueden

³³ Como se ha especificado en páginas anteriores, el término *reowa* es utilizado de dos formas por los U’wa. En la nota 5 se aclara la definición del término.

socular. Hay ríos que no se pueden tocar, que deben respetarse y que no se pueden comer los peces que hay en ellos, esos ríos son intocables porque tienen sus leyes, además porque son conexiones entre el páramo y el mar. Son ríos sagrados porque desembocan en el mar y por eso hay que respetarlos. Si llegamos a violar ese reglamento a nosotros se nos castiga; pueden llegar enfermedades, contaminaciones y muchas cosas malas, por eso lo que nosotros hacemos es respetar” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

De acuerdo con los preceptos que rigen el pensamiento indígena, el territorio es un espacio geográfico de carácter colectivo que sirve de base tanto para la supervivencia material como cultural, permitiéndole a una determinada cultura diferenciarse de otras comunidades. Desde el punto de vista de las leyes de origen, los territorios indígenas son áreas habitadas de forma continua por una determinada colectividad, exista o no su reconocimiento legal, y se constituyen como el elemento central para el desarrollo de las actividades sagradas, sociales, económicas, políticas y culturales. Es por eso que desde la filosofía nativa no se puede separar al hombre de la naturaleza, éste es parte de ella.

No solo para los u’wa, sino para la gran mayoría de las colectividades indígenas, el territorio es el fundamento sobre el cual nace y se desarrolla la vida de la comunidad; es el espacio que se considera el corazón del mundo y está construido de acuerdo con la cosmogonía nativa. El vínculo que los une a un determinado sitio geográfico, al que consideran ancestral, es lo que hace que se caractericen como pueblos originarios:

“Los pueblos indígenas están ligados a un espacio en el que se han desarrollado como culturas diferenciales. El Territorio es la base de las cosmovisiones indígenas, al que consideran la matriz de su identidad cultural y sobre el que tienen una misión ancestral de defender y conservar como hijos de la naturaleza/Tierra a la que consideran como la madre (*Pachamama*) y es sagrada. Comprenden el significado del territorio como soporte espiritual y escenario de la vida de toda la comunidad, y como presupuesto esencial para la preservación de su modo de vida, que está inserto en los llamados Planes de vida” (Duro, 2014: 4).

El área geográfica u’wa que figura en los mitos cantados se extiende desde la Sierra Nevada de Mérida, en Venezuela, hasta Colombia donde incluye las actuales poblaciones de Chinacota, Málaga, Oiba, Chima, Bucaramanga, Chiscas, Chita, Salinas de Chita, Güicán, los piedemonte llaneros de Tamará, Tame y Margot. Dentro del territorio colombiano, también incluye la región de Sararé en el departamento de Arauca, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Casanare, y va desde el extremo de la

Sierra Nevada del Cocuy y el piedemonte Llanero, por el sur, hasta el Valle de Pamplona, por el norte:

“Su territorio ancestral ocupaba amplias regiones alrededor de la Sierra Nevada del Cocuy –también conocida como Sierra Nevada de Chita, Chiscas o Güicán– que hoy corresponden a los departamentos colombianos de Boyacá, Norte de Santander, Santander, Arauca y Casanare, con una extensión a los estados de Táchira y Apure en Venezuela” (Falchetti, 2007: 23-24).

En la época precolombina, según Verito Cobaría, este territorio comprendía alrededor de un millón cuatrocientas mil hectáreas, aproximadamente. Pero desde la llegada de los conquistadores han ido perdiendo poco a poco sus tierras y en la actualidad, por los procesos de colonización, están confinados solo a lo que –antes de la creación del Resguardo Unido U’wa– se conocía como los resguardos de los clanes Cobaría, Tegría, Bocota y Rinconada, con 61.500 hectáreas, y las reservas de Agua Blanca y Taburetes, con 8.000 hectáreas. Ese territorio original sigue siendo recordado y demandado:

“Nos damos cuenta que día a día violan nuestro territorio, entran a él trabajadores de multinacionales sin nuestro permiso. Estas tierras nos pertenecen legalmente, y así como nosotros, muchas culturas indígenas del país se encuentran en el mismo problema que lo único que hace es fomentar la guerra. El gobierno ahora quiere salvaguardar legalmente nuestras tierras y nosotros agradecemos ese gesto, pero las tierras que nos niegan no nos las quieren devolver, alegando que eran terrenos baldíos, cuando ese territorio nos ha pertenecido desde antes de la época colonial” (Verito Cobaría, septiembre, 2012).

El conocimiento u’wa es religioso, mítico y poético, y se alimenta tanto del mundo terrenal como de los espíritus que lo conforman. Los actos de los antepasados y de los dioses se recrean constantemente con las prácticas cotidianas y en épocas especiales con la celebración de sus principales ritos. Ser u’wa requiere de tiempos y espacios muy elaborados; soportar, gracias a sus facultades extraordinarias, largas jornadas de ayuno y vigilia. Según su imaginario, tienen la facultad de comunicarse con los dioses y con los distintos mundos y espíritus; saben cantar y relatar diversos mitos, además, que son capaces de luchar contra los espíritus de la enfermedad y la muerte. Ellos trabajan solidariamente por el bien del pueblo:

“Las autoridades U’wa procuran mantener el equilibrio dominando el aire, el agua, el viento, para que todo eso no sea una amenaza para el mismo plan de la naturaleza; sino que se mantenga regulado, porque cada árbol, cada piedra, cada cosa, todo tiene su ley, su espíritu, su origen, su misión y su razón de existir en la tierra. Es por eso que el U’wa conoce y respeta las leyes, convive con la naturaleza y trata de mantener la armonía para que el mundo se mantenga libre de enfermedades y de paso minimice las guerras en nuestros territorios” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Todos los árboles y ríos tienen sus propios dueños, si los u’wa no tocan algunos de ellos es con el fin de lograr su conservación. Esta concepción que, en general, tiene la cultura acerca del trato que se le debe dar a la naturaleza, la han aprendido de sus antepasados, que a su vez les han enseñado el respeto por todo lo que los rodea y especialmente por la vida. Como señala Falchetti, este tipo de relación con la naturaleza ha despertado el interés en algunos sectores del país y a nivel mundial, aunque en otros muchos persiste una imagen primitivista:

“En la actualidad, los reclamos de los uwas se insertan en el escenario mundial ante el interés cada vez mayor en los sistemas indígenas de manejo del medio ambiente. En convenios internacionales suscritos por el Estado colombiano, se contempla la preservación y promoción de los conocimientos de comunidades indígenas y campesinas que ‘entrañen modelos de vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad’, al tiempo que la nueva Constitución colombiana hace un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de sus distintas visiones del mundo, del medio ambiente, de la autoridad, y de su capacidad para regir colectivamente sus propios destinos. Sin embargo, la imagen de los indígenas que persiste en amplios sectores nacionales e internacionales los congela en el tiempo, les impone una identidad artificial construida desde fuera, los idealiza o los imagina como primitivos y desvalidos, y desconoce tanto su manera integral de percibir la naturaleza y la realidad como su capacidad –demostrada durante centurias– de ajustar su conocimiento ancestral y su historia a situaciones distintas, de transformarse desde su misma esencia, de construir permanentemente su propia identidad” (Falchetti, 2007: 69).

Aunque el pueblo u’wa sabe que es tratado en el mundo occidental, al igual que muchas comunidades indígenas del país, como un grupo atrasado e ignorante por evitar la explotación de diferentes recursos en su territorio, sabe también que su forma de actuar es la adecuada. El amplio conocimiento que tienen sobre la naturaleza y el manejo de los recursos que en ella se encuentran son el producto de la experiencia que sus antepasados les han legado a través de muchas generaciones:

“Cuando nos comunicamos como pueblo o tenemos la forma de comunicarnos con nuestra madre naturaleza por medio de la espiritualidad, no es necesario hacer medidas en cantidad y peso, sino que eso se mide por medio de la espiritualidad. Si nosotros decimos ‘vamos a cazar’ o ‘vamos de cacería’, por medio de la espiritualidad uno va a conseguir los animales necesarios, los demás, la naturaleza se encarga bien sea de esconderlos o protegerlos a su manera. Si nosotros encontramos una manada o bastantes animales, ellos andan entre cincuenta, cien o doscientos, pero si uno ya ha cazado dos o tres, la naturaleza se encarga de esconder el resto. Eso quiere decir que la naturaleza ya nos está diciendo que no debemos cazar más, ya que con eso es suficiente. Así mismo, uno puede ir de pesca y puede llegar a un pozo. Cuando empieza se pueden ver muchos peces, pero llega un momento en que la naturaleza le da a uno a entender que ya es suficiente y el resto de peces se hacen difíciles de pescar.

Todo va de acuerdo con la espiritualidad porque nosotros no diferenciamos la energía de la materia. Nosotros, cuando invocamos a la espiritualidad, lo que hacemos es una integración, donde la materia necesita del espíritu y el espíritu necesita de la materia. En ese sentido, es donde decimos que tomamos lo necesario, la misma naturaleza es la que le dice a uno qué se puede tomar y qué no, dónde se puede entrar y dónde no; también dónde están los espacios de alimentación de los animales, y en este caso, son sitios donde no debemos ingresar, debemos ir a otro lado, porque así se están creando de paso unas marcas, en las cuales los animales van a dejar nuestros productos quietos. De esta forma, se crea un cercado donde uno siembra y deja que los animales consuman también” (Gilberto Cobaría, septiembre, 2012).

La implementación de modelos desarrollistas en los países del llamado Tercer Mundo ha dado origen a la incongruencia de que, siendo estos territorios poseedores de una enorme riqueza, compuesta primariamente de recursos naturales, los pueblos originarios que habitan en ellos vivan en condiciones de pobreza extrema; se encuentran en esta grave situación debido, principalmente, a la pérdida de sus tierras, lo que los convierte en los colectivos sociales más vulnerables del planeta. La globalización que predomina en la actualidad ha acentuado la marginalidad existente, favorecida por los acuerdos entre estados y gobiernos, impidiendo la participación de los grupos minoritarios que se encuentran en una situación subalterna:

“En 2010, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas realiza y publica un informe titulado ‘La situación de los Pueblos Indígenas en el mundo’ (Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas-ONU, 2010), que analiza y exhibe datos que la misma institución no duda en calificar como ‘alarmantes’ sobre la pobreza entre los pueblos originarios. La

publicación, organizada en siete capítulos temáticos, arroja entre otras las siguientes constataciones: que la pobreza, la marginación y la desigualdad afecta a estos colectivos de manera desproporcionada. Datos que demuestran esta evidencia son las tasas de pobreza entre los nativos, muy superiores a las del resto de los ciudadanos de América Latina, en Paraguay llegan a 8 puntos por encima, seguido de Panamá donde la pobreza indígena supera en 6 puntos a la ‘no indígena’ y México y Guatemala que presentan tasas en torno a 3 puntos superior a la media. Los ingresos de los trabajadores indígenas estarían por debajo del 50% en relación a los no indígenas, siendo Bolivia el país que mayor diferencia exhibe en este caso. En Colombia el 63% de la población indígena estaría sumida en una pobreza estructural y el 47,6% está por debajo de la línea de miseria” (Duro, 2014: 6).

Ante el fracaso de las políticas desarrollistas que se han implementado a nivel mundial en las últimas décadas, que no han acabado con la pobreza pero sí han contribuido enormemente al deterioro de la naturaleza y del medio ambiente, el pensamiento indígena ha ido tomando fuerza gradualmente. Es evidente que la idea de no abusar de los recursos naturales es lo que ha debido hacerse desde hace mucho tiempo para evitar el gran daño que se le ha causado al planeta. Sin embargo, a pesar de que las costumbres indígenas son un ejemplo y un modelo que se debería seguir, a la gran mayoría de sociedades del mundo, los avances tecnológicos y los valores que giran en torno a los bienes materiales les ha creado una serie de necesidades superfluas que les impide abandonar los estilos de vida que inevitablemente conducirán a la destrucción total de la humanidad:

“Los uwas perciben cómo los grandes proyectos de explotación de recursos naturales con fines estrictamente económicos pueden ocasionar graves desequilibrios, como ha ocurrido en otras regiones del país, al aumentar la colonización caótica, la invasión de territorios indígenas por colonos foráneos, la destrucción de los bosques, la extinción de especies animales, la contaminación, la proliferación de tugurios, el desarraigo y la pobreza” (Falchetti, 2007: 69-70).

La protección que ellos le brindan a la naturaleza tiene como fin mantener el equilibrio que promueve la vida. Los u’wa no encuentran separación entre su cultura y el medio ambiente, ya que la tierra es su madre y su misión es protegerla. Anacondas, jaguares y tucanes son algunas de las muchas especies que los indígenas han preservado por miles de años. Su obligación es asegurar que estas especies continúen existiendo y que su existencia esté directamente vinculada con la de los seres humanos. Mantener el

equilibrio entre los mundos que forman parte de su cosmología es también una de sus principales preocupaciones:

“Nosotros somos una cultura con unos principios muy claros y una serie de mandatos que Dios nos dio. Se dice que los U’wa somos los guardianes de la madre tierra, porque cuando Dios creó el mundo y creó al hombre, a cada pueblo le dio su misión para que pudiese subsistir. De ahí surgió la Ley de Origen, que dice que los U’wa deben valorar y respetar, conocer las normas de la naturaleza para poder convivir en ella. La naturaleza no se puede destruir porque ella está viva; ella tiene que seguir con su fuerza, su energía, y para eso el hombre tiene que equilibrarla llevando a cabo sus ritos, sus cantos, respetando la norma, respetando la Ley de Origen, respetando la ley de la naturaleza, y todo eso hace que el hombre se mantenga en armonía con la misma naturaleza, con el mismo hombre y sobre todo con el universo” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Las ansias de riqueza del hombre blanco han creado un alto índice de deforestación que tiene como consecuencia un impacto negativo en la biodiversidad del bosque debido a la pérdida de éste y al desplazamiento de una gran variedad de animales terrestres y aves, afectándose sus cadenas alimentarias y la de aquellos indígenas que viven de la caza. De otra parte, se da la interrupción de importantes corredores biológicos y espacios de reproducción de especies que en la actualidad se encuentran en peligro de extinción:

“Los U’wa ven la invasión de su territorio por los blancos como la causa directa de la amenaza de extinción física y cultural que se cierne sobre ellos. Los efectos de la presencia blanca son ubicuos. Por ejemplo, la caza indiscriminada de animales salvajes y el uso extensivo de dinamita en las partes bajas de los ríos prácticamente han exterminado a los animales y los peces. Como resultado, los U’wa se han visto privados casi totalmente de sus fuentes tradicionales de carne y la ausencia de proteínas en su dieta es notoria” (Eraso, 1997: 33-34).

Es inevitable el efecto negativo sobre acuíferos y cuerpos de aguas superficiales debido a la contaminación que generan los desechos provenientes de las trituraciones de las rocas, sustancias radiactivas y lodos de perforación traducidos en arcillas que facilitan las labores de exploración. Los humedales y demás cuerpos de agua también son contaminados por los constantes derrames de petróleo y residuos minerales, que afectan la fauna y la flora acuática, causando malformaciones genéticas: los peces acumulan contaminantes en sus tejidos grasos provocando el envenenamiento crónico de la población que habita a orillas de las distintas vías fluviales. Entre las

enfermedades que pueden producirse en la población indígena se encuentra el asma, la leucemia, el cáncer, problemas en los ojos y en la piel y se presenta una alta incidencia de enfermedades virales en toda la zona:

“...se están detectando muchos casos de cáncer, leishmaniasis, enfermedades en la sangre y cáncer en la piel. Son muchas enfermedades que aquí no existían y que nosotros nunca padecimos. Hemos tenido enfermedades leves como gripa, por los cambios de clima y de temperatura, pero nunca enfermedades más severas como el cáncer de matriz. También hay otro tipo de padecimientos que ni los médicos pueden dar un diagnóstico acertado y decir exactamente qué es. Es por eso que nosotros exigimos un ambiente sano, un ambiente donde el hombre pueda vivir sanamente” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Desde hace más de dos décadas, los grupos u’wa que habitan en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, han venido adelantando una importante campaña de defensa de su territorio frente a la amenaza de la explotación petrolera y de otros recursos naturales. Ellos han sido víctimas de numerosos actos de violencia, producto de las exploraciones sísmicas y explotación de recursos naturales en sus predios:

“Cuando llegó Ecopetrol a la zona e iniciaron las exploraciones sísmicas, también llegaron los grupos armados y por consiguiente las guerras entre ellos. De esta forma, han invadido nuestro territorio, pero a su vez ha hecho que nosotros los U’wa nos fortalezcamos cada vez más y logremos ejercer la autonomía sobre nuestras tierras. Es por eso que antiguamente nos señalaban pero afortunadamente este punto ya se ha aclarado y repetimos que no queremos ningún acto salvaje en nuestro territorio; hemos hablado con la fuerza pública para que respeten nuestras tierras” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

El 26 de octubre de 1991, la compañía Occidental de Colombia –filial, como ya se ha señalado, de la multinacional Occidental Petroleum Corporation (OXY)–, en asociación con la multinacional Shell, obtuvo un contrato de asociación con Ecopetrol, para explotar el bloque Samoré, en el cual se estimaba encontrar un yacimiento de 1,5 billones de barriles de crudo en una extensión de 200.000 hectáreas. La zona para las petroleras era promisorio, dado que unos años antes, la British Petroleum había descubierto un gran campo petrolero en el departamento de Casanare, Cusiana, y desde comienzos de la década de los ochenta, Occidental explotaba un enorme yacimiento petrolero en Arauca, Caño Limón.

El interés puramente económico de las multinacionales, con la excusa de introducir a minorías como los u'wa y países tercermundistas como Colombia en el llamado desarrollo, excluye de forma tajante las necesidades que estos grupos puedan tener. Es evidente que el motor de este tipo de intervenciones tiene como única finalidad la consecución del dominio sobre los recursos naturales existentes:

“El problema territorial es de vida o muerte porque se debate el acceso a los recursos que implican una adecuada alimentación o porque se rompe con la vida espiritual del U'wa; hoy en día se está al borde de la hambruna y los problemas de salud son muy graves, baste citar el alto porcentaje de tuberculosis entre la población” (Werjayas, Cabildos, Cabildo Mayor, Equipo de Etnoeducación, 1996: 195).

A partir de ese momento, cuando se supo que un posible yacimiento petrolero podría albergarse bajo su territorio, los u'wa, en acción coordinada con organizaciones nacionales e internacionales, emprendieron múltiples acciones para detener la exploración sísmica, lo cual tuvo un éxito parcial porque, aunque se retrasaron las exploraciones por la mala ejecución de la consulta previa y la comunidad pudo ampliar su territorio, en la zona se ha llevado a cabo la explotación de otros recursos como el gas, además, el Resguardo se ha visto cercado por la llegada de diferentes empresas, que a su vez han traído consigo otros actores que participan en el conflicto como es el caso de los grupos armados al margen de la ley, principalmente, la guerrilla:

“Si la guerrilla nos respeta, no significa que somos parte de su movimiento o que tenemos contacto con algunas de sus unidades. No, nosotros somos defensores y luchadores de la paz. Ellos también son luchadores pero de una forma muy diferente, con ideales, políticas y posicionamientos muy diferentes a los nuestros. En qué sentido es diferente, en que ellos tienen un ideal político basado en el poder y nosotros como pueblo indígena no tenemos intereses de esa naturaleza, nosotros nos basamos en una política de defensa, de protección y de cuidado de nuestra madre naturaleza” (Gilberto Cobaría, septiembre, 2012).

La lucha que sostienen es con el fin de cambiar su situación, dado que para ellos, el planeta es un ser vivo que necesita de cuidados, y al no recibirlos puede perecer como cualquier ser humano:

“La tierra tiene cabeza, brazos y piernas, y el territorio U'WA es su corazón, el que sostiene el universo; si se desangra no puede seguir dando vida al resto del cuerpo. El petróleo y los demás recursos son su sangre, por eso tenemos que cuidarlos. Después de la destrucción de nuestra tierra-madre y todos los recursos

naturales dejados por los Dioses para que los hombres los cuidemos, vendrán las enfermedades y la muerte; no tendremos agua limpia que beber, animales y plantas que comer, suelo que sembrar, ni vida que esperar para el futuro” (Uribe Hermocillo, 1996: 177).

“Nosotros pensamos que la tierra está viva y debe mantenerse fuerte para poder cuidar a sus hijos, para podernos dar sus frutos. Si se saca el petróleo, Ruiria, la sangre de la madre tierra, lógicamente la tierra se va a debilitar. Cuando llegan las multinacionales, hay desplazamiento, hay violencia, no hay ningún tipo de respeto por los derechos humanos y fuera de todo esto, hay un impacto cultural, hay enfermedades y contaminación” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Como es sabido, con el desarrollo de las actividades de explotación del subsuelo, las áreas terrestres se ven afectadas por la erosión, pérdida de vegetación y contaminación con sustancias químicas como sulfatos y sales minerales e hidrocarburos que destruyen los microorganismos del suelo. Por otro lado, la atmósfera se contamina con el gas carbónico, monóxido de carbono, hidróxido de sulfuro, ozono, emanación de polvo y gases tóxicos provenientes de la combustión de la maquinaria empleada. Esta contaminación disminuye las poblaciones de insectos y aves, produciendo cambios en el patrón de distribución de la estructura de la población de microorganismos. Al ver como los diferentes seres vivos que habitan la naturaleza perecen ante el deseo voraz de la sociedad occidental por extraer materias que le permitan continuar con su ritmo desenfrenado de vida, los u’wa han decidido tomar la vía de la moderación para evitar que desaparezcan los organismos vivientes que habitan su territorio:

“Su idea de progreso es totalmente diferente a la concepción occidental y va encaminada a la preservación de la naturaleza: ‘desarrollo es no tumbar montañas, no cazar, no pescar tanto, pues los animales tienen su familia’. Su obligación es cuidar, no maltratar a ningún ser vivo, no sacar nada que no pueda ser recuperado en el futuro; por eso para el U’wa es prohibido matar y su único poder es la sabiduría” (Robayo, 2001: 21-22).

Un proyecto petrolero como el que se ha venido desarrollando en el territorio u’wa, puede causar una serie de efectos negativos tan desastrosos para la cultura, que son fáciles de deducir por la experiencia con otras comunidades indígenas del país. La continuidad de estas labores significan una constante agresión a la integridad del pueblo u’wa, es decir, que se estaría hablando del etnocidio de una cultura nativa, causado por fenómenos que se desarrollarían por la eventual explotación de petróleo y que no podrían ser controlados por el grupo afectado ni por el gobierno colombiano:

“Con respecto a las acciones legales que hemos interpuesto, lo único que hemos adelantado es la demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, dentro de la cual, la Universidad Harvard le hace una serie de observaciones al gobierno nacional para que se dé cuenta que con sus acciones se puede exterminar este pueblo” (Gilberto Cobaría, septiembre, 2012).

En la década del noventa, los nukak del Guaviare, al tener que soportar en sus territorios los trabajos de exploraciones sísmicas, se han visto abocados a un proceso de etnocidio:

“En 1992 fue necesario acudir a la Acción de Tutela y a la opinión pública nacional y mundial para detener las trochas de exploración sísmica que ya iban bien adentro del territorio del territorio del pueblo Nukak. Este pueblo, que no es que fuera tan ‘recién contactado’, puesto que ya llevaba entre ellos una presencia casi secreta de 15 años la Misión Evangélica Nuevas Tribus y que desde 1965 *El Espectador* y *El Tiempo*, habían hecho 35 publicaciones sobre ellos, se ha visto abocado a una rápida desintegración, la cual fue acelerada por la trocha y los helipuertos que alcanzó a construir la empresa Fronteras de Exploración, los cuales se convirtieron en plataforma para el auge de la colonización y el cultivo y el comercio de la coca” (ONIC, 1997: 5).

Este tipo de casos que registra la historia, hacen pensar que los laxos y permitidos contratos de asociación concedidos a estas multinacionales por el Estado colombiano, facilitan el saqueo de los recursos energéticos del país y, al mismo tiempo, el exterminio de pueblos milenarios.

Para los indígenas que viven siguiendo los preceptos de sus tradiciones en comunidad con sus congéneres y los espíritus de la naturaleza, en hábitats donde predomina el ambiente de selva, el río y la huerta, es muy difícil asimilar los métodos del *reowa*, aún para aquellos responsables de representar a su comunidad ante las instituciones y el Estado: “Eso somos las organizaciones indígenas, para eso nacimos, para seguir defendiendo la vida en el planeta Tierra, nuestra madre. Todo lo que somos las comunidades indígenas es la reafirmación de nuestra identidad, porque amamos la vida, vivimos la vida y defendemos la vida” (Green, 2010: 319).

Es por eso que todo el proceso del proyecto petrolero del Bloque Samoré llevado a cabo por el gobierno colombiano y la Occidental de Colombia, los ha tomado por sorpresa y se ha constituido en un gran engaño. En los últimos años, los u’wa han hecho

un gran esfuerzo enseñándole a la sociedad occidental una forma honesta de participación y diálogo:

“La OXY se quiere llevar el petróleo para otros países, el gobierno negocia, el ministro del Medio Ambiente negocia, entonces no hay quien defienda la sangre de la Madre Tierra ni el derecho por la vida, y eso es lo que nosotros queremos hacer ver. Si el gobierno se lleva todo el petróleo del país, entonces mañana con qué nos vamos a sostener, de qué vamos a vivir. Por la noche el petróleo suelta su sangre, por la noche el petróleo suelta su cuerpo y así recorre toda la tierra, eso es lo que queremos proteger. Con el petróleo se mueve el comercio de todas las personas, pero las entidades no piensan y no creen nada de esto. Por eso a nosotros nos da mucha tristeza lo que está sucediendo” (Verito Cobaría, septiembre, 2012).

Como es sabido, el conflicto u'wa, resultante de la extracción de hidrocarburos en el territorio de la comunidad, se inició en mayo de 1992. Con el fin de obtener los permisos correspondientes, se solicitó al Instituto Nacional de Recursos Nacionales, INDERENA, en ese entonces el ente estatal encargado de proteger el medio ambiente, el otorgamiento de la licencia ambiental para la exploración sísmica del Bloque Samoré, que comprende los municipios de Saravena, Tame y Fortul, en el departamento de Arauca; el municipio de Cubará, localizado en el departamento de Boyacá; y el municipio de Toledo en el departamento de Norte de Santander. El proyecto que se extendería a lo largo de 208.934 hectáreas, ocuparía una cuarta parte de los predios de la colectividad. Al involucrar en un proyecto de tal magnitud parte del territorio de una colectividad indígena sin el previo consentimiento de la misma, se está desconociendo el valor que tiene para ese grupo el espacio geográfico donde se desarrolla: no se trata de un bien material el que está en juego, es la vida misma, y no de unas cuantas personas sino de toda una comunidad que supera los 7.000 habitantes:

“...el medio ambiente es el entorno vital, o sea el conjunto de factores físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que interaccionan con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia...el medio ambiente no debe considerarse pues, como el medio envolvente del hombre, sino como algo indisociable de él, de su organismo y de su progreso” (Correa, 1997: 4).

Entre los fallos que se cometieron en la elaboración de los estudios preliminares para determinar la viabilidad de las exploraciones, es que además de haber sido insuficientes a la hora de identificar y evaluar los impactos que enfrentaría la

comunidad indígena, no se contó con la experiencia de un antropólogo que se encargase de esa tarea. La labor de un especialista en el área social es relevante cuando, a partir del contacto directo con la cultura, logra distinguir sus inquietudes, al tiempo que efectúa un análisis de las consecuencias sufridas por otras comunidades que han visto sus territorios sometidos a empresas similares, consiguiendo, mediante la comparación de estos dos elementos, determinar los efectos positivos o negativos que generaría la ejecución de un proyecto de tal envergadura.

De otra parte, los investigadores solo estuvieron en el área de trabajo (185.688 hectáreas) ocho días, lo que se considera un tiempo, claramente, insuficiente para realizar una evaluación objetiva capaz de reconocer los elementos que podían afectar a la comunidad en el futuro. Aun así, el expediente fue remitido al Ministerio del Medio Ambiente en febrero de 1995 y, mediante la Resolución 110/95, se otorgó a la Occidental de Colombia Inc. la licencia para llevar a cabo las actividades de exploración sísmica.

El procedimiento que se llevó a cabo en este conflicto medio ambiental empezó con el desarrollo de estudios socioeconómicos, donde se determinó la necesidad de tierras por parte de los clanes u'wa involucrados en el proceso. Inicialmente, se les titularon algunas tierras baldías, posteriormente se les adjudicaron otros terrenos y, en términos generales, el proceso de legalización se hizo a partir de las normas que van dirigidas a la ampliación de resguardos:

“...nosotros a través del sufrimiento hemos llegado hasta este punto. Todo pueblo que ha alcanzado cierta organización es porque la ha sufrido, ha tenido enfrentamientos y ha sido amenazada. Nosotros nos hemos ido organizando para recuperar nuestras tierras porque nos estaban sacando de ellas y éramos vulnerables. Incluso, ha venido gente de afuera y nuestros padres pasaron a ser jornaleros de ellos sabiendo que eran nuestras tierras, pero no las quitaron y después obligaron a trabajar en ellas. Así empezó la recuperación de nuestros territorios, de nuestra cultura y nuestra lengua” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

En ese sentido, dos estudios socioeconómicos³⁴ se llevaron a cabo con el fin de determinar, con exactitud, los límites del territorio u'wa. Sin embargo, estando ya definidas estas fronteras, el INDERENA incluyó zonas ocupadas por los indígenas pertenecientes al Resguardo, sin contar con que se incluyeron también algunas áreas de reserva natural. Correa hace mención al capítulo 5 de uno de aquellos estudios, en el cual se hace referencia a la identificación de áreas sensibles, y muestra el evidente vacío que dejó la elaboración de dichos estudios:

“...en las áreas socialmente sensibles señalan la existencia de la comunidad U'wa y sus formas de tenencia de la tierra (Resguardo, territorio tradicional y reserva). Se relacionan 7 comunidades en el municipio de Saravena, 5 en el de Cubará y 2 en el de Tame (no coincide con los datos presentados en el desarrollo del componente socio-económico). Luego describen muy superficialmente 3 resguardos y 1 reserva, señalando en algunos casos los límites, la ubicación de las comunidades, su relación con los créditos del INCORA, la existencia de escuelas y los lugares de comercialización de sus productos” (Correa, 1997: 12-13).

Los investigadores que dirigieron este estudio pertenecen a la Pontificia Universidad Javeriana, quienes concertadamente con funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, después de un supuesto acuerdo con la comunidad, definieron nuevamente los límites del Resguardo Unido U'wa, el cual fue aprobado por la junta directiva del INCORA:

“El gobierno se comprometió a cumplir con algunas promesas como el saneamiento del Resguardo del pueblo U'wa. Desde el 2000 ellos manifestaron que para el 2010 ellos ya habrían efectuado totalmente el saneamiento del Resguardo y esta es la fecha que esto no se ha cumplido” (Gilberto Cobaría, septiembre, 2012).

Aunque los anteriores hechos hacen mención de las irregularidades que cometieron los funcionarios del Estado junto con los investigadores de la Universidad Javeriana, en lo que se refiere a la definición de los límites del territorio de la comunidad, la historia de la creación del Resguardo Unido U'wa empezó el 31 de marzo de 1993, cuando la Organización Regional Indígena U'wa del oriente

³⁴ El primero de ellos se denominó “Declaratoria de Efecto Ambiental. Programa Sísmico Samoré 93”, inscrito en septiembre de 1993; y el segundo, “Estudio Ecológico y Ambiental. Programa de Exploración Sísmica Samoré 93”, elaborado en octubre del mismo año (Correa, 1997: 11).

Colombiano ORIWOC, solicitó al INCORA integrar en un solo Resguardo la totalidad de su territorio. Atendiendo este requerimiento, mediante el convenio interinstitucional No. 22 de 1994, celebrado entre el INCORA, las gobernaciones de Boyacá, Norte de Santander y Santander, el Cabildo U'wa de Bókota y la Pontificia Universidad Javeriana, se realiza el estudio socioeconómico, ambiental, jurídico y de tenencia de tierras para la construcción del Resguardo:

“La lucha por la recuperación de tierras con el tiempo ha sido muy difícil por la aparición de los diferentes actores armados. Nosotros no tenemos armas, nuestra arma es la palabra y lo único que hemos pedido a través del tiempo es respeto. Respeto a nuestro territorio y a nuestra vida porque realmente tenemos una forma de vida diferente a la del mundo occidental” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

El 19 de julio de 1999 se suscribió un acuerdo entre el Ministerio del Medio Ambiente y los dirigentes indígenas u'wa en donde se definen los límites del Resguardo con base en los estudios señalados anteriormente. No obstante, de acuerdo a manifestaciones expresadas posteriormente por los representantes de la comunidad, la decisión de la constitución de los límites del Resguardo no fue determinada de forma conjunta con el grupo nativo, sino unilateralmente trazada por el gobierno, en cabeza del entonces Ministro del Medio Ambiente Juan Mayr Maldonado:

“El territorio U'wa es sagrado, es mucho más amplio de lo que creen los occidentales. Dentro de nuestra cosmovisión hay una carta de propiedad sobre la tierra en que nacimos los indígenas, es una propiedad de carácter colectivo, entregada directamente por los creadores del mundo” (Werjayas, Cabildos, Cabildo Mayor, Equipo de Etnoeducación, 1996: 196).

“Primero que todo el territorio nuestro se ha reducido, porque el territorio ancestral iba por un lado, hasta Mérida en Venezuela, por otro, hasta el departamento del Casanare y hacia el norte, iba hasta Pamplona. El territorio era muy grande y se redujo porque desde la población de Cubará se llega al Resguardo en cinco minutos, y allí ya empiezan las líneas del territorio porque no han terminado de sanear. Ese es uno de los problemas que tenemos, que el gobierno no ha cumplido con el saneamiento total del territorio” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

A pesar de que los u'wa han expresado por todos los medios que sus predios son mucho más extensos, lo cual se encuentra sustentado en sus cantos y su mitología, dado que allí es donde se mencionan las fronteras de su territorio ancestral, el 6 de agosto de

1999, el INCORA, mediante resolución No. 056, expidió una delimitación arbitraria de lo que actualmente constituye el Resguardo Unido U'wa, incrementando el territorio de 151.000 hectáreas a un total de 220.275 hectáreas. Esta nueva delimitación dejó por fuera del Resguardo el área donde estaba previsto el pozo Gibraltar 1 y otros terrenos en los que se han hecho exploraciones sin tener en cuenta la cosmovisión ancestral de la cultura.

El territorio u'wa puede ser visto desde diferentes perspectivas según los intereses de los actores que participan en este conflicto. Desde el punto de vista occidental, el territorio conocido como Resguardo Unido U'wa, reconocido mediante resolución 056 del 6 de Agosto de 1999 del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, posee 220.275 hectáreas. El predio está conformado por 17 comunidades: Bachíra, Rinconada, Barrosa, Bókota, Rotarbaría, Aguablanca, Taburetes, Cobaría, Tegría, Cascajal, Mulera, Segovia, Unkasía, Tamarana, Laguna, Tamara y Santa Marta.

De acuerdo con lo anterior, es claro que para los representantes del gobierno y las empresas multinacionales, al crear unos límites específicos, este espacio geográfico es visto como una propiedad, de uso privado, que no se diferencia en forma alguna de los demás bienes inmuebles existentes en el país. Sin embargo:

“Los conceptos de territorio, y con esto las nociones de medio ambiente y recursos naturales, son diametralmente opuestos entre los habitantes ancestrales y las empresas transnacionales. Para las empresas, que difícilmente aceptan las formas de organización previas y buscan reorganizar a las personas para poder consolidar su dominio, el territorio es esencialmente un negocio y una forma de acumular riqueza y las tierras que poseen son utilizadas en modelo de enclave, donde se prohíbe el ingreso de personas no autorizadas. En cambio, para las perspectivas alternativas y locales, el territorio no se enmarca en la oposición típicamente occidental entre naturaleza y cultura, principio que subyace al modelo extractivista y que se materializa en forma de apartheid” (Idárraga *et al.*, 2010: 27-28).

Para la comunidad indígena u'wa, sus tierras comprenden una dimensión espacial mucho más amplia de la que tienen concebida las instituciones occidentales. Su Resguardo o “la casa grande”, es el reflejo del universo e incluye el territorio ancestral, que ha sido reconocido a través de la tradición oral, a partir de los lugares sagrados en los cuales los antiguos u'wa desplegaban sus prácticas culturales, y con las cuales relacionaban y le daban un significado a todo lo que les rodeaba:

“El territorio es para los U’wa una imagen del universo; por esto, cada nivel ecológico de la Sierra Nevada del Cocuy se asocia con las propiedades de un mundo en particular. Las cualidades masculinas del mundo de arriba, como la longevidad y el conocimiento, se transmiten a las tierras altas, mientras que la fertilidad del mundo femenino de abajo es recibida por las zonas bajas. Las tierras medias representan, al igual que el mundo del medio, la unión y el equilibrio de las propiedades de los otros mundos” (Falchetti, 2007: 28).

Aunque es difícil definir con precisión la extensión del territorio ancestral, se puede decir que éste se aproxima al millón cuatrocientos cuarenta mil hectáreas, lo cual correspondería a casi la mitad del departamento de Boyacá y parte de los departamentos de Arauca, Casanare, Santander y Norte de Santander. Los municipios que incluiría el territorio ancestral serían: Chinacota, Málaga, Oiba, Chimá, Bucaramanga, Chiscas, Chita, Salinas de Chita, Güicán y, en el piedemonte oriental, Támara, Tame y Morcote:

“En la tradición oral U’wa están firmemente arraigados los límites del territorio ancestral; marcado por cerros, lagunas, ríos; existe clara conciencia del alinderamiento tradicional, amojonamiento antiguo, lo que llamamos los U’wa ‘Kera Chicara’, o sea ese mundo creado por Ru’wa o Sira y cuyo corazón fue entregado a los U’wa para que lo mantuviéramos en equilibrio” (Werjayas, Cabildos, Cabildo Mayor, Equipo de Etnoeducación, 1996: 197).

Es por eso que, aunque son varios los factores que han marcado de forma negativa la historia del pueblo u’wa, existen dos hechos fundamentales que la comunidad considera los principales atentados contra su cultura y sus tradiciones. A pesar de que su territorio, desde la llegada de los conquistadores ha sido intervenido a través de los siglos de forma constante, para ellos el acto más violento que se ha perpetrado contra su cultura ha sido el proceso de evangelización por parte de la Iglesia Católica, quien apoyada siempre por los diferentes sistemas políticos dominantes, a través de las misiones intentó aniquilar su conocimiento milenario y el de las demás culturas nativas del país. El otro hecho se dio a lo largo de la década del setenta, cuando el INCORA facilitó la colonización de gran parte de sus tierras, al titularlas a familias de campesinos, quienes vieron en la zona la enorme riqueza maderera e iniciaron una fuerte campaña de tala de árboles para su comercialización.

En la intensa lucha que han adelantado los u’wa por las exploraciones en su territorio en busca de petróleo y su consiguiente extracción en la década del noventa, la comunidad ha contado con el respaldo de diferentes organizaciones no gubernamentales

como Oilwatch, Censat Agua Viva, la Organización Nacional Indígena de Colombia y otras asociaciones internacionales, básicamente, de Estados Unidos, que conformaron el “Grupo de Trabajo en Defensa de los U’wa” y del cual hizo parte el proyecto Underground que tuvo como resultado el documento “Sangre de Nuestra Madre”. En ese escrito se han plasmado los principales elementos de la lucha del pueblo u’wa en defensa de su territorio y se ha podido concluir que éste no comprende únicamente la zona de Resguardo legalmente constituido, sino un espacio geográficamente más amplio que incluía la zona asignada a la Occidental para la explotación del hidrocarburo; esta tesis se confirmó cuando la Universidad Javeriana llevó a cabo su propia investigación en 1996 y analizó los diferentes mitos u’wa estudiados en su momento por Ann Osborn:

“La historia de la creación nos concede la carta de propiedad a los indígenas, también nos indica la forma correcta de comportarnos en el mundo: el mito es síntesis de Ley, de Costumbres y Derechos: es nuestra historia oral que está llena de significados antiguos y presentes. Tal como el Riowa tiene sus escrituras sagradas y públicas, nosotros tenemos Palabra de Mayor, desde nuestra creación, directamente del Padre del cielo; con ella demostramos nuestra propiedad ancestral y nuestras creencias” (Werjayas, Cabildos, Cabildo Mayor, Equipo de Etnoeducación, 1996: 197).

6.6.1. El indígena como sujeto ecológico

¿Es una idealización esa visión del u’wa que subraya su respeto por la naturaleza y su voluntad de conservarla?, ¿hasta qué punto ese discurso u’wa ha tomado préstamos del movimiento ecologista?

Aunque es obvio que los grupos indígenas han estado relacionados a través de la historia con los procesos ecológicos, la alianza con el ambientalismo es un proceso reciente que ha tenido sus orígenes en diferentes aspectos: en el reconocimiento de las prácticas indígenas dentro de los discursos ambientales y de desarrollo sostenible; en la necesidad de construir un nuevo tipo de sociedad debido a la crisis del desarrollo económico; en la introducción de los territorios y recursos de los pueblos indígenas en los nuevos circuitos comerciales; y en el cambio del concepto de naturaleza dentro de las ciencias sociales y naturales. Sin embargo, se puede afirmar que la principal razón que ha conducido a esta asociación ha sido el despertar de una conciencia ambiental, producto de la crisis del medio ambiente, que, a su vez, ha dado surgimiento a la

“ecogubernamentalidad”, vista ésta como un complejo que incluye discursos, prácticas y políticas ambientales globales³⁵:

“El calentamiento de la Tierra y la crisis ambiental global forman parte de debates cada vez más cotidianos en escuelas y hogares. Políticos y expertos discuten temas relacionados con la seguridad ecológica. Organizaciones gubernamentales y ONGs consideran las cuestiones ambientales como ‘comunes’ y universales. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas y comunidades locales empiezan a ser reconocidos como la gente indicada para manejar el medio ambiente” (Ulloa, 2004: 87).

El deterioro de los ecosistemas y el agotamiento de algunos recursos naturales y de especies animales han transformado los procesos ecológicos y muchas prácticas culturales, produciendo preocupación en los diferentes grupos sociales y despertando su conciencia ecológica. De esta forma, el ambientalismo ha inducido a adoptar nuevas formas de interdependencia y control global sobre los recursos naturales (ecogubernamentalidad).

Retomando la historia, en los siglos XVIII y XIX, ante la preocupación por la disminución de los recursos naturales, se crearon estrategias preservacionistas en algunos países occidentales, donde primaron los principios de conservación científica, basados en la idea de que la crisis ambiental era inminente, a menos que fueran adoptadas medidas racionales sobre el manejo del medio ambiente. De esta forma, las prácticas locales eran consideradas inadecuadas y derrochadoras y, por lo tanto, debían ser reemplazadas por políticas más adecuadas basadas en la ciencia y la razón. Esta visión consideraba que el Estado tenía que ser soberano en la toma de decisiones, dado que contaba con funcionarios especializados en la materia y porque suponía que los campesinos y pobladores locales eran ignorantes en el tema.

Al tiempo que se aplicaban las políticas basadas en la conservación científica, se desarrolló la idea de lo silvestre como un lugar natural que debía permanecer inalterado. Esta mentalidad se consolidó pensando en la necesidad de proteger ciertas especies salvajes y sus hábitats que, a su vez, fueron relacionados con sitios sagrados donde habitaban deidades y espíritus de culturas no cristianas (Ulloa, 2004: 92).

³⁵ Véase la nota 4.

Otro de los motivos que incitó a la protección de los recursos naturales fue el interés que tenían los poderes coloniales de cumplir con su compromiso de sostener las economías de los imperios. Entre las primeras muestras de este hecho está el I Encuentro Internacional sobre la Vida Silvestre en África, llevado a cabo en Londres en el año de 1900, el cual se consolidaría en 1903 con la formación de la Sociedad para la Preservación de la Fauna del Imperio.

En las décadas subsiguientes se dejó de lado el debate sobre los problemas ambientales, dado que el planeta, en términos generales, estaba centrado en el desenlace de las dos guerras mundiales y la difícil situación económica que atravesaban las principales potencias como producto de las acciones bélicas. Es por eso que este tema no se retomó hasta los años sesenta y setenta, cuando la extinción de varias especies y recursos naturales aumentó, al tiempo que los nuevos procesos industriales afectaron de forma más intensa a la vida humana debido a la polución y la elevada producción de desperdicios tóxicos: “A la par con los movimientos sociales pacifistas, de derechos civiles y antinucleares, surgieron los movimientos ambientalistas, demandando por nuevas relaciones entre los humanos y la naturaleza y los humanos entre sí. Estos hechos dieron cabida a lo que se denomina la conciencia ambiental o ambientalismo” (Ulloa, 2004: 95).

Algunos académicos han identificado a Estados Unidos como el primer país que ha creado políticas relacionadas con la protección y conservación de la naturaleza. Es, casualmente, en la década del sesenta cuando se produjo un cambio conceptual de la noción de naturaleza a la idea de medio ambiente, éste último relacionado con la escasez de recursos naturales y su impacto en los grupos humanos. Sin embargo, el debate continuó a lo largo de la década del sesenta, cuando se revivió la idea de lo silvestre a través del neomalthusianismo³⁶, preocupado por la sobrepoblación humana que afectaba el espacio de otras especies. De esta forma, los movimientos ambientalistas

³⁶ El neomalthusianismo es una teoría demográfica y social que considera el exceso de población de las clases pobres como un problema para su calidad de vida. Esta corriente nació a finales del siglo XIX, inspirada en algunos movimientos revolucionarios socialistas, retomando parte de la teoría poblacional de Thomas Malthus, el cual afirmaba que la población crece más que los recursos y puede inducir a una catástrofe malthusiana o sobrepoblación. Para el neomalthusianismo el problema radica en el exceso de familias numerosas y la reproducción sin límites de las clases pobres condenadas a la miseria, por lo cual, proponen como alternativa la toma de conciencia social de la necesidad de la procreación limitada.

ingresaron en la arena política, cuestionando las relaciones entre la sociedad y su entorno.

Las primeras acciones que llevaron a cabo los movimientos ambientalistas en los años sesenta y comienzos de los setenta estaban en contra de la ejecución de proyectos que contaminaban el agua, el aire y provocaban la polución de la tierra, tales como la construcción de carreteras, torres petroleras, hidroeléctricas y centros urbanos de gran escala. Aunque el movimiento tuvo su advenimiento en los países del norte, éste ha crecido mundialmente y sus defensores exigen cambiar el rumbo de la economía global y el trato de la sociedad con su entorno natural. Desde entonces, los movimientos sociales, los grupos étnicos y comunidades locales han encontrado en él, un espacio en el cual ven la posibilidad de, por un lado, recuperar el control de sus recursos y, por otro, mantener vigentes sus conocimientos y prácticas hacia la naturaleza.

En este sentido, los movimientos ambientalistas han ampliado el espectro político de las diversas naciones al incluir en este los problemas ambientales que han ganado la atención de la ciudadanía en general. Así mismo, el interés en estos temas ha dado origen a nuevas discusiones en torno a las ciencias sociales, consolidando nuevas perspectivas teóricas. Como es obvio, estos movimientos, por sí solos, no pueden hacerse efectivos; por lo tanto, han involucrado políticas gubernamentales relacionadas con el medio ambiente que buscan cambios en los modelos de desarrollo. De esta forma, al cuestionarse los regímenes económicos y políticos existentes, se están evaluando los procesos de producción industrial y degradación ambiental, lo cual crea la necesidad de repensar la relación sociedad-naturaleza: “Académicos como Shiva (1994) y Escobar (1999) consideran las luchas de los movimientos sociales como otras fuentes de producción de los discursos ambientales y precisan que la conciencia ambiental no se puede desligar de las prácticas y las demandas de estos movimientos sociales, de grupos étnicos y locales, orientadas a salvaguardar sus relaciones con sus territorios y sus concepciones sobre la naturaleza” (Ulloa, 2004: 98).

En lo que respecta a las comunidades indígenas, a través de los siglos, éstas han sido sometidas a una constante intervención, desestructuración y posterior destrucción de sus formas de vida, a partir del despojo de sus territorios, en los cuales fundamentan su cosmovisión y organización social y política. Al ser expulsados de sus sitios ancestrales, los lazos culturales que los unen como pueblos se rompen dándose lugar al

etnocidio de la cultura. Actualmente, los pueblos indígenas tienen que enfrentar la crisis del desarrollo sostenible, lo cual hace que se encuentren en la difícil situación de sucumbir como grupos étnicos o luchar por sobrevivir en el hostil ordenamiento global.

El impacto de la globalización se ha hecho más fuerte entre las poblaciones nativas que ven amenazada su existencia, debido a los efectos producidos por las empresas transnacionales, junto con la apuesta que han hecho algunos gobiernos por alcanzar el desarrollo centrando sus economías en la sobreexplotación de recursos naturales: “Esta apuesta se fundamenta en el entendido de que su inserción en el sistema internacional globalizado obedecerá a la riqueza en recursos naturales como el agua, la biodiversidad, los minerales, las energías fósiles y los recursos genéticos, que hoy son vistos como vitales para el desarrollo del sistema capitalista transnacionalizado” (Duro, 2014: 13).

Analizando la situación del medio ambiente en una de las regiones más afectadas del planeta, el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, OCMAL, ha señalado que los conflictos socio-ambientales a causa de la extracción de varios recursos naturales aumentan cada día. En la actualidad, en la región se reportan 196 casos relacionados con 205 proyectos que afectan a 295 comunidades de países latinoamericanos. Dentro de los países de la región, Perú es el que mayor conflictividad presenta con 34 proyectos, seguido de Chile con 33, México con 28, Argentina con 26, Brasil con 20 y Colombia con 12 (Duro, 2014: 11).

El desarrollo de proyectos extractivos en territorios indígenas ha provocado el inconformismo de las minorías étnicas, las cuales se han manifestado en los últimos años a través de protestas como la llamada “guerra del agua” en Cochabamba en 2001, en la que los ciudadanos, en su gran mayoría indígenas se opusieron a la privatización del servicio del agua por parte de la empresa norteamericana Bechtel; o la de los nativos amazónicos del Perú que fue reprimida violentamente por la fuerza pública en 2009 por oponerse a la explotación de petróleo, gas y minerales en sus predios.

Deben destacarse los casos de Bolivia y Ecuador, países en los cuales, a pesar de haberse creado marcos constitucionales basados en los derechos de la naturaleza y establecido esquemas dirigidos a la protección de los territorios indígenas, aún persisten los conflictos socio-ambientales, pero gradualmente han ido disminuyendo. En este

sentido, es ejemplar la posición del gobierno ecuatoriano en cabeza de Fernando Correa, quien ha sido pionero en la región a la hora de sostener que es más rentable no extraer el petróleo de la tierra y a cambio recibir compensaciones internacionales por conservar y emitir oxígeno. El principal argumento para sostener esta decisión ha estado basado en la protección de la biodiversidad y la diversidad cultural en la Amazonía ecuatoriana, teniendo en cuenta las experiencias negativas que dejó la extracción de hidrocarburos en el sonado caso Chevron-Texaco.

Para contrarrestar el impacto negativo que deja el paso de la actividad económica occidental en los territorios indígenas, los grupos nativos han creado movimientos sociales que han basado su lucha en la conservación de la identidad cultural. Esto ha permitido que algunas naciones abran nuevos espacios democráticos de participación que les permita defender sus derechos. La forma como han logrado acceder al terreno político ha sido a través de la denuncia a nivel nacional e internacional de los conflictos surgidos por problemas étnicos y culturales. Las peticiones de estos grupos no solo se basan en el reconocimiento de sus diferencias culturales, también demandan derechos colectivos sobre sus territorios, recursos y conocimientos, haciendo énfasis en cómo eran sus pueblos antes de la llegada de los occidentales a sus tierras.

Es importante notar que estas comunidades han logrado afianzar las demandas que giran en torno a la autodeterminación y dominio sobre sus espacios geográficos, nombrándose a sí mismos como “pueblos originarios” y no como “minorías étnicas”, dado que éste último término se relaciona con grupos étnicos de emigrantes que no tienen la soberanía ancestral sobre el sitio que ocupan, mientras que el primero los cataloga como dueños legítimos o naciones que demandan la restitución de sus derechos y la autonomía sobre sus territorios. Al lograr estos requerimientos, “También establecen relaciones políticas con los Estados a través de sus autoridades. De esta manera, reafirman su autonomía y su autodeterminación, a la vez que reconocen las instancias institucionales. Los movimientos indígenas demandan un entendimiento nacional basado en el reconocimiento de sus diferencias” (Ulloa, 2004: 15).

Estas nuevas formas de resistencia para defender sus territorios, han sido caracterizadas dentro de lo que el portugués Boaventura de Sousa Santos ha denominado “cosmopolitismo subalterno”, haciendo referencia a los movimientos

sociales que se oponen a la globalización neoliberal y a las prácticas hegemónicas que generan la exclusión de los grupos minoritarios en los procesos económicos. De esta forma, en algunas regiones del planeta como Latinoamérica, desde mediados de los años noventa, debido a las reiteradas crisis de gobernabilidad, se ha fortalecido la idea de autonomía y autodeterminación indígena, en un contexto político donde los planos local, nacional e internacional de encuentran completamente vinculados.

Es así como uno de los mecanismos que más efectividad ha tenido a la hora de ser reconocidos como pueblos, ha girado en torno al derecho de propiedad sobre sus territorios, a partir de los cuales han centrado sus demandas hacia la comunidad internacional, con la intención de ser reconocidos como naciones/pueblos con gobiernos basados en sus propias leyes de origen. Este nuevo curso que ha tomado el pensamiento indígena en torno a la necesidad que plantean de ser autónomos y dirigir su propio rumbo, es lo que ha dado origen a los conceptos de etnodesarrollo y autodesarrollo, es decir, la alternativa de las organizaciones indígenas de asumir su destino desde una perspectiva propia:

“Este escenario alterno abre un mayor abanico de posibilidades para la participación activa de los pueblos indígenas como agentes de su propio desarrollo, ya que este enfoque parte de su reconocimiento como actores naturales en correlación con la extensa jurisprudencia internacional. Entre ellas, la contemporánea Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que les otorga formalmente a estas naciones la subjetividad política y permite el diálogo entre distintas visiones sobre el qué y el cómo del desarrollo, al hacer operativos enfoques hasta ahora considerados subalternos –y, por tanto, marginados–, como la percepción desde la cosmovisión indígena sobre cuál es la significación del desarrollo y qué papel deben jugar estos colectivos en él.

...Entendiendo el autodesarrollo como el compromiso colectivo de la comunidad y ‘como la capacidad que tiene cada pueblo indígena para decidir y controlar su propio destino de una manera autónoma y en consonancia con sus especificidades históricas y culturales’” (Duro, 2014: 15-16).

Es claro que, en la época actual, el discurso ecológico ha ganado fuerza en las decisiones políticas mundiales y se ha hecho representativo de la gran mayoría de las comunidades nativas al fortalecer el concepto de identidad, haciendo énfasis en la diversidad cultural. Los movimientos y proyectos etno-ecológicos se apoyan en el concepto de tradición y, por ende, recurren a las poblaciones tradicionales, donde los pueblos autóctonos o minorías étnicas del planeta son vistos como depositarios de

saberes ancestrales respecto a su medio natural, por lo cual actualmente se toman sus conocimientos como alternativas éticas y técnicas al presente modelo económico occidental. De esta forma, el indígena es visto como un sujeto ecológico, dado el papel que ha venido desarrollando en los últimos años en defensa de la naturaleza: "...la humanidad le reclama en aras de proteger los pocos ecosistemas que todavía quedan intactos; me refiero a las selvas y a los lugares que las expediciones petroleras o las reforestaciones comerciales aun no invaden" (Coral, 2011: 116).

El esfuerzo del indígena, al tener un papel protagónico en la conservación del planeta y al aplicar técnicas de desarrollo sostenible en beneficio de la humanidad, se encuentra descompensado, no obstante, dado que no es equivalente el reconocimiento recibido por ello. Sobre el desarrollo sostenible, como filosofía que han adoptado las comunidades indígenas, Calavia (2006) comenta que este se presenta como:

"...un desarrollo *in partibus infidelium*, un desarrollo a la medida de parcelas de la humanidad –extensísimas– a las que nunca podría llegar ese desarrollo sin adjetivos que se contabiliza en altas tasas de consumo, confort y seguridad. Si es improbable que la suerte sonría por igual a todos los habitantes de un planeta limitado, será un consuelo que los desfavorecidos puedan encontrar un nicho aceptable reviviendo las técnicas y los valores de sus antepasados. No faltará quien se subleve ante este compromiso desigual, y reclame justicia: a fin de cuentas, a pueblos que han penado amargamente el progreso moderno no les costará mucho seguir manteniendo viva la llama de la revolución con una miseria exasperada y sin paliativos. Pero aun cuando los aceptemos, los paños calientes del desarrollo sostenible de los desheredados no son tan fáciles de aplicar" (Calavia, 2006: 39-40).

Aun tras revisar la historia del movimiento ambientalista y sus conexiones y alianzas con los movimientos indígenas, queda pendiente la pregunta acerca del grado en que las culturas nativas encierran en su tradición nociones y prácticas ecologistas. Algunas corrientes de pensamiento se inclinan por la idea de que las circunstancias actuales del planeta no son favorables para la aplicación de los saberes tradicionales, ya que esos conocimientos ancestrales se crearon y transmitieron en un contexto que ya no existe y que es poco probable que vuelva a existir. De esta forma, se considera que esta ideología tiene un lugar más apto en la memoria que en la práctica, porque es estática y no acorde con un mundo que varía constantemente.

Sobre esta base, se encuentra que el mismo término “tradicionalismo” es ambiguo porque es aplicado a sociedades que por el hecho de estar vivas están cambiando de forma continua. Sin embargo, los movimientos indígenas se rebelan ante estos enunciados con el pretexto de que nociones como seguridad, confort o abundancia de bienes de consumo son aspiraciones corrientes que no se adecuan a las dimensiones de sus preceptos ni de prácticas como el desarrollo sostenible. De todos modos, quienes no llegan a convencerse completamente con estas tesis defensoras del pensamiento indígena y de las prácticas que las comunidades nativas llevan a cabo en beneficio de la naturaleza, piensan que: “El desarrollo sostenible viene a ser, hoy en día, un equivalente de lo que en siglos pasados fue el cristianismo predicado a los paganos: un modelo civilizador moralmente legitimado pero ajeno a los objetivos mayoritarios de la cínica sociedad que lo difunde” (Calavia, 2006: 41).

Las tesis que se han difundido a lo largo y ancho del planeta sobre la relación armoniosa que sostienen las diferentes culturas indígenas con la naturaleza, son rebatidas por algunos estudios de ecología natural, que afirman que dicha convivencia se reduce a la limitación:

“Las formas culturales y sociales son el producto de la adaptación a la finitud de los recursos: a la pobreza de los suelos agrícolas, o a la escasez de proteínas, por ejemplo. La naturaleza es una madre, sí, más una madre dura que obliga a sus hijos a sujetarse a un duro régimen, a no ser que consigan liberarse de ella mediante nuevas técnicas de explotación. La carrera contra la escasez es tan disputada en la selva como lo ha sido en paisajes más áridos y el indio ecológico es, simplemente, un luchador mal armado, abrumado por un medio natural que ultrapasa sus fuerzas” (Calavia, 2006: 31).

Esta visión pesimista se ha visto enfrentada a diversos estudios que han determinado que las poblaciones indígenas contemporáneas dedican muy poco tiempo a esa lucha por la vida y, por el contrario, se centran en actividades poco productivas, manteniendo la explotación del medio ambiente muy por debajo de sus posibilidades. Otro aspecto que ha sido refutado de ese materialismo ecológico, es el que algunas zonas, como la Amazonía, estuvieran compuestas por grupos minúsculos disueltos en el medio donde se desarrollaban y que estos tuviesen muy poca organización: “La demografía rala y la atomización como norma son posteriores al ingreso del hombre blanco y a sus efectos deletéreos directos o indirectos. El ‘desierto verde’ es en buena parte un producto de la conquista, y por el contrario hay, para la era precolombina, datos

ciertos de una ocupación humana de la Amazonía más densa que se puede encontrar aún en la actualidad” (Calavia, 2006: 32).

Como muestra de una acertada aplicación del desarrollo sostenible por parte de los grupos indígenas, la Amazonía es un buen ejemplo que enseña el uso responsable de la naturaleza por parte de estos pueblos, dado que da a conocer el ingenio de estas colectividades a la hora de adaptarse a condiciones ambientales especialmente particulares:

“Esa ocupación se basaba en la alta productividad del cultivo del maíz, recurría a un buen uso de las inundaciones periódicas del valle amazónico o a notables ingenios como el uso agrícola de islas flotantes. Pero, lo que es más interesante, dejaba aun así espacio para el incremento de la biodiversidad. La llamada ‘*terra preta de índio*’, uno de los suelos más productivos del valle amazónico, se identifica con las áreas de larga ocupación aborígen y alberga una tasa de biodiversidad mayor que áreas propiamente más cercanas a la virginidad” (Calavia, 2006: 32).

Sin embargo, a raíz de algunos estudios que van de la mano de adelantos científicos, los nativos y sus costumbres son vistos como seres arcaicos con hábitos primitivos, que no siempre han mostrado resultados positivos con respecto al manejo del medio ambiente. Una prueba de ello es el sistema de regadío de los Hohokan que ha contribuido en gran medida a la salinización y desertización de amplias regiones de Arizona. También se encuentra el caso de la extinción de los bisontes norteamericanos por su caza inmoderada a manos de los grupos indígenas que comerciaban con los blancos solo la lengua y la piel de su joroba.

Ese comportamiento en ocasiones desequilibrado con respecto al manejo de los recursos naturales, muchas veces encuentra su justificación en la cosmología misma de la cultura. Así por ejemplo, algunas sociedades indígenas imaginan los animales surgiendo de las entrañas de la tierra, como si fuese una fuente potencialmente ilimitada. En la Amazonía es frecuente escuchar comentarios sobre la existencia de corrales subterráneos donde se crían pecaríes, ciervos o tapires y, por eso, a veces son cazados de forma indiscriminada por los nativos, dado que tienen la idea de que nunca se agotarán esas especies. En cierta medida, esa administración de la naturaleza se puede asemejar al consumismo voraz del mundo occidental, con la diferencia que éste lleva un control más estricto de los mercados y las sociedades autóctonas reconocen la

existencia de un comercio que fluye del suelo al cielo en el que existe algún tipo de orden impuesto, generalmente, por los chamanes (Calavia, 2006: 35).

Por ello hay corrientes que se inclinan a pensar que el indígena no ha de considerarse un sujeto ecologista, dado que su comportamiento con respecto a la naturaleza y el supuesto equilibrio que sostienen con ella es producto de un tipo de consumismo. Volviendo a la Amazonía, allí se pueden encontrar cazadores que matan cuanto pueden, sin tener en cuenta los tamaños de las especies o la época en que puede haber escasez o abundancia de las mismas. Si muchas veces se da la coincidencia de encontrar grupos nativos en espacios naturales con una alta biodiversidad, casi siempre este hecho es posible por una demografía baja de la zona, donde además, por lo general, se antepone las actividades rituales y simbólicas a la explotación del medio ambiente. A diferencia del hombre occidental, el indígena dedica gran parte de su tiempo a ese tipo de tareas y no se preocupa mucho por la vida, el bienestar y las cosas materiales.

Todos estos antecedentes hacen que la percepción que se tiene de los indígenas, unas veces como sujetos ecológicos, defensores de la naturaleza y el medio ambiente, y otras como meros salvajes, no sea suficiente para lograr un consenso que les permita mantener el dominio sobre sus territorios, al contrario, es un argumento más que justifica la dominación a la que se han visto sometidos a través del tiempo.

Independientemente del concepto que se tenga de ellos, lo que sí es cierto es que en las diferentes comunidades aborígenes generalmente se encuentran construcciones intelectuales y normas tan válidas como las occidentales, que dan muestra de un conocimiento detallado del medio en el que se desenvuelven. Los tabúes de caza o pesca pueden ser equivalentes a una gestión de recursos, y el no poseer una legislación ambientalista es un vacío que es sufragado con el saber regulador que constantemente llevan a cabo los chamanes de cada tribu.

La articulación que existe entre los grupos indígenas y la naturaleza es lo que hace que hoy en día esos pueblos se vean como los defensores y guardianes de la biodiversidad. Acciones como la de la comunidad u'wa, que en su momento estuvieron dispuestos a sacrificarse a través del suicidio colectivo por la protección de su territorio, es lo que los convierte en héroes y, en este caso, mártires, por conservar el equilibrio del planeta, ya no solo por el bien de la colectividad sino por el de la humanidad. Es por eso

que los indígenas deben asumir ciertas características y comportamientos frente al medio ambiente que los hacen diferentes de otras sociedades. Ellos no pueden ni quieren ser modernos, no aceptan en sus prácticas y modos de vida los adelantos tecnológicos porque esa es una concepción que va en contra de la imagen que se tiene de ellos de “nativos ecológicos”, y que es la fuente de inspiración de muchos movimientos ambientalistas del planeta que se solidarizan con su causa:

“Por ejemplo, en relación con los u’was Gracia Francescato, portavoz del Partido Verde Italiano, manifestó: ‘Hay que impedir la muerte en masa de todo un pueblo por intereses económicos’. En este mismo sentido, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de Paz en 1980, desde Roma y ante un grupo de ecologistas de la Fundación Internacional Lelio Basso, se solidarizó con la causa u’wa, afirmando: ‘Doy todo mi apoyo a los indígenas u’was en su lucha. Son un caso simbólico en todo el continente’” (Ulloa, 2004: 302).

De esta forma, se hace evidente que los indígenas, al tiempo que son considerados mártires, son vistos como donadores de vida a la humanidad, por lo cual, muchos ambientalistas piensan que las comunidades nativas tienen la tarea de salvar el planeta, manteniendo y perpetuando los diferentes sistemas ecológicos necesarios para dar continuidad a la existencia de la humanidad. Aunque los movimientos ambientalistas reconocen la extinción de especies animales y vegetales y la constante contaminación de la naturaleza, adjudican esta calamidad, principalmente, a la actividad individual de las personas, sin tener en cuenta que gran parte de esta catástrofe se debe a las labores de las empresas multinacionales. Esto ha hecho que esas asociaciones vean a los ciudadanos, entre ellos los grupos indígenas, como los responsables de dar solución a esta situación, aunque ello implique el sacrificio de una comunidad entera.

La idea actual que ha ganado la atención de todas las sociedades sobre un desastre ambiental inminente, tiene un mensaje apocalíptico que concuerda con la visión indígena sobre la irrevocable destrucción del planeta si no se adoptan medidas estrictas que cambien por completo la mentalidad de la humanidad sobre la explotación irresponsable de los recursos naturales no renovables. Problemas como el calentamiento global, derivado de la contaminación industrial, la deforestación y la utilización de combustibles fósiles, entre otros, han sido la plataforma sobre la cual se ha cimentado la legislación ambiental global. Con la idea de preservar la naturaleza, biólogos y

ambientalistas han dado origen a programas y proyectos ambientales, donde ven como única alternativa el desarrollo sostenible:

“El desarrollo sostenible, a través de sus políticas globales y nacionales, implica actividades específicas (a través de foros y talleres globales que se convierten en necesarios para diseminar la luz frente a lo que hay que hacer para proteger los recursos naturales) que sustentan la protección del medio ambiente global: la creación de sumideros de CO₂ en países con alta biodiversidad (que se encuentran principalmente en los países llamados del ‘Tercer Mundo’) para que los bosques absorban la contaminación emitida por los países industrializados, la reforestación de bosques, la explotación sostenible de los recursos, programas de manejo de los recursos y la venta de servicios ambientales como un negocio excepcional y promisorio” (Ulloa, 2004: 303-304).

De esta forma, se considera que los pueblos indígenas deben contribuir a fomentar el desarrollo sostenible protegiendo los recursos que han estado fuera de los circuitos económicos del desarrollo y que ahora deben formar parte de los circuitos del desarrollo sostenible. Es necesario que los grupos nativos formen parte de esta corriente ideológica para tratar de salvar las áreas prístinas del planeta, aunque con esto surja la paradoja de ser considerados los guardianes de la tierra pero al mismo tiempo empiecen a ser situados dentro de las redes económicas de la biodiversidad como nuevos productores de materias primas, productos e imágenes ecológicas: “Sus conocimientos y prácticas permitieron a los indígenas estar al margen de la modernización, pero el desarrollo del mismo conocimiento y prácticas puede ahora confrontar esa diferencia que han marcado...los indígenas parecen ser las únicas personas y culturas posibles para hacer el sacrificio necesario para salvar la Madre Naturaleza” (Ulloa, 2004: 304).

Retomando los aspectos que se han tratado anteriormente, surgen varios interrogantes acerca del papel que desempeñan los pueblos indígenas en el nuevo orden mundial: ¿El discurso que los caracteriza, actualmente, como defensores de la naturaleza, es reciente o ha formado parte de su pensamiento ancestral? ¿La coincidencia entre su pensamiento con la ideología que representa a los movimientos ambientalistas, puede considerarse como un signo que demuestra falta de autenticidad? ¿Es ingenuo reconocer a los indígenas, en este caso los u’wa, como sujetos ecológicos, si estos utilizan esa imagen como elemento principal para defender su territorio y su cultura?

En primera instancia, puede llegarse a pensar que el discurso indígena dirigido a la protección de la naturaleza y sus recursos es reciente, dado que hace pocas décadas (desde finales de los sesenta y comienzos de los setenta) que los pueblos originarios empezaron a formar movimientos sociales, por medio de los cuales han logrado expresar sus inquietudes, logrando, al tiempo, la atención de los sectores dominantes del planeta. Sin embargo, aunque esta ha sido una alternativa aplicada recientemente, su conocimiento ancestral queda demostrado con el trato que proporcionan a la naturaleza y la forma como preservan sus recursos. Es por eso que la experiencia que poseen en este sentido cobra gran importancia en la actualidad, y por ello: "...los pueblos indígenas son ahora convocados a brindarle a la humanidad sus conocimientos –los mismos que antes fueron desconocidos– como una expresión de solidaridad. Más aún, los indígenas tienen la histórica tarea de preservar la ‘vida’ del planeta, deben ayudar a reproducir la vida humana y de las especies no humanas. De esta manera, los territorios de los pueblos indígenas y los recursos genéticos y biológicos presentes en ellos se convierten en la reserva de la humanidad” (Ulloa, 2004: 111-112).

De otra parte, las coincidencias que se pueden encontrar entre el pensamiento indígena y la ideología ambientalista, no son un motivo de peso que permita pensar, con razón, que existe una falta de autenticidad en las reflexiones nativas relacionadas con la naturaleza y el tratamiento que se le debe dar a ésta. Si se mira hacia el pasado, es decir, hacia finales de la década del sesenta, cuando la escasez de recursos naturales y la degradación del planeta se convirtieron en una preocupación mundial, se inició un proceso de globalización de esta nueva corriente, que dio origen al concepto de ‘medio ambiente’, el cual ha ido más allá del simple manejo de la naturaleza, ya que ha ampliado su diámetro de acción abarcando las áreas donde el control de los estados no llegaba. De esta forma, ha llegado a interesarse por la seguridad de la especie humana y, por extensión, de las especies no humanas, vistas estas últimas como un medio que proporciona bienestar a la primera. En este sentido, el medio ambiente se ha convertido en un conocimiento que implica una gobernabilidad técnica especial, diferenciándose del saber ancestral de las culturas indígenas, que no poseen esa visión utilitaria de la naturaleza y sus recursos, y que caracteriza a las sociedades occidentales.

En la misma dirección, se puede concluir que las coincidencias entre uno y otro pensamiento surgen de la necesidad que tienen tanto los movimientos ambientalistas

como los pueblos indígenas de proteger la naturaleza, con la diferencia de que los primeros muchas veces pretender aislar totalmente de la especie humana aquellos espacios naturales que son la fuente de vida de minorías étnicas que, de paso, se encargan de su protección: "...la coalición movimientos indígenas-medio ambiente, aunque estratégica, ha tenido implicaciones negativas para la autonomía de los pueblos indígenas dentro de sus territorios y sobre sus recursos. Algunos movimientos ambientalistas con una visión biocéntrica buscan preservar lo silvestre sin considerar los territorios y espacios de uso de los grupos locales o de los pueblos indígenas" (Ulloa, 2004: 111).

Por último, no debe considerarse ingenua ni debe existir duda alguna, acerca de la idea que prevalece actualmente sobre los indígenas como sujetos ecológicos, dado que mediante sus prácticas y experiencia efectivamente lo son. La defensa de la naturaleza que los ha caracterizado, a través del tiempo, ha sido un hábito que antecede a todo discurso ecologista. Más bien, podría decirse que las actuales estrategias de manejo del medio ambiente han dado origen a nuevos canales de comunicación con los diferentes actores, para regular y resolver problemas de interés general como el crecimiento de la población y la seguridad alimentaria: "...los indígenas están inmersos en nuevos circuitos de producción y consumo verde en los que sus conocimientos y prácticas comienzan a ser reconocidos" (Ulloa, 2004: 111).

6.7. Sobre el futuro fortalecimiento de la lucha u'wa en defensa de su territorio

Como producto del diagnóstico de las actuales amenazas sobre el territorio u'wa, y en consideración a la necesidad de la comunidad de fortalecer una visión ancestral sobre el mismo, cabe avanzar un pronóstico sobre los problemas fundamentales que han de superar los u'wa para alcanzar sus metas y fortalecer su lucha.

Si bien existe un reconocimiento del territorio ancestral por parte de la comunidad u'wa y de la dimensión del mismo, el hecho de que no exista ninguna aceptación legal por parte del Estado más allá de los límites de los actuales resguardos conlleva que las entidades gubernamentales comprometidas en este caso y las empresas que hacen presencia en territorio u'wa puedan eludir su aprobación. Es necesario, por tanto, que la visión de lo que es el territorio ancestral y lo que significa para la cultura u'wa tenga un contenido que traduzca esta concepción a un lenguaje que se extienda

más allá del carácter cultural: ha de establecerse una posición de carácter político a la hora de negociar con las entidades gubernamentales o las empresas.

Debe recordarse que la defensa del territorio y la autonomía son importantes para no perder la memoria indígena y reafirmar su identidad cultural. Así mismo, la reconstitución de su autoridad y el fortalecimiento de la autoestima como comunidad nativa deben ser la guía que les permita lograr una autodeterminación a la hora de entablar requerimientos ante instancias nacionales e internacionales. De esta forma, el concepto de autodesarrollo es visto como una posibilidad de supervivencia y, más aún, como medio para lograr un renacer cultural, necesario para lograr el control total sobre la comunidad y, obviamente, sobre el territorio: “En la actualidad, el autodesarrollo es visto como una posibilidad de supervivencia de estas comunidades desde la reexistencia cultural que exige como opción el control sobre sus territorios” (Duro, 2014: 16).

Es imprescindible fortalecer la visión nacional de la Sierra Nevada el Cocuy como centro del territorio u’wa y así mismo desarrollar acciones que fomenten una mayor defensa de esta área, abordando problemáticas tanto externas (ecoturismo, minería) como internas (las quemadas) que afectan de manera considerable la zona donde se encuentra el Parque Nacional Natural el Cocuy; complementario a ello es importante fortalecer y hacer explícita la visión del agua como elemento integral al territorio desde la cosmovisión u’wa y que puede fortalecer el enfrentamiento de las amenazas en su conjunto ya que el territorio u’wa es fuente de agua.

6.7.1. Seguimiento de las amenazas sobre territorio u’wa

Esta investigación permite concluir que los u’wa son una colectividad que, a través de los siglos, ha luchado por la defensa de sus derechos y, ante todo, por la preservación de la naturaleza y los recursos que ésta ofrece, en bien de la humanidad. Aunque su labor altruista en la actualidad empieza a cobrar cierto valor, dado el estado crítico en que se encuentra el planeta, las diferentes sociedades occidentales, gradualmente, han creado una escala de valores que han superpuesto a los principios que rigen esta minoría étnica. Por lo tanto, creemos conveniente sugerir una serie de pautas que podrían fortalecer su lucha y hacer efectivos sus derechos ante los representantes del mundo occidental, que en este caso serían el Estado colombiano y las transnacionales petroleras:

- Desarrollar elementos que reconozcan las amenazas en su conjunto como una dinámica que comienza a ejercer presión principalmente sobre el territorio del Resguardo, ya que todos los proyectos que se están desarrollando se realizan en los límites del mismo.
- Mantener una interlocución permanente con las diferentes entidades y empresas que hacen presencia en el territorio u'wa con el fin de informar de manera constante la posición de la comunidad frente a los diferentes proyectos y actuaciones de estas entidades o empresas, así como solicitar información constante sobre el desarrollo de cualquier proyecto que se adelante en el territorio del grupo nativo.
- Realizar una valoración sobre las amenazas que pueden surgir a futuro ligadas con el desarrollo petrolero en la región como la principal y más fuerte causa de las amenazas que desde hace dos décadas han existido en el territorio u'wa. Principalmente realizar seguimiento a las actividades de exploración y explotación petrolera a desarrollarse dentro de los bloques petroleros asignados en la Ronda 2010 y los bloques a asignar en la Ronda 2012, dado que algunas de estas pueden estarse llevando a cabo a espaldas de la comunidad.
- Realizar un seguimiento permanente de campo a través de los cabildos del Resguardo Unido U'wa de las actividades mineras que puedan afectar el territorio u'wa.
- Fundamentar y fortalecer la consideración del Resguardo Unido U'wa como autoridad ambiental.
- En lo relativo a proyectos como el ecoturismo y el plan maestro de Cubará, es importante mencionar que más allá de un proyecto específico existe de fondo un conflicto sobre la autoridad sobre el territorio, en estos casos más precisamente sobre la autoridad ambiental, que en el caso del territorio u'wa confluyen las corporaciones y Parques Nacionales, de tal manera que es importante aclarar desde una perspectiva jurídica cual es la autoridad ambiental en el territorio u'wa. Por lo tanto, es necesario identificar y denunciar ante PNN la presencia de actividades ecoturísticas dentro del Resguardo Unido U'wa y difundir la visión

de la comunidad sobre el desarrollo de este tipo de actividades en la Sierra Nevada el Cocuy.

- En relación con el Plan Maestro de Agua, determinar la participación del municipio de Cubará en el Plan Departamental de Agua, caracterizando las competencias de los actores del Plan Departamental de Agua frente al Plan Maestro de Cubara. Asimismo, solicitar la actualización del Plan Maestro que se entregará próximamente al municipio con relación al Ecoturismo.

7. Conclusiones

Las páginas anteriores han profundizado en el desenvolvimiento de las comunidades indígenas en Colombia y su interacción con los diferentes grupos de la sociedad nacional, particularmente con las empresas transnacionales y las instituciones del Estado, sin olvidar las organizaciones armadas al margen de la ley. El análisis se ha detenido específicamente en el caso del pueblo u'wa en el transcurso de los últimos veinticinco años, pero necesariamente ha abordado tanto antecedentes históricos como aspectos de ámbito nacional y conceptual que conforman el contexto relevante del caso y, asimismo, han afectado y afectan a otros pueblos indígenas en Colombia.

Al elegir partir de una historia crítica del concepto de “Desarrollo”, en el Capítulo 2, se ha subrayado prácticamente desde el principio la idea rectora de la investigación: la principal agresión cometida contra los grupos nativos en Colombia –y no solo en este contexto nacional– ha sido y sigue siendo la violación de sus territorios, considerados por ellos sagrados, con el objetivo de explotar las riquezas naturales que concentran y generar unos beneficios económicos que, al menos en los espacios explotados, no dejan sino una huella de empobrecimiento económico y ambiental, desigualdad social, pérdida de control territorial y desestructuración cultural. Los capítulos siguientes han ido situando y concretando esta tesis general hasta cumplir con los objetivos específicos establecidos al comienzo.

La reconstrucción y análisis del conflicto u'wa con las multinacionales petroleras, a la que se ha dedicado una parte del Capítulo 6, ha aportado una sucesión de hechos desde la cual evaluar los distintos aspectos que intervienen actualmente en la interacción de los grupos indígenas y el Estado. El conflicto se ha enmarcado dentro del proceso histórico nacional, en el Capítulo 4, caracterizado por una creciente desterritorialización –primero en la época colonial, pero también, posteriormente, en la época republicana–, una constante resistencia a ella reflejada en la lucha por la tierra y –como se ha visto en el Capítulo 5– una escalada de hechos violentos contra las minorías étnicas. El despojo de sus tierras, a lo largo de los siglos, obligó a los diferentes pueblos a organizarse con el fin de poder reclamar de forma efectiva sus derechos. Es por eso que, a partir de la década de los años setenta y comienzos de los ochenta, época en que se consolidan los principales movimientos indígenas en Colombia, estos grupos lograron afianzar un papel protagónico en la arena política del país; a partir de entonces,

se inició contra ellos una persecución por parte de algunos sectores sociales que los vieron como un obstáculo para su propio fortalecimiento económico y político.

La situación actual se deriva, más directamente, de las reivindicaciones de nuevos movimientos sociales y políticos –entre ellos las propias organizaciones indígenas– que, en última instancia, confluyeron en la Constitución de 1991. En este contexto, el análisis del conflicto u’wa nos ha permitido alcanzar tres objetivos enunciados en el Capítulo 1.

En primer lugar, se han valorado las consecuencias nefastas provocadas por la explotación indiscriminada de los recursos naturales, a través de las petroleras y, en general, de una noción de “Desarrollo” que gira en torno al beneficio económico. Este último aspecto ha sido revisado en el Capítulo 2, pero se ha concretado –en el Capítulo 6– mediante la relación de las actividades específicas que se han llevado a cabo en el territorio u’wa y la evaluación de sus efectos negativos para la comunidad. Entre esos efectos se encuentra el incremento de hechos de violencia en la zona; los dirigentes u’wa han sido claros al respecto: la comunidad no está a favor de ningún movimiento armado, pues su lucha, que tiene como objetivo primordial la defensa del planeta, se ha conducido y se conducirá siempre a través del diálogo, por medio del cual solicitan que se les respete su integridad como minoría étnica y se les permita seguir el estilo de vida moderado que los ha caracterizado hasta el presente, haciendo un uso debido de los recursos que les brinda la naturaleza. Es relevante, en este contexto, tener en cuenta que la función de los dirigentes ha sido fundamental a lo largo de la historia. Pruebas de ello se encuentran en los documentos coloniales, donde ha quedado recogida la forma en que los líderes indígenas de aquella época intensificaron su lucha por defender algunos de sus asentamientos tradicionales. En la actualidad, la posición de los werjayas ha sido determinante para hacer valer sus derechos; debe destacarse el papel que ha desempeñado Verito Cobaría como embajador de su comunidad e intermediario entre ella y los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad de Harvard, para que el Estado colombiano reconociera la soberanía sobre su territorio y los recursos naturales que este comprende.

En segundo lugar, se ha hecho una relación de los problemas socio-ambientales que generaría la ejecución de los proyectos actualmente previstos en territorio u’wa. El hecho de que el conflicto con la empresa transnacional OXY acabara con la suspensión

de las exploraciones y explotaciones en el denominado Bloque Samoré en la forma en que habían sido previstas, no ha supuesto el fin de las amenazas. Las riquezas naturales que concentra esta zona ha atraído la atención de diferentes empresas y proyectos, que incluyen la explotación de gas, minerales, madera, actividades de ecoturismo en el área que se superpone con el Parque Nacional Natural El Cocuy y construcción de infraestructura vial.

Otra de las aportaciones del análisis del conflicto u'wa tiene que ver, en tercer lugar, con la dinámica que ha girado en torno a la aplicación y el desarrollo en la práctica de los derechos indígenas reconocidos por las leyes. La Constitución de 1991 expone una serie de principios que preservan las costumbres y cultura de estos grupos, pero los hechos han demostrado que estos son solo una muestra de la buena voluntad de los legisladores y no se hacen efectivos en la realidad. El primer principio que el Estado colombiano ha negado a la comunidad u'wa, así como a la gran mayoría de los pueblos indígenas del país, es el expuesto en el artículo 7° de la Constitución: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Los organismos del Estado, al permitir el desarrollo de proyectos en los territorios de estas colectividades sin importar las repercusiones negativas que todo ello conlleva, ni mucho menos contar con la aprobación ni el punto de vista de las mismas, están olvidando la obligación que han contraído en la Carta Política de proteger la integridad de estas minorías étnicas, dado que se está alterando el curso normal de sus actividades con la llegada de personal foráneo a la zona, incluidos los grupos al margen de la ley.

No solo el artículo 7° de la Constitución se ve vulnerado por los organismos del Estado al otorgar licencias ambientales a las diferentes empresas multinacionales para que adelanten labores de exploración y consiguiente explotación de recursos; con la ejecución de estos proyectos también se han transgredido los artículos 63°, 68°, 246° y 330° de la Carta Magna, donde se exponen los principales derechos de las minorías étnicas del país. A pesar de que estos preceptos dan a entender que los individuos que conforman estos grupos no deben recibir –con el fin de conservar sus costumbres y tradiciones– el mismo trato que el resto de los colombianos y, por lo tanto, debe considerárseles de forma especial, el tiempo ha demostrado que no se les ha protegido de la forma más apropiada al no reconocérseles su situación dentro del contexto nacional.

Sin embargo, un aspecto positivo resultante de la no aplicación de los derechos que corresponden a las minorías étnicas es que, al sentirse vulneradas, las colectividades indígenas, específicamente los u'wa, han aprendido a hacer uso de la mayor cantidad de herramientas legales de que dispone la legislación colombiana, desde la conformación de organizaciones indígenas a nivel nacional hasta la presentación de demandas ante los tribunales nacionales o, aplicando los mecanismos reconocidos en los tratados firmados por Colombia, ante instancias internacionales, sin olvidar la ampliación de los límites de los resguardos con objeto de aproximarse a su extensión ancestral y forzar la participación de la comunidad en su defensa; es importante resaltar la función que han cumplido, en este sentido, algunas instituciones del Estado, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, un órgano constitucional que ha sido creado con el propósito de velar por la promoción, ejecución y divulgación de los derechos humanos dentro del Estado social de derecho. Esta movilización de los recursos legales potenciales a su alcance no constituye un fenómeno nuevo en la historia indígena del país, aunque sí lo sea, obviamente, en los términos de su concreción.

Los tres elementos anteriores –los efectos negativos de los proyectos de explotación de hidrocarburos cuya ejecución se inició en los años noventa, la persistencia de distintos proyectos de explotación con previsibles efectos igualmente negativos y la pugna por la aplicación y el desarrollo de los derechos reconocidos en la Constitución de 1991 e ignorados por los mencionados proyectos– constituyen las causas que han conducido a la situación actual de la comunidad u'wa y explican el porqué de la lucha u'wa en defensa de su territorio. No obstante, y como se ha señalado en los capítulos anteriores, hay un factor importante que subyace en todo el proceso: el enfrentamiento entre dos visiones en torno a la naturaleza y al bienestar.

En el Capítulo 1 se incluyó entre los objetivos de la investigación la caracterización del pueblo u'wa como poseedor de una cultura con una serie de valores altruistas dirigidos a preservar no solo su propio hábitat, sino también el planeta en general. La comunidad indígena u'wa no ha necesitado tener una instrucción de tipo occidental para entender que la extracción de hidrocarburos, entre numerosos perjuicios, produce la erosión del suelo, incrementa las infecciones respiratorias y repercute de forma negativa en la fauna y flora silvestres; que la tala de árboles provoca derrumbes, inundaciones, sequías y vientos huracanados; que la construcción de carreteras en sus

predios vulnera los derechos a la libre movilidad encerrándolos en un espacio cada vez más reducido; que la explotación minera tiene graves efectos como el redireccionamiento de las corrientes de agua y el movimiento masivo de tierras, a la vez que las continuas explosiones en las zonas donde se desarrolla esta actividad afectan el ecosistema y estimulan la deforestación lesionando el hábitat de cientos de especies provocando la extinción de muchas de ellas. Como muestran los discursos de los dirigentes indígenas entrevistados en los trabajos de campo, expuestos en el Capítulo 6, el pensamiento u'wa pone énfasis en el sostenimiento del equilibrio del planeta, del cual se deriva la vida humana y todo lo que hace posible su supervivencia. La naturaleza se concibe como un ser vivo que provee a la humanidad de todo lo necesario. La alteración de ese equilibrio supone una serie de consecuencias negativas entre las que se incluyen, desde su perspectiva, enfermedades, reducción y cambios en las especies animales y vegetales que, a su vez, fuerzan cambios en los modos de vida tradicionales que las incluyen como recursos, y alteración en la composición local de la población, con la llegada de gentes foráneas, la disminución del porcentaje de población nativa y, en última instancia, la disolución del grupo y su cultura.

Algunos autores han puesto en duda la autenticidad del pensamiento indígena, en general, en torno a estas cuestiones. Se han señalado, por un lado, ejemplos de prácticas indígenas de explotación excesiva del medio ambiente y se ha indicado, por otro lado, que sus discursos actuales incluyen muchos elementos que habrían sido tomados del movimiento ambientalista occidental. Esa influencia del pensamiento ambientalista surge de la confluencia de objetivos y la alianza entre indígenas y ecologistas y, aunque exista influencia en un nivel retórico, ello no anula la originalidad del pensamiento nativo, que, como en el caso u'wa contemporáneo, deriva de tradiciones anteriores y mantiene una lógica interna propia.

Dirigiendo la mirada más allá del territorio u'wa, es evidente que la situación física del planeta está al borde de un colapso, simplemente por el egoísmo de la especie humana que se ha puesto como principal objetivo la realización de sus sueños superfluos sin importarle el futuro de las generaciones venideras ni el suyo propio, derrochando las fuentes de vida aún existentes. Sin embargo, ya empieza a despertar ese sentimiento de culpa y ahora es cuando se quiere poner como ejemplo el tipo de vida de

sociedades como la u'wa que, desde siempre, han sabido valorar y utilizar los recursos que su hábitat les ha ofrecido y en ningún momento han abusado de ellos.

Sin embargo, a pesar de estar despertando la conciencia sobre la necesidad de adoptar una actitud responsable con respecto al trato hacia la naturaleza y sus recursos, el comportamiento de la humanidad en general sigue siendo contradictorio, dado que se es consciente del daño que día a día se le sigue ocasionando al planeta, pero pocos son los esfuerzos que se llevan a cabo para remediar esta situación. De la misma forma, el enaltecimiento del comportamiento que tienen los grupos étnicos con el medio ambiente, da más la impresión de querer descargar en ellos la total responsabilidad de la preservación del planeta, cuando deben ser las sociedades occidentales quienes deben frenar la desbordante actividad industrial que solo busca satisfacer el capricho de una sociedad anclada en el simple deseo de tener.

Actualmente se habla de la preponderancia que se le debe dar al conocimiento local sobre el global, es decir, que dadas las consecuencias nefastas que ha tenido para el planeta el aplicar políticas desarrollistas a nivel mundial y la difusión de valores éticos y morales sujetos al exclusivo deseo de tener y acumular bienes materiales sin importar las repercusiones negativas que eso implique, se ha llegado, como se ha comentado anteriormente, a aceptar que el pensamiento tradicional de estas culturas es el adecuado y su modo de vida es un ejemplo a seguir por el resto de la humanidad. Sin embargo, el futuro de ese conocimiento benéfico para la especie humana y, principalmente, para el planeta, depende de la difusión que de él se haga, en lo cual, los científicos sociales, entre ellos los antropólogos, debemos cumplir un papel preponderante en la traducción y transmisión de ese tipo de sabiduría al resto de las sociedades, para que estas la absorban y la apliquen en el medio en el que se desenvuelven.

8. Bibliografía

- Aguablanca, Esperanza, y María Eugenia Romero Moreno (1993). U'wa (Tunebo), en *Geografía humana de Colombia. Región de la Orinoquía*, Tomo III, Volumen 2, págs. 145-184. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Bogotá.
- Ahumada, Consuelo (1996). *El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana*. El Áncora Editores, Bogotá.
- Alape, Arturo (1985). *La paz, la violencia: testigos de excepción*. Editorial Planeta, Bogotá.
- Antoñana Plaza, María (2013). *Descripción de una crisis: la Gran Depresión en Estados Unidos y en España*. Universidad de la Rioja, Logroño.
- Ariza, Libardo José (2004). *Identidad indígena y Derecho estatal en Colombia*. Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao.
- Ávila Molero, Javier (2000). Los dilemas del desarrollo: antropología y promoción en el Perú, en *No hay país más diverso*, Carlos Iván Degregori, editor, págs. 413-442. Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico, Centro de Investigación, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Balassa, Bela, Gerardo M. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski, Mario Henrique Simonsen (1986). *Hacia una Renovación del Crecimiento Económico en América Latina*. Institute for International Economics, Washington, D.C.
- Basher, Reid (2008). Afrontar los desastres naturales. *Revista Migraciones Forzadas*, 31: 35-36. [Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante].
- Bushnell, David (2011). *Colombia. Una nación a pesar de sí misma. Nuestra historia desde los tiempos precolombinos hasta hoy*. Editorial Planeta, Bogotá.
- Cabildo de Guambía (2007) *K Misak Ley, por la defensa del derecho mayor, patrimonio del pueblo misak*. (Disponible en http://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fabbab2d7/Misak_guambiano.pdf).
- Calavia Sáez, Óscar (2006). El indio ecológico: diálogos a través del espejo. *Revista de Occidente* 298: 27-42.
- Carrillo González, Diana (2009). La jurisdicción indígena: del multiculturalismo de 1991 a la resistencia de un movimiento, en *Derecho, interculturalidad y resistencia étnica*, Diana Carrillo González y Santiago Patarroyo Rengifo, págs. 93-106. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

- Castrillón Orrego, Juan Diego (2008). Globalización y derechos indígenas en la Constitución de 1991 de Colombia, en *Representaciones legales de la alteridad indígena*, Herinaldy Gómez y Cristóbal Gnecco, págs. 157-197. Colciencias Editorial Universidad del Cauca, Popayán.
- CEC [Commission for Environmental Cooperation] (2008). *El mosaico de América del Norte. Panorama de los problemas ambientales más relevantes*. Comisión para la Cooperación Ambiental. Montreal. (Disponible en <http://www3.cec.org/islandora/es/item/2349-north-american-mosaic-overview-key-environmental-issues-es.pdf>).
- Conpes (2002). *Autorización a la nación para contratar créditos externos hasta por US \$75 millones, destinados a financiar el corredor de integración de transporte Caracas – Bogotá – Quito*. Documento Conpes 3153. Ministerio de Transporte. Bogotá.
- (2011). *Importancia estratégica del programa “Corredores prioritarios para la prosperidad”*. Documento Conpes 3706. Ministerio de Transporte. Bogotá.
- Constitución Política de Colombia* (2004). Defensoría del pueblo.
- Contraloría General de la República (2007). *Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. 2007-2008 Colombia*. Imprenta Nacional, Bogotá.
- Coral Díaz, Ana Milena (2011). El nativo ecológico y las nuevas tendencias de explotación de recursos naturales. *Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales* 1: 105-116. Lima.
- Córdoba Triviño, Jaime (1996). Acción pública de nulidad, en *La manzana de la discordia. Debate sobre la naturaleza en disputa*, Jairo Hernán Álvarez, págs. 207-218. Editorial Ecofondo, Bogotá.
- Corte Constitucional (2011). Sentencia de Tutela N° 129/11. Bogotá.
- (2013). Sentencia N° T-387/13. Bogotá.
- Correa Cortés, Elena (1997). *Caso U'wa. Estudios de evaluación de impacto ambiental de la Occidental de Colombia y de los conceptos mediante los cuales se otorgó la licencia ambiental*. Programa Coama, Bogotá.
- DANE (2007). *La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos*. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de la República de Colombia. Imprenta Nacional, Bogotá.
- De Duque, Rosa Isabel, y Fredy Ochoa (2008). *Guía para la elaboración de un plan de negocios en ecoturismo*. Universidad Externado de Colombia e Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá.

- Deruyttere Anne (1997). *Pueblos indígenas y desarrollo sostenible: El papel del Banco Interamericano de Desarrollo*. Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Sostenible, Banco Interamericano de Desarrollo.
- Drèze, Jean, Amartya Sen (2014). *Una gloria incierta: India y sus contradicciones*. Prisa Ediciones, Madrid.
- Dureau, Françoise, y Carmen Elisa Flórez (2000). *Aguaitacaminos. Las transformaciones de las ciudades de Yopal, Aguazul, y Tauramena durante la explotación petrolera de Cusiana-Cupiagua*. Editores Tercer Mundo S.A., Bogotá.
- Duro Montealegre, Rosa María (2014). El territorio en la cosmovisión indígena como prerequisite para el etnodesarrollo: la amenaza del neo-extractivismo en América Latina. Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, Huelva, 16 y 17 de junio de 2014.
- Eraso Jurado, Rosa Amalia (1997). *El caso U'wa. Los derechos de los pueblos indígenas como base del reconocimiento de la Diversidad Étnica y Cultural*. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Bogotá
- Escobar, Arturo (1999). Antropología y desarrollo. *Maguaré, Revista del Departamento de Antropología* 14: 42-73. [Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas].
- Esquivel Lugardo, Jorge (2009). *Población Mundial*. Universidad del Valle de México, México, D.F.
- Falchetti, Ana María (2003). *La búsqueda del equilibrio. Los Uwa y la defensa de su territorio sagrado en tiempos coloniales*. Biblioteca de Historia Nacional, volumen CLX. Academia Colombiana de Historia, Bogotá.
- (2007). *El legado milenario de los U'wa. La sabiduría ancestral de un pueblo indígena*. CEP- Banco de la República, Bogotá.
- Gaviria Cadavid, Fernando (2006). *Moneda, banca y teoría monetaria*, 7ª ed. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Bogotá.
- Gimeno Martín, Juan Carlos (1999). Antropología del desarrollo y economía política, en *Simposio VI: Antropología y Economía Política. Congreso de Antropología. VIII. 1999*. Págs. 19-26. Santiago de Compostela.
- Giribets Martínez, Miguel (2009). *Algunas consideraciones sobre la crisis actual del capitalismo*. Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. (Disponible en <http://www.eumed.net/libros/2009c/599/>).

- González Scobie, Juan Manuel (1996). La naturaleza en disputa y la naturaleza en la disputa, en *La manzana de la discordia. Debate sobre la naturaleza en disputa*, Jairo Hernán Álvarez, págs. 7-18. Editorial Ecofondo, Bogotá.
- Green Stoccel, Abadío (2010). El aporte de los pueblos indígenas a un país diverso, en *Documentos para la historia del movimiento indígena colombiano contemporáneo*, compilado por Enrique Sánchez Gutiérrez y Hernán Molina Echeverri, págs. 305-325. Ministerio de Cultura, Bogotá.
- Gros, Christian (1991). *Colombia indígena. Identidad cultural y cambio social*. Fondo Editorial CEREC, Bogotá.
- Grupo de Barbados (1975 [1971]). Por la liberación del indígena, en *Por la liberación del indígena: documentos y testimonios*, compilación de Adolfo Colombres, págs. 20-31. Ediciones del Sol, Buenos Aires.
- (1979) *Indianidad y descolonización en América Latina: documentos de la segunda reunión de Barbados*. Nueva Imagen, México.
- (1994) Declaración de Barbados III: articulación de la diversidad. *Arinsana* 15: 77-86. Caracas.
- Guhl, Ernesto (1967). *Colombia. Bosquejo de Su Geografía Tropical*. Comisión de Geografía. Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Río de Janeiro.
- Guitián, Manuel, y Joaquim Muns (1998). *La cultura de la estabilidad y el consenso de Washington*. Colección Estudios e Informes, N° 15. La Caixa, Barcelona.
- Guzmán Campos, Germán, Orlando Fals Borda, y Eduardo Umaña Luna (1988). *La violencia en Colombia*. 2 Tomos. Círculo de Lectores, Bogotá.
- Headland, Edna R. (1997). *Diccionario bilingüe uw cuwa (tunebo)-español, español-uw cuwa*. Instituto Lingüístico de Verano, Bogotá.
- Heilbroner, Robert L. (1964). *Vida y doctrina de los grandes economistas*. Aguilar, Madrid.
- Idárraga Franco, Andrés, Diego Andrés Muñoz Casallas, e Hildebrando Vélez Galeano (2010). *Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia: Casos de la Inversión Británica*. Merlín S.E., Cali.
- IDEADE [Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo] (1997a). Presentación del proyecto al pueblo U'wa, a campesinos e instituciones, en *Proyecto: Participación del pueblo U'wa en el manejo, recuperación y conservación del área del Parque Nacional Natural El Cocuy que se superpone con el territorio indígena U'wa*. N° 1. Bogotá.

- (1997b). Travesía por el territorio U'wa, en *Proyecto: Participación del pueblo U'wa en el manejo, recuperación y conservación del área del Parque Nacional Natural El Cocuy que se superpone con el territorio indígena U'wa*. N° 4. Bogotá.
- Incoplan S.A. (2010). *Estudio Técnico Sectorial. “Infraestructura de transporte multimodal y de logísticas integradas para el desarrollo de la industria minera en Colombia, con énfasis en puertos”*. Ministerio de Minas y Energía, Bogotá.
- INIPU (2008). El desplazamiento en Colombia. *Boletín del Consejo Nacional Indígena de Paz*, N° 18. Organización Nacional Indígena de Colombia, Bogotá.
- Kalmanovitz, Salomón (1985). *Economía y Nación. Una breve historia de Colombia*. Siglo Veintiuno Editores, Bogotá.
- Kroeber, A. L. (1946). The Chibcha, en *Handbook of South American Indians. Vol. 2: The Andean Civilizations*, Julian H. Steward, ed., pp. 887-909. Smithsonian Institution, Washington.
- Lamas, Martha (2000). *El género. La construcción cultural de la diferencia sexual*. PUEG. Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, México.
- Lekachman, Robert (1970). *La era de Keynes*. Alianza Editorial, Madrid.
- Linares Prieto, Patricia (2004). *La diversidad étnica en Colombia. Alcances y desarrollo*. Procuraduría General de la Nación, Grupos de Asuntos Étnicos, Bogotá.
- Márquez, María Elena (1981). *Los indios Tunebo y su cosmogonía*. Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones Históricas, Centro de Lenguas Indígenas, Caracas.
- Moyer, Michael (2010). Agotamiento de los recursos naturales. Un informe gráfico sobre cuánto más le podemos pedir a nuestro planeta. *Investigación y Ciencia* 410: 68-75.
- Murguialday, Clara (2012). Miradas del desarrollo a las mujeres y las relaciones de género, en *Antropología y desarrollo. Discurso, prácticas y actores*, págs. 285-327. Los Libros de la Catarata, Madrid.
- Narváez, Iván (2004). *Derecho ambiental. Derecho Ambiental y temas de sociología ambiental: (conflictos socio-ambientales en el sector extractivo: enfoque político)*. Editora Jurídica Cevallos, Quito.
- ONIC [Organización Nacional Indígena de Colombia] (1995). *Acción urgente por el pueblo U'wa*. Organización Nacional Indígena de Colombia, Bogotá.

- (1997). *Impacto histórico de las actividades petroleras sobre los pueblos indígenas en Colombia*. Organización Nacional Indígena de Colombia, Bogotá.
- (1998). *Memorias del V Congreso Nacional Indígena. Los pueblos Indígenas de Colombia Un reto hacia el nuevo milenio*. Fundación ETNOLLANO, Bogotá.
- ONU (2007). Previsiones demográficas mundiales Revisión de 2006. Resumen. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población, Nueva York.
- OPIAC [Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana] (2010). Apreciaciones respecto al avance de la violencia en nuestros territorios y al proceso de negociación que adelanta el Gobierno con las organizaciones armadas, en *Documentos para la historia del movimiento indígena colombiano contemporáneo*, compilado por Enrique Sánchez Gutiérrez y Hernán Molina Echeverri, págs. 343-346. Ministerio de Cultura, Bogotá.
- Ortiz Parrado, Mariano (s.f. [posterior a 2000]). *U'wa Patrimonio Indígena de Boyacá*. Ed. Talleres Gráficos Secretaría de Educación de Boyacá.
- Osborn, Ann (1979). *La cerámica de los Tunebos. Un estudio etnográfico*. Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la República, Bogotá.
- (1985). *El vuelo de las Tijeretas*. Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la República, Bogotá.
- (1995). *Las Cuatro Estaciones. Mitología y estructura social entre los U'wa*. Colección Bibliográfica Museo del Oro, Banco de la República, Bogotá.
- Ospina, William (2004). *América Mestiza. El país del futuro*. Editorial Aguilar, Bogotá.
- (2013a). *La escuela de la noche*. Editorial Mondadori, Bogotá.
- (2013b). *Pa que se acabe la vaina*. Editorial Planeta, Bogotá.
- Oxfam (2014). *Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica*. Informe de Oxfam. Documento electrónico, con acceso el 3 de octubre de 2014, <http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-es.pdf> publicado el 20 de enero.
- Pachakuti, Soldepaz (2004). Deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado 1988-2003, en *Noche y Niebla*. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de CINEP, Bogotá.

- Palacio, Germán (1996). La naturaleza en disputa, en *La manzana de la discordia. Debate sobre la naturaleza en disputa*, Jairo Hernán Álvarez, págs. 19-29. Editorial Ecofondo, Bogotá.
- Pearce, Jenny (2005). *Más allá de la malla perimetral. El petróleo y el conflicto armado en Casanare, Colombia*. Ediciones Antropos Ltda., Bogotá.
- Penagos Forero, María Fernanda (2001). *El Estado colombiano: Un actor pasivo frente a la problemática de los indígenas U'wa en relación con sus derechos sobre la tierra*. Centro Editorial Rosarista, Universidad del Rosario, Bogotá.
- Pérez Galán, Beatriz (2012). *Antropología y desarrollo. Discurso, prácticas y actores*. Los Libros de la Catarata, Madrid.
- PNUD [Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo] (2010). Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad.
- Quintero, Pablo (2012). Los estudios antropológicos del desarrollo. *Revista Científica de Investigaciones Regionales*, 34 (2): 131-154. [Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida].
- Ramírez, Carolina, y Marilyn Quiroga (1999). *Conflicto U'wa-OXY*. Documento audiovisual. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
- Rangel Quintero, Aída (1996). Tutela, en *La manzana de la discordia. Debate sobre la naturaleza en disputa*, Jairo Hernán Álvarez, págs. 219-225. Editorial Ecofondo, Bogotá.
- Robayo Bohórquez, Ana María (2001). *Explotación petrolera en territorio U'wa ¿Un caso de irresponsabilidad social?* Universidad de los Andes, Facultad de Administración, Bogotá.
- Saavedra Ruiz, Eutimio (2005). *Manual Orientado a la Planificación y Manejo de Parques Nacionales Aplicado a Colombia*. Universidad del Tolima, Ibagué-Tolima.
- Sánchez Botero, Esther (2010). *Justicia y pueblos indígenas de Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Sánchez Gómez, Gonzalo (2003). *Guerras, memoria e historia*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá.
- Sarmiento Palacio, Eduardo (1990). Una década perdida para América Latina. *Revista Colombia Internacional*, 9: 10-12. [Universidad de los Andes].

- Steward, Julian H. (1946-59). *Handbook of South American Indians*, 7 vols. Smithsonian Institution, Washington.
- UAESPNN (2005-2009). *Plan de manejo del Parque Nacional Natural El Cocuy 2005-2009. Documento Ejecutivo*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá.
- Ulloa, Astrid (2004). *La construcción del nativo ecológico: complejidades, paradojas y dilemas de la relación entre los movimientos indígenas y el ambientalismo en Colombia*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia – Colciencias, Bogotá.
- Ungar, Elisabeth, y Aquiles Arrieta (2004). *¿Morir antes que perder la identidad o la libertad? El caso de los indígenas U'wa y la Ley Antisecuestro como ejemplos de Accountability societal en Colombia*. Documento de Investigación N° 11. Serie Documentos de Investigación, Nuevos Estudios Socio Jurídicos. Facultad de Derechos, Universidad de los Andes, Bogotá.
- Uribe Botero, Ángela (2003). El caso U'wa: Entre “El vuelo de las Tijeretas” y la forma de la ley, en *Racionalidad y discurso mítico*, Adolfo Chaparro, Christian Schumacher, págs. 247-265. Centro Editorial Universidad del Rosario, ICANH. Bogotá.
- (2005). *Petróleo, economía y cultura. El caso U'wa*. Siglo del Hombre Editores, Universidad del Rosario, Bogotá.
- Uribe Hermocillo, Julio César (1996). Sobre el conflicto étnico y ambiental en territorio u'wa, en *La manzana de la discordia. Debate sobre la naturaleza en disputa*, Jairo Hernán Álvarez, págs. 174-187. Editorial Ecofondo, Bogotá.
- Urueña Sánchez, Mario Iván (2009). *El dilema de la hidra: Evolución del paramilitarismo contemporáneo en Colombia desde una perspectiva explicativa*. Universidad la Gran Colombia, Bogotá.
- Vargas Llosa, Mario (2012). *La civilización del espectáculo*. Edición Alfaguara, Bogotá.
- Villa, William, y Juan Houghton (2004). *Violencia contra los pueblos indígenas en Colombia, 1974-2004*. Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas IWGIA, Bogotá.
- Viola, Andreu (2000). *Antropología del desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América Latina*. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona.
- Werjayas, Cabildos, Cabildo Mayor, Equipo de Etnoeducación (1996). Pueblo indígena u'wa u'wchita (nuestro territorio), en *La manzana de la discordia. Debate sobre*

la naturaleza en disputa, Jairo Hernán Álvarez, págs. 188-206. Editorial Ecofondo, Bogotá.

Anexos

Anexo 1: Entrevistas

1.1. Entrevista a Claudia Cobaría

“Los U’wa somos gente de paz, gente de bien. Nuestro territorio es realmente un paraíso y hago un llamado internacional para que ayudemos entre todos a cuidar y a proteger la naturaleza, porque tanto ella como el oxígeno son para protegerlos y no para destruirlos. En un ambiente sano hay una buena salud y un buen vivir, sobre todo, porque las generaciones no sufren de tantas enfermedades. Para el país, para el mundo y para España, pido nuevamente que nos ayuden a proteger la naturaleza” (Claudia Cobaría, septiembre, 2012).

Mi nombre es Claudia Patricia Cobaría Bókota, actualmente soy fiscal de AsoU’wa. Dentro de la asociación me siento privilegiada porque son pocas las mujeres que llegan acá y no porque no haya oportunidad, sino porque este es un proceso largo donde tiene uno que tener trayectoria. Pasar por ser cabildo, representar a las comunidades, ser vocera, ser líder y ahí sí, ser parte de AsoU’wa, siendo elegido uno en el congreso.

Somos mujeres que estamos aquí en la regional, la Asociación de Autoridades tradicional y regional, AsoU’wa, estamos representando a tres departamentos que son Boyacá, Norte de Santander y Santander, y ésta es la sede oficial de AsoU’wa. Los 17 cabildos son filiales de AsoU’wa, y nosotros somos los voceros legales ante las instituciones del Estado. Somos cinco ejecutivos: presidente, vicepresidente, secretaría general, fiscal y tesorería.

La función de la fiscal en AsoU’wa es mirar y velar por el buen funcionamiento de la organización; que todos los mandatos se cumplan, que todos se desempeñen bien en su trabajo, que las asambleas y congresos se cumplan a cabalidad, y también mantener la coordinación directa con las comunidades. Realmente esa es mi función, velar porque todos los mandatos de las asambleas, de los congresos y de las autoridades se cumplan dentro de la organización.

¿Ustedes como un pueblo milenario, por qué piensan que todas las prácticas que llevan a cabo logran un equilibrio entre la selva, los hombres y los espíritus?

Nosotros somos una cultura con unos principios muy claros y una serie de mandatos que Dios nos dio. Se dice que los U'wa somos los guardianes de la madre tierra, porque cuando Dios creo el mundo y creo al hombre, a cada pueblo le dio su misión para que pudiese subsistir. De ahí surgió la Ley de Origen, que dice que los U'wa deben valorar y respetar, conocer las normas de la naturaleza para poder convivir en ella. La naturaleza no se puede destruir porque ella está viva. Ella tiene que seguir con su fuerza, su energía, y para eso el hombre tiene que equilibrarla llevando a cabo sus ritos, sus cantos, respetando la norma, respetando la Ley de Origen, respetando la ley de la naturaleza, y todo eso hace que el hombre se mantenga en armonía con la misma naturaleza, con el mismo hombre y sobre todo con el universo.

Las autoridades U'wa, procuran mantener el equilibrio dominando el aire, el agua, el viento, para que todo eso no sea una amenaza para el mismo plan de la naturaleza sino que se mantenga regulado, porque cada árbol, cada piedra, cada cosa, todo tiene su ley, su espíritu, su origen, su misión y su razón de existir en la tierra. Es por eso que el U'wa conoce y respeta las leyes, convive con la naturaleza y trata de mantener la armonía para que el mundo se mantenga libre de enfermedades y de paso minimiza las guerras en nuestros territorios.

Dentro de nuestra cultura el maíz tiene un significado muy especial porque es un alimento ceremonial, que se utiliza solo durante una época del año y a partir de él, el hombre mantiene el equilibrio, regulando y sobre todo ayunando y respetando la Ley de Origen. En esa época se puede comer maíz y por eso se celebra una ceremonia que consiste en un baile, es algo muy propio y es nuestra base principal.

La *reowa* es el ayuno, y consiste en la purificación del hombre cuando éste entra en contacto con la naturaleza. Son los ritos de purificación que realiza el hombre para cumplir con la naturaleza; cuando el hombre va a entrar en la cultura, o sea cuando se va a la selva, se piensa que si ha estado en la ciudad o en occidente, debe hacer una serie de ayunos y rituales para purificarse. Todo eso significa la *reowa*.

La Cócora es una hoja que se le coloca a la niña en la cabeza cuando se desarrolla, es decir, cuando le llega la primera menstruación. Eso tiene un significado muy especial porque significa que es la fertilización de la niña, es el paso que va a dar para ser mujer y simboliza que ya está preparada para ser madre.

Lo que hace la autoridad es purificarla y encomendarle a la naturaleza que sea una buena madre, que sea madre y que sus hijos sean útiles para la comunidad, pero sobre todo, que a ella le vaya bien, por eso es que a ella se le practica este rito, para demostrar que ella ya dejó de ser niña y que pasa a la vida adulta. Se le encomienda a la naturaleza y a Dios que la guíe y la lleve por buen camino y que ante todo su vida sea útil para la sociedad. Todo esto se lleva a cabo en el momento en que se desarrolla la niña, ya sea a los doce, trece o catorce años; en ese momento se le pregunta cuánto tiempo quiere llevar la Cócora, uno o dos años, y se le hace una ceremonia donde participa mucha gente. Esta ceremonia se presta para la unión de las familias.

Cuando compramos la sal debemos hacer un ritual porque ésta viene contaminada. Este consiste en que la autoridad se la lleva y le hace una purificación; la ceremonia se lleva a cabo con el fin de que la comunidad la pueda consumir, porque todo lo que es de afuera está contaminado, ya que está tocado por los blancos.

El rito de Anmayá o rito de las abejas, es el movimiento de las abejas y se lleva a cabo en diciembre, en la época de las siembras. Se hace cuando se termina de socolar o de sembrar y es para que haya buenas cosechas; se purifica la siembra y se bendice todo. Se llama el movimiento de las abejas porque ellas trabajan hasta formar la colmena y hacer que se produzca la miel. El canto hace referencia a que trabajan para que haya frutos y comida, en este rito hay chicha, hay comida, para que cuando terminen todos de trabajar, se lleve a cabo y así se evita que los campos se llenen de maleza y no les caigan plagas, a la vez que ayuda a que las cosechas sean abundantes.

¿Con qué fin hacen la purificación del Cuesco?

Es una de las leyes de origen, es una norma que nos sirve para mantenernos, y es muy importante para nosotros porque de esa forma se armoniza la naturaleza con el hombre y se replantea nuevamente la ley de origen y el respeto a ella. Se debe hacer un ayuno sagrado, el cual es muy duro porque no se puede comer sal, la persona tiene que estar totalmente entregada a la naturaleza, respetando la ley de Dios, respetando la ley de origen y cumpliendo por tres meses las órdenes de Dios; lo que Él ha dicho que se debe hacer para que nuestro pueblo esté bendecido y obtenga respeto de otras comunidades, a la vez que nos dará más capacidades sobre los demás. Esto se hace cada año, de mayo a agosto, y al estar bendecido, uno se purifica, lo cual obliga a la persona

que lo hace a que permanezca internado por tres meses dentro de la comunidad y no debe tener contacto con el exterior.

¿Qué entienden por armonía entre el pueblo U'wa y medio ambiente?

La armonía es no contaminar, mantener un ambiente sano, un ambiente de equilibrio, un ambiente puro; un ambiente donde no haya tantas enfermedades, y la contaminación sea mínima, entonces así se logra la armonía, se respeta la naturaleza y se siente la pureza en ella. Se trata de respetar, porque hay partes de la naturaleza que no se pueden tocar, que no se pueden tumbar, que no se pueden socolar. Hay ríos que no se pueden tocar, que deben respetarse y que no se pueden comer los peces que hay en ellos, esos ríos son intocables porque tienen sus leyes, además porque son conexiones entre el páramo y el mar. Son ríos sagrados porque desembocan en el mar y por eso hay que respetarlos. Si llegamos a violar ese reglamentos a nosotros se nos castiga; pueden llegar enfermedades, contaminaciones y muchas cosas malas, por eso lo que nosotros hacemos es respetar.

A lo largo del año, ustedes se van rotando por todo el territorio, ¿cómo lo hacen?

Primero que todo el territorio nuestro se ha reducido, porque el territorio ancestral iba por un lado, hasta Mérida en Venezuela, por otro, hasta el departamento del Casanare y hacia el norte, iba hasta Pamplona. El territorio era muy grande y se redujo porque desde la población de Cubará se llega al Resguardo en cinco minutos, y allí ya empiezan las líneas del territorio porque no han terminado de sanear. Ese es uno de los problemas que tenemos, que el gobierno no ha cumplido con el saneamiento total del territorio.

La gente se ha tenido que desplazar para la zona alta de la Sierra Nevada que es fría, donde hay alimento por temporadas. Si hay alimento, lo hay para dos o tres meses, o hasta seis meses, pero solo maíz y tubérculos. El frijol y otros granos, se producen en determinadas épocas del año, lo cual hace que en algún momento se acaben.

Es por eso, que la zona alta es el sitio propicio para ayunar y llevar a cabo algunas ceremonias. Luego, cuando se da la cosecha, ésta se recoge, se siembra nuevamente y toda la comunidad se desplaza a la parte media de la Sierra Nevada. En

esta zona, se produce plátano y ortigo, pero al ser muchos, en total siete comunidades en Boyacá, y al estar tan cerca la una de la otra, la tierra solo alcanza para unos cuantos, ya que las familias son grandes. En esta zona, se vuelve a sembrar y se deja todo listo para poder trasladarse a la parte baja. En esta parte, la comunidad permanece cuatro meses, diciembre, enero, febrero y marzo, y a finales de éste último mes, la comunidad vuelve a la zona media y posteriormente a la zona alta. De esta forma la comunidad lleva a cabo los desplazamientos; así recolecta los alimentos que se producen según la zona en la que se encuentre, ya que en estas los alimentos no se producen permanentemente.

La cultura está formada por clanes, ¿cuántos son y cómo se llaman?

Se les puede llamar clanes o comunidades, y dentro de ellas están la comunidad de Bachíra que se encuentra en Tierradentro y pertenece a la jurisdicción del municipio de Guicán; la comunidad de Bókota Alta donde la mitad pertenece al municipio de Guicán y la otra mitad pertenece al municipio de Cubará. De otra parte está Rocas Válida, que está cerca al departamento de Arauca; se encuentra también Bókota parte baja, Cobarías, Tegría, Rinconada y Barbosa que está a cuarenta minutos del casco urbano de Cubará.

Cada comunidad tiene su jurisdicción y su territorio; las ayudas se le dan a la que más lo necesite. También tenemos otros territorios pero lamentablemente no son buenos para cultivar. Escasamente algunos producen yuca y plátano pero solo en sitios cercanos a los ríos, de resto las tierras son muy malas, por eso es que a veces se ven casos de desnutrición, ya que es muy escasa la comida en esas zonas. Con respecto al ganado, son muy pocos los que tienen un cordero o algunas vacas, los casos son contados, dado que el territorio no se presta para eso. En las zonas altas los indígenas no posee ningún tipo de ganado porque en esa zona los terrenos son muy pequeños y no quedaría espacio para cultivar.

En total son diecisiete comunidades: tres en el departamento de Santander, en el departamento de Boyacá hay siete y otras siete en el departamento de Norte de Santander.

¿Cómo ha sido el proceso de formación de estas comunidades?

La formación que hemos tenido y que nos ha unido como pueblo viene del año 1948 cuando se empieza a producir la colonización en la parte alta y empiezan a invadir nuestro territorio. Ha influido también la llegada de la religión católica a la zona de Cubará que en ese entonces era solo montaña y pertenecía a nuestro territorio indígena. Todo eso hizo que empezaran a llegar colonos y gente de la nación que nos quitaban las tierras, nos quitaban nuestros cultivos y nos quitaron todo. También hicieron que nos fuéramos desplazando hacia las zonas altas.

Al ver esta situación, las comunidades se vieron en la necesidad de reunirse porque hubo situaciones difíciles para nosotros como el que nos obligaron a aprender español y a convertirnos a la religión católica. Si una madre tenía tres hijos le quitaban los dos menores, y si la madre no quería dejarlos los amarraban como animales, amenazaban a toda la familia y los obligaban a ir a misa, por eso hicieron iglesias en todas las comunidades.

Al ver todo eso, nos vimos en la necesidad de organizarnos, pensamos que merecíamos respeto y si no nos defendíamos nadie lo iba a hacer por nosotros. También dijimos que éramos personas comunes y corrientes y teníamos nuestros propios principios. Todo eso lo hacían sacerdotes e incluso a mis padres los sacaron de la comunidad, les prohibían hablar en grupo y los metieron en el internado que se encuentra en la vereda de El Chuscal.

Así fue como nuestros mayores fueron hablando entre ellos y en aquel entonces llegó Guillermo Pérez que era un campesino evangélico y no compartía las actuaciones de la religión católica. Él les indicaba a los U'wa que tenían que hacer para no dejarse humillar. Muchas veces los acompañó a Tunja a colocar demandas y de esa forma empezó la organización de los U'wa que cada vez exigen más respeto. Desde ese entonces se empieza a ir a la Secretaría a denunciar la invasión a nuestros territorios y en ese proceso se empezaron a formar los antiguos líderes.

En los años ochenta se funda Asotunebo que es raíz o la madre es AsoU'wa; posteriormente se va a llamar Asociación del Oriente Colombiano. En este proceso se nombró un presidente y nos reconocieron como grupo indígena. Por medio del antiguo INDERENA nos dieron el Resguardo y poco a poco hemos seguido en el proceso de recuperación de tierras. La lucha por la recuperación de tierras con el tiempo ha sido

muy difícil por la aparición de los diferentes actores armados. Nosotros no tenemos armas, nuestra arma es la palabra y lo único que hemos pedido a través del tiempo es respeto. Respeto a nuestro territorio y a nuestra vida porque realmente tenemos una forma de vida diferente a la del mundo occidental.

Después de todo el proceso anterior se formó la asociación Unicoc, que mantuvo este nombre hasta 1994; después de este año se legaliza ante el Ministerio del Interior la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildo AsoU'wa, la cual ya ha tenido hasta el momento cinco presidentes y ha cumplido veinte años de fundada. Cada periodo presidencial es de cuatro años.

Todo esto no ha sido fácil porque nosotros a través del sufrimiento hemos llegado hasta este punto. Todo pueblo que ha alcanzado cierta organización es porque la ha sufrido, ha tenido enfrentamientos y ha sido amenazada. Nosotros nos hemos ido organizando para recuperar nuestras tierras porque nos estaban sacando de ellas y éramos vulnerables. Incluso, ha venido gente de afuera y nuestros padres pasaron a ser jornaleros de ellos sabiendo que eran nuestras tierras, pero no las quitaron y después obligaron a trabajar en ellas. Así empezó la recuperación de nuestros territorios, de nuestra cultura y nuestra lengua.

Ninguna de nuestras comunidades se ha desintegrado, todas se han mantenido aunque dos de ellas, con el proceso de Ecopetrol, cuando éste llegó, estuvieron en peligro porque la petrolera les ofreció muchas cosas a cambio de que les dejaran hacer las exploraciones en sus tierras. Después ellos se dieron cuenta que era algo negativo y con las negociaciones de Roberto Cobaría, quien en 1999 internacionalizó la problemática, se nos preguntó sobre nuestro pensamiento acerca del petróleo, de la madre tierra, porqué peleábamos, y en general sobre lo que queríamos los U'wa. Esas dos comunidades volvieron y se dieron cuenta cuál era su verdadera tradición. Ellos pensaron que realmente no querían cambiar porque tenían sus propias leyes y nadie podría dividir la unión que hay en el pueblo U'wa en general.

¿Piensa que a partir de la Constitución de 1991, que ha defendido notablemente a las comunidades indígenas, se ha continuado la invasión al territorio U'wa?

Nosotros pensamos que en la Constitución las leyes están claras, lo que sucede es que ningún gobierno ha cumplido, incluso a los mismos blancos, que para nosotros somos todos iguales aunque ellos tienen su propia cultura y su propia lengua, el mismo gobierno no les ha cumplido. Nosotros creemos que la Constitución es una ley que debería respetarse porque se equipara con lo que para nosotros es la Ley de Origen. Pero realmente el gobierno nunca la respeta, ellos acomodan la ley para el beneficio de unos cuantos y los demás quedamos por fuera. Si el gobierno nos cumpliera como realmente lo ordena la Constitución, estuviéramos bien pero lamentablemente se violan nuestros derechos, y además, cada día van cambiando las leyes, y para los U'wa un mandato no se puede cambiar porque es un dictamen que el hombre debe cumplir. Nosotros respetamos mucho la Constitución pero lamentablemente los gobiernos de turno no la respetan y cambian las leyes no en beneficio de todos los colombianos sino de unos pocos.

¿El territorio que habitan ha sido víctima de incursiones por parte de grupos al margen de la ley?

Este piedemonte llanero ha sido siempre una zona abandonada, muy apartada y no era conocida hasta hace relativamente poco tiempo. No se sabía si pertenecía a Boyacá, a Santander o a Norte de Santander. Todo esto ha venido a conocerse cuando Ecopetrol ha descubierto que aquí había petróleo y empezó a hacer estudios sísmicos. Han ido hasta Arauca que se encuentra a cuatro horas de distancia de Cubará y eso ha hecho que se despertaran los grupos armados, específicamente el ELN y la Fuerza Pública quienes han andado por la línea del Resguardo invadiendo y pasando por nuestro territorio, realizando incursiones en él. Por eso, cuando ha habido protestas contra Ecopetrol, a nosotros nos han señalado también y nos han dicho que nuestros territorios son zonas de paso y que los distintos grupos se refugian allí.

Cuando llegó Ecopetrol a la zona e iniciaron las exploraciones sísmicas, también llegaron los grupos armados y por consiguiente las guerras entre ellos. De esta forma, han invadido nuestro territorio, pero a su vez ha hecho que nosotros los U'wa nos fortalezcamos cada vez más y logremos ejercer la autonomía sobre nuestras tierras. Es por eso que antiguamente nos señalaban pero afortunadamente este punto ya se ha aclarado y repetimos que no queremos ningún acto salvaje en nuestro territorio; hemos hablado con la fuerza pública para que respeten nuestras tierras. Lamentablemente no

podemos decirle a ninguno de los actores políticos que no pasen por nuestros predios, lo único que les pedimos es que pasen con respeto y que a nosotros no nos involucren en nada.

Los grupos armados al margen de la ley vienen a la zona cuando empiezan las exploraciones sísmicas o cuando se lleva a cabo el bicentenario. Gracias a Dios esta zona no se conoce por ser violenta y no ha habido muchos muertos. Gracias a Dios y gracias a la naturaleza que tenemos un territorio de paz.

¿Ha habido instituciones gubernamentales que han intercedido ante el gobierno para lograr que ustedes recuperen los territorios que han perdido?

Si, los U'wa han interpuesto una demanda ante la Comisión Internacional Interamericana para exigir la no explotación petrolera. Así se le exige al gobierno que proteja nuestro Resguardo y que nos devuelva los territorios que nos han pertenecido de mucho tiempo atrás. De esta forma, la Corte le exige al Estado que nos devuelva lo nuestro y le dice que tiene que comprarnos algunos territorios para que estos pasen a ser parte de nuestra propiedad, todo esto dentro de un plazo de ocho años que terminó en 2008.

Al finalizar este período, tenían que habernos entregado el Resguardo totalmente saneado y ha transcurrido el 2012 y no nos han saneado totalmente el territorio, solo parcialmente porque el dinero que dejan es muy poco, son solo tres millones de pesos y con eso no se avanza mucho porque son muchas fincas, muchos los colonos que están en nuestro Resguardo y el gobierno todavía no ha llegado a un acuerdo para lograr el saneamiento total. En total, se ha saneado aproximadamente el 60%, pero el nuevo gobierno no quiere invertir dinero en este proceso. Nosotros siempre le hemos exigido al gobierno de forma directa como a través de entes internacionales, que nos devuelva nuestro territorio y es un compromiso que él no ha cumplido.

¿Cómo valora la relación de la comunidad con el Estado colombiano, es buena, mala o se sienten defraudados?

El Estado colombiano y el gobierno nos reconoce como cultura y reconoce nuestros territorios pero lamentablemente nunca nos vamos a sentar y a ponernos de acuerdo porque una cosa es lo que ellos piensen y otra la visión inteligente que tenemos

los pueblos indígenas y el pueblo U'wa principalmente. El gobierno solo piensa en vender y llama desarrollo de la economía a lo que nosotros llamamos explotación. Ellos quieren vender todo lo de la naturaleza, en cambio para los U'wa nada es negociable. Lo que es el petróleo, la naturaleza y el agua, son fuentes y son sagrados porque eso lo creo Dios para que el hombre pudiera vivir y no lo explotara.

En ese sentido, nosotros siempre vamos a estar en desacuerdo con el gobierno, porque ellos dicen una cosa y los U'wa pensamos otra. Aunque el Estado nos reconoce nunca respeta lo que nosotros queremos como pueblo.

Ustedes tienen como principio el tomar de la naturaleza exclusivamente lo necesario, ¿de qué forma piensan que no se exceden en la toma de esos recursos y de qué forma miden aquello que sacan de la naturaleza pensando siempre en que no le hacen daño a ella?

Existe la ley natural, la ley de la selva o ley del monte, que nosotros los U'wa llamamos "Ley Atabá". Nosotros sabemos en donde podemos socolar y donde no; también sabemos cuántos metros podemos socolar y cuántos árboles debemos tumar al año. Los indígenas rozan, cultivan y hasta diez años después pueden volver a tocar esa tierra. Todo esto está en la ley de origen, que dice cuánto debe tomar cada familia, cuánto debe talar, a donde debe ir a cazar y a donde no; qué animales debe comer y cuáles no.

Todo lo anterior está regulado dentro de la misma ley de origen y eso hace que uno utilice estrictamente lo necesario; esa es la reciprocidad entre el hombre y la naturaleza, el respeto a las leyes.

¿Qué entes gubernamentales piensa que les ha brindado más ayuda al pueblo U'wa?

En este caso, cuando empezamos la defensa por el territorio, encontramos solidaridad por parte de algunos organismos como la Defensoría del Pueblo, pero realmente no hemos tenido un apoyo total de un grupo específico, porque ellos forman parte de un gobierno y un Estado y eso hace que tengan que respetar unos mandatos y acatar la ley.

Apoyo total no sentimos, porque aquí en Cubará los alcaldes no nos han apoyado en ninguna propuesta, no hay solidaridad, no se les ve ese empeño por ayudarnos. En el caso de los U'wa, dentro de su plan de gobierno, se ha creado el proyecto del Plan Maestro de Privatización del Agua en Cubará; se va a vender a una multinacional que va a aportar seis mil millones de pesos para instalar las tuberías y privatizar el servicio. Es injusto que se haga esto en un municipio tan pequeño y en una población tan pobre, sobre todo cuando el agua viene del mismo territorio U'wa.

Para los U'wa, el agua no tiene precio, el agua es nuestra fuente de vida para tomar y subsistir. Nosotros dijimos que el agua se puede vender pero con ese dinero se pueden hacer obras de mejora, sin embargo, el servicio del agua aquí es demasiado caro. Desde que esto sucede, nosotros no vemos apoyo en ningún sentido por parte del alcalde, que es una persona que nos ha visto crecer como campesinos, ha visto como hemos emigrado. Es por eso, que si no vemos un apoyo por parte de él, mucho menos por otros entes estatales. Sin embargo, algunas ONG si se han solidarizado con nuestra causa.

¿Han tenido algún apoyo por parte de la Corte Internacional de Derechos Humanos?

Cuando iniciamos la lucha por el territorio, Roberto Cobaría tocó muchas puertas y eso también ayudó en cierta forma a que obligaran al Estado a que nos devolvieran parte del territorio saneado. Nosotros entramos exigiendo respeto y dijimos que no queríamos violencia, que queríamos seguridad para nuestras mujeres y nuestros niños, y que no nos sucediera como a muchos otros pueblos que los han desplazado, asesinado y hacinado. De esta forma, nosotros alertamos a la comunidad internacional y así logramos una barrera de protección donde vinieron y nos colaboraron mucho en la restitución de nuestro Resguardo.

¿Cuáles son las principales razones por las cuales ustedes se oponen al ingreso de la OXY a este territorio?

Primero que todo por la titularidad que tenemos sobre el territorio. Nosotros pensamos que la tierra está viva y debe mantenerse fuerte para poder cuidar a sus hijos, para podernos dar sus frutos. Si se saca el petróleo, Ruiria, la sangre de la madre tierra, lógicamente la tierra se va a debilitar. Cuando llegan las multinacionales, hay

desplazamiento, hay violencia, no hay ningún tipo de respeto por los derechos humanos y fuera de todo esto, hay un impacto cultural, hay enfermedades y contaminación.

Ahora, con la explotación de gas, se están detectando muchos casos de cáncer, leishmaniasis, enfermedades en la sangre y cáncer en la piel. Son muchas enfermedades que aquí no existían y que nosotros nunca padecemos. Hemos tenido enfermedades leves como gripa, por los cambios de clima y de temperatura, pero nunca enfermedades más severas como el cáncer de matriz. También hay otro tipo de padecimientos que ni los médicos pueden dar un diagnóstico acertado y decir exactamente que es. Es por eso que nosotros exigimos un ambiente sano, un ambiente donde el hombre pueda vivir sanamente, y por eso nos oponemos a la explotación de petróleo, porque cuando empiezan las exploraciones hay mucha violencia en la zona y hay muchos desplazamientos, sobre todo en la parte baja del territorio U'wa, que es donde el gobierno dice que se encuentra el petróleo.

Las noticias en los diarios comentan que los trabajos de exploración se han suspendido, sin embargo, aquí en la zona se dice lo contrario.

Si, incluso en el documental que se hizo donde se rompe el silencio de los U'wa, la comunidad en los años de 1999 y 2000 llevó a cabo movilizaciones y protestas, se mantuvo contacto con muchas ONG internacionales desde AsoU'wa. La misma ONIC documentó a la comunidad y estuvo pendiente de todo lo que pasaba con el grupo indígena. El escándalo se ha detenido porque la Occidental dijo que se iba de la zona pero los aparatos siguen ahí y ahora sacan gas. Ellos están haciendo las cosas en silencio, sin consultarnos a nosotros.

AsoU'wa, bajo el mandato de Gilberto Cobaría, se preocupa por la situación del pueblo U'wa. A través de las asambleas y reuniones se cuestiona qué pasa con nosotros y nos damos cuenta que están jugando con nuestra comunidad. Ellos piensan que no nos damos cuenta de lo que sucede pero vemos más allá de lo aparente.

Es por eso, que el presidente de AsoU'wa se queja y entabla una demanda. Expone la situación internacionalmente y dice que el problema no se ha acabado, sigue y estamos en la mira del gobierno, porque para ellos poder desarrollar proyectos como el de los parques necesitan de nuestro territorio indígena, incluso el tema del Nevando del Cocuy, que forma parte de nuestro territorio ancestral, sigue con el mismo problema.

AsoU'wa se contacta con una asociación internacional judía, la cual hace un recurso para que por medio de éste se haga un diagnóstico de la situación y en él se logran detectar más amenazas contra la comunidad indígena U'wa. En ese documento se toca el tema del petróleo, de las explotaciones mineras, del agua y del tratamiento de los ríos.

Actualmente nuestra preocupación no es por el petróleo, nuestra preocupación ahora es por el medio ambiente y por el agua. Ahora han descubierto muchos minerales y nosotros tenemos que negociar con el gobierno y defender nuestro territorio. Ahora lo más importante es el agua y ha llegado una fundación que dice que va a comprar oxígeno para que los campesinos lo conserven y van a pagar por él, pero esa es la excusa para entrar en nuestro territorio.

Como ve, ahora ya no es el petróleo, la pelea es con todo y por eso tenemos que hablar con el gobierno y decirle que necesitamos recuperar nuestro territorio, que nos lo respeten y sobre todo, hacerles ver que la posición del pueblo U'wa es, no a la explotación petrolera en el territorio indígena, porque nuestros predios son zonas de paz y no zonas de conflicto, porque donde hay explotación hay violencia y hay desplazamientos.

Supuestamente la OXY se fue de la zona pero le ha vendido las acciones a Ecopetrol que está sacando el gas de los pozos de Gibraltar para llevarlo a TransOriente. Ahora se dice que hay concesiones y licencias para explotar, pero nosotros no tenemos la certeza de eso, pero si sabemos que están invadiendo nuestros territorios. La Ecopetrol pasa por el Bicentenario, o sea por nuestras tierras y eso trae aparte de la contaminación una connotación cultural que es una amenaza para el pueblo U'wa, ya que hay tala de bosques y todos los árboles no se pueden tumbar porque se está violando el mandato de la naturaleza.

¿A raíz de todos estos sucesos, ustedes han tomado la decisión extrema del suicidio colectivo?

La decisión del suicidio colectivo se tomó en los años 98 y 99 cuando la comunidad indígena se da cuenta por primera vez que sus territorios están amenazados y que hay más terrenos que están en la mira de ser explotados. Nosotros pensamos que, si ya sufrimos una vez la Colonización y nos quisieron acabar y despojar nuestro

territorio, hoy viene la multinacional que para nosotros es el monstruo más grande, significando eso que se nos lleven el petróleo y nos quiten el territorio, pues preferimos morir todos.

Eso fue un impacto grande porque los U'wa estaban mucho más entregados a la cultura, estaban dentro de sus tierras y pocos habían salido de ellas, por eso fue una decisión colectiva en la que decidimos que preferíamos morir a entregar nuestras tierras. Esa decisión ya se ha dejado de lado porque ahora hay mucha gente por fuera y en ese momento fue una decisión fuerte porque la gente estaba muy arraigada al Resguardo, lo cual hacía que lo defendieran a toda costa.

Desde el año 2000 hasta ahora la situación ha cambiado porque muchos indígenas se han asentado en el casco urbano, ha habido mucho mestizaje, aunque internamente en nuestros territorios, la posición de la gente que vive allá sigue siendo la misma, prefieren morir antes que perder el territorio. De todos modos, la posición general de todo el pueblo U'wa es la misma, no queremos perder nuestro territorio y en el fondo todos pensamos lo mismo, morir antes que nos despojen nuestras tierras.

La OXY siempre ha afirmado que ha realizado la consulta previa y ha hecho las cosas de forma legal. La comunidad indígena afirma lo contrario. Qué argumentos hay para sostener la posición de la comunidad indígena.

La consulta la hacen aquí en el territorio U'wa, realmente cuando empezamos la lucha, nos fuimos a protestas, bloqueamos varias vías, y tuvimos mucho apoyo de los campesinos de Arauca porque ellos ya han sufrido el mismo proceso, han sido desplazados; por eso ellos nos dijeron que nos aportaban yuca y plátano para que nos alimentáramos. También tuvimos apoyo de organizaciones sociales e hicimos reuniones con las autoridades, las cuales exigieron que viniera el presidente de la república a hablar con los U'wa. Así, se hizo una asamblea en El Chuscal y vino un delegado de la presidencia, el ministro de medio ambiente Juan Mayr.

Los U'wa leyeron su corazón y advirtieron la visión con la que él venía que era otra. Por eso, los U'wa dijeron, que no se había hecho una Consulta y que el gobierno quería hablar pero ahora éramos nosotros los que no queríamos hacerlo, porque nosotros pensamos que para qué íbamos a sostener diálogos, para qué se iba a hacer una Consulta si no nos iban a cumplir con las promesas que nos iban a hacer.

Los U'wa han redactado un documento en el cual colaboró el doctor Evaristo Tegría, abogado indígena U'wa que trabajó en AsoU'wa. Él con otros doctores redactaron el documento en el que se expresa claro porqué la comunidad no va a la consulta previa, porque en ella nos van a preguntar lo que queremos, y lo que queremos es la no explotación en nuestros territorios, y no nos van a dar ninguna solución. El gobierno solo quiere explotar y nosotros lo único que queremos es que nos respeten nuestro territorio y que no lo exploten. Eso es lo único que nosotros tenemos que hablar con el gobierno.

La Occidental y Ecopetrol dicen que los U'wa no quisimos ir a la consulta, y es porque nosotros tenemos claro que con ellos nunca íbamos a tener una solución, entonces para que nos íbamos a desgastar. Nosotros sabemos que no somos dueños de la tierra, ni el Estado tampoco, si nosotros lo fuéramos, decidiríamos qué hacer con ella. Pero la tierra no la hizo el hombre, la tierra la hizo Dios para que el hombre viviera en ella, nos la dio prestada, porque nosotros estamos en un mundo prestado. Nosotros vivimos y nos morimos y lo que queremos dejarles a nuestros hijos es un ambiente sano, una tierra sana, no contaminada ni enferma. Pero lamentablemente el gobierno no entiende nuestra posición.

¿A parte de los campesinos de Arauca, qué otros grupos los han apoyado y cuáles sienten que les han dado la espalda?

Las organizaciones sociales de Arauca al igual que los campesinos de allí siempre nos han apoyado. Hemos sido atropellados por la fuerza pública, por los grupos armados como las FARC, el ELN, hemos tenido muchos reproches por no querer negociar y nosotros les decimos a todos que nuestro pensamiento es este y nadie nos va a hacer cambiar. Queremos un territorio sano, una madre tierra sana y un territorio de paz; también queremos una tierra que sea explotada, porque de seguirlo haciendo, dentro de veinte años nuestros hijos no podrán cultivar aquí.

Esta ha sido nuestra posición y por ella hemos sufrido sabotajes, amenazas, pero nosotros siempre nos hemos mantenido unidos aparte del apoyo de los campesinos y de personas que vienen aquí y que nos han dado la razón. Los atropellos los hemos recibido de las fuerzas públicas y de los grupos armados de izquierda, paramilitares en esta zona no hay, a estas tierras no han llegado.

¿Por qué la guerrilla, al tener intereses opuestos a los del Estado, también se ha puesto en contra de ustedes?

Los U'wa no sabemos cuál es su ideología, cuál es su misión ni su visión como grupo armado. Nos han recriminado por los paros, porque exigimos respeto y nosotros nos hemos disgustado con las FARC cuando asesinaron a los tres norteamericanos, porque ellos nos estaban ayudando internacionalmente y defendían la posición del pueblo U'wa. Ellos fueron a nuestro territorio y hablaron con las autoridades, tuvieron un congreso, llevaron nuestra voz, se documentaron y llevaron mucha información a la gente desplazada de Saravena. De un momento a otro ellos fueron secuestrados y resultaron asesinados, y nosotros no sabemos que pensar de todo lo que sucedió.

¿En el proceso de interposición de recursos legales ante el Estado y los distintos entes gubernamentales, cómo se han orientado?

La ONIC nos ha apoyado mucho con el asesoramiento de abogados y en la elaboración de documentos. Evaristo Tegría, a través de su conocimiento y experiencia, logró entablar la demanda ante la Corte Internacional. También llevó a cabo otras acciones y elaboró otros documentos en contra de la audiencia pública por la defensa del pueblo U'wa. Actualmente AsoU'wa no cuenta con un asesor jurídico, Evaristo Tegría trabaja con la alcaldía y cualquier pregunta que tenemos se la hacemos a él. Hay indígenas de nuestra comunidad que están estudiando derecho pero hasta ahora están empezando la carrera.

¿Cuál cree que puedan ser los intereses de las FARC en todo este conflicto?

Con las multinacionales ellos tienen intereses, porque al explotar la tierra y sacar beneficios, ellos le dan al grupo guerrillero una cuota para que los dejen trabajar en paz. A nosotros nos ha recriminado constantemente la guerrilla porque nosotros decimos no al reclutamiento de nuestros jóvenes en beneficio de ningún actor armado, y eso hace que ellos piensen que los U'wa están en contra de ellos. Nosotros respetamos su ideología y lo único que queremos hacer entender es que somos libres y exigimos que no se recluten a nuestros jóvenes. Eso hace que ellos tomen una actitud negativa en contra nuestra.

Los grupos guerrilleros tendrán sus intereses porque cobrarán su cuota y a nosotros eso no nos importa, lo único que nosotros exigimos es respeto, respeto a nuestra posición y a nuestras decisiones como cultura.

Ha habido reclutamiento, pero no en nuestro territorio, muchos indígenas que salen al departamento de Arauca, que es una zona roja, a comprar sal o ropa, se los han llevado engañados diciéndoles que con ellos no tienen que trabajar, que les van a comprar todo lo que quieren. Cuando están allá y ven que no sucede nada de lo que les han prometido, se aburren y se escapan; después regresan a sus respectivas comunidades y de allí no salen en un tiempo.

Muchos de los jóvenes U'wa se han ido para la guerrilla porque los han engañado prometiéndoles muchas cosas y diciéndoles que allá hay una buena vida y cuando están allá se dan cuenta que nada de eso es cierto, que era otra cosa.

¿Por qué la OXY piensa que ustedes están siendo presionados por los grupos insurgentes para mantenerse en la posición que se encuentran?

Porque nosotros los líderes nunca hemos negociado, ellos nos han ofrecido dinero, a los líderes nos han dicho que nos dan vehículos, nos dan becas, les dan estudio a nuestros hijos y nos llevan a vivir a Bogotá. Nosotros no pensamos en el dinero, solo pensamos en el derecho de nuestro pueblo, pensamos en nuestro territorio y sobre todo en que no podemos vender ni regalar algo que no nos pertenece.

Si tenemos claro algo es la Ley de Origen, tenemos claros los mandatos y por eso nosotros no vendemos el petróleo, venderlo es como vender nuestros hijos o nuestra madre y eso es no tener principios ni carácter. Es por eso que Ecopetrol piensa que nosotros estamos influenciados y no es así, lo que sucede es que nuestro pensamiento y nuestra posición son claros. Si no nos van a respetar entonces que nos acaben y cuando muera el último de los U'wa ahí sí podrán invadir y quitarnos nuestros predios. Tenemos un mandato y una ley que tenemos que cumplir como U'wa.

¿Ustedes piensan que hay indígenas que se han “blanqueado” y que se han solidarizado con los intereses de las petroleras?

Se está hablando de indígenas que en la colonización se fueron a vivir a la ciudad y ya han perdido su cultura, su tradición, su posición y sobre todo, ya no tienen respeto a la Ley de Origen. Algunos de ellos han dicho que debemos sentarnos en la mesa de negociación, que no podemos seguir siendo pobres ni debemos seguir viviendo en la selva. Es por eso que a ellos la comunidad los ha sacado y han perdido todo el derecho U'wa. Han sido muy pocas personas, yo diría dos o tres, y ya no viven aquí, viven en Bogotá o en Bucaramanga y no son considerados indígenas. Quisieron tomar la vocería por los U'wa pero la comunidad les dijo que éste no era su problema, el problema era de la comunidad y ellos ya se habían ido del territorio. La voz y la palabra la tienen las autoridades U'wa y no personas particulares.

Como lo ha afirmado anteriormente, la zona que habitan es muy rica en recursos naturales, fuera del petróleo hay otros minerales que se explotan como el carbón, ¿Qué valor le dan a todos esos recursos?

Todos ellos son recursos que Dios creó para que la tierra sea cultivable y sea fértil y son cosas intocables creadas con la misma naturaleza para que estuvieran ahí y no para que las destruyéramos. Nosotros podemos tomar lo necesario, no abusar de la naturaleza, todo eso tiene un valor que no es monetario sino un valor natural porque Dios lo creó. Cada mineral tiene su propia función como el carbón que sirve para fertilizar la tierra. El oro también ha sido creado por Dios y tendrá su función en la naturaleza. Para nosotros todo esto tiene un sentido de respeto y no lo vemos con fines económicos.

¿Qué influencia ha tenido para ustedes la cultura occidental y en particular las religiones que allí se practican como la católica y la cristiana?

Han tenido mucha influencia porque hay que partir que nosotros somos un pueblo de derechos colectivos. Nosotros pensamos en un todo, si yo estoy bien, es porque mi familia, toda mi comunidad, todo mi pueblo y todo lo que está a mi alrededor está bien. En el Resguardo no manejamos dinero, si yo estoy allí, no tengo que preocuparme por nada. Por ejemplo, si voy a la comunidad de Tegría, allá me dan de comer, un sitio donde dormir y puedo vivir allí. Si voy a Cobaría, allí también me dan de comer y no tengo que pensar en el dinero. Nosotros tenemos un carácter colectivo y nuestros derechos lo son igualmente.

La cultura occidental y su religión influyen en nosotros e intentan hacernos pensar como ellos, como individuo, como persona. En el mundo occidental, si yo estudio es porque tengo medios económicos para hacerlo, si tengo una casa es porque trabajo y he tenido dinero para comprarla; pero si no tengo los recursos para una cosa o para la otra, no tengo nada. Todo eso hace que nuestra cultura y nuestros jóvenes cambien de carácter; si salen del Resguardo, dejan de pensar en su pueblo, en los derechos y el reglamento colectivos y eso hace que su mentalidad cambie.

Cuando salgo a occidente y cambio mi forma de pensar, mi pueblo me va a castigar y yo debo someterme a las normas de convivencia de mi comunidad. Cuando llegó la religión católica a nuestras tierras, ellos nos obligaron a hacer muchas cosas y también nos castigaron. Ellos nos decían que éramos satánicos, que éramos demonios, que le rendíamos culto al diablo. Entonces, lo que hicieron fue decirle a las personas de nuestra comunidad que salían de aquí, que nosotros invocábamos al diablo y ellos eran hijos de Dios. Por eso muchos eligieron ese camino, decidieron quedarse en Cubará y no volver al Resguardo, e incluso muchos han llegado a negar hasta su misma raza y se han avergonzado de ella.

En la Asociación lo que hacemos es aclarar las cosas, quitarles a las personas esos malos pensamientos. Cuando uno sale del Resguardo no debe tener dudas sobre lo que siempre ha pensado, debe tener una posición clara y saber qué es lo que debe defender. En las reuniones comunitarias se sensibiliza a nuestros jóvenes, se les dice que tenemos una cultura, una visión y unos mandatos propios. La religión católica también tiene sus propios mandatos, pero lo importante es convivir y saber respetar las costumbres ajenas.

¿Hay muchos de ustedes que practican la religión Católica?

Si, la mayoría que se ha ido a vivir a la ciudad se ha convertido a la religión católica, a la religión evangélica muy pocos, solo un grupo muy pequeño que vive en Cubará. Dentro de las comunidades no sucede esto, allí se respeta mucho la cultura ancestral.

¿Ustedes piensan que el Estado les ha respetado esa decisión y el pensamiento que tienen?

Eso sí, en ese sentido nosotros manejamos nuestros usos, costumbres y pensamientos, porque a nosotros nos han respetado. Lo más grande de nuestra cultura es la ley, ese mandato de nuestro creador, que tenemos que cumplir. Lo importante es que cada pueblo tiene su propia misión y de acuerdo a nuestras costumbres respetamos la Ley de Origen.

1.2. Entrevista a Gilberto Cobaría

¿Cómo ve en términos generales el problema de la OXY?

La defensa por la naturaleza del pueblo U'wa no ha sido una cuestión de ayer. Esta viene desde la creación del mundo. La visión que nos ha llegado de nuestro señor Sira, es la defensa, protección y cuidado de nuestra madre naturaleza y de todos los elementos que para el mundo de occidente o para los no indígenas, es lo que se define como riquezas, y dentro de ello se incluye la parte petrolera. El petróleo como es bien sabido, es la sangre que fluye por toda nuestra madre naturaleza y ayuda al mantenimiento de la misma. Todo este pensamiento proviene de nuestros ancestros y es parte de nuestra tradición.

Cuando entra la compañía Occidental y empieza a tener contactos con nosotros, en los años 89 o 90 aproximadamente, el pueblo U'wa comienza desde ahí ese rechazo, sabiendo que lo que ellos ofrecían no era gratis, sino que detrás de todo esto había un interés. Es así como desde el 94 nos hemos podido dar cuenta del interés que tenía la OXY que quería entrar a nuestro territorio y empezar a hacer las exploraciones sísmicas. De ahí en adelante empieza la campaña fuerte a nivel local, nacional e internacional, en defensa de la naturaleza y en defensa del pueblo U'wa como tal.

Es así como logramos obtener mucha solidaridad de diferentes grupos sociales y se lanza una gran campaña donde al final la OXY deja la concesión la cual es tomada posteriormente por Ecopetrol. Ecopetrol continúa con sus acciones y en el 96 o 98 ellos manifiestan no encontrar petróleo sino gas en una finca que había sido adquirida por la Asociación y sin embargo la petrolera viola esa propiedad privada. Hasta la fecha, seguimos en el mismo pleito, se han interpuesto acciones legales y se están adelantando actualmente procesos jurídicos porque nosotros no tenemos la capacidad jurídica para dirimir ese tipo de casos.

Con respecto a las acciones legales que hemos interpuesto, lo único que hemos adelantado es la demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, dentro de la cual, la Universidad Harvard le hace una serie de observaciones al gobierno nacional para que se dé cuenta que con sus acciones se puede exterminar este pueblo.

El gobierno se comprometió a cumplir con algunas promesas como el saneamiento del Resguardo del pueblo U'wa. Desde el 2000 ellos manifestaron que para el 2010 ellos ya habrían efectuado totalmente el saneamiento del Resguardo y esta es la fecha que esto no se ha cumplido.

¿Saneamiento en qué sentido?

Nosotros nos constituimos como Resguardo del pueblo U'wa con la resolución 56 expedida por el gobierno en el año 99 y por medio de esta queremos unir las comunidades existentes en los departamentos de Santander, Norte de Santander y el municipio de Guadalajara. Al salir la resolución, se ha constituido como un solo Resguardo pero para que éste sea definido como tal debe hacerse el saneamiento, lo cual se consigue comprando las mejoras o los terrenos a los campesinos y terratenientes que queden dentro de ese Resguardo, y esta es la fecha que el gobierno no ha cumplido; ellos afirman que si lo hacen aunque la realidad es otra. En lo que se refiere a la cuestión del petróleo, los estudios que hace el gobierno junto con las multinacionales sobre las exploraciones sísmicas, ellos dicen hacerlas fuera del Resguardo, pero aun haciéndolas fuera, nosotros somos conocedores del tema y sabemos que las consecuencias son negativas tanto social como culturalmente.

Las petroleras siguen actuando en la zona pero las estrategias que llevan a cabo junto con el gobierno nacional son otras. Ahora tratan de ofrecernos algunos cabildos y ayudas para hacer mejoras en el tema de la educación, como hacer algunas escuelas o puestos de salud. Para nosotros la parte económica es una y la parte cosmogónica y cultural es otra.

Lamentablemente, muchos hemos sido compañeros y algunos han conocido de cerca la cultura occidental y optan por acercarse más a estas cosas por la necesidad actual, pero la necesidad futura es muy diferente. Nosotros no vamos a vivir con una escuela o con un puesto de salud, tenemos que vivir con nuestra madre naturaleza, con la tierra sana, libre de contaminación, sin que nadie la extermine, porque el gobierno nacional dice que se van a extinguir ciertas especies animales pero no ve que también se van a extinguir ciertos recursos naturales. Con la extinción del petróleo va a ocurrir un caos, al igual que con la extinción de las esmeraldas y del oro, porque son un alimento para la tierra, estos elementos son complementos para la madre tierra.

De ahí que nuestra protesta no es solo por el petróleo, sino por los demás recursos mineros que hay dentro del Resguardo, porque para nosotros, cada mineral de estos, tiene un significado de complemento para el mantenimiento del equilibrio.

Ustedes afirman que toman solo lo necesario de la naturaleza para poder sobrevivir, ¿de qué forman miden la toma de esos recursos y si es posible saber que alguno de los resguardos no lo está haciendo?

Cuando nos comunicamos como pueblo o tenemos la forma de comunicarnos con nuestra madre naturaleza por medio de la espiritualidad, no es necesario hacer medidas en cantidad y peso, sino que eso se mide por medio de la espiritualidad. Si nosotros decimos vamos a cazar o vamos de cacería, por medio de la espiritualidad uno va a conseguir los animales necesarios, los demás, la naturaleza se encarga bien sea de esconderlos o protegerlos a su manera. Si nosotros encontramos una manada o bastantes animales, ellos andan entre cincuenta, cien o doscientos, pero si uno ya ha cazado dos o tres, la naturaleza se encarga de esconder el resto. Eso quiere decir que la naturaleza ya nos está diciendo que no debemos cazar más, ya que con eso es suficiente. Así mismo, uno puede ir de pesca y puede llegar a un pozo. Cuando empieza se pueden ver muchos peces, pero llega un momento en que la naturaleza le da a entender que ya es suficiente y el resto de peces se hacen difíciles de pescar.

Todo va de acuerdo con la espiritualidad porque nosotros no diferenciamos la energía de la materia. Nosotros cuando invocamos a la espiritualidad, lo que hacemos es una integración, donde la materia necesita del espíritu y el espíritu necesita de la materia. En ese sentido es donde decimos que tomamos lo necesario, la misma naturaleza es la que le dice a uno que se puede tomar y que no, donde se puede entrar y donde no; también donde están los espacios de alimentación de los animales, y en este caso, son sitios donde no debemos ingresar, debemos ir a otro lado, porque así se están creando de paso una marcas, en las cuales los animales van a dejar nuestros productos quietos. De esta forma, se crea un cercado donde uno siembra y deja que los animales consuman también.

¿De qué forma los ha afectado la movilización por la zona de grupos insurgentes?

Aquí hay que tener claro que a partir de los ochenta es cuando empiezan a surgir los diferentes grupos armados en la zona y en los noventa es cuando más se agudiza la situación. Ya en el 95 y 2000 es cuando se nota mayor influencia y penetración de la guerrilla, paramilitares y fuerzas armadas. Con la misma violencia, nosotros podemos decir que disfrutamos de unas buenas montañas y unas buenas zonas territoriales, pero con la violencia que se ha desatado en las ciudades a raíz del desarrollo de los megaproyectos, es un factor que se ha extendido hasta nuestras tierras. Nosotros, si tenemos que culpar a algo o alguien es al desarrollo de los megaproyectos; cuando estamos libres de ellos, en la zona, sabemos que no hay presencia de fuerzas armadas, pero cada vez que se dice que va a haber un proyecto, es cuando sufre nuestra sociedad, ya que se involucran en nuestro territorio los grupos armados.

De qué manera nos afecta, pues cuando se atiende a la fuerza pública, de la misma manera hay que atender a la guerrilla y viceversa. Como se dice, ellos tiran la pelota de aquí para allá y ahí es cuando dicen, cómo a ellos sí y cómo a nosotros no. Pero ya ha habido varias maneras por las cuales han querido penetrar en nuestro territorio, y nosotros de una u otra forma también tenemos nuestras propias costumbres y nuestra organización interna, y son las autoridades tradicionales, por medio del cabildo mayor y la asociación del mismo, que nos ha tocado ponerle frente a la situación pero de una forma pacífica, con respeto y haciéndoles ver a todos que nuestro territorio no es una zona de violencia, un territorio sagrado y donde se destaca la parte de la espiritualidad; y en ese sentido, podemos decir que por medio del diálogo hemos logrado cambiar un poco la situación de forma positiva.

No podemos hablar de acuerdos, porque realmente no lo son, podríamos decir que son diálogos, y lo que siempre hemos dicho, es que dentro de nuestro Resguardo no puede haber enfrentamientos. Otra cuestión importante que hemos planteado es que nuestros jóvenes, ya sea hombres y mujeres, no pueden formar parte de las filas de ningún ejército, ya sea al margen de la ley o no, y pedimos que se nos respete esa decisión. Lo otro que decimos es que nuestro territorio no es territorio de campamentos ni de lugares de entrenamiento. Las vías y los caminos son libres, si la guerrilla pasa, nosotros no podemos decirles que no pueden pasar por allí, porque lo que dirán es que el ejército tampoco podría realizar el mismo trayecto.

Podemos afirmar, que si al interior del pueblo U'wa no ha habido masacres, es gracias a la naturaleza, gracias a la espiritualidad y gracias a que las autoridades y representantes de la comunidad, han mostrado posiciones firmes y claras de acuerdo a las orientaciones que han heredado de nuestros ancestros.

Si la guerrilla nos respeta, no significa que somos parte de su movimiento o que tenemos contacto con algunas de sus unidades. No, nosotros somos defensores y luchadores de la paz. Ellos también son luchadores pero de una forma muy diferente, con ideales, políticas y posicionamientos muy diferentes a los nuestros. En qué sentido es diferente, en que ellos tienen un ideal político basado en el poder y nosotros como pueblo indígena no tenemos intereses de esa naturaleza, nosotros nos basamos en una política de defensa, de protección y de cuidado de nuestra madre naturaleza.

1.3. Entrevista a Verito Cobaría

El pueblo U'wa se encuentra actualmente en silencio, esperando a que el gobierno cumpla con las promesas que ha hecho y atienda nuestras solicitudes. No queremos entrar en controversia con el Estado ni tener conflictos con ningún ente gubernamental, sin embargo, vemos como pasa año tras año y no recuperamos nuestro territorio en su totalidad. En ningún momento hemos llamado a las multinacionales a que vengan a explotar nuestras tierras, queremos que se respeten nuestros predios y por eso evaluamos constantemente la situación.

Para la comunidad es triste ver que el gobierno abusa de su poder, hace más de ocho años solicitamos la recuperación de parte del territorio que conforma nuestro Resguardo y no nos dan solución alguna. Hay un problema grande porque el gobierno está jugando con el poder. Al contrario, ocho años pusimos la ponencia en la segunda resolución de recuperación del territorio del Resguardo y no se ha cumplido. Ahora hoy que estamos sobre ese proceso vamos a ver a la presunta del Estado nacional, porque no se cumplió.

Nos damos cuenta que día a día violan nuestro territorio, entran a él trabajadores de multinacionales sin nuestro permiso. Estas tierras nos pertenecen legalmente, y así como nosotros, muchas culturas indígenas del país se encuentran en el mismo problema que lo único que hace es fomentar la guerra. El gobierno ahora quiere salvaguardar legalmente nuestras tierras y nosotros agradecemos ese gesto, pero las tierras que nos niegan no las quieren devolver alegando que eran terrenos baldíos, cuando ese territorio nos ha pertenecido desde antes de la época colonial.

Desde la Colonia ha existido la ley que no permite que las tierras puedan ser enajenadas, pero parece ser que el gobierno quiere omitir ese precepto y por eso crea constantemente leyes para evitar que nosotros podamos ejercer nuestros derechos. Los pueblos indígenas de Colombia exigimos respeto para poder mantener nuestra identidad.

El gobierno nacional se ha comprometido al igual que los grupos armados al margen de la ley, a traer la paz a nuestro territorio; sin embargo, los compromisos que

tienen que ver con la recuperación de nuestras tierras y el saneamiento de las mismas, tenemos que dejarlos plasmados en documentos para lograr que se cumplan.

A muchos grupos indígenas se les han hecho estudios económicos y sociales, pero el plan de salvaguarda para recuperar nuestro territorio es algo mucho más profundo y merece más atención. Nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos, conocemos la Constitución y las leyes, y aunque vemos que éstas no nos favorecen, vamos a cambiar eso.

Queremos la unión del país. Por eso debemos dialogar con los campesinos que al igual que nosotros, son los primeros pobladores de estas tierras y juntos podemos conectarnos con todas las comunidades del territorio nacional y así tratar de acabar con las fronteras, las regiones y todas las divisiones políticas que nos dividen. Para nosotros existe una sola tierra que es la que pisamos cada día.

Vamos a pedirles a algunos organismos internacionales que vengan a ayudarnos, así como vinieron aquí un día los españoles desde muy lejos a invadirnos. Ellos implantaron un sistema democrático que lo último que hace valer es la verdad.

Parece que para lograr la paz debemos permitir la explotación del subsuelo. Nosotros no nacimos ayer, al contrario, estamos aquí desde siempre y somos muchos; los grupos armados son solo cuatro y cada uno tiene sus propios intereses. Para conseguir la paz no es necesario explotar la naturaleza y ellos se pelean por los recursos que ella nos brinda a todos.

No queremos más grupos armados en nuestro territorio, por eso luchamos, porque han invadido nuestras tierras, han matado muchos de nuestros miembros, nos han escriturado algunos terrenos pero con el fin de acorralarnos y ahora quieren acabar con todo lo que nos rodea, los árboles, los bosques y los animales.

No entendemos la situación que se vive actualmente, sin embargo, vamos a recordar las promesas del gobierno nacional y entre todos tenemos que salir adelante. Nunca hemos pedido a nadie que viniera a invadirnos y a matarnos. Cuántos indígenas han muerto en esta guerra? no sabemos, pero es algo que el Estado nos debe pagar.

Hasta hoy siguen llegando personas a buscar minas, petróleo, agua; nosotros somos los guardianes de la madre tierra y exigimos que se nos respete nuestra situación. La Constitución y otros reglamentos jurídicos permiten a todos esos grupos que exploten nuestros recursos, y es por eso que la naturaleza está colocando sus propias barreras. Hace crecer los ríos para que cada día haya menos tierras cultivables y las plantas creen que el río está loco, cada vez nos acercamos más a la ruina.

Por un lado está la salud, si no hay comida nos morimos de hambre; y por otro, la educación, que es lo que más nos está perjudicando; tenemos que ver de aquí a unos meses los adelantos que en ese sentido hemos tenido y lo que el gobierno nos ha prometido al respecto.

No solo los U'wa, las demás culturas indígenas del país deben también mirar de donde vienen los mineros y las personas que van a cada territorio a explotar los recursos naturales. Ellos son los que realmente nos perjudican y tanto las leyes como los valores culturales que tenemos no nos están sirviendo de nada. El Resguardo es un sitio que tenemos que cuidar y cuando se habla de salvaguardar el territorio se hace referencia a salvar y guardar lo que nos pertenece.

El plan de salvaguarda que se ha creado es con el fin de proteger nuestros predios y no violarlos como se ha venido haciendo hasta ahora. Desde los tiempos coloniales, se estableció la ley que decía que el territorio era inalienable e inembargable, y por lo tanto, si los pueblos originarios dicen que no se debe explotar un determinado recurso, se debe cumplir ese mandato.

El gobierno nos quiere aislar, nos quiere llevar a sitios donde no podemos tener asentamientos. Cuando una norma no le funciona crea otra y así se va equivocando constantemente, el indio no se equivoca.

Los indígenas que sigamos en nuestro territorio seguiremos luchando, protestando y continuaremos con nuestras peticiones. Yo quiero hacer un viaje internacional, porque de otros países es que están viniendo los grupos a explotar, de otros sitios es que envían armamentos, aviones y la infraestructura necesaria para llevarse lo que nos pertenece. El Banco Mundial y en general los bancos europeos son los que estás financiando esta labor; por eso pienso que hay que ir hasta allí a hablar directamente con las personas interesadas en nuestros recursos.

A los hermanos campesinos y a nosotros los indígenas son los capitalistas los que nos tienen manipulados, pero no quiero meterme en el problema profundo, más bien prefiero que miremos como tenemos que trabajar, que tenemos que hacer para sobrevivir y para llevar la paz y la dignidad a todas las partes del territorio nacional.

No queremos más asesinos, no queremos más violencia; debemos comprometernos a trabajar entre todos y juntos tenemos que crear una agenda clara y segura o si no mañana nos vamos al abismo. Yo le he dicho al país, que qué tal que mañana la naturaleza llegue a temblar, que empiece a moverse la tierra de arriba para abajo, ahí todo el mundo va a levantar las manos y se van a quejar ante Dios. Con la naturaleza no se juega, porque debajo de nosotros tenemos leyes espirituales, el planeta manda, el huracán es una de las leyes para nosotros. En el resto del país existen otro tipo de leyes, pero las nuestras son más especializadas para los pueblos originarios del país.

Entre los problemas que tenemos está el de los derrumbes que taponan los caminos. Para el gobierno esto no es grave porque las mercancías que deben venir aquí se transportan por otro lado pero eso hace que suban los precios y pobre de nosotros los campesinos que tenemos que sacar el dinero para pagar los alimentos a un costo más alto. La naturaleza por su parte también hace sus propios retenes naturales y toca pasar de un lado a otro en canoa, esto significa que ella también reclama lo suyo y presiona al gobierno para que tome decisiones y solucione los problemas.

Hace un tiempo, en algunas poblaciones de Boyacá, exactamente en Sogamoso, Duitama y Paipa, sufrieron mucho porque el río se creció y se llevó todos los cultivos. La papa y la cebolla que es lo que más se cultiva en esa zona se perdieron. En este caso han perdido los campesinos, el gobierno no porque él pone las leyes que más les beneficie.

El país en general debe pensar que la tierra es nuestra madre y nos ha dado la vida. Sin agua no hay vida; los alimentos, el ganado, la carne, la leche, todos vienen de la tierra. El ganado ha nacido y crecido en estas tierras, los cultivos que siembran los campesinos deben ser para nuestro consumo, pero realmente son el negocio del gobierno. Cuando el comercio nacional se lleva nuestros productos, el campesino ya no ve su beneficio, todo le pertenece al gobierno y a nosotros nada, eso es para pensar. Si queremos consumir más alimentos y si queremos que estos estén buenos, debemos

pensar en la naturaleza, no debemos permitir que la sigan explotando porque se están llevando la energía que nos da de comer.

De la madre tierra sale sangre negra, oro negro. Si nosotros nacimos en este territorio, con buena sangre y limpieza del cuerpo, esa salud no tiene precio. Si yo no tengo sangre, no tengo vida y mi cuerpo se seca, por eso es que hay que pensar en los derechos universales de los pueblos originarios.

En los nevados existen reservas que deben mantenerse aisladas, los dejamos solos porque allá es donde se da la inteligencia, el conocimiento y la capacidad; ellos son la casa del nacimiento de las aguas que forman los ríos. Los ríos también hay que conservarlos y cuidarlos porque son el hábitat de los peces. Yo he hablado con muchas personas, entre ellas venezolanos, y pregunto quién comercializa el pescado, porque nosotros que somos los dueños de las cabeceras de los bosques y de las aguas no participamos en ese comercio ni obtenemos ningún beneficio.

Nosotros no le damos la espalda al progreso, éste puede entrar a nuestros territorios pero rechazamos la toma exagerada de los recursos. Hay muchas cosas que queremos dar a conocer, pero ya no vale hablar, serán los documentos los que muestren mañana nuestras necesidades, está claro que es la única forma para que los demás países y el nuestro vean que hay otras vías para alcanzar el progreso y de paso para obtener la paz. Parece ser que solo con documentos se logrará el respeto y el cumplimiento de nuestras solicitudes.

Sin bosque no hay vida y eso lo verá el resto del país y en algún momento nos llamará para llegar a un acuerdo. Nosotros estamos disponibles porque respetamos la Constitución y porque sabemos que lo más importante es la madre tierra que en este momento está retenida y está perdiendo toda su energía. Esa es una situación que todos debemos reflexionar.

Le pedimos al resto de mundo que no nos abandonen, desde el año 1994 hemos abierto nuestras puertas y queremos que vengan las distintas comunidades internacionales para que vean con sus propios ojos nuestra situación. Ya han venido desde muy lejos a aplicar ideas que nos perjudican, ahora queremos que vengan con nuevas ideas que nos ayuden a salvar el planeta.

Nosotros queremos que los medios de comunicación nacionales e internacionales digan en qué situación se encuentra el medio ambiente en que vivimos y nos gustaría debatir con los diferentes organismos del Estado sobre la aprobación de licencias ambientales que lo único que hacen es atentar contra la naturaleza. Eso es lo más grave.

Antiguamente teníamos ríos limpios y puros, hoy en día de eso ya no queda nada, todos se encuentran totalmente perjudicados y es una situación que venimos denunciando desde 1995, cuando los araucanos empezaron a fumigar los cultivos de coca que les pertenecían a los grupos armados al margen de la ley, y los U'wa no estábamos de acuerdo con esa acción porque perjudicaba otros recursos de la naturaleza.

Por el momento, esto es lo que podemos decir sobre nuestros pensamiento y nuestras necesidades, deseamos que esta situación sea divulgada en el mundo entero y queremos que se sepa que los U'wa solo exigimos paz en nuestro territorio, no queremos actos violentos en él ni negocios ilícitos y sobre todo, no queremos que se siga contaminando a la madre tierra.

¿Considera que hay alguna posibilidad de que el gobierno colombiano pueda fijarse en las necesidades del pueblo U'wa, porque ante todo es evidente la decepción de la comunidad indígena hacia el gobierno por el desinterés y todas las violaciones que se han cometido hacia la comunidad? ¿Piensa que de pronto esa situación pueda cambiar y que el Estado colombiano pueda remediar todos los errores que ha cometido y la comunidad U'wa pueda vivir en paz?

Estamos viviendo un proceso, vamos a hacer preguntas a la naturaleza y ella nos sacara de muchas dudas. Nosotros podemos decir que las piedras hablan, al igual que las lagunas, los bosques, las montañas, los ríos, los sitios que cultivamos y todo aquello que conforma la madre naturaleza. Las plantas tienen sus leyes y sus normas, ellas saben que nuestra civilización se está conectando con ellas hasta donde no lo permiten. En el suelo hay normas que vienen de nuestros antepasados y esas normas son la base de nuestra civilización.

¿Cómo ve usted a la juventud con respecto a la lucha por el territorio U'wa?

Esta lucha va a tener un costo grande y por eso debemos organizarnos de la mejor manera posible. Es un proceso que no se hace en un día o dos y tenemos que tener en cuenta lo que la naturaleza nos reclama; es por eso que debemos empezar desde ya a empeñar nuestra fuerza de trabajo.

Los derechos que logremos deben quedar plasmados en la Constitución y esa es una de las condiciones que le exigimos al gobierno. No nos queremos seguir dejando sabotear de los mineros porque ellos tienen mucho poder en todo mundo. El planeta tiene muchas riquezas que aún no se han descubierto, hay pozos de agua, minas de cobre, oro, diamantes, carbón, hay reservas de gas y de petróleo también. La madera ya no la buscan porque saben que casi se ha terminado por completo, por eso vienen a buscar otra riqueza que está más abajo, en el subsuelo, y esto nos va a perjudicar a todos sin excepción.

Hoy no queremos discutir, queremos trabajar en conjunto con el hermano blanco y ponernos de acuerdo con él para tomar las decisiones más acertadas que nos benefician a todos por igual. Si el gobierno quiere unión debe luchar por ella, debe buscar la paz para todos sus ciudadanos y así tendrá la solidaridad de todos ellos. Los ciudadanos eligen a los gobernantes y ellos deberían pensar en eso y permitir que las decisiones sean tomadas por todos y no por unos cuantos.

Cuando el pueblo U'wa hace una solicitud está sirviendo de intermediario entre la naturaleza y el gobierno, nosotros estamos conectados con ella y lo que pedimos son las necesidades que ella nos transmite. Al permitir que las multinacionales vengan a nuestro territorio a realizar labores de explotación de nuestros recursos naturales, el gobierno está regalando las riquezas que nos pertenecen y ellas se van a otros países que solo les interesa lo material. Si el gobierno no apoya el trabajo del campesino va a morir de hambre y poco a poco el comercio se acabará, por eso hay que reevaluar la situación.

El planeta está dividido, por eso cada gobierno maneja su propio país, pero el sol es uno solo y nos ilumina a todos, así que el ser humano está equivocado cuando piensa que las decisiones importantes son de unos pocos. Ese es el pensamiento de los Estados occidentales que se han impuesto la tarea de extinguir el planeta, y la tarea nuestra es demostrar que no existen fronteras, que no hay límites.

Vamos a olvidar los conflictos que hemos tenido con el hombre blanco por la defensa de nuestro territorio, dejaremos de lado las contradicciones pasadas y pedimos que no nos maltraten. Esperamos que este mensaje sea llevado a todos los rincones del planeta por el bien de la naturaleza y del planeta.

1.4. Entrevista a Gilberto Arlant, Delegado nacional de población desplazada en Colombia y funcionario de la ONIC

¿Cuál es la influencia de los grupos armados legales y al margen de la ley sobre las comunidades indígenas, qué repercusiones tienen en su vida y a nivel general?

Aquí podríamos hacer un análisis de la situación tanto política como la situación militar del país: el país está en guerra. Hoy el refugio de los actores armados del conflicto está dentro de los territorios indígenas, porque la mirada de explotación minera está enfocada en esa riqueza que es donde están las minas y esas minas están en los territorios indígenas. Por lo tanto la influencia es muy fuerte, pero eso no se puede decir que eso es aislado, porque eso es algo que tiene mucha relación con el aparato gubernamental, que en su afán de construir el desarrollo, ha hecho alianzas con diferentes grupos armados para hacer lo que ellos llaman limpieza y eso de una u otra forma ha determinado el que han matado líderes, han desplazado muchos indígenas de su territorio, han asesinado miembros de la comunidad, e incluso han hecho procesos de fumigación en territorios indígenas.

¿Qué tipos de relación tienen en términos generales, los indígenas con los grupos paramilitares en éste caso?

Bueno, nosotros qué hemos dicho y se lo hemos dicho al mismo gobierno colombiano: nosotros no hacemos parte de la guerra, no queremos actores armados dentro de nuestro territorio y así le hemos dicho a todos los grupos armados. Pero no se puede descartar que el mismo Estado vinculó a la población civil al conflicto, los paramilitares lo mismo y así hizo la guerrilla, no podemos nuestros indígenas participar con ellos. Sabemos que hay indígenas que están en el ejército, que están en los paramilitares y que están incluso en la guerrilla, pero esa no es nuestra posición, no a los grupos armados, nuestra relación no es con ustedes ni con la guerrilla ni con ninguno, nuestra relación es directamente con el gobierno colombiano.

¿Existe una ley general que les prohíba a los indígenas participar de estos grupos, o cada uno actúa de forma independiente?

En lo legal, nosotros como indígenas no deberíamos prestar el servicio (militar), pero como hay mucha gente que es voluntaria y al ejército le conviene que sean voluntarios por el conocimiento que tienen de las zonas.

¿Por qué los indígenas lo han aceptado si saben que esto es negativo para las comunidades y se han ido mezclando con los diferentes grupos armados que hay en el país?

Las armas es el fenómeno de todos los colombianos, porque eso fue lo que nos enseñaron, que el que tiene armas tiene poder y muchos indígenas dijeron “vamos a estar armados para tener poder”.

Pero una cosa es armarse ustedes mismos y otra es pertenecer a un grupo y armarse de esa forma...

Es que como nosotros no nos armamos, entonces buscamos armas para tener poder por desobediencia.

Pero como bien sabe, el pertenecer a un grupo al margen de la ley, por ejemplo, a los paramilitares, no se está luchando por los intereses propios de los indígenas, sino que se está luchando por los intereses de las autodefensas.

Por eso, vuelvo y te digo, mucha gente se fue hacia allá buscando encontrar en eso unas alternativas diferentes a las que tenían en su comunidad, porque les ofrecieron dinero, porque cometieron un delito dentro de la comunidad, o sea, muchos fenómenos se dieron en esos momentos. Hay unos indígenas que pelearon con el papá y dijeron ahora me voy con la guerrilla, ahora me voy con los paramilitares y eso es como una desobediencia frente a lo que está pasando, no era de nosotros decir que reconocemos que el paramilitarismo es esto; incluso, en nuestros informes reconocemos que la gente que está en el paramilitarismo nosotros ya no la podemos dar, porque ese es un delito que no está tipificado, o sea que nosotros lo entregamos al Estado para que los castigue, o sea a las fuerzas del gobierno, ustedes son los que tienen que castigar porque es un delito que nosotros no tenemos contemplado en nuestra legislación.

¿Cuál es el impacto que tiene la educación colombiana que es de tipo occidental frente a las comunidades indígenas, es positivo, negativo, encuentra alguna concordancia?

Eso se viene dando desde hace muchos años, tú sabes que aquí llegó el caso de la Colonización y llegó con algo muy diferente a lo que teníamos nosotros. Después de la Colonización, en la época de la república, aparece la historia de nosotros que revive, o sea la historia de Colombia no revive a Colombia, sino que revive a otras cosas; revive a España, revive a Colón y a nosotros nos meten en una parte donde dice que ya no hay indígenas en Colombia. No sé si tu viste la historia esa donde habitaron los chibchas, aquí habitaron tales y ya no hay más. Ahora somos todos iguales. Esa fue una realidad que se nos escondió no solamente a nosotros sino que se le escondió al país y cambió de muchas formas la educación. Cual ha sido nuestro proceso frente a eso, sabemos que eso fue un impacto grande. Nuestro proceso frente a eso ha sido que nosotros podamos conocer un poco de lo que está fuera de nosotros, como el tema del país que se hace necesario. Pero también tenemos lo propio y entonces hemos pedido que las dos educaciones se puedan articular en el marco del respeto, yo puedo decir, mire ésta es mi educación y nosotros aportamos esto en la educación, nosotros también tenemos conocimientos que aportar en la educación. Eso ha sido complicado, hoy se está trabajando un sistema educativo propio.

¿Los niños indígenas hoy en día, están recibiendo la educación del Estado o están encaminados a lo que cada cultura particular les está ofreciendo?

Hay muchas debilidades frente al tema educativo propio, porque nosotros en el tema educativo propio tenemos debilidades para enfrentar el sistema, por existir la globalización hay muchas debilidades; entonces por eso la articulación de las dos cosas, de las dos educaciones. Hay niños que están en su territorio y que solo les enseñan su idioma, los que están fuera del territorio, se ha peleado porque tengan un profesor bilingüe, porque les puedan enseñar la lengua, pero en lo que te decía del sistema educativo propio, nosotros hemos planteado que la educación no es desde los cinco años como está contemplado en el sistema educativo nacional, la educación es desde que se nace y sigue, la educación no termina, nosotros tenemos que seguir educando. Y eso se lo hacíamos saber al ministro, le decíamos mire, es que ustedes dicen que la educación se termina cuando ya se fue a la universidad, ya ese es un doctor, ya es todo, y ahí no

termina la educación, porque para nosotros eso sigue dando educación, seguimos aprendiendo de todo. Entonces, la gente cuando ya termina un doctorado dice, yo soy el que sé y voy a ser de aquí para adelante lo que yo sé, ya se cree que todo lo aprendió y allá no es una ciudad, nosotros seguimos aprendiendo.

¿Piensa que en ésta interrelación que los grupos indígenas en general tienen con la cultura occidental, que somos el resto de los colombianos, ha habido una pérdida de valores, donde las culturas indígenas se han ido desarraigando de lo suyo, de lo tradicional y se han ido inmiscuyendo cada vez más en las cuestiones del país y del mundo occidental?

Claro, hay muchas cosas que han impactado a las culturas de los pueblos, ha sido un golpe muy duro, por eso que te decía, desde la Colonia y ahora más con este tema de la globalización. A mi a veces me preocupan muchas cosas, que uno llega y encuentra indios, ahí en la televisión salió un tipo con una vaina así (se señala la oreja y la nariz haciendo referencia a un pearcing), no sé si lo has visto. Y ya uno los encuentra también con esa vaina, y en el pelo los encuentra uno con una vaina por aquí y otra vaina por aquí; y uno dice, ésta vaina nos va a llevar, pero es más un problema pueblo, es más de familia que de la misma comunidad; porque incluso, nosotros que día nos sentamos aquí a hablar con unos líderes y decíamos que los más responsables somos nosotros, porque nosotros somos los líderes y los hijos de nosotros los líderes deberían andar diferente, pero los hijos de nosotros los líderes, como tenemos las facilidades no les decimos nada y esos son los que andan con los pantalones aquí abajo y eso lo analizábamos a fondo, pero esa es una preocupación de nosotros.

¿Se hace algo al respecto?

Sí, estamos haciendo mucho por el tema de recuperación cultural.

¿Qué influencia han tenido las diferentes comunidades religiosas del país y del exterior en los grupos indígenas?

Yo siempre he dicho, que si algo hizo daño en el país a los pueblos indígenas fue la guerrilla, fue el paramilitarismo, incluso el mismo Estado colombiano, pero si algo hizo daño, daño fue ese tipo de evangelización como son las iglesias, porque eso fue una marca muy fuerte, donde incluso hasta nos dividieron: ustedes son satánicos,

ustedes tienen ídolos y eso marcó mucho y todavía aún así sigue marcando; pero han habido procesos especiales aquí que se pueden destacar, los Arhuacos sacaron a los capuchinos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos que hay libertad de culto, que hay libertad de no sé qué, no, la libertad de culto es allá, aquí mandamos nosotros y somos autónomos y quemaron las casas, sacaron a los evangélicos, o sea a los mismos del cristianismo pero de otras sectas. Entonces, a esos los sacaron, y como los sacaron a ellos no les quedó base para seguir, entonces ellos que hicieron, afianzaron su proceso organizativo. En otros pueblos, en el caso de nosotros, allá si quedó la iglesia; yo me levanté en esa vaina, me levanté en medio de los evangélicos e incluso, si yo no iba a la iglesia, a mi me pegaban. No me bautizaron porque en la iglesia, a los evangélicos se bautizan grandes, pero después, yo de la rebeldía dije, ahora me voy para allá para la otra iglesia y me fui a la otra iglesia de rebelde y peor, no hice nada, no hice nada, hermano me fui a la otra iglesia y terminé allá, después me bauticé en la otra iglesia católica, me casé por la iglesia católica, y eso es, juemadre yo me quedé..., pero yo ahora analizo, yo incluso hacía un análisis, ese es el mal que tiene cura, un mal que tiene unos curas ahí..... yo siempre he sido muy crítico en los temas de la iglesia, porque he visto que fue un daño que prácticamente hirió la cultura, la hirió no, mató muchas culturas. A nosotros nos prohibieron el poporo, nos prohibieron un poco de cosas.

¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, se supone que la religión cristiana básicamente consiste en creer en Dios, en Jesús, en la Virgen, en los santos, etc, y porqué entonces se les ha prohibido la realización de ciertas prácticas como la del poporo, o mambear coca, o es que acaso éstas tienen alguna connotación religiosa?

El problema no era del poporo, el problema era de crear adeptos y el que creara más adeptos tenía más poder, por eso yo te decía el otro día de las iglesias, el uno llamaba, el otro llamaba y hacía tres iglesias en un solo pedacito y así pasaba, y decía llamemos gente. Eso del mambear tiene una relación más de armonizarse, tu estás mambeando y el mismo espíritu de la planta te mantiene armonizado y nosotros no lo vemos como algo religioso. A nosotros nos dijeron que incluso las prácticas que hacíamos eran satánicas, nos vieron (la cultura occidental) como satánicos y nos vieron como rivales.

Mira que si tu ves, nosotros teníamos varias cosas, nosotros hacíamos el ritual de pagar que se llama el pagamento, cuando íbamos a las cosechas, pagábamos el tributo

de lo que recibíamos del sol; y eso lo hacíamos y hacíamos unas cosas, poníamos aquí en oro, en plata, en lo que fuera, en piedras preciosas, y eso a qué nos llevó? A que la iglesia, al ver eso, dicen, ustedes tienen que pagar aquí, que ahora es esta, entonces tu ves que la gente le lleva a la virgen, etc, pero eso era como si nosotros tuviéramos... ustedes ya no van a poner allá, ahora van a poner aquí y todo eso lo fueron acumulando y se lo llevaron. Y si ves que nos quitaron esa.... (riqueza), pero era porqué, porque si nosotros lo dejamos allá, ellos se la llevan y después allá y no la traen aquí, ya es más de avaricia.

Yo te digo una cosa, si tu alguna vez te pones a definir qué es mito, es algo irreal, algo que no se ha visto; y ellos describieron nuestras creencias como unos mitos, pero alguien ha visto a Dios? nadie lo ha visto, pero eso también es otro mito, pero ellos lo hicieron una realidad porque lo impusieron, si ves. O sea, ahí si, nosotros no teníamos la fuerza para imponerlo pero ellos si impusieron, Dios no es un mito, Dios es una realidad y lo metieron con sangre, a mucha gente que no creía en Dios, denle o mátenlo, pero tenían que castigarlo porque era un hereje que renegaba de Dios.

Entonces eso es lo que.... A mi me hablan que cuente un mito y yo digo, nosotros no tenemos mitos, como no, si tienen, y yo digo no, no tenemos y para mi eso es una realidad aquí, nosotros no tenemos mitos, nosotros tenemos historias de vida, no tenemos mitos.

Otro tema de interés es el problema de la propiedad de la tierra en Colombia, que puede ser uno de los problemas fundamentales de las culturas indígenas en Colombia y no se limita a ciertas culturas sino a todas en general. ¿Cómo ve la situación de los resguardos indígenas en el país y el problema con los terratenientes?

Aquí, los terratenientes más grandes, dicho por el gobierno nacional, somos nosotros mismos, somos el tres por ciento de la población del país, pero tenemos el siete por ciento del territorio nacional, eso es lo que nos dicen. Pero no nos dicen que tenemos treinta y un millón de hectáreas de las cuales tenemos cualquier cantidad de conservación de lagunas, humedades, tenemos terrenos desérticos cualquier cantidad, si ves, y solo estaríamos utilizando un doce o un quince por ciento del territorio que nos dicen que tenemos en propiedad. Pero eso en si, no es una propiedad, porque si bien es

una propiedad privada, pero es una propiedad colectiva y una propiedad que no solamente es de nosotros sino que también protegemos, protegemos el agua, protegemos los bosques, si ves, que eso nos lleva a que podamos hacer otras cosas, pero estamos prestado el servicio de proteger lo que el otro quiere destruir. Entonces, eso es lo que nos ven, en el tema de..., y eso lo miran, los terratenientes lo miran de la misma forma, ustedes son los que tienen la tierra y vamos por esa tierra porque es productiva. Nosotros vemos eso como una salvaguarda para los pueblos, nuestro territorio es la salvaguarda de los pueblos, fuera de un territorio no podemos salvaguardar una cultura. Entonces, ahí es donde nosotros nos enfocamos, si bien puede verse como una propiedad privada, pero lo que molesta aquí es que esa propiedad privada que es de los pueblos indígenas es un territorio imprescriptible, inalienable, inembargable, eso es lo que no se puede vender, no se puede cambiar, negociar, ni hipotecar, porque eso fue lo que se definió en la Constitución del 91. El hecho de que un territorio tenga esas condiciones, uno no puede...los que están afuera no pueden..., pero eso que te estoy hablando es el territorio legal de nosotros, el territorio reconocido de nosotros.

¿Pero sienten que a través del tiempo van perdido cada vez más territorios que les han pertenecido?

Si, por eso te digo y allá iba yo, nosotros tenemos el terreno como parte legal, pero aparte de eso nosotros tenemos el territorio ancestral donde no teníamos fronteras, por eso hoy nos separan los departamentos, entonces las transferencias es un recurso que llega, nosotros somos del mismo pueblo, pero hay unas fronteras donde la parte que está allá le corresponde al departamento, a x departamento y la otra parte que está acá le corresponde a otro departamento, y eso termina partiendo la unidad porque ya estos tienen que hacer..., pedir la transferencia aquí por este lado y después piden a otro.

Esto nos ha puesto en conflicto, el hecho de que ya no podamos juntarnos ahí con la misma plata, la transferencia termina dividiéndonos porque los de aquel departamento tienen que manejar su transferencia y los de este departamento la suya, esto haciendo referencia a indígenas de la misma cultura.

¿Piensa que en algún momento de la historia, ha llegado a haber una unidad entre todas las culturas del país, aunque se llamen de diferente forma y vivan en diferentes zonas?

Bueno, siempre hubo disputas al interior, no podemos decir que eran unos santos, siempre hubo una disputa, una rivalidad, por poderes, por sabiduría, por mujeres, que por eso siempre se pelearon, por territorio, eso siempre hubo; pero si se ha detectado una unidad porque nosotros hemos plateado y lo hemos visto cuando nos hemos reunido en el congreso, hemos visto que si hay, últimamente se ha dado más el relacionamiento entre los pueblos, con diferencias pero nosotros hemos reunido tres mil indios de todo el país.

¿Aproximadamente, cuantos indígenas hay en el país?

Hay un millón cuatrocientos treinta mil, algo así, de todas las culturas. Nosotros en Colombia, por lo menos, nos hemos dividido en cuatro, cinco macro-regionales como ONIC, como ésta organización, y las macro-regionales también tienen unos procesos organizativos que se reúnen y de ese proceso macro-regional llega el proceso nacional. Hemos, al menos conservado unidad regional y esa unidad regional ha podido llegar. Yo no te digo que no hay diferencias, tenemos muchas diferencias, más de forma que de fondo; son así, por cualquier cosa, pero si se ha superado un poco el tema de unidad de los indígenas.

¿Qué cultura piensa que ha tenido más problemas territoriales ya sea con los terratenientes o con el Estado?

¿Aquí qué podríamos hacer o decir? Hay culturas, hay pueblos que uno podría decir que han sido más vetados que otros porque les quitaron la tierra, pero eso de cierto modo, yo diría, eso no lo podríamos medir de esa manera porque uno no sabe cual sería el impacto en determinado pueblo si le quitan la tierra, puede ser en unos más que en otros. Yo te podría decir, aquí la población Emberá ha sido una población muy estigmatizada, les han dado duro, de pronto más que a las demás en los últimos tiempos.

Anexo 2: Sentencia T-129/2011

(Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, 3 de marzo de 2011)

DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Protección constitucional / MULTICULTURALIDAD Y MINORIAS-Protección constitucional

Es amplia y reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en distintos contextos ha protegido a las comunidades indígenas del país. El referido precedente se ha edificado en los principios fundamentales de la Carta Política contemplados en el artículo séptimo, referente a la protección de minorías raciales y culturales, el cual establece que "el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana". De ese artículo se extraen elementos esenciales como el reconocimiento estatal y la protección a la diversidad étnica y racial. Así, la Carta Política, sobre la base de los principios de dignidad humana y pluralismo, reconoce un estatus especial de protección con derechos y prerrogativas específicas a las comunidades étnicas para que bajo sus usos y costumbres hagan parte de la Nación. De otra parte, la diversidad cultural está relacionada con las representaciones de vida y concepciones del mundo que la mayoría de las veces no son sincrónicas con las costumbres dominantes o el arquetipo mayoritario en la organización política, social, económica, productiva o incluso de religión, raza, lengua, etc. Lo cual refuerza la necesidad de protección del Estado sobre la base de la protección a la multiculturalidad y a las minorías.

RIQUEZA NATURAL Y CULTURAL-Protección/CONSTITUCION ECOLOGICA O AMBIENTAL

CONSTITUCION CULTURAL-Concepto

LICENCIA AMBIENTAL Y DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO PARA LA PROTECCION DE BIENES DE INTERES CULTURAL-Obligatoriedad

DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS-Reiteración de jurisprudencia

Si bien la metodología de análisis y la solución de los casos concretos ha variado conforme a las exigencias propias de cada asunto, desde el principio se advierte que la Corte le ha dado el tratamiento a la consulta previa de un derecho fundamental, del cual son titulares los grupos étnicos del país y a su vez hacen parte las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y gitanas. En la jurisprudencia relacionada, la Corte, salvo por razones de inmediatez o ante la circunstancia de encontrar elementos de juicio que permitan dilucidar que la consulta previa sí se efectuó, ha ordenado mayoritariamente ante la gravedad de las problemáticas estudiadas la suspensión de los proyectos u obras que tienen la potencialidad de afectar o que han afectado territorios de comunidades étnicas hasta que no se garantice el derecho a la consulta previa. Del mismo modo, recientemente se ha ordenado la búsqueda del consentimiento libre, previo e informado. Además, se han adoptado otras medidas como la indemnización y reparación de las comunidades afectadas cuando el daño ha sido ocasionado o cuando se advierte la potencialidad del mismo.

DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA CONSULTA PREVIA-Desarrollo normativo y jurisprudencial/CONVENIO 169 DE ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Consulta previa a pueblos indígenas

CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO ANTE MEDIDAS DE INTERVENCION EN TERRITORIOS ETNICOS-Derecho a compartir beneficios

DERECHO DE LAS COMUNIDADES ETNICAS Y PRINCIPIO *PRO HOMINE*-Aplicación

El principio de interpretación pro homine impone la aplicación de las normas jurídicas que sean más favorables al ser humano y sus derechos; en otras palabras, la imposición de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución. Este principio está contemplado en los artículos 1º y 2º Superiores, puesto que en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho. Así mismo, es un fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, por parte de todas las autoridades de la República en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades.

CONSULTA PREVIA Y CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO DE LAS COMUNIDADES ETNICAS-Requisitos o reglas jurisprudenciales

COMUNIDADES ETNICAS-Medidas para garantizar respeto y protección y para evitar desplazamiento

CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES ETNICAS EN PROYECTO CONSTRUCCION DE CARRETERA, INTERCONEXION ELECTRICA BINACIONAL Y CONCESION DE MINAS EN CHOCO

CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Exhorto al Congreso

Referencia: expediente T-2451120

Acción de tutela ejercida por Oscar Carupia Domicó y otros, a nombre de los resguardos Chidima-Tolo y Pescadito pertenecientes a la etnia Embera-Katio contra los Ministerios de Transporte, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Interior y de Justicia, de Minas y Energía, de Agricultura, de Defensa, el Consejo Asesor de Regalías adscrito al Departamento Nacional de

Planeación, las alcaldías de Unguía y Acandí, a Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), el Ejército Nacional, la Brigada XVII y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Magistrado Ponente:

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Bogotá D. C., tres (03) de marzo de dos mil once (2011).

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:

SENTENCIA

dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Oscar Carupia Domicó y otros, a nombre de los resguardos Embera-Katio, Chidima-Tolo y Pescadito contra el Ministerio de Transporte y otros. Para efectos metodológicos la Sala reseña a continuación, de manera esquemática, el contenido de la providencia:

Tabla de contenido de la Sentencia T/ de 2011

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

1.1. Introducción.

1.2. De la construcción de la carretera.

1.3. Del proyecto de interconexión eléctrica binacional entre Colombia y Panamá

1.4. De la concesión minera en el municipio de Acandí.

1.5. De la ocupación ilegal del territorio y el peligro de desplazamiento.

1.6. Solicitud de amparo.

2. Trámite procesal.

3. Contestación del Ministerio de Transporte.

4. Intervención del Instituto Nacional de Vías (Invías).

5. Contestación del Ministerio de Agricultura.

6. Contestación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

7. Contestación del Ministerio de Minas y Energía.

8. Intervención de Interconexión Eléctrica SA (ISA).

9. Contestación del Ministerio del Interior y de Justicia.

10. Contestación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

11. Contestación del Ministerio de Defensa.

12. Contestación de la Alcaldía de Unguía.

13. Contestación de la Décimo Séptima Brigada de las Fuerzas Militares.

II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.

1. Sentencia de primera instancia.

2. Impugnación

3. Sentencia de segunda instancia.

III. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE

IV. INTERVENCIONES AMICUS CURIAE EN SEDE DE REVISIÓN.

1. Intervención del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (DeJuSticia).

2. Intervención del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

3. Intervención de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental y del Proyecto Cátedra Viva Intercultural de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

4. Intervención de la Comisión Colombiana de juristas (CCJ).

V. DECRETO DE PRUEBAS EN SEDE DE REVISIÓN.

1. Intervención del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh).

2. Intervención del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes.

3. Intervención del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana.

4. Intervención de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).

5. Intervención del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia.

6. Inspección judicial efectuada por la Corte Constitucional.

7. Vinculación del Instituto Colombiano de Geología Minería (Ingeominas), de la empresa de interconexión eléctrica S.A ESP-ISA y las empresas Gold Plata Corporation y Minerales del Darién S.A.

8. Traslado efectuado por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de cumplimiento.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

1. Competencia

2. Presentación del caso y planteamiento de los problemas jurídicos.

3. Protección constitucional especial de la diversidad étnica y cultural de la Nación. Reconocimiento en materia indígena y autonomía en sus territorios.

4. De la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

4.1. Constitución ecológica o ambiental.

4.2. Constitución cultural.

4.3. De la obligatoriedad de la licencia ambiental y del Plan de Manejo Arqueológico para la protección de bienes de interés cultural.

5. Tensión entre las distintas visiones de desarrollo y la necesidad de protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.

6. El derecho fundamental de las comunidades étnicas a la consulta previa respecto de obras, proyectos y/o actividades que tengan la potencialidad de afectar sus territorios. Referente jurisprudencial en la materia.

6.1. Jurisprudencia en materia de consulta previa en sentencias de tutela.

7. De la importancia de lograr el consentimiento libre, previo e informado ante las medidas de intervención en territorios étnicos y el derecho de las comunidades de compartir los beneficios.

8. Requisitos jurisprudenciales para la realización de la consulta previa y la búsqueda del consentimiento libre e informado de las comunidades étnicas.

9. Análisis del caso concreto.

9.1. Introducción.

9.2. Aclaración preliminar.

9.3. Metodología de resolución del caso.

9.4. De la construcción de la carretera.

9.5. Del proyecto de interconexión eléctrica binacional entre Colombia y Panamá.

9.6. De la concesión minera en el municipio de Acandí.

9.7. De la invasión, ocupación ilegal y explotación del medio ambiente y de la omisión estatal de protección ante el peligro de desplazamiento de la comunidad implicada.

9.8. Medidas generales para garantizar el respeto y la protección de las comunidades étnicas de la Nación.

VII. DECISIÓN

I. ANTECEDENTES

Oscar Carupia Domicó, Doralina Domicó y Rosa Domicó en calidad de integrantes del resguardo Chidima-Tolo y Pescadito ubicado en el municipio de Acandí (Chocó) y pertenecientes a la etnia Embera Katío, interpusieron la presente acción de tutela en contra de las entidades referenciadas por considerar vulnerados sus derechos a la consulta previa, a la participación, a la propiedad colectiva, a no ser desplazados, al debido proceso, al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación, a la vida y subsistencia como pueblo indígena.

Los problemas generales por las que interponen la presente acción de tutela y por la que solicitan que se protejan sus derechos pueden ser resumidos en los siguientes términos: (i) los trabajos correspondientes a una carretera que atravesaría los resguardos; (ii) el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá; (iii) los trámites de concesión minera para explotación de oro; y (iv) la invasión ilegal del territorio, así como el peligro de desplazamiento por la expectativa económica de las obras y proyectos.

1. Hechos

1.1. Introducción.

Afirman los accionantes que en el año 2001, mediante las resoluciones números 005 y 007 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – Incora, se constituyeron los resguardos indígenas Chidima-Tolo y Pescadito, de la comunidad Embera – Katío, integrado el primero por tres lotes y el segundo por uno, localizados en jurisdicción del corregimiento Peñaloza, municipio de Acandí, Departamento del Chocó.

Sostienen que desde la constitución de los resguardos indígenas los miembros de la comunidad Embera han sufrido por las constantes invasiones a su territorio, las cuales generalmente han ido en detrimento de los recursos naturales presentes en estos, que son de gran importancia para la región y principalmente para su comunidad, que se provee directamente de ellos para suplir sus necesidades básicas como alimentación, vivienda y desarrollo de las actividades propias de su cultura y tradición indígena.

Informan que la comunidad Chidima Tolo está conformada por aproximadamente 66 personas, agrupadas en 13 familias, donde aproximadamente el 50% de ellos son de sexo femenino y el otro 50% de sexo masculino (según estudio realizado para la constitución del resguardo). A juicio del Gobernador del resguardo se estima que la población ha aumentado en un 35% aproximadamente.

En cuanto a la comunidad de Pescadito, especifican que está conformada por aproximadamente 8 familias y un total de 49 personas, con un crecimiento del 20% según apreciación de su Gobernador.

1.2. De la construcción de la carretera.

Informan que en varias oportunidades y con diferentes nombres se ha iniciado la construcción de la vía Acandí-Unguía, que tiene como objetivo unir por vía terrestre a estos dos municipios. Según información de la Defensoría del Pueblo (Resolución Defensorial 051 de 2007), el Ministerio de Transporte, mediante el proceso de audiencias públicas coordinado por Planeación Nacional, realizó la adjudicación de mil cuatrocientos veinte (\$1.420) millones de pesos para el mantenimiento y mejoramiento de esta vía. Este recurso, también según el Ministerio, se ha venido ejecutando a través de dos convenios independientes: uno, en fase de iniciación, con el municipio de Acandí; y otro, en fase final, con el municipio de Unguía.

Según informes de la Defensoría, el Ministerio de Transporte ha señalado que los dos extremos de la vía, en Unguía y en Acandí, están separados aproximadamente por cuatro kilómetros. Tramo que atraviesa los resguardos indígenas de Chidima y de Pescadito.

Exponen que el Ministerio ha respondido a la Defensoría que se trata de un eje vial de carácter terciario que se inició a través de caminos vecinales hace 24 años, cuando no existían las normas ambientales de hoy. Por este motivo no se ha solicitado licencia ambiental y no se ha realizado la consulta previa. Sin embargo, sostienen que, sin respetar el derecho a la consulta previa, para la ejecución de estas obras se firmaron contratos interadministrativos entre el Inviás y los respectivos municipios cuyo objeto consistió en el “*mejoramiento de la vía Acandí-Unguía*” en la jurisdicción de cada municipio. Según

informes de la Defensoría en el documento citado, en el texto de los contratos no se hizo ninguna aclaración de las obras específicas que se iban a ejecutar en cada uno de los contratos referidos.

A juicio de los peticionarios, la constitución tan general de los contratos, sin la especificación de los tipos de obras, habría sido aparentemente el motivo para no solicitar la licencia ambiental, con una justificación que no corresponde a la verdad, pues según el objeto del contrato sería realizar el mantenimiento de la carretera y no la construcción de una vía como está ocurriendo en realidad. Enfatizan que no existe la vía por lo que en sus terrenos se tendrán que hacer excavaciones manuales y mecánicas, rellenos, obras geotécnicas y construcción de obras de arte como filtros, cunetas y drenes, entre otras, que van a afectar no sólo su derecho a la consulta previa sino también la estabilidad de las viviendas, la caza y la pesca, además de perjudicar gravemente su cultura.

Anotan que la carretera contratada por el Ministerio de Transporte con las Alcaldías de Unguía y Acandí no está conectada, ya que los cuatro kilómetros que atraviesan los resguardos indígenas de las comunidades Chidima y Pescadito del pueblo Embera-Katio están sin construir. Lo que evidencia la necesidad de agotar el proceso de consulta previa ya que afecta una comunidad étnica de especial protección constitucional.

Según su visión del problema, la actitud del Ministerio, de la autoridad ambiental local y de las alcaldías de Unguía y Acandí ha llevado a que las comunidades indígenas tengan que enfrentarse de manera permanente con las autoridades locales, especialmente con el alcalde de Acandí, los colonos y los funcionarios de las empresas contratadas para la ejecución de la obra de la carretera, para impedirles el ingreso a los territorios de los resguardos. Circunstancia que representa para la comunidad perteneciente al Pueblo Embera un grave riesgo de desplazamiento de sus territorios, sumado a la colonización del territorio ancestral por parte de personas que no pertenecen a su etnia y que no comparten su cultura.

Informan que el 31 de diciembre de 2008, mediante el Acuerdo Núm. 076, el Consejo Asesor de Regalías aprobó *“proyectos a ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías y se designa su ejecutor”*. En la aprobación de recursos se incluye nuevamente un mejoramiento y terminación de la vía que denominan Titumate- Balboa- San Miguel- Acandí, en el *“sector K26-00 al K34-700”*, afectada según dice el Consejo *“por la ola invernal en el municipio de Acandí, Departamento del Chocó”*. Esta obra tiene un valor aprobado de \$3.248.256.520 millones de pesos. Adicionalmente, señalan que el responsable de la ejecución de esta obra según el mismo Acuerdo Num.076 ya citado, es la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Precisan que la vía Acandí-Unguía, como está determinada en los contratos interadministrativos, o vía Titumate-Balboa- San Miguel – Acandí, en la asignación de recursos del Consejo Asesor de Regalías, según Acuerdo Núm. 076 de 2008, no ha sido consultada pese a que afectará gravemente a las comunidades étnicas que se encuentran asentadas en la zona, especialmente aquellas pertenecientes al pueblo Embera de los resguardos de Chidima y Pescadito.

Comentan que el 14 de mayo de 2009, en el municipio de Acandí fueron abordados por el alcalde, el Personero, el Secretario de Obras Públicas y el Presidente del Concejo para que hicieran una reunión esa misma tarde y firmaran un acta para permitir la entrada de los ingenieros militares al territorio de los resguardos a terminar los cuatro kilómetros que faltan de la carretera.

Agregan que se está desconociendo la Observación Individual de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones –CEARC- de la OIT, que se pronunció expresamente sobre el caso de estos dos resguardos, en los siguientes términos: *“la Comisión solicita por lo tanto al Gobierno que garantice plenamente la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión de los pueblos referidos, tal como lo establece el artículo 14, 2, del Convenio, que proceda a proteger las demás tierras ocupadas tradicionalmente a los efectos del reconocimiento de la propiedad y posesión, y que suspenda las actividades derivadas de concesiones de exploración otorgadas y/o proyectos de infraestructura, en tanto no se proceda a la aplicación de los artículos 6, 7 y 15 del Convenio y que proporcione informaciones sobre las medidas adoptadas”*.

De otra parte, exponen que el Coronel Alonso Díaz Gómez, quien se identifica como segundo comandante y JEM BR. 17, el 06 de mayo de 2009 informó acerca de una autorización que les dio la comunidad Cuna de Arquía para la construcción de otra carretera y la aduce como una autorización general para actuar en el Darién, donde existen otras etnias que deben ser consultadas, por lo que estiman que se está confundiendo la vía de Unguía al resguardo de Arquía con la que atraviesa los resguardos de Pescadito y Chidima en Acandí, obra para la que insisten no se ha realizado la consulta previa.

Reiteran que se trata de etnias diferentes, unas pertenecientes al pueblo Cuna y otras al pueblo Embera, quienes habitan los resguardos de Pescadito y Chidima, que nunca han sido consultados sobre la construcción de la vía.

1.3. Del proyecto de interconexión eléctrica binacional entre Colombia y Panamá.

Afirman que existe un proyecto de interconexión eléctrica binacional entre Colombia y Panamá que se encuentra en etapa de factibilidad, cuyo inicio está condicionado al avance en la ejecución de los estudios técnicos y ambientales requeridos (actualmente en contratación y ejecución).

Comentan que las comunidades a las que representan desde septiembre del 2007 vienen manifestando que, sin tener en cuenta el procedimiento de consulta previa, ingenieros de la empresa Interconexión Eléctrica S.A (ESP-ISA) han estado dentro del territorio realizando mediciones y señalando los puntos geo-referenciados donde se colocarían las torres para la electrificación, apoyados en fotografías satelitales del territorio.

Ponen de presente que en la página web de ISA se indica: “Desde 2001, ISA y la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. –ETESA– de Panamá, actuando como promotores del mercado de energía, han adelantado estudios de viabilidad técnica para el desarrollo del proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, el cual constituye un paso fundamental en la consolidación de un mercado suprarregional, que aproveche las ventajas y potencialidades de las dos regiones”. Consideran que los referidos estudios se han llevado a cabo sin realizar el proceso de consulta previa, además que desconoce el resultado de los

anunciados estudios y su impacto sobre las comunidades étnicas de la zona. En este caso, además, estiman que se vulnera el artículo 7.4. del Convenio 169 de la OIT que establece que “[l]os gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”.

Añaden que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial informó que la licencia ambiental para este proyecto se encuentra en trámite y por ahora se está realizando el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, en el cual, según el Ministerio, *“no es exigible la consulta previa”*.

Precisan que los ingenieros contratistas de la Empresa de Interconexión Eléctrica ISA solicitaron a Oscar Carupia, en calidad de representante de la comunidad Chidima, su compañía durante la visita de localización de las coordenadas necesarias para la verificación del trazado de la línea y los lugares en donde quedarían las torres, que atravesarían el lote Núm. 3, ubicado en el costado sur-oriental, con una distancia de 1.062 metros; el lote Núm. 2, al sur de la rivera del río Tolo en una distancia de 549 metros; y el lote uno, continuando en la rivera sur del río Tolo, atravesándolo hasta unirse con el trazado de la vía que conduce al casco urbano de Acandí, en 520 metros. Finalmente, por la línea de interconexión eléctrica tendría un trazado en dirección al municipio de Acandí, sobre el resguardo de Pescadito, en una distancia de 1.445 metros, aproximadamente.

Estiman que la servidumbre para dicha línea es de aproximadamente 30 metros a lado y lado de la línea de energía, por lo que se generaría un corredor de 60 X 3.576 metros correspondientes a la longitud total que atraviesa la línea de los territorios de los resguardos, creando así un área aproximada de afectación de 214.560 metros, equivalente a 21,45 hectáreas.

Añaden que la intervención del territorio conlleva la destrucción de la biodiversidad, lo que configura un grave riesgo para los derechos de la comunidad indígena, puesto que una línea de las características descritas, agravaría los efectos de una nueva fragmentación del territorio de las dos comunidades indígenas.

1.4. De la concesión minera en el municipio de Acandí.

Afirman que el Ministerio de Minas y Energía ha otorgado una concesión minera en el municipio de Acandí, comprendida entre el río Muerto y el río Tolo, en un área de 40.000 hectáreas, para actividades de prospección, exploración y explotación de minerales a la empresa Gold Plata Corporation.

Precisan que al igual que en los casos anteriores, aún no se ha realizado consulta previa para este proyecto minero, a pesar de que el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 establece que la explotación de recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales, de acuerdo con la legislación especial, la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Política.

Agregan que se está aplicando el Decreto 1320 de 1998, que solo prevé la consulta previa para obras de explotación y prospección, etapa en la que se encuentra Gold Plata. Por lo que a partir de esta norma la interpretación que hace el Ministerio de Minas y Energía del derecho a la consulta previa es altamente restrictiva del derecho fundamental de participación, puesto que dicha consulta no es considerada para labores de exploración, a pesar de que con éstas se afecte a los pueblos indígenas y su territorio.

A su juicio, la interpretación del Ministerio de Minas y Energía es contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual la consulta previa es un derecho fundamental.

Explican que según lo informado por el Ministerio, la actividad minera que se está efectuando hasta el momento en Acandí no es una actividad de prospección o explotación, a pesar de la labor desarrollada por la empresa Gold Plata. Por tanto, ésta y las empresas que han obtenido título minero registrado no estarían infringiendo la legislación con la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas y tribales en la zona.

Añaden que además de ésta exploración existen dos títulos mineros registrados en el municipio de Acandí que comprenden el territorio de los resguardos de Pescadito y Chidima.

1.5. De la ocupación ilegal del territorio y el peligro de desplazamiento.

Denuncian que el territorio de los resguardos de Chidima Tolo y Pescadito, particularmente el lote Núm. 3 del primer resguardo, ha sido invadido por colonos. Esta intervención ha ocurrido, en parte, por la negligencia de las autoridades encargadas de la política agraria en el país, pues, como se ha informado, en el momento de la titulación, esta se hizo de manera fragmentada en tres lotes de terreno facilitando con ello la invasión.

Además, estiman que las autoridades no han tomado acción frente a los reiterados llamados de los miembros de nuestras comunidades indígenas para evitar la invasión de los resguardos, la explotación de los mismos y los daños ambientales que provocan los colonos.

Informan que de manera reiterativa han solicitado medidas de ampliación del resguardo para convertirlo en un solo globo, de manera que se posibilite hacer control sobre el territorio en su conjunto y proteger los sitios sagrados de las comunidades. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido negativa e incluso contradictoria.

Estiman que debido a la titulación fragmentada y la ausencia de saneamiento de los resguardos se ha dado la invasión del territorio por parte de colonos, generando diferencias entre unos y otros. Por otra parte, afirman que la construcción de la carretera ha promovido la llegada de nuevos repobladores en el lote núm. 3, que de acuerdo a las creencias heredadas de sus antepasados es territorio sagrado para las comunidades indígenas, donde habitan los espíritus sabios y donde la misma naturaleza les ayuda a tomar las decisiones que orientan el rumbo de sus comunidades, razón por la cual hacen lo posible para conservarlo en su estado natural y no ahuyentar de allí toda su naturaleza mística, de la cual aún depende el soporte espiritual de

sus comunidades. Juzgan que esa situación de aparente abandono es tomada como excusa por los colonos para entrar en este territorio y lo hace más susceptible a la ocupación.

Precisan que dicha problemática fue puesta en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo - Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que en marzo 6 de 2009 profirió la siguiente recomendación:

“ (...) la Comisión insta al Gobierno a tomar medidas urgentes para poner fin a toda intrusión en las tierras de los pueblos Katío y Dobida y en particular en el lote 3 de Chidima, donde según la comunicación hay intrusión actual y, a proporcionar informaciones sobre las medidas adoptadas.

Solicita además al Gobierno que tome medidas para unir a estos tres lotes, en la medida en que hubiera habido ocupación tradicional, de modo que el resguardo sea viable y a proporcionar informaciones al respecto.”

Una vez precisados los hechos anteriores, el escrito expone los fundamentos de derecho relativos a la procedencia de la acción de tutela, a la configuración de un perjuicio irremediable, a la necesidad de suspender la obra, a la necesidad de proteger el derecho a la vida, al derecho fundamental a la consulta dentro del ordenamiento jurídico colombiano, el derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos étnicos, el derecho a la diversidad étnica y cultural de la Nación, el derecho al debido proceso y el derecho a no ser desplazado.

1.6. Solicitud de amparo.

Con fundamento en todo lo expuesto, solicitan a nombre de los resguardos de Pescadito y Chidima, pertenecientes a la Asociación de Cabildos Kunas, Emberas y Katíos –Acikek-, que se protejan sus derechos ordenando:

(i) El respeto a la consulta previa, consagrado en la Constitución y la ley por parte de las autoridades ambientales nacionales y regionales, en este caso por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Choco-Codechocó.

(ii) Realizar el proceso de consulta previa como lo establecen los tratados internacionales de protección de derechos humanos ratificados por Colombia (Convenio 169 de 1989), la Constitución y la ley para la cual se debe involucrar al Ministerio del Interior y de Justicia para que en el ámbito de sus competencias garantice el proceso y de esta manera se protejan los derechos fundamentales de la comunidad Embera dentro del territorio de los resguardos de Pescadito y Chidima.

(iii) La suspensión de las obras de la carretera denominada Unguía- Acandí ó Titumate- Balboa- San Miguel- Acandí, en el sector K26-00 al K34-700 en el municipio de Acandí, que afecta gravemente el territorio de los resguardos, para evitar un perjuicio irremediable, mientras se interponen las acciones administrativas correspondientes.

(iv) A la Agencia Logística de las Fuerzas Militares que suspenda su actuación e intervención dentro de la ejecución de la obra denominada “Mejoramiento y terminación de la vía Titumate- Balboa- San Miguel- Acandí, Sector K 26-00 al K34-700, afectada por la ola invernal en el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó”.

(v) Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, informar sobre el estado actual de la contratación de la vía denominada Unguía- Acandí.

(vi) Al Departamento Nacional de Planeación que explique el proceso de asignación de recursos a través del Consejo Asesor de Regalías para las entidades territoriales, así como los procesos de control para que no se afecte a las comunidades étnicas con presencia en las zonas.

(vii) A las entidades territoriales, en este caso a las alcaldías de Unguía y Acandí, el reconocimiento y respeto a las autoridades propias, la autonomía y a la consulta previa de las comunidades étnicas.

(viii) La suspensión de obras de minería, interconexión eléctrica, hidroeléctricas y otras obras que se planean en el territorio del resguardo y para las cuáles no ha existido consulta previa.

(ix) Evitar que el territorio del resguardo siga siendo invadido por colonos, interesados en las obras de infraestructura, en la explotación maderera y minera, tutelándose como un solo globo de terreno, de acuerdo a la observación de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.

(x) Respetar el derecho de los pueblos indígenas a permanecer en el territorio, al respeto a las autoridades propias y a la autonomía, y que por tanto suspenda la marcación de árboles que están realizando dentro del territorio para la construcción de la carretera en apoyo o acción conjunta con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

(xi) A las entidades involucradas en la protección de derechos, se dé cumplimiento a la observación individual proferida por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en marzo de 2009, sobre el caso y para lo mismo se suspendan las obras antes mencionadas hasta que se haga la consulta previa y se titule como un solo globo de terreno.

2. Trámite procesal.

Inicialmente la presente acción de tutela fue interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero por reglas de reparto se dispuso el envío al Tribunal Superior de Quibdó. Una vez admitida la demanda, la Secretaría General del Tribunal Superior de Quibdó procedió a notificar a las entidades accionadas.

El 26 de junio de 2009, el magistrado sustanciador del antedicho Tribunal procedió a solicitar al Ministerio del Interior y de Justicia el registro de la existencia formal de los resguardos y la información relacionada con la junta directiva del mencionado cabildo en caso de estar legalmente constituidos.

De otra parte, una vez le fue reconocida la personería a la abogada de la Comisión Colombiana de Juristas para actuar en el presente proceso, solicitó como medida provisional la suspensión de las obras y proyectos. Dicha solicitud fue despachada de forma desfavorable por el magistrado sustanciador debido a que en la solicitud no se especificó si ya se habían iniciado las obras o no, por lo que la decisión sería asumida en la sentencia.

3. Contestación del Ministerio de Transporte.

El Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica solicitó declarar la carencia de objeto de la acción de tutela en contra de ese Ministerio y la desvinculación de la litis reconociendo la falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con la concesión minera, la interconexión eléctrica binacional y la invasión u ocupación ilegal del territorio.

Lo anterior, debido a la ausencia de determinación y definición sobre las características, naturaleza del proyecto y acciones de consulta a las comunidades concurrentes al proyecto, lo cual a su juicio es de absoluta competencia de las alcaldías de Unguía y Acandí; a través de sus representantes y concejos municipales, pues el Ministerio sólo revisa los proyectos presentados por las alcaldías Municipales y su presupuesto a efecto de que se ajusten a la ley. De otra parte manifestó que en vista de que se plantea el mejoramiento de una vía en lo concerniente a conformación de calzada existente, construcción de alcantarillas y muros en gaviones, etc., esto se traduce en una nueva vía de donde se supone que las consultas, permisos, licencias ambientales y autorizaciones de los Concejos Municipales ya se habían obtenido.

Pidió integrar el contradictorio con las siguientes entidades y órganos de ejecución nacional y territorial por competencia orgánica y funcional de la red terciaria, en el tema minero y en el de la política agraria: 1.- A los municipios de Unguía y Acandí. 2.- Al Fondo Nacional de Regalías, Dirección Nacional de Regalías, ya que según la accionante ha separado los recursos del anterior proyecto; 3.- Al Ministerio de Defensa Nacional – Batallón de Ingenieros Núm. 17 “Bejarano Muñoz”, quien ha iniciado labores preliminares de ejecución del proyecto de conformidad con lo afirmado por la actora; 4.- Al Instituto Nacional de vías INVIAS; 5.- Al Ministerio de Minas y Energía; 6.- Al INCODER y 7.- A la Empresa Contratista S.A E.S.P.- ISA.

4. Intervención del Instituto Nacional de Vías (Invias).

La subdirectora de la red terciaria y férrea del referido instituto, por medio de escrito del 6 de julio de 2009, manifestó que suscribió el convenio interadministrativo Núm.1991 de 2006 con el municipio de Acandí, quien contrató y ejecutó entre noviembre de 2007 y abril de 2008, obras de mejoramiento de la vía Acandí – Unguía, informando que estas actividades consisten en afirmado de la vía y no requieren consulta previa, y que tal como lo solicitó la comunidad en la época de ejecución del contrato, no se intervinieron los 4 kilómetros ocupados por las comunidades Chidima y Pescadito.

De otra parte, afirmó que debido a que la solicitud de los actores radica en la actual construcción de la Vía Acandí – Unguía, o Titumate – Balboa – San Miguel – Acandí, sector K26-00 a K34-70, por parte de la fuerza logística de las Fuerzas Militares, conforme al Acuerdo 076 de diciembre 31 de 2008, del Consejo Asesor de Regalías, es procedente acudir a dicha instancia para lo pertinente, por no ser de competencia del Invias.

5. Contestación del Ministerio de Agricultura.

El Jefe de la Oficina de Asesora Jurídica solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela respecto a ese Ministerio, ya que al mismo no se le puede imputar responsabilidad alguna en las omisiones cuestionadas, dado que el objeto de esa entidad es formular, coordinar y adoptar políticas, planes programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, con el fin de atender necesidades del sector rural y su población, sin que esté demostrado en la tutela el nexo causal entre los hechos relacionados en la demanda y una acción u omisión de ese Ministerio, careciendo de asidero jurídico la pretensión solicitada.

6. Contestación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

A través de apoderada judicial solicitó negar las pretensiones de la parte actora, en relación con lo que respecta al referido Ministerio, ya que a su juicio no ha vulnerado derecho fundamental alguno, debido a que las actividades para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental (mediciones y señalamientos de puntos geo-referenciados donde se colocarían las torres de transmisión eléctrica y la localización de las coordenadas de las minas, no requieren proceso de consulta previa porque, a la fecha, el trámite de licenciamiento ambiental se encuentra suspendido, como quiera que la empresa INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., no ha presentado Estudio de Impacto Ambiental y en caso de presentarse, dicho Ministerio no otorgará licencia ambiental al proyecto hasta que no se cumpla con el proceso de consulta previa establecido en el Decreto 1320 de 1998.

Adicionalmente, expuso que quien ejerce como máxima autoridad ambiental en la zona en que residen los presuntos afectados es Codechocó, y por lo tanto es la llamada a ejecutar la política ambiental y coordinar procesos de planificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 23, 30, 33 y 35 de la Ley 99 de 1993.

7. Contestación del Ministerio de Minas y Energía.

El apoderado especial de la Nación, solicita no acceder a lo pedido por inexistencia de la violación de los derechos fundamentales invocados, negar la tutela en contra del Ministerio por carencia de legitimidad en la causa, al igual que por la improcedencia ante la posibilidad de otros medios judiciales y la no comprobación de un perjuicio irremediable.

Considera que las actuaciones de la autoridad minera corresponden a Ingeominas, las cuales gozan de presunción de legalidad conforme a las normas que regulan la situación fáctica presentada. De otra parte, manifiesta que la encargada de

realizar el procedimiento de la consulta previa es la autoridad ambiental con anterioridad al otorgamiento de la licencia ambiental, situación que aplica no solo para las concesiones mineras sino también para las obras de infraestructura energética.

Por lo expuesto, solicita no acceder a lo pedido por los accionantes, declarando la improcedencia de la presente acción de tutela y declarando la falta de legitimación por pasiva frente al Ministerio referido. Adicionalmente, solicita la vinculación del Ingeominas.

8. Intervención de Interconexión Eléctrica SA (ISA).

En comunicación remitida el 7 de julio de 2009 por la Empresa de Interconexión Eléctrica S.A. ESP, al Ministerio de Minas y Energía, explica la etapa en que se encuentra el proyecto de interconexión eléctrica Colombia –Panamá, evidenciando que a la fecha no se ha desarrollado la primera actividad del estudio de impacto ambiental.

Por lo anterior, especifica que una eventual consulta previa con la comunidad indígena Embera del resguardo afectado, se desarrollaría siempre y cuando el trazado del proyecto de interconexión Colombia- Panamá cruce por su territorio.

9. Contestación del Ministerio del Interior y de Justicia.

La Coordinadora del Grupo de Consulta Previa del referido Ministerio solicitó despachar desfavorablemente la presente acción de tutela, afirmando que no existe amenaza o violación de derechos fundamentales por parte de ese Ministerio, puesto que el mismo no ha tenido conocimiento de los proyectos que originan la acción, ni está habilitado para pronunciarse sobre los trámites referentes al adelantamiento del proceso de consulta previa con licencia ambiental, lo cual es competencia de la autoridad ambiental de conformidad con la normativa vigente.

10. Contestación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

El Director de la Agencia referida alegó no haber vulnerado los derechos fundamentales invocados, asegurando haber intentado a través de los medios y recursos a su alcance una solución para que el proyecto Titumate- Balboa San Miguel Acandí, sector K26+00 A K34+700, que corresponde a una vía afectada por la ola invernal, se lleve a cabo con el lleno de los requisitos técnicos legales exigidos en las normas que rigen la materia, labor que a la fecha no ha iniciado por cuanto la Agencia Logística está a la espera de que se cumplan por los directamente responsables y beneficiarios las exigencias de consulta previa, licencia ambiental y diseños técnicos de la vía, que son compromisos ajenos a las obligaciones asumidas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Precisó que en el proyecto opera como ejecutora de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías y que la naturaleza jurídica de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares corresponde a la de un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, tal como se consagró en el Decreto 4746 de 2005, luego su objeto consiste en ejecutar las actividades de apoyo logístico y establecimiento de bienes y servicios requeridos para atender las necesidades de las Fuerzas Militares.

Adicionalmente, precisó que la agencia realizó visita técnica por vía aérea ya que en el municipio de Acandí no existen vehículos para hacerlo por vía terrestre. Dentro de los principales hallazgos de la inspección quedó concluido que la vía se encuentra totalmente cerrada sin ningún tipo de intervención en el tramo de las comunidades de Chidima y Pescadito.

Informa que de la visita efectuada por la Agencia con la participación de representantes de la alcaldía de Acandí y Corpochocó quedaron los siguientes resultados: “(i) la vía hay que construirla en los (4) kilómetros faltantes, por tal motivo requiere la licencia ambiental; además estos mismos 4 kilómetros se evidencia la necesidad de la construcción de un puente de sesenta (60) metros de luz sobre el río Tolo el cual no está contemplado en ningún capítulo del proyecto. 2) no se ha socializado y mucho menos se ha iniciado el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas. 3) No existe información técnica en general del proyecto. Por tal razón se solicitó a la Dirección General de la Agencia logística no iniciar las obras hasta que se hayan aclarado y solucionado los puntos mencionados.”

De lo anterior se desprende igualmente, que si bien es cierto no ha habido consulta previa para la ejecución del proyecto denominado Titumate- Balboa, San Miguel Acandí, sector K26+00 A K34+700, no se han iniciado labores precisamente en espera de la misma, como requisito previo a la expedición por parte del Ministerio del Medio Ambiente de la correspondiente licencia ambiental. Por tanto, concluye que frente a esta entidad, no se vislumbra vulneración alguna que haga procedente el amparo por tutela.

11. Contestación del Ministerio de Defensa.

El Director de Derechos Humanos del Ministerio manifestó que las fuerzas militares tienen jurisdicción en todo el territorio colombiano por tanto las tropas no pueden ser retiradas del territorio indígena. Por lo anterior la suspensión o no de la obra debe ser ordenada por una autoridad competente.

Precisa que el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas no es absoluto, por lo que el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas tiene límites. Motivo por el que la institución ha implementado una política específica de protección a las comunidades indígenas la cual consta en la directiva permanente Núm. 1630, “Política sectorial de reconocimiento, prevención y protección a las comunidades de los pueblos indígenas”. Por lo anterior, solicita que sea negada la acción de tutela interpuesta.

12. Contestación de la Alcaldía de Unguía.

La alcaldesa municipal encargada de Unguía manifestó que el ente territorial no ha intervenido en el trazado de la carretera al que hace referencia la tutela en todo el trayecto correspondiente al municipio, dado que ésta no atraviesa, ni siquiera roza, ningún resguardo indígena.

Afirma la alcaldía que dicha tutela hace referencia a resguardos que corresponden al alcalde de Acandí, y por ello señala que es a la administración de Acandí a quien debe dirigirse la tutela y no al municipio de Unguía, que nada tiene que ver. Por lo anterior, especifica que el ente territorial no puede ser obligado a suspender la obra en lo que se refiere a su territorio.

13. Contestación de la Décimo Séptima Brigada de las Fuerzas Militares.

El comandante de la citada brigada manifestó que no vulnera los derechos alegados por los accionantes ya que el personal que participa en el proyecto es de ejecución, por lo que una vez se cumplan las formalidades que este tipo de casos imponen, procederá a la orden de ejecutar la obra. No obstante, aclara que los miembros del Ejército Nacional actúan con respeto hacia la comunidad del resguardo de Chidima–Tolo del municipio de Acandí, observando siempre las normas y principios del derecho internacional humanitario.

II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.

1. Sentencia de primera instancia.

El 10 de julio de 2010, la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó negó el amparo solicitado. El fallador de instancia se refirió a las normas constitucionales en materia de protección de comunidades indígenas y del medio ambiente, al tiempo que hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de consulta previa.

En lo referente al proceso de interconexión eléctrica, consideró que conforme a lo contestado por el Ministerio de Medio Ambiente, el proyecto referido no requiere consulta previa porque a la fecha el trámite de licenciamiento ambiental se encuentra suspendido como quiera que la empresa Interconexión Eléctrica SA ESP no ha presentado el estudio de impacto ambiental y en caso de presentarse dicho Ministerio no otorgará la licencia hasta tanto no se agote la consulta previa conforme al Decreto 1320 de 1998, motivo por el que no se vulnera derecho fundamental alguno.

En cuanto a los proyectos de explotación minera, consideró que aquellos se encuentran en la mera expedición de títulos, sumado a que la autoridad ambiental debe agotar el procedimiento de consulta previa antes del otorgamiento de la licencia. Razón por la que también bajo dicho tópico la acción fue negada.

En lo atinente a la construcción de la carretera que pretende unir los municipios de Unguía y Acandí, estimó que ante la ponderación de principios que se encuentran en tensión (la protección de los derechos indígenas y la prevalencia del interés general), debe primar el último, “referido a la necesidad de progreso y mejoramiento de las condiciones de bienestar que deben buscar las autoridades públicas, dentro de los fines del estado, a través del emprendimiento y desarrollo de obras públicas, que faciliten, por ejemplo, la movilidad de la generalidad de las personas de las comunidades potencialmente beneficiarias de dichas obras de infraestructura”.

Así mismo indicó que: “los intereses generales y la convivencia de las luces de progreso que para el común de los habitantes de todo el territorio de la vía y para los de las respectivas cabeceras municipales de Unguía y Acandí se abrirían con la unión de este corredor vial, pues, obviamente es mayor que aquel importante pero escaso número de alrededor 150 integrantes de los resguardos CHIDIMA-TOLO y PESCADITO”.

Lo anterior, porque a su juicio los escasos 4 kilómetros restantes de la carretera no requieren explotación de recursos naturales, motivo por el que no es necesaria la licencia ambiental.

De otra parte, partiendo de las propias afirmaciones de los accionantes encontró probado que la administración del municipio de Acandí intentó pactar una visita en dos ocasiones con los miembros de las comunidades pero por negativa de los representantes de los resguardos no se pudieron materializar. Por último, agregó que las autoridades podrán optar una vez más por una cita de concertación sobre los tópicos concertables con representantes oficiales de los resguardos o de otro lado proceder de inmediato a ejecutar las obras cuestionadas, eso sí bajo el cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia.

2. Impugnación

La abogada de la Comisión Colombiana de Juristas presentó impugnación del fallo descrito, exponiendo los siguientes argumentos:

(i) El Tribunal hace una interpretación errada del alcance del derecho a la consulta previa y en particular de los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, que hace parte de los instrumentos firmados y ratificados por Colombia, en el que se establece la consulta previa. Revaluando completamente el derecho a la consulta previa y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

(ii) Se trata de la contratación para el mantenimiento de una vía que no existe, que por tanto requiere licencia ambiental y para conseguirla entre otros requisitos se debe garantizar la consulta previa, ya que no se trata de un “mantenimiento”.

(iii) No se tiene en cuenta el pronunciamiento de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, como parte del bloque de constitucionalidad, que en marzo de 2009 se pronunció expresamente sobre el caso de estos dos resguardos.

(iv) El despacho no se pronunció acerca de todos los derechos vulnerados o amenazados, ni acerca de la responsabilidad de quienes los amenazan o vulneran, y de manera particular no se hace ninguna mención a las acciones del ejército dentro de los resguardos, los sobre vuelos de los helicópteros, las entradas al territorio sin el respeto a las autoridades propias y, como lo informaron los integrantes de las comunidades, la marcación de árboles y la presencia de campamentos.

3. Sentencia de segunda instancia.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 22 de septiembre de 2009, confirmó el fallo impugnado. Al respecto afirmó:

“Aunque la Sala no desconoce el derecho constitucional fundamental de los pueblos indígenas y tribales asentados en el territorio nacional a ser consultados en los proyectos destinados que puedan efectuar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les pertenecen con miras a tener oportunidad de ser oídos y expresar sus inquietudes en lo que concierna a la defensa de sus intereses, en el caso específico, como quedó visto, no se estructuran los presupuestos para otorgar la prerrogativa reclamada, aún como mecanismo transitorio, por ausencia de demostración de quebrantamiento o amenaza de los derechos fundamentales invocados.

Coherente con los anteriores razonamientos, se impone confirmar la sentencia materia de impugnación”.

III. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE

- Fotocopia del Convenio Interadministrativo No. 1991 de 2006.
- Fotocopia de la Resolución 051/07.
- Copia del oficio de mayo 19 de 2008, dirigido al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por la Comisión Colombiana de Juristas y su correspondiente respuesta.
- Copia del acta de posesión 003 de febrero 11 de 2009, del actor GUSTAVO DOMICO y otros miembros de la comunidad como Junta Directiva del Cabildo Local del Resguardo de CHIDIMA.
- Fotocopia del comunicado a la opinión pública de las autoridades indígenas de Caldas.
- Fotocopia de los escritos de marzo 5 y 19 de 2009, dirigidos al Defensor del Pueblo y a la Dirección de Asuntos Indígenas y de Minorías étnicas, por la Comisión Colombiana de Juristas.
- Fotocopia del Acuerdo 076 de 2008 del Consejo Asesor de Regalías.
- Oficio de febrero 18 de 2009, dirigido por el Alcalde de Acandí a Oscar Carupia – Comunidad de Chidima-.
- Oficio de la Defensoría del Pueblo de Bogotá, respondiéndole a la Comisión Colombiana de Juristas derecho de petición relacionado con el resguardo de Chidima.
- Oficio dirigido por la Defensoría del Pueblo al Coronel Juan Carlos Gómez, Director de Derechos Humanos y al Ministerio de Defensa Nacional, de abril 7 de 2009, relacionada con el sobrevuelo del helicóptero sobre el territorio del Resguardo Indígena de Chidima.
- Fotocopia del escrito de marzo 30 de 2009, dirigido por el Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Étnicas al Director de Regalías.
- Escrito dirigido por el Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Étnicas al Director de Regalías y al Alcalde Municipal de Acandí, de marzo 30 de 2009.
- Escrito de marzo 30 de 2009, dirigido al Director de Asuntos Indígenas y Minorías, por el Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Étnicas.
- Respuesta del Ministerio del Interior y de Justicia, de abril 21 de 2009, al abogado de Protección Jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas de Bogotá.
- Fotocopia del escrito de abril 22 de 2009, dirigido por la Coordinadora Grupo de Consulta Previa al abogado de Protección Jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas de Bogotá.
- Fotocopia del escrito de mayo 4 de 2009, dirigido por la Jefe del Estado Mayor de la Séptima División del Ejército Nacional, al abogado de Protección Jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas de Bogotá.
- Escrito de mayo 6 de 2009, dirigido por el Coronel J Alonso Díaz Gómez, en su condición de Segundo Comandante y JEM BR-17 al abogado de Protección Jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas de Bogotá.
- Escritos de mayo 6 y 7 de 2009, dirigidos por la Comisión Colombiana de Juristas al Ministro de Agricultura el primero y al Ministro del Interior y de Justicia, el segundo.
- Escrito de mayo 7 de 2009, dirigido por la Defensoría del Pueblo a la Comisión Colombiana de Juristas.
- Oficio de abril 13 de 2009, dirigido al Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Étnicas por el Departamento Nacional de Planeación.
- Fotocopia del oficio de abril 20 de 2009, dirigido a la Defensora Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas por el Coordinador de Grupo de Instrucción y Seguimiento de la Política.

- Fotocopia de escritos dirigidos al Defensor del Pueblo para Indígenas y Minorías Étnicas, por la Comisión Colombiana de Juristas, de mayo 15 y 20 de 2008.

- Fotocopia del escrito de mayo 20 de 2009, dirigido por la Defensoría del Pueblo a la Comisión Colombiana de Juristas.

- Fotocopia del escrito de mayo 20 de 2009, dirigido por la Defensoría del Pueblo al Defensor Delegado para Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas.

IV. INTERVENCIONES AMICUS CURIAE EN SEDE DE REVISIÓN.

De forma posterior a la selección para revisión del expediente de la referencia, distintas organizaciones y ciudadanos presentaron escritos coadyuvando las pretensiones de la acción de tutela, las cuales se relacionan a continuación.

1. Intervención del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (DeJuSticia).

Rodrigo Uprimny Yepes, César Rodríguez Garavito, Natalia Orduz Salinas, Nelson Camilo Sánchez León y Luz María Sánchez Duque, a nombre del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia–, obrando en calidad de ciudadanos colombianos, presentaron escrito con el propósito de coadyuvar básicamente con dos argumentos. En primer lugar, sostienen que en el caso concreto de los pueblos Embera – Katio y Embera – Dobida que habitan los resguardos Chidima Tolo y Pescadito se violó el derecho fundamental a la consulta previa por la no realización de la consulta antes del inicio de actividades con respecto a los tres proyectos objeto de la tutela: la construcción de la vía Acandí- Unguía, el proyecto de interconexión eléctrica de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. y las actividades de prospección minera de la empresa Gold Plata.

Lo anterior, de conformidad con la normativa internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad sobre consulta previa a los pueblos indígenas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según las cuales para que una consulta previa sea válida debe realizarse con anterioridad a la adopción de medidas susceptibles de generar impactos en los pueblos indígenas.

De acuerdo con estos estándares, estiman los intervinientes que la consulta debe realizarse en el momento en que se prevean las medidas y en todo caso antes de que se comiencen a generar impactos. Por ello recomiendan a la Corte Constitucional ordenar la suspensión de los tres proyectos hasta que se realice la consulta de manera ajustada a los estándares internacionales y a la jurisprudencia Constitucional.

En segundo lugar sostienen que el Estado colombiano, a la luz del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional colombiana, tiene el deber de proteger de manera efectiva los derechos territoriales de los pueblos Embera Katio del resguardo Chidima Tolo y Pescadito, de manera que se proteja el vínculo de estos pueblos con su territorio y su integridad étnica y cultural. En el caso concreto, este deber del Estado se materializa en la protección de los pueblos indígenas frente a la invasión de colonos, lo que implica tomar medidas disuasivas y sancionatorias.

Además, dado que uno de los factores que aumenta el riesgo de colonización es la titulación fragmentada del resguardo Chidima Tolo, sugieren a la Corte Constitucional adoptar la recomendación de la Comisión de Expertos sobre Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre la necesidad de unificar en un solo globo de terreno los tres lotes del resguardo Chidima Tolo.

Para presentar estos dos argumentos la intervención fue planteada en cuatro partes.

(i) El Convenio 169 de la OIT hace parte del bloque de constitucionalidad y por tanto el mandato constitucional que ordena la consulta previa debe interpretarse tomando en consideración lo establecido por el mencionado Convenio, tal y como lo ordena el artículo 93 de la Carta, que señala que los derechos constitucionales deben ser interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia.

(ii) Las reglas constitucionales básicas acerca de la manera como se debe adelantar la consulta, de conformidad con los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos en este campo.

(iii) Las anteriores reglas no fueron respetadas por los tres proyectos en cuestión de manera que existe la obligación del Estado de proteger a través de diferentes medios los derechos territoriales de los pueblos indígenas para garantizar efectivamente su integridad étnica y cultural; y

(iv) Recomendaciones a la Corte Constitucional en relación con las órdenes cuya adopción estiman pertinente para la protección de los derechos invocados en la tutela.

2. Intervención del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Mauricio García Durán, a nombre del centro de investigación referido, manifiesta que el territorio, más que una enunciación jurídica o geográfica, tiene para las comunidades indígenas un sentido comunitario y cultural representativo de su historia y de su existencia, de la forma como ven y entienden la vida, constituyendo así una relación espiritual y sagrada con el mismo como ya lo ha reconocido la Corte Constitucional.

Plantea que de forma expresa la Carta Constitucional, acogiendo lo establecido en el artículo 7º del Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre las medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. Por lo que deben ser consultados sobre la realización de obras de construcción o actividades que se pretendan realizar dentro de sus territorios, buscando así proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.

Expuso que la trasgresión de la garantía del derecho al territorio puede poner en situación inminente de riesgo a la comunidad, así como ocasionar daños irreparables a la misma afectando la perdurabilidad de su autonomía cultural y social respecto de la relación directa y entrañable que generan los individuos con su espacio físico en la que desarrollan y fundamentan sus actividades económicas, sociales y culturales. Esta situación no es susceptible de ser evaluada como una tensión entre el interés general y el particular, sino que se refiere a la garantía integral de los derechos fundamentales de un colectivo humano.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos y aquellos presentados por los demandantes, recomienda a la Corte Constitucional que tutele los derechos fundamentales a la vida, a la consulta previa y derecho a la participación, a la propiedad colectiva, a la diversidad étnica y cultural, al debido proceso y el derecho a no ser desplazado o a estar en riesgo de desplazamiento, de las personas pertenecientes a la comunidad Embera-Katío dentro de los Resguardos de Pescadito y Chidima-Tolo.

3. Intervención de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental y del Proyecto Cátedra Viva Intercultural de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Gloria Amparo Rodríguez, en calidad de Directora de la línea de investigación en Derecho Ambiental y del Proyecto Cátedra Viva Intercultural, en compañía de la asistente de investigación Luz Ángela Patiño presentaron escrito coadyuvando la acción de tutela.

Señalan que el pueblo de Colombia como lo establece el preámbulo de la Constitución se encuentra circunscrito en un ámbito participativo, el cual es vinculante; por consiguiente, este derecho a la participación de las comunidades indígenas se ve concretado cuando la Carta dispensa una protección especial al derecho de participación de las comunidades indígenas en las decisiones que los afectan.

Precisan que la consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos, para pronunciarse sobre medidas (legislativas y administrativas) que se vayan a realizar dentro de sus territorios.

Afirman que en el caso concreto la consulta previa no fue realizada respecto de ninguno de los proyectos ni obras de infraestructura planificadas, por lo que se hace indispensable establecer un requisito para su realización, la cual debe responder a un proceso de concertación y definición entre las comunidades y el gobierno.

En los escritos se hizo referencia a la protección del medio ambiente como papel preponderante en el caso sub examine, argumentando que se debe tener en cuenta la función ecológica de la propiedad y el sentido que la biodiversidad tiene para los pueblos indígenas y la protección de los conocimientos que los pueblos indígenas poseen sobre plantas medicinales, técnicas de cultivo, mejoramiento de alimentos, etc.

En cuanto al tema del riesgo de desplazamiento por la ausencia de protección de sujetos vulnerables, puntualizan que el impacto del desplazamiento forzado sobre los pueblos indígenas radica en que entremezcla facetas individuales con facetas colectivas de afectación, es decir, surte impactos destructivos tanto sobre los derechos individuales de las personas pertenecientes a las etnias afectadas, como sobre los derechos colectivos de cada etnia a la autonomía, la identidad y el territorio.

Agregan que los pueblos indígenas desplazados viven en estado de total desubicación por la ruptura cultural y lingüística que ello conlleva y la inserción abrupta en entornos urbanos y de miseria a los que son completamente ajenos.

Por consiguiente, señalan que al realizarse tres proyectos de gran impacto dentro de su territorio, como son la construcción de una vía, la interconexión eléctrica binacional entre Colombia y Panamá, y la concesión minera en el municipio de Acandí, demanda de las autoridades la mayor atención y diligencia por lo que es necesario que se tutelen los derechos de estas comunidades y por tanto se exhorte a todas las instituciones del Estado a realizar acciones específicas para que cese la situación de vulnerabilidad de estas comunidades.

Enfatizan en que la consulta no implica sólo escenarios de información o simples reuniones o audiencias con las comunidades étnicas. Que tampoco son procedimientos de simple concertación como lo señala el Consejo de Estado y que el gobierno debe asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de las comunidades interesadas, una acción coordinada que permita, entre otros, el reconocimiento y la protección de sus valores y prácticas culturales, religiosas y espirituales, por lo cual deben consultarlas con el fin de llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento acerca de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que puedan afectarlos, con miras a preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Por último, sugieren que el Estado debe contar con políticas claras frente al tema, por lo que es necesario tener presente diversas instancias como las organizaciones de base, las regionales, la mesa de concertación, las autoridades tanto indígenas como afro-colombianas y sus representantes legítimas, así como la presencia de los demás miembros de las comunidades, dado que la consulta es obligatoria y debe ser previa a la toma de la decisión.

4. Intervención de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

4.1 La representante judicial de la Comisión referida allegó escrito dando a conocer algunos hechos que acaecieron de forma posterior a la interposición de la acción de tutela producto del trabajo de acompañamiento y representación que adelantan a nombre de las comunidades accionantes.

El escrito informa que en agosto del año anterior solicitaron a la Procuraduría General de la Nación información acerca de las acciones desplegadas luego de la visita realizada a la zona por un funcionario de la Delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos. En su respuesta, de fecha 24 de febrero del año en curso, el Delegado para la

prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos les remitió copias de las comunicaciones que envió tanto a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares como al grupo de consulta previa del Ministerio del Interior y de Justicia y a la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo sostenible del Chocó –CODECHOCO–.

Agrega que en enero del presente año recibió comunicación de la misma Delegada en la que les informa que se remitió comunicación a la Alcaldía de Acandí, en la que se solicita información acerca de si se ha realizado o no la consulta previa para la construcción de la carretera y le pide de información acerca de los trámites llevados a cabo para la consecución de la licencia ambiental.

Comenta que a pesar del interés manifestado por la Coordinadora del Grupo de Consulta Previa por realizar el proceso de consulta, ésta no se ha realizado mientras que sí se ha avanzado significativamente en el proceso de contratación y destinación de recursos para las obras proyectadas, incluso aún antes de iniciar el proceso de certificación de comunidades étnicas para realizar la consulta. Esta situación conlleva a cristalizar una situación de hecho que a su juicio convierte la consulta previa en un mero trámite formal.

De otra parte informa que el 15 de enero del año en curso la CCJ fue informada por parte de algunos integrantes de la comunidad de Chidima acerca de la presencia de personas uniformadas dentro del territorio del resguardo, situación que fue transmitida a la Defensoría del Pueblo.

Señala que la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (Ceacr), en cuanto a las comunidades Embera Pescadito y Chidima, en el Norte del Chocó expidió una nueva recomendación en la que la Comisión reitera al gobierno colombiano:

“(…) tomar medidas urgentes para poner fin a toda intrusión en las tierras de los pueblos Embera Katío y Dóbida y a suspender las actividades de exploración, explotación y la implementación de proyectos de infraestructura que les afectan en tanto que no se proceda a la plena aplicación de los artículos 6, 7 y 15 del Convenio. Solicita igualmente una vez más al Gobierno que tome medidas para unir los tres lotes del resguardo Chidima en la medida en que hubiera habido ocupación tradicional y garantice la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión de los pueblos referidos conforme al artículo 14, 2), del Convenio”.

Agrega que al igual que con el primer pronunciamiento, hasta ahora las autoridades encargadas de la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas parecen no estar interesadas en acatar las observaciones. En cuanto a la proyección de la línea de transmisión de energía para el proyecto de interconexión eléctrica binacional entre Colombia y Panamá, manifiesta que por averiguaciones hechas ante la compañía encargada del proyecto, la línea se utilizaría sólo para venta de energía a Panamá y no para surtir de esta a los municipios colombianos que atraviesa.

Añade que sobre dicho proyecto de interconexión eléctrica el Presidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo con su homólogo panameño Martín Torrijos una reunión, el 1 de abril de 2009 en Panamá, en la cual el primer mandatario colombiano declaró:

“Nuestra gratitud al Presidente Martín Torrijos por su gran interés, su persistencia para que saquemos este proyecto adelante. A los gerentes de Etesa en Panamá, de ISA de Colombia, Isaac Castillo y Luis Fernando Alarcón. Nuestra gratitud a los Ministros. Al Ministro Hernán Martínez, a los Ministros de Gabinete de Panamá, a nuestros Embajadores. (...) Qué bueno que esto vaya tomando cuerpo. Son muchos años de lucha. Qué bueno que ya estén en una etapa que podríamos llamar de estudios finales. Y que de acuerdo con lo que nos han dicho el doctor Luis Fernando Alarcón y el doctor Isaac Castillo ya a principios del año entrante veamos obra”.

Según la CCJ, la declaración del Presidente de Colombia revela que sobre esta iniciativa existen estudios avanzados, a lo que se suma el Acta de Intención suscrita por ambos gobiernos el 1º de agosto de 2008, en la ciudad de Cartagena, y en la cual se asevera que:

“Motivados por el interés de sus Gobiernos en consolidar un esquema de interconexión eléctrica bilateral que redunde en beneficio del progreso y desarrollo de sus países (...); 4. Las autoridades ambientales agilizarán la expedición de los permisos ambientales necesarios para la construcción de la infraestructura que permitirá la interconexión binacional”

Concluyó manifestando que según lo aseverado por las autoridades, el estudio de impacto ambiental ya debió comenzar, y el mismo prevé la realización de las consultas previas con los grupos étnicos afectados por la obra. No obstante, afirma que no se han efectuado tales consultas.

4.2 El 17 de febrero de 2011 la Comisión Colombiana de Juristas allegó escrito en el que informa de la existencia del informe publicado por la Asociación de Cabildos indígenas Wounaan, Embera Dobida, Katío, Chamí, y Tule del Chocó, en el que se informa que sus comunidades se encuentran minadas, lo que les ha provocado un alto grado de confinamiento y por ende el ejercicio de sus derechos. Informa que a finales del año pasado y a inicios del 2011 visitaron a las comunidades, las cuales le manifestaron sus preocupaciones por la presencia de actores armados ilegales, amenazas contra la vida de sus líderes, vulneración de su derecho a la consulta, a la participación y la salud.

De otra parte denuncian aspectos relacionados con cultivos ilícitos, avisos del gobierno frente al territorio y la restitución de tierras a terceros, la construcción de la carretera, dificultades con autoridades civiles y militares, explotación ilegal de oro, amenazas contra líderes de la comunidad, afecciones de salud y el caso de negligencia médica que originó el fallecimiento de la señora Rosa Domicó el 26 de noviembre de 2010.

V. DECRETO DE PRUEBAS EN SEDE DE REVISIÓN.

Por Auto del 03 de mayo de 2010, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, atendiendo la necesidad de documentarse sobre los supuestos de hecho y de derecho que originaron la acción de tutela de la referencia, al igual que con el fin de garantizar el principio de participación democrática por los intereses que se encuentran involucrados en el caso sometido a revisión, dispuso la práctica de pruebas que permitiesen obtener elementos de juicio para adoptar la decisión definitiva. Para tal fin resolvió:

“PRIMERO.- INVITAR al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), a las facultades o programas de Antropología de las Universidades Nacional de Colombia, de Antioquia, del Magdalena, del Cauca, ICESI, de Los Andes y Javeriana, al igual que a la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a la Cámara Colombiana de Minería, a la Cámara Colombiana de la Infraestructura para que en el término de 20 días calendario contados a partir de la notificación del presente auto, si lo consideran pertinente, emitan su opinión sobre la demanda de la referencia, para lo cual se les enviará copia de la misma por intermedio de la Secretaría General.

SEGUNDO.- Las respuestas a lo consultado serán enviadas a la Secretaría de la Corte Constitucional con los respectivos soportes de la información solicitada. Igualmente, serán remitidas al correo electrónico: ().

TERCERO.- CITAR al señor Oscar Carupia Domicó y a la señora Rosa Domicó, actores en el presente proceso, para que rindan declaración ante el Despacho del suscrito magistrado sustanciador, sobre los hechos que dieron origen a la interposición de la demanda.

La declaración se recibirá el lunes veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010) a las 2:00 p.m en las instalaciones del Juzgado Promiscuo Municipal de Acandí (Chocó), y su recepción estará a cargo de los funcionarios del despacho del magistrado sustanciador, doctores Javier Tobo Rodríguez y Juan Camilo Herrera Prieto, a quienes se delega para tal efecto en virtud de lo establecido en el literal f del artículo 16 del Acuerdo Núm. 05 de 1992, que contiene el reglamento de la Corporación.

CUARTO.- CITAR a los señores Eliécer Chamarra y Gustavo Domicó gobernadores de los resguardos Chidima y Pescadito respectivamente, para que rindan testimonio sobre los hechos que dieron lugar a la acción que motivó el presente proceso.

Los testimonios se recibirán el lunes veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010) a las 2.45 p.m. en el Juzgado Promiscuo Municipal de Acandí (Chocó), y su recepción estará a cargo de los funcionarios del despacho del magistrado sustanciador, doctores Javier Tobo Rodríguez y Juan Camilo Herrera Prieto, a quienes se delega para tal efecto en virtud de lo establecido en el literal f del artículo 16 del Acuerdo Núm. 05 de 1992, que contiene el reglamento de la Corporación.

QUINTO.- CITAR al Personero Municipal del Municipio de Acandí señor Gabriel Olivares Vélez para que rinda testimonio ante el Despacho del suscrito magistrado sustanciador, sobre los hechos que dieron lugar a la interposición de la demanda que motivó el presente proceso.

La declaración se recibirá el lunes veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010) a las 3.30 p.m en el Juzgado Promiscuo Municipal de Acandí (Chocó), y su recepción estará a cargo de los funcionarios del despacho del magistrado sustanciador, doctores Javier Tobo Rodríguez y Juan Camilo Herrera Prieto, a quienes se delega para tal efecto en virtud de lo establecido en el literal f del artículo 16 del Acuerdo Núm. 05 de 1992, que contiene el reglamento de la Corporación.

SEXTO.- CITAR a los señores Rafael Pérez, John Jairo Naranjo, Samuel Palencia, Esteban Florido, Alfonso Torres, Ramón A. Tamayo, Denis Petro, Saúl de Jesús Ricardo, Pedro Luis García, Julián Osorio y Omar Fajardo para que, rindan testimonio ante este Despacho sobre la presunta ocupación de tierras en territorios de los resguardos indígenas Chidima-Tolo y Pescadito.

Los testimonios se recibirán el lunes veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010) a las 4:00 p.m. en el Juzgado Promiscuo Municipal de Acandí (Chocó), y su recepción estará a cargo de los funcionarios del despacho del magistrado sustanciador, doctores Javier Tobo Rodríguez y Juan Camilo Herrera Prieto, a quienes se delega para tal efecto en virtud de lo establecido en el literal f del artículo 16 del Acuerdo Núm. 05 de 1992, que contiene el reglamento de la Corporación.

SÉTIMO.- Con el propósito de tener un mejor conocimiento de los hechos que ocasionaron la presente acción de tutela y de la situación social, cultural y económica en la que se encuentra la Comunidad indígena implicada, para el martes veinticinco (25) de mayo de 2010 se propone concertar la práctica de una inspección judicial en la zona del resguardo.

OCTAVO.- SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo disponer de un funcionario que tenga conocimiento sobre la problemática de la zona y que sirva de acompañamiento a la diligencia descrita en el numeral anterior.

NOVENO.- COMISIONAR al Juzgado Promiscuo Municipal de Acandí (Chocó), para que a través suyo se surtan las notificaciones a todas las personas que mediante esta providencia se citan a ese Despacho judicial.

DÉCIMO.- Con el fin de conformar el legítimo contradictor y atendiendo a que lo que se decida en este proceso podría afectar los intereses del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incode), ORDENAR que por Secretaría General de esta Corporación, se ponga en conocimiento del representante legal del Incode o quien haga sus veces, el contenido del expediente T- 2451120 para que dentro de los ocho (08) días siguientes a la notificación del presente auto, se pronuncie acerca de las pretensiones y el problema jurídico que plantea la aludida acción de tutela en lo que corresponda a su competencia.

ONCEAVO.- Por secretaría general NOTIFICAR a los Ministerios de Transporte, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Interior y de Justicia, Minas y Energía, de Agricultura, de Defensa, del Consejo Asesor de Regalías adscrito al Departamento Nacional de Planeación, de las alcaldías de Unguía y Acandí, a la Corporación Autónoma Regional del Chocó

(Codechocó), al Ejército Nacional, a la Brigada XVII y a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, accionadas en el asunto de la referencia sobre lo decidido en el presente Auto.

Adicionalmente, ORDENAR a las entidades descritas, informar a esta Corporación en el término de quince (15) días, cuál es el estado de los proyectos o diligencias que se están adelantando en lo que concierne a lo de su competencia y/o que corresponda con los hechos que dieron lugar a la acción de tutela de la referencia, es decir, en lo relacionado con los proyectos que se desarrollarían en los resguardos, tales como: (i) la construcción y/o mantenimiento de la vía que conectaría los municipios de Acandí y Unguía, (ii) el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, (iii) las actividades de prospección minera de la empresa Gold Plata en la zona, y (iv) la presunta invasión por parte de terceros a territorios de los resguardos.

DOCEAVO.- SUSPENDER el término para fallar el asunto de la referencia, hasta tanto se practiquen las pruebas y valoren los informes solicitados.”

Atendieron la invitación realizada por la Corte: Diego Herrera, Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh); Roberto Suarez Montañez, Director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes (allegó concepto emitido por el profesor Daniel Aguirre L); Socorro Vásquez, directora del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana; Luis Carlos Villegas Echeverri, por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi); Robert VH Dover, Yulieth Teresa Hilón Vega y Gloria Patricia Lopera, por el Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia.

1. Intervención del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh).

El director del referido instituto centró la intervención en resaltar las relaciones socioculturales que pueden estar implicadas en esta demanda y los riesgos que podrían presentarse para las comunidades accionantes en relación con el conflicto armado que vive el país.

Considera que las situaciones descritas por la problemática planteada contra el Ministerio de Transporte y demás entidades del Estado vulneran derechos fundamentales de las comunidades accionantes porque: (i) existen elementos fácticos para sostener que el paso de la carretera Unguía-Acandí a la altura de los resguardos Emberas de Pescadito y Chidima Tolo debe ser construida, con todas las afectaciones esperadas, y, por lo tanto, el proceso de consulta previa es necesario en ese caso; (ii) no se puede entender el “interés general”, “el desarrollo” o el “progreso” que traen las obras de infraestructura como procesos aislados de las particulares significaciones socioculturales que las comunidades locales e implicadas por dichas obras les dan a los procesos.

Según el Icanh, las intervenciones pueden generar fractura de las relaciones sociales y de producción de una comunidad, por lo que el Estado debe poner todas las herramientas a su alcance para garantizar la participación de esta de manera equitativa y atendiendo a sus propios requerimientos sociales, políticos, económicos y ambientales. Resalta y enfatiza que la participación del ejército en la construcción de la carretera, más que desafortunada, es francamente riesgosa para la integridad de las comunidades indígenas involucradas. Además de haber iniciado actividades sin el consentimiento ni consulta previa de éstas, la sola posibilidad de que ahora los miembros del ejército la lleven a cabo se convierte en un peligro para los habitantes de los resguardos de Pescadito y Chidima Tolo, pues los involucra en el conflicto armado, aún presente en la zona. Por esas razones, considera que se debería evitar a toda costa la ejecución de esa obra por parte del ejército.

Concluye que las anteriores consideraciones llevan a afirmar que la tutela interpuesta por las comunidades Emberas de los resguardos de Pescadito y Chidima Tolo, no solo es conducente, sino urgente.

2. Intervención del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes.

El concepto se dividió en dos acápite. Inicialmente realizó una reseña del trámite de tutela del caso bajo estudio señalando los argumentos de cada uno de los actores y los fundamentos fácticos y jurídicos de los jueces de instancia. Posterior a ello centró su intervención en resaltar la importancia de las comunidades indígenas y el aporte que estas hacen a la realidad social y cultural de nuestro país.

En relación con las comunidades indígenas involucradas en el presente conflicto, realiza la siguiente radiografía de las características de los indígenas Embera:

“(…) Aunque los Embera sean el tercer grupo étnico más numeroso del país (alrededor de 70.000 hablantes), la gran movilidad que los caracteriza y por la cual se han dispersado principalmente por el norte de la zona andina y el occidente del país, junto a la violencia generalizada que ha alcanzado muchos de sus territorios, los ha llevado a atomizarse en cada vez más pequeñas comunidades, donde sobreviven en medio de otras etnias aborígenes o afrocolombianas o se enfrentan a mestizos en zonas de amplia colonización; y en no pocas ocasiones ven amenazada su existencia como grupo, llegando incluso a desintegrarse en familias, que migran presurosa y azarosamente a los centros urbanos, huyendo de los neo-colonos que arrebatan sus tierras y/o de las grandes empresas que arrasan sus territorios en busca de recursos naturales, los Embera del noroeste chocóano son uno de esos grupos y fueron recientemente incluidos por el relator de las Naciones Unidas, R. Stavenhagen, entre los 34 grupos aborígenes más vulnerables del país y en serio peligro de extinción.”

Manifiesta que se van a cumplir ya 20 años de haber reconocido oficialmente nuestra multiculturalidad y diversidad étnica, y lejos se está de haber asimilado el hecho a cabalidad y de actuar en consecuencia. Los hechos que nutrieron las dos instancias falladas negativamente en la acción de tutela de la referencia son una clara muestra de la apreciación que aún tenemos sobre los pueblos aborígenes sobrevivientes del país, pues reflejan ante todo un abierto rechazo a su pensamiento y un agudo desprecio a sus opiniones, inclusive en lo que atañe a su propio bienestar y supervivencia.

Estos hechos, resumidos en respuesta a la acción de tutela puesta por los representantes de los dos resguardos Embera del municipio de Acandí en el Chocó, a todas luces en creciente hostigamiento por las empresas multinacionales

encargadas de ejecutar los proyectos planeados en sus territorios, las autoridades locales, los militares y en general los colonos de los alrededores, dejan ver qué lejos estamos de poder llevar a cabo el contenido de nuestra Carta Magna o de Convenios Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. En cuanto a los instrumentos puntualizan que estos abogan por un trato digno y respetuoso por las sociedades milenarias, que milagrosamente aún nos acompañan y que, muchos han entendido ya, son valiosos testimonios de nuestra variada especie, la cual enriquecen con su alteridad y ennoblecen con su profundo conocimiento de la naturaleza, fruto de milenios de observación en vivo y en directo. Al respecto señala:

“Los colombianos deberíamos sentirnos orgullosos de estos pueblos ancestrales cuyos atropellados descendientes aun nos acompañan. Es una lástima que nos acerquemos a ellos para explotar sus riquezas naturales y el paisaje que han conservado y no para aprender de su milenaria sabiduría agonizando junto con sus ancianos. Más aprecian muchos extranjeros el inmenso tesoro mental y cultural que tenemos en nuestro país al reunir tantas visiones alternas de la naturaleza, del universo, de los seres.”

Realiza un estudio detallado de una parte por la cultura occidental y de otra por las comunidades indígenas, de los términos técnicos utilizados, señalando reflexiones sobre la marcada diferencia de encarar las situaciones, conceptos y desafíos planteados en los conflictos presentados en el choque de culturas y visiones. Para ello expuso referencia de autores especializados en la materia a los cuales se hará referencia más adelante.

Concluye resaltando que la ley dispone que la consulta debe “efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias”. Es decir, que el Estado debe contar con mecanismos que le permitan determinar y analizar si las medidas administrativas propuestas afectan los intereses de los pueblos indígenas y en qué magnitud se pueden iniciar procesos especiales anticipados a la adopción de las mismas. Significa lo anterior que el Estado determinará procedimientos especiales de consulta según la naturaleza de la medida, el impacto en los pueblos indígenas y la naturaleza de los derechos involucrados, siempre con la finalidad de obtener el consentimiento o acuerdo de las comunidades afectadas.

3. Intervención del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana.

La Directora del Instituto de Antropología de la Universidad Javeriana inicia su intervención efectuando una introducción sobre el papel que representan las comunidades indígenas en el contexto de la sociedad Colombiana, resaltando la importancia de la existencia de éstas y señalando los fundamentos jurídicos que sirven de base para la protección de los derechos de dichas comunidades.

De una parte centra su intervención en aspectos puntuales como (i) la necesidad de determinar el alcance del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en el contexto de la construcción de obras viales que afecten su derecho a la propiedad colectiva sobre el resguardo que habitan; (ii) la pertinencia de realizar un juicio de proporcionalidad en el cual se ponderen los intereses de las municipalidades de Acandí y Unguía en la construcción del tramo faltante de la vía que los interconecta frente a la protección a los derechos de la etnia Embera en atención al modelo Pluriétnico y Multicultural del Estado Social de Derecho colombiano; (iii) determinar si es procedente realizar la consulta previa frente a la eventual imposición de una servidumbre eléctrica en desarrollo de un proceso binacional de interconexión, en el ámbito del licenciamiento ambiental del mencionado proyecto; y (iv) ponderar el interés en dicha interconexión con el derecho a la subsistencia cultural y material del pueblo Embera.

De otra parte se refirió al problema desde el punto de vista antropológico, manifestando que diferentes estudios en Colombia y en el mundo han demostrado que los efectos de la ejecución de cualquier proyecto de infraestructura o desarrollo tienen consecuencias que alteran y amenazan las formas de vida y la pervivencia de los pueblos indígenas, especialmente cuando tales proyectos son impuestos sobre las necesidades del desarrollo que se han propuesto y que han definido los pueblos indígenas para sí mismos.

En el caso del pueblo Embera, hace referencia a dos antecedentes importantes, en los cuales las investigaciones han demostrado que el desconocimiento del derecho a la consulta previa condujo al despojo territorial, la pauperización y la parcial desaparición de los Embera-Katío. En referencia a la explotación del oro y la disputa por el control privado de la misma en los resguardos Embera del Alto Andágueda y a la dramática inundación de las tierras del pueblo Embera-Katío del alto Sinú, en el municipio de Tierralta, a través de la autorización de una licencia ambiental para tal proyecto.

Concluye resaltando la necesidad de realizar el proceso de consulta previa ante las autoridades indígenas de los resguardos Chidima-Tolo y Pescadito, en lo referente a la concesión de licencias para la extracción minera en los mismos resguardos. Considera que el impacto sobre los pueblos indígenas de la imposición de la carretera, la interconexión eléctrica y la extracción de recursos mineros, amenaza la pervivencia del pueblo Embera-Katío de los resguardos Chidima-Tolo y Pescadito.

Finalmente señala que el derecho a la consulta previa ha sido creado para lograr procesos y formas de desarrollo que no impidan la supervivencia de los pueblos indígenas y cumplir con el principio constitucional de proteger al Estado-Nación de Colombia, a través de la protección de los pueblos indígenas que lo constituyen; de ahí la responsabilidad que le atañe al Estado de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y fomentar su protección y desarrollo.

4. Intervención de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).

El Presidente de la antedicha asociación realizó un análisis del material probatorio allegado al proceso sintetizando que estos no permiten concluir la afectación en la vida, creencias, instituciones y bienestar espiritual de los miembros de las comunidades indígenas.

En cuanto a la construcción de la vía Acandí- Unguía, señaló que mientras no exista prueba, al menos sumaria, de la afectación directa de la obra sobre los derechos fundamentales de los miembros de las comunidades indígenas, no debe proceder la consulta previa prevista para tales eventos.

Respecto a los proyectos de interconexión eléctrica de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. y las actividades de prospección minera de la empresa Gold Plata, concluye que estos, al encontrarse en etapa preliminar, no evidencian vulneración alguna a los derechos de las comunidades indígenas; por tanto estas aún pueden participar en la toma de las decisiones referente a los proyectos antes mencionados.

Concluye de forma general que en la medida en que tales proyectos requieren licencia ambiental, las comunidades indígenas, en igual forma que los demás sectores de la población colombiana, tendrán oportunidad de intervenir en los procesos para emitir dichas licencias.

5. Intervención del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia.

El identificado ente académico en un amplio concepto relacionado con el caso sometido a revisión. Para ello se basaron en entrevistas con el personal de la empresa ISA y con integrantes de la Comisión de Territorio de la Organización Indígena de Antioquia (OIA).

En cuanto al caso concreto se refiere mayoritariamente al proyecto de interconexión eléctrica binacional Colombia – Panamá. De otra parte aborda los argumentos expuestos por las entidades accionadas y la forma como los jueces de instancia resolvieron el caso. Así, afronta la discusión desde el punto de la estigmatización de ejercer un derecho, bajo los siguientes tópicos:

“1) La concepción que se refleja en la decisión del Tribunal de primera instancia, expresa la tendencia a considerar que cuando los grupos étnicos reclaman un derecho que, como la consulta previa, les pertenece por ser grupos vulnerables por motivos sociales e históricos, están obstaculizando el bien común. Esta concepción desconoce que los grupos étnicos, al igual que cualquier otro grupo social, también son patrimonio histórico y social de la nación, y que su bienestar contribuye a la construcción de una identidad nacional incluyente.

2) Que el reconocimiento del derecho a la consulta obviaría un hecho importante sobre el concepto de un país pluriétnico y multicultural y es que las múltiples epistemologías representadas en los grupos étnicos no son “worldviews” exóticas territorialmente relegadas, sino pensamientos que deben entrar en el debate público sobre el desarrollo del país y sus regiones porque representan patrimonios inmateriales transversales. Por ello, estas voces no deben permanecer confinadas en el ámbito territorial reconocido a indígenas y afrodescendientes, para solo tener derecho a ser escuchadas cuando algún proyecto impacte de manera directa y específica sus territorios.

3) Que una consecuencia paradójica del reconocimiento del derecho a la consulta previa de los grupos étnicos, cuya realización, por otra parte, constituye un deber del estado, es que cuando estas comunidades se movilizan para reclamarlo son objeto de represalias por parte de otros actores sociales que ven afectados sus intereses y culpan a las comunidades por las mayores exigencias que deben satisfacer para obtener las licencias que les permitan desarrollar los proyectos objeto de consulta previa. Represalias que, en casos extremos pero no infrecuentes, involucran la actuación de grupos armados ilegales.

4) Por lo anterior, quien reclama el derecho a la consulta previa tiende a ser estigmatizado. No es un derecho que se ejerce automáticamente, gracias a que las entidades estatales encargadas de garantizarlo cumplan con su función, sino que las comunidades se ven en la necesidad de movilizarse para reclamarlo a través de herramientas que, como la acción de tutela, están diseñadas para operar cuando se ha vulnerado o se amenaza con vulnerar un derecho fundamental. Esto es consecuencia, entre otros factores, de la falta de claridad sobre el momento en que debe tener lugar la consulta previa y sobre las responsabilidades específicas que corresponden a las entidades estatales a quienes compete autorizar y vigilar el desarrollo de los proyectos que deben ser objeto de consulta. Ello se comprueba en el presente caso, donde todas las entidades citadas en el expediente evaden su responsabilidad como garantes del derecho a la consulta previa y, en consecuencia, afirman que no les corresponde comparecer como demandadas en la presente acción de tutela.

En definitiva, este caso muestra como a las minorías étnicas se les está cargando con todo el peso de cuestionar ante los tribunales los impactos ambientales y sociales que generan estos grandes proyectos de infraestructura, cuyos efectos negativos no recaen solo sobre estas poblaciones sino sobre todos. Ello debido a falta de compromiso de las entidades estatales con la defensa de estos intereses que, como ya se ha dicho, trascienden a las comunidades y también forman parte del bien común.”

Posteriormente se refiere a la discusión desde el punto de vista de la protección de las comunidades versus el desarrollo económico y de infraestructura. Del mismo modo hace referencia al reconocimiento del derecho del “otro”, invitando a incorporar los discursos de la otredad como parte integral y no subalterna de la construcción del Estado-Nación. Conforme a todo lo expuesto, concluye:

“1) Llama la atención sobre la gran divergencia que existe entre los estándares de consulta previa desarrollados por la jurisprudencia constitucional y los instrumentos de derecho internacional (Convenio 169 de la OIT, Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas) y la legislación infraconstitucional. Esta última concibe la consulta previa como un trámite circunscrito al procedimiento de obtención de licencias ambientales, que tiene lugar en una fase ya avanzada de diseño de los proyectos (en el momento de realizar el Estudio de Impacto Ambiental). Este caso pone de manifiesto que las entidades estatales (Ministerio de Minas, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio del Interior y de Justicia, Municipio de Acandí, ISA, Ejército Nacional), hacen caso omiso de los desarrollos constitucionales y de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia de consulta previa para, en su lugar, aplicar una legislación que estandariza y no está acorde con tales exigencias.

2) En consecuencia, la Corte debe ocuparse de precisar el momento en el que surge la obligación de llevar a cabo la consulta previa. Con el fin de que dicho instrumento realmente sirva para incorporar las epistemologías de los grupos étnicos y subalternos a la discusión misma sobre el desarrollo, al diseño de los proyectos que van a impactarlos y a la decisión sobre su

ejecución, el momento de la consulta previa no debe diferirse hasta la etapa de realización de Estudios de Impacto Ambiental, sino que debe tener lugar desde el primer momento que las entidades ajenas a las autoridades de la comunidad pisan su territorio con fines indagatorios. Lo anterior con el fin de que la consulta no se vea reducida, como hasta ahora, a un trámite para medir impactos y negociar los términos para mermarlos u obviarlos, en lugar de aspirar a construirse como un foro de interculturalidad.

3) Una de las razones que motivó la escogencia de esta acción de tutela para revisión fue la necesidad de fijar un protocolo de actuación por parte de los jueces de instancia al momento de decidir casos en los que se litigue el derecho a la consulta previa, considerando que estas suelen ser negadas porque las comunidades no logran probar, dentro de los parámetros reconocidos por esas instancias, los impactos negativos de los proyectos sobre los que reclaman ser consultados.

4) Hay una paradoja cuando las entidades territoriales del orden local, como en este caso el municipio de Acandí, que tendría que velar por los intereses de todas las personas que habitan en su jurisdicción, entre ellas de los grupos étnicos y vulnerables, es la misma entidad que reclama ejecutar proyectos de infraestructura en cuya decisión no han intervenido todos los que se verán afectados por dichos proyectos. El espacio de discusión que un proyecto convoca debe ser el escenario propicio para incluir a las epistemologías diversas de los grupos étnicos y vulnerables que habitan, en este caso el municipio de Acandí, en el debate sobre el desarrollo local, razón por la cual la Corte debería instar a las autoridades del orden municipal a incluirlas desde el comienzo en este debate."

6. Inspección judicial efectuada por la Corte Constitucional.

Conforme a lo ordenado en el auto del 03 de mayo de 2010, los funcionarios delegados por la Sala Quinta de Revisión se desplazaron al municipio de Acandí (Chocó) el lunes 24 de mayo del presente año. Una vez allí, procedieron, en las instalaciones del Juzgado Promiscuo Municipal de Acandí, a recibir algunas de las declaraciones y testimonios ordenados. Al día siguiente, en compañía del delegado de la Defensoría del Pueblo y de los representantes indígenas se procedió a realizar la inspección judicial en la zona de los resguardos Pescadito y Chidima-Tolo. Los apartes relevantes de las pruebas practicadas, serán referidos en la solución del caso concreto de la presente providencia.

Teniendo en cuenta que el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), informó que en la zona en que se desarrollarían los proyectos mineros dentro de los resguardos indígenas a los que pertenecen los accionantes, la compañía Minerales del Darién SA es empresa titular de contratos de concesión, la Corte procedió a notificarla de la presente acción de tutela por medio de auto del 11 de enero de 2011.

En vista que no fue posible materializar la notificación, el despacho del magistrado sustanciador procedió, el 26 de enero de 2011, a comunicarse con la jefe de orientación de la Cámara de Comercio de Medellín, quien por vía de correo electrónico, el 28 de enero de 2011, allegó la siguiente información: (i) certificado especial que da cuenta de la disolución, nombramiento de liquidadores y liquidación de la sociedad MINERALES DEL DARIEN S.A.; (ii) copia del acto donde consta la disolución de la sociedad –Escritura No. 2657 del 21 de Mayo de 2009, de la Notaría 29a. de Medellín; (iii) copia de la liquidación de la sociedad – Acta No. 013 del 28 de Mayo de 2009, de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

Dada la anterior circunstancia, la Sala atendiendo a la especial relevancia del asunto sometido a revisión, así como la importancia de los derechos fundamentales por los que se alega la violación, en aplicación de los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, en Auto del 08 de febrero de 2011, ordenó en sede de revisión la publicación de un aviso en prensa de amplia circulación nacional con el fin de notificar tanto al tercero determinado, compañía Minerales de Darién como a los terceros indeterminados en general que puedan tener interés directo en la decisión de la Corte Constitucional dentro de los problemas jurídicos que suscita el proceso de tutela T-2451120.

Paralelamente, por Auto del 14 de febrero de 2011, se solicitó a Ingeominas que informara quién actualmente es el concesionario de la explotación minera de los contratos de concesión FLD-134 y135 y demás que puedan superponerse en la zona de los resguardos.

7. Vinculación del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), de la empresa de interconexión eléctrica S.A ESP-ISA y las empresas Gold Plata Corporation y Minerales del Darién S.A.

7.1 Por medio de Auto del 11 de junio de 2010, con el fin de conformar el legítimo contradictor y a que lo se decida en este proceso podría afectar los intereses de las empresas y entidades referenciadas, se procedió a la vinculación de los entes referidos, cuyas respuestas serán relacionadas en el acápite del caso concreto.

8. Traslado efectuado por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de cumplimiento.

El 22 de septiembre de 2010, la Sala especial mencionada trasladó al despacho del magistrado sustanciador información relacionada con las comunidades implicadas en la acción de tutela sometida a revisión, advirtiéndolo siguiente:

"1. Que en el proceso de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y sus Autos 004, 005 y 314 de 2009, esta Sala Especial de Seguimiento ha recibido en el período comprendido entre el mes de marzo de 2009 y agosto de 2010, informes del Gobierno Nacional (Acción Social, Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras, Ministerio del Interior y de Justicia, y CNRR), de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo (Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas y SAT), de la Fiscalía General de la Nación, de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, de las Comunidades Negras de la cuenca del río Truandó de Riosucio-Chocó, de COCOMOPOCA-Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina del Alto Atrato, de la ONIC, de comunidades indígenas ubicadas en la Mina Care Perro y en los municipios del Carmen del Darién (Chocó) y Murindó (Antioquia), de la OREWA-Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule del departamento del Chocó, de la Comisión Colombiana de Juristas, de AFRODES, de FUNDARTECP, de Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de

ACNUR, así como del informe de comisión a Chocó, realizado por una de las magistradas auxiliares que acompañan a la Sala Especial de Seguimiento, que de manera explícita se han referido a la situación de las comunidades Chidima y Pescadito en el Darién Chocoano, y con base en dicha información se elaboró un informe ejecutivo con los principales hallazgos.

2. Que por considerar que dicho informe puede resultar útil para examinar la situación actual bajo revisión en el proceso T-2451120 - Oscar Carupia Domicó y otros contra el Ministerio de Transporte y otros, esta Sala Especial de Seguimiento, da traslado de dicho informe a la Sala Quinta de Revisión, para los fines que estime pertinentes.

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE

Por Secretaría, DAR TRASLADO del Informe elaborado por la Sala Especial de Seguimiento sobre la situación de las comunidades Chidima y Pescadito en el Darién Chocoano, a la Sala Quinta de Revisión, para que pueda ser tenido en cuenta en el proceso T-2451120 - Oscar Carupia Domicó y otros contra el Ministerio de Transporte y otros.”

El contenido de la información trasladada, será tenida en cuenta por la Sala en la resolución del caso concreto de la presente providencia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

1. Competencia

Esta Sala es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Presentación del caso y planteamiento de los problemas jurídicos.

2.1. Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso indígenas pertenecientes al resguardo Chidima–Tolo y a favor de la comunidad de Pescadito (las dos de la etnia Embera Katío ubicadas al norte del Chocó), interponen la presente acción de tutela exponiendo dos problemáticas que, en su sentir, afectan sus derechos fundamentales a la consulta previa, a la participación, a la propiedad colectiva y a la integridad étnica y cultural.

La primera está relacionada con la intervención que se proyecta en parte de sus territorios para la ejecución de obras de infraestructura y explotación de recursos naturales, a saber: (a) los trabajos correspondientes a la construcción de una carretera que atravesaría los resguardos; (b) el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá; y (c) los trámites relativos a la concesión para explotación de oro.

En cuanto a la segunda problemática, advierten que por la fragmentación territorial como fueron reconocidos los resguardos, dicha circunstancia ha facilitado la presencia de colonos que de forma irregular ocupan sus territorios y explotan los recursos naturales ocasionando daños ambientales a zonas del resguardo y aledañas al mismo. Adicionalmente, informan que por las expectativas derivadas de los proyectos antedichos y la presencia de grupos al margen de la ley, las comunidades se encuentran en peligro de desplazamiento, situación que denuncian no ha sido solucionada por parte de los organismos competentes del Estado.

2.2. En armonía con los presupuestos facticos planteados, la Sala Quinta de Revisión deberá resolver los siguientes problemas jurídicos (i) si las conductas desplegadas por las entidades accionadas han desconocido los derechos y garantías constitucionales de las comunidades indígenas en lo relativo al agotamiento de la consulta previa para la proyección de las obras de infraestructura y explotación de recursos naturales en sus territorios; (ii) si se hace necesario asumir medidas relativas al saneamiento y/o ampliación de los territorios por la presunta ocupación irregular de los mismos; (iii) se analizará si la comunidad se encuentra en peligro de desplazamiento forzado o no.

2.3. Con el objetivo de resolver los problemas jurídicos planteados, la Corte Constitucional tratará los temas relacionados con (i) la protección constitucional especial de la diversidad étnica y cultural de la Nación, reconocimiento en materia indígena y autonomía en sus territorios; (ii) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; (iii) la tensión entre las distintas visiones de desarrollo y la necesidad de protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación; (iv) El derecho fundamental de las comunidades étnicas a la consulta previa respecto de obras, proyectos y/o actividades que tengan la potencialidad de afectar sus territorios; (v) de la importancia de lograr el consentimiento libre, previo e informado ante las medidas de intervención en territorios étnicos y el derecho de las comunidades de compartir los beneficios; (vi) los requisitos jurisprudenciales para la realización de la consulta previa y la búsqueda del consentimiento libre e informado; por último (viii) analizará y resolverá el caso concreto.

3. Protección constitucional especial de la diversidad étnica y cultural de la Nación. Reconocimiento en materia indígena y autonomía en sus territorios.

Es amplia y reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en distintos contextos ha protegido a las comunidades indígenas del país. El referido precedente se ha edificado en los principios fundamentales de la Carta Política contemplados en el artículo séptimo, referente a la protección de minorías raciales y culturales, el cual establece que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.

De ese artículo se extraen elementos esenciales como el reconocimiento estatal y la protección a la diversidad étnica y racial. Así, la Carta Política, sobre la base de los principios de dignidad humana y pluralismo, reconoce un estatus especial de

protección con derechos y prerrogativas específicas a las comunidades étnicas para que bajo sus usos y costumbres hagan parte de la Nación.

De otra parte, la diversidad cultural está relacionada con las representaciones de vida y concepciones del mundo que la mayoría de las veces no son sincrónicas con las costumbres dominantes o el arquetipo mayoritario en la organización política, social, económica, productiva o incluso de religión, raza, lengua, etc. Lo cual refuerza la necesidad de protección del Estado sobre la base de la protección a la multiculturalidad y a las minorías.

De forma expresa y directa la Constitución protege a las comunidades indígenas en muchos aspectos que se proyectan en el ejercicio del poder legislativo, ejecutivo y judicial. En virtud de ello los artículos 171 y 176 de la Constitución Política contemplan una circunscripción indígena en Senado y Cámara de Representantes para el Congreso de la República, de la cual se extrae el derecho al voto y la posibilidad de elegir y ser elegidos. En materia de administración de justicia, el artículo 246 estipula la posibilidad de que las autoridades de los pueblos indígenas ejerzan funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República. Del mismo modo, en cuanto al poder ejecutivo y autonomía administrativa, el artículo 286 otorga el estatus de ente territorial a los territorios indígenas.

Debido a que los problemas jurídicos que se estudian en el presente caso están estrechamente relacionados con el uso y defensa de los territorios indígenas, la Sala considera pertinente enfatizar en las garantías contempladas en los artículos 63 y 329 superiores, que dan el tratamiento a los resguardos de propiedades colectivas el grado de no enajenables, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

En armonía con los preceptos referidos, el artículo 330 contempla la forma de organización del territorio y la posibilidad de organizarse bajo los siguientes parámetros:

“ART. 330. — De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:

1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios.
2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el plan nacional de desarrollo.
3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.
4. Percibir y distribuir sus recursos.
5. Velar por la preservación de los recursos naturales.
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio.
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.
8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren.
9. Las que les señalen la Constitución y la ley.

PAR. — La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades.” (Subrayado por fuera del texto original).

Del párrafo transcrito se deriva que a parte de las funciones de los consejos indígenas, la explotación que se proyecte ejecutar en sus territorios surge como la posibilidad de valorar si una posible intervención de cualquier índole generaría el daño de la integridad económica, social o cultural de las comunidades. Pues la obligación constitucional es que la explotación o intervención se haga “sin desmedro” de sus derechos y realmente quienes mejor saben qué puede dañar o no a su gente y sus valores son las mismas comunidades.

Así mismo, es pertinente tener en cuenta la forma como la jurisprudencia constitucional ha advertido sobre el respeto del territorio en materia indígena. En la Sentencia T-252 de 1998, la Corte puntualizó que la propiedad colectiva “sobre los territorios indígenas reviste la mayor importancia dentro del esquema constitucional, pues resulta ser esencial para la preservación de las culturas y valores espirituales de los pueblos que dentro de ellos se han asentado durante siglos.”

Como medida amplificadora de las garantías contempladas en la Constitución, la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio 169 de la OIT “Sobre Pueblos indígenas y Tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la conferencia general de la OIT, Ginebra 1989”. En dicha norma, entre otros aspectos, se especificó que los gobiernos deberán consultar previamente a los pueblos indígenas y tribales cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Medidas que armonizadas con lo estipulado en el Preámbulo del referido Convenio atienden a la evolución del derecho internacional y a los cambios que padecen los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo, de los cuales no se escapa Colombia en pleno inicio del siglo XXI. En virtud de ello y con el objetivo de materializar las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, al igual que su desarrollo económico, cultural,

social y político, se erige el derecho fundamental de las comunidades indígenas a la consulta previa cada vez que se proyectan medidas administrativas o normativas.

De esta forma, el Convenio 169 contempla el derecho de las comunidades indígenas y tribales de participar en la toma de decisiones que afecten sus territorios, prerrogativa que además contribuye a la protección del patrimonio material e inmaterial del país. En virtud de ello los artículos 6º y 7º del citado convenio establecen lo siguiente:

“ART. 6º— 1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarle directamente;

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan, y

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

ART. 7º— 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.”

De las normas citadas se puede concluir que el Convenio 169 de la OIT es el instrumento a través del cual el Estado colombiano se comprometió con sus habitantes y la comunidad internacional como medio para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y tribales de la Nación a la supervivencia, social, económica y cultural ante la disyuntiva que surge al adoptar medidas administrativas que pueden afectar sus territorios. Instrumento que hace parte del bloque de constitucionalidad.

En virtud de lo expuesto, es pertinente concluir que la Constitución brinda a las comunidades étnicas una protección especial sobre las costumbres, la autonomía y el territorio, salvaguarda que no sólo se extiende y termina en la norma, sino que debe ser prestada de forma efectiva por las autoridades. Desconocer dichas garantías pondría en peligro la identidad de los pueblos étnicos y llevaría a destruir la independencia que las caracteriza, con notorio daño para la conservación y adecuado desarrollo de sus culturas y creencias. Así, si la propiedad colectiva sobre el territorio étnico es un derecho del pueblo respectivo, la regla correlativa es el respeto y defensa por parte de todos los organismos del Estado y por supuesto de los particulares.

4. De la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

En relación con la protección de la riqueza natural y cultural de la Nación, el artículo 8º de la Constitución Política establece como obligación fundamental del Estado y de los ciudadanos velar por el cuidado de las riquezas culturales y naturales de la Nación. Además, en el capítulo de derechos colectivos (arts. 79 y 80 C.P.) y obligaciones específicas (art. 95-8 C.P.), se fijan los patrones generales que rigen la relación entre el ser humano y su entorno. En efecto, en los referidos artículos se consigna una atribución en cabeza del Estado y de todos los habitantes de proteger el medio ambiente con el fin de prevenir y controlar los factores de deterioro del medio procurando su conservación, restauración, sustitución y desarrollo sostenible.

De esta forma, la disposición y explotación de los recursos naturales no puede traducirse en perjuicio del bienestar individual o colectivo, ni tampoco puede conducir a un daño o deterioro que atente contra la diversidad y la integridad del medio ambiente como un todo. Por ello, el desarrollo sostenible, la conservación, restauración y sustitución, hacen parte de las garantías constitucionales para que el bienestar y el quehacer productivo-económico del ser humano se efectúe en armonía y no a costa o en perjuicio de la naturaleza.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los distintos principios, valores, deberes y obligaciones que la Constitución contempla en materia de protección de la riqueza natural y cultural, la jurisprudencia de esta Corporación ha implementado una interpretación sistémica basada en los postulados que la Carta contiene en materia ecológica, ambiental y

cultural. De una parte, a esta construcción se le ha llamado la Constitución ecológica, verde o ambiental; y de otra la Constitución cultural.

4.1. Constitución ecológica o ambiental.

Sobre la naturaleza ambiental de la Carta, es pertinente tener en cuenta que la Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa y material de la sociedad con el medio. Por ello, la protección del medio ambiente en su conjunto ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que es plausible afirmar que la Carta contiene una verdadera "Constitución Ecológica", conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente.

En el anterior sentido la Corte en Sentencia C-126 de 1998, precisó la triple dimensión que la Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano, en los siguientes términos:

"De un lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la Constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares."

Incluso, en varias ocasiones, la Corte ha insistido en la importancia que reporta el medio ambiente para el bienestar general, al punto de establecer deberes calificados de protección que permitan brindar un nivel de vida digno, tanto a la sociedad como el individuo, que contribuyan al pleno funcionamiento del Estado.

Así, dados los factores perturbadores y el riesgo que enfrenta el medio ambiente que le ocasionan daños irreparables e inciden nefastamente en la existencia de la humanidad, la Corte ha sostenido el carácter de derecho fundamental por conexidad, al resultar ligado indefectiblemente con los derechos individuales a la vida y a la salud de las personas.

Recientemente, esta Corporación ha señalado que "el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con ésta o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie, estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana". Subrayado por fuera del texto original

Ello ha permitido afirmar la importancia de preservar el medio ambiente sano a través de una labor conjunta de todos los responsables. La Corte ha manifestado que la Constitución proporciona una combinación de deberes contiguo al reconocimiento de derechos, que permiten advertir una visión del asunto ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico:

"Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la Nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado. En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales."

El ambiente sano, como se ha mencionado forma parte de los derechos colectivos cuya esencia trasciende el concepto de derecho individual para radicarse en el ser social, el cual incumbe, además, a cada una de las esferas que componen el entramado social, de manera que su conservación impone deberes correlativos a los particulares, la sociedad, las empresas, al Estado y la comunidad internacional.

Se acepta al medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas, quienes a su vez se encuentran legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlos y que deben colaborar en su conservación. También como un deber que se le impone a todos y particularmente al Estado:

(i) proteger su diversidad e integridad, (ii) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, (iii) conservar las áreas de especial importancia ecológica, (iv) fomentar la educación ambiental, (v) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, (vi) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, (vii) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente; y (viii) cooperar con otras Naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.

En consecuencia, el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalmente protegido cuya preservación debe procurarse no sólo a través de acciones aisladas del Estado, sino con la concurrencia de los individuos, la sociedad, la empresa y demás autoridades.

Sobre todo, la Corte encuentra indispensable insistir en los criterios manifestados en la Sentencia T-411 de 1992, por medio de la cual se dio inicio en la jurisprudencia colombiana al concepto de Constitución ecológica:

"La protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad universalmente reconocida, una necesidad socialmente sentida, de dar una respuesta contundente a las intolerables agresiones que sufre el medio ambiente.

El desarrollo sin planificación y los avances científicos fueron ampliando considerablemente el impacto industrial en el entorno.

El problema ecológico y todo lo que este implica es hoy en día un clamor universal, es un problema de supervivencia.

Para esta Sala de Revisión, la protección al ambiente no es un "amor platónico hacia la madre naturaleza", sino la respuesta a un problema que de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica cuestión de vida o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la progresiva desaparición de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas grandes ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el efecto invernadero, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el uso de productos químicos, los desechos industriales, la lluvia ácida, los melones nucleares, el empobrecimiento de los bancos genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan vitales que merecen una decisión firme y unánime de la población mundial. Al fin y al cabo el patrimonio natural de un país, al igual que ocurre con el histórico - artístico, pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes.

Este inmenso desafío tiene una dimensión moral y espiritual. La era pasada nos ha enseñado una muy buena lección: el hombre no puede mandar sobre el viento y la lluvia.

El hombre no es el amo omnipotente del universo, con carta blanca para hacer impúnemente lo que desee o lo que le convenga en un determinado momento. Y, como sostiene el humanista Vaclav Havel, el mundo en que vivimos está hecho de un tejido inmensamente complejo y misterioso sobre el cual sabemos muy poco y al cual debemos tratar con humildad.

Entre los habitantes de la tierra, son las tribus indígenas las que aún conservan el respeto por ella; así lo manifestó el Jefe Seattle de las tribus Dwasmich y Suquamech:

"Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos. Todo va enlazado como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado.

Bajo la misma línea argumentativa, la Corte ha evidenciado que:

"el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con ésta o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie, estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana".

Además, la protección del medio ambiente como patrimonio común a toda la humanidad, surge como consecuencia de la degradación de recursos generalmente esenciales (agua, aire, tierra, etc) o de valor difuso (salud humana). El "garantizar la sostenibilidad del medio ambiente" como objetivo de desarrollo del milenio (Meta 7ª) de la Organización de las Naciones Unidas, representa las necesidades humanas y los derechos básicos de todos los individuos del planeta y el no alcanzarlo podría multiplicar el riesgo mundial de inestabilidad y degradación del medio ambiente.

La deforestación global, el cambio climático (emisiones globales de dióxido de carbono CO₂. Sustancias que destruyen la capa de ozono), la pérdida de la biodiversidad que continúa implacablemente, la no protección adecuada de los hábitats de las especies en peligro, el crecimiento de especies en peligro de extinción, la sobreexplotación global, constituye claro ejemplo de ello. La sociedad post-industrial contemporánea que se caracteriza por la economía globalizada ha sido catalogada como una sociedad de riesgo "donde el espacio vital tradicional se reduce drásticamente y es reemplazado por un conglomerado cada vez más complejo de incertidumbres y de peligros para la salud y el entorno (dioxinas, amianto, vacas locas, etc.)".

Así, surgen como principios sustanciales de la política internacional ambiental los de cautela y de acción preventiva, entre otros. La superación de las dificultades para la puesta en marcha de tales principios como otros, evitaría a tiempo numerosos daños irreversibles al medio ambiente y con las consecuencias propias para la humanidad. La aplicación de los principios que inspiran al derecho ambiental, resulta, entonces, imperiosos para la supervivencia de la humanidad.

En conclusión, la relación humana con el medio ambiente no puede continuar siendo antropocentrista, dicho esquema de correlación es el germen de la autodestrucción, por tanto se torna inaplazable y necesario entender que todo está holísticamente enlazado y que la protección, va más allá de la mera normativa y su cumplimiento, puesto que lo que está en juego no es solo la subsistencia de la especie humana, sino la vida como un todo.

4.2. Constitución cultural.

La obligación de protección y defensa del patrimonio cultural de la Nación se edifica como un imperativo para las autoridades públicas e incluso para los particulares. Al respecto, esta Corporación ha sostenido que la identidad cultural es la manifestación de la diversidad de las comunidades y la expresión de la riqueza humana y social, lo cual constituye un instrumento de construcción y consolidación de sociedades organizadas, encaminadas al mejoramiento de sus relaciones.

La cultura fue reconocida por el Constituyente de 1991 como un pilar que requiere especial protección, fomento y divulgación del Estado. Es amplio el conjunto de normas constitucionales que protegen la diversidad cultural como valor fundamental de la nación colombiana, erigiéndose de esta forma el denominado eje de la Constitución Cultural, que al igual que la ecológica parte de una interpretación sistemática, axiológica y finalista, de las varias disposiciones a las que la Corte se refirió en la Sentencia C-742 de 2006:

"(...) el artículo 2º superior, señaló como fin esencial del Estado el de facilitar la participación de todos en la vida cultural de la Nación. Los artículos 7º y 8º de la Carta dispusieron la obligación del Estado de proteger la diversidad y riquezas culturales de la Nación. El artículo 44 define la cultura como un derecho fundamental de los niños. El artículo 67 señalaron que la educación es un derecho que busca afianzar los valores culturales de la Nación. El artículo 70 de la Constitución preceptúa que

el Estado tiene la obligación de promover y fomentar el acceso a la cultura de los colombianos, en tanto que la cultura y/o los valores culturales son el fundamento de la nacionalidad colombiana. En esta misma línea, el artículo 71 de la Constitución dispuso que el Estado creará incentivos para fomentar las manifestaciones culturales. Ahora, la protección de los recursos culturales no sólo es una responsabilidad a cargo del Estado sino que también es un deber de los ciudadanos, en los términos previstos en el artículo 95, numeral 8º, superior. De todas maneras, los artículos 311 y 313, numeral 9º, de la Carta encomiendan, de manera especial, a los municipios, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Por su parte, el artículo 333 superior autorizó al legislador a limitar válidamente la libertad económica cuando se trata de proteger el patrimonio cultural de la Nación. Y, finalmente, con especial relevancia para el análisis del asunto sometido a estudio de esta Corporación, recuérdese que el artículo 72 de la Carta dispuso que “el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, pero que sólo “el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles”

La descripción anterior muestra que, efectivamente, la protección del patrimonio cultural de la Nación tiene especial relevancia en la Constitución, en tanto que éste constituye un signo o una expresión de la cultura humana, de un tiempo, de circunstancias o modalidades de vida que se reflejan en el territorio, pero que desbordan sus límites y dimensiones. Entonces, la salvaguarda estatal del patrimonio cultural de la Nación tiene sentido en cuanto, después de un proceso de formación, transformación y apropiación, expresa la identidad de un grupo social en un momento histórico.

De igual manera, si bien los artículos 8º y 70 superiores consagraron el deber del Estado de proteger las riquezas culturales de la Nación y promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos, no señalaron fórmulas precisas para llegar a ese cometido, de ahí que deba entenderse que el Constituyente dejó al legislador o al ejecutivo a cargo de esa reglamentación.” (Énfasis por fuera del texto original).

De la referencia normativa anterior se aprecia cómo el modelo implementado en la Carta de 1991 propicia el estudio de la Constitución cultural, ámbito dentro del cual se encuentran las ideas, creencias, conductas, mitos, sentimientos, actitudes, actos, costumbres, instituciones, códigos, bienes, formas artísticas y lenguajes propios de todos los integrantes de la sociedad; en otras palabras, de la riqueza cultural de la Nación. En este sentido, es conveniente reiterar lo expresado por esta Corporación en la Sentencia C-639 de 2009, en la que se puntualizó que:

“Con la expresión derechos culturales se designa la subclase de derechos humanos en el ámbito de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que comprende los derechos y libertades fundamentales, los derechos de prestación y las determinaciones constitucionales de los fines del Estado en materia cultural, cuya pretensión es la búsqueda de la propia identidad personal y colectiva que ubique a la persona en su medio existencial en cuanto a su pasado (tradición y conservación de su patrimonio histórico y artístico), presente (admiración, creación y comunicación cultural) y futuro (educación y progreso cultural, investigación científica y técnica, y la protección y restauración del medio ambiente)”.

Concatenado con lo anterior, es adecuado afirmar que el paso hacia un Estado social y democrático de derecho conlleva axiomáticamente el reconocimiento y puesta en marcha de los denominados Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Prerrogativas que encuentran respaldo en herramientas internacionales, las cuales se constituyen en criterios de interpretación relevantes para la determinación de contenido del derecho a la cultura, como la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, adoptada en la Conferencia General de la Unesco el 2 de noviembre de 2001, en la que se reconoce que la cultura está compuesta de formas diversas por medio del tiempo y el espacio, y que esa diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad. Derechos culturales que se reflejan y retroalimentan de los derechos humanos, universales e indisolubles. Sobre el particular, esta Corporación en la Sentencia C-434 de 2010 manifestó:

“(…) la Observación General No. 21 del Comité DESC sobre el derecho de todas las personas a tomar parte en la vida cultural –elaborada en la sesión No. 43 de noviembre de 2009¹, reconoce que la plena promoción y respeto de los derechos culturales es esencial para el mantenimiento de la dignidad humana y para la interacción social entre individuos y comunidades en un mundo diverso y multicultural. Este documento también aclara que del derecho a participar en la vida cultural –artículo 15 del PIDESC– se derivan las siguientes obligaciones del Estado: (i) no obstruir la participación, (ii) asegurar las condiciones para la participación, (iii) facilitar tal participación, y (iv) promover la vida cultural, el acceso y la protección de los bienes culturales. A esto agrega que el derecho a participar en la vida cultural comprende (a) el derecho a participar en la vida cultural, (b) el derecho a acceder a ella, y (c) el derecho a contribuir a su desarrollo. Para terminar, el Comité indica varias condiciones necesarias para la realización del derecho de manera equitativa y sin discriminación: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad (cultural).

De estas disposiciones y documentos se deduce el reconocimiento constitucional del derecho a la cultura, el cual impone al Estado, entre otras, las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar el acceso, la participación y la contribución de todos a la cultura en un plano de igualdad, en el marco del reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y cultural. Estas obligaciones también han sido denominadas derechos culturales.”

En suma, la Constitución cultural es parte sustancial de la configuración del Estado Social y Democrático de Derecho que conlleva el mandato de proteger el derecho a la cultura como una garantía que determina valores y referentes no sólo para quienes hacen parte del presente, sino como un mecanismo de diálogo constante con el pasado y el futuro de las generaciones y su historia.

4.3. De la obligatoriedad de la licencia ambiental y del Plan de Manejo Arqueológico para la protección de bienes de interés cultural.

4.3.1 En armonía con los presupuestos anteriormente expuestos, relativos a la Constitución cultural y ecológica, la Ley 99 de 1993 contempla la obligatoriedad de expedir una licencia ambiental, en los siguientes términos:

“Artículo 50°.- De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.”

En similares términos, el reciente Decreto 2820 de 2010 “por medio del cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”, establece:

“Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental.”

Corresponde expedir dichas licencias al Ministerio del Medio Ambiente, a las corporaciones autónomas regionales y a algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en la referida Ley 99 de 1993.

Adicionalmente, el Decreto 2820 de 2010, en el artículo séptimo, determinó que “estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 8° y 9° del presente decreto.” Los artículos desarrollan los distintos sectores que a manera de referencia son: hidrocarburos, minero, eléctrico, energía nuclear, marítimo y portuario, construcción y operación de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas en los mismos, ejecución de obras públicas, construcción y operación de distritos de riego y/o de drenaje con coberturas superiores a 20.000 hectáreas, producción de sustancias, materiales o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales de carácter ambiental, los proyectos que afecten las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, los proyectos que requieran transvase de una cuenca a otra con corrientes de agua que excedan de 2m³/seg durante los períodos de mínimo caudal, la introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o variedades foráneas con fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción y/o comercialización, entre otras.

De otra parte, la Ley 99 de 1993 establece que en los casos en que estén involucrados comunidades étnicas conforme al artículo 76:

“Artículo 76°.- De las Comunidades Indígenas y Negras. La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, **y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades.**” (Subrayado por fuera del texto original).

Las disposiciones anteriores, relativas a la expedición de la licencia ambiental, no están únicamente enfocadas a la protección de los recursos naturales. No. Para el Legislador cumple doble propósito contemplar la obligatoriedad de que las comunidades étnicas del país se pronuncien sobre la tramitación de licencias ambientales que autorizan la explotación de recursos naturales; ello ligado a la protección no solo de la autonomía de las comunidades tribales sino del patrimonio cultural de la Nación.

En este punto, es indispensable precisar que de allí se refuerza la necesidad de realizar la consulta previa de las comunidades étnicas del país y la protección normativa que el Estado brinda al medio ambiente dentro de dichos territorios los cuales en manos de comunidades indígenas o étnicas se encuentran mayoritariamente protegidos por el tipo de vida de bajo impacto ambiental y eminentemente conservacionista.

4.3.2 En lo que hace referencia a la protección de los bienes culturales y a la salvaguarda del patrimonio arqueológico, específicamente el artículo 13 de la Ley 397 de 1997 establece un tratamiento especial a las comunidades étnicas en los siguientes términos:

“ARTICULO 13. DERECHOS DE GRUPOS ETNICOS. Los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica conservarán los derechos que efectivamente estuvieren ejerciendo sobre el patrimonio arqueológico que sea parte de su identidad cultural, para lo cual contarán con la asesoría y asistencia técnica del Ministerio de Cultura.

Con el fin de proteger lenguas, tradiciones, usos y costumbres y saberes, el Estado garantizará los derechos de autoría colectiva de los grupos étnicos, apoyará los procesos de etnoeducación, y estimulará la difusión de su patrimonio a través de los medios de comunicación.”

El Estado protege de forma directa el patrimonio arqueológico de los grupos étnicos permitiendo la conservación de los derechos que ejerzan sobre dichos bienes propios de su identidad cultural, para lo cual cuentan con apoyo y asistencia del Estado.

En armonía con lo anterior, la Ley 1185 de 2008^l establece una medida concreta para la protección del patrimonio arqueológico de la Nación frente a proyectos o ejecución de obras que pretendan explotar los recursos naturales o en general ejecutar obras de impacto en todo el territorio nacional, obligando a todos aquellos proyectos y obras que requieren licencia ambiental a la elaboración de un Plan de Manejo Arqueológico. Por voluntad y decisión del legislador, el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, establece:

“ART. 7°—El **artículo 11 de la Ley 397 de 1997** quedará así:

ART. 11. —Régimen especial de protección de los bienes de interés cultural. Los bienes materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán sometidos al siguiente régimen especial de protección:

1.4. Plan de manejo arqueológico. Cuando se efectúen las declaratorias de áreas protegidas de que trata el artículo 6° de este título, se aprobará por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia un plan especial de protección que se denominará plan de manejo arqueológico, el cual indicará las características del sitio y su área de influencia, e incorporará los lineamientos de protección, gestión, divulgación y sostenibilidad del mismo.

En los proyectos de construcción de redes de transporte de hidrocarburos, minería, embalses, infraestructura vial, así como en los demás proyectos y obras que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental, como requisito previo a su otorgamiento deberá elaborarse un programa de arqueología preventiva y deberá presentarse al Instituto Colombiano de Antropología e Historia un plan de manejo arqueológico sin cuya aprobación no podrá adelantarse la obra.” (Subrayado por fuera del texto original)

Como se puede apreciar, los ámbitos de protección de la riqueza natural y cultural de la Nación establecidos en el artículo 8° constitucional, componen un desarrollo sujeto a la Carta Política y a la ley. En virtud de ello, la Sala encuentra necesario enfatizar en la necesidad de que en los casos que impliquen intervención de los territorios indígenas el tratamiento de la protección del patrimonio arqueológico sea concomitante al dado al de la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.

4.3.3 En este orden de ideas, en los eventos que existan proyectos que requieran de la expedición de la licencia ambiental, será necesario que los interesados presenten para su aprobación un Plan de Manejo Arqueológico fundamentado en un Programa de Arqueología Preventiva; sin la aprobación del antedicho Plan por parte de la autoridad arqueológica competente (**el Icanh**), no obstante exista una licencia ambiental, por expreso mandato de una norma legal que desarrolla el principio de protección del patrimonio y que concreta la protección expresa que da la Carta a los bienes arqueológicos, no podrá adelantarse obra alguna.

5. Tensión entre las distintas visiones de desarrollo y la necesidad de protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.

5.1 No se puede anteponer en abstracto el “interés general” y la visión mayoritaria que se tenga del “desarrollo” o el “progreso” que traen las obras de infraestructura cuando dichas intervenciones se desarrollan en territorios indígenas o étnicos. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte al afrontar la determinación y el ámbito de protección que el Constituyente quiso fijar a los grupos étnicos, ha establecido que a pesar de la sujeción a la Constitución y a la ley es un deber tener en cuenta que el sistema axiológico contenido en la Carta de derechos y deberes, particularmente los derechos fundamentales, constituyen un límite material al principio de diversidad étnica y cultural y a los códigos de valores propios de las diversas comunidades indígenas que habitan el territorio nacional. Es decir al patrimonio cultural de país.

En virtud de lo anterior, la iniciativa estatal y privada deberá propender por el respeto sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas o étnicas de la Nación. Es decir, los proyectos de desarrollo u obras que se planifiquen y pretendan implementar en el territorio no pueden llegar al extremo de hacer nugatorio el contenido de éstas por la simple existencia de la norma legal. Así, el carácter axiológico de la Constitución impone la necesidad de equilibrar la importancia relativa de los valores protegidos por la norma constitucional como la diversidad o el pluralismo y aquellos tutelados por las normas legales imperativas.

De esta forma, se reconoce un ámbito esencial del pluralismo y de la diversidad étnica y cultural propia de los pueblos indígenas y de otras comunidades étnicas, que no puede ser objeto de disposición por parte del ius imperium del Estado, ya que se pondría en peligro su preservación y se quebrantaría su riqueza, la que justamente reside en el mantenimiento de la diferencia cultural y la necesidad del reconocimiento del otro. En virtud de lo anterior, el ámbito de protección de las comunidades étnicas colombianas debe ejercerse, según los usos y costumbres propias de los pueblos objeto de protección, pero respetando las leyes imperativas sobre la materia que protejan valores constitucionales superiores.

En cuanto al reconocimiento de los grupos étnicos en la Constitución, el choque entre las visiones que se pueden tener del desarrollo o progreso y la necesidad de protección de los grupos étnicos, en el seno de las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente el profesor Orlando Fals Borda manifestó:

“Es evidente que estamos frente a un fenómeno nuevo e interesante no solamente en Colombia sino en el mundo hay otra concepción de la vida que está surgiendo entre nosotros y en otras partes que tiende a equilibrar esos efectos deletéreos que ha tenido lo que se llama el desarrollo económico y social cuando se deja a ultranza el desarrollo económico como tal, desarrollo en sí mismo de efectos deletéreos ha llevado a que las comunidades de todos los países vuelvan sus ojos a lo primigenio, a las raíces, a esas raíces que se sienten amenazadas con ese desarrollo desbocado, por esa tecnología amenazante, pues en Colombia llega a este movimiento mundial de defensa de la vida colectiva, de una nueva forma de vivir que apela a una tradición singular que se ha visto conveniente para la sobrevivencia del género humano, y es un fenómeno a escala planetaria no solamente local, ya que esa es la oportunidad que tenemos mis queridos amigos también de que la nueva Constitución de Colombia a las campañas de celebración de los 500 años de descubrimiento de América haciendo una

demonstración de cómo se recupera esa historia viva que todavía está viva entre nosotros, representados por los pueblos que han sido olvidados y explotados, los indígenas y los negros, además de muchos otros pueblos campesinos de la periferia". Subrayado por fuera del texto original

En armonía con lo anterior, es pertinente tener en cuenta el concepto de los Departamentos de Antropología de las universidades de los Andes, de Antioquia y Javeriana allegados al caso que en esta oportunidad ocupa la atención de la Corte. Al respecto manifestó la Universidad de los Andes:

"Aunque se van a cumplir ya 20 años de haber reconocido oficialmente nuestra multiculturalidad y diversidad étnica, lejos estamos de haber asimilado el hecho a cabalidad y de actuar en consecuencia.

Los colombianos deberíamos sentirnos orgullosos de estos pueblos ancestrales cuyos atropellados descendientes aun nos acompañan. Es una lástima que nos acerquemos a ellos para explotar sus riquezas naturales y el paisaje que han conservado y no para aprender de su milenaria sabiduría agonizando junto con sus ancianos. Más aprecian muchos extranjeros el inmenso tesoro mental y cultural que tenemos en nuestro país al reunir tantas visiones alternas de la naturaleza, del universo, de los seres.

La realidad del futuro de las comunidades indígenas no puede plasmarse en leyes, no podemos legislar sobre su pensamiento, imponer nuestras normas salidas de nuestros hábitos y entendimiento del mundo sin haber investigado las de ellos, sin saber cuál es su entendimiento del mundo. Se sabe que nociones como 'tiempo' y 'espacio', 'arriba' y 'abajo' son relativas a cada cultura y dependen de varios factores, desde históricos hasta geográficos.

La visión moderna 'occidental' no debe imponerse arbitrariamente sobre las visiones de sociedades que nos precedieron y que, con seguridad, entienden mejor qué es 'bienestar', qué es 'equilibrio'. Estos pueblos que muchos llamamos 'primitivos' vivieron en armonía con la naturaleza por miles de años hasta la llegada de nuestra tecnificada sociedad moderna. ¿Cómo hablar de nuestro 'progreso' o 'desarrollo' como bienes también para ellos? ¿Les hemos preguntado para ellos qué es 'progreso', 'bienestar', desarrollo? ¿Cómo entenderán ellos términos como 'participación', 'consulta', 'consentimiento', cuando los aplicamos a medias o los amañamos a nuestra conveniencia? Los indígenas deberían participar de los proyectos en sus territorios desde su misma concepción por los interesados, para que entiendan nuestros propósitos y nosotros sus necesidades."

Para la gran mayoría de pueblos indígenas la consulta con ellos significa también consulta con los dioses y consulta con la naturaleza. Entre los u'wa se debe hablar con sus werjays, con el pueblo y sus cabildos. Los caciques a su vez deben comunicarse con los dioses, quienes les indicarán la decisión correcta para que puedan guiar al pueblo. Ésta es su percepción elemental, que por demás se ajusta perfectamente a sus principios culturales.

Con respecto al tema de las interpretaciones y significados que se utilizan en las disposiciones legales y actos administrativos en los cuales se toman decisiones que afectan los derechos de los pueblos indígenas, vale mencionar términos como 'indemnización', que para los empresarios interesados en la explotación de recursos naturales o para el funcionario estatal, tiene un claro significado: 'resarcimiento de un daño o perjuicio; contraprestación económica que se le paga a quien ha recibido un daño o perjuicio, que surge como resultado de una acción voluntaria proveniente del sujeto que lo ocasionó'.

Es improbable que un indígena o una comunidad indígena pueda entender esta definición en el mismo sentido en que lo hace el empresario o el funcionario estatal y también lo es que en su léxico y vocabulario exista con el sentido y significado que éstos le reconocen. Más equitativo y razonable sería que en vez de reconocerle pagos por concepto de 'indemnización' por los perjuicios o daños ocasionados, el Estado dispusiera que las empresas explotadoras de los recursos naturales que se encuentren en territorios indígenas, permitieran la participación de los pobladores nativos en la ejecución de los proyectos y compartieran con ellos, en igualdad de condiciones, los beneficios económicos obtenidos con dicha explotación, propuesta nada descabellada, por cuanto la legislación así lo tiene establecido, en los numerales 1 y 2 del Artículo 15, del Convenio 169 de la OIT. (Rojas S. 2010: 28)"

Bajo postulados similares, es pertinente resaltar apartes de la intervención del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, el cual conceptuó:

"Al referirse específicamente a los conceptos que ofrece el discurso desarrollista, el politólogo James Scott sugiere que codificamos estas actitudes en un léxico cognitivo dividiendo el mundo en entidades/cosas/categorías que nos acercan y otras que no:

[E] léxico utilizado para organizar la naturaleza típicamente revela los intereses dominantes de sus usuarios humanos. De hecho, el discurso utilitario reemplaza el término 'naturaleza' con el término 'recursos naturales', enfocando los aspectos de la naturaleza que puedan ser apropiados para el uso humano. Una lógica comparable extrae de un mundo natural más generalizado aquella flora o fauna que tenga valor utilitario (usualmente bienes comerciables) y, luego, reclasifica aquellas especies que compiten con, atacan o, de algún modo, disminuyen la cosecha de las especies valuadas. Así, matas que tengan valor llegan a ser 'cultivos', las especies que compiten con ellas son estigmatizadas como 'hierbas malas' y los insectos que las ingieren son estigmatizados como 'pestes'. Así, árboles que tengan valor llegan a ser "árboles maderables", mientras especies que compiten llegan a ser 'árboles de basura' o 'maleza'. La misma lógica se aplica a la fauna. Animales de alto valor llegan a ser 'caza' o 'ganado', mientras los animales que compiten o los cazan son 'predadores' o 'indeseables' (1998:13).

Se puede llevar este argumento hacia otras perspectivas que vinculan los diferentes actores involucrados en el caso de consulta previa, donde el sesgo que clasifica la naturaleza como un recurso para desarrollar también impone valores a los diferentes actores, de acuerdo con su cercanía o no a los criterios con los que operan el estado y la sociedad mayoritaria en cuanto a los conceptos de "desarrollo", "progreso", e incluso "cultura" y "sociedad". Es un argumento sutil, pero en casi todos los casos, los significados privilegiados de estos conceptos son los del Estado y de la sociedad mayoritaria, porque los criterios de

definición y de medición surgen de la legislación del Estado y del concepto de un bien común exclusivo y excluyente a otras epistemologías. Cuando se considera la perspectiva étnica, hay una mirada reduccionista, donde la cosmovisión, la territorialidad, la ecología, e incluso la misma identidad construida por el otro son criticadas por esencialistas y por su incapacidad para compartir la ideología desarrollista de la sociedad mayoritaria. Esta perspectiva desconoce el mismo proceso esencialista en la formación de una identidad nacional.

Los antropólogos Alberto Arce y Norman Long hablan de la representación de estas identidades por parte del Estado y la sociedad cuando sugieren que el “carácter contradictorio de los discursos occidentales sobre modernidad y globalidad, que prometen acceso a nuevas formas de conocimiento y recursos, terminan frecuentemente negando la capacidad de grupos locales de pensar, argumentar y actuar por sí mismos” (2000:2). Según Bielawski (1996:226), son discursos que descontextualizan los conocimientos locales –las epistemologías locales– y que “extraen” datos locales para colocarlos en categorías “científicas”. El otro étnico y de población vulnerable llega ser una construcción social y legislativa, pero desde la sociedad mayoritaria y desde categorías preconfiguradas de la otredad y no desde una autonomía propia que dialoga con la sociedad mayoritaria.

Parte del problema es que la consulta previa es un derecho de carácter especial otorgado a los grupos étnicos por precondiciones sociales e históricas relativas a su carácter de pueblos originarios históricamente discriminados, y no un derecho otorgado por ser un colombiano con una epistemología distinta pero legítima, que juega en iguales condiciones con la dominante. Debido a esto, cuando el indígena, el afrodescendiente u otro miembro de población vulnerable pretende hacer valer su derecho a ser consultado, se ve en la necesidad de encajar dentro de las categorías, construidas por la sociedad mayoritaria, que los clasifican como “otros”, “exóticos”, como condición para reconocerlos como interlocutores de carácter especial en el discurso nacional frente a cuestiones que nos preocupan a todos, incluyendo el desarrollo, los usos del suelo y de los recursos naturales, en vez de ser participantes ciudadanos en iguales condiciones en un país pluriétnico y multicultural, en el que esas epistemologías diversas también deben ser parte de la construcción de nación.”

Por su parte, el Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana, presentó los siguientes argumentos para abordar la discusión de la tensión entre las distintas visiones de desarrollo, así:

“Existen argumentos antropológicos de peso para argumentar la necesidad del reconocimiento al derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, establecido en el Convenio 169 de la OIT, o ley 21 de 1991 en Colombia.

El antropólogo norteamericano Thayer Scudder, del California Institute of Technology, ha conducido numerosas investigaciones sobre el impacto de los proyectos de desarrollo en la desaparición de los pueblos indígenas de diferentes países del África. Este investigador señala que:

“Los grandes proyectos son impuestos desde arriba; son impuestos por agencias nacionales o regionales sobre una población local, la cual prácticamente no tiene ninguna capacidad de opinión o decisión durante la etapa de estudios de factibilidad, planeación e implementación” (Scudder 1973:45).

Sus investigaciones en Zambia y Rodhesia, Ghana, Egipto, Nigeria y Costa de Marfil, le han llevado a establecer que, en lo referente a las represas hidroeléctricas: independientemente de que lo sepan o no los gobiernos desatan una serie de eventos que alterarán significativamente el medio ambiente físico y biótico... De la misma forma, ciertos aspectos de la vida de la población local sufrirán cambios... Cientos de profesionales, técnicos y miles de trabajadores entrarán a áreas que, por lo general, han permanecido prácticamente aisladas, con una población local viviendo en comunidades relativamente autocontenidas y autosuficientes. La mayoría de los trabajadores (y es característico que sólo una pequeña proporción de ellos sea proveniente de la población local) se establecerá en el área, aunque cientos y a veces miles de otros participarán en la deforestación y la construcción de carreteras para facilitar la reubicación. (Scudder 1968:168-169).

“Pero independientemente de las intenciones de los gobiernos, la fuerza de trabajo atraerá comerciantes, profesores, misiones evangelizadoras y las nuevas carreteras abrirán áreas para incrementar el contacto con el mundo externo. Sin duda, al cabo de pocos años la población local se verá incorporada en una muy gran medida dentro de un marco de referencia político-económico nacional” (Scudder 1968:169).

La consecuencia de estos cambios, según las investigaciones de Scudder, es la incapacidad de creación de tecnologías compatibles con las formas de vida tradicionales y la cultura de los pueblos indígenas. En palabras de Scudder:

“La simplificación de una institución relativamente rígida (en este caso los rituales agrícolas) o del sistema social, tal vez facilite a la población a cambiar eventualmente a nuevas formas de comportamiento. En el caso de la relocalización compulsiva [la consecuencia directa de la imposición de un proyecto de desarrollo en un territorio tradicional indígena], el término ‘eventualmente’ adquiere un significado mayor, puesto que yo he planteado la hipótesis según la cual, la capacidad de innovación se reduce durante el periodo de transición. Durante este tiempo, el cese permanente o temporal de ciertos patrones de comportamiento puede suponerse como la causa de tensiones posteriores” (Scudder 1973:55).

En resumen, según Scudder, la capacidad inventiva y adaptativa de los pueblos indígenas se ve reducida, cuando no desaparece, como resultado de los cambios producidos por la imposición de proyectos de desarrollo (Scudder 1973:54).

Las observaciones de Scudder se basan también en los primeros trabajos del antropólogo Clifford Geertz, en especial aquellos que analizan la involución de las formas de producción agrícola como resultado de la imposición de proyectos de producción a los pueblos indígenas de Indonesia, por parte del gobierno Holandés, durante el periodo de colonización holandesa.

En el caso de Colombia, situaciones similares han sido documentadas sobre el caso de la imposición de proyectos de desarrollo a los pueblos indígenas.

Uno de los trabajos más amplios en este sentido fue publicado por el Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN, en el año de 1995.

En referencia a los proyectos de construcción de carreteras en la región amazónica, el investigador Hernando Muñoz plantea que, aunque las carreteras no impliquen grandes proyectos de infraestructura, justamente su frecuencia implica un impacto social, económico y ambiental tan grande como aquella de las represas hidroeléctricas o los complejos de extracción petrolera y minera, a los cuales están asociadas las carreteras. Estos proyectos se convierten en una amenaza tanto para el ecosistema de selva, como para las formas de vida de los pueblos indígenas en tales ecosistemas (Muñoz 1995).

Por lo general, como argumenta Muñoz, las carreteras están relacionadas con proyectos de mayor envergadura. En el caso del Putumayo, las carreteras están relacionadas con la explotación petrolera. Estas carreteras han generado focos de colonización que limitan el espacio vital de los pueblos indígenas de la región amazónica (Muñoz 114).

El proceso de despojo, pauperización y desaparición de los pueblos indígenas amazónicos como resultado de la imposición de la explotación petrolera, ha sido documentado de manera amplia por investigadores como Augusto Gómez (Gómez 2005).

En estos casos es necesario recordar el mayor proceso de desaparición de los pueblos indígenas generado por la economía extractivista del caucho, documentado por Roberto Pineda Camacho en su tesis doctoral. Proceso al cual, el profesor Roberto Pineda Camacho se refiere como un "Holocausto". (Pineda Camacho 1993)

En el caso del pueblo Barí, de la región del Catatumbo, investigadores como el etnólogo Francés Robert Jaulin, han determinado que la imposición de costumbres por parte de la sociedad nacional, a través de la colonización de los territorios indígenas, realizada con el propósito de llevarles a estos el desarrollo, constituye una forma de "etnocidio". Con este término, el autor francés se refiere a la desaparición de un pueblo a través del abandono de sus costumbres y formas tradicionales de vida y pensamiento (Jaulin 1973).

Plasmados los criterios antropológicos por entidades especializadas en la materia, los cuales a juicio de la Corte contribuyen a ampliar la visión sobre el tema de la consulta previa de comunidades étnicas y la necesidad de defensa de sus usos y costumbres, es pertinente tener en cuenta que dentro de las iniciativas de protección estatal, una de las formas de acercamiento y reconocimiento ha sido a través de normativa, complementada de jurisprudencia que ha revestido de derechos y garantías a los grupos étnicos de la Nación. Las falencias y ambigüedades en su implementación al igual que la falta de efectividad de dichos mecanismos debe ser a juicio de la Corte, solucionada, entre otros factores, por mayor participación y margen de decisión de las comunidades étnicas en los distintos ámbitos que los afecten, al punto que bajo su cosmovisión puedan plantear la alternativa menos lesiva que permita la pervivencia física y la integridad cultural de tales pueblos. Alternativas de las que se hará referencia más adelante.

De otra parte, es adecuado tener en cuenta que para el caso colombiano según el informe presentado el 08 de enero de 2009 por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Pueblos Indígenas en Colombia, dentro del seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator anterior, en cuanto a la extensión, adjudicación y problemáticas derivadas con las tierras y los recursos naturales, señaló:

"Durante las últimas décadas, Colombia ha avanzado en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el país. Actualmente existen 710 resguardos indígenas titulados, ubicados en 27 departamentos y en 228 municipios del país, que ocupan una extensión, según el Gobierno, de aproximadamente 34 millones de hectáreas, lo que equivale al 29,8% del territorio nacional."

"Varios representantes de los pueblos indígenas, sin embargo, señalan que una gran cantidad de hectáreas compradas y entregadas no son productivas o no corresponden a las necesidades culturales de los pueblos. Sólo 7,68% de los resguardos indígenas (un espacio de 1.290.000 hectáreas) están en zona de frontera agrícola y estos son habitados por aproximadamente el 65% de la población indígena. El resto de hectáreas se encuentran en zonas de selva Amazónica, sabanas de la Orinoquía y desierto en la Guajira."

Partiendo de la información anterior, ya sea que la ocupación del territorio por pueblos indígenas actualizada sea del 22 o el 29,8 % del territorio nacional, es necesario que el Estado proteja de forma especial las comunidades étnicas allí reconocidas y en proceso de reconocimiento estatal. Por ello, si se tienen en cuenta esos datos oficiales, cerca del 70 % del territorio no está en posesión de comunidades indígenas, zonas en las cuales exceptuando, el de otros grupos étnicos o protegidos por normativas concretas, puede efectuarse bajo un esquema de desarrollo sostenible la explotación de los recursos naturales en un Estado Social y Democrático de Derecho propio de una Constitución ecológica como la de 1991. Por consiguiente, también se hace necesario repensar el tema del desarrollo y la protección de las riquezas naturales y culturales en términos económicos, por lo que es válido preguntarse:

- ¿Cuál es el valor de los ecosistemas y la biodiversidad para el resto de la población en términos de fuentes de agua, aire, descontaminación, etc?

- ¿Son un lujo o un bien natural que busca el equilibrio ante la afectación que se efectúa del medio ambiente en otras zonas del país o del hemisferio?

- ¿Cuánto cuesta descontaminar un río por el tipo de explotación que se usa en la extracción de minerales?

- ¿Se debe proteger el medio ambiente porque se trata de algo bonito o necesario?

- ¿Proteger las comunidades étnicas es un fin indispensable o dispensable?

- ¿Por medio de los conocimientos de las comunidades étnicas y la forma de interrelación con el medio podemos encontrar fórmulas de no extinción acelerada que la cultura occidental plantea?

- ¿A largo plazo, qué es mejor, la existencia de bienes por regalías y réditos derivados de la explotación de los recursos naturales y culturales, o la existencia y protección de dichas riquezas como un mecanismo de identidad y pertenencia para las generaciones presentes y futuras?

Conforme a los interrogantes anteriores, es plausible responder que el debate en torno al “desarrollo” o el “progreso” en territorios de comunidades étnicas debe analizarse a la luz del desarrollo o progreso propio de los pueblos implicados. En otras palabras, debido al reconocimiento de la cosmovisión o mera visión de los pueblos étnicos frente a lo que suele llamarse de forma abstracta el “interés general”. Por eso, para la Corte se torna indispensable equilibrar el reconocimiento del “otro” y de las “otras” distintas visiones que se puedan tener frente al desarrollo por parte de grupos étnicos que hacen parte de la alteridad y la pluralidad propia de una Nación como la colombiana, con los cuales se tiene el privilegio de coexistir en el mismo territorio.

Por lo estudiado, es necesario que el Estado de forma articulada garantice e incentive la aplicación real y efectiva del derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas, pues ante todo las herramientas que subyacen a la consulta, permiten conciliar posiciones y llegar a un punto intermedio de diálogo intercultural en el que los pueblos ejerzan su derecho a la autonomía con sus planes propios de vida frente a los modelos económicos basados en la economía de mercado o similares.

6. El derecho fundamental de las comunidades étnicas a la consulta previa respecto de obras, proyectos y/o actividades que tengan la potencialidad de afectar sus territorios. Referente jurisprudencial en la materia.

6.1. Jurisprudencia en materia de consulta previa en sentencias de tutela.

6.1.1 La Corte Constitucional en materia de consulta previa en lo referente a explotación de recursos naturales o de afectación de los territorios históricamente habitados por las comunidades étnicas, cuando se proyectan impactos drásticos en sus modos de vida e integridad ante la autorización de medidas administrativas que tienen la potencialidad de afectar o que han afectado sus territorios y con ello su entorno socio cultural. Para ello la Sala hará referencia a las Sentencias T-428/92, SU-037/97, T-652/98, T-634/99, SU-383/03, T-955/03, T-737/05, T-880/06, T-154/09 y T-769/09.

Si bien el precedente que se entra a relacionar (en virtud del caso sometido a revisión), ha sido mayoritariamente aplicado a comunidades indígenas, las reglas jurisprudenciales también son aplicables por analogía a todos los pueblos étnicos que existen en la Nación, tales como la población negra, afrocolombiana, raizal, palenquera e incluso los gitanos (rom).

En la Sentencia T-428 de 1992 la Corte estudió el caso del resguardo indígena de Cristianía, ubicado en jurisdicción del Municipio de El Jardín, Departamento de Antioquia, el cual se veía afectado por la ampliación, rectificación y pavimentación de la carretera que de Remolinos conducía a Jardín en continuación de la “tronal del café”, vía contratada por el Ministerio de Obras Públicas de esa época con un consorcio de ingenieros. En el terreno de la comunidad indígena se presentaba una falla geológica, conocida tanto por las autoridades como por los integrantes de la comunidad, hecho que a juicio de los accionantes no se había contemplado al momento de tomar la decisión administrativa de ampliar la vía en mención.

Después de practicar una inspección ocular en la zona y ante la solicitud de conceptos de expertos, la Corte analizó los temas relacionados con los derechos de los indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente, la incidencia de la ampliación de la carretera en los daños ocasionados, el estudio de impacto ambiental, los perjuicios consumados y la tutela, la protección del interés general, el derecho a la protección de la diversidad étnica y cultural en el que hizo referencia al Convenio 169 de la OIT y al conflicto entre dos intereses generales. Una vez se encontró que las obras que estaban proyectadas no tuvieron en cuenta la consulta de la máxima autoridad indígena del lugar, como lo era el gobernador del Cabildo, la Corte resolvió conceder el amparo solicitado y ordenar “que se mantenga la suspensión de las labores de ampliación de la carretera Andes-Jardín en el tramo que corresponde a la zona afectada, (Km 5+150 a Km 6+200) hasta tanto se hayan hecho los estudios de impacto ambiental y tomado todas las precauciones necesarias para no ocasionar perjuicios adicionales a la comunidad (...)”

De forma posterior, en la Sentencia SU-039 de 1997 la Corte revisó el caso del otorgamiento de una licencia ambiental para la realización de las actividades de prospección sísmica del bloque Samoré, el cual tenía como fin estudiar la existencia de yacimientos petroleros en distintos departamentos del país con proyección de 208.934 hectáreas, las cuales incluían parques naturales y resguardos indígenas. Para la comunidad U'wa la expedición de la licencia ambiental no era procedente en vista de que no se había efectuado el proceso de consulta previa con arreglo a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT y a la ley.

La Corporación abordó los tópicos relacionados con la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas y la protección del Estado a la identidad e integridad étnica, cultural, social y económica; al ejercicio conjunto de las acciones contenciosas administrativas y de la acción de tutela en dichos casos. Una vez encontrado que el procedimiento de la consulta previa no se había efectuado la Sala Plena ordenó “que con el fin de hacer efectivo el derecho fundamental de participación de la comunidad U'wa, conforme al numeral 2 del art. 40 de la Constitución, se proceda en el término de 30 días hábiles, a partir de la notificación de esta sentencia a efectuar la consulta a la comunidad U'wa”.

En el asunto resuelto en la Sentencia T-652 de 1998 la Corte procedió a estudiar el caso de la comunidad Embera-Katio del Alto Sinú, la cual alegaba que en la expedición de la licencia ambiental que autorizó la construcción de la hidroeléctrica Urrá (1) en el río Sinú se había pretermitido el trámite de consulta previa. En esta oportunidad la Corte se pronunció sobre el derecho a la integridad territorial y el dominio sobre el resguardo; el derecho fundamental a la supervivencia del pueblo indígena; a la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y la protección que debe el Estado a la identidad e integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas; la consulta para el llenado y funcionamiento de la represa; el derecho al mínimo vital

y cambio forzado de una economía de subsistencia de bajo impacto ambiental a una agraria de alto impacto y menor productividad; las autoridades Embera-Katio del Alto Sinú y la representación de ese pueblo y sobre las formas tradicionales de organización y cabildos.

Debido a que la obra ya se había ejecutado y a las problemáticas derivadas de la misma, la Corporación resolvió ordenar la indemnización a la comunidad, la unificación del resguardo, la concertación del régimen especial en salud de los afectados, la supervivencia de la comunidad y el etnodesarrollo de los afectados, entre otras medidas.

Posteriormente, en la Sentencia T-634 de 1999 se estudió el caso de la actuación administrativa de la Asamblea Departamental del Cesar, por medio de la cual aprobó la creación del municipio de Pueblo Bello, conformado por unos corregimientos y veredas que a juicio de los indígenas se encontraban dentro de la línea negra o zona teológica de la comunidad Arhuaca. Si bien la Corte reconoció que para la creación de dicho municipio no se consultó previamente con la comunidad, sino que, con posterioridad a la expedición de la ordenanza y por mandato de ésta se hizo un referendo que aprobó la creación del municipio, dicha problemática ya se había ventilado ante la jurisdicción contenciosa administrativa siendo favorable a los indígenas, motivo por el que se denegó el amparo solicitado.

Años después, la Corte retomó el estudio de la consulta previa en estos ámbitos revisando el asunto que dio lugar a la Sentencia SU-383 de 2003, en el que la Organización de los Pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) consideró vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad cultural, a la participación, al debido proceso y al ambiente sano de los pueblos indígenas que representan, en razón que las autoridades accionadas adelantaban en los territorios de los pueblos en mención el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, sin consultarlos previamente y ocasionando un daño ambiental considerable.

Para resolver el problema jurídico planteado la Corte procedió a referirse a la acción de tutela y la acción popular en el ordenamiento constitucional como mecanismo para la protección de los intereses colectivos al medio ambiente y a la salubridad pública; al marco jurídico del derecho de los pueblos indígenas y tribales así como a la consulta previa en el ámbito internacional, interno y a nivel jurisprudencial; al igual que a otros temas propios del caso concreto.

Una vez estudiado el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos en la región amazónica, la Corte ordenó que tenía que ser consultado “de manera efectiva y eficiente a los pueblos indígenas y tribales de la amazonia colombiana sobre las decisiones atinentes al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos que las entidades mencionadas adelantan en sus territorios, en los aspectos que a cada una de dichas entidades compete, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, con plena observancia de los principios y reglas contenidos en el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991.”

Adicionalmente, estimó necesario vincular a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de Nación, para que en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ejercieran la vigilancia respecto del cumplimiento de la decisión.

Posteriormente y relacionado con el tema de la consulta previa en materia de comunidades afrocolombianas, esta Corporación en la Sentencia T-955 de 2003 estudió el caso de la Comunidad Negra de la Cuenca del río Cacarica ubicada en la Reserva Forestal del Pacífico, la cual demandó al Ministerio del Medio Ambiente y otros, por la autorización y tolerancia de las autoridades en la explotación de madera por parte de terceros en su territorio colectivo.

Para resolver el caso sometido a estudio la Corte se refirió a la situación geográfica, a la identificación, representación, desplazamiento y retorno de la comunidad accionante, a las decisiones proferidas en defensa de los derechos fundamentales de las comunidades negras de la Cuenca del río Cacarica, a la posición de la Comisión Especial para la expedición de la Ley 70 de 1993 sobre la explotación maderera en los territorios colectivos de las comunidades negras, al estado de la explotación maderera en el territorio colectivo de la cuenca del río Cacarica, a la dimensión ambiental y de orden público de la controversia.

Fijado lo anterior, procedió a pronunciarse sobre el interés procesal de los accionantes y a la legitimación en la defensa de la diversidad étnica y cultural de la comunidad actora. Igualmente, se refirió a los derechos reconocidos en la Constitución Política a las comunidades negras y al marco jurídico de su derecho a los recursos naturales, a la identidad cultural asociada al territorio colectivo y a las prácticas tradicionales de producción, así como al alcance del derecho de las comunidades negras al territorio colectivo y al disfrute de los recursos naturales.

En cuanto al caso concreto, concluyó la Corporación que los derechos fundamentales de las comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica estaban siendo quebrantados y debían restablecerse por la ausencia de consulta previa en la expedición de las autorizaciones administrativas para explotar los recursos madereros en el territorio colectivo.

En virtud de ello se ordenó al Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Corporación Autónoma para el desarrollo sostenible del Chocó Codechocó que debían: (i) ordenar la suspensión de las explotaciones forestales que se adelantaban en el territorio colectivo de la Cuenca del Río Cacarica y disponer lo necesario para iniciar el proceso de consulta; (ii) consultar con los representantes de las comunidades los mecanismos que se utilizarían para adelantar dicho proceso, con el propósito de reglamentar el aprovechamiento de los suelos y bosques comunitarios de las zonas rurales de los ríos de la Cuenca del Pacífico, con pleno respeto de la identidad cultural asociada al río y a los bosques pantanosos maderables, y (iii) regular y ejecutar, previa concertación con las mismas comunidades, mecanismos de asesoría, capacitación y acompañamiento que les permitan a aquellas beneficiarse efectivamente de prácticas sustentables de explotación forestal y consolidar simultáneamente su proceso cultural.

Posteriormente, en la Sentencia T-737 de 2005 la Corte examinó la problemática relacionada con la decisión administrativa de la alcaldía municipal de Mocoa (Putumayo) que afectaba a la comunidad indígena Yanacona Villamaría de Mocoa, la cual había solicitado a dicha autoridad el cumplimiento con lo señalado en el artículo tercero de la Ley 89 de 1890 relativo al reconocimiento como cabildo. No obstante, dicho funcionario no accedió a tal petición por cuanto previamente ya había

efectuado un reconocimiento a otras autoridades de ese Cabildo Indígena Yanacona Villamaría. El accionante señalaba que dicho “cabildo y autoridades reconocidas” correspondía en realidad a un grupo de familias que se separaron de su parcialidad indígena y que de manera abusiva habían usurpado su nombre y su derecho como cabildo.

La Corte se pronunció sobre la protección constitucional a la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y encontró que en efecto no se había consultado de forma previa por parte del Alcalde de Mocoa a los dos grupos de la misma parcialidad indígena del Pueblo Yanacona, en los términos señalados por la Ley 21 de 1991, por lo que halló vulnerados los derechos a la diversidad e integridad étnica y cultural y al debido proceso de los accionantes. Por ello, ordenó al Alcalde de Mocoa que iniciara el proceso consultivo con la comunidad correspondiente al pueblo Yanacona.

Tiempo después, en la Sentencia T-880 de 2006, la Corporación revisó la decisión de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, por medio de la cual expidió una certificación que negó la presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia de un Pozo petrolero, por lo que con fundamento en ella el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial le concedió a ECOPETROL S.A. licencia ambiental para realizar obras civiles, levantar construcciones y en general adelantar trabajos exploratorios en la vereda El Progreso, corregimiento de La Gabarra, Municipio de Tibú, (Norte de Santander).

Por los motivos expuestos, el Pueblo Indígena Motilón Barí denunció que su territorio estaba siendo intervenido por los estudios en materia de petróleo. La Corte, una vez se refirió a los temas relativos a la procedencia de la acción de tutela, el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, así como la delimitación territorial y explotación de recursos naturales, concedió el amparo y ordenó, entre otros asuntos: (i) la suspensión de los trabajos, hasta que culminara el proceso de consulta previa que debía adelantar el Ministerio del Interior y de Justicia, con miras a dar cuenta de la presencia de pueblos indígenas en la zona de influencia del Pozo Álamo 1; y (ii) que solo podrían reanudarse si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, atendiendo a los resultados de la consulta, así lo dispusiere.

En la Sentencia T-154 de 2009 la Corte revisó el caso de la acción de tutela interpuesta por los Gobernadores de los resguardos indígenas Kogui, Kankuano, Arhuaco y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta en contra los Ministerios del Interior y de Justicia, del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Iconder) y la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira), porque se omitió el proceso de consulta previa al momento de la expedición de la licencia ambiental para la construcción de la presa del cercado y el distrito de riego del río Ranchería.

La Corte se pronunció sobre la protección que debe el Estado a la identidad e integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas; reiteró la jurisprudencia en materia de consulta previa y se refirió a la jurisprudencia Constitucional respecto del principio de inmediatez como requisito de procedibilidad de la acción de tutela. Sin embargo, denegó el amparo solicitado porque si fueron efectuadas las consultas con buena parte de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sumado a ello, encontró que la acción carecía de sustento en la medida que fue interpuesta dos años después de la ocurrencia del acto generador de la consulta que, en todo caso, sí había sido realizada.

Recientemente, en la Sentencia T-769 de 2009 la Corte se pronunció sobre la tutela interpuesta por los miembros de la Comunidad Bachidubi, Resguardo Río Murindó, ante la autorización que se le diera a la Compañía Muriel Mining Corporation para la exploración y explotación de una mina de cobre, oro y molibdeno en los departamentos de Antioquia y Chocó, denominado proyecto Mandé Norte.

La Corte reiteró la jurisprudencia relativa a la protección que debe el Estado a la identidad e integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas por medio de la consulta previa, ante la exploración y explotación de los recursos naturales dentro de los territorios de las comunidades nativas. Analizado el caso concreto encontró que la consulta previa no había sido efectuada a pesar de que se habían iniciado trámites administrativos con un acta de protocolización, ya que las comunidades implicadas no habían tenido la posibilidad de pronunciarse de fondo ante la inminencia de la ejecución del proyecto. En virtud de ello la Corporación ordenó suspender las actividades de exploración y explotación mencionadas hasta que no fuera agotada la consulta y se materializara el consentimiento libre, informado y previo de las comunidades.

Adicionalmente, ordenó a distintos organismos del Estado orientaciones respecto de sus competencias en el caso concreto.

6.1.2 Conclusión. Si bien la metodología de análisis y la solución de los casos concretos ha variado conforme a las exigencias propias de cada asunto, desde el principio se advierte que la Corte le ha dado el tratamiento a la consulta previa de un derecho fundamental, del cual son titulares los grupos étnicos del país y a su vez hacen parte las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y gitanas.

Como se pudo apreciar en la jurisprudencia relacionada, la Corte, salvo por razones de inmediatez o ante la circunstancia de encontrar elementos de juicio que permitan dilucidar que la consulta previa sí se efectuó, ha ordenado mayoritariamente ante la gravedad de las problemáticas estudiadas la suspensión de los proyectos u obras que tienen la potencialidad de afectar o que han afectado territorios de comunidades étnicas hasta que no se garantice el derecho a la consulta previa. Del mismo modo, recientemente se ha ordenado la búsqueda del consentimiento libre, previo e informado. Además, se han adoptado otras medidas como la indemnización y reparación de las comunidades afectadas cuando el daño ha sido ocasionado o cuando se advierte la potencialidad del mismo.

7. De la importancia de lograr el consentimiento libre, previo e informado ante las medidas de intervención en territorios étnicos y el derecho de las comunidades de compartir los beneficios.

7.1 El convenio 169 de 1989 en el artículo 6.1, contempla en materia de consulta previa lo siguiente:

“ART. 6º—1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarle directamente;

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan, y

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.” (Énfasis por fuera del texto original).

En los apartes subrayados de la norma, si bien el Convenio contempla la obligatoriedad de la consulta en un escenario previo a cualquier tipo de intervención en el territorio, se plantea igualmente como una finalidad la de llegar a un acuerdo o conseguir el consentimiento acerca las medidas de impacto.

Del mismo modo, el artículo 16 de la mencionada convención contempla de forma imperativa que el traslado de los pueblos indígenas sólo podrá efectuarse bajo su consentimiento libre, pleno de ilustración y conocimiento de causa, veamos:

“ART. 16. —1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. (Subrayado por fuera del texto original).

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación.

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.”

Por lo anterior, aplicando una interpretación sistemática del Convenio, es posible concluir, como surge a continuación del derecho internacional, que el Estado tiene la obligación de contar con el consentimiento de las comunidades implicadas antes de adoptar cualquier tipo de medida que implique el traslado de la comunidad, ya que esto desconoce al rompe el derecho a la existencia e integridad de las etnias.

En efecto, ante la necesidad de reforzar la protección de los pueblos indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU, estableció:

“Artículo 32

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.” (Subrayado por fuera del texto original).

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.”

Como se observa, el consentimiento hace parte estructural del Convenio 169 de 1989 de la OIT, motivo por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al estudiar el caso Saramaka contra Surinam, desarrolló la importancia de esta prerrogativa de las comunidades indígenas. Ello se apoyó en pronunciamientos del Relator Especial de la ONU para la protección de derechos humanos de los pueblos indígenas en relación con grandes proyectos de desarrollo, al igual que de distintos organismos y organizaciones internacionales que han señalado la necesidad de adicionar a la mera consulta el consentimiento previo, libre e informado. Así, los Estados y las entidades obligadas e interesadas en la protección de los derechos indígenas deberán buscar el consentimiento de los pueblos tribales e indígenas para llevar a cabo planes de desarrollo o inversión que tengan impacto en sus territorios.

El anterior criterio fue acogido por la jurisprudencia de la Corte en la Sentencia T-769 de 2009, en los siguientes términos:

“Frente a lo anterior, esta Corporación aclara que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan mayor impacto dentro del territorio de afrodescendientes e indígenas, es deber del Estado no sólo consultar a dichas comunidades, sino también obtener su consentimiento libre, informado y previo, según sus costumbres y tradiciones, dado que esas poblaciones, al ejecutarse planes e inversiones de exploración y explotación en su hábitat, pueden llegar a atravesar cambios sociales y económicos profundos, como la pérdida de sus tierras tradicionales, el desalojo, la migración, el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, entre otras consecuencias; por lo que en estos casos las decisiones de las comunidades pueden llegar a considerarse vinculantes, debido al grave nivel de afectación que les acarrea..”

No obstante, la Sala no puede dejar pasar por alto que la anterior premisa, plantea varios interrogantes cómo:

i) ¿El consentimiento libre e informado puede traducirse en un poder de veto de las comunidades étnicas a los proyectos de intervención?

ii) ¿El consentimiento sólo se debe buscar en los casos de planes de desarrollo o de inversión a gran escala?

iii) ¿La consulta previa y el consentimiento son las únicas garantías que debe prestar el Estado y sus concesionarios a las comunidades étnicas?

(i) La respuesta al primer interrogante conforme al desarrollo normativo y jurisprudencial actual no es fácil, ya que se está ante una problema de dos extremos difíciles: puesto que de un lado está la consulta previa veto (que estaría dentro de los términos de la Convención pero que genera todo tipo de resistencia) y la consulta previa mera información (que no estaría conforme con la Convención y que con frecuencia es empleada para aparentar un cumplimiento de dicho instrumento). Conforme a lo expuesto, para la Corte el criterio que permite conciliar estos extremos depende del grado de afectación de la comunidad, eventos específicos en que la consulta y el consentimiento pueden incluso llegar a determinar la medida menos lesiva, como medida de protección de las comunidades.

Por ello, todo proceso deberá cualificarse conforme a las características propias de cada caso concreto ya que lo que está de por medio no es sólo la expectativa de recibir ciertos beneficios económicos por un proyecto económico, sino entender y reconocer que lo que está en juego es el presente y futuro de un pueblo, de un grupo de seres humanos que tiene derecho a auto-determinarse y defender su existencia física y cultural, por “absurdas o exóticas” que para algunos puedan parecer sus costumbres y modos de vida.

En este punto, la Corte resalta la necesidad de que la discusión no sea planteada en términos de quién veta a quién, sino que ante todo se trata de un espacio de disertación entre iguales en medio de las diferencias, oportunidad para que los organismos estatales y concesionarios del Estado puedan explicar de forma concreta y transparente cuáles son los propósitos de la obra y la comunidad pueda exponer cuáles son sus necesidades y puntos de vista frente a la misma.

No obstante, los distintos casos que han sido objeto de revisión por parte de la Corte en esta materia permiten concluir que la consulta previa no ha sido llevada ni cumplida con el rigor que merece; puesto que en los casos sometidos a revisión ha sido constante por parte de las entidades accionadas la asimilación del proceso de consulta a un mero trámite de reuniones informales sin articulación ni consideración por los derechos que se encuentran en juego en estos procesos. En esa medida, es imprescindible para este Tribunal que el proceso no se limite sólo a la etapa previa a la intervención en los territorios étnicos, razón por la que se requiere de formulas que permitan equilibrar los fines del Convenio 169 de la OIT y los desarrollos posteriores en la materia.

En virtud de lo expuesto, la Corte encuentra inaplazable que las comunidades afectadas puedan hacer uso de la posibilidad de revisar y poner de presente sus puntos de vista sobre la intervención, no sólo de forma previa sino durante y después de la implementación de la obra o plan de desarrollo. Para ello, conforme a las especificidades y exigencias propias de cada caso, al momento de la consulta inicial se deberán fijar los tiempos de revisión a corto, mediano y largo plazo.

De otra parte, no es plausible pensar en la determinación de un tiempo único para la materialización de la consulta previa y la búsqueda del consentimiento, ya que homogenizar este tipo de procesos desconocería el respeto por las diferencias y circunstancias de las distintas comunidades étnicas. Por ello, el proceso deberá efectuarse desde la etapa de estudios de factibilidad o planeación y no al final, en el momento previo a la ejecución, ya que este tipo de práctica desconoce al rompe los tiempos propios de las comunidades étnicas, situando el proceso de consulta y búsqueda del consentimiento en un obstáculo y no en la oportunidad de desarrollar un diálogo entre iguales en el que se respete el pensamiento del otro, incluido el de los empresarios.

Dichas alternativas se complementan con la posibilidad de que no sólo la comunidad directamente afectada sino la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas contemplada en el Decreto 1397 de 1996, conforme a sus funciones tengan la oportunidad de apoyar y participar de la discusión.

Dicha opción ya había sido esbozada por la jurisprudencia de la Corte en la Sentencia T-382 de 2006, en la que determinó:

“La posibilidad de usar talleres preparatorios en los cuales se informe debidamente cuáles son las medidas normativas a presentar y qué tipo de consecuencias pueden tener éstas sobre cada tribu, para después efectuar la Mesa de Concertación respectiva.

A juicio de esta Sala, frente a este contexto, la acción de tutela procedería para garantizar la socialización efectiva de la información, esto es, teniendo en cuenta los usos y costumbres de cada etnia, y para la realización de una Mesa de Concertación bajo los postulados mínimos del Decreto 1397 de 1996, en la cual se promuevan los mecanismos para intentar llegar a un consenso y se garantice la formación de un consentimiento completo, libre, previo e informado." (Subrayado por fuera del texto original).

Con fundamento en lo anterior, no se puede obligar a una comunidad étnica a renunciar a su forma de vida y cultura por la mera llegada de una obra de infraestructura o proyecto de explotación y viceversa. En virtud de ello, en casos excepcionales o límite los organismos del Estado y de forma residual el juez constitucional, si los elementos probatorios y de juicio indican la necesidad de que el consentimiento de las comunidades pueda determinar la alternativa menos lesiva, así deberá ser.

Lo anterior como manifestación de la protección especial que la Constitución otorga a las minorías étnicas en aquellos proyectos cuya magnitud tiene la potencialidad de desfigurar o desaparecer sus modos de vida, motivo por el que la Corte encuentra necesario que la consulta previa y el consentimiento informado de las comunidades étnicas en general pueda determinar la alternativa menos lesiva en aquellos eventos que: (i) impliquen el traslado o desplazamiento de las comunidades por la obra o el proyecto; (ii) estén relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras étnicas; y/o (iii) representen un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica, que conlleve a poner en riesgo la existencia de la misma, entre otros.

Ahora, en el evento en que se explore la alternativa menos lesiva con la participación de las comunidades étnicas en la construcción de la misma, y de dicho proceso resulte probado que todas son perjudiciales y que la intervención conllevaría al aniquilamiento o desaparecimiento del grupo, prevalecerá la protección de los derechos de las comunidades étnicas bajo el principio de interpretación *pro homine*.

En lo relativo a este punto, el principio de interpretación *pro homine* impone la aplicación de las normas jurídicas que sean más favorables al ser humano y sus derechos; en otras palabras, la imposición de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución. Este principio está contemplado en los artículos 1º y 2º Superiores, puesto que en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho. Así mismo, es un fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, por parte de todas las autoridades de la República en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades.

Lo anterior, halla sustento ante la necesidad de apoyar los procesos de pervivencia que las comunidades étnicas tienen que afrontar en la actualidad, sumado a que los eventos límite señalados por la Corte están armonizados con las recomendaciones contenidas en la declaración del Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, sobre la Ley de consulta previa de los pueblos indígenas u originarios aprobada recientemente por el Congreso de la República del Perú. En declaración del 26 de mayo de 2010, el mencionado funcionario expuso:

"La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala dos ejemplos de situaciones en que el consentimiento es exigible mas allá de ser un objetivo de la consulta: el caso en que el proyecto dé lugar al traslado del grupo fuera de sus tierras tradicionales y los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras indígenas (arts. 10 y 29, párr. 2, respectivamente). El Relator Especial agregaría además, como ejemplo en el que se requiere el consentimiento indígena, el caso de una propuesta de instalación de actividades de extracción de recursos naturales dentro de un territorio indígena cuando esas actividades tuviesen impactos sociales, culturales y ambientales significativos."

(ii) Concatenado con lo anterior, subyace la necesidad de responder la pregunta relativa a si el consentimiento sólo se debe buscar en los casos de planes de desarrollo o de inversión a gran escala. Para la Sala la respuesta es negativa. Conforme a esta providencia toda medida administrativa, de infraestructura, de proyecto u obra que intervenga o tenga la potencialidad de afectar territorios indígenas o étnicos deberá agotar no sólo el trámite de la consulta previa desde el inicio, sino que se orientará bajo el principio de participación y reconocimiento en un proceso de diálogo entre iguales que tendrá como fin el consentimiento, previo, libre e informado de las comunidades étnicas implicadas.

(iii) La consulta previa y el consentimiento no son las únicas garantías que debe prestar el Estado y los concesionarios al momento de considerar los planes de "infraestructura o desarrollo", ya que se debe permitir la participación y compartir de forma razonable los beneficios del proyecto con el pueblo o la comunidad étnica que sea directamente afectada. Este derecho está contemplado en el artículo 15 del Convenio 169 de 1989, en los siguientes términos:

"ART. 15. — 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

"2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades." (Subrayado por fuera del texto original).

La anterior disposición está armonizada con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla la protección del derecho a la propiedad, así:

“Artículo 21.

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.” (Subrayado por fuera del texto original).

En virtud de la normativa anterior y a la luz de la que a nivel interno contempla el derecho a la indemnización según sea el caso concreto, es pertinente tener en cuenta que el uso del territorio no se limita a la grave privación de un título de propiedad sino que se traduce en la imposibilidad de que la comunidad pueda gozar y usar de forma regular el territorio. Por ello, no sólo se debe obtener el consentimiento previo e informado de las comunidades cuando existen planes para llevar a cabo grandes actividades de explotación en territorios indígenas, sino en efecto garantizar que se compartan los beneficios derivados de dicha explotación de forma equitativa.

Del mismo modo, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas sugirió que con el fin de garantizar “los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación con grandes proyectos de desarrollo, [los Estados deben garantizar] una participación mutuamente aceptable en los beneficios [...]”. En este contexto, de conformidad con el artículo 21.2 de la Convención, se puede entender la participación en los beneficios como una forma de indemnización razonable y en equidad que deriva de la explotación de las tierras y recursos naturales necesarios para la supervivencia del pueblo”.

7.2 Conforme a lo expuesto, la intervención del Estado o concesionarios del mismo en territorios de comunidades étnicas debe estar irradiada desde la etapa de planificación o proyección de todo proyecto, obra o actividad no sólo del derecho fundamental a la consulta previa, sino que existe la obligación de estar enfocada en conseguir el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades y pueblos étnicos. Sumado a ello, es preciso insistir en el derecho de compartir los beneficios derivados de los proyectos y obras que impliquen intervención.

8. Requisitos jurisprudenciales para la realización de la consulta previa y la búsqueda del consentimiento libre e informado de las comunidades étnicas.

Requisitos o reglas jurisprudenciales.

8.1 Encuentra pertinente la Sala, conforme a las consideraciones anteriores, reiterar en el caso del derecho fundamental a la consulta previa las reglas jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha determinado para tal fin, al igual que concretar la ampliación del ámbito de protección en materia de participación y búsqueda del consentimiento libre, previo e informado y el derecho a compartir los beneficios de las obras; así como la protección de la riqueza arqueológica de la Nación.

En síntesis, todo tipo de acto, proyecto, obra, actividad o iniciativa que pretenda intervenir en territorios de comunidad étnicas, sin importar la escala de afectación, deberá desde el inicio observar las siguientes reglas:

(i) La consulta previa es un derecho de naturaleza fundamental y los procesos de consulta previa de comunidades étnicas se desarrollarán conforme a este criterio orientador tanto en su proyección como implementación.

(ii) No se admiten posturas adversariales o de confrontación durante los procesos de consulta previa. Se trata de un diálogo entre iguales en medio de las diferencias.

(iii) No se admiten procedimientos que no cumplan con los requisitos esenciales de los procesos de consulta previa, es decir, asimilar la consulta previa a meros trámites administrativos, reuniones informativas o actuaciones afines.

(iv) Es necesario establecer relaciones de comunicación efectiva basadas en el principio de buena fe, en las que se ponderen las circunstancias específicas de cada grupo y la importancia para este del territorio y sus recursos.

(v) Es obligatorio que no se fije un término único para materializar el proceso de consulta y la búsqueda del consentimiento, sino que dicho término se adopte bajo una estrategia de enfoque diferencial conforme a las particularidades del grupo étnico y sus costumbres. En especial en la etapa de factibilidad o planificación del proyecto y no en el instante previo a la ejecución del mismo.

(vi) Es obligatorio definir el procedimiento a seguir en cada proceso de consulta previa, en particular mediante un proceso pre-consultivo y/o post consultivo a realizarse de común acuerdo con la comunidad afectada y demás grupos participantes. Es decir, la participación ha de entenderse no sólo a la etapa previa del proceso, sino conforme a revisiones posteriores a corto, mediano y largo plazo.

(vii) Es obligatorio realizar un ejercicio mancomunado de ponderación de los intereses en juego y someter los derechos, alternativas propuestas e intereses de los grupos étnicos afectados únicamente a aquellas limitaciones constitucionalmente imperiosas.

(viii) Es obligatoria la búsqueda del consentimiento libre, previo e informado. Las comunidades podrán determinar la alternativa menos lesiva en aquellos casos en los cuales la intervención: (a) implique el traslado o desplazamiento de las comunidades por el proceso, la obra o la actividad; (b) esté relacionado con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos

en las tierras étnicas; y/o (c) representen un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica, que conlleve a poner en riesgo la existencia de la misma.

En todo caso, en el evento en que se exploren las alternativas menos lesivas para las comunidades étnicas y de dicho proceso resulte probado que todas son perjudiciales y que la intervención conllevaría al aniquilamiento o desaparecimiento de los grupos, prevalecerá la protección de los derechos de las comunidades étnicas bajo el principio de interpretación pro homine.

(ix) Es obligatorio el control de las autoridades en materia ambiental y arqueológica, en el sentido de no expedir las licencias sin la verificación de la consulta previa y de la aprobación de un Plan de Manejo Arqueológico conforme a la ley, so pena de no poder dar inicio a ningún tipo de obra o en aquellas que se estén ejecutando ordenar su suspensión.

(x) Es obligatorio garantizar que los beneficios que conlleven la ejecución de la obra o la explotación de los recursos sean compartidos de manera equitativa. Al igual que el cumplimiento de medidas de mitigación e indemnización por los daños ocasionados.

(xi) Es obligatorio que las comunidades étnicas cuenten con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en el proceso de consulta y búsqueda del consentimiento. Incluso de la posibilidad de contar con el apoyo de organismos internacionales cuyos mandatos estén orientados a prevenir y proteger los derechos de las comunidades étnicas de la Nación.

Si se tienen en cuenta los presupuestos y factores señalados anteriormente, se espera que el proceso de consulta previa y participación de los grupos étnicos respete de forma integral los derechos en juego en estos tipos de casos, como la subsistencia e integridad cultural de los pueblos étnicos. No obstante, es necesario tener en cuenta que efectuar la consulta previa y buscar el consentimiento informado no justifica la violación material futura de los derechos fundamentales de los grupos afectados por una actuación u autorización administrativa de entidades del Estado o particulares. Circunstancia en la que habrá lugar a la responsabilidad del Estado o de los concesionarios conforme a la normativa interna e internacional.

9. Análisis del caso concreto.

9.1. Introducción.

Como se puso de presente en el planteamiento del problema jurídico de ésta providencia, el motivo que llevó a los representantes de las comunidades Embera Katío de los resguardos Chidima-Tolo y Pescadito, ubicados al norte del Departamento del Chocó, a interponer la presente acción de tutela se derivó de dos problemáticas centrales que consideran que afectan sus derechos fundamentales a la integridad étnica y cultural por la ausencia de consulta previa.

La primera está relacionada con la intervención que se proyecta en partes de sus territorios para la ejecución de obras de infraestructura y explotación de recursos naturales, como: (a) los trabajos correspondientes a la construcción de una carretera que atravesaría los resguardos; (b) el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá; y (c) los trámites relativos a la concesión minera para explotación de minerales.

De otra parte, en cuanto a la segunda problemática manifiestan que por la fragmentación en que fueron reconocidos los resguardos, dicha circunstancia ha facilitado la presencia de colonos que de forma irregular ocupan sus territorios y explotan los recursos naturales ocasionando daños ambientales a zonas del resguardo y aledañas al mismo. Adicionalmente, informan que por la expectativa sobre las obras y la fragmentación del territorio, al igual que la existencia de grupos al margen de la ley, las comunidades se encuentran en peligro de desplazamiento, situación que advierten no ha sido solucionada por parte de los organismos competentes del Estado.

Conforme a lo expuesto corresponde a la Sala resolver: (i) si las conductas desplegadas por las entidades accionadas han desconocido los derechos y garantías constitucionales de las comunidades indígenas accionantes en lo relativo al agotamiento de la consulta previa para la proyección de las obras de infraestructura y la explotación de recursos naturales en sus territorios; y (ii) si se hace necesario asumir medidas relativas al saneamiento de los territorios por la presunta ocupación irregular de los mismos y el presunto peligro de desplazamiento forzado que denuncian.

9.2. Aclaración preliminar.

Antes de entrar a estudiar de fondo el presente caso, es pertinente resaltar que el asunto reviste singular importancia porque se trata de la reclamación que hace un grupo de indígenas sujetos de especial protección constitucional.

Igualmente, lo sometido a revisión presenta relevancia para la economía y “desarrollo” del país por la envergadura y la escala de los proyectos de infraestructura que se pretenden implementar, los que tienen la fuerza de repercutir no sólo en la comunidad indígena accionante sino en los habitantes de los municipios aledaños que se verían implicados por la llegada de las obras y proyectos en términos de acceso al trabajo, vías, energía eléctrica, regalías, integración nacional y latinoamericana, etc.

Como consecuencia de lo anterior, también se encuentra en juego la explotación y desarrollo sostenible de las riquezas naturales y la protección de los bienes culturales de la Nación. Por las razones descritas la Corte procedió a invitar a distintos sectores vinculados con agremiaciones económicas, de desarrollo, mineras y a los departamentos de antropología de todas las facultades existentes en el país sobre la problemática que la Corte entra a resolver.

Además, se ordenó en sede de revisión a todas las entidades implicadas informar a esta Corporación el estado de los proyectos o diligencias que se están adelantando en lo que concierne a lo de su competencia y/o que corresponda con los hechos que dieron lugar a la acción de tutela de la referencia; es decir, en lo relacionado con los proyectos que se desarrollarían en los resguardos. Respuestas que serán tenidas en cuenta en conjunto con lo contestado a los jueces de instancia para resolver el presente caso concreto.

Sumado a ello, se recibieron testimonios de miembros de las comunidades reclamantes y con el consentimiento del pueblo accionante se pudo efectuar una inspección judicial en los resguardos y verificar personalmente el estado de la colectividad y los lugares en que las obras están proyectadas ejecutarse.

Por último, la Corte es consciente de que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, el 6 de marzo de 2009, se pronunció sobre la problemática presentada por los resguardos Chidima y Pescadito, recomendando que se garanticen por parte del poder Ejecutivo colombiano los derechos derivados de la propiedad y la posesión y por tanto se suspendiesen las actividades hasta que no se adelantara la consulta previa de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y se adoptaran medidas relacionadas con la intrusión en el territorio de los resguardos.

9.3. Metodología de resolución del caso.

Debido a la complejidad de lo que es sometido a revisión por la cantidad de entidades accionadas y la variedad de problemáticas que presuntamente afectan el territorio de los accionantes, la Sala abordará el estudio en una primera parte en lo que se refiere a la ejecución de obras de infraestructura y explotación de recursos naturales para evaluar si la consulta previa es necesaria o si fue o no realizada en debida forma: (i) a la construcción de la carretera entre los municipios de Acandí y Unguía; (ii) al proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá y (iii) a los trámites relativos a la concesión para explotación minera.

Posteriormente, se referirá a la problemática denunciada por la presunta fragmentación del territorio, la ocupación por parte de colonos y el peligro de desplazamiento.

9.4. De la construcción de la carretera.

9.4.1 Perspectiva de las entidades accionadas directamente relacionadas con la problemática de la carretera o que intervinieron por este aspecto: Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías (Invias), Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Décimo Séptima Brigada de las Fuerzas Militares, alcaldías de Unguía y Acandí, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, Codechocó y Ministerio del Interior y de Justicia.

-El Ministerio de Transporte manifestó que el adelantamiento de la consulta es de absoluta competencia de las alcaldías de Unguía y Acandí, a través de sus representantes y concejos municipales ya que dicha autoridad sólo revisa los proyectos presentados por los entes territoriales en ese aspecto. Adicionó que la obra pertenece al mejoramiento de una vía en lo concerniente a la conformación de la calzada existente, construcción de alcantarillas y muros, etc., lo cual se traduce en una nueva vía de donde se supone que las consultas, permisos, licencias ambientales y autorizaciones de los concejos municipales ya se habían obtenido.

-El Inviás puso de presente que suscribió convenio interadministrativo número 1991 de 2006 con el municipio de Acandí, quien contrató y ejecutó entre noviembre de 2007 y abril de 2008 obras de mejoramiento de la vía Acandí – Unguía, informando que estas actividades que consisten en afirmado de la vía no requieren consulta previa y que tal como lo solicitó la comunidad en la época de ejecución del contrato, no se intervinieron los 4 kilómetros ocupados por las comunidades accionantes. De otra parte señaló que la fuerza logística de las Fuerzas Militares es la encargada de ejecutar las obras.

-La referida Agencia adscrita al Ministerio de Defensa contestó que ha intentado por distintos medios y recursos una solución para que el proyecto Titumate- Balboa- San Miguel- Acandí, sector K26+00 A K34+700, que corresponde a una vía afectada por la ola invernal, se lleve a cabo con el lleno de los requisitos técnicos legales exigidos en las normas que rigen la materia; labor que a la fecha no ha iniciado por cuanto la Agencia Logística está a la espera de que se cumplan por los directamente responsables y beneficiarios las exigencias de consulta previa, licencia ambiental y diseños técnicos de la vía, que son compromisos ajenos a las obligaciones asumidas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

-La alcaldía de Unguía informó que dentro de los límites de su municipio no se encuentran los resguardos accionados, motivo por el que no era responsabilidad suya agotar la consulta respectiva y no podía ser obligada a suspender la obra en su territorio. El municipio de Acandí no dio respuesta a la presente acción de tutela.

-El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial manifestó que en lo referente a la licencia ambiental la autoridad competente es Codechocó, circunstancia que la Corporación Autónoma ratificó sucintamente en sede de revisión sin informar nada de lo solicitado por esta Corporación en lo que respecta a los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela.

-El Ministerio del Interior y de Justicia informó que el Alcalde del municipio de Acandí, por medio de escrito fechado el 29 de agosto de 2009, solicitó adelantar los trámites necesarios para la realización de la consulta previa, pero que ante la cantidad de procesos vigentes de los sectores minero, petrolero, vial, de parques nacionales, y el insuficiente número de consultores disponibles no ha instado a las comunidades para fijar fecha para una preconsulta. Agregó que no se ha adelantado la consulta en vista que no se ha desarrollado obra alguna respecto de la carretera.

9.4.2 De las respuestas e informes relacionados con anterioridad, la Sala encuentra probado que dentro de las zonas de los resguardos está proyectado realizar el mantenimiento y la construcción de la carretera denominada Titumate- Balboa- San Miguel-Acandí, pero por distintos factores que van desde el orden presupuestal como el técnico no se ha realizado.

En la inspección judicial efectuada por la Corte se pudo verificar que en lo que respecta al resguardo Pescadito el trazado que trae la carretera conectaría directamente con la comunidad, ya que “el proyecto de la carretera intervendría directamente la zona del resguardo ya que pasaría muy cerca del lugar de donde más se concentra población de la comunidad Pescadito. Adicionalmente, el gobernador del resguardo procedió a señalar la montaña y el bosque sur-oriental el cual es considerado por los indígenas como sagrado, ya que es una de las zonas más conservadas del resguardo. Del mismo modo, se

apreció que a tan sólo a 80 metros de donde culmina el camino de herradura, en línea recta éste desaparece ya que variedades de árboles y plantas dificultan la continuidad del camino al punto que lo hace desaparecer.”

En lo concerniente al impacto que pudiese tener la construcción de la carretera en el resguardo Chidima-Tolo, la verificación en la zona fue plasmada en los siguientes términos:

“(…) la carretera retomaría el curso dentro de la zona del resguardo pasando por encima del río Tolo a través de un puente que cruzaría en las partes que constan en las fotografías 62 a 65 de la carpeta 4. Luego, la carretera atravesaría la zona de explotación ganadera del referido colono Torres en sentido occidente sur-oriente para después en forma de U orientarse al norte. Si ello es así, es evidente que buena parte de viviendas del resguardo e incluso la escuela deberían ser reubicadas.

Considerando lo anterior y lo informado por las entidades accionadas en lo de su competencia y de acuerdo con lo verificado por la Corte en la zona, se concluye que la consulta previa no ha sido agotada para la construcción de la carretera. Lo afirmado lo refuerza la propia inspección no consultada con las comunidades indígenas por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas efectuada por vía aérea los días 20, 21 y 22 de mayo de 2009, la cual contó con la participación de representantes de la alcaldía de Acandí y Corpochocó y de la que se concluyó: “(i) la vía hay que construirla en los (4) kilómetros faltantes, por tal motivo requiere la licencia ambiental; además estos mismos 4 kilómetros se evidencia la necesidad de la construcción de un puente de sesenta (60) metros de luz sobre el río Tolo el cual no está contemplado en ningún capítulo del proyecto. 2) no se ha socializado y mucho menos se ha iniciado el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas. 3) No existe información técnica en general del proyecto. Por tal razón se solicitó a la Dirección General de la Agencia logística no iniciar las obras hasta que se hayan aclarado y solucionado los puntos mencionados.”

Conforme a lo anterior y contrario a lo sostenido por los jueces de instancia según a lo informado por las autoridades consultadas, no se trata del mero mantenimiento de la vía, sino de la construcción de la carretera con todo lo que ello implica, por tanto como fue especificado en las consideraciones de esta providencia el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas debe respetarse desde el inicio de todo acto o proyecto que implique la intervención en el territorio. Lo anterior, para que durante toda la etapa de proyección en este caso de la carretera se contemplen a nivel técnico y presupuestal los intereses e inconformidades que puedan manifestar las comunidades potencialmente afectables.

Tanto es así que en la declaración rendida por la señora Rosa Domicó ante la Corte, en el Juzgado Promiscuo Municipal de Acandí, en cuanto a la construcción de la carretera, afirmó:

“yo quiero hablar sobre la carretera, nosotros la comunidad y mi persona no estamos de acuerdo que pase la carretera dentro del territorio de nosotros. PREGUNTADO: ¿Por qué razón? porque automáticamente se pierde nuestra cultura, nuestra tradición, todo, porque la carretera para nosotros trae muchos problemas traerá más soldados, quizá más grupos armados, más personas ingresarán y habrá muchos carros y los olores de la gasolina no son los de nosotros, esa no es la cultura de nosotros, habrá desplazamiento forzado, habrá desaparición de los indígenas y eso es lo que no queremos.”

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo en el informe del proyecto Redes Territoriales de Apoyo a la Gestión Defensorial Descentralizada - Seccional Urabá de los periodos junio de 2008 a 2009, dedicó un detallado capítulo al proyecto de la vía entre Acandí y Unguía precisando que dicho trayecto haría parte de la carretera panamericana y que el trazado según el informe es uno de las once (11) opciones para la construcción de la carretera:

“La construcción de la carretera Acandí – Unguía quedó paralizada a mediados de los años noventa debido a la oposición de las comunidades indígenas de Chidima y Pescadito, toda vez que el trazado de la misma atraviesa por la mitad los territorios de ambas comunidades. Desde ese entonces, las comunidades indígenas, hoy configuradas legalmente como Resguardos, se han opuesto a su terminación pues consideran que lesiona la integridad del pueblo Embera.

A pesar de contar con un título de Resguardo, su derecho al territorio se encuentra en riesgo de ser afectado por el proyecto de construcción de la carretera Acandí – Unguía, cuyo trazo pasa exactamente por la mitad del Resguardo; la comunidad ha informado que las obras de la carretera iniciadas en la década del noventa afectaron parte de sus cultivos y la integridad física y cultural de la comunidad.

El intento de implementación de la carretera generó problemáticas para la comunidad de Pescadito con la división del territorio en dos partes y el daño de cultivos de yuca y arroz durante el proceso de remoción de tierra; el paso de motos y tractores generó pozos de agua y daño en los ríos, lo que a su vez hizo que algunos animales se enfermaran, según se manifiesta en el Resguardo de Chidima.

Las mujeres de la comunidad indígena del Resguardo de Pescadito afirman que el paso de la carretera implica angustia, ya que los niños y las niñas no se encuentran acostumbrados a los carros o las motos y temen que estos puedan atropellarlos. Así mismo, manifiestan que desde su cultura existen ciertas libertades e independencia dentro del territorio del resguardo, que se verían seriamente afectados con el paso constante de personas.

El trazo de la carretera pasa por la mitad de ambos Resguardos y, específicamente, por los lugares donde están asentadas las viviendas de las comunidades. Desde la óptica de las comunidades indígenas, el paso de la carretera implicaría un flujo de personas no indígenas que terminaría por destruir la cultura indígena, ya que las niñas y los niños estarían permanentemente expuestos a la influencia de la cultura occidental. Incluso ahora, manifiestan, debido al flujo permanente de gente extraña las mujeres ya no pueden estar con el pecho descubierto y en las casas han tenido que introducir una característica ajena a la cultura Embera: las habitaciones.

Para las comunidades indígenas de Chidima y Pescadito, la carretera genera destrucción de la naturaleza mediante la tala de árboles para su construcción y la contaminación de quebradas, ríos y del aire que se derivan del paso permanente de vehículos.

Las comunidades indígenas expresan que están de acuerdo con el desarrollo del Darién, - que se presume se lograría con la terminación de la carretera -, no obstante, no están de acuerdo con que el desarrollo afecte sus derechos a la autonomía y al territorio. En este sentido, la Asociación de Cabildos Indígenas Kuna Embera Katio del Darién – ACIKEK –, en comunicado del 13 de febrero de 2009, expresó lo siguiente:

“En esta oportunidad queremos expresar que no estamos en contra del desarrollo y también entendemos la preocupación de algunos sectores sociales por nuestra oposición. Nosotros como pueblos indígenas queremos que haya un desarrollo en la región sin detrimento a nuestros derechos ancestrales y que no atente contra nuestro territorio, sin poner en peligro los procesos socioculturales.

Los municipios de Acandí y Unguía son muy amplios, por lo tanto proponemos que se estudien trazados alternativos de la carretera que no pase por la mitad ni cerca de nuestros territorios.”

Hace 500 años el continente americano era todo de los pueblos indígenas: hoy sólo una pequeña parte nos pertenece y quieren pasar este y otros mega proyectos precisamente por nuestro territorio. Tememos que si lo hacen, las comunidades indígenas estén condenadas a desaparecer.”

En este sentido, es importante precisar que los territorios indígenas se encuentran bordeados por vastas fincas dedicadas a la ganadería extensiva: terrenos planos y desprovistos de árboles por los cuales pueden circular vehículos cuando los propietarios de dichos terrenos lo permiten. De hecho, en estos momentos es posible desplazarse en carro campero desde el poblado de Peñaloza en el sur de Acandí hasta el poblado de Balboa en el norte de Unguía, sin atravesar los territorios indígenas.

Ahora bien, la carretera Acandí – Unguía aparece reseñada como uno de los posibles pasos de la Vía Panamericana (dos de los once tramos posibles atraviesan los municipios de Acandí y Unguía), de forma tal que la obra adquiere unas connotaciones significativamente diferentes a las que se han presentado ante la población cuando se refiere a la construcción de un pequeña vía para unir dos municipios.”

Como se puede apreciar en el informe publicado por la Defensoría del Pueblo, existen alternativas concretas a la elaboración de la carretera tal y como está planteada sin que ello implique necesariamente la puesta en riesgo de las comunidades. Si dichos criterios son tenidos en cuenta antes del inicio de la obra, la consulta previa y la búsqueda del consentimiento, libre, previo e informado dejaría de ser un mero formalismo para materializarse en lo que el Convenio 169 de la OIT busca, que es la protección y participación efectiva de las comunidades étnicas.

No obstante, como quedó fijado en las consideraciones de esta providencia, ante la existencia de alternativas a la construcción de la obra, que implicaría el traslado de la comunidad como pudo ser constatado, la Corte encuentra que en este caso concreto el consentimiento de las autoridades del resguardo tiene el poder de vincular la decisión final en la que primará la alternativa menos lesiva de los derechos étnicos.

9.4.3 En virtud de todo lo expuesto la Corte ordenará al Ministerio del Interior y de Justicia que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie los trámites respectivos al adelantamiento de la consulta previa solicitada por la Alcaldía de Acandí el 29 de agosto de 2009, haciéndola extensiva a todas las partes involucradas en el proceso de planeación y ejecución de la carretera, teniendo en cuenta la búsqueda del consentimiento previo, libre e informado de la comunidad y ponderando las alternativas reales de modificar el trazado de la vía a las opciones descritas en el informe de la Defensoría del Pueblo que reposan en el proyecto Redes Territoriales de Apoyo a la Gestión Defensorial Descentralizada - Seccional Urabá de los periodos junio de 2008 a 2009 y a las que la comunidad y el proceso determinen.

La consulta previa y la búsqueda del consentimiento informado deberán observarse bajo los criterios y garantías descritas en esta providencia. Entre tanto, se ordenará suspender la ejecución de las obras de la carretera denominada Unguía-Acandí ó Titumate- Balboa- San Miguel- Acandí, en el sector K26-00 al K34-700 en el municipio de Acandí, en lo que tenga que ver con el territorio de las comunidades referidas.

9.4.4 En armonía con lo anterior, en vista de que parte del proyecto de la carretera involucra la intervención de cuatro (4) kilómetros que no son de mantenimiento sino de construcción, la Corte encuentra oportuno advertir a la Corporación Autónoma para el Desarrollo del Chocó (Codechocó), que debe abstenerse de expedir licencia ambiental para la construcción de la carretera, sin que se cuente con el agotamiento de la consulta previa en los términos y subreglas fijadas en esta providencia.

9.4.5 Adicionalmente, se ordenará a la alcaldía de Acandí considerar los derechos de las comunidades indígenas de la zona y la importancia de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana en los términos expuestos por la jurisprudencia de esta Corporación. Para materializar lo anterior la alcaldía, por medio de la red de instituciones educativas pertenecientes al municipio, deberá adelantar de forma periódica y constante campañas pedagógicas sobre la materia.

9.5. Del proyecto de interconexión eléctrica binacional entre Colombia y Panamá.

9.5.1 Perspectiva de las entidades accionadas directamente relacionadas con la problemática de la interconexión eléctrica o que intervinieron por este aspecto: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Ministerio de Minas y Energía; Ministerio del Interior y de Justicia e Interconexión eléctrica SA-ESP (ISA).

-El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial informó que las actividades para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, mediciones y señalamientos de puntos geo-referenciados donde se colocarían las torres de transmisión eléctrica no requiere proceso de consulta previa porque, a la fecha, el trámite de licenciamiento ambiental se encuentra suspendido, como quiera que la empresa ISA, no ha presentado Estudio de Impacto Ambiental nuevo. De otra parte, en caso de

presentarse, dicho Ministerio afirma que no otorgará licencia ambiental al proyecto hasta que no se cumpla con el proceso de consulta previa establecido en el Decreto 1320 de 1998.

-El Ministerio de Minas y Energía puso de presente que la entidad encargada de realizar el procedimiento de la consulta previa es la autoridad ambiental, situación que aplica para las obras de infraestructura energética. Adicionalmente, en sede de revisión informó que en la actualidad no se tiene certeza sobre el trazado de la línea y no se sabe con seguridad si las redes y torres van a cruzar los predios de los resguardos indígenas, por lo que aún no es pertinente adelantar la consulta previa. Agregó que la actividad realizada en el campo en el 2007 se tradujo en la marcación de puntos de foto-control en tierra para la toma de fotografías aéreas con la finalidad de determinar posibles rutas de la línea de transmisión, pero que no se trata de la localización de sitios de torre definitivos.

-El Ministerio del Interior y de Justicia manifestó que en la actualidad no se encuentra adelantando proceso de consulta previa alguno con las comunidades de Pescadito y Chidima relacionado con la interconexión eléctrica.

9.5.2 En sede revisión ante la vinculación que se hiciera de la empresa Interconexión eléctrica SA- ESP (ISA), la Corte pudo corroborar que la entidad ha procurado respetar los derechos de las comunidades indígenas implicadas. Incluso en la respuesta allegada a esta Corporación presentó de forma detallada los antecedentes del Proyecto de interconexión eléctrica entre las Repúblicas de Colombia y Panamá. Posteriormente, se pronunció sobre el diagnóstico ambiental de cuyo estudio se identificaron un conjunto de corredores de alternativas factibles ante la presencia de territorios étnicos los cuales son considerados de alta susceptibilidad ambiental para el proyecto.

Allegó imágenes satelitales relativas a los corredores ambientalmente óptimos en la zona donde se localiza el resguardo de Chidima y puede advertirse que por fuera del resguardo se aprecia un área amplia en la cual ISA planea trazar la línea, sin afectar dicho resguardo, en caso de que se decida realizar el proyecto y que se opte por el corredor ambientalmente óptimo.

Agrega que aún no se sabe si el proyecto será llevado a cabo porque no se conoce si es viable, técnica, jurídica y financieramente. Por lo que al no proyectarse que la línea vaya a cruzar por el resguardo de los Embera, no se podría iniciar la consulta previa, situación que hasta el momento no se presentaría. Hizo referencia a la actividad realizada en campo en el año 2007 y a la marcación de puntos de foto-control en tierra para la toma de fotografías aéreas, con la finalidad de determinar posteriormente posibles rutas de trazado de la línea pero sin que signifique la localización de las torres.

La Corte resalta que bajo los principios de participación de la consulta previa y por lo afirmado por los accionantes en la presente acción de tutela ingenieros contratistas de la Empresa de Interconexión Eléctrica –S.A. –ISA solicitaron a Oscar Carupia, en calidad de representante del resguardo, su compañía durante la visita de localización de las coordenadas necesarias para la verificación del estudio de trazado de la línea.

No obstante, a juicio de la Sala no sólo basta solicitar el acompañamiento para realizar mediciones, sino ilustrar de forma clara y concreta cuáles son los motivos de las mediciones y que éstas no necesariamente significan que las torres quedaran dentro del resguardo, tal y como fue esclarecido ante esta Corporación. De lo anterior da cuenta la declaración rendida por el accionante Oscar Carupia en la diligencia adelantada por la Corte en el Juzgado Promiscuo Municipal de Acandí, ante la pregunta que hiciere el representante judicial del Ministerio de Minas y Energía relacionada con los proyectos de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá a lo que el señor respondió:

“cuando entró la medición un muchacho con un señor para ubicaciones de torres o como se llame eso, esto es venimos es para medir, nosotros dijimos como así nosotros no entendemos pero atrás de ellos van a venir muchas gentes que no son de la misma ideología de nosotros, por eso nos afecta en el sentido de que la torre va a estar ubicada en el terreno”

De otra parte, ISA concluye su intervención manifestando que ante la falta de certeza y viabilidad de la obra no sólo por los compromisos del Estado colombiano sino también del panameño debido a las vicisitudes propias de las legislaciones, recursos económicos, territorios y la existencia de comunidades indígenas, la consulta previa se realizaría si el proyecto de interconexión eléctrica Colombia-Panamá llegare a pasar por el territorio de los resguardos accionantes, evento en el que “obviamente se realizaría antes de iniciar cualquier actividad, como expresamente lo señala el acuerdo 169 de la OIT, pues como se señalará a continuación, cuando es inevitable que una línea de transmisión de energía cruce por resguardo indígena, es la misma comunidad en conjunto con ISA quienes definen por donde se podría trazar la línea de transmisión de tal manera que cause la menor afectación a la comunidad, a sus sitios sagrados y a su especial relación con la tierra y su territorio”.

De lo que va de los estudios anexó la imagen siguiente, donde puede observarse el corredor ambientalmente óptimo en la zona donde se localiza el resguardo de Chidima y señala que por fuera del resguardo, a 2 kilómetros del punto de encuentro más cercano se encuentra una amplia área en la cual ISA prepara trazar la línea, sin afectar dicho resguardo, en caso de que se decida realizar el proyecto y que se opte por el corredor ambientalmente óptimo terrestre.

Adicionalmente, se refirió a los antecedentes de ISA en materia de consulta previa, precisando que desde sus inicios la empresa ha contado con la participación de las comunidades que habitan en las proximidades de todos sus proyectos, sean o no grupos étnicos. Al respecto la Corte transcribe lo informado por la empresa con el fin de resaltar el trabajo de la entidad en materia de responsabilidad social empresarial:

“Antes de la expedición del Decreto 1320 de 1998 se afectaron los predios de dos comunidades indígenas y estas participaron activamente en el proceso de definición del trazado de la línea que afectaba su resguardo, pues esta Empresa está convencida que las comunidades tienen el derecho a participar en la gestión ambiental y social de los proyectos desarrollados por ISA, a continuar existiendo sin perder su propia identidad, tienen la facultad de determinar por sí mismos la forma y el ritmo

de su desarrollo y que el derecho fundamental a acceder a los servicios públicos esenciales no puede atropellar los derechos de las comunidades, sino que deben procurar convivir armoniosamente.

En cuanto a las consultas previas con comunidades indígenas, desde la expedición del Decreto 1320 de 1998, se han realizado dos: una con la comunidad de los Pastos, en Nariño y otra con la de los Arhuacos, en el Cesar. En ambos casos, inmediatamente ISA tuvo la certeza de que la línea iba a cruzar por resguardos de estas comunidades indígenas inició los contactos con ellas, con la finalidad de que las mismas participaran en la definición de las rutas de las líneas, para procurar en todo momento no afectar las zonas sagradas de dichas comunidades, pues ISA es consciente de la relación especial que tienen las comunidades indígenas con su tierra y el derecho a la autodeterminación de estas comunidades, los cuales ha respetado en todo momento, prueba de ello es el video que se adjunta.

Es claro, que cuando una línea de transmisión tiene que pasar por el territorio de una comunidad indígena se causa una afectación, es por eso que ISA a pesar de tener más de 24.000 kilómetros de líneas en Colombia, sólo ha afectado el territorio de cuatro comunidades indígenas y sólo porque era imposible evitarlo, pues en el caso de los Pastos, el resguardo era tan grande que no era posible una variante y en el caso de los Arhuacos, porque las dos subestaciones que se pretendían interconectar quedaban dentro del territorio ancestral reconocido por el Estado.

Particularmente, en el caso de los Arhuacos, ellos definieron junto con ISA el lugar en el cual se iba a localizar la subestación dentro de su territorio y al iniciar las excavaciones se encontró un cementerio que no sabían que estaba allí, motivo por el cual ISA inició un proceso de levantamiento arqueológico acompañada de la comunidad, respetando los rituales de los Arhuacos para ello, con el fin de trasladarlos, como consta en el video que se adjunta, donde se documentó todo el proceso de ISA con dicha comunidad indígena para el proyecto de interconexión eléctrica que afectó su territorio.

Nótese entonces, que inmediatamente ISA determina que es inevitable afectar el territorio de una comunidad indígena con una línea de transmisión de energía, inicia un proyecto de participación con la misma, con la finalidad de que sean ellos quienes definan cuáles sitios no pueden ser afectados por considerarlos sagrados. Y en todo caso, como se expresó, esta Empresa procura, si es físicamente posible, evitar siempre el cruce de cualquier proyecto por un resguardo indígena.

Por lo anterior, se reitera, que si eventualmente ISA llega a afectar el resguardo de los Embera o de cualquier comunidad indígena, bien sea con la interconexión Colombia-Panamá o con cualquier línea, inmediatamente se pondrá en contacto con la comunidad afectada, para que en ejercicio de su derecho a la autodeterminación participe activamente en el proyecto determinando el trazado de la línea, para no afectar sus sitios sagrados o de alta importancia para la comunidad.

Es por lo dicho, que ISA no ha desconocido ningún derecho de la comunidad indígena Embera, pues en el caso concreto aún no se ha determinado que la línea vaya a afectar su resguardo; es más, ISA está procurando, en caso de optar por el corredor terrestre, construir la línea en la margen opuesta del Río Tolo, donde cuenta con más de 2 kilómetros de espacio en el punto más estrecho, para evitar afectar a los resguardos de los Embera.” Negrillas del texto original.

9.5.3 Por los argumentos allegados en sede de revisión, la Corte se abstendrá de efectuar orden alguna a las entidades implicadas en el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá. Sin embargo, advertirá a la Empresa de Interconexión Eléctrica ISA que, en el evento de que el proyecto sea viable y si en el proceso de planificación se advierte la potencialidad de afectar a las comunidades étnicas accionantes de inmediato, gestione la participación por medio del proceso de consulta previa en los términos señalados en esta providencia y con mayores prevenciones a las que ha tenido en el pasado en cuanto a la protección de comunidades.

9.6. De la concesión minera en el municipio de Acandí.

9.6.1 Perspectiva de las entidades accionadas directamente relacionadas con la problemática de la presunta explotación minera: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Ministerio de Minas y Energía; Ministerio del Interior y de Justicia e Ingeominas.

-El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial informó que las actividades para licenciamiento ambiental por prospección minera en la zona son de competencia de la Corporación Autónoma del Chocó (Codechocó).

-El Ministerio de Minas y Energía estimó que las actuaciones de la autoridad minera corresponden a Ingeominas, las cuales gozan de presunción de legalidad conforme a las normas que regulan la situación fáctica presentada. Manifestó que la encargada de realizar el procedimiento de la consulta previa es la autoridad ambiental, previamente al otorgamiento de la licencia ambiental, situación que aplica para las concesiones mineras.

-El Ministerio del Interior y de Justicia manifestó en sede de revisión que en la actualidad no se adelanta proceso de consulta previa alguno con las comunidades de Pescadito y Chidima, relacionado con la empresa Gold Plata por explotación minera.

-Por vinculación efectuada en sede de revisión, el Instituto Colombiano de Geología y Minería advirtió a esta Corporación que la información relacionada por los accionantes en la presente acción de tutela corresponde a datos vigentes hasta el 22 de octubre de 2007. Explicó que la explotación minera es una de las (8) fases que legalmente puede contemplar un proyecto minero cuyo alcance está definido en el artículo 39 de la Ley 685 de 2001, según el cual el ejercicio de la minería es libre excepto en los territorios definidos como zonas Mineras para Minorías Étnicas.

Explica que conforme a información obtenida el 20 de mayo de 2010, de la base cartográfica del Catastro Minero, plataforma informática de Ingeominas que controla la especialidad ejercida, en el municipio de Acandí no se reporta la existencia de Zonas Mineras para Minorías Étnicas.

En cuanto a la Empresa Gold Plata, informó que no es titular de derecho minero por lo que no podría efectuar ningún tipo de proyección minera en la zona salvo que fuere contratista de una autorizada. Aunque especificó que en el área de los resguardos Chidima-Tolo y Pescadito:

“hay superposición parcial en alto porcentaje con los títulos mineros de concesión FLD-134 y FLD-135, otorgados a Minerales del Darién SA.”

“Los proyectos mineros que se desarrollarían en área de estos dos resguardos indígenas corresponderían a los que adelantaría la compañía Minerales del Darién, empresa titular de los contratos de concesión FLD-134 y FLD-135, por ser los que se superponen con área de estos resguardos, que básicamente de acuerdo al Objeto Contractual, consisten en adelantar trabajos, para exploración técnica y según resultados, continuar con la explotación económica del yacimiento objeto de aprovechamiento, dentro del área y duración otorgada. A la fecha, ambos títulos se encuentran en la etapa de exploración técnica”.

En lo concerniente a la consulta previa, expuso que no ha intervenido en este proceso por considerar que tal competencia le asiste a la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción con participación del Ministerio del Interior y de Justicia.

Dado que el Ingeominas informó que los títulos mineros con superposición son los de la compañía Minerales del Darién SA, se procedió a tratar de notificar a la empresa de la presente acción de tutela por medio de los autos del 11 de enero de 2011, 08 de febrero de 2011, sin éxito. Motivo por el que en auto del 14 de febrero de 2011 el instituto de minas informa:

“Revisado el Catastro minero Colombiano y los expedientes contentivos de los contratos de concesión FLD 134 y FLD 135, se constató que el título minero No. FLD 134, otorgado en su momento a Minerales del Darién SA., se encuentra caducado e inscrito en Registro Minero Nacional desde el 16 de junio de 2010, en consecuencia actualmente no se presenta superposición con el citado título.”

En lo relativo al contrato de concesión FLD-135, también otorgada a Minerales del Darién S.A, informa: “se encuentra en trámite de elaboración de acto administrativo que declare la caducidad del mismo, ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales”.

No obstante no se informó por otros títulos que se superpongan en el área de los resguardos de las comunidades a los que pertenecen los accionantes.

9.6.2 De lo expuesto por Ingeominas en el presente proceso la Sala encuentra pertinente recordar que la Ley 685 de 2001 autoriza el ejercicio libre de la minería con excepción de los territorios indígenas considerados y declarados zonas Mineras para Minorías Étnicas. A pesar de que en el presente caso el territorio de las comunidades accionadas no se haya declarado como tal, no puede entenderse que ante la existencia de resguardos indígenas se pueda desconocer lo dispuesto en el artículo 330 de la Constitución y el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, referentes al derecho a la consulta previa y al consentimiento informado.

En virtud de lo anterior y de lo precisado por la autoridad minera del país, en la actualidad las concesiones otorgadas a la Compañía Minerales del Darién: si bien la primera FLD-134 se encuentra caduca; lo cierto es que la segunda FLD-135 está vigente, de manera que se mantiene la superposición por esta concesión. Ello significa que se mantiene latente la potencialidad y el riesgo de afectar la cuenca del río Tolo lo que repercutiría de forma negativa a los resguardos Chidima y Pescadito.

Relacionado con lo anterior, de la inspección efectuada por la Corte en los resguardos Pescadito y Chidima de la comunidad Embera se pudo constatar que el río Tolo es parte fundamental de las dos comunidades ya que los principales asentamientos de viviendas y lugares colectivos se encuentran en cercanía de dicho afluente, del cual derivan el líquido vital. En virtud de ello, toda intervención o afectación que pueda tener el río por el tipo de explotación que tiene la explotación de minerales de profundo impacto se hace indispensable desarrollar la consulta previa con las comunidades étnicas afectadas, y desde ya advertir que todo tipo de intervención que se pretenda a futuro en el río, ilustre desde el inicio de cualquier proyecto el alcance de la obra y la búsqueda del consentimiento, previo, libre e informado conforme a las subreglas de esta providencia.

9.6.3 De otra parte de la información allegada en sede de revisión se informa que se presenta explotación ilegal de oro dentro de los territorios, que aunque a finales del año pasado y comienzos de este solo queda una draga en la rivera del río Tolo, esta ha provocado la contaminación en el afluente, con la consecuencia de la disminución de especies, enfermedades en la piel, diarrea, vomito y otras afectaciones de la salud de la comunidad. Si bien a la Sala no le consta lo anterior, es necesario que se investigue la presunta irregularidad por parte del organismo competente.

9.6.4 Conforme a lo expuesto, y dado que la autoridad minera solo informó lo relacionado con los títulos que habían sido otorgados a la empresa Minerales del Darién S.A, ante la falta de certeza de que se estén adelantando otras concesiones que tengan la potencialidad de superponerse en los resguardos del cual se demanda protección y a que se intentó por aviso en un diario de amplia circulación nacional buscar a los terceros indeterminados que se puedan verse afectados por lo decidido por la Corte, entre otros factores por el de la minería, en el entendido que la explotación minera tiene la potencialidad de afectar la integridad y existencia de las comunidades, la Corporación ordenará al Ministerio del Interior y de Justicia, a Ingeominas, a la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que, suspendan todas las actividades de prospección, exploración legal e ilegal o similares en materia minera que se estén llevando a cabo o se vayan a adelantar, en desarrollo de contratos de concesión con cualquier persona que tenga la potencialidad de afectar por este aspecto a las comunidades indígenas Embera Katío Chidima Tolo y Pescadito, hasta tanto se agote el proceso de consulta previa y la búsqueda del consentimiento informado de las comunidades étnicas implicadas, en los términos y subreglas fijadas en esta providencia.

9.7. De la invasión, ocupación ilegal y explotación del medio ambiente y de la omisión estatal de protección ante el peligro de desplazamiento de la comunidad implicada.

9.7.1 Perspectiva de las entidades accionadas directamente relacionadas con la problemática de la presunta omisión estatal de protección y de la ocupación y explotación ilegal del territorio: Ministerio de Defensa; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Corporación Autónoma del Chocó (Codechocó), y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

- El Ministerio de Defensa puntualizó que las fuerzas militares tienen jurisdicción en todo el territorio colombiano y por tanto las tropas no pueden ser retiradas de territorio indígena. Adicionalmente, informó que el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas no es absoluto, por lo que el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas tiene límites. Agrega que la institución ha implementado una política específica de protección a las comunidades indígenas, la cual consta en la directiva permanente Núm. 1630 "Política sectorial de reconocimiento, prevención y protección a las comunidades de los pueblos indígenas".

- El Ministerio de Agricultura sostiene que no ha vulnerado ningún derecho por las razones invocadas ya que el objeto de esa entidad es formular, coordinar y adoptar políticas, planes programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, con el fin de atender necesidades del sector rural y su población.

- El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Codechocó, en sus informes y respuestas a la presente acción de tutela, no hicieron referencia alguna en cuanto a la protección del medio ambiente por la explotación y el daño ambiental ocasionado por los colonos o terceros.

- En sede de revisión la Comisión Colombiana de Juristas allegó información "acerca de nuevas situaciones que atentan contra la vida e integridad personal de los integrantes del Pueblo Embera Katío y Embera Dobida del Norte del Chocó, que habita los resguardos de Chidima y Pescadito".

En el escrito informa del asesinato de uno de los habitantes del resguardo Chidima, el señor Juan Carupia Domicó, en hechos ocurridos el pasado 18 de marzo. En pocas palabras, se informa que la Jurisdicción Indígena en Resolución del 30 de marzo de 2010, se condenó al señor Efraín Cuñapa Domicó miembro del resguardo Chidima por el homicidio referido. En la mentada decisión jurisdiccional indígena se establece que los autores intelectuales o determinadores de dicho homicidio fueron "las autodefensas Gaitanistas que hacen presencia en esta región. Miembros de este grupo fueron quienes entregaron el arma homicida y la recibieron después de haber cometido el crimen por parte de Efraín Andrés Cuñapa", motivo por el que se condenó por parte de la Jurisdicción Especial Indígena en providencia del 30 de marzo de 2010 al indígena Cuñapa a 20 años de prisión sin beneficio de rebaja de pena.

- El Incoder contestó la presente acción de tutela haciendo referencia a que no se le puede reprochar por falencias en la política agraria del país por tales invasiones, puesto que la ocupación ilegal inconsulta de las comunidades atienden a un problema social de distintos niveles el cual es especialmente sensible en el tema de acceso a la propiedad.

Agregó que es el órgano ejecutor de las políticas de desarrollo rural y dentro de su campo de acción para los asuntos étnicos, de conformidad con el Decreto 2164 de 1995, se encuentra la realización de los estudios para proyectar la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas, el reconocimiento de la propiedad de las que tradicionalmente ocupan, la preservación de los grupos étnicos y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Objetivos desarrollados en el marco de los procedimientos de constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos.

Precisó que al momento de la constitución de los resguardos no se evidenció, según los estudios, la presencia de colonos, motivo por el que el Incoder no es el responsable por las invasiones de terceros.

Agrega que conforme al artículo 22 del Decreto 2164 de 1995, está previsto que el manejo del resguardo indígena es del resorte de los cabildos y autoridades. De otro lado, frente a los daños ambientales estima que es la autoridad ambiental la encargada de amparar los requerimientos e intervenir de forma directa el resguardo. Además, que ante las recomendaciones de la comisión de expertos de la OIT, "El INCODER tomó atenta nota en marzo del presente año sobre la situación del pueblo indígena Embera de Chidima – Tolo, del Norte del Chocó afectado por la vulneración de sus derechos sobre el territorio y la participación, por la presencia de colonos ganaderos en las áreas aledañas a sus resguardos".

9.7.2 Descendiendo al análisis de la problemática concreta la Sala encuentra probado que se reconocieron en tres lotes los resguardos indígenas Chidima y en uno el de Pescadito, por medio de las Resoluciones 005 y 007 del 20 de febrero de 2001 del Incora, lo que además ha sido aceptado por las entidades vinculadas al trámite de la tutela.

De la inspección judicial efectuada por la Corte en la zona de los resguardos en cuanto, se constató lo denunciado por los accionantes en los siguientes términos:

"(...) la comisión procedió a trasladarse por otra ruta en sentido sur-occidente para atravesar parte del resguardo Pescadito. Durante el transcurso del camino [se señaló] la zona y la casa ocupada por un presunto colono, la cual consta en las fotografías 66 a 69 de la referida carpeta.

De otra parte, la Corte observa que de acuerdo al informe del Proyecto Redes Territoriales de la Defensoría del Pueblo, al cual se ha hecho referencia, en el aparte dedicado al resguardo de Chidima, la entidad precisa:

"(...) tiene una población total de 85 personas y el territorio titulado está compuesto por tres globos de tierra que suman 4.499 hectáreas otorgadas mediante Resolución del INCORA No. 5 del 20 de Febrero de 2001, constituyéndose en el resguardo más extenso en el Darién colombiano; la comunidad ha solicitado que la titulación se extienda hasta la frontera con

Panamá, toda vez que la parte alta de la Serranía del Darién ha sido usada en forma tradicional por los indígenas tanto para efectos ceremoniales como para la recolección de plantas medicinales que son fundamentales para garantizar el bienestar de la comunidad.”

El derecho al territorio se ha visto afectado por la existencia de colonos con derecho de propiedad privada y derechos sobre mejoras, toda vez que estaban asentados en la zona previamente a la constitución legal del resguardo. A pesar de múltiples solicitudes de la comunidad indígena de Chidima, el Estado no ha realizado el saneamiento del Resguardo, de forma tal que la comunidad pueda gozar de manera plena de su derecho al territorio. Esta situación ha traído consecuencias problemáticas en la medida en que algunos colonos han venido talando bosque con la intención de obtener una mayor retribución económica cuando se haga el cálculo del valor de las mejoras; esta tala de madera se ha realizado sin contar con la respectiva autorización de la autoridad ambiental – Codechocó –, razón por la cual la comunidad de Chidima ha solicitado en varias oportunidades la intervención de dicho ente para que tome las medidas del caso para que se detenga la devastación del bosque. (Subrayado por fuera del texto original).

Adicionalmente, de las pruebas allegadas por los abogados de la Comisión Colombiana de Juristas, se aprecia la investigación adelantada en el año 2008 por los ingenieros Andrea Torres y Ernesto Parra Díaz, denominada “Levantamiento de ocupación del suelo de los resguardos Chidima –Tolo y Pescadito jurisdicción del corregimiento Peñaloza, Municipio de Acandí, Departamento del Chocó”. En dicho estudio se adelantan mediciones verificación de las aéreas de los resguardos, los lotes ocupados, las tierras en reclamación y otros riesgos de ocupación. Se deja constancia de las reuniones adelantadas con los colonos y fotografías detalladas de las zonas que se someten a explotación. Dentro de las recomendaciones efectuadas por la investigación, la Sala resalta:

“mediante reunión realizada con los colonos se evidenció su intención de resolver el problema de las tierras, pues son conscientes que su reclamación no es ante la comunidad indígena sino ante el INCODER que es el encargado de dar solución a tal problema”.

También se distingue la recomendación relativa a conciliar con el hoy fallecido Juan Carupia, en los siguientes términos: “conciliar con el señor Juan Carupia, indígena de la comunidad Chidima Tolo, quien reclama parte de la tierra del lote 1 con el fin de no entorpecer el proceso que se lleva a cabo”. Por último, la investigación “sugiere presionar la adquisición de los predios que se encuentran entre los lotes del resguardo Chidima Tolo por parte de Incoder”.

9.7.3 De las pruebas relacionadas con anterioridad, la Corte encuentra que la omisión del Estado a través de los distintos entes encargados de velar por la integridad no sólo de las comunidades étnicas implicadas sino de la protección del medio ambiente es evidente. Dichas circunstancias están abiertamente relacionadas con presencia de grupos armados y presencia de colonos en tierras baldías, entre otros factores. En virtud de lo referido, la Sala encuentra necesario que se asuma de forma pronta y razonable la solución integral de la problemática referida.

De este modo, como bien lo expuso la representante del Incoder, conforme al Decreto 2164 de 1995, que desarrolló el capítulo XIV de la Ley 160 de 1994, en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional, en el artículo 85 de la referida ley se establece:

“ARTÍCULO 85.- El Instituto estudiará las necesidades de tierras de las comunidades indígenas, para el efecto de dotarlas de las superficies indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo, y además llevará a cabo el estudio de los títulos que aquellas presenten con el fin de establecer la existencia legal de los resguardos.

Con tal objeto constituirá o ampliará resguardos de tierras y procederá al saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por personas que no pertenezcan a la respectiva parcialidad.”

En el mismo sentido, según el citado decreto, le compete adelantar estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras de las comunidades indígenas con el objeto de determinar los diferentes aspectos relacionados con la posesión, tenencia, propiedad, concentración, distribución y disponibilidad de las tierras. Al igual que el uso y aprovechamiento de las que estuvieren ocupando y el cumplimiento de la función social de la propiedad en las tierras de resguardo, conforme a los usos, costumbres y cultura de la respectiva comunidad; la calidad, condiciones agrológicas y uso de los suelos; el tamaño y distribución de la población, su situación socioeconómica y cultural; la infraestructura básica existente, la identificación de los principales problemas y la determinación cuantificada de las necesidades de tierras de las comunidades indígenas. Referencias que permiten al Instituto y demás entidades que integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, obtener una visión clara y precisa de un determinado territorio y de su población, para adoptar y adelantar los programas pertinentes.

Bajo el mismo espíritu, el artículo 5º del referido decreto contempla la procedencia del estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras que se debe adelantar en los procedimientos de constitución, reestructuración y ampliación de resguardos indígenas. El cual especifica que cuando se trata de los procedimientos de ampliación o de saneamiento territorial de los resguardos y reservas indígenas y la conversión de éstas, se procederá a la actualización o complementación de los estudios en aquellos casos en que las necesidades o las conveniencias lo aconsejen.

A juicio de la Sala, atendiendo las recomendaciones de la comisión de expertos de la OIT y la información ampliamente ilustrada en cuanto el peligro de integridad en que se encuentran los resguardos de la etnia Embera Katio de Pescadito y Chidima y los ecosistemas de la zona, se puede concluir que es altamente necesario el estudio de la problemática estudiada por parte del Incoder y demás entidades competentes, en el que se adopten medidas conducentes y efectivas que contribuyan a materializar los derechos de las comunidades indígenas mencionadas, así como la forma más eficiente de proteger los recursos naturales y el medio ambiente en la zona.

9.7.4 En virtud de lo anterior, la Corte ordenará al Incoder que dentro de los (8) días siguientes a la notificación de la presente providencia y en el término de 120 días (tiempo que encuentra sustento en los artículos 10 a 14 del Decreto 2164 de 1995), expida una resolución adecuadamente motivada en la que se determine si hay lugar o no al englobe o ampliación de los resguardos Pescadito y Chidima. En dicho estudio se deberán contemplar las recomendaciones, razones y pruebas expuestas en esta providencia, sumadas a las que necesariamente serán oficiadas por la entidad y allegadas al proceso. De incumplir esta orden, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER– incurrirá en la conducta prevista por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

9.7.5 En lo relativo a la situación de seguridad y necesidad de protección que requieren las comunidades étnicas implicadas en la presente acción de tutela, como fue plasmado en los antecedentes de esta providencia, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de cumplimiento dio traslado a la Sala Quinta de Revisión del informe elaborado por dicha dependencia sobre la situación de las comunidades Chidima y Pescadito en el Darién Chocoano.

El referido informe en particular señala:

“Informe sobre la situación de la comunidad indígena en Chidima

De acuerdo con los informes recibidos por distintas fuentes, la comunidad indígena en Chidima se encuentra actualmente en una situación de alto riesgo. Los siguientes hechos corroboran tal situación:

1) La vulnerabilidad de los líderes en los procesos de resistencia:

- Se ha señalado que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia tienen una lista de personas para asesinar, con los nombres de tres líderes de Chidima. Para la comunidad, el asesinato en marzo de una de esas personas (Juan Carupia) confirma la existencia de tal lista y por ello existe un alto nivel de temor. Adicionalmente el sobrino de otro líder supuestamente identificado en la lista ha sido señalado como informante de las FARC.

- Pescadito, el resguardo vecino lo cual tiene los mismos problemas que Chidima, un líder (Eliécer Chamarro), también fue amenazado en las últimas semanas por cuestiones de tierras/linderos (aunque no por quienes promueven megaproyectos).

- Al parecer las autoridades indígenas han tomado la decisión sacar a Oscar Carupia (uno de los líderes en la "lista") de la zona para garantizar su seguridad.

- La comunidad manifiesta su desconfianza con el Ejército y su capacidad/voluntad de protegerlos, porque se lo ha visto marcando y numerando árboles dentro del resguardo, precisamente por la zona de trayectoria de la carretera.

- Se ha afirmado que existe una campaña para intimidar y desprestigiar la comunidad indígena en la zona, y que ellos no consideran que exista una protección efectiva por parte del Estado.

2) La posibilidad de una fractura dentro de la comunidad:

- Hasta el momento los dos resguardos en Acandí se han opuesto de manera consistente a los megaproyectos. Sin embargo hay factores adicionales que los presionan y limitan sus opciones:

- Presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – Además de las amenazas a los líderes, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia ejercen un fuerte control (económico, político, social) en el municipio. El desarrollo de estos megaproyectos, y la entrada de más negocios a la zona, representan una oportunidad muy valiosa para generar ingresos a través de extorsión. Adicionalmente, dentro del resguardo se han visto funcionarios de una empresa minera (Grupo de Bullet) acompañados por personas desmovilizadas en sus labores de prospección.

- Poderosos terratenientes - En el Darién Chocoano hay más o menos seis personas que tienen la gran mayoría de las tierras, sobre todo para fines ganaderos. Chidima está rodeado por fincas extensivas y la posición de los terratenientes es muy clara: Prefieren que se desarrollen los megaproyectos en territorios indígenas y están a favor de los megaproyectos porque van a aumentar el valor de sus tierras. Sus relaciones, posteriormente y actualmente, con integrantes de las AUC/AGC son ampliamente conocidas.

- Las comunidades vecinas - Tanto los afrocolombianos como los campesinos en la zona están a favor de los megaproyectos y esto favorece el señalamiento de los indígenas como quienes "están en contra al desarrollo", "aliados con la guerrilla", e impiden trabajos que beneficiarían a la población local.

- Las autoridades municipales están a favor de los megaproyectos y hay denuncias sobre el alto nivel de corrupción en Acandí, por lo que no existe un respaldo institucional para adoptar medidas frente a los riesgos para la comunidad Chidima.

- El liderazgo indígena – En los informes se considera que el liderazgo del Gobernador Mayor de Chidima es débil, dado el nivel de desobediencia dentro de la comunidad. Al parecer hay dos grupos informales de liderazgo dentro de la comunidad que son más activos que el Gobernador en términos de movilización comunitaria. Existe algún nivel de tensión entre los dos grupos que puede debilitar la capacidad de la comunidad de estar unida frente los riesgos que hay y facilitar la cooptación de uno de los grupos por parte de los intereses en juego (económicos y de otro tipo). Las tensiones y amenazas también aumentan por las relaciones de algunos líderes con organizaciones sociales y de derechos humanos como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que aumentan posibilidad de más amenazas por parte de las AGC.

- Existe un alto riesgo a la seguridad de los líderes de Chidima, por la posible confluencia entre los intereses económicos y las presiones de las AGC con graves consecuencias para la comunidad, que pueden debilitar la autonomía y la unidad indígena en esta comunidad y en el caso extremo la fractura política y social, de la misma y la dispersión física de la comunidad.”

Conforme a la información trascrita la Sala encuentra necesario implementar como medida urgente de protección que se avance de forma prioritaria en el Plan de Salvaguarda ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, en el que se declaró que el Estado colombiano está en la obligación doble de prevenir las causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, y atender a la población indígena desplazada con el enfoque diferencial que para ello se requiere.

Para ello se ordenó el diseño e implementación del Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados Por el Desplazamiento (incluido el Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Embera), en el cual reposa el cronograma para su implementación y seguimiento, y los componentes de prevención y atención, así como el respeto de los criterios de racionalidad constitucional en las políticas públicas de diversidad etnocultural.

Por tanto, la Corte ordenará al Ministerio del Interior y de Justicia que en el término máximo de dos (2) meses contados a partir de la presente providencia, con la participación de las autoridades mencionadas en el Auto 004 de 2009, es decir, de la Dirección de Acción Social, de la Dirección del ICBF, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Protección Social, del Ministerio de Defensa y de la Dirección del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal-, se priorice en el Plan de salvaguarda étnica de los pueblos identificados en la presente providencia los mecanismos de protección adecuados y efectivos que garanticen la pervivencia de las comunidades. En el cumplimiento de esta orden deberán tener participación efectiva las autoridades de los pueblos indígenas enunciados.

De la misma forma, en dicho proceso se deberá contar con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, y podrá contarse con el de organismos no gubernamentales cuyos mandatos estén orientados a prevenir y proteger los derechos de las comunidades étnicas de la Nación.

9.7.6 De otra parte, se ordenará al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), que dentro de la órbita de sus competencias, pero bajo la filosofía de un trabajo articulado, desplieguen las medidas necesarias para conservar y proteger el medio ambiente en las zonas referidas en esta providencia, en especial verificando de forma exhaustiva el cumplimiento riguroso de los estudios de impacto y diagnóstico ambiental de alternativas ante los proyectos que se planifica implementar en la zona.

No obstante, la Corte enfatiza en que lo que está de por medio es el desarrollo sostenible y el crecimiento económico como un todo; por ello, el ejercicio de la actividad económica debe sujetarse a las normas ambientales expedidas con el objetivo de mantener un medio ambiente sano a través de un desarrollo económico razonable y con el control de las autoridades ambientales. De esta forma también se requiere el compromiso y la responsabilidad social de las empresas, para lo cual es importante aclarar que ser socialmente responsable no se traduce en cumplir únicamente las obligaciones jurídicas, sino que es deseable, dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, que la iniciativa privada vaya más allá del mero cumplimiento de la obligación legal, buscando la retribución al medio o entorno del cual deriva la riqueza económica, es decir, el desarrollo de las comunidades en que se trabaja y mitigar el impacto negativo en las mismas.

En conclusión, no puede tolerarse que el sistema productivo impacte al medio ambiente extrayendo recursos y produciendo desechos de forma ilimitada, y en esto se insiste, lo que se busca es que el desarrollo satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para resolver sus propias necesidades; además, porque lo que se persigue es que la utilización de los bienes ambientales para el consumo no se lleve a cabo incurriendo en deudas sociales para el futuro de las referidas generaciones.

9.7.7 De otro lado, en vista que de los informes y pruebas allegadas al expediente que se revisa no se constata el adelantamiento de medidas que contribuyan a la protección de la riqueza arqueológica posiblemente ubicada en las zonas implicadas y en general por intervenciones y obras de infraestructura de los proyectos estudiados, según las exigencias de la Ley 1185 de 2008 y concordantes, la Corte ordenará al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y a Codechocó abstenerse de otorgar (o revocar si es del caso) la licencia ambiental relacionada con el asunto de la referencia que no cumpla con el requisito previo correspondiente a la elaboración de un programa de Arqueología Preventiva el cual debe presentarse al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), so pena de no poder adelantarse ninguna obra en los términos del artículo 7.1 de la Ley 1185 de 2008.

9.7.8 Teniendo en cuenta ante las respuestas allegadas por parte del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a la presente acción de tutela, y en especial porque afirmó que dicho ente no es el competente para autorizar la licencia ambiental para la construcción de la carretera y la explotación minera denunciadas en los casos estudiados, advierte la Corte que su participación es definitiva e imperativa para la autorización de dicha exigencia legal, motivo por el que la Sala encuentra necesario advertir a dicho Ministerio y a Codechocó que conforme artículo 39 de la Ley 99 de 1993, “Las licencias ambientales para explotaciones mineras y de construcción de infraestructura vial y los permisos y concesiones de aprovechamiento forestal, serán otorgados por el director ejecutivo de la corporación con el conocimiento previo del consejo directivo y la aprobación del Ministro del Medio Ambiente.”

9.7.9 Así mismo, ante la pasividad de la Corporación Autónoma del Chocó (Codechocó) por los tópicos analizados y denunciados en esta acción de tutela, la Sala encuentra pertinente advertir a la entidad que, conforme al artículo 39 de la Ley 99 de 1993, la autoridad además de las funciones propias de las corporaciones autónomas regionales, tiene como encargo principal promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de la región chocoana y su utilización; fomentar el uso de tecnología apropiada y dictar disposiciones para el manejo adecuado del singular ecosistema chocoano y el aprovechamiento sostenible racional de sus recursos naturales renovables y no renovables; así como asesorar a los municipios en el proceso de planificación ambiental y reglamentación de los usos del suelo y en la expedición de la normatividad necesaria para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural de las entidades territoriales.

Del mismo modo se enfatiza en que, conforme a la ley, la entidad tiene como función principal proteger el medio ambiente chocoano como área especial de reserva ecológica de Colombia, de interés mundial y como recipiente singular de la mega biodiversidad del trópico húmedo. En desarrollo de su objeto tiene la obligación de fomentar la integración de las comunidades indígenas y negras que tradicionalmente habitan la región, al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos y propiciar la cooperación y ayuda de la comunidad internacional para que compense los esfuerzos de la comunidad local en la defensa de ese ecosistema único.

9.8. Medidas generales para garantizar el respeto y la protección de las comunidades étnicas de la Nación.

9.8.1 Las órdenes que se adoptarán en la presente providencia tienen dos objetivos. El primero es contribuir a mejorar la situación de desprotección que padecen las comunidades de la etnia Embera asentadas al norte del Departamento del Chocó, por las obras de infraestructura que se proyectan en sus territorios, así como la ocupación de tierras por parte de colonos que a su vez afectan el ecosistema y los recursos naturales de la zona.

Como segundo fin se erige la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a la efectividad de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas en general. Para ello, la Corte encuentra necesario disminuir urgentemente el impacto desproporcionado que las distintas medidas administrativas que autorizan explotación de recursos y obras de infraestructura tienen sobre las riquezas culturales y naturales de la Nación.

9.8.2 Del estudio del caso sometido a revisión, la Sala advierte que uno de los principales rasgos negativos del actuar de las distintas entidades accionadas y encargadas de velar por la protección del territorio de comunidades étnicas y del medio ambiente, es la marcada desarticulación para tratar situaciones como las estudiadas, que claramente tienen núcleos en común. Por lo anterior, en aras de contribuir en la materialización de un esquema de desarrollo sostenible que respete las distintas visiones de desarrollo y la explotación equilibrada del medio ambiente y los recursos naturales, la Corte ordenará al Ministerio del Interior y de Justicia, crear e implementar en el término de ocho (8) meses un mecanismo de información y coordinación que permita articular a todas las entidades involucradas en la presente providencia en lo relacionado con el derecho fundamental a la consulta previa y la consecución del consentimiento libre, previo e informado en los términos y consideraciones de esta sentencia.

En el cumplimiento de la antedicha orden podrán participar las entidades gubernamentales y no gubernamentales que tanto el Ministerio del Interior y de Justicia, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación estimen pertinentes para garantizar y llevar a buen fin el mandato aquí adoptado.

Los principales fines de esta orden están enfocados en asegurar que los proyectos de impacto social y ambiental, relacionados con proyectos de desarrollo o inversión dentro de territorios étnicos, implementen medidas y mecanismos adecuados que minimicen el perjuicio que puedan tener dichos procesos en la capacidad de pervivencia social, económica y cultural de las comunidades étnicas de la Nación. Para ello deberán crear e implementar herramientas que contribuyan de forma efectiva a la consecución del consentimiento libre, previo e informado según las costumbres y tradiciones del grupo étnico determinado, en aquellos casos que: (a) impliquen el traslado o desplazamiento de las comunidades por la obra o el proyecto; (b) estén relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras étnicas; y/o (c) representen un alto impacto social, cultural y ambiental significativo de una comunidad étnica, eventos en que si los elementos probatorios y de juicio así lo indican, el consentimiento pueda determinar la alternativa menos lesiva para las comunidades étnicas.

Igualmente, en que se adopten medidas administrativas necesarias para proporcionar a los integrantes de las comunidades étnicas los recursos efectivos y adecuados contra actos que violen su derecho al uso y goce de la propiedad de conformidad con su sistema de propiedad colectiva. Del mismo modo es indispensable garantizar que los beneficios de las obras y la explotación de los recursos sean compartidos de manera equitativa. Al igual que al cumplimiento de medidas de mitigación e indemnización por los daños ocasionados.

Adicionalmente y dada la información allegada a la Corte relacionada con actos violentos de presión contra miembros de comunidades étnicas por obras y proyectos que requieren consulta previa, las entidades respectivas deberán establecer, como medidas de mitigación, estímulos negativos ante la muerte violenta o desplazamiento de miembros de comunidades étnicas que participen o sean beneficiarios de los mismos, estableciendo como consecuencia incluso la paralización del proceso de consulta e imposibilidad de adelantamiento de la obra o proyecto de intervención. Así mismo, se deberán fijar incentivos positivos relativos a la consecución de buenas prácticas en dichos procesos.

9.8.3 En vista de que se ha constatado la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas accionantes, la Sala encuentra pertinente, como medida de reconocimiento y respeto del grupo indígena accionante y en especial como orden simbólica de reparación y satisfacción, que el Ministerio del Interior y de Justicia coordine y financie la traducción de partes relevantes de la presente sentencia a la lengua Embera y suministre de forma estratégica, dentro de la respectiva etnia, copias de la misma, así como en los organismos educativos que considere pertinente hacerlo.

9.8.4 En armonía con las consideraciones expresadas y ampliamente reiteradas en esta sentencia, la Sala encuentra necesario y urgente que se consolide a nivel normativo y real los derechos de las comunidades étnicas del país por las problemáticas referidas de tiempo atrás; en virtud de ello la Corte exhortará al Congreso y a la Presidencia de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, regulen y a través de sus organismos competentes materialicen el derecho fundamental a la consulta previa y el consentimiento, libre, previo e informado de los grupos étnicos que hacen parte de la Nación.

9.8.5 La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación por medio de sus áreas respectivas, tendrán la obligación de apoyar, acompañar y vigilar el pleno cumplimiento del presente fallo, con el fin de garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos y órdenes adoptadas.

9.8.6 Con el fin de monitorear el cumplimiento de la presente providencia se ordenará al Ministerio del Interior y de Justicia y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial que, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en el término de un (1) año rindan a la Corte Constitucional, un informe detallado del cumplimiento de las órdenes adoptadas en la presente providencia. Sin perjuicio de la competencia que tiene el juez de primera instancia conforme al Decreto 2591 de 1991.

VII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución:

RESUELVE

PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada para decidir el presente asunto.

SEGUNDO.- REVOCAR, dentro del asunto de la referencia, el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa con las comunidades étnicas y a la existencia, autonomía, integridad e identidad cultural y social de tales pueblos, al igual que a la protección de las riquezas naturales y culturales de la Nación.

TERCERO.- ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie los trámites respectivos frente a la consulta previa solicitada por la alcaldía de Acandí el 29 de agosto de 2009, haciéndola extensiva a todas las partes involucradas en el proceso de planeación y ejecución de la carretera, teniendo en cuenta la búsqueda del consentimiento previo, libre e informado de la comunidad ponderando las alternativas reales de modificar el trazado de la vía a las opciones descritas en el informe de la Defensoría del Pueblo que reposan en el proyecto Redes Territoriales de Apoyo a la Gestión Defensorial Descentralizada - Seccional Urabá de los periodos junio de 2008 a 2009 y a las que la comunidad y el proceso determinen.

La consulta previa y la búsqueda del consentimiento informado deberá observarse bajo los criterios y garantías descritas en esta providencia. Entre tanto, se ordena SUSPENDER la ejecución de las obras de la carretera denominada Unguia-Acandí ó Titumate- Balboa- San Miguel- Acandí, en el sector K26-00 al K34-700 en el municipio de Acandí, en lo que tenga que ver con el territorio de las comunidades referidas.

CUARTO.- ADVERTIR a la Corporación Autónoma para el Desarrollo del Chocó (Codechocó) que debe abstenerse de expedir licencia ambiental para la construcción de la carretera, sin que se cuente con el agotamiento de la consulta previa en los términos y subreglas fijadas en esta providencia.

QUINTO.- ORDENAR a la alcaldía de Acandí considerar los derechos de las comunidades indígenas de la zona y la importancia de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana en los términos expuestos por la jurisprudencia de esta Corporación. Para materializar lo anterior la alcaldía, por medio de la red de instituciones educativas pertenecientes al municipio, deberá adelantar de forma periódica y constante campañas pedagógicas sobre la materia.

SEXTO.- ADVERTIR a la Empresa de Interconexión Eléctrica ISA que, en el evento de que el proyecto sea viable y si en el proceso de planificación se advierte la potencialidad de afectar a las comunidades étnicas accionantes, gestione la participación por medio del proceso de consulta previa en los términos señalados en esta providencia, con mayores prevenciones a las que ha tenido en el pasado en cuanto a la protección de comunidades.

SÉTIMO.- ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia, a Ingeominas, a la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial SUSPENDER todas las actividades de prospección, exploración legal e ilegal o similares en materia minera que se estén llevando a cabo o se vayan a adelantar, en desarrollo de contratos de concesión con cualquier persona que tenga la potencialidad de afectar por este aspecto a las comunidades indígenas Embera Katío Chidima Tolo y Pescadito, hasta tanto se agote el proceso de consulta previa y la búsqueda del consentimiento informado de las comunidades étnicas implicadas, en los términos y subreglas fijadas en esta providencia.

OCTAVO.-ORDENAR al Instituto Colombiano de Desarrollo rural (Incoder) que, dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la presente providencia y en el término de 120 días, expida una resolución motivada en la que se determine si hay lugar o no al englobe o ampliación de los resguardos Pescadito y Chidima. En dicho estudio se deberán contemplar las recomendaciones, razones y pruebas expuestas en esta providencia, sumadas a las que necesariamente serán oficiadas por la entidad y allegadas al proceso. De incumplir esta orden, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER– incurrirá en la conducta prevista por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

NOVENO.- ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia que, en el término máximo de dos (2) meses contados a partir de la presente providencia, con la participación de las autoridades mencionadas en el Auto 004 de 2009, es decir, de la Dirección de Acción Social, de la Dirección del ICBF, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Protección Social, del Ministerio de Defensa y de la Dirección del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal-, PRIORICEN en el Plan de salvaguarda étnica de los pueblos identificados en la presente providencia los mecanismos de protección adecuados y efectivos que garanticen la pervivencia de las comunidades. En el cumplimiento de esta orden deberán tener participación efectiva las autoridades de los pueblos indígenas enunciados.

De la misma forma, en dicho proceso se deberá contar con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, y podrá contarse con el de organismos no gubernamentales cuyos mandatos estén orientados en proteger la seguridad y los derechos de las comunidades étnicas de la Nación.

DÉCIMO.- ORDENAR al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), que dentro de la órbita de sus competencias, pero bajo la filosofía de un trabajo articulado, desplieguen las medidas necesarias para conservar y proteger el medio ambiente en las zonas ampliamente referidas en esta providencia, en especial verificando de forma exhaustiva el cumplimiento serio de los estudios de impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas ante los proyectos que se planifica implementar en la zona.

UNDÉCIMO.- ORDENAR al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a Codechocó abstenerse de otorgar (o revocar si es del caso) la licencia ambiental relacionada con el asunto de la referencia que no cumpla con el requisito previo correspondiente a la elaboración de un programa de Arqueología Preventiva el cual debe presentarse al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), so pena de no poder adelantarse ninguna obra en los términos del artículo 7.1 de la Ley 1185 de 2008.###

DUODÉCIMO.- ADVERTIR al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Corporación Autónoma del Chocó (Codechocó), de los deberes y obligaciones que les asiste conforme a las consideraciones plasmadas en los numerales (9.7.8 y 9.7.9) de esta providencia.

DECIMOTERCERO.- ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia, crear e implementar, en el término no superior a ocho (8) meses, un mecanismo de información y coordinación que permita articular a las entidades involucradas en lo relacionado con el derecho fundamental a la consulta previa y la consecución del consentimiento libre, previo e informado en los términos y consideraciones de esta sentencia.

En el cumplimiento de la antedicha orden podrán participar las entidades gubernamentales y no gubernamentales que tanto el Ministerio del Interior y de Justicia, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación estimen pertinentes para garantizar y llevar a buen fin el mandato aquí adoptado.

Los principales fines de esta orden están enfocados en asegurar que los proyectos de impacto social y ambiental, relacionados con proyectos de desarrollo o inversión dentro de territorios étnicos implementen medidas y mecanismos adecuados que minimicen el perjuicio que puedan tener dichos procesos en la capacidad de supervivencia social, económica y cultural de las comunidades étnicas de la Nación en armonía con las consideraciones de esta providencia y en especial con lo puntualizado en el numeral 11.2 de la misma.

DECIMOCUARTO.- En reconocimiento y respeto del grupo indígena accionante y en especial como medida simbólica de reparación y satisfacción, ORDENAR que el Ministerio del Interior y de Justicia coordine y financie la traducción de partes relevantes de la presente sentencia a la lengua Embera y suministre de forma estratégica, dentro de la respectiva etnia, copias de la misma, así como en los organismos educativos que considere pertinente hacerlo.

DECIMOQUINTO.- EXHORTAR al Congreso y a la Presidencia de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, regulen y a través de sus organismos competentes materialicen el derecho fundamental a la consulta previa y el consentimiento, libre, previo e informado de los grupos étnicos que hacen parte de la Nación. Por Secretaría General envíese copia de la presente sentencia a la Presidencia de la República y a las Presidencias de Senado y Cámara.

DECIMOSEXTO.- ORDENAR a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, por medio de sus áreas respectivas, que apoyen, acompañen y vigilen el pleno cumplimiento del presente fallo, con el fin de garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos y órdenes adoptadas. Por Secretaría General, ofíciase a las referidas entidades para que coordinen y creen la comisión pertinente para tal fin.

DECIMOSÉTIMO.- ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en el término de un (1) año rindan a la Corte Constitucional un informe detallado del cumplimiento de las órdenes adoptadas en la presente providencia. Sin perjuicio de la competencia que tiene el juez de primera instancia para asegurar el cumplimiento del fallo de tutela conforme al Decreto 2591 de 1991.

Del anterior informe se enviará copia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.

DECIMOCTAVO.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Anexo 3: Presentación del caso U'wa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - OEA

(Véase Acusación por el genocidio cometido por el estado colombiano y las OXI contra el pueblo UWA. Documento electrónico, con acceso el 3 de octubre de 2014, <http://www.sinaltrainal.org/index.php/otras-iniciativas/tribunal-permanente-de-los-pueblos/tpp-sesi%C3%B3n-colombia/audiencia-petrolera/160-acusacion-por-el-genocidio-cometido-por-el-estado-colombiano-y-las-oxi-contra-el-pueblo-uwa>)

El 28 de abril de 1997 los peticionarios, Asociación de Cabildos Mayores del Pueblo U'wa, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el "Coalition for Amazonian Peoples and their Environment" presentaron una denuncia ante la CIDH alegando que no se llevó a cabo una adecuada "consulta previa" y que no se habían tomado las medidas necesarias para proteger la integridad personal, cultural, económica y medioambiental de los U'wa. Se alega que cualquier exploración petrolera en los territorios de los indígenas perjudicaría gravemente su cultura, religión, integridad personal, etc. En la comunicación de apertura del caso, la Comisión solicitó al gobierno colombiano información sobre un pedido de medidas cautelares hecho por los peticionarios en su denuncia. La petición se identifica como caso 11.754.

Teniendo en cuenta la petición presentada ante la CIDH, el Estado consideró que la alternativa jurídica más apropiada para resolver el conflicto era la aplicación de un mecanismo autocompositivo de solución de controversias, tal como lo es la solución amistosa ante la CIDH. No obstante, reconociendo las diferencias culturales profundas entre los miembros indígenas del pueblo U'wa y los representantes del Estado, el Estado consideró pertinente presentar una solicitud ante la OEA para que enviara una delegación técnica imparcial que evaluará el conflicto, hiciera un diagnóstico de éste y presentará unas recomendaciones que eventualmente sirvieran como base para adelantar un proceso de solución amistosa.

Para el efecto, el Estado le solicitó a la Secretaría General de la OEA que convocará la participación de Harvard University para auspiciar una investigación in situ del conflicto entre los indígenas U'wa y las compañías petroleras y que adelantara el procedimiento señalado. De tal forma, entre el 14 y 22 de mayo y el 30 de julio y el 3 de agosto de 1997, el equipo del Proyecto OEA/HARVARD viajó a Colombia para llevar a cabo una primera evaluación del caso Samoré.

Luego de realizar la misión, los mismos integrantes del Proyecto OEA / Harvard determinaron que el Caso Samoré era un conflicto multilateral mucho más complejo de lo que ellos habían imaginado originalmente y que trascendía escenarios nacionales creando impactos sobre la política de inversión petrolera del gobierno colombiano y riesgos a las garantías constitucionales de los grupos indígenas de Colombia. Al mismo tiempo, ha creado grandes dificultades y cuestionamientos para los defensores de los derechos humanos, los ambientalistas, y la misma industria petrolera.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL BLOQUE SAMORÉ NOVIEMBRE DE 1997

1. Una declaración de las compañías petroleras comprometiéndose a suspender la ejecución de sus planes para la exploración o explotación de petróleo dentro del Bloque Samoré, como paso inicial para crear mejores condiciones para cualquier eventual reinicio de las actividades petroleras dentro del Bloque.

2. La normalización del proceso para la ampliación del resguardo U'wa.
3. Una moderación en la retórica pública de las partes.
4. Reconocimiento y respeto para el sistema U'wa de autoridad y liderazgo.
5. Concretización de un proceso de consulta bajo la responsabilidad del gobierno colombiano.
6. Preparación y asistencia técnica para los U'wa en cualquier consulta que se realice con ellos.
7. La creación de un programa para promover una mayor comprensión mutua entre las partes.
8. La creación de un programa para la prevención y/o resolución de conflictos.

UNA CRONOLOGIA DE RESISTENCIA

1. El 3 de febrero de 1995 el Ministerio del Medio Ambiente mediante la Resolución No. 110 concede a Occidental de Colombia Inc., para iniciar actividades de exploración sísmica en territorio indígena U'wa. "FALTA DE CONSULTA PREVIA".

2. En el mes de agosto de 1995 el Defensor del Pueblo presentó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, acción de tutela contra el Ministerio del Medio Ambiente y la Sociedad Occidental de Colombia Inc., en representación del Pueblo U'wa. Como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el Defensor del Pueblo solicita que se tutele los derechos fundamentales de: a la vida, al territorio, a la autodeterminación, a la defensa de la cultura étnica, a los recursos naturales y a los beneficios de su explotación, a vivir en paz y a trabajar por el país y a su organización propia. Así como el derecho fundamental a la participación social y comunitaria, especialmente en las decisiones que puedan afectarlos como segmento de población social, económica y culturalmente sensible y vulnerable. SENTENCIA SU - 039/ DEL 3 DE FEBRERO DE 1997. Los U'wa no han sido consultados Expediente; T - 84771 CORTE CONSTITUCIONAL.

3. En el mismo mes (Octubre) el Defensor del Pueblo Presentó ante el Consejo de Estado la acción pública de nulidad contra la Resolución No. 110 del 3 de febrero de 1995, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente por la cual se otorga una

licencia ambiental a la sociedad Occidental de Colombia Inc. Dentro del capítulo del concepto de la violación señala: INFRACCIÓN A NORMA DE CARÁCTER SUPERIOR. Violación del artículo 7° de la Constitución Nacional y demás normas constitucionales que reconocen los derechos de las minorías étnicas y la obligación de protegerlas, entre otros derechos señalo: derecho al territorio a la autodeterminación, a la lengua, a la cultura étnica, a los recursos naturales y a los beneficios de su explotación, derecho a vivir y a trabajar en el país y a su organización propia. SENTENCIA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO. 4 DE MARZO DE 1997. Los U'wa si han sido consultados Expediente; S - 673. Levanto la orden de inaplicación de la Resolución No. 110 del 3 de febrero de 1997 confirmada por al H. Corte Constitucional mediante la sentencia de tutela No. SU - 039/97.

Frente a los dos fallos contradictorios en abril de 1997 la autoridad U'wa, la ONIC y Coalición Amazónica presentan demanda contra el gobierno de colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

- Secuestro y asesinatos de tres indigenitas norteamericanos.

- El 6 de agosto de 1999, mediante la Resolución No. 056 el extinto INCORA amplio a favor de los U'wa el actual Resguardo Indígena Unido U'wa en un área de 220.275 has (Departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander)

- El 21 de septiembre de 1999, el Ministerio de Medio Ambiente, expidió la Resolución No. 0788, por medio de la cual se otorgo Licencia Ambiental a la Occidental de Colombia Inc., para adelantar exploración petrolera en Gibraltar 1, en la vereda Cedeño, Corregimiento de Gibraltar, municipio de Toledo, Norte de Santander y sobre predios de propiedad privada de la comunidad U'wa.

- Desalojos. Desplazamiento forzado. El 11 de febrero de 2000, mueren ahogados en el río Cubugón dos niños, uno U'wa KENOWIA BOCOTA, y otro Sicuani (Guahibo) hijo de ANICETO en el río Cubugón a causa del desalojo adelantado por la policía antimotín del Norte de Santander.

- El INCORA mediante la Resolución No. 027 del 11 de septiembre de 2000 constituyo una Reserva petrolera a favor de ECOPEPETROL sobre propiedades colectivas del Pueblo U'wa y de propiedad privada de colonos, esta decisión administrativa fue demandada por el Pueblo U'wa, el Consejo de Estado no ha tomado decisión definitiva.

- El gobierno inicia procesos de Consulta Previa. Los U'wa El 12 de octubre de 2006 amparados en el principio de la buena fe y en el derecho natural contenido en la Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT) exigimos: 1) Respeto por el derecho de propiedad, posesión y dominio absoluta sobre el territorio que esta amparado en el titulo colonial otorgado en 1802 por el Rey de España, 2) Devolución de los títulos coloniales.

- 2004. El gobierno inicia actividades petroleras (exploración petrolera Gibraltar 2 y trabajos de sismica en la linea SARARE 2D) interviniendo y afectando territorio U'wa.

- 2007. ECOPEPETROL inicia actividades de exploración petrolera con el proyecto GIBALTAR 3, en territorio U'wa.

2. PRUEBAS

1. Acciones de las organizaciones sociales y víctimas: Frente a la protesta pacífica del Pueblo en contra del Proyecto petrolero Pozo Gibraltar 1 en nuestras propiedades de Santa Rita y Bella Vista en la vereda Cedeño, Municipio de Toledo, Norte de Santander, el 25 de enero de 2000, la comunidad U'wa fue desalojado por parte de la policía antimotín del Norte de Santander, con apoyo de la doctora NUBIA NAYIBE MORALES Corregidor Especial Ad Hoc del Corregimiento de Gibraltar, de manera violenta y en helicóptero llevados a la Estación de bombeo de Samore. Para recuperar la posesión se interpuso acción de tutela por vías de hecho, el Tribunal Superior de Pamplona del Distrito Judicial de Pamplona reconoció la vía de hecho mediante sentencia judicial.

2. El segundo desalojo lo adelanto la policía antimotín el 27 de enero de 2000, el desalojo se realizó en la vereda el sitio La China.

3. El tercer desalojo lo adelanto la policía antimotín del Norte de Santander, el 11 de febrero de 2000 en dos sitios diferentes, La China y el paso Las Canoas, en este último sitio mueren ahogados dos niños indígenas Kenowia Bocota de cuatro (4) años, un niño Guhaibo (etnia Sikuaní) hijo de Aniceto.

4. Frente a estas injusticias el Pueblo U'wa, solicito a los sectores sociales del departamento de Arauca, Cubará, Boyacá y Toledo, como la visita de una misión internacional al territorio U'wa para apoyar la lucha por la defensa de la vida, la cultura, el medio ambiente y los derechos humanos del Pueblo U'wa.

5. El cuarto desalojo ocurrió entre el 24 y el 26 de junio de 2000 en el perímetro de urbano del municipio de Cubará. Indígenas y campesinos fueron objeto de maltrato físico y verbal por parte de la policía antimotín y el ejército nacional. 30 de los manifestantes fueron llevados en helicóptero a la ciudad de Arauca y judicializados señalados como miembros integrantes de las guerrillas del ELN. Se presionó por parte del gobierno nacional de dejarlos libres si los U'wa accedíamos a levantar la protesta pacífica y así ocurrió.

4. Respuestas del Estado:

IMPUNIDAD, DESCONOCIMIENTOS DE NUESTROS DERECHOS AL TERRITORIO COMO FACTOR DETERMINANTE DE NUESTRA GARANTIZA DE VIDA Y EXPIDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS LESIVOS AL PUEBLO U'WA

- Desalojos forzados. No existe indemnización, tampoco se ha judicializado a las autoridades responsables de las vías de hecho, como a la Corregidora Ad Hoc aunque existió una Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, Norte de Santander, tampoco a la Policía Antimotín que adelantó el desalojo el 11 de febrero de 2000 y causó la muerte de los niños muertos por ahogo en el río Cubugón.

- Expedición de actos administrativos: El Ministerio del Medio Ambiente mediante la Resolución 0788 del 21 de septiembre de 1999, otorgó Licencia Ambiental a la Oxy para adelantar actividades de exploración petrolera en el pozo Gibraltar 1, 2, y 3, en terrenos de propiedad del Pueblo U'wa, ubicado en la vereda Cedeño, jurisdicción del municipio de Toledo, Norte de Santander.

- Expedición de la Resolución No. 027 del 11 de septiembre de 2000 por el INCORA, con la cual se CONSTITUYO UNA RESERVA ESPECIAL A FAVOR DE ECOPETROL sobre terrenos de propiedad privada del Pueblo U'wa y de particulares lo cual violó directamente los artículos 7, 58, 330 parágrafo, 79, 80, de Constitución Nacional, la Ley 21 de 1991, y el Decreto No. 1397 de 1996.

- Expedición del Decreto No. 2330 del 9 de noviembre de 2000 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio del cual se aprobó el artículo 2° de la Resolución No. 027 del 11 de septiembre de 2000 del INCORA.

- La expedición del actual código de minas.

- La proyección del actual estatuto de desarrollo rural.

- La expedición de la Ley forestal.

- Ocultación y desconocimiento de los títulos coloniales de los resguardos indígenas otorgados por la corona española.

Dossier de acusación:

° Escrito de acusación: El Pueblo U'wa en esta audiencia denunciaremos públicamente a nivel nacional e internacional la decisión del gobierno nacional en cabeza del Presidente de la República de Colombia de patrocinar el Genocidio de la cultura U'wa.

° Documentos probatorios: Téngase en cuenta las decisiones de la Corte Constitucional y Consejo de Estado

DISCUSION

VIOLACION DE LAS RECOMENDACIONES OEA-HARVARD

1. El gobierno colombiano reiteradamente informó a la comunidad U'wa que las recomendaciones no eran vinculantes, ahora nos encontramos con la sorpresa de que el informe a la CIDH informa claramente que si son vinculantes. En el Cabildo Mayor no reposa ningún oficio donde el Gobierno de a conocer esta decisión.

2. Frente al inicio del proyecto Gibraltar 1, luego Gibraltar 2 y ahora 3 el gobierno alega no estar obligado a adelantar la consulta previa porque el proyecto no se encuentra en territorio U'wa lo cual no es cierto, por que la perforación se está adelantando en propiedad privada colectiva del pueblo u'wa. Este hecho viola la recomendación No. 5. Concretización de un proceso de consulta bajo la responsabilidad del gobierno colombiano. Dice la recomendación: Cualquier reinicio de actividades de aprovechamiento petrolero dentro del Bloque Samoré sólo podrá efectuarse previa consulta con los U'wa, quienes son los que podrían ser afectados por tales actividades aún cuando no ocurran dentro de su territorio. Dada las circunstancias particulares de este caso, las consultas con los U'wa podrían dividirse en dos etapas:

a. Una primera etapa, que se podría iniciar en un futuro próximo, estaría relacionada con un reinicio de actividades petroleras fuera del territorio U'wa, entendiéndose por territorio no solo el resguardo y la reserva U'wa sino también la totalidad de su hábitat tradicional de acuerdo a las leyes pertinentes. El Estado colombiano violó esta recomendación cuando el 21 de septiembre de 1999 expidió la Licencia Ambiental a la Oxy mediante la Resolución No. 0788 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. A quié no hay ningún archivo que conste la convocatoria del gobierno nacional para adelantar la consulta previa.

3. Los U'wa de Boyacá, Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare, no hemos cambiado la posición que desde 1992 rechazando el proyecto petrolero y solicitando la cancelación de todo proyecto de exploración y explotación petrolera en territorio U'wa, porque el petróleo es sagrado como lo es el territorio.

4. El territorio sigue intervenido con las petroleras, hay una fuerte militarización, presencia de actores armados, todo en desconocimiento de nuestro legítimos y legal derecho a la propiedad privada colectiva.

Para la expedición de la licencia ambiental del proyecto de exploración Gibraltar 1, 2, y 3, el gobierno colombiano no envió oficio llamando a consulta previa tal como lo obliga la recomendación 5.

El gobierno colombiano manifiesta que "en el supuesto proceso de consulta previa llevada a cabo con ASCATIDAR" los actores estaban en igualdad de condiciones, capacidades y derechos. Es falso. Si esto fuera cierto, los U'wa hubiéramos participado con abogados, ingenieros de petroleros, geólogos, antropólogos, biólogos, sociólogos, economistas, etc., propios de la cultura U'wa, y no con profesionales externos pagados por el mismo Estado o por ECOPETROL S.A. Como esto no ha ocurrido en el caso U'wa, la conclusión de la Dirección de Etnias es equivocado cuando manifiesta: el proyecto petrolero en territorio U'wa no causará daño a la cultura U'wa. Si no tenemos estos profesionales bien del pueblo o contratados por el Pueblo U'wa no tenemos la capacidad para evaluar los impactos directos e indirectos del proyecto petrolero presente y futuro en el aspecto territorial, cultural, social, ambiental, económico, de derechos humanos, etc. De otro lado, la igualdad de derechos se materializa cuando el Estado reconozca el Derecho de propiedad absoluta sobre las tierras que los U'wa hemos tenido en posesión

ancestralmente el cual es reconocido por la Ley 21 de 1991, y no estaría tratando de castrar este derecho con procesos de acercamiento, consulta previa y negando este derecho natural, histórico patrimonial milenario que esta reconocido en la declaración universal de los derechos humanos y en el derecho internacional de los Pueblos.

La moderación retórica persiste en el sentido de que los U'wa hemos manifestado en el documento entregado el 12 de octubre de 2006 que; la consulta previa es un proceso de eutanasia cultural, es decir, el Estado busca es que los U'wa tomemos la decisión oficial de suicidio colectivo pero a lo legal y no como lo presentamos en el año 1996.

EL Gobierno colombiano no ha respetado el sistema político del Pueblo U'wa: "Reconocimiento y respeto por el sistema U'wa de autoridad y liderazgo"

Por que el Caso 11.754 hace referencia a Caso U'wa Colombia, y no dice petición de ASCATIDAR ó ASOU'WA .Nosotros somos una sola cultura, un solo territorio, un solo derecho histórico patrimonial milenario, un solo sistema de gobierno interno, el ejemplo más claro de violación de este derecho histórico, social y cultural de la UNIDAD DE MATERIA se ve cuando el Gobierno colombiano divide al pueblo U'wa en ASCATIDAR y ASOU'WA, incluyendo la cizaña de que los unos ya negociaron y ustedes porque no, Ver pág. 20, 21 y 22. Ver fallo del Consejo de Estado caso Consulta Previa al Pueblo U'wa.

El gobierno capacito indígenas y dio dinero a los líderes indígenas no para garantizar la igualdad de condiciones, capacidades y derechos, como lo manifiesta el gobierno en el informe ante la CIDH sino para facilitar su ingreso a las comunidades indígenas desarrollando el trabajo social a favor del proyecto. Además es ingenuo, ilusorio y mentiroso predecir que estos facilitadores capacitados (indígenas) tienen y tuvieron igualdad de condiciones , en cuento a conocimiento específico del proyecto y sus impactos reales cuando los funcionarios que representan al gobierno han terminado carreras universitarias, es decir, cuentan con más de 20 años de estudios, en escuelas, colegios, universidades, estudios de posgrados y PHD en las universidades de Colombia y de otros países, y los indígenas con unos simples talleres donde prima los refrigerios de gaseosas y panes y almuerzos con carne puedan entender el proyecto petrolero con sus impactos culturales, sociales, territoriales, ambientales y de violación de nuestros derechos humanos como pueblos autóctonos, nativos y raizales. ¿Cuándo el gobierno les explico realmente y de buena fe nuestros derechos ancestrales sobre el territorio? Ahora bien, la consulta en Arauca solo se hizo con la dirigencia pero no con las máximas autoridades internas. Es decir, es una consulta similar al caso Sarayaku en Ecuador, parcializada y de mala fe.

Los funcionarios de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, como los contratistas asignados para el caso U'wa son contratados y pagos por ECOPETROL S.A. a través de la FUNDACION CATATUMBO – FUNDESCAT – con sede en la ciudad de Cúcuta – ¿Cómo puede predicarse que en el proceso de consulta en Arauca existió imparcialidad, transparencia y justeza en sus decisiones si se esta condicionado los servicios profesionales a unos honorarios provenientes del proyecto petrolero? Frente a este desarrollo téngase en cuenta el concepto de la Dirección de Etnias frente al proyecto.

Anexo 4: Sentencia T-387/13

(Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, 28 de junio de 2013)

DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE GRUPOS ETNICOS SOBRE TERRITORIOS-Fundamental

TERRITORIOS INDIGENAS-Inembargables, inalienables e imprescriptibles según Convenio 169 de la OIT/RESGUARDO INDIGENA-Características

DERECHO DE AUTORECONOCIMIENTO DE COMUNIDAD INDIGENA-Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT

El territorio de los pueblos indígenas y tribales tiene una protección reforzada en el Convenio 169, al cual le dedica un Capítulo. Al respecto, establece que los Estados partes se encuentran especialmente obligados a respetar el carácter colectivo de los territorios de estos pueblos (art. 13). Así como el lugar “especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras”. El Convenio 169 también reconoce la especial relación que hay entre la pervivencia de los pueblos indígenas y tribales y su territorio, al establecer que se deberá garantizar “la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico” (art. 19 a.). Y consagra el derecho de los pueblos a decidir el proceso de desarrollo que afecte a las tierras que ocupan (art. 7.1). También establece que la protección de la propiedad no se limita a las tierras habitadas por los pueblos ya que en los casos apropiados “deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia” (art. 14). En suma, el Convenio 169 contempla una especial preocupación por proteger los territorios indígenas, los cuales se encuentran relacionados muy especialmente con su pervivencia colectiva y con su cosmovisión. Para tal fin, el Convenio establece: (i) la obligación del Estado de proteger el territorio colectivo contra actos de terceros, (ii) el deber de consultar las medidas que afecten su territorio; (iii) y que su propiedad debe comprender bajo ciertas circunstancias un territorio mucho más amplio del que habitan.

DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS DE PUEBLOS INDIGENAS-Fuente de derecho o de obligaciones concretas para el Estado para la protección del derecho a la propiedad colectiva.

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento que es directamente aplicable por esta Corte. Este instrumento internacional consagra estándares de respeto y protección reforzada del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, el cual también es necesario para garantizar el derecho a la integridad cultural de estos pueblos.

DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE GRUPOS ETNICOS SOBRE TERRITORIOS-Subreglas

El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas comprende: (i) el derecho a constituir resguardos; (ii) la protección contra actos de terceros; (iii) según los precedentes este derecho es además un medio para garantizar la integridad étnica y la supervivencia de los pueblos indígenas.

PROPIEDAD COLECTIVA DE PUEBLOS INDIGENAS-Derecho a constituir resguardos

El derecho fundamental a la propiedad colectiva implica el derecho a constituir resguardos en el territorio habitado por los pueblos indígenas. No obstante, esta manera de entender el derecho fundamental al territorio como el lugar donde se encuentran asentados los indígenas sería superado con posterioridad por la jurisprudencia de esta Corporación para referirse a la noción de ancestralidad que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

PROPIEDAD COLECTIVA DE PUEBLOS INDIGENAS-Protección internacional frente a derechos de terceros/PROPIEDAD COLECTIVA DE PUEBLOS INDIGENAS-CIDH sistematizó algunos criterios que se deben tener en cuenta cuando existen conflictos de la propiedad con terceros.

De conformidad con los precedentes de la Corte Interamericana, y según la interpretación autorizada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: (i) no es necesaria la posesión para que los pueblos indígenas reclamen la delimitación y protección de su territorio; (ii) los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de sus territorios una vez han pasado a manos de terceros; (iii) el derecho a la restitución subsiste hasta que permanezca el vínculo que los une con su territorio y/o hasta que desaparezcan los obstáculos de hecho como la violencia que les han impedido usar sus territorios; (iv) es necesario considerar si con la limitación del derecho a la propiedad, se afectan otro tipo de derechos. De acuerdo con los estándares de la Corte Interamericana para establecer si una limitación del derecho a la propiedad se encuentra conforme con la Convención Americana es necesario que reúna los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad y el logro de un objetivo legítimo en una sociedad democrática.

PROPIEDAD COLECTIVA DE PUEBLOS INDIGENAS-Deber del Estado de protegerlos contra actos de terceros.

Los pueblos indígenas tienen un derecho fundamental a la propiedad colectiva, debido a que su integridad como pueblo se encuentra directamente relacionada con su permanencia en su territorio. En desarrollo de esta obligación la Corte ha protegido el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes contra actos de terceros y ha encontrado omisiones de las autoridades públicas encargadas de garantizar estos derechos. Para garantizar este derecho contra actos de terceros ha ordenado: (i) un plan de salvaguarda respecto de aquellas etnias que se encuentran en riesgo que tiene un componente para garantizar una integridad étnica y otro para garantizar su territorio; (ii) establecer

mecanismos para la restitución de las comunidades afrodescendientes que se hubiesen realizado, sin los requisitos previstos en la Ley 70 de 1993; (iii) congelar las transacciones sobre un territorio colectivo por los riesgos de explotación económica.

PROPIEDAD COLECTIVA DE PUEBLOS INDIGENAS-Es un medio para garantizar derecho a la subsistencia y a la identidad étnica y cultura de las comunidades indígenas.

ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE PUEBLOS INDIGENAS-Procedencia ante medio de defensa judicial ineficaz.

DERECHOS DE COMUNIDAD INDIGENA Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Vulneración de derecho al debido proceso y a la identidad cultural persiste en el tiempo.

DERECHO A LA SUPERVIVENCIA DE PUEBLO INDIGENA-Situación actual del Pueblo Kofán en vía de extinción por ausencia de territorio.

PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES-Deber del Estado de adoptar medidas para garantizar derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas.

DERECHO A LA SUPERVIVENCIA, A LA IDENTIDAD E INTEGRIDAD ETNICA Y CULTURAL Y A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE PUEBLO INDIGENA-Ordenes para evitar desaparición del pueblo Kofán por ocupación de reserva indígena por parte de colonos.

DERECHO A LA SUPERVIVENCIA, A LA IDENTIDAD E INTEGRIDAD ETNICA Y CULTURAL Y A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE PUEBLO INDIGENA-Orden a Incoder inicie proceso administrativo previsto en el Decreto 2164 de 1995, con la participación del pueblo indígena Kofán y de los colonos que se encuentran en la reserva indígena.

Referencia: expediente T-3623447

Acción de tutela instaurada por las Autoridades Tradicionales y otros miembros del resguardo Indígena Santa Rosa del Guamuez contra el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural –INCODER–.

Magistrada Ponente:

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013).

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamentarios, ha proferido la siguiente.

SENTENCIA

En el proceso de revisión de las sentencias proferidas, en primera instancia, por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá el 17 de mayo de 2012, y en segunda instancia, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 6 de agosto de 2012, dentro del trámite de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Las Autoridades Tradicionales y otros miembros del resguardo Indígena Santa Rosa del Guamuez interpusieron acción de tutela contra el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural –INCODER–. En su criterio, esta ha venido violando el derecho fundamental a la propiedad colectiva del Pueblo Indígena Kofan, puesto que no ha convertido en Resguardo indígena toda la reserva indígena que había sido creada a su favor, ni tampoco la ha saneado ni ha impedido la invasión por parte de colonos desde cuando se constituyó la mencionada reserva. Los hechos del caso son en síntesis los siguientes:

1. Hechos

1.1. Dicen los demandantes que el INCORA –hoy INCODER- en 1966 sustrajo de una reserva forestal establecida en la Ley 2 de 1959 “Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables” un sector de la entonces intendencia del Putumayo, con el fin de autorizar que en esa zona se creara una reserva indígena (Resolución No. 128 de 1966). Luego de eso, en 1968, el mismo INCORA autorizó a la Gerencia General de ese Instituto para que dentro de esa área sustraída constituyera las reservas indígenas necesarias para las comunidades indígenas de la región, y añadía: “en dichas zonas no se permitirá la ocupación ni la consiguiente adjudicación a personas distintas a las aborígenes” (Resolución No. 168 de 1968, art. 3°). Con fundamento en estas resoluciones, el INCORA expidió la Resolución 1981 de 1973, por medio de la cual creó la Reserva Indígena de Santa Rosa del Guamuez con una extensión de 3750 hectáreas, con la que pretendía asegurar el uso y goce exclusivos de la tierra por parte de los indígenas Kofanes y de otros grupos o subgrupos étnicos que la habitan. La parte considerativa de esta última Resolución, refería así las razones por las cuales resultaba importante crear la Reserva Indígena:

“[...] La legalización de la ocupación que actualmente hacen los indígenas sobre el área de Santa Rosa del Guamuez es importante: de una parte porque el incremento creciente de la colonización ofrece aún a los indígenas usuarios de la zona el peligro de ser desplazados, si no cuentan con un respaldo legal claro y suficiente para defender su hábitat; de otra parte, porque es importante que, con la seguridad del poder sobre la tierra, los indígenas puedan planear y cumplir un más eficaz y racional aprovechamiento de la tierra y sus recursos, dentro de una modalidad de tenencia como la de reserva que ofrece el grado de autonomía necesario a las características propias de su respectiva cultura”.

Asimismo, en el texto de esa Resolución el INCORA prohibió que en la Reserva Indígena se establecieran colonos y en general personas diferentes a los indígenas que hacían entonces uso de ellas. Parte de la Reserva Indígena así constituida obtuvo el carácter legal de un Resguardo Indígena mediante la Resolución 009 del 13 de mayo de 1998. Esta Resolución dice expresamente que un estudio previo, realizado sobre la Reserva Indígena, había mostrado que:

“[...] la reserva KOFAN de Santa Rosa del Guamuez presenta ocupación de 338 colonos en un área de 2995 hectáreas de la reserva, mientras que la comunidad indígena posee dos globos de terreno que suman 756 hectáreas 5500 metros cuadrados”.

Adicionalmente, la misma Resolución reconoce que el estudio recomendó constituir el resguardo únicamente sobre las tierras que la comunidad a la sazón poseía; es decir, sobre 756 hectáreas 5500 metros cuadrados. Y al mismo tiempo señala que esta área ocupada para entonces por los pueblos indígenas equivalía al “20.13%” del total de la reserva. “Los colonos”, agregaba, “ocupan 2995 hectáreas aproximadamente, equivalentes al 79.87% del total del área de la reserva”. Aparte, de estos datos, el INCORA mencionó un censo de colonos que había efectuado en 1997, cuyos resultados describió así:

“Existe un total de 338 colonos, distribuidos así, según vereda: Bellavista 29; Concordia 132; La Raya 82, la Unión 7, Santa Rosa 5, La Primavera 37 y Villa Duarte 46. Dentro de los dos sectores que poseen los integrantes de la comunidad, los cuales son objeto de conversión a resguardo, queda en calidad de colono el señor Jorge Reyes, quien posee una mejora de 2 hectáreas al interior del globo Santa Rosa”.

1.2. Con fundamento en estos hechos, y con base en que a su juicio no se le ha dado el carácter de resguardo al resto de la reserva indígena, el cual a su vez ha experimentado un incremento en la colonización por parte de personas no indígenas en la región, los tutelantes argumentan que el INCODER les ha violado su derecho fundamental a la propiedad colectiva sobre la tierra, que en su opinión está protegido por el artículo 63 de la Carta. Este cargo lo edifican sobre la base de que el INCODER ha incumplido parcialmente con su obligación de convertir la reserva indígena en resguardo, y ha dejado por completo de cumplir con el deber de sanear los territorios legal y constitucionalmente destinados a la ocupación exclusiva de los pueblos indígenas.

2. Respuesta de la entidad accionada

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER– presentó un informe en el que solicita negar las pretensiones de la acción de tutela porque considera que no está vulnerando los derechos fundamentales del pueblo indígena accionante. La entidad afirma que para tener acceso a los programas de constitución, ampliación o saneamiento de resguardos indígenas, “es necesario ceñirse a los procedimientos establecidos por las leyes y a las alternativas que posibilitan la adquisición de predios en su favor”.

Por otra parte, describe el procedimiento legal que se debe adelantar para expedir actos administrativos de constitución, ampliación, saneamiento o reestructuración de resguardos indígenas. Dentro de dicho procedimiento, resalta la elaboración de un “estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia y funcionalidad étnica y cultural de las tierras de las comunidades”, el cual debe cumplir con el principio de publicidad mediante fijación de edictos, y debe ser comunicado a la comunidad y al Procurador Agrario, procedimientos que no se han adelantado por el pueblo indígena Kofán. Asimismo, resalta que estos procesos deben ser concertados y priorizados por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, obligación que tampoco se ha cumplido respecto del pueblo indígena accionante.

Finalmente, manifiesta que la Subgerente de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del INCODER programó una visita para “buscar una concertación con la comunidad indígena Kofán del Resguardo referido, cuyo propósito principal será [...] determinar quiénes son los ocupantes que habitan actualmente el Resguardo y levantar un acta para luego someter el caso a la decisión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNT), quien tiene por competencia definir si prioriza o no el proceso de saneamiento del Resguardo y proceder, si es del caso, adelantar los trámites legales y las actuaciones procedimentales antes referidas”.

3. Intervención en el trámite de primera instancia.

Mediante comunicación radicada ante el juez de primera instancia, la Clínica Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana presentó un *amicus curiae* apoyando las pretensiones de los actores. Afirma que ha venido apoyando a los Kofanes en la reclamación de los derechos sobre sus territorios tradicionales, y considera necesario que la jurisdicción constitucional proteja el derecho a la propiedad colectiva de ese pueblo indígena, porque: i) existe una violación sistemática del derecho al territorio de las comunidades indígenas y afrocolombianas; ii) la vulneración al derecho sobre el territorio del Resguardo Indígena Kofan es “muy grave”; iii) la pérdida de territorio puede causar perjuicios irremediables a la integridad de ese pueblo, que ya fue declarado en vía de extinción por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009; y iv) la vulneración del derecho a la propiedad colectiva pone en riesgo a ese pueblo indígena de ser desplazado por la violencia.

Respecto del derecho a la propiedad colectiva, la entidad afirma que está reconocido en el artículo 63 de la Constitución Política y en diversos instrumentos internacionales, entre los que resalta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, “en el que se reconoce expresamente el derecho de las personas indígenas a no sufrir asimilación forzada o la destrucción de su cultura por actos que tengan por objeto enajenarles sus tierras o territorios”.

Asimismo, con base en jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifiesta que el derecho a la propiedad colectiva es fundamental para los pueblos indígenas, por su particular relación con el territorio, y porque de su garantía depende la protección de otros derechos de esos sujetos colectivos como la integridad física, económica y cultural. Adicionalmente, considera que en Colombia esa protección debe ser reforzada por la situación de vulnerabilidad de estas comunidades en el marco del conflicto armado, que los pone en riesgo de sufrir desplazamiento forzado.

Por otra parte, sostiene que la tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para proteger el derecho a la propiedad colectiva de los indígenas Kofan, porque considera que estos no cuentan con otro mecanismo judicial para la protección de su derecho, ya que el procedimiento existente es de naturaleza administrativa, ha sido ejercido por el pueblo actor, pero la respuesta estatal ha sido nula. Esta afirmación parte de que el INCORA y el INCODER, luego de 39 años, contados desde el momento en que se creó la Reserva Indígena de Santa Rosa del Guamuez, no ha saneado las tierras que sólo pueden ser adjudicadas a los indígenas Kofan y, por el contrario, ha permitido que diversos actores realicen intervenciones en ese territorio, lo cual pone en riesgo la integridad de ese pueblo indígena.

Respecto del procedimiento administrativo para la titulación de tierras indígenas, la entidad interviniente afirma que ese mecanismo es inefectivo porque el programa no tiene presupuesto suficiente para suplir la demanda de territorio de los pueblos indígenas, y el papel de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas es criticado, entre otras razones, porque pone a competir a los pueblos indígenas por los pocos recursos que el Estado le asigna a ese programa. De lo anterior, concluye que la creación de esa Comisión constituye una decisión estatal regresiva.

Por lo anterior, concluye que el actuar de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y del INCODER es contrario a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano mediante la suscripción de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, particularmente, la obligación de garantizar que los procedimientos administrativos “ofrezcan una posibilidad real de que los miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales”.

En el mismo sentido, considera que someter las pretensiones de los indígenas Kofan al trámite administrativo ante la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, sólo logra “suspender indefinidamente el respeto por los derechos fundamentales con excusas presupuestales o de trámites ante la mencionada Comisión”, lo cual implica una vulneración al concepto de plazo razonable desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, la Clínica Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Javeriana recomienda que: i) se ordene el saneamiento de la Reserva Indígena Santa Rosa del Guamuez; ii) se ordene la suspensión inmediata de cualquier proyecto estatal o particular, que ponga en peligro, o vulnere el derecho a la propiedad colectiva de los indígenas Kofan; iii) tutele de manera definitiva los derechos de los actores a la propiedad colectiva, a la integridad étnica y cultural, a la participación y a la autodeterminación; iv) Para proyectos que se pretendan hacer en los límites de la reserva, que se ordene la consulta previa y que se realicen estudios serios de impacto ambiental, social, cultural y económicos.

4. Sentencia de primera instancia.

El 17 de mayo de 2012, se negó la acción de tutela porque no se habían agotado los trámites previstos en el Decreto 2164 de 1995. Con posterioridad, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el 8 de junio de 2012, declaró la nulidad del proceso porque no se vinculó a la Alcaldía del Valle del Guamuez y al Gobernador del Cabildo Indígena de Santa Rosa del Guamuez. Estas autoridades fueron vinculadas, por el juez de primera instancia a través de un auto del 22 de junio de 2012.

El Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá mediante sentencia del cinco de julio de 2012 negó la protección de los derechos de los actores, porque en el expediente no se acreditó el agotamiento previo de los trámites establecidos en el Decreto 2164 de 1995 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional” ante el INCODER. Por esta razón, consideró que no existían suficientes elementos de juicio para concluir que la entidad accionada está vulnerando los derechos fundamentales de los actores. Adicionalmente, tampoco encontró que se configurara un perjuicio irremediable, ni que se cumpliera con el requisito de la inmediatez, toda vez que al momento de la interposición de la acción de tutela, habían transcurrido más de catorce (14) años desde la creación del Resguardo Indígena en 1998, y no se justificó la inactividad durante un lapso tan prolongado.

5. Impugnación.

Los actores, actuando por medio de apoderado, impugnaron el fallo de primera instancia porque consideran que la acción de tutela es su único medio de defensa judicial efectivo para la protección de su derecho a la propiedad colectiva. Asimismo, manifiestan que la existencia de trámites administrativos para la defensa de los derechos cuya protección se solicita no afecta la procedencia de la acción de tutela. Por otra parte, consideran que los 14 años transcurridos desde la creación del Resguardo Indígena no deben ser tenidos en cuenta como un lapso de inactividad, sino como el tiempo transcurrido sin que el Estado les haya brindado una protección efectiva a sus derechos. Respecto del perjuicio irremediable, los actores manifestaron que el hecho de que pertenezcan a un pueblo en vía de extinción constituye un perjuicio irremediable suficiente para concluir que la acción de tutela objeto de estudio es procedente.

6. Sentencia de segunda instancia.

Mediante sentencia del 6 de agosto de 2012, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión impugnada, porque consideró que la entidad accionada no se ha negado a darle curso a la solicitud de los actores. Adicionalmente, consideró que el juez de tutela no puede ordenar al INCODER que acepte la pretensión de los actores, sin que se haya agotado previamente los trámites administrativos para el saneamiento de resguardos indígenas, previstos en la Ley 160 de 1994 y en las demás normas aplicables. Por lo anterior, el juez de instancia concluyó que los actores deben someterse al trámite administrativo por el cual se rige su pretensión, ya que con él se garantiza el derecho a la igualdad de otros pueblos indígenas que han formulado pretensiones similares a la de los actores.

7. Actuaciones en sede de revisión.

7.1. Mediante auto del 18 de enero de 2013, el despacho de la magistrada sustanciadora, en uso de la facultad probatoria que le confirió el Acuerdo 05 de 1992, ordenó que por intermedio de la Secretaría General se oficiara a los

Departamentos o Facultades de Antropología de las Universidades de Antioquia, de los Andes, del Cauca y Nacional de Colombia, a la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH–, y a la Defensoría del Pueblo delegada para los indígenas y minorías étnicas, para que emitieran concepto sobre la situación planteada por la acción de tutela.

Así mismo, se ordenó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER– que informara a la Sala de Revisión:

i) ¿Por qué no ha convertido toda el área de la reserva indígena de Santa Rosa del Guamuez (3750 hectáreas) en resguardo indígena?

ii) ¿Qué ha hecho para garantizar que la Reserva Indígena de Santa Rosa del Guamuez, y el resguardo indígena de los Kofanes, esté libre de ocupaciones por parte de colonos (no indígenas)?

7.2. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH– presentó un informe sobre la situación del Resguardo Indígena Santa Rosa del Guamuez, en el que conceptuó:

“[...] la comunidad de Santa Rosa del Guamuez aceptó en 1998 la titulación del resguardo en un momento en el que la ocupación de las tierras de la reserva indígena originalmente constituida en su nombre, en 1973, ya había sido ocupada en un 70% por campesinos colonos. Este simple hecho desvirtuó la posibilidad de demandar al INCODER por negligencia para proceder a sanear los territorios indígenas.

Si los indígenas de este resguardo están interesados en la ampliación del mismo, deberán presentar su solicitud al Consejo Nacional de Tierras, pero no está demás aclarar que, en las circunstancias actuales, su solicitud se enfrenta a la disponibilidad de tierras en posibilidad de ser negociadas.”

Adicionalmente, informó que en la región del Putumayo se presenta un enfrentamiento entre campesinos e indígenas por el acceso “al recurso básico de la tierra”, situación que a su vez se encuentra influenciada por procesos políticos y económicos como “la exploración petrolera, la colonización agraria o la guerra de actores armados que despoja a los habitantes rurales de sus tierras.” Con el fin de ilustrar la situación descrita, aportó copia del artículo denominado “Movilidad espacial e identitaria en Putumayo, escrito por la antropóloga Margarita Chaves, investigadora del ICANH”, en el que, según lo afirma la entidad, se analiza el significado para los indígenas de la creación de resguardos de “dimensiones ínfimas e inadecuadas como el que detenta la comunidad de Santa Rosa del Guamuez”.

7.3. Por su parte, en el informe presentado por la Defensora Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas (E) de la Defensoría del Pueblo, se afirma que durante los años 2003 y 2004 esa entidad ejecutó un proceso denominado “Acompañamiento para fortalecer la autonomía y ejercicio de los derechos humanos, colectivos e integrales de la población indígena de los departamentos de Arauca, Casanare, Caquetá, Tolima y Putumayo”, y que para el departamento del Putumayo se publicó el texto “Situación de los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los pueblos indígenas del departamento del Putumayo 2003-2004”, documento en el que se llegó a la conclusión de que “[e]l pueblo Kofán está considerado como un pueblo en vías de extinción”.

Dentro del estudio mencionado, la entidad accionada resalta:

“[...] en algunas comunidades se ha perdido parte de la cultura, pero en la mayoría se mantiene viva; quedan 376 hablantes de la lengua nativa Kofán, que son artesanos de canastos, mochilas, collares e instrumentos de uso tradicional y ceremonial’. En cuanto al territorio se mencionó que: ‘a los indígenas les preocupa que a pesar de estar constituidos resguardos y cabildos, conviven colonos; también les preocupa el hecho de que en sus territorios haya cultivos de uso ilícito, situación que les genera violencia y daña la armonía de la madre naturaleza por el manejo y control del mercado (urbano y rural) de la pasta de coca; de la misma manera se menciona que el derecho al territorio también es afectado por la prohibición impuesta por la guerrilla respecto de la caza y pesca en sus territorios, afectando sus tradiciones alimentarias’.”

Así mismo, en el informe se citan algunas de las conclusiones a las que llegó esa entidad en 2004, en los siguientes términos:

1) [...] La constitución y ampliación de los resguardos del Alto Putumayo no cumplen los acuerdos suscritos con el INCORA PLANTE y las autoridades indígenas en el año 2000. || 2) Las comunidades indígenas cuentan con una escasa tenencia de tierra y consideran que el tamaño de los territorios ya no es suficiente para la cantidad de familias que hay en la actualidad. || 3) El derecho a la permanencia y pervivencia cultural como pueblos también es vulnerado a menudo, dado que a pesar que los indígenas estén constituidos como cabildos y resguardos, o posean pequeñas parcelas como propiedad privada, afrontan problemas de invasión, ya que permanentemente se ven sitiados por los colonos, que han ocupado sus territorios afectando de manera preocupante su sistema de vida.”

A partir de la información suministrada, la Defensoría del Pueblo señala que los derechos de la comunidad indígena accionante están siendo afectados por el desinterés de las entidades públicas encargadas de impulsar políticas para la protección de sus derechos, y que respecto del pueblo indígena Kofán, ya había advertido “la necesidad urgente de la intervención estatal a fin de garantizar su pervivencia”.

En el mismo sentido, manifiesta que por medio del Auto No. 004 de 2009 de la Corte Constitucional, se ordenó al Gobierno Nacional la formulación y desarrollo de un plan de salvaguarda étnico para el pueblo indígena Kofán, el cual se está adelantando actualmente. En este plan se señala que, respecto del derecho al territorio, en la reserva de Santa Rosa del Guamuez se “registra una invasión del 80% del territorio (2994 hectáreas fragmentadas en 247 predios veredales con tamaños inferiores a 5 hectáreas) y una superposición con el área bajo jurisdicción del municipio Valle del Guamuez.” También cita expresamente las siguientes observaciones del mencionado plan:

"Las 'tendencias de la tenencia de la tierra muestran una dinámica contraria a la propiedad comunitaria como forma de garantizar el acceso al territorio del Pueblo Kofán. Existen títulos de propiedad privada dentro de las reservas, y esta situación ha generado conflictos con población colona porque, entre otras, se generan competencias por la distribución de la tierra y de los recursos de los gobiernos municipales en estos territorios. Hay además una situación descrita de superposición de resguardos y reservas con áreas de los municipios, la presencia de petroleras, actividades de pavimentación, batallones y otras actividades inconsultas han tenido impactos ambientales negativos y han ido en desmedro de la autonomía y del gobierno propio. Existe además contaminación por cultivos de uso ilícito' [Plan de Salvaguarda pueblo Kofán, página 101]."

Finalmente, la Defensoría del Pueblo concluye que los derechos del pueblo indígena Kofán al territorio, a la autonomía, y a la identidad cultural, están siendo afectados por i) la ocupación de sus territorios por colonos, ii) el impacto del conflicto armado, y iii) "la situación de abandono institucional, indefensión y exclusión histórica". Por lo tanto, considera indispensable que se creen "procedimientos más expeditos y eficaces en materia de protección hacia estas comunidades, puesto que no garantizar este derecho, [se] afecta la pervivencia física y cultural del pueblo Kofán, asentado en el Resguardo de Santa Rosa de Guamez", ya que, en su concepto, los procedimientos existentes no cumplen con los requisitos de eficacia e idoneidad establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

II. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala resolver si el INCODER vulneró el derecho la integridad étnica, al no adoptar medidas para garantizar que la reserva indígena no fuera invadida por terceros amenazando la existencia del pueblo Kofán.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala dividirá las consideraciones en dos partes. En la primera parte, se referirá al derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. En la segunda parte, resolverá el caso con fundamento en las reglas y precedentes trazados en la primera parte.

1. El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas.

a) Fundamento constitucional del derecho a la propiedad colectiva.

1. Los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional. Esta Corte ha advertido que esta protección se deriva de "la existencia de patrones históricos de discriminación aún no superados frente a los pueblos y las personas indígenas; la presencia de una cultura mayoritaria que amenaza con la desaparición de sus costumbres, su percepción sobre el desarrollo y la economía y, en términos amplios, su modo de vida buena (lo que suele denominarse cosmovisión)". De igual manera, en el auto 004 de 2008, esta Corporación advirtió que los indígenas se encuentran expuestos en el desarrollo del conflicto armado a causa de: "(1) las confrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas entre los actores armados, sin involucrar activamente a las comunidades indígenas y sus miembros, pero afectándolos en forma directa y manifiesta; (2) los procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas, y a sus miembros individuales, en el conflicto armado; y (3) los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan sus territorios tradicionales y sus culturas". Y ha establecido que "no son menos de treinta las etnias que en este momento pueden considerarse como en estado de alto riesgo de exterminio cultural o físico por causa del conflicto armado y del desplazamiento forzado".

2. Como lo ha advertido esta Corte en reiteradas decisiones el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas desarrolla diversos mandatos y principios constitucionales. Al respecto, la Corte advirtió en la sentencia T-376 de 2012 que: "los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes constituyen además, concreción de diversos mandatos, principios y valores constitucionales, entre los que cabe destacar: la concepción de la democracia acogida por el Constituyente, a la vez participativa y pluralista, visión que reivindica la coexistencia de diversas formas de ver el mundo y propicia la activa intervención de todas las culturas para la construcción del Estado (artículos 1° y 2°, CP); el principio de igualdad que, de una parte, se concreta en el carácter general de la ley y la prohibición de discriminación; y, de otra, ordena la adopción de medidas especiales, de carácter favorable, frente a grupos vulnerables o personas en condición de debilidad manifiesta (artículo 13 CP); la diversidad étnica (artículo 7° CP) que prescribe el respeto y conservación de las diferencias culturales como elemento constitutivo de la Nación; el principio de igualdad de culturas (artículo 70 CP) que prohíbe imponer las formas de vida mayoritarias como las únicas válidas o como opciones prevalentes sobre la visión del mundo de los pueblos originarios, y diversos compromisos adquiridos por el Estado en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

3. Desde la sentencia T-188 de 1993, esta Corte ha reconocido que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas tiene el carácter de fundamental. Para llegar a ésta conclusión el Tribunal señaló como fundamento: la ratificación por el Congreso del Convenio 169; las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente y estableció que sin el reconocimiento del derecho fundamental al territorio "quedarían inactuadas disposiciones constitucionales en materia de protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana".

El carácter de derecho fundamental de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas ha sido reconocido en sentencias posteriores. En el fallo SU-510 de 1998, el Tribunal señaló:

“con base en las declaraciones constitucionales (C.P., artículos 58, 63 y 229) e internacionales respectivas (Convenio N° 169 O.I.T. [Ley 21 de 1991], artículos 13 a 19), que la propiedad colectiva que las comunidades indígenas ejercen sobre sus resguardos y territorios tiene el carácter de derecho fundamental, no sólo porque tales territorios constituyen su principal medio de subsistencia sino, también, porque forman parte de su cosmovisión y religiosidad. En tanto propietarias de sus territorios, las comunidades indígenas son titulares de todas las prerrogativas que el artículo 669 del Código Civil otorga a los titulares del derecho de propiedad, lo cual aparea el deber de los terceros de respetar el anotado derecho”

Como lo afirmó esta Corte, en la sentencia T-652 de 1998, se ha reconocido el derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos étnicos “no sólo por lo que significa para la supervivencia de los pueblos indígenas y raizales el derecho de dominio sobre el territorio que habitan, sino porque él hace parte de las cosmogonías amerindias y es substrato material necesario para el desarrollo de sus formas culturales características”.

En síntesis, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido el derecho fundamental al territorio colectivo de los pueblos indígenas, el cual se encuentra directamente relacionado con su supervivencia y con su integridad étnica.

4. El texto de la Constitución de 1991 prevé una protección reforzada del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. De conformidad con el artículo 63, “las tierras comunales de grupos étnicos” y “las tierras de resguardo” son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

5. A su vez el artículo 329 de la Constitución establece que la delimitación de las entidades territoriales indígenas se realizará con la participación de sus autoridades tradicionales y que “los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable”. Y el artículo 330 prevé que los territorios indígenas estarán gobernados por autoridades indígenas conformadas según los usos y costumbres de sus comunidades. Y les otorga como funciones para garantizar la integridad de su territorio “la preservación de los recursos naturales” y “velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios”.

6. El derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas se encuentra reflejado en la legislación de larga data. Como lo reconoció esta Corte en la sentencia T-188 de 1993:

“La ley de reforma agraria (L 135 de 1961) dictada con el objeto de democratizar la propiedad y superar la estructura de tenencia de la tierra bajo las modalidades de latifundio-minifundio, introdujo dos artículos que constituyen el primer reconocimiento de las comunidades indígenas, aún cuando fuese para efectos de su incorporación a la economía capitalista como unidad de producción y de consumo. La primera de dichas disposiciones (art. 29) condicionó la adjudicación de baldíos en zonas ocupadas por indígenas al previo concepto favorable de la oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. (...). La segunda (art. 94) pretendió resolver el problema de la superación del minifundio en las parcialidades indígenas y facultó al Incora para estudiar la situación socio-económica de las parcialidades con miras a adelantar las reestructuraciones internas, el reagrupamiento de la población de resguardos y eventualmente la ampliación de los mismos mediante la adquisición de tierras aledañas”.

La Ley 135 de 1965 también estableció la posibilidad de crear reservas con destinación específica. Al respecto el artículo 40 dispuso que “el INCORA, con la aprobación del Gobierno, construir reservas sobre tierras baldías para destinarlas a colonizaciones especiales”. De conformidad con esta disposición “las explotaciones que se adelanten sobre tierras reservadas con posterioridad a la fecha en que adquieren esta calidad, no darán derecho al interesado para obtener la adjudicación de la superficie correspondiente sino cuando se hayan realizado de conformidad con los reglamentos de colonización que dicte el Instituto”.

Con posterioridad, el legislador expidió la Ley 160 de 1994 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”. En ella el legislador reconoció la protección reforzada de la propiedad indígena al establecer como funciones del antiguo INCORA, hoy INCODER “estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas y constituir, ampliar, sanear y reestructurar los resguardos en beneficio de las respectivas parcialidades”(art. 12 numeral 18). Estableció que los bienes que adquiriera el INCORA tendrán como una de sus finalidades “la constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos indígenas” (art. 38 b). Señaló que “no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas” (artículo 69). Indicó que “constituirá o ampliará resguardos de tierras y procederá al saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por personas que no pertenezcan a la respectiva parcialidad” (artículo 85). Y determinó que: “los terrenos baldíos determinados por el INCORA con el carácter de reservas indígenas, constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991” (art. 85 parágrafo 5).

Al reglamentar el capítulo de titulación de tierras de los pueblos indígenas de la Ley 160 de 1994 a través del Decreto 2164 de 1995 se definió la reserva indígena de la siguiente manera:

“Es un globo de terreno baldío ocupado por una o varias comunidades indígenas que fue delimitado y legalmente asignado por el INCORA a aquellas para que ejerzan en él los derechos de uso y usufructo con exclusión de terceros. Las reservas indígenas constituyen tierras comunales de grupos étnicos, para los fines previstos en el [Artículo 63 de la Constitución Política] y la [Ley 21 de 1991]”.

De acuerdo con lo anterior, las reservas se caracterizan por: (a) la asignación de un terreno baldío por parte de una entidad estatal, (b) para que sea usado excluyendo a terceros. (c) como lo indican la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2164 de 1995 las reservas se encuentran protegidas y son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

A diferencia de las reservas indígenas en las que se garantiza el uso y el usufructo en un bien, los resguardos implican la titularidad de la propiedad colectiva en un territorio que es de una parcialidad indígena. En la sentencia T-514 de 2009, en la que se estudió una tutela interpuesta, por un integrante de un resguardo que alegaba su exclusión del sistema general de participaciones por las autoridades indígenas la Sala de Revisión se refirió a la naturaleza jurídica de los resguardos. Al respecto, la Corte indicó que el resguardo indígena tiene dos características esenciales. De acuerdo con la primera, el elemento central del resguardo es la forma de propiedad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 329 de la Carta Política que dota a los resguardos del carácter de “propiedad colectiva de las comunidades indígenas”. De acuerdo con la segunda característica, “el resguardo se concibe como un ámbito territorial, entendido como el espacio en el que se ejercen los principales derechos de autonomía del resguardo, especialmente, aquellos relacionados con la regulación social y la autonomía política”.

Del marco normativo descrito es importante destacar que de conformidad con la configuración legislativa del derecho a la propiedad colectiva, las reservas indígenas otorgadas, bajo el amparo de la Ley 131 de 1965, constituyen tierras comunales que son inembargables, imprescriptibles e inalienables, como lo establece el artículo 63 de la Constitución. De igual manera, el INCODER se encuentra en la obligación de sanear la propiedad colectiva indígena.

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante Ley 21 de 1991 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”, reconoce la especial protección del territorio de los pueblos indígenas y establece que los Estados se encuentran obligados a protegerlos. Este tratado internacional es de especial importancia, por dos razones. En primer lugar, porque como lo ha indicado esta Corte forma parte del bloque de constitucionalidad. De conformidad con el artículo 93 de la Constitución “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. En segundo lugar, como se señaló con anterioridad, el Convenio 169 ha servido a la jurisprudencia de esta Corte para reconocer el carácter fundamental del derecho a la propiedad colectiva.

El territorio de los pueblos indígenas y tribales tiene una protección reforzada en el Convenio 169, al cual le dedica un Capítulo. Al respecto, establece que los Estados partes se encuentran especialmente obligados a respetar el carácter colectivo de los territorios de estos pueblos (art. 13). Así como el lugar “especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras”.

El Convenio 169 también reconoce la especial relación que hay entre la pervivencia de los pueblos indígenas y tribales y su territorio, al establecer que se deberá garantizar “la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico” (art. 19 a.). Y consagra el derecho de los pueblos a decidir el proceso de desarrollo que afecte a las tierras que ocupan (art. 7.1). También establece que la protección de la propiedad no se limita a las tierras habitadas por los pueblos ya que en los casos apropiados “deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia” (art. 14).

De igual manera, este tratado se preocupó muy especialmente de garantizar la integridad del territorio indígena contra actos de terceros. Además de establecer un deber general de “garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión” (Art. 14.2), señaló que “la ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos”. Y estableció que los Estados se encuentran en la obligación de prevenir éstas infracciones.

Con el fin de garantizar la protección de los territorios indígenas, el Convenio establece una serie de obligaciones procesales. Al deber general de consultar las decisiones que afecten los pueblos indígenas, consagrado en el artículo 6, lo acompañan disposiciones especiales para garantizar un deber especial de protección por actos que vulneren de manera especial su territorio. En este sentido, el artículo 15 dispone que se deberá consultar a los pueblos interesados “antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”. De igual manera, el artículo 16 establece como regla general que los pueblos indígenas no deberán ser trasladados de su territorio, también señala que cuando esto sea necesario “sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa” (art. 16.2). Y si su consentimiento no es posible el traslado y la reubicación “sólo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados” (art. 16.2).

La especial protección del territorio colectivo de los pueblos indígenas también se deriva de diferentes disposiciones que consagran el deber general de proteger estos pueblos. En este sentido el Convenio dispone que: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad” (art. 2.1). Establece que se deben adoptar medidas especiales de protección de los bienes de los pueblos (art. 4.1). Y en desarrollo del art. 6 los Estados tienen el deber general de consultar todas las medidas que los afecten directamente.

En suma, el Convenio 169 contempla una especial preocupación por proteger los territorios indígenas, los cuales se encuentran relacionados muy especialmente con su pervivencia colectiva y con su cosmovisión. Para tal fin, el Convenio establece: (i) la obligación del Estado de proteger el territorio colectivo contra actos de terceros, (ii) el deber de consultar las medidas que afecten su territorio; (iii) y que su propiedad debe comprender bajo ciertas circunstancias un territorio mucho más amplio del que habitan.

7. En la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 7 de septiembre de 2007, también se reconoce la especial importancia que tiene el

derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Esta Corporación ha reconocido el valor que tiene esta Declaración como fuente de derecho aunque no tenga la misma fuerza normativa que un tratado internacional. Sin embargo, la Corte estableció “la obligación de tomarla en consideración por el intérprete al momento de establecer el alcance de los derechos de los pueblos indígenas”. Al respecto esta Sala estableció recientemente que este instrumento era aplicable con fundamento en las siguientes consideraciones:

“(i) La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas precisa el contenido de un cuerpo normativo ya existente en el Convenio 169 de la OIT, otras normas de derechos internacionales, y el orden constitucional colombiano, a la vez que perfecciona y fortalece los estándares de protección de sus derechos.

En consecuencia, en principio, no presentan contradicciones normativas entre la Declaración y el orden interno, aunque en algunos aspectos la primera puede ir más allá del nivel de protección alcanzado por el Estado colombiano y previsto por el Convenio 169 de la OIT. En ese sentido, en tanto la Declaración precisa el alcance de las obligaciones de respeto, protección y garantía que el Estado debe asumir para asegurar la eficacia de un conjunto de derechos considerados fundamentales en la jurisprudencia constitucional, su aplicación contribuye a la eficacia de los derechos constitucionales y la fuerza normativa de la Constitución Política.

(ii) La Declaración contiene, así mismo, la opinión autorizada de la comunidad internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, y fue construida en un proceso de diálogo con los pueblos interesados. El Estado colombiano es parte de tratados y convenios internacionales asociados a la protección de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes (especialmente el Convenio 169 de la OIT), y la Constitución Política de 1991 reconoce y valora el pluralismo y multiculturalismo. Por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en esos tratados y la eficacia de las normas constitucionales concordantes, requiere el seguimiento de sus disposiciones.

(iii) El principio de no discriminación (segundo pilar de la Declaración, junto con la autodeterminación de los pueblos), es considerado una norma imperativa del derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración explica plenamente el alcance de este principio en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, su eficacia plena requiere la aplicación de las normas internas de forma concordante con la Declaración.

La Declaración posee un alto grado de legitimidad ética y política, en tanto documento emanado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en virtud de la intervención de los pueblos interesados en su discusión”.

La aplicación de las normas asociadas al pluralismo y la diversidad constitucional está permeada de razones éticas y políticas de las que el juez constitucional no puede prescindir al fallar, si pretende alcanzar un equilibrio adecuado entre intereses de grupos humanos que pueden sostener diferencias sensibles entre sus formas de vida. Por lo tanto, desconocer la Declaración podría llevar a decisiones irrazonables o arbitrarias, en oposición al principio de interdicción de la arbitrariedad, propio del Estado Constitucional de Derecho.

(v) Finalmente, las normas jurídicas son concebidas, desde ciertas orientaciones teóricas, como razones para la acción. Las fuentes de derecho son, desde ese punto de vista, razones especiales, en tanto se encuentran dotadas de autoridad. La Discusión sobre el carácter vinculante de la Declaración en el orden interno puede concebirse entonces como una discusión sobre si se trata de razones con autoridad o razones desprovistas de autoridad. Por supuesto, las segundas pueden ser utilizadas por las autoridades judiciales cuando contribuyen a solucionar un problema de discusión e interpretación normativa, siempre que ello no esté prohibido explícitamente. Las primeras, en cambio, tienen que o deberían ser atendidas por los jueces”.

En la sentencia T-376 de 2012, la Corte también señaló que las razones (i) a (iv) llevaron a la Sala a “concebir las disposiciones de la Declaración como razones para la acción dotadas de autoridad, algunas de las cuales tienen que ser tomadas en cuenta por los operadores jurídicos; mientras que otras deberían ser consideradas en sus decisiones”. Las primeras son aquellas “que desarrollan el principio de no discriminación frente a pueblos indígenas, así como las que precisan el alcance de derechos ya reconocidos en el orden interno”. Y las segundas “amplían los estándares de protección alcanzados en el orden interno a través de las normas constitucionales citadas, la jurisprudencia de este Tribunal, la Ley o el Reglamento”.

El presente caso se refiere al derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, el cual se encuentra consagrado en la Constitución. En consecuencia y teniendo en cuenta que la Declaración precisa el alcance de este derecho, la Sala considera que ésta tiene que ser tomada en cuenta en su decisión.

Al igual que en el Convenio 169 y en la Constitución, el territorio de los pueblos indígenas ocupa un lugar muy importante en la Declaración. Como se destaca en su Preámbulo obedece a la preocupación entre otros motivos “de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses”. También responde a la necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas “especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”. De igual manera, la Declaración se construye sobre la premisa “de que si los pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades”.

La Declaración establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación (art. 3) y a no ser sometidos a asimilación forzada (art. 8). Prevé que los Estados deben establecer mecanismos eficaces para prevenir y resarcir entre otras conductas: (i) “Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica”; (ii) “todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos”; y (iii) “toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos” (art. 8.2). A su vez el artículo 12 consagra el derecho a mantener y proteger sus lugares culturales y religiosos, y acceder a ellos. Estas disposiciones demuestran, como lo ha establecido la jurisprudencia de

esta Corte, que existe una interdependencia entre el derecho a la propiedad colectiva con otros principios y valores como la integridad cultural, su pervivencia como grupo colectivo y la libertad religiosa.

Además de esta interdependencia, es necesario destacar que la Declaración desarrolla detalladamente la manera como debe ser protegido y el contenido del derecho fundamental al territorio colectivo. Establece que los pueblos indígenas “tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado” (art. 25.1). También “tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido”. Este derecho comprende el derecho de “poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma” (art. 25.2). Con el fin de garantizar el derecho a la tierra, “los Estados asegurarán reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos” (art. 25.3). La garantía de este derecho comprende (i) la reparación cuando haya sido vulnerado (art. 28); (ii) la creación de procesos adecuados para reconocer y adjudicar sus derechos a la tierra (art. 27); (iii) la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos (art. 29); (iv) el deber del Estado de no desarrollar actividades militares en el territorio indígena a no ser que se encuentre justificado por razones de interés público (art. 30).

En síntesis, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento que es directamente aplicable por esta Corte. Este instrumento internacional consagra estándares de respeto y protección reforzada del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, el cual también es necesario para garantizar el derecho a la integridad cultural de estos pueblos.

b) Subreglas sobre el derecho a la propiedad colectiva.

De conformidad con los precedentes de esta Corte, el derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas comprende: (i) el derecho a constituir resguardos; (ii) la protección contra actos de terceros; (iii) según los precedentes este derecho es además un medio para garantizar la integridad étnica y la supervivencia de los pueblos indígenas.

i) Derecho fundamental a constituir resguardos

8. Esta Corte ha señalado que el derecho a la propiedad colectiva comprende el derecho que tienen los pueblos indígenas a constituir resguardos. Este derecho fue enunciado y amparado por primera vez en la sentencia T-188 de 1993, en la que esta Corporación decidió una tutela interpuesta por la comunidad de Paso Ancho en el Tolima, en la que se solicitaba que se le ordenara al INCORA que adelantara los procedimientos pertinentes para constituir un resguardo. Los peticionarios alegaron que la falta de constitución del resguardo había generado conflictos entre las personas que habitaban en la zona. Para decidir, la Corte señaló que “el derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos étnicos lleva implícito, dada la protección constitucional del principio de diversidad étnica y cultural, un derecho a la constitución de resguardos en cabeza de las comunidades indígenas”. De acuerdo con lo anterior y después de referirse a la Ley 135 de 1961 citada con anterioridad, estableció que “el desarrollo legislativo de la protección a la propiedad colectiva mediante la constitución de resguardos confiere precisas facultades al INCORA, entidad oficial que está obligada a colaborar efectivamente para la realización de los fines del Estado, en especial asegurando la convivencia pacífica (CP art. 2) y adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados (CP art. 13)”. En consecuencia, la Corte le ordenó a esta entidad la realización de los estudios socioeconómicos y jurídicos tendientes a la constitución de uno o varios resguardos en la zona.

En la sentencia T-652 de 1998, esta Corte protegió el derecho fundamental a la propiedad colectiva del pueblo indígena Embera Katío del Alto Sinú entre otros argumentos, porque el pueblo había sido dividido por el INCORA en dos resguardos, aunque no existía una solución de continuidad entre uno y otro pueblo. En consecuencia resolvió con fundamento en el Convenio 169 de la OIT que el Incora debía constituir un solo resguardo.

Con posterioridad, en la sentencia T-634 de 1999, esta Corte decidió una tutela interpuesta contra la ordenanza que creaba el municipio de Pueblo Bello, por violación del derecho fundamental a la consulta previa, pese a que parte del territorio de ese municipio se había reconocido como “territorio indígena”. Aunque esta Corporación negó en aquella oportunidad el amparo porque consideró que la acción que se debía interponer era la acción popular, la Corte hizo algunas consideraciones relacionadas con el territorio que es importante destacar. Constató que la calificación del resguardo como derecho fundamental permite una calificación diferente a tierra y territorio y es la de “ámbito territorial”, que aparece en el artículo 246 de la C.P., lo cual implica por ejemplo que exista identidad entre las personas y el territorio. Citando la sentencia C-058 de 1994 estableció que este derecho fundamental protege “a los indígenas que vivan con los indígenas y como los indígenas”.

De acuerdo con dos de las sentencias citadas el derecho fundamental a la propiedad colectiva implica el derecho a constituir resguardos en el territorio habitado por los pueblos indígenas. No obstante, esta manera de entender el derecho fundamental al territorio como el lugar donde se encuentran asentados los indígenas sería superado con posterioridad por la jurisprudencia de esta Corporación para referirse a la noción de ancestralidad que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ii) El derecho al territorio colectivo comprende el saneamiento y la protección contra actos de terceros

9. El derecho a la propiedad colectiva implica que el Estado debe protegerlo contra actos de terceros. Con el fin de abordar la manera en que se han resuelto los conflictos entre el derecho fundamental a la propiedad colectiva y los conflictos con terceros se abordará en primer lugar los criterios que han desarrollado la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, se presentará la manera en que han sido protegidos por esta Corte el derecho fundamental al territorio de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes respecto de terceros que se encuentran en su territorio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han coincidido que el derecho a la propiedad previsto en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano que se encuentra encargado de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sistematizó recientemente en el informe, *Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales*, algunos criterios que se deben tener en cuenta cuando existen conflictos de la propiedad con terceros.

La Comisión Interamericana advirtió que “los pueblos indígenas o tribales y sus miembros tienen derecho a que su territorio sea reservado para ellos, sin que existan dentro de sus tierras asentamientos o presencia de terceros o colonos no indígenas”. Y señaló que como consecuencia de este derecho “el Estado tiene una obligación correlativa de prevenir la invasión o colonización del territorio indígena o tribal por parte de otras personas”. Y en consecuencia estableció que el Estado tiene “el deber de realizar las gestiones y actuaciones necesarias para reubicar a aquellos habitantes no indígenas del territorio que se encuentren asentados allí”.

Después de analizar los precedentes de la Corte Interamericana, la Comisión concluyó que los Estados partes en la Convención Americana tienen “un deber estatal de priorizar, en términos generales, los derechos de los pueblos indígenas en casos de conflicto con derechos de propiedad de terceros, en la medida en que los primeros están vinculados a la supervivencia cultural y material de estos pueblos”. Y advirtió:

“Ello no implica el desconocimiento del derecho a la justa compensación que puedan corresponder a los terceros de buena fe, como consecuencia de la limitación a su derecho legítimo de propiedad en favor del derecho de propiedad comunal bajo el artículo 21 de la Convención Americana. En relación con los terceros que no son poseedores de buena fe, es responsabilidad del Estado garantizar a los pueblos indígenas el goce efectivo del derecho de propiedad comunal, incluyendo el derecho a la restitución”.

Al respecto resultan relevantes dos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que se debatió la manera de resolver los conflictos entre el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y el derecho a la propiedad individual de terceros.

El primer precedente es el caso *Yayke Axa contra Paraguay* en el que la Corte I.D.H. debió resolver, si el hecho de que el territorio ancestral estuviera en manos de terceros, era un motivo suficiente para no entregarlo a la comunidad indígena. En aquella oportunidad la Corte estableció que “tanto la propiedad privada de los particulares como la propiedad comunitaria de los miembros de las comunidades indígenas tienen la protección convencional que les otorga el artículo 21 de la Convención Americana”.

Al resolver estos conflictos, de acuerdo con la Corte, “los Estados deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida”. Y advirtió que “al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros”. Por el contrario, según la Corte “la restricción que se haga al derecho a la propiedad privada de particulares pudiera ser necesaria para lograr el objetivo colectivo de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista en el sentido de la Convención Americana; y proporcional, si se hace el pago de una justa indemnización a los perjudicados, de conformidad con el artículo 21.2 de la Convención”.

El segundo precedente de la Corte Interamericana que puede ilustrar la manera de resolver los conflictos entre el derecho al territorio colectivo y los derechos de terceros es el caso de la Comunidad Indígena *Sawhoyamaya contra Paraguay*. En este fallo la Corte debió resolver si esta comunidad tenía derecho a la restitución de sus propiedades ancestrales que se encontraban en manos de terceros. Al respecto la Corte I.D.H. indicó que “los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”. En consecuencia, señaló que “la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas”.

De igual manera, la Corte señaló que el derecho de los pueblos indígenas a la recuperación de sus tierras permanece vigente hasta tanto exista una relación única con sus tierras tradicionales. Sin embargo, advirtió que para que sea necesaria esta relación especial con sus tierras para exigir su restitución es necesario que ésta sea posible. Al respecto la Corte I.D.H. advirtió:

“Debe considerarse, además, que la relación con la tierra debe ser posible. Por ejemplo, en casos como el presente, que la relación con la tierra se manifiesta inter alia en las actividades tradicionales de caza, pesca y recolección, si los indígenas realizan pocas o ninguna de esas actividades tradicionales dentro de las tierras que han perdido, porque se han visto impedidos de hacerlo por causas ajenas a su voluntad que impliquen un obstáculo real de mantener dicha relación, como violencias o amenazas en su contra, se entenderá que el derecho a la recuperación persiste hasta que tales impedimentos desaparezcan”.

Y señaló que “una vez que se ha demostrado que el derecho de recuperación de las tierras tradicionales perdidas está vigente, corresponde al Estado realizar las acciones necesarias para devolverlas a los miembros del pueblo indígena que las reclama”. La Corte concluyó que las tierras ancestrales le pertenecían al pueblo, el cual tenía un vínculo con éstas, por lo cual decidió que se había violado el derecho a la propiedad colectiva previsto en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Adicionalmente con respecto a los conflictos entre los derechos de los pueblos indígenas con terceros, la Corte I.D.H. advirtió “el mero hecho de que las tierras reclamadas estén en manos privadas, no constituye per se un motivo “objetivo y fundamentado” suficiente para denegar prima facie las solicitudes indígenas”.

10. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas encargado de interpretar el sentido y alcance de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la cual Colombia es parte, también ha reconocido el derecho que tienen los pueblos indígenas a que se les restituyan las tierras que son de su propiedad. Al respecto, este Comité estableció en su Recomendación General No 23 relativa a los derechos de los pueblos indígenas que “en los casos en que se les ha privado [a los pueblos indígenas] de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos [los Estados deberían] adoptar[r] medidas para que les sean devueltos”.

De conformidad con los precedentes citados de la Corte Interamericana, y según la interpretación autorizada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: (i) no es necesaria la posesión para que los pueblos indígenas reclamen la delimitación y protección de su territorio; (ii) los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de sus territorios una vez han pasado a manos de terceros; (iii) el derecho a la restitución subsiste hasta que permanezca el vínculo que los une con su territorio y/o hasta que desaparezcan los obstáculos de hecho como la violencia que les han impedido usar sus territorios; (iv) es necesario considerar si con la limitación del derecho a la propiedad, se afectan otro tipo de derechos. De acuerdo con los estándares de la Corte Interamericana para establecer si una limitación del derecho a la propiedad se encuentra conforme con la Convención Americana es necesario que reúna los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad y el logro de un objetivo legítimo en una sociedad democrática.

11. La Corte Constitucional ha determinado que el Estado se encuentra obligado a proteger los territorios colectivos. En la sentencia T-955 de 2003 la Corte amparó los derechos fundamentales a la propiedad colectiva, a la diversidad e integridad étnica y cultural a la participación y a la subsistencia de las comunidades afrocolombianas de la Cuenca del Río Cacarica, donde se estaban talando bosques que formaban parte del territorio colectivo. La decisión de la Corte se fundamentó en la ausencia de consulta previa y en la ausencia de beneficios de la explotación maderera para los integrantes de la comunidad.

La estrecha relación que existe entre el derecho a la propiedad colectiva y la integridad étnica de los pueblos indígenas fue uno de los motivos que llevó a ésta Corte a proferir el Auto 004 de 2009, en el cual estableció que éstos derechos se encontraban amenazados por las invasiones de terceros. En aquella oportunidad la Corte estableció que “los pueblos indígenas colombianos también han sido afectados por ciertos procesos de índole territorial y socioeconómica que se entrelazan con los procesos bélicos propiamente dichos, a través de múltiples y complejos patrones que redundan en mayores violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos”. Por su relevancia para los hechos del caso es importante resaltar dos de éstos procesos. En primer lugar “el despojo territorial simple por parte de actores con intereses económicos sobre las tierras y recursos naturales de propiedad de las comunidades indígenas (...) así como por parte de colonos que invaden sus territorios”. Y en segundo lugar, “el desarrollo de actividades económicas lícitas o ilícitas en territorios indígenas”.

Con el fin de garantizar la existencia de los pueblos en riesgo, dentro de los cuales se encuentra incluida el pueblo peticionario, la Corte le ordenó al Gobierno nacional adoptar un plan de salvaguarda para su protección que comprende diez elementos mínimos de los cuales se deben destacar dos que demuestran su importancia para los hechos de este caso. El primero es que dicho plan “Debe contener un ingrediente de protección de los territorios tradicionales, especialmente de los que están en proceso de titulación y asimismo de los que ya se encuentran titulados, frente a los distintos procesos bélicos y de despojo que se han descrito en el presente auto. Y en segundo lugar “debe prever herramientas para el fortalecimiento de la integridad cultural y social de cada etnia beneficiaria”.

De igual manera, en el auto 005 de 2009, también en seguimiento de la sentencia T-025/04, esta Corte encontró que los afrocolombianos, al igual que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional, eran impactados de manera desproporcionada por el desplazamiento forzado. Estableció que uno de los factores transversales de esta situación es que “la deficiente protección jurídica e institucional de los territorios colectivos de los afro colombianos (...) ha estimulado la presencia de actores armados que amenazan a la población afrodescendiente para abandonar sus territorios”. En este sentido resaltó que “a pesar de que los territorios étnicos tienen el carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables, estas garantías constitucionales no han sido aplicadas adecuadamente para impedir las violaciones de los derechos de las comunidades afrocolombianas, lo cual ha facilitado las ventas ilegales y el despojo de territorios colectivos y la expulsión de territorios ancestrales que están en proceso de titulación colectiva”. Y agregó que “tampoco se han implementado instrumentos específicos encaminados a la efectiva restitución material y a garantizar el goce efectivo de los derechos territoriales de esos grupos vulnerables, ni se han destinado recursos suficientes para el saneamiento y delimitación de esos territorios”.

Por lo tanto la Corte ordenó, entre otras medidas, al Ministerio del Interior, la realización de un estudio en el que se determinaran entre otros aspectos “los mecanismos para garantizar la restitución efectiva de los territorios cuya propiedad haya sido transferida con violación de lo que establece la Ley 70 de 1993, incluido el establecimiento de presunciones de ilegalidad de las transacciones realizadas sobre dichos territorios sin el cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la Ley 70 de 1993”.

En auto del 18 de mayo de 2010 esta Corte encontró riesgos de explotación económica en los territorios colectivos de las cuencas de los ríos de Jiguamiando y Curvaradó que podrían impedir su restitución efectiva. Ante la ausencia de medidas de protección de las tierras por parte de las autoridades, y teniendo en cuenta la grave situación de orden público y la grave situación de seguridad de las comunidades, la Corte decidió entre otras medidas que se debían congelar las transacciones de los predios amparados como territorios colectivos, tal como lo prevé el Decreto 2007 del 2000, e “impedir que se realicen transacciones sobre estos territorios que puedan hacer nugatoria su restitución efectiva”.

En la sentencia T-129 de 2011 la Corte Constitucional resolvió una tutela presentada por el pueblo Embera Katío de Chidima y Pescadito, en la que la Corte resolvió proteger, entre otros aspectos, su derecho a la propiedad colectiva por la invasión que habían realizado colonos a las tierras constituidas como resguardos indígenas. De conformidad con el pueblo estas invasiones habían sido posible por el fraccionamiento del territorio en tres resguardos, por lo cual solicitaban su englobe en uno

solo. Esta Corporación encontró que los entes encargados de la protección de la integridad de las comunidades étnicas habían omitido éste deber y que la comunidad se encontraba en peligro, por lo cual ordenó al Incoder que determine si hay lugar o no al englobe de los resguardos.

En conclusión, los pueblos indígenas tienen un derecho fundamental a la propiedad colectiva, debido a que su integridad como pueblo se encuentra directamente relacionada con su permanencia en su territorio. En desarrollo de ésta obligación la Corte ha protegido el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes contra actos de terceros y ha encontrado omisiones de las autoridades públicas encargadas de garantizar éstos derechos. Para garantizar este derecho contra actos de terceros ha ordenado: (i) un plan de salvaguarda respecto de aquellas etnias que se encuentran en riesgo que tiene un componente para garantizar un integridad étnica y otro para garantizar su territorio; (ii) establecer mecanismos para la restitución de las comunidades afrodescendientes que se hubiesen realizado, sin los requisitos previstos en la Ley 70 de 1993; (iii) congelar las transacciones sobre un territorio colectivo por los riesgos de explotación económica.

iii) El derecho a la propiedad colectiva es un medio para garantizar la integridad de las comunidades indígenas.

12. Esta Corte ha destacado desde los primeros años de su jurisprudencia que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales es un medio para garantizar su derecho a la subsistencia y a la identidad étnica y cultural.

El primer fallo de tutela en el cual esta Corporación analizó el derecho a la subsistencia fue la sentencia T-380 de 1993, en la cual la Corte debió resolver si se vulneró el derecho a la vida de la comunidad indígena Embera Katío del río Chajeredó, por la explotación maderera en su territorio y por la omisión de las autoridades públicas para detener la tala. Al respecto, ésta Corporación señaló que “entre otros derechos fundamentales, las comunidades indígenas son titulares del derecho fundamental a la subsistencia” el que se deduce directamente del derecho a la vida consagrado en el artículo 11 de la Constitución. Y señaló que:

“La cultura de las comunidades indígenas, en efecto, corresponde a una forma de vida que se condensa en un particular modo de ser y de actuar en el mundo, constituido a partir de valores, creencias, actitudes y conocimientos, que de ser cancelado o suprimido - y a ello puede llegarse si su medio ambiente sufre un deterioro severo -, induce a la desestabilización y a su eventual extinción”.

Al analizar el caso concreto la Corte indicó que “la inacción estatal, con posterioridad a la causación de un grave daño al medio ambiente de un grupo étnico, dada la interdependencia biológica del ecosistema, puede contribuir pasivamente a la perpetración de un etnocidio, consistente en la desaparición forzada de una etnia (CP art. 12) por la destrucción de sus condiciones de vida y su sistema de creencias”. En consecuencia le ordenó a la entidad demandada adelantar las acciones necesarias para restablecer el medio ambiente.

En la sentencia SU-039 de 1997, en la que la Corte decidió una tutela interpuesta por el pueblo UWA por la ausencia de consulta previa de la explotación petrolera de sus territorios, esta Corporación también se refirió al derecho a la subsistencia. Y señaló que uno de los medios para garantizar este derecho era el derecho fundamental a la consulta previa. Al respecto la Corte indicó:

“La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que como se ha visto antes configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Y precisamente, para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. De este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la referida integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, en los términos del art. 40, numeral 2 de la Constitución, como es el derecho de participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones”.

La aplicación del derecho a la subsistencia sería reiterado con posterioridad en la sentencia T-652 de 1998 en la que la Corte resolvió una tutela interpuesta por el pueblo indígena Embera Katío del Alto Sinú, por la construcción de la represa hidroeléctrica Urra I, sin realizar una consulta previa. En aquella oportunidad la Corte tuteló los derechos del pueblo, a la supervivencia la integridad étnica, cultural, social y económica, a la participación y al debido proceso. Como el daño a los derechos ya se había consumado esta Corporación ordenó “que se indemnice al pueblo afectado al menos en la cuantía que garantice su supervivencia física, mientras elabora los cambios culturales, sociales y económicos a los que ya no puede escapar, y por los que los dueños del proyecto y el Estado, en abierta violación de la Constitución y la ley vigentes, le negaron la oportunidad de optar”.

En la sentencia T-769 de 2009 la Corte debió resolver si el otorgamiento de un título minero en el territorio indígena del Resguardo Río Murindó, sin la previa realización de una consulta a todos los afectados violaba los derechos de la comunidad indígena, a la participación, a la consulta previa y a la existencia, autonomía, identidad e integridad cultural. En aquella oportunidad la Corte destacó que “la exploración y explotación de los recursos naturales en estos territorios protegidos, debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades nativas, integridad que como se ha visto antes configura un derecho fundamental para la comunidad, por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura”. Y agregó que “para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación y exploración de recursos naturales en su hábitat, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dichas actividades”. La tutela fue concedida porque no se había convocado a todas las comunidades afectadas por la concesión minera a la consulta previa.

14. Los órganos del sistema interamericano, al igual que ésta Corte, también han destacado que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas es un medio para garantizar su integridad étnica y su supervivencia. En este sentido el caso del pueblo indígena Yayke Axa contra Paraguay en el cual la Corte Interamericana consideró que la violación de garantizar el derecho a la propiedad colectiva “ha afectado el derecho a una vida digna de los miembros de la Comunidad, ya que los ha privado de la posibilidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales, así como del uso y disfrute de los recursos naturales necesarios para la obtención de agua limpia y para la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de enfermedades”. En consecuencia, la Corte declaró la violación del derecho a la vida de la comunidad indígena.

De igual manera es importante destacar de la sentencia Yayke Axa la relación que existe entre el uso de su territorio ancestral y la preservación de su identidad étnica y cultural. Al respecto la Corte indicó que para los pueblos indígenas, “la posesión de su territorio tradicional está marcada de forma indeleble en su memoria histórica y la relación que mantienen con la tierra es de una calidad tal que su desvinculación de la misma implica riesgo cierto de una pérdida étnica y cultural irreparable, con la consecuente vacante para la diversidad que tal hecho acarrearía”.

La Comisión Interamericana también ha destacado en su reciente informe sobre las Tierras Ancestrales de los Pueblos Indígenas, citado en la sección anterior, que el derecho a la propiedad colectiva es la base para desarrollar su integridad étnica. Al respecto la Comisión indicó que los pueblos indígenas tienen derecho a que:

“el Estado les garantice en forma efectiva su derecho a vivir en su territorio ancestral y poder así (...) preservar su identidad cultural. Al no garantizar el Estado el derecho de propiedad territorial de las comunidades indígenas y sus miembros, se les priva “no sólo de la posesión material de su territorio sino además de la base fundamental para desarrollar su cultura, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Por ello, en virtud del artículo 21 de la Convención Americana, la garantía del derecho a la propiedad territorial es un medio para preservar la base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas”.

De acuerdo con los precedentes citados el derecho a la propiedad colectiva no solamente es un fin en sí mismo, sino que además un medio para garantizar la supervivencia y la integridad étnica de los pueblos indígenas, la cual ha sido considerada un derecho fundamental. Este derecho se ve gravemente afectado cuando existen exploraciones o explotaciones a gran escala en los territorios de los pueblos indígenas.

2. Caso en concreto

Para resolver la tutela interpuesta por el pueblo indígena Kofan, la Sala dividirá esta sección en tres partes. En la primera parte (a) analizará la procedencia formal de la tutela. En la segunda parte (c) resolverá el fondo del asunto. En la tercera parte (c) presentará los remedios a adoptar.

a) Procedibilidad formal de la tutela interpuesta.

Tal como se señaló en la sección de antecedentes, la tutela fue negada por los jueces de primera y segunda instancia, porque no se agotó el proceso administrativo de saneamiento ante el INCODER. Adicionalmente, el juez de primera instancia señaló que no se configuraba un perjuicio irremediable, ni se cumplía con el requisito de inmediatez, porque al momento de la interposición de la acción de tutela habían transcurrido más de catorce años desde la creación del resguardo indígena en 1998 y no se justificó su inactividad durante un periodo tan prolongado. El juez de segunda instancia señaló que el pueblo peticionario debe agotar el proceso previsto en la Ley 160 de 1994, porque de esta manera se garantiza el derecho a la igualdad de otros pueblos indígenas con pretensiones similares.

Al respecto, los peticionarios indicaron que la acción de tutela es su único medio de defensa judicial efectivo para garantizar su derecho a la propiedad colectiva y que la existencia de otros medios de defensa de carácter administrativo no afecta la procedencia de la tutela. Agregaron que los 14 años que han transcurrido desde la constitución del resguardo no deben ser tenidos en cuenta como inactividad, sino como una prolongada omisión del Estado para proteger sus derechos. Señalaron que pertenecer a un pueblo de extinción constituye un perjuicio irremediable.

15. De acuerdo con lo anterior, le corresponde a la Sala resolver si en el presente caso la tutela resulta improcedente, porque el pueblo indígena no agotó el proceso administrativo de saneamiento previsto en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto 2164 de 1995.

La Constitución establece en su artículo 86 que la tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. De manera similar el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” señala que la acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Sin embargo, el Decreto citado también advierte que “la existencia de dichos medios [de defensa] será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”. Al respecto esta Corte ha sostenido en su jurisprudencia:

“para los efectos de establecer cuándo cabe y cuándo no la instauración de una acción de tutela, el juez está obligado a examinar los hechos que ante él se exponen así como las pretensiones del actor, y a verificar si, por sus características, el caso materia de estudio puede ser resuelto, en relación con los derechos fundamentales posiblemente afectados o amenazados, y con la efectividad indispensable para su salvaguarda, por los procedimientos judiciales ordinarios, o si, a la inversa, la falta de respuesta eficiente de los medios respectivos, hace de la tutela la única posibilidad de alcanzar en el caso concreto los objetivos constitucionales”.

Para establecer si un medio de defensa desplaza a la tutela debe establecerse que es idóneo y eficaz. La Corte ha precisado que ésta “sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley”.

Si bien a través del proceso administrativo de saneamiento los peticionarios podrían lograr lo que pretenden mediante la acción de tutela este proceso no puede desplazar a la tutela como medio principal de protección del pueblo indígena Kofán, porque el proceso de constitución del resguardo ha demostrado que es ineficaz en la práctica para proteger de manera oportuna el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. En varias sentencias de tutela de esta Corte se ha declarado la violación del derecho al debido proceso administrativo de pueblos indígenas, por la dilación injustificada en los procesos de constitución de resguardos indígenas.

Al respecto, la Corte tuteló en la sentencia T-079 de 2001 el derecho de petición del Resguardo Indígena de Quizgó, porque el INCORA se había tardado más de trece meses en decidir la solicitud de ampliación del resguardo.

Con posterioridad, en la sentencia T-909/09, la Corte resolvió una tutela interpuesta por el Consejo Comunitario del Río Naya contra el INCODER, por la demora injustificada de 10 años en el proceso administrativo de la titulación del territorio colectivo. En aquella oportunidad la Corte señaló que “la dilación injustificada que ha impedido adoptar una decisión de fondo en el trámite administrativo de titulación colectiva del territorio ancestral de la Comunidad Afrodescendiente de la Cuenca del Río Naya aparejó el desconocimiento de su derecho constitucional fundamental al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural e implicó la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la dignidad y a la igualdad de sus integrantes”. Esta Corporación llamó la atención porque la demora injustificada era más gravosa si se consideraba que la comunidad vivía en una región gravemente afectada por el conflicto armado interno, y porque integrantes de la comunidad habían sido víctimas de amenazas, homicidios selectivos.

En la sentencia T-009 de 2013, la Corte declaró la violación del derecho al debido proceso, a la vida, a la salud, a la educación y a la autodeterminación del pueblo indígena Sikuaní Arizona Cupepe por las dilaciones injustificadas de más de 14 años en el proceso administrativo de constitución de su territorio colectivo como resguardo indígena. En aquella oportunidad, la Corte estableció que “el contexto de conflicto armado en el que se asienta la población indígena de este caso es particularmente grave, y la situación a la que se expone la comunidad por no delimitar y reconocer su territorio, provoca un estado de vulnerabilidad mucho mayor”.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, esta Sala encuentra que los procesos administrativos de constitución, ampliación saneamiento de resguardo de pueblos indígenas en zonas de conflicto armado no se han caracterizado por su celeridad. Los peticionarios son sujetos de especial protección constitucional por tratarse de una comunidad indígena. Con el agravante que se encuentran en peligro de extinción como lo señaló el auto 004 de 2009, tal como se abordará con mayor detalle en el siguiente acápite. El pueblo se dirigió por lo menos desde 1985 al Gobierno Nacional solicitando el saneamiento de la reserva indígena, sin que hasta la fecha este se haya realizado o se hayan adoptado medidas para prevenir las invasiones de terceros que los indígenas denunciaban. En razón de lo anterior, la Sala concluye que la tutela es procedente.

La Sala considera que tampoco se ha desconocido el principio de inmediatez, como lo señaló el juez de primera instancia. Aceptar que la tutela no procede, porque se incumple con este principio, sería trasladar la inactividad de las entidades estatales a los peticionarios cuando éstos han solicitado de manera reiterada el saneamiento de la reserva constituida en 1973, desde el momento que comenzó a ser ocupada por terceros. En 1976 denunciaron la ocupación de personas ajenas, y como se señaló en el párrafo anterior, por lo menos desde 1985 han solicitado que se realice el saneamiento. Esa solicitud ha sido reiterada desde esa fecha. En consecuencia, el requisito de inmediatez se debe considerar cumplido.

b) Análisis de fondo.

Con el fin de establecer si el INCODER y con anterioridad el INCORA han amenazado el derecho a la supervivencia étnica del pueblo indígena Kofán, por no adelantar acciones, para prevenir la ocupación de terceros de la reserva indígena constituida en 1973. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, en esta sección la Corte abordará en primer lugar la situación en la cual se encuentra este pueblo. En segundo lugar presentará las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la supervivencia de este pueblo. En tercer lugar decidirá si se presentó una amenaza contra los derechos de los peticionarios. Finalmente presentará las órdenes para remediar la violación.

i) Situación del pueblo indígena Kofán.

16. Por lo menos desde 1973 la pervivencia de la etnia indígena Kofán se encuentra en serio peligro. En la resolución 1981 de 1973, por medio de la cual se constituyó la reserva para que fuera habitada por la etnia Kofán, el INCORA señaló que los indígenas que habitan en la zona “han sido notoriamente diezmados físicamente y reducidos en sus posesiones territoriales, primero por la acción minera, luego cauchera y últimamente por la colonización desatada a raíz del ingreso de las compañías petroleras”. Y mencionó como uno de los motivos para establecer la reserva que “el incremento de la colonización ofrece aún a los indígenas de la zona el peligro de ser desplazados”.

El riesgo de ser desplazados se materializó para muchos integrantes del pueblo Kofán debido a la invasión de los colonos. En un informe de junio de 1990 realizado por el INCORA después de una visita a la reserva se advierte: “como consecuencia de la invasión por parte de los colonos a las reservas se viene dando la desmembración y desarticulación de las etnias Kofán, Ingá y Siona, ocasionando la invasión de importantes núcleos hacia el Ecuador, debido a que perdieron los territorios tradicionales de caza, pesca, recolección de plantas medicinales, como el Yajé teniendo los curacas que alejarse de las comunidades para poder conseguir los elementos principales de ejercer las actividades de médico tradicional”.

En una visita posterior al resguardo realizada por el INCORA en 1996 se resalta en el informe correspondiente que los colonos "les dejaron a los indígenas un promedio de 21,6 hectáreas por familia, área insuficiente si se tiene en cuenta el sistema de trabajo de los indígenas de rotación de cultivos y de sitios de explotación para conservar y mejorar la fertilidad de las tierras". Y se agregó que éstas son "insuficientes también porque necesitan áreas para caza, pesca, lugares para conseguir plantas medicinales por cuanto poseen suficiente conocimiento en estas actividades de medicina tradicional". De igual manera, en el estudio se advierte que la economía de subsistencia se encuentra agravada, porque la invasión de colonos les quitó las mejores áreas, y en su mayoría para siembra de cultivos ilícitos.

Ese mismo año (1996) se realizó un nuevo estudio socioeconómico por parte del INCORA que llegó a conclusiones similares. Allí se indica: "la explotación petrolera, la tala indiscriminada de bosque, la contaminación de los suelos, las aguas, entre otros, el empuje avasallador de la colonización sobre las tierras de las comunidades aborígenes ocasionó la pérdida de los valores culturales de las etnias, y por consiguiente, su integración y vinculación, a ésta, pero a través de estratos sociales más pobres y marginales". En el estudio se dijo: "en tal sentido se ha limitado su capacidad de utilización de los recursos naturales en las prácticas tradicionales de horticultura, de la caza, pesca y recolección de productos del bosque, teniendo que adoptar nuevos patrones de la cultura occidental para su supervivencia". Advirtió que "la etnia Kofán, es una cultura milenaria, que se encuentra en un rápido proceso de extinción", y señaló que las causas que pueden estar incidiendo en éste proceso son las vías de infraestructura, la colonización, el petróleo, los cultivos ilícitos y la carencia de tierras.

La gravedad de la amenaza a la integridad étnica del pueblo Kofán sería corroborada años después por la Defensoría del Pueblo, en un estudio realizado por esta entidad entre el 2003 y el 2004, y que fue presentado como anexo en este proceso. De acuerdo con este informe, se encontró que en el municipio del Valle del Guamuez: "El pueblo Kofán está considerado un pueblo en vía de extinción. En algunas comunidades se ha perdido parte de la cultura pero en la mayoría se mantiene viva, quedan 375 habitantes de la lengua kofán que son artesanos de canastos, mochilas, collares, instrumentos de uso tradicional y ceremonial".

La Defensoría del Pueblo también advierte en este informe que en dicho municipio, donde los indígenas Kofan se encuentran asentados con otras comunidades indígenas, también se encuentran afectadas las tradiciones alimentarias de este pueblo "por la prohibición impuesta por la guerrilla, respecto a la caza y pesca en sus territorios". El informe estableció que la situación de orden público "es bastante crítica por la presencia de la guerrilla y de los grupos paramilitares". Y consagró que "los indígenas son señalados de pertenecer a cualquiera de los bandos, hecho que ha provocado muerte, tortura y desaparición forzada de varios líderes y miembros de las comunidades indígenas".

Con posterioridad a la realización del informe de la Defensoría del Pueblo, la Corte emitió el auto 004 de 2009, en el cual indicó que el pueblo Kofan era uno de los que se encontraba en peligro de extinción. En aquella oportunidad la Corte indicó con fundamento en diferentes fuentes que de acuerdo con ésta etnia "hay tres puntos básicos que son objeto de su preocupación por plantear riesgos claros para su supervivencia étnica, a saber, la presencia de cultivos ilícitos y la realización de fumigaciones con efectos indiscriminados; la realización de actividades petroleras sin consulta previa; y la instalación del Centro Nacional de Atención Fronteriza, sin consulta previa, en su territorio". La Corporación estableció que el pueblo ha denunciado desde 2002: "la intensificación del conflicto en el Putumayo está violando sus derechos, y pidiendo protección y trabajando en su defensa a través del Plan de Vida".

En síntesis, el pueblo Kofán se encuentra en vía de extinción. Así lo han colegido esta Corte, el INCORA y la Defensoría del Pueblo. No existe ninguna prueba en el expediente que desvirtúe esta conclusión. Las causas que han contribuido a esta situación se encuentran directamente relacionadas, como lo advirtió el INCORA, con la ausencia de territorio.

ii) Medidas adoptadas por los organismos estatales para garantizar la propiedad como medio para asegurar la integridad étnica del pueblo.

17. Tal como se señaló en la sección de antecedentes, el INCORA facultó a su Gerente General, en la resolución 168 de octubre de 1968, para destinar como zona de colonización especial, un sector de los terrenos baldíos ubicados en Santa Rosa del Guamuez, con el fin de destinarlas a las comunidades indígenas de la región. Y agregó que "en dichas zonas no se permitirá la ocupación ni la consiguiente adjudicación a favor de personas distintas de los aborígenes". Esta facultad se materializó en la Resolución 1981 de 1973, en la cual se constituyó la zona de reserva indígena de Santa Rosa del Guamuez en un área aproximada de 3.750 hectáreas, como se señaló con anterioridad, allí se señaló el riesgo que corría la etnia Kofán. Además prohibió el establecimiento de colonos en esta zona.

Los indígenas de la zona se dirigieron aproximadamente en agosto de 1976 al Ministerio de Gobierno y al INCORA para denunciar las invasiones de colonos a sus reservas, tal como se señala en una comunicación firmada por funcionarios de estas entidades. En ese entonces se pudo establecer que 230 campesinos se encontraban en la zona de reserva. Si bien se realizaron visitas de diferentes instituciones nacionales a la zona, no consta en el expediente que se haya adoptado, en ese entonces, ninguna medida para proteger la reserva indígena.

Entre 1985 y 1990 el pueblo Kofán de Santa Rosa del Guamuez se dirigió por lo menos en tres oportunidades al Gobierno Nacional solicitando el saneamiento de la reserva indígena. En junio de 1990 después de realizar una visita a la reserva el INCORA recomendó la adquisición de 200 mejoras en tres reservas de la región y convertirlas en resguardos. Y recomendó levantar la reserva en las zonas donde se encuentran asentados la mayoría de los colonos, para que los predios les fueran titulados a éstos. Aunque las comunidades solicitaron, con posterioridad a la visita, que se realizara la compra de algunas mejoras que algunos colonos se habían mostrado dispuestos a vender, durante más de cinco años, de acuerdo con el expediente, no se realizó ninguna actividad.

En 1992, el INCORA compró ocho mejoras con un área de 170 hectáreas. Con posterioridad en un estudio socioeconómico realizado en 1997 se recomendó que se constituyera el resguardo por 1006 hectáreas, como el resguardo poseía 755 hectáreas, sugirió que se adquirieran 251. Sin embargo el trece (13) de mayo de 1998 el INCORA decidió, a través de la resolución 009, titular como resguardo indígena las 755 hectáreas que poseían los indígenas.

En resumen, para garantizar los derechos a la integridad étnica y a la supervivencia del pueblo indígena Kofán el Estado adoptó tres medidas que se deben resaltar. En primer lugar, constituyó una reserva indígena de 3.750 hectáreas en 1973 destinada a la habitación del pueblo. En segundo lugar, compró unas mejoras por 170 hectáreas para destinarlas al pueblo. Y en tercer lugar constituyó el resguardo en las 755 hectáreas habitadas por los indígenas.

iii) Sería amenaza del derecho a la supervivencia étnica del pueblo indígena Kofán por ausencia de territorio.

18. Para la Sala las medidas adoptadas para garantizar la integridad étnica y la supervivencia del pueblo indígena han sido insuficientes, porque no han impedido la colonización de los territorios, a pesar de que por lo menos desde 1977 el pueblo Kofán ha solicitado el saneamiento de la reserva.

El INCORA, tenía la obligación de prevenir que la reserva fuera invadida, para garantizar el cumplimiento de las resoluciones que dicha entidad había proferido, que como ya se señaló tenían por finalidad que los integrantes del pueblo no se vieran obligados a desplazarse. Pero además debían convertir la reserva en resguardo, tal como se estableció en el Decreto 2164 de 1995, el cual consagró funciones de esta entidad: “El saneamiento territorial de los resguardos y reservas indígenas y la conversión de éstas en resguardos” (artículo 1.4).

Si bien el INCORA por sí solo no podía impedir la invasión, si debió actuar de manera diligente para alertar a las demás entidades del Estado para que se previniera la colonización de la reserva. Al respecto La Corte ha establecido que la dimensión objetiva de los derechos fundamentales implica una obligación de hacer encaminada a garantizar la efectividad de los derechos. En este sentido, la Corte señaló en la sentencia T-704 de 2006:

“Que los derechos constitucionales fundamentales se consignen en documentos jurídicos significa un gran paso en orden a obtener su cumplimiento, pero no es suficiente. Es preciso el despliegue de todo un conjunto de medidas, tareas y actuaciones por parte del Estado – tanto en el nivel nacional como en el territorial - orientadas a garantizar la plena efectividad de estos derechos en la práctica. En esta misma línea de argumentación es deber del Estado garantizar la disponibilidad de recursos, emitir un grupo de medidas y realizar un conjunto de tareas y actuaciones dirigidas a asegurar que se cumplan las condiciones para hacer efectivos los derechos constitucionales fundamentales. Las omisiones del Estado en relación con este propósito puede acarrear el grave desconocimiento de estos derechos”.

El deber de adoptar medidas para garantizar el principio de efectividad de los derechos fundamentales se encuentra previsto en diferentes disposiciones de la Constitución. El art. 2 establece que son fines esenciales del Estado promover la efectividad de los derechos fundamentales. El art. 5 prevé la primacía de los derechos inherentes de las personas. De igual manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2.2), y el Convenio 169 de la OIT (art. 2.1) establecen la obligación de los Estados partes, como Colombia, de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos. Al respecto el Comité de Derechos Humanos ha advertido que:

“las obligaciones positivas de los Estados Partes de velar por los derechos del Pacto sólo se cumplirán plenamente si los individuos están protegidos por el Estado, no sólo contra las violaciones de los derechos del Pacto por sus agentes, sino también contra los actos cometidos por personas o entidades privadas que obstaculizarían el disfrute de los derechos del Pacto en la medida en que son susceptibles de aplicación entre personas o entidades privadas”.

De manera contraria a su obligación de proteger al pueblo indígena Kofán, contra actos de terceros, consagrada en el texto de la Constitución, de los tratados internacionales y de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las autoridades estatales han restado eficacia a la constitución de la reserva porque durante años han tolerado y consentido el establecimiento de colonos en la zona. Si bien la constitución de la reserva constituyó un paso importante para garantizar la integridad étnica del pueblo, los indígenas se vieron obligados a sufrir una asimilación del estándar de vida occidental, tal como se aprecia en los estudios citados. Aunque el pueblo es libre de asumir una nueva identidad y éste es un proceso en construcción constante, en éste caso no se trató de una decisión libre. Como lo ha advertido esta Corte acerca del derecho a la supervivencia de los grupos étnicos:

“tanto como ocurre en el caso del derecho a la vida para los seres humanos, puede entenderse que existe vulneración o amenaza de este derecho fundamental, no sólo ante la presencia de hechos o situaciones que de manera inminente pongan el derecho en peligro o posibilidad de perderse, sino incluso ante eventos que de manera más lenta o discreta, causen en todo caso afectaciones ciertas, generalmente irreversibles, a partir de las cuales se dificulte o reduzca su goce efectivo”.

En este caso la ausencia del saneamiento de la reserva indígena ha ido deteriorando la cultura Kofán. Como lo afirma la intervención de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, la situación del pueblo es grave y corren el riesgo de desaparecer si no se adoptan medidas para garantizar sus derechos. La constitución del resguardo, en 1998, tampoco ha contribuido a preservar la integridad étnica del pueblo, como lo demuestran los estudios posteriores de la Defensoría y el Auto 004. En consecuencia, la Corte concede la tutela por la violación de los derechos a la supervivencia, a la identidad e integridad étnica y cultural, y a la propiedad colectiva y en la siguiente sección establecerá las órdenes para remediar esta situación.

iv) El derecho al debido proceso de los colonos asentados en el territorio de la reserva.

La Sala no puede dejar de abordar la situación de los colonos que se encuentran asentados en el lugar dónde se creó la reserva. De acuerdo con lo expuesto en la Resolución 009 del trece (13) de mayo de 1998 proferida por el INCORA “los

colonos ocupan 2995 hectáreas aproximadamente [de la reserva, equivalentes al 79,87% del total del área de reserva] Ya para ese entonces existían trescientos treinta y ocho (338) colonos. El pueblo Kofán denunció su aparición desde 1976.

En el proceso administrativo que se adelante para la conversión y saneamiento del resguardo se deberá garantizar el derecho al debido proceso de los colonos. Para tal fin se garantizará a los colonos el derecho a ser oídos a través de quienes los representan, a presentar y a controvertir las pruebas que consideren pertinentes.

La Corte reconoce que el Gobierno tiene un margen de autonomía para definir la manera en que se deben garantizar la materialización de los derechos fundamentales. Sin embargo, este principio tiene límites y la Corte debe responder a cada caso en concreto de tal manera que se garanticen los principios de conducencia y eficacia.

En el presente caso existe un riesgo de desaparición del pueblo indígena Kofán. En consecuencia, el deber de esta Sala adoptar el remedio más eficaz de todos los disponibles para garantizar la supervivencia de la comunidad. Al respecto, la Corte considera que la reserva aun se encuentra vigente y que fue constituida para garantizar que los Kofán pervivieran de manera digna. Las reservas indígenas constituidas son inalienables, inembargables e imprescriptibles y son territorios colectivos, tal como se encuentra previsto en el Convenio 169 de 1991, por expreso mandato legal de la Ley 160 de 1994 "Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones." Es entonces un deber de la administración, y en este caso del INCODER darle eficacia jurídica a este mandato porque de no hacerlo se mantendría el estado de cosas actual en el que la supervivencia de los Kofán como pueblo se encuentra en grave peligro. Por ello ordenará que se realice el procedimiento previsto en el Decreto 2164 de 1995 teniendo en consideración las necesidades de tierra de los indígenas Kofán.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

Primero.- LEVANTAR la suspensión del término decretada para decidir el presente asunto.

Segundo.- REVOCAR las sentencias proferidas en primera instancia por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá, el cinco (5) de julio de 2012, y en segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 6 de agosto de 2012, las cuales declararon improcedentes la acción. En su lugar conceder el amparo por derechos a la supervivencia, a la identidad e integridad étnica y cultural, y a la propiedad colectiva del pueblo indígena Kofán.

Tercero.- ORDENAR al INCODER que en el plazo de diez (10) días inicie el proceso administrativo previsto en el Decreto 2164 de 1995, "por el cual se reglamenta parcialmente el [Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994] en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional", con la participación del pueblo indígena Kofán y de los colonos que se encuentran en el área comprendida por la reserva indígena conformada a través la Resolución 1981 de 1973 del INCORA.

Cuarto.- SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación apoyar, acompañar y vigilar el pleno cumplimiento de lo determinado en el presente fallo, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos aquí protegidos.

Quinto.- Cada tres (3) meses el INCODER deberá informarle a esta Sala el avance del proceso.

Sexto.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Anexo 5: Sentencia SU-039/97

(Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, 3 de febrero de 1997)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE COMUNIDAD INDIGENA-Titularidad

La Corte había considerado que la comunidad indígena ha dejado de ser una realidad fáctica y legal para ser sujeto de derechos fundamentales; es decir, que éstos no sólo se predicen de sus miembros individualmente considerados, sino de la comunidad misma que aparece dotada de singularidad propia, la que justamente es el presupuesto del reconocimiento expreso que la Constitución hace "a la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana".

EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES EN TERRITORIO INDIGENA-Armonización de intereses/DERECHO DE PARTICIPACION DE COMUNIDAD INDIGENA/DERECHO A LA INTEGRIDAD DE COMUNIDAD INDIGENA-Preservación

La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. De este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, como es el derecho de participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones. La participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad el hecho de que la referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social. De este modo la participación no se reduce meramente a una intervención en la actuación administrativa dirigida a asegurar el derecho de defensa de quienes van a resultar afectados con la autorización de la licencia ambiental, sino que tiene una significación mayor por los altos intereses que ella busca tutelar, como son los atinentes a la definición del destino y la seguridad de la subsistencia de las referidas comunidades.

CONSULTA DE COMUNIDAD INDIGENA-Finalidades

La institución de la consulta a las comunidades indígenas que pueden resultar afectadas con motivo de la explotación de los recursos naturales, comporta la adopción de relaciones de comunicación y entendimiento, signadas por el mutuo respeto y la buena fe entre aquéllas y las autoridades públicas, tendientes a buscar: a) Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados a explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les pertenecen, los mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en ejecución. b) Que igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la manera como la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una afectación o menoscabo a los elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, económica y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo humano con características singulares. c) Que se le de la oportunidad para que libremente y sin interferencias extrañas pueda, mediante la convocación de sus integrantes o representantes, valorar conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo que concierna a la defensa de sus intereses y, pronunciarse sobre la viabilidad del mismo. Se busca con lo anterior, que la comunidad tenga una participación activa y efectiva en la toma de la decisión que deba adoptar la autoridad, la cual en la medida de lo posible debe ser acordada o concertada.

CONSULTA DE COMUNIDAD INDIGENA-Alcance

Quando no sea posible el acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena. En todo caso deben arbitrase los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en detrimento de la comunidad o de sus miembros. No tiene por consiguiente el valor de consulta la información o notificación que se le hace a la comunidad indígena sobre un proyecto de exploración o explotación de recursos naturales. Es necesario que se cumplan las directrices mencionadas, que se presenten fórmulas de concertación o acuerdo con la comunidad y que finalmente ésta se manifieste, a través de sus representantes autorizados, su conformidad o inconformidad con dicho proyecto y la manera como se afecta su identidad étnica, cultural, social y económica.

ACCION DE TUTELA Y ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Alcance de la compatibilidad/ACCION DE TUTELA Y SUSPENSION PROVISIONAL DE ACTO ADMINISTRATIVO-Alcance de la compatibilidad

En relación con la compatibilidad entre la acción de tutela y las acciones contencioso administrativas y la suspensión provisional del acto administrativo. Se expone las siguientes consideraciones: 1) Procede la tutela como mecanismo definitivo, cuando la persona afectada en su derecho fundamental no cuenta con acción contenciosa administrativa. También, en el evento de que no sea posible a través de la acción contenciosa administrativa, controvertir la violación del derecho fundamental o dicha acción se revela insuficientemente idónea o ineficaz para la efectiva protección del derecho. 2) Procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando el afectado en su derecho fundamental dispone de acción

contenciosa pero no procede la suspensión provisional. Hay que entender que la no procedencia de la suspensión provisional se refiere a los casos en que se ejercitan acciones que no involucran la anulación de actos administrativos (contractuales o de reparación directa). Igualmente es viable cuando el interesado dispone de la acción contenciosa administrativa y la suspensión provisional es procedente, por las siguientes razones: A diferencia de la acción de tutela que persigue la efectiva protección de los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados, la suspensión provisional, se encuentra estructurada bajo la concepción muy limitada de ser una medida excepcional, con base constitucional pero con desarrollo legal, que busca impedir provisionalmente la ejecución de actos administrativos que son manifiestamente violatorios del ordenamiento jurídico y cuando en algunos casos, además, su ejecución pueda ocasionar perjuicios a una persona. Dicha institución fue concebida como mecanismo de protección de derechos con rango legal, sin que pueda pensarse de modo absoluto que eventualmente no pueda utilizarse como instrumento para el amparo de derechos constitucionales fundamentales; pero lo que si se advierte es que dados los términos estrictos en que el legislador condicionó su procedencia, no puede considerarse, en principio, como un mecanismo efectivo de protección de dichos derechos.

SUSPENSION PROVISIONAL DE ACTO ADMINISTRATIVO-Prevalencia de la tutela/SUSPENSION PROVISIONAL DE ACTO ADMINISTRATIVO-Ajuste a preceptos constitucionales

La suspensión provisional opera mediante una confrontación directa entre el acto y la norma jurídica, generalmente contentiva de una proposición jurídica completa, que se afirma transgredida, así puedan examinarse documentos, para determinar su violación manifiesta; en cambio, cuando se trata de amparar derechos fundamentales el juez de tutela se encuentra frente a una norma abierta, que puede aplicar libremente a través de una valoración e interpretación amplia de las circunstancias de hecho. En razón de su finalidad se reconoce a la tutela, como mecanismo destinado a asegurar el respeto, vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, cierta prevalencia sobre la suspensión provisional del acto administrativo, hasta el punto que es procedente instaurar conjuntamente la acción de tutela y la acción contenciosa administrativa y dentro del proceso a que da lugar aquélla se pueden adoptar, autónomamente, medidas provisionales. La acción de tutela y la suspensión provisional no pueden mirarse como instrumentos de protección excluyentes, sino complementarios. Además, dentro del proceso de tutela es posible, independientemente de dicha suspensión, impetrar las medidas provisionales. La necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales y de efectivizarlos, impone un cambio, una nueva concepción, de la institución de la suspensión provisional. El viraje que se requiere para adaptarla a los principios, valores y derechos que consagra el nuevo orden constitucional puede darlo el juez contencioso administrativo o inducirlo el legislador, a través de una reforma a las disposiciones que a nivel legal la regulan. El juez administrativo, con el fin de amparar y asegurar la defensa de los derechos fundamentales podría, aplicando directamente la Constitución Política, como es su deber, suspender los efectos de los actos administrativos que configuren violaciones o amenazas de transgresión de aquéllos.

DERECHOS FUNDAMENTALES-Concurrencia de jurisdicciones para su protección

La idea central que se debe tener presente es que las diferentes jurisdicciones, dentro de sus respectivas competencias, concurren a la realización del postulado constitucional de la efectivización, eficacia y vigencia de los derechos constitucionales fundamentales.

CONSULTA DE COMUNIDAD INDIGENA-Expedición irregular de licencia ambiental

El procedimiento para la expedición de la licencia ambiental se cumplió en forma irregular y con desconocimiento del derecho fundamental de la comunidad U'wa, en relación con la consulta que formal y sustancialmente ha debido hacersele. Consecuencialmente, resultan vulnerados no sólo los derechos de participación, y a la integridad de la comunidad U'wa, sino el derecho al debido proceso.

ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Omisión consulta de comunidad U'wa

La Corte estima que la tutela si es procedente como mecanismo transitorio. En efecto: a) No es incompatible la tutela con el ejercicio de la acción contenciosa administrativa ni con la suspensión provisional del acto administrativo. b) Es irrelevante la contradicción existente entre lo decidido por el Consejo de Estado al no acceder a la suspensión provisional y lo que se resolverá en el presente proceso, porque al pronunciarse sobre dicha suspensión no se analizó lo concerniente al aspecto sustancial o de fondo relativo al derecho de participación de la comunidad U'wa. Tampoco podrá existir contradicción entre lo que se decida en este proceso y lo que resuelva el Consejo de Estado, en el evento de que niegue la nulidad pedida, si se tiene en cuenta que conforme al art. 175 del C.C.A. la cosa juzgada "erga omnes" sólo opera en relación con la "causa petendi" materia de juzgamiento, y como se observó antes en la demanda de nulidad no se señaló como violado el art. 40-2 de la Constitución ni se expuso, el concepto de su violación. Las referencias que se hacen a dicho artículo en la demanda de nulidad, sin mencionar el numeral 2, son meramente circunstanciales para aludir simplemente a los tipos de mecanismos de participación, pero en modo alguno se formuló un cargo concreto por violación del derecho fundamental de participación de la referida comunidad, con arreglo a la aludida norma. La irremediabilidad del perjuicio que se pretende evitar consiste en que la violación de los aludidos derechos fundamentales persista e incluso, pueda llegar a un punto de no retorno, como sería la destrucción o aniquilación del grupo humano U'wa. La eventual nulidad que llegare a decretar el Consejo de Estado no tendría la virtud de restablecer el perjuicio que se está causando y se causaría, por el desconocimiento de los referidos derechos. Por lo tanto se requiere de su protección urgente e inmediata. Como la omisión de la consulta es precisamente el hecho que origina la violación o amenaza de violación de los mencionados derechos, la Corte ordenará que la consulta a ésta se cumpla dentro de un plazo.

Referencia: Expediente T-84771

Peticionario: Jaime Córdoba Triviño, Defensor del Pueblo,
en representación de varias personas integrantes del Grupo Etnico Indígena U'WA.

Magistrado ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL

Santafé de Bogotá, D.C., febrero tres (3) de mil novecientos noventa y siete (1997)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, revisa el proceso de la acción de tutela radicado bajo el número T-84771 instaurada por el señor Defensor del Pueblo, doctor Jaime Córdoba Triviño, en representación de varias personas integrantes del Grupo Étnico Indígena U'WA, contra el Ministerio del Medio Ambiente y la empresa Occidental de Colombia, Inc., según la competencia de que es titular de conformidad con los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el decreto 2591 de 1991.

El expediente contentivo de dicho proceso llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo la Corte Suprema, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.

La Sala de Selección de la Corte eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la referencia, el cual correspondió en reparto al Magistrado Jorge Arango Mejía, quien preside la Sala Primera de Revisión de Tutelas.

El proyecto original de sentencia elaborado por dicho Magistrado fue sometido al estudio de la referida Sala, la cual estimó que la decisión debía adoptarse por la Sala Plena de la Corporación, no sólo por la importancia del asunto, sino porque de ser aprobado aquél eventualmente se podía producir un cambio de jurisprudencia.

Ante la circunstancia de que el Magistrado Jorge Arango Mejía se declaró impedido para conocer del asunto y dicho impedimento fue aceptado por la Corporación, el proceso fue asignado al suscrito Magistrado Ponente, quien elaboró la respectiva ponencia, tomando los antecedentes originales, en lo pertinente.

I. ANTECEDENTES.

1. Hechos.

El Defensor del Pueblo, presentó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, acción de tutela contra el Ministerio del Medio Ambiente y la Sociedad Occidental de Colombia, Inc., en representación de 19 ciudadanos miembros del grupo étnico indígena U'wa, localizado en los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Santander, Arauca y Casanare, con una población superior a cinco mil (5000) personas, "a nombre de quienes se actúa en calidad de ciudadanos individualmente considerados y como integrantes del grupo étnico, para el que se reclama su reconocimiento como sujeto colectivo de derechos fundamentales, distribuido en 28 comunidades", con fundamento en los siguientes hechos:

1.1. En el año de 1992 la Sociedad Occidental de Colombia, Inc., con base en un contrato de asociación celebrado con Ecopetrol, para la explotación de hidrocarburos en el país, inició ante elINDERENA los trámites necesarios destinados a obtener la correspondiente licencia ambiental, requerida para poder adelantar exploraciones sísmicas, en desarrollo del proyecto conocido como "EXPLOTACION SISMICA BLOQUE SAMORE", que le permitiera constatar la existencia de pozos o yacimientos petroleros, en una zona que comprende los municipios de Saravena, Tame y Fortul en el departamento de Arauca, Cubará en el departamento de Boyacá, y Toledo en el departamento Norte de Santander, con una extensión aproximada de 208.934 hectáreas, dentro de la cual se encuentran resguardos indígenas y parques naturales.

1.2. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), a través de las Subgerencias del Medio Ambiente y de Bosques Aguas y Suelos realizó diferentes estudios que sirvieron de fundamento a los conceptos técnicos en los cuales se estimó viable la ejecución del aludido proyecto, pero haciéndose la salvedad de que "quedaban excluidos de toda actividad de prospección sísmica las áreas de los parques nacionales naturales de Tamá y El Cocuy".

1.3. El proceso administrativo tramitado inicialmente en elINDERENA e identificado con el número 031-92, pasó por competencia al Ministerio del Medio Ambiente.

1.4. La Subdirección de Ordenamiento y Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, emitió el concepto técnico No. 090 de julio 19 de 1994, el cual acogió en su totalidad los conceptos delINDERENA y consideró viable la ejecución del proyecto, sujeto al cumplimiento de medidas de orden técnico y ambiental.

No obstante, dicha dependencia "llamó la atención en términos de la participación comunitaria y ciudadana y en lo que tiene que ver particularmente con la etnia U'wa asentada en el área de influencia puntual y local del proyecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 330 de la Constitución, como en la ley 99 de 1993 en su artículo 76, específicamente en lo que hace referencia a la "consulta previa", así como en la legislación indígena nacional vigente".

1.5. El Ministerio del Medio Ambiente como consulta previa, para los efectos de la expedición de la licencia ambiental, tuvo como tal la reunión que sostuvieron algunos miembros de la comunidad U'wa los días 10 y 11 de enero de 1995 en la ciudad de Arauca, con participación de representantes de los Ministerios de Minas y Energía y del Medio Ambiente, Ecopetrol y la Occidental de Colombia Inc. y, en tal virtud, procedió a expedir la resolución No. 110 de febrero 3 de 1995, mediante la cual se otorgó dicha licencia.

1.6. No era procedente la expedición de la licencia ambiental, porque la aludida reunión no puede considerarse como válida para efectos de la participación de la comunidad que tanto la Constitución como las normas ambientales y la legislación indígena exigen cuando se trata de adoptar decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.

1.7. Con el otorgamiento de la licencia ambiental, sin el cumplimiento del requisito de la participación y consulta de la comunidad U'wa, se afectaron los derechos fundamentales de las personas que representa el actor y de dicha comunidad. En efecto, se desconocieron los derechos contenidos en la Constitución en los artículos 7, derecho a las minorías étnicas; 286, 329 y

357, derecho al territorio; 330, derecho a la autodeterminación; 10, derecho a la lengua; 70, 95-8, 72, derecho a la cultura étnica; derecho a seguir viviendo; 40, 79, derecho a la participación social y comunitaria.

2. Pretensiones.

Como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, el Defensor del Pueblo solicita que se tutelen los derechos fundamentales de la comunidad mencionada, a la vida, al territorio, a la autodeterminación, a la defensa de la cultura étnica, a los recursos naturales y a los beneficios de su explotación, a vivir y a trabajar por el país y a su organización propia, "así como el derecho fundamental a la participación social y comunitaria, especialmente en las decisiones que puedan afectarlos como segmentos de población social, económica y culturalmente sensible y vulnerable". En consecuencia solicita:

a) Se ordene la inaplicación de la resolución No. 110, del 3 de febrero de 1995, "por la cual se otorga una licencia ambiental", expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.

b) Se ordene a la parte demandada, Ministerio del Medio Ambiente y Sociedad Occidental de Colombia, Inc., iniciar, desarrollar y ejecutar todas las diligencias, actividades y procedimientos necesarios para llevar a cabo el proceso de consulta previa con la comunidad U'WA.

c) Se ordenen las medidas pertinentes para la efectiva protección de los derechos fundamentales.

d) Si la tutela prospera, se ordene la creación de un Comité Interinstitucional, con representación de las partes, los entes gubernamentales competentes, la sociedad civil y los órganos de control del Estado, para asegurar el cumplimiento del fallo de tutela, sin perjuicio de la competencia del juez de tutela.

3. Demanda de nulidad presentada por el Defensor del Pueblo ante el Consejo de Estado.

3.1. En la misma fecha en que se instauró la acción de tutela, 29 de agosto de 1995, el Defensor del Pueblo demandó la declaración de nulidad total de la resolución 110 del 3 de febrero de 1995, mediante la cual se otorgó la licencia ambiental.

Como normas violadas concretamente se citaron en la demanda las siguientes: artículos 8, 79, 80, 330 parágrafo, de la Constitución Política, arts. 6 y 15 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado por la O.I.T. y aprobado por la ley 21 de 1991, y el art. 76 de la ley 99 de 1993.

Los hechos expuestos tanto en la demanda de la tutela como en la demanda de nulidad son, en esencia, los mismos.

El concepto de la violación se expuso, en síntesis, de la siguiente manera:

- El acto administrativo demandado es incompatible con esta norma que reconoce el carácter prevalente de los derechos de las minorías étnicas e indígenas, de dicho reconocimiento surgen los derechos de dichas minorías al territorio, a la autodeterminación, a la lengua a la cultura étnica, a los recursos naturales y a los beneficios de su explotación, a vivir y a trabajar en el país y a conservar su propia organización.

Específicamente en cuanto al alcance de la violación de los arts. 79, 330 parágrafo y 76 de la Ley 99 de 1993, dice la demanda del defensor lo siguiente:

"Contempla la Carta Constitucional el derecho a la participación social y comunitaria. Con el tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa, democrática y pluralista - art. 1º C.N.- todos los habitantes del territorio nacional están constitucionalmente llamados a ser sujetos partícipes del servicio y bien público político, así como del desenvolvimiento de la vida económica y social del país".

"Por esto, aparte de los mecanismos de participación ciudadana, señalados generalmente en los artículos 40 C.N.- derecho a la participación política y 103 C.N. mecanismos de participación popular-, la misma Constitución de manera específica garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que pueden afectarla, sobre todo cuando la acción gubernamental o la de los particulares afectan el derecho a gozar de un ambiente sano -art- 79 C.N.".

"Respecto de la explotación de recursos naturales, no renovables en territorios indígenas, está condicionada al mantenimiento de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y a la participación de sus representantes en las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación".

Con respecto a la violación de los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la O.I.T. y del art. 76 de la ley 99 de 1993, ella se hace consistir en que el Estado debe explotar los recursos naturales dentro de los territorios ocupados por indígenas respetando dicha integridad, siendo necesario, en consecuencia, que se haga la respectiva consulta a la comunidad indígena que va a resultar afectada con dicha explotación y que se busque la concertación.

Como el proceso de consulta no se llevó a cabo, dice el demandante que se violaron las normas antes señaladas que específicamente aluden a la obligatoriedad de la consulta.

Adicionalmente, el Defensor del Pueblo invocó la nulidad del acto que otorgó la licencia ambiental, alegando que fue expedido irregularmente y con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, con fundamento en el inciso 2 del art. 84 del C.C.A..

3.2. En la demanda de nulidad se solicitó la suspensión provisional del acto acusado, invocando la violación manifiesta de los arts. 8, 79 330 parágrafo, de la Constitución, 76 de la ley 99/93, y 6 y 15 del Convenio 169 de la O.I.T. El concepto de su violación se hace consistir en el desconocimiento de "la participación ciudadana y comunitaria en este tipo de proyectos", al no haberse cumplido con el requisito de la consulta previa a la comunidad U'wa.

4. Fallo de primera instancia.

El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, según sentencia del 12 de septiembre de 1995, accedió a la tutela solicitada, en forma transitoria, en el sentido de que "es inaplicable tanto en lo jurídico como en lo práctico la mencionada resolución 110 en cuanto atañe a los territorios ocupados por el pueblo U'wa", mientras no se cumpla el proceso de consulta a dicha comunidad en debida y legal forma.

Para adoptar dicha decisión el Tribunal razonó, en lo esencial, de la siguiente manera:

"El proyecto de exploración, y eventual futura explotación, de hidrocarburos en zona geográfica nacional que comprende territorios reservados para el hábitat de comunidades indígenas natural y previsiblemente ha de tener importantes y profundas consecuencias en la ecología, la cultura, la economía y el ordenamiento social de aquéllas pues no resulta difícil vaticinar que los trabajos que se realicen no sólo afectarán la estructura geológica de esos territorios y la fauna y flora que allí se dan sino que causarán impacto en las costumbres, la lengua, las tradiciones, la cosmovisión y las instituciones familiares y tribales porque no en vano se produce el encuentro de una cultura y una civilización con otras"

"Nuestra Carta Política contiene numerosas disposiciones que propenden a favorecer a los pueblos indígenas, seguramente porque el constituyente tuvo en cuenta su fragilidad cultural y socioeconómica y su condición minoritaria dentro del censo nacional. Entre ellas debemos hacer énfasis en las contenidas en los artículos 7, 8, 14, 68, 79 329, 330, 339 y 340 que comprometen al Estado en la protección de la diversidad étnica y cultural y de las riquezas culturales y naturales y lo obligan a promover la igualdad y a legislar en forma especial en favor de los grupos marginados, como precisamente pueden considerarse los pueblos indígenas; garantizan a éstos el disfrute de su identidad cultural y su derecho a un ambiente sano, y les da a los mismos la facultad de organizarse jurídicamente como entidades territoriales a la vez que les otorga cierto grado de autonomía administrativa, económica y social, integrándose en un Plan Nacional de Desarrollo".

"...en el caso en estudio la decisión adoptada por el Ministerio del Medio Ambiente, en la aludida Resolución No. 110 del 3 de febrero de 1995, ha atentado contra ese derecho a la vida del pueblo U'wa porque no toma en cuenta la voluntad del mismo que se ha mostrado hasta ahora contraria a cualquier intrusión del Estado, directamente o por intermedio de alguna empresa concesionaria, mediante la exploración sísmica para localizar hidrocarburos. Incluso tal determinación se nos presenta como precipitada, y tomó de sorpresa aun a los funcionarios estatales de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, pues cuando ella se expidió todavía se hallaba en curso el proceso de consulta a los representantes de dicho pueblo indígena a que obliga el artículo 76 de la Ley 99 de 1993·.

"Y es que esa exigencia de consulta se halla modulada además por la estipulación que trae el artículo 6o. de la Ley 21 de 1991, que por ser aprobatoria de un convenio internacional que trata sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales goza en el terreno legislativo de la prevalencia que determina el artículo 93 de la Constitución Nacional..."

"Por lo tanto resulta que la supuesta "consulta" realizada en la reunión de los días 10 y 11 de enero en Arauca con los representantes del pueblo U'wa no se ajustó a la finalidad que se prevé en la norma legal que se acaba de transcribir y puede decirse, por lo mismo, que la exigencia contenida en el artículo 76 de la ley 99 de 1993 no se ha cumplido a cabalidad, de lo cual surgen una omisión -la inobservancia de un mandato legal- y una acción -la expedición de la Resolución No. 110 del 3 de febrero de 1995- que conculcan los derechos del mencionado pueblo indígena y amenazan, en definitiva, el derecho fundamental a la vida de los integrantes del mismo pueblo. Porque es necesario destacar que la consulta no está prevista como simple formalismo, para mera constancia documental de que las comunidades fueron enteradas de los proyectos en preparación. Se trata de que las comunidades comprendan el alcance de las empresas por acometerse, su mecanismo de acción, sus proyecciones en el campo ambiental, para que frente a todos esos factores puedan deducir si hay o no riesgo para el hábitat (sic) donde se gesta y se desarrolla su existencia".

5. Decisión del Consejo de Estado sobre la petición de suspensión provisional del acto contentivo de la licencia ambiental.

Mediante providencia del 14 de septiembre de 1995 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, negó la suspensión provisional del acto acusado.

En relación con la alegada violación de los arts. 8 y 330 parágrafo, consideró el Consejo que no se daba el requisito de su violación manifiesta, por las siguientes razones:

"De la confrontación directa de la resolución acusada con las normas constitucionales aducidas por el actor y transcritas anteriormente, así como con los documentos aducidos en la solicitud, la Sala no encuentra que se presente la violación manifiesta que alega el actor en su solicitud de suspensión provisional pues ni del texto de la resolución ni de los citados documentos resulta abiertamente que el Estado no esté protegiendo las riquezas culturales y naturales de la Nación, ni que esté autorizando la explotación en desmedro de la integridad cultural, social y económica de la comunidad indígena, ni que se haya omitido la participación de los representantes de las respectivas comunidades".

"En efecto de una parte, en principio la concesión de una licencia ambiental sometida a un trámite y a una serie de requisitos y a condiciones posteriores para su utilización, como la que contiene el acto demandado, se entiende que es expedida para proteger la riqueza natural a la que ella se refiere".

"De otra parte, en relación con la protección de la riqueza cultural, en este caso indígena, ella está en buena parte ligada a la participación de los representantes de las comunidades, la cual, en el asunto objeto de la licencia se produjo de acuerdo con la consulta con el pueblo U'wa a que aluden los últimos considerandos de la resolución acusada y aún algunos de los documentos adjuntados por el actor a la demandasin que las normas aducidas como violadas pueda deducirse que la

participación de los representantes de las comunidades deba traducirse necesariamente en su expresión de conformidad o asentimiento a la expedición de la licencia"

Con respecto a la violación del art. 79, en concordancia con el párrafo del art. 330 de la Constitución y con los arts. 76 de la ley 99 de 1993 y 6 y 15 del Convenio 169 de la O.I.T. dijo el Consejo, que de la confrontación de las normas transcritas con la resolución demandada y con los documentos aducidos con la demanda, tampoco resultaba acreditada su violación manifiesta "Pues si bien es cierto que todas ellas hacen énfasis en las decisiones de la comunidad que pueden afectarla, a través de la consulta a su representante, la cual, si bien debe entenderse obligatoria, en el caso de autos se produjo..."

Al referirse a las normas del aludido Convenio, dijo el Consejo:

"La Sala, por lo menos para efectos de la suspensión provisional, no considera que cuando el artículo 6o. del 'Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes', aprobado por la Ley 21 de 1991, que es la única norma de las aducidas que hace referencia a un acuerdo o consentimiento acerca de las medidas propuestas, deba interpretarse en término absolutos, no sólo porque de la misma disposición puede inferirse, en principio, que se trata simplemente de una finalidad, objetivo o logro que debe buscarse en las consultas, y no necesariamente que ellas entrañen un acuerdo o consentimiento de las comunidades, sino porque el entendimiento de esas expresiones en términos absolutos iría en contra de uno de los principios básicos del Estado democrático, como es el de que las autoridades legítimas están facultadas para adoptar por sí misma las decisiones que emanan de sus competencias, como es en el presente caso la atribuida al Ministerio del Medio Ambiente en el numeral 1 del artículo 52 de la Ley 99 de 1993, para otorgar 'de manera privativa' la licencia ambiental..."

Finalmente, el Consejo reiteró su constante jurisprudencia en el sentido de que la suspensión provisional sólo puede decretarse cuando el acto acusado se oponga flagrantemente a la norma superior que se señala como infringida, y que para apreciar dicha flagrancia, agrega el Consejo, no se requiere acudir a "circunloquios ni reflexiones profundas, o sea que de la comparación de una y otra norma, colocadas como en doble columna, surja evidentemente la contrariedad. No es posible decretar la suspensión si debe penetrarse con alguna profundidad en el concepto, o sea, en la doctrina que llevan consigo las palabras con que está redactada la norma superior".

6. El fallo de segunda instancia.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia del 19 de octubre de 1995, revocó la decisión del Tribunal.

La Corte consideró que la competencia para pronunciarse sobre la resolución objeto de la tutela es exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativo, jurisdicción ante la cual se adelanta la correspondiente acción de nulidad, interpuesta por el actor de esta tutela, es decir, por el Defensor del Pueblo.

Además, señaló la Corte, el Consejo de Estado, en el auto que admitió la demanda de nulidad, de fecha 14 de septiembre de 1995, negó la suspensión del acto administrativo.

Dijo también la Corte: "La discrepancia de criterio sobre la forma en que debió cumplirse el requisito previo de la "Consulta" a las comunidades indígenas, en manera alguna puede constituir un atentado al derecho fundamental a la vida que finalmente encontró vulnerado el Tribunal de Instancia, pues bien miradas las cosas y así lo precisa el actor, la irregularidad que se atribuye al Ministerio del Medio Ambiente de haber proferido acto administrativo sin el requisito previo de la consulta, constituiría eventualmente un atentado al derecho fundamental del debido proceso, cuyo amparo resultaría procedente de manera eficaz mediante el ejercicio de la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como ya se hizo; sólo que para el Consejo de Estado la forma como se cumplieron las reuniones con los dirigentes indígenas los días 10 y 11 de enero del corriente año, no daba la posibilidad de decretar la suspensión provisional del acto demandado".

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.

1. El problema jurídico planteado.

1.1. La parte actora considera que la Resolución Nro. 110 de 3 de febrero de 1995, "por la cual se otorga una licencia ambiental", expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, viola los siguientes derechos constitucionales de la minoría étnica indígena: los artículos 7, derecho a las minorías étnicas (artículo 7 C.P.); derecho al territorio (artículos 286, 329, y 357 C.P); derecho a la autodeterminación (artículo 330 C.P); derecho a la lengua (artículo 10 C.P); derecho a la cultura étnica (artículos 70, 95-8 y 72 C.P); derecho a seguir viviendo; derecho a la participación social y comunitaria (artículos 40 y 75 C.P). En efecto:

En concepto de dicha parte, la consulta previa a la expedición de la licencia ambiental no se realizó, pues como consulta previa no pueden ser tenidas en cuenta las reuniones que se realizaron en el municipio de Arauca los días 10 y 11 de enero de 1995.

1.2. La demandada Occidental de Colombia Inc., en su defensa, al dar respuesta a la demanda de tutela sostuvo lo siguiente:

- "Occidental de Colombia no solamente siguió los criterios y el espíritu de concreción y consulta para el propósito de adelantar un estudio sísmico, sino que incorporó el objetivo del bienestar indígena concomitante a la sana relación que debe existir entre la empresa y la comunidad. Fue así como, sin tener en cuenta las dos reuniones de Arauca, convocadas por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, se llevaron a cabo 33 reuniones con indígenas, entidades públicas y otras comunidades indígenas para conocer experiencias exitosas que pudieran ser útiles para la comunidad U'wa; así como, con organizaciones no gubernamentales y los departamentos técnicos de Occidental de Colombia".

"Resulta claro que se trata de hacer compatible el beneficio colectivo para la sociedad colombiana que se desprende de la investigación sobre las eventuales riquezas del subsuelo, con el indispensable reconocimiento de la diversidad cultural y el respeto a las tradiciones de otras etnias. Este concepto fundamental, esto es, que el subsuelo pertenece a la Nación, y que la comunidad indígena puede beneficiarse directamente de los recursos que de allí provengan, fue una consideración esencial en la comunicación con la comunidad indígena y por ello nuestra convocatoria para que fueran las mismas entidades administradoras de la riqueza del subsuelo, Ministerio de Minas y Ecopetrol, quienes explicaron a los indígenas el ordenamiento constitucional y legal para la exploración de hidrocarburos".

- Como prueba de las acciones de concertación, consulta y comunicación con la comunidad indígena "U'wa", la Occidental de Colombia Inc. presenta un cuadro que resume las reuniones llevadas a cabo entre dicha empresa y la referida comunidad, en algunos casos con presencia de autoridades públicas, entre el mes de abril de 1993 y el 21 de julio de 1995.

- En las reuniones mencionadas han participado 68 indígenas, incluidos aquéllos que han llevado la representación de la comunidad, verificada por la Dirección de Asuntos Indígenas, con lo cual se demuestra que el proceso de consulta verificado con la comunidad U'wa no obedeció al cumplimiento de un simple requisito de forma. Es evidente que la opinión de la comunidad, la exposición de motivos del proyecto, la solicitud de participación de los U'wa en los trabajos ha desarrollarse, la metodología de trabajo y los mecanismos de solución de conflictos entre otros, fueron aspectos que se tuvieron en cuenta durante dicho proceso. Adicionalmente se han vinculado varios miembros de la comunidad U'wa como trabajadores del proyecto de prospección sísmica en territorio no indígena; por lo tanto mal se puede señalar que una actividad como la prospección sísmica pone en peligro los valores y fundamentos de una cultura si sus propios miembros manifiestan, con el aval de la entidad tutora de sus derechos su voluntad de vincularse para trabajar en esa actividad.

- De otra parte, la gestión de la Occidental no se ha limitado a la concertación, consulta y acuerdo sobre los temas relacionados con la sísmica y la situación social de la comunidad, sino que ha buscado que todas y cada una de las personas que lleguen a la zona cumplan un estricto reglamento dirigido a respetar y hacer respetar a todas las comunidades y a los "U'wa" en particular. En este sentido se han impartido instrucciones y normas durante el trabajo de campo, y se han adoptado medidas preventivas para el desarrollo de las actividades de sísmica.

- Considera el citado apoderado improcedente la acción de tutela en el presente caso, por la existencia de otro medio de defensa judicial, como es la acción de nulidad, contra el acto administrativo que concedió la licencia ambiental. Dicha acción fue instaurada por la Defensoría del Pueblo ante el Consejo de Estado, con petición de suspensión provisional.

Además, estima que tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por cuanto no se dan los requisitos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado para efectos de que dicho perjuicio tenga esa connotación (sentencia T-225 de junio 15 de 1993), mas aún cuando se trata de una licencia legítimamente otorgada.

2. Aspectos a considerar para la solución del problema.

Varios aspectos debe considerar la Corte para resolver la problemática planteada. El primero consiste en determinar la manera como se resuelve dentro del marco constitucional el conflicto que se suscita con motivo de la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y la protección especial que el Estado debe dispensar a las comunidades indígenas a efecto de que conserven su identidad e integridad étnica, cultural, social y económica. El segundo alude a la definición que debe hacerse en torno a la procedencia de la acción de tutela frente a la existencia de la acción contenciosa administrativa, como mecanismo alternativo de defensa judicial, y la compatibilidad entre la tutela y la suspensión provisional del acto administrativo, cuando esta ha sido solicitada y negada por la jurisdicción competente. El tercero, se refiere a la procedencia de la tutela en el caso concreto.

3. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas y la protección del Estado a la identidad, e integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas.

3.1. En punto a la protección constitucional de la diversidad étnica y cultural se expresó la Corte a través de la sentencia T-342/94¹¹, en los siguientes términos:

"La diversidad en cuanto a la raza y a la cultura, es decir, la no coincidencia en el origen, color de piel, lenguaje, modo de vida, tradiciones, costumbres, conocimientos y concepciones, con los caracteres de la mayoría de los colombianos, es reconocida en la Constitución de 1991, al declarar la estructura pluralista del Estado Colombiano, reconocer y proteger "la diversidad étnica y cultural de su población" y las "riquezas culturales y naturales de la nación".

"En efecto, en atención al abuso, prejuicio y perjuicio que han padecido los pueblos autóctonos o aborígenes del territorio nacional, la Constitución Política de 1991 consagró el respeto a la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, en los preceptos contenidos en los artículos 7° (diversidad étnica y cultural de la nación colombiana), 8° (protección a las riquezas naturales y culturales), 72 (patrimonio cultural de la Nación) y 329 (conversión de las comunidades indígenas en entidades territoriales)".

"Es más, no sería aventurado afirmar que el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la población indígena guarda armonía con los diferentes preceptos de la Constitución Nacional relativos a la conservación, preservación y restauración del ambiente y de los recursos naturales que la conforman, si se considera que las comunidades indígenas constituyen igualmente un recurso natural humano que se estima parte integral del ambiente, más aún cuando normalmente la población indígena habitualmente ocupa territorios con ecosistemas de excepcionales características y valores ecológicos que deben conservarse como parte integrante que son del patrimonio natural y cultural de la Nación. De esta manera, la población indígena y el entorno natural se constituyen en un sistema o universo merecedor de la protección integral del Estado".

"El reconocimiento de la referida diversidad obviamente implica que dentro del universo que ella comprende y es consustancial, se apliquen y logren efectivamente los derechos fundamentales de que son titulares los integrantes de las comunidades indígenas".

Dentro de la misma línea de pensamiento, la Corte en la sentencia T-007/95^[2], dijo:

"La Constitución Política incorporó dentro de las preocupaciones, el reconocimiento y defensa de las minorías étnicas, y de manera muy significativa, reservó en favor de las comunidades indígenas una serie de prerrogativas que garantizan la prevalencia de la integridad cultural, social y económica, su capacidad de autodeterminación administrativa y judicial, la consagración de sus resguardos como propiedad colectiva de carácter inalienable, y, de los territorios indígenas como entidades territoriales al lado de los municipios, los distritos y los propios departamentos (C.P. arts. 7, 1671, 246, 286, 329, 330, etc.).

Es de anotar, que con anterioridad la Corte en la sentencia T-380/93^[3] había considerado que la comunidad indígena ha dejado de ser una realidad fáctica y legal para ser sujeto de derechos fundamentales; es decir, que éstos no sólo se predicaban de sus miembros individualmente considerados, sino de la comunidad misma que aparece dotada de singularidad propia, la que justamente es el presupuesto del reconocimiento expreso que la Constitución hace "a la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana". Y sobre la protección de la referida diversidad dijo la Corte en la mencionada sentencia:

"La protección que la Carta extiende a la anotada diversidad se deriva de la aceptación de formas diferentes de vida social cuyas manifestaciones y permanente reproducción cultural son imputables a estas comunidades como sujetos colectivos autónomos y no como simples agregados de sus miembros que, precisamente, se realizan a través del grupo y asimilan como suya la unidad de sentido que surge de las distintas vivencias comunitarias. La defensa de la diversidad no puede quedar librada a una actitud paternalista o reducirse a ser mediada por conducto de los miembros de la comunidad, cuando ésta como tal puede verse directamente menoscabada en su esfera de intereses vitales y, debe, por ello, asumir con vigor su propia reivindicación y exhibir como detrimentos suyos los perjuicios o amenazas que tengan la virtualidad de extinguirla. En este orden de ideas, no puede en verdad hablarse de protección de la diversidad étnica y cultural y de su reconocimiento, si no se otorga, en el plano constitucional, personería sustantiva a las diferentes comunidades indígenas que es lo único que les confiere estatus para gozar de los derechos fundamentales y exigir, por sí mismas, su protección cada vez que ellos les sean conculcados (CP art. 1, 7 y 14)".

"El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en la Constitución supone la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental. Algunos grupos indígenas que conservan su lengua, tradiciones y creencias no conciben una existencia separada de su comunidad. El reconocimiento exclusivo de derechos fundamentales al individuo, con prescindencia de concepciones diferentes como aquellas que no admiten una perspectiva individualista de la persona humana, es contrario a los principios constitucionales de democracia, pluralismo, respeto a la diversidad étnica y cultural y protección de la riqueza cultural".

"Entre otros derechos fundamentales, las comunidades indígenas son titulares del derecho fundamental a la subsistencia, el que se deduce directamente del derecho a la vida consagrado en el artículo 11 de la Constitución".

"La cultura de las comunidades indígenas, en efecto, corresponde a una forma de vida que se condensa en un particular modo de ser y de actuar en el mundo, constituido a partir de valores, creencias, actitudes y conocimientos, que de ser cancelado o suprimido - y a ello puede llegarse si su medio ambiente sufre un deterioro severo-, induce a la desestabilización y a su eventual extinción. La prohibición de toda forma de desaparición forzada (CP art. 12) también se predica de las comunidades indígenas, quienes tienen un derecho fundamental a su integridad étnica, cultural y social".

3.2. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas hace necesario armonizar dos intereses contrapuestos: la necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en los referidos territorios para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (art. 80 C.P.), y la de asegurar la protección de la integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas que ocupan dichos territorios, es decir, de los elementos básicos que constituyen su cohesión como grupo social y que, por lo tanto, son el sustrato para su subsistencia. Es decir, que debe buscarse un equilibrio o balance entre el desarrollo económico del país que exige la explotación de dichos recursos y la preservación de dicha integridad que es condición para la subsistencia del grupo humano indígena.

El Constituyente previó en el parágrafo del art. 330 una fórmula de solución al anotado conflicto de intereses al disponer:

"La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades."

La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que como se ha visto antes configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Y precisamente, para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. De este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la referida integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, en los términos del art. 40, numeral 2 de la Constitución, como es el derecho de participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones.

3.3. La Constitución en diferentes normas alude a la participación ciudadana que ofrece diferentes modalidades (preámbulo, arts. 1, 2, 40, 79, 103, entre otros). Por lo tanto, la única forma de participación no es la política.

A juicio de la Corte, la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad el hecho o la circunstancia observada en el sentido de que la referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social. De este modo la participación no se reduce meramente a una intervención en la actuación administrativa dirigida a asegurar el derecho de defensa de quienes van a resultar afectados con la autorización de la licencia ambiental (arts. 14 y 35 del C.C.A., 69, 70, 72 y 76 de la ley 99 de 1993), sino que tiene una significación mayor por los altos intereses que ella busca tutelar, como son los atinentes a la definición del destino y la seguridad de la subsistencia de las referidas comunidades

El derecho de participación de la comunidad indígena como derecho fundamental (art. 40-2 C.P.), tiene un reforzamiento en el Convenio número 169, aprobado por la ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos. De este modo, el citado Convenio, que hace parte del ordenamiento jurídico en virtud de los arts. 93 y 94 de la Constitución, integra junto con la aludida norma un bloque de constitucionalidad que tiende a asegurar y hacer efectiva dicha participación.

Diferentes normas del mencionado convenio apuntan a asegurar la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que las afectan relativas a la explotación de los recursos naturales en sus territorios, así:

"Artículo 5o. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

"a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

b) Deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;

c) Deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo."

"Artículo 6o. 1.- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

"a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

"b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados pueden participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.

"c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin;

"2.- Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas."

Artículo 7: Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente."

"Artículo 15. 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos".

"2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tengan derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán de participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades".

Con fundamento en los arts. 40-2, 330 parágrafo de la Constitución y las normas del Convenio 169 antes citadas, estima la Corte que la institución de la consulta a las comunidades indígenas que pueden resultar afectadas con motivo de la explotación de los recursos naturales, comporta la adopción de relaciones de comunicación y entendimiento, signadas por el mutuo respeto y la buena fe entre aquéllas y las autoridades públicas, tendientes a buscar:

a) Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados a explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les pertenecen, los mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en ejecución.

b) Que igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la manera como la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una afectación o menoscabo a los elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, económica y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo humano con características singulares.

c) Que se le de la oportunidad para que libremente y sin interferencias extrañas pueda, mediante la convocación de sus integrantes o representantes, valorar conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo que concierna a la defensa de sus intereses y, pronunciarse sobre la viabilidad del mismo. Se busca con lo anterior, que la comunidad tenga una participación activa y efectiva en la toma de la decisión que deba adoptar la autoridad, la cual en la medida de lo posible debe ser acordada o concertada.

Cuando no sea posible el acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena.

En todo caso deben arbitrarse los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en detrimento de la comunidad o de sus miembros.

No tiene por consiguiente el valor de consulta la información o notificación que se le hace a la comunidad indígena sobre un proyecto de exploración o explotación de recursos naturales. Es necesario que se cumplan las directrices antes mencionadas, que se presenten fórmulas de concertación o acuerdo con la comunidad y que finalmente ésta se manifieste, a través de sus representantes autorizados, su conformidad o inconformidad con dicho proyecto y la manera como se afecta su identidad étnica, cultural, social y económica.

4. La acción de tutela y las acciones contencioso administrativa y la suspensión provisional del acto administrativo.

4.1. Ejercicio conjunto de las acciones contencioso administrativas y de la acción de tutela.

- Bien es sabido que la acción de tutela no es procedente cuando exista un medio alternativo de defensa judicial que sea idóneo y eficaz, según la valoración que haga el juez en concreto de estas circunstancias, atendiendo la situación particular en que se encuentre el solicitante (arts. 86 inciso 3 de la Constitución, art. 6 numeral 1 del decreto 2591/91), salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

- Es compatible la acción de tutela y la acción contenciosa administrativa contra actos administrativos, medio alternativo de defensa judicial. En efecto:

a) Aun cuando exista un medio alternativo de defensa judicial, la acción de tutela procede cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en cuyo caso, "el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado", la cual, debe ser ejercitada, si no lo ha hecho, en el término de cuatro meses, a partir del fallo de tutela; si no lo hace cesarán los efectos de éste (art. 8 incisos 1 a 4 decreto 2591/91).

b) Específicamente, con respecto a la posibilidad de ejercer simultáneamente la acción de tutela y las acciones contencioso administrativa el inciso 5 del art. 8 del decreto 2591 de 1991 preceptúa:

"Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso".

Mediante auto de fecha 1 de septiembre de 1994 (expediente No. T-32.352 M.P. Jorge Arango Mejía) la Corte se refirió al alcance del aparte normativo transcrito, de la siguiente manera:

"...a juicio de la Sala, al sentido "conjuntamente" debe llegarse no sólo mediante la interpretación literal sino también con una indagación teleológica. Así, por razón de la informalidad de la institución a tal expresión corresponde la tercera acepción de la Real Academia Española, es decir, "a un mismo tiempo". (ob. cit. pág. 1213). En consecuencia, el inciso comentado del artículo 8o. del decreto 2591 de 1991, debe interpretarse en el sentido de que los interesados pueden, desde un principio, ejercer la acción de tutela al tiempo con las demás de naturaleza contencioso administrativa, sin que sea necesario que todas ellas se tramiten ante la jurisdicción contencioso administrativa."

c) El art. 7 del decreto 2591/91, contempla una situación especial, diferente a la regulada en el artículo siguiente, pues aquél se refiere a las medidas provisionales que se pueden adoptar dentro de un proceso de tutela para proteger un derecho fundamental vulnerado o amenazado, es decir, se trata de verdaderas medidas cautelares que pueden adoptarse antes de la decisión de fondo.

Dice, en lo pertinente, dicha norma:

"Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere".

"El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con la circunstancias del caso".

d) La jurisprudencia de la Corte Constitucional, sobre la procedencia de la acción de tutela y las acciones contencioso administrativas y la suspensión provisional del acto administrativo, y la manera como ellas se compatibilizan, ha señalado:

"...la atribución de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos está específicamente conferida por la Constitución a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (artículo 238) y mal pueden interpretarse en contra de su perentorio mandato las disposiciones de los artículos 7 y 8 del Decreto 2591 de 1991, aplicables tan solo a aquellos actos contra los cuales no sea procedente dicho mecanismo, de conformidad con las reglas generales".

"No desconoce la Corte que la última de las disposiciones citadas, al permitir el ejercicio conjunto de la acción de tutela con las pertinentes ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, faculta al juez para ordenar que tratándose de un perjuicio irremediable, se inaplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita mientras dure el proceso, pero es obvio que esta norma legal parte del supuesto de que en tales casos no procede la suspensión provisional, pues resultaría innecesario, inconveniente e inconstitucional que, siendo ella aplicable para alcanzar el específico fin de detener los efectos del acto cuestionado, se añadiera un mecanismo con idéntica finalidad por fuera del proceso Contencioso Administrativo y a cargo de cualquier juez de la República, con el peligro adicional de decisiones contradictorias, máxime si se tiene en cuenta que también la suspensión provisional se resuelve mediante trámite expedito tal como lo dispone el Código Contencioso Administrativo⁴¹".

Se reiteró en dicha sentencia lo que señaló la Corte en la sentencia No. 1 de abril 3 de 1992, igualmente con ponencia del Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

En la sentencia T-203/93⁴², refiriéndose al alcance del inciso final del artículo 8 del decreto 2591/91, antes citado, la Corte distinguió entre la suspensión provisional del acto y su inaplicación respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita. Dijo la Corte:

"Como puede verse, lo que es posible decretar en esta hipótesis es una inaplicación temporal al caso concreto, considerada la particular y específica situación en que se encuentra el solicitante, así que no recae propiamente sobre la materialidad del acto administrativo, como sí acontece con la figura de la suspensión provisional. No tiene, entonces, el alcance de la misma y, por ende, excepción hecha de la inaplicación que pueda favorecer al petente a fin de evitarle un daño irreparable, el acto administrativo como tal permanece incólume mientras no sea suspendido provisionalmente por la Jurisdicción Contencioso Administrativa o anulado por ella".

*"Debe repararse por otra parte en que el punto materia de análisis -a diferencia del que constituye el objeto de la providencia mediante la cual se resuelve acerca de la solicitud de suspensión provisional en los procesos contencioso administrativos- no es el relativo a una posible oposición flagrante entre el acto demandado y las normas superiores a las que está sometido, sino la situación de hecho en la cual puede hallarse una persona frente a un acto cuya **aplicación concreta** implique, en su caso, efectos inmediatos e irremediables que vulneren sus derechos constitucionales fundamentales".*

"Ahora bien, es claro que -considerada la función que cumple la tutela como mecanismo protector de los derechos fundamentales y el contexto de la norma transcrita- la posibilidad de ejercer la acción en forma conjunta con las que proceden ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, no puede interpretarse en el sentido de hacer que en tal caso su trámite deba surtirse forzosamente ante los tribunales administrativos, entendimiento que limitaría ostensiblemente las posibilidades de protección judicial. Lo que la norma legal permite, aunque no haya utilizado con propiedad el término "conjuntamente", es el ejercicio simultáneo de la acción ante el juez de tutela, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y de las pertinentes ante la jurisdicción especializada".

"De las precedentes consideraciones se infiere que, ante acciones instauradas respecto de actos administrativos, el juez de tutela no puede asumir la facultad que le confiere la norma mencionada como una autorización de la ley para sustituir al Contencioso Administrativo en la definición sobre la validez de aquellos, ni suponer que podría suspenderlos provisionalmente pues ello representaría invadir el ámbito constitucional de dicha jurisdicción. De allí los precisos términos usados por el legislador para definir el objeto al que ha de circunscribirse la orden judicial para el evento en que prospere la solicitud de tutela transitoria".

Sobre la misma temática, esto es, la interpretación de la referida norma, la sentencia T-440 de 1994⁴³ de la Corte expresó:

*"El alcance de esta norma presupone que, en el proceso correspondiente, se adoptará la decisión definitiva, y concede al juez de tutela una facultad temporal y excepcional de **inaplicación del acto** a la situación concreta, lo cual no puede confundirse con la **suspensión provisional** ni ninguna otra medida precautelativa contencioso administrativa."*

"El precepto también parte de la base de que, en el caso específico del peticionario, la aplicación del acto implicaría que continuara la violación o amenaza del derecho, causándose un perjuicio irremediable que se precisa evitar, pese a la existencia del medio judicial ordinario. Esto significa que, en la hipótesis planteada por el artículo 8o. del Decreto 2591 de 1991, el acto de que se trata es directamente el causante del agravio o del peligro para el derecho fundamental, objeto de protección."

En la sentencia T-142/95⁴⁴, la Corte acometió el estudio de las situaciones que debe avocar el juez, frente a la acción de tutela, las acciones contencioso administrativas y a la suspensión provisional. Se dijo por la Corte:

"La atribución conferida por el Constituyente a la jurisdicción contencioso administrativa para suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos, enfrenta al juez de tutela con varias situaciones que han sido objeto de decisión por parte de la Corte:....."

"En situaciones en las que existe violación o amenaza de un derecho fundamental por parte de una autoridad ejecutiva, y no cuenta el afectado con acción ante la jurisdicción contencioso administrativa, o dentro del trámite de ella no es

posible la controversia sobre la violación del derecho constitucional, la tutela procede como mecanismo definitivo de protección del derecho constitucional conculcado. Así quedó planteado en las Sentencias T-090 de 1995 y T-100 de 1994, ambas de la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas."

"Cuando existe violación o amenaza de un derecho fundamental, el afectado cuenta con acción contenciosa administrativa, y no procede la suspensión provisional, el juez de tutela debe dar aplicación a los artículos 7 y 8 del decreto 2591 de 1991..."

También en la aludida sentencia se advierte que "cuando existe la violación o amenaza del derecho, hay acción contenciosa administrativa y procede la suspensión provisional el juez de tutela debe proceder" como indica la sentencia T-443/92⁹, a la cual se hizo alusión antes.

Recientemente en la sentencia T-131A de 1996¹⁰ se expresó sobre el punto lo siguiente:

"Así las cosas en el presente evento cabía la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo, la cual efectivamente fue pedida y negada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la Sociedad Transportistas de Colombia S.A. en contra de la resolución No. 000490 de 1994, y que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En consecuencia de acuerdo con los criterios transcritos, no resulta procedente conceder el amparo impetrado, menos aún cuando, de conformidad con la prueba solicitada se encuentra establecido que no se ejerció el recurso de apelación en contra del auto mediante el cual negó la suspensión provisional".

d) Considera la Corte que es necesario precisar su jurisprudencia, en relación con la compatibilidad entre la acción de tutela y las acciones contencioso administrativas y la suspensión provisional del acto administrativo. Con tal propósito expone las siguientes consideraciones:

- Procede la tutela como mecanismo definitivo, cuando la persona afectada en su derecho fundamental no cuenta con acción contenciosa administrativa, como en el caso de los actos preparatorios o trámite y de ejecución o de los actos policivos no administrativos.

- También procede la tutela como mecanismo definitivo, en el evento de que no sea posible a través de la acción contenciosa administrativa, controvertir la violación del derecho fundamental o dicha acción se revela insuficientemente idónea o ineficaz para la efectiva protección del derecho. Esta fue la situación analizada por la Corte en la sentencia T-256/95¹¹, en relación con los concursos de mérito para acceder a cargos públicos de carrera.

- Procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando el afectado en su derecho fundamental dispone de acción contenciosa pero no procede la suspensión provisional, según los términos del art. 152 del C.C.A.. Sin embargo, es preciso aclarar que según la legislación vigente, la suspensión provisional es admisible en todos los casos en que se impugna un acto administrativo. Por tanto, hay que entender que la no procedencia de la suspensión provisional se refiere a los casos en que se ejercitan acciones que no involucran la anulación de actos administrativos (contractuales o de reparación directa).

- Igualmente es viable la tutela como mecanismo transitorio, cuando el interesado dispone de la acción contenciosa administrativa y la suspensión provisional es procedente, por las siguientes razones:

- 1) Según la letra a) del art. 152 de la Constitución, la regulación de los "derechos y deberes fundamentales de las personas de los procedimientos y recursos para su protección" corresponde al Congreso a través de una ley estatutaria. El decreto 2591 de 1991 dictado en uso de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el art. 5 transitorio de la Constitución, es análoga a una ley estatutaria y, en todo caso ley especial, que deben aplicar los jueces de la jurisdicción constitucional de la tutela.

Con la finalidad de asegurar la efectiva protección de los derechos constitucionales fundamentales dicho decreto contempla en el art. 7 la adopción de medidas provisionales, cuando el juez expresamente lo considera necesario y urgente para proteger el derecho, en cuyo caso "suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere". También podrá el juez de oficio o a petición de parte "dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar a que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso" (inciso final art. 7).

Así mismo el inciso final del art. 8, transcrito anteriormente, permite ejercer la tutela como mecanismo transitorio conjuntamente con las acciones contencioso administrativas.

- 2) La institución de la suspensión provisional tiene un rango constitucional, conforme al art. 238 que dice:

"La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial".

En los términos del art. 152 del C.C.A., norma anterior a la Constitución de 1991, la suspensión provisional es procedente bajo los siguientes supuestos:

Que las medidas se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitido.

Si la acción de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar el actor.

3) A diferencia de la acción de tutela que persigue la efectiva protección de los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados, la suspensión provisional, se encuentra estructurada bajo la concepción muy limitada de ser una medida excepcional, con base constitucional pero con desarrollo legal, que busca impedir provisionalmente la ejecución de actos administrativos que son manifiestamente violatorios del ordenamiento jurídico y cuando en algunos casos, además, su ejecución pueda ocasionar perjuicios a una persona. Dicha institución, en consecuencia, fue concebida como mecanismo de protección de derechos con rango legal, sin que pueda pensarse de modo absoluto que eventualmente no pueda utilizarse como instrumento para el amparo de derechos constitucionales fundamentales; pero lo que sí se advierte es que dados los términos estrictos en que el legislador condicionó su procedencia, no puede considerarse, en principio, como un mecanismo efectivo de protección de dichos derechos. En efecto:

La confrontación que ordena hacer el art. 152 del C.C.A. entre el acto acusado y las normas que se invocan como transgredidas, es de confrontación *prima facie* o constatación simple, porque el juez administrativo no puede adentrarse en la cuestión de fondo, de la cual debe ocuparse la sentencia que ponga fin al proceso. En cambio, el juez de tutela posee un amplio margen de acción para poder apreciar o verificar la violación o amenaza concreta del derecho constitucional fundamental, pues no sólo constata los hechos, sino que los analiza y los interpreta y determina a la luz del contenido y alcance constitucional del derecho si procede o no el amparo impetrado. De manera que la suspensión provisional opera mediante una confrontación directa entre el acto y la norma jurídica, generalmente contentiva de una proposición jurídica completa, que se afirma transgredida, así puedan examinarse documentos, para determinar su violación manifiesta; en cambio, cuando se trata de amparar derechos fundamentales el juez de tutela se encuentra frente a una norma abierta, que puede aplicar libremente a través de una valoración e interpretación amplia de las circunstancias de hecho.

No fue la intención del Constituyente ni la del Legislador consagrar una prevalencia de la suspensión provisional sobre la acción de tutela, pues ambas operan y tienen finalidades diferentes. Por el contrario, en razón de su finalidad se reconoce a la tutela, como mecanismo destinado a asegurar el respeto, vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, cierta prevalencia sobre la suspensión provisional del acto administrativo, hasta el punto que es procedente instaurar conjuntamente la acción de tutela y la acción contencioso administrativa y dentro del proceso a que da lugar aquélla se pueden adoptar, autónomamente, medidas provisionales.

No puede pensarse que el legislador al regular un mecanismo de protección de los derechos en un momento dado, automáticamente elimine o excluya otros instrumentos de amparo, pues pueden existir instrumentos de protección simultáneos y concurrentes, si ellos, a juicio del legislador, conducen a la finalidad constitucional de lograr la efectividad de aquéllos.

La acción de tutela y la suspensión provisional no pueden mirarse como instrumentos de protección excluyentes, sino complementarios. En tal virtud, una es la perspectiva del juez contencioso administrativo sobre viabilidad de la suspensión provisional del acto, según los condicionamientos que le impone la ley, y otra la del juez constitucional, cuya misión es la de lograr la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales. Por consiguiente, pueden darse eventualmente decisiones opuestas que luego se resuelven por el juez que debe fallar en definitiva el asunto; así bajo la óptica de la regulación legal estricta el juez administrativo puede considerar que no se da la manifiesta violación de un derecho fundamental y sin embargo el juez de tutela, que sí puede apreciar el mérito de la violación o amenaza puede estimar que esta existe y, por ende, conceder el amparo solicitado.

En conclusión, es posible instaurar simultáneamente la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, sin que interese que se haya solicitado o no la suspensión provisional del acto administrativo, pues en parte alguna la norma del art. 8 impone como limitante que no se haya solicitado al instaurar la acción contenciosa administrativa dicha suspensión. Además, dentro del proceso de tutela es posible, independientemente de dicha suspensión, impetrar las medidas provisionales a que alude el art. 7 en referencia.

La acción de tutela que como se dijo antes prevalece sobre la acción contencioso administrativa, no puede quedar anulada o limitada por la circunstancia de que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se haya pronunciado adversamente sobre la petición de suspensión provisional, porque la una y la otra operan en planos normativos, fácticos, axiológicos y teleológicos diferentes.

Estima la Corte, que con fundamento en el principio de la efectividad de los derechos que consagra la Constitución, le corresponde al juez de tutela decidir sobre la protección de los derechos constitucionales fundamentales, en forma oportuna, aún antes de la conclusión del proceso contencioso administrativo que se hubiere instaurado, mediante la adopción de medidas provisionales que aseguren su goce y vigencia, en situaciones que comprometan su violación o amenaza y en extrema urgencia, para evitar perjuicios o situaciones irreparables.

4) La necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales y de efectivizarlos, impone un cambio, una nueva concepción, de la institución de la suspensión provisional. El viraje que se requiere para adaptarla a los principios, valores y derechos que consagra el nuevo orden constitucional puede darlo el juez contencioso administrativo o inducirlo el legislador, a través de una reforma a las disposiciones que a nivel legal la regulan.

El juez administrativo, con el fin de amparar y asegurar la defensa de los derechos fundamentales podría, aplicando directamente la Constitución Política, como es su deber, suspender los efectos de los actos administrativos que configuren violaciones o amenazas de transgresión de aquéllos. Decisiones de esa índole tendrían sustento en:

- La primacía que constitucionalmente se reconoce a los derechos fundamentales y a la obligación que tienen todas las autoridades- incluidas las judiciales- de protegerlos y hacerlos efectivos (art. 2 C.P.).

- La aplicación preferente de la Constitución frente a las demás normas jurídicas y así mismo el efecto integrador que debe dársele a sus disposiciones con respecto a las demás normas del ordenamiento jurídico. De este modo, al integrar las normas que regulan la suspensión con las de la Constitución se podría lograr una mayor eficacia y efectividad a dicha institución.

- La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228 C.P.), mas aún cuando este emana de la Constitución y busca hacer efectivas la protección y la vigencia de los derechos fundamentales.

- La suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos tiene un fundamento constitucional. El art. 238 permite dicha suspensión "por los motivos y con los requisitos que establezca la ley". Siendo la Constitución ley de leyes y pudiendo aplicarse sus normas directamente, sobre todo, cuando se trate de derechos fundamentales (art. 85), es posible aducir como motivos constitucionales para la procedencia de la suspensión provisional la violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales.

La idea central que se debe tener presente es que las diferentes jurisdicciones, dentro de sus respectivas competencias, concurran a la realización del postulado constitucional de la efectivización, eficacia y vigencia de los derechos constitucionales fundamentales. Por lo tanto, la posibilidad de decretar la suspensión provisional de los actos administrativos por violación de los derechos constitucionales fundamentales, independientemente de que ésta sea manifiesta o no, indudablemente, puede contribuir a un reforzamiento en los mecanismos de protección de los referidos derechos.

5. La situación concreta que se analiza.

5.1. Según los términos de la demanda de tutela, la controversia se originó en el otorgamiento de la licencia ambiental a la sociedad "Occidental de Colombia Inc" para la realización de las actividades de prospección sísmica del bloque Samoré, sin haberse agotado el procedimiento de consulta a la comunidad indígena U'wa, con arreglo a la Constitución, al Convenio 169 de la O.I.T. y a la ley.

5.2. En la parte motiva de la resolución 110 del 3 de febrero de 1995, originaria del Ministerio del Medio Ambiente, mediante la cual se otorgó dicha licencia, se dice en punto a la consulta a la referida comunidad, que el 1 de agosto de 1994 se expuso por la oficina jurídica del referido Ministerio la necesidad de realizar, previamente a la decisión sobre la licencia, una consulta a la comunidad indígena Tunebo (U'wa) y que esta fue ordenada mediante auto numero 237 del 28 de septiembre de 1994 y llevada a cabo en la ciudad de Arauca durante los días 10 y 11 de enero de 1995, con la participación de representantes del Ministerio de Minas y Energía "levantándose el acta de acuerdo respectiva".

Observa la Corte, que en el auto que ordenó la consulta no se hace referencia alguna sobre los puntos o aspectos que debían ser materia de la misma, que naturalmente no eran otros que los consistentes en obtener un pronunciamiento de la referida comunidad, previo conocimiento del proyecto de exploración sísmica del bloque Samoré, de los estudios de impacto ambiental presentados por dicha sociedad y de los conceptos técnicos del Inderena y del Ministerio del Medio Ambiente, de la incidencia de la realización de dicho proyecto y de la posible explotación de los recursos petrolíferos en el área escogida en la integridad social, cultural y económica de la comunidad indígena "U'wa".

5.3. Luego de examinar detenidamente el documento de fecha enero 10 y 11 de 1995, suscrito en Arauca, denominado "Reunión de información y consulta con el pueblo U'wa para la realización del proyecto de adquisición (sic) sísmica en el contrato de asociación Samoré celebrado entre la Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol y Occidental de Colombia, Inc", observa la Corte:

-Asistieron a la reunión, entre otras personas, como miembros de la Comunidad U'wa, Roberto Cobaría, José Antonio Rinconada, Julio Tegría, Carlos Tegría, Suboto Barroso y Guercuna Tegría.

-Se dijo que el objeto de la reunión es la de realizar la consulta establecida en los artículos 6 y 15 de la ley 21 de 1991 y en el artículo 76 de la ley 99 de 1993, para los efectos del trámite de la aludida licencia ambiental.

-El orden del día que se sometió a la debida aprobación fue el siguiente:

"1. Presentación de los delegados de las entidades públicas, de Occidental de Colombia, Inc. y del pueblo U'wa presentes".

"2. Información sobre los derechos del pueblo U'wa por parte de la Dirección General de Asuntos Indígenas. La Constitución Nacional y la Ley 21 de 1991 y el Ministerio del Medio Ambiente presenta la Ley 99/93 Artículo 76".

"3. El contrato de asociación para la exploración sísmica de Samoré (exposición a cargo de delegados de Ecopetrol)".

"4. Exposición sobre la política de hidrocarburos del gobierno nacional, por parte del delegado del Ministerio de Minas y Energía".

"5. Exposición de características del proyecto Samoré, por parte de los delegados de Occidental de Colombia Inc."

"6. Exposición de concepto sobre aspectos ambientales del proyecto, por parte del delegado del Ministerio del Medio Ambiente". "7. Deliberación de los delegados del pueblo U'wa (receso para los otros asistentes)".

"8. Exposición de las consideraciones de los delegados del pueblo U'wa frente a las otras delegaciones".

"9. Conclusiones, elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión".

-La reunión se desarrollo, luego de la presentación de los diferentes asistentes, de la siguiente manera:

Se informó por la Dra. Gladys Jimeno de Santoyo, Directora General de Asuntos Indígenas -Ministerio del Interior, a los miembros de la comunidad presentes sobre el contenido de las normas constitucionales que asignan al Estado el deber de proteger la diversidad étnica y cultural y en especial del Parágrafo del artículo 330. Igualmente se les enteró acerca del contenido de los artículos 6, 7 y 15 del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989, aprobado por la ley 21 de 1991, que alude a las consultas que deben hacerse a dichos pueblos cuando se vayan a adoptar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Precisó dicha funcionaria, aludiendo al alcance del mencionado convenio "que la consulta no es un permiso de los indígenas sino una apreciación sobre afectaciones posibles de un proyecto a un pueblo indígena".

"El pueblo 'U'wa" debe pensar cuales son los aspectos relativos a su integridad social, económica y cultural que pueden afectarse y comentar sobre ellos para prever las medidas que habría que implementar.

-El representante de ECOPETROL explicó las características y el alcance del contrato de asociación celebrado por Occidental de Colombia Inc, así como el sistema de contratación petrolera.

-El representante del Ministerio de Minas y Energía expuso su criterio en relación con la política estatal en materia de exploración y explotación de hidrocarburos.

-El geólogo Omar Arias explicó el contenido y alcance del programa sísmico Samoré, que comprende fundamentalmente la apertura de trochas, actividades de topografía, perforación de huecos cargados con explosivos, detonación y toma de información y limpieza y tapado de la línea de huecos. Sobre este punto en el acta se consigna, en lo pertinente, lo siguiente:

"Surgieron preguntas de los indígenas sobre la localización de las líneas sísmicas y sobre la carga de dinamita, la explotación, y demás impactos que pueda causar la prospección sísmica".

Se aclaró que para el desarrollo del proyecto no se abren carreteras y que los equipos se movilizan en vehículos automotores por las vías existentes, hasta donde sea posible. De no existir vías, el transporte se realiza a pie".

"En el evento que se produzcan daños se pagan. Para eso hay negociadores especializados".

"Se preguntó si las líneas sísmicas van a pasar por los resguardos. Se contestó, mostrando el mapa, que sí va a haber entre 7 y 8 líneas que van a pasar por algunos resguardos":

"El total de líneas del proyecto es alrededor de 20 ó 21. El proyecto dura entre 8 y 10 meses".

"Se señaló que los sitios sagrados, casas, nacederos, ríos etc., serán respetados. Antes de abrir la trocha se determinan esos sitios para no tocarlos y desviar, si es necesario, la línea sísmica".

"Los indígenas preguntaron que sucedía si se encontraba petróleo dentro del área donde están establecidos los resguardos".

Omar Arias explicó que las zonas para la búsqueda de petróleo son muy extensas y que por ahora sólo se va a realizar la exploración".

"Luis Fernando de Angulo recalcó que esta reunión es solamente para la etapa de prospección sísmica. En esta etapa no se sabe si hay petróleo o no".

"Podría generarse un compromiso con los U'wa para mostrarles los resultados de la sísmica y para que conozcan el subsuelo. Si se decide perforar, tendrían que hacerse nuevas reuniones de consulta".

"Omar Arias continuó su presentación, mostrando con fotografías de manera detallada todos los pasos de un proyecto de prospección sísmica y concluyó, ilustrando con diapositivas, el estado en que quedan los sitios en donde se localizan las líneas sísmicas y los campamentos".

"Recalcó el geólogo Arias que la identificación de dichos sitios era difícil por cuanto el impacto ambiental de la prospección sísmica es mínimo y un año después no fue posible encontrar evidencias claras de la trocha utilizada".

- El representante del Ministerio del Medio Ambiente explicó el trámite dado a la solicitud de licencia ambiental ante el INDERENA y dicho Ministerio y que esta contendrá las obligaciones que deben cumplirse en desarrollo del proyecto, cuyo cumplimiento se vigilará. Dejó constancia de que los representantes del pueblo U'wa poseen copia del concepto técnico emitido por el Ministerio en relación con la viabilidad de dicho proyecto.

- No hubo participación de la comunidad U'wa en la realización del estudio de impacto ambiental. Sobre este aspecto, la Directora General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior manifestó "la comunidad no ha participado en la elaboración del proyecto como tal, porque este obedece a un contrato suscrito entre Occidental y Ecopetrol. Sin embargo, a partir de este momento el proyecto debe adelantarse con la participación de la comunidad".

- Quedó establecido que la consulta no era para decir si o no a un proyecto, sino para que la comunidad entienda como pueden verse afectados por los trabajos que se van a realizar, estudiar cuales serían las incidencias socio-culturales del proyecto y formular soluciones así como los beneficios a que debe acceder la comunidad. Es decir, que la decisión de ejecutar el proyecto es del Gobierno.

- Se leyó por uno de los miembros de la comunidad un documento preparado durante el tercer congreso U'wa (enero 17 de 1995), en el cual se trató el tema del proyecto del estudio sísmico y se dejó constancia de lo siguiente: (1). La comunidad "U'wa" no tenía conocimiento de la existencia del proyecto, no obstante ser los primeros afectados; (2). La OXY no se ha hecho presente en las diferentes reuniones de "Asambleas y Congreso" llevadas a cabo dentro de las comunidades U'wa; (3). La cosmovisión del pueblo U'wa es muy diferente a la del blanco y es nuestro deber conservarla; (4). Los bienes del mundo físico han sido creados por un ser supremo (Sira-Dios) que es su verdadero dueño. Por lo tanto, estos no pertenecen a ningún hombre y deben ser conservados y administrados según las leyes de la naturaleza, conforme a los mandatos de Dios-Sira; (5). Los "U'wa" son los guardianes del ecosistema cuya conservación es de interés de la comunidad, sin que interese el provecho personal; (6). Queremos que se tenga en cuenta nuestra forma de concebir el mundo y que se respeten los preceptos normativos nacionales e internacionales que tutelan los derechos de los pueblos indígenas.

Con fundamento en lo anterior, la conclusión de dicho congreso fue la siguiente:

"...hasta tanto no se discuta, consulte y apruebe las propuestas que se formulan el día 11 de enero, se pare lo proyectado por la OXY para el futuro."

"El permitirle, sería destruir la naturaleza y en general la pérdida de nuestra cultura."

- Posteriormente se leyó un documento elaborado el 10 de enero de 1995, pero fechado el 11 del mismo mes y año, en el cual los miembros asistentes de la comunidad U'wa expresan su oposición al proyecto en razón de que se desintegraría su forma de vida en lo cultural, económico, social y territorial. En efecto, precisan en detalle, las afectaciones que en este sentido sufrirían con dicho proyecto y formulan las siguientes propuestas:

"1. Modificar el proyecto de estudio sísmico, con intervención de las Autoridades Tradicionales o sus Delegados de las diferentes comunidades."

"2. Llevar a cabo reunión con la participación de la ONIC y otras entidades de carácter nacional e internacional."

-Finalmente, en la reunión se lograron los siguientes acuerdos y conclusiones:

"1 Hay unanimidad para entrar a estudiar, con la participación de las Autoridades U'wa las modificaciones al proyecto sísmico de Samoré, si hubiere lugar a ellas, teniendo en cuenta dos criterios centrales".

"1.1. La preservación de la integridad étnica, social, cultural y económica del pueblo U'wa".

"1.2. Los requerimientos técnicos y científicos indispensables para la realización de las actividades sísmicas".

"2. Se verificará una segunda reunión de interlocución, que tendrá lugar en la ciudad de Arauca y cuya fecha tentativa se fijó para la primera semana de febrero, en la cual se presentarán y discutirán las modificaciones por el pueblo U'wa...."

"3. Se constituirá una comisión intercultural conformada por el Cabildo Mayor del Pueblo U'wa, la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno y Occidental de Colombia, Inc., para hacer un trabajo de campo conjunto con el propósito de reconocer los terrenos en los cuales va a llevar a cabo el proyecto y en los que se comprometan resguardos o territorios indígenas. La comisión presentará sus observaciones en la reunión de febrero".

5.4. Es de anotar, que la licencia ambiental se expidió el 3 de febrero de 1995, no obstante que para esa época estaba prevista "la segunda reunión de interlocución" y que aún se encontraban pendientes de realizar los demás puntos de los acuerdos y conclusiones mencionados. Dicha reunión corresponde a la celebrada el 21 de febrero de 1995 que alude al "seguimiento a la consulta realizada con el pueblo "U'wa" los días 10 y 11 de enero del mismo año" y en la cual participaron por el pueblo "U'wa" Roberto Cobaría, Presidente del Cabildo Mayor y representantes de diferentes comunidades. En esta reunión se cuestionó por los representantes indígenas que se hubiera expedido la licencia ambiental sin haberse operado el trámite de la consulta. No obstante, los reiterados temores expresados por los representantes indígenas para concretar acuerdos en torno a la forma de llevar a cabo la exploración sísmica, en el acta respectiva se consignó lo siguiente:

"En conclusión, se determinó que la compañía procederá a dar cumplimiento a esos acuerdos y, con la veeduría del Ministerio de Gobierno, realizará las actividades sísmicas respetando la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas, tal como lo disponen la Constitución Nacional y las leyes aplicables a esta materia."

5.5. Diferentes documentos que obran dentro del expediente, provenientes de miembros de la comunidad "U'wa" y de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y la misma inspección judicial ordenada por la Corte y llevada a cabo en los territorios ocupados por dicha comunidad y en zonas aledañas a la misma, le indican a la Corte lo siguiente:

Que según la comunidad "U'wa" y la referida Dirección, la consulta previa exigida por la Constitución y las normas nacionales e internacionales se inició pero no se agotó con la reunión del 10 y 11 de enero de 1995, y que su voluntad desde un principio y actualmente ha sido la de oponerse a la ejecución del proyecto de prospección sísmica, debido a los riesgos que éste entraña para su supervivencia como grupo étnico, por los bruscos cambios en su entorno físico y en sus condiciones culturales, económicas y cosmogónicas.

5.6. Para la Corte resulta claro que en la reunión de enero 10 y 11 de 1995, no se estructuró o configuró la consulta requerida para autorizar la mencionada licencia ambiental. Dicha consulta debe ser previa a la expedición de ésta y, por consiguiente, actuaciones posteriores a su otorgamiento, destinadas a suplir la carencia de la misma, carecen de valor y significación.

Tampoco pueden considerarse o asimilarse a la consulta exigida en estos casos, las numerosas reuniones que según el apoderado de la sociedad Occidental de Colombia Inc. se han realizado con diferentes miembros de la comunidad U'wa, pues aquella indudablemente compete hacerla exclusivamente a las autoridades del Estado, que tengan suficiente poder de representación y de decisión, por los intereses superiores envueltos en aquella, los de la comunidad indígena y los del país relativos a la necesidad de explotar o no los recursos naturales, según lo demande la política ambiental relativa al desarrollo sostenible.

Pone de presente la Corte la posición contradictoria de las autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio del Medio Ambiente, pues mientras las primeras aseveran que la consulta no existió las segundas afirman lo contrario. Obviamente la Corte, analizada la abundante prueba incorporada a los autos, se inclina por la posición de que no existió dicha consulta previa.

5.7. En conclusión, la Corte estima que el procedimiento para la expedición de la licencia ambiental se cumplió en forma irregular y con desconocimiento del derecho fundamental de la comunidad U'wa, en relación con la consulta que formal y sustancialmente ha debido hacersele. Consecuencialmente, resultan vulnerados no sólo los derechos de participación, según el art. 40-2, y a la integridad de la comunidad U'wa, sino el derecho al debido proceso.

5.8. Conforme a lo analizado, la concesión de la tutela sería procedente. No obstante, debe la Corte analizar la existencia del medio alternativo de defensa judicial a efecto de determinar si la concede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, para lo cual, hace los siguientes razonamientos:

- El Defensor del Pueblo instauró la acción pública de nulidad y solicitó la suspensión provisional del acto administrativo que otorgó la licencia ambiental, con fundamento en los artículos 84 del C.C.A y 73 de la ley 99 de 1993. El Consejo de Estado admitió la demanda, pero negó dicha suspensión; contra el auto que adoptó esta medida no se interpuso recurso alguno.

- Conforme a las consideraciones anteriores, la Corte estima que la tutela si es procedente como mecanismo transitorio. En efecto:

- a) No es incompatible la tutela con el ejercicio de la acción contenciosa administrativa ni con la suspensión provisional del acto administrativo, que en el presente caso fue negada por el Consejo de Estado.

- b) Es irrelevante la contradicción existente entre lo decidido por el Consejo de Estado al no acceder a la suspensión provisional y lo que se resolverá en el presente proceso, porque al pronunciarse sobre dicha suspensión no se analizó lo concerniente al aspecto sustancial o de fondo relativo al derecho de participación de la comunidad U'wa.

Por lo demás, tampoco podrá existir contradicción entre lo que se decida en este proceso y lo que resuelva el Consejo de Estado, en el evento de que niegue la nulidad pedida, si se tiene en cuenta que conforme al art. 175 del C.C.A. la cosa juzgada "*erga omnes*" sólo opera en relación con la "*causa petendi*" materia de juzgamiento, y como se observó antes en la demanda de nulidad no se señaló como violado el art. 40-2 de la Constitución ni se expuso, por consiguiente, el concepto de su violación. Las referencias que se hacen a dicho artículo en la demanda de nulidad, sin mencionar el numeral 2, son meramente circunstanciales para aludir simplemente a los tipos de mecanismos de participación, pero en modo alguno se formuló un cargo concreto por violación del derecho fundamental de participación de la referida comunidad, con arreglo a la aludida norma.

- c) El inciso 2 del numeral 1 del art. 6 del decreto 2591/91 que definía como "irremediable el perjuicio que sólo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización", fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-531¹⁴¹ del 11 de noviembre de 1993; por lo tanto, corresponde al juez determinar las situaciones concretas en que dicho perjuicio tiene el indicado carácter, bajo los siguientes condicionamientos, señalados en la sentencia T-225/93¹⁴²: el perjuicio ha de ser inminente; las medidas que se requieren para conjurarlo han de ser urgentes; el perjuicio debe ser grave; la urgencia de las medidas y la gravedad del perjuicio determinan que la acción de tutela sea impostergradable, para evitar que éste llegue a ser irremediable, es decir, que la vulneración del derecho progrese hasta el extremo de que no sea posible su restablecimiento, en cuanto a su goce efectivo, "porque el bien jurídicamente protegido se deteriora irreversiblemente hasta el punto que ya no puede ser recuperado en su integridad".

Estima la Corte que el perjuicio irremediable que se pretende evitar, consiste en que al ejecutarse la resolución que autorizó la licencia ambiental, ejecución que se extiende hasta cuando culminen las labores de exploración y se evalúen sus resultados, se violaría en forma permanente el derecho fundamental de participación de la comunidad, a través de la consulta, e indudablemente, se estaría transgrediendo, o por lo menos amenazando el derecho igualmente fundamental, que tiene la referida comunidad a su identidad étnica, cultural, social y económica, pues es evidente, que la vulneración de los referidos derechos no se entenderá superada mientras no se lleve a cabo dicha consulta.

Adicionalmente la irremediabilidad del perjuicio que se pretende evitar, a juicio de la Corte, consiste en que de resultar positiva la labor exploratoria, la fase que sigue es la explotación, la cual se desarrollaría, sin mayores inconvenientes, con desconocimiento de los aludidos derechos fundamentales y con el evidente peligro de la afectación grave de la integridad de la comunidad U'wa.

En síntesis, la irremediabilidad del perjuicio que se pretende evitar consiste en que la violación de los aludidos derechos fundamentales persista e incluso, pueda llegar a un punto de no retorno, como sería la destrucción o aniquilación del grupo humano U'wa.

La eventual nulidad que llegare a decretar el Consejo de Estado no tendría la virtud de restablecer el perjuicio que se esta causando y se causaría, por el desconocimiento de los referidos derechos. Por lo tanto se requiere de su protección urgente e inmediata.

d) En las circunstancias analizadas, se revocará la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia -Sala Penal y, en su lugar, se confirmará la sentencia del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá con la modificación de que se tutelan, en forma transitoria, como se indica en la parte resolutive de esta sentencia, los derechos a la participación a la integridad étnica, cultural, social y económica, y al debido proceso de la comunidad U'wa.

Como la omisión de la consulta es precisamente el hecho que origina la violación o amenaza de violación de los mencionados derechos, la Corte ordenará que la consulta a ésta se cumpla dentro del plazo que mas adelante se señala.

III. DECISIÓN.

Por lo anterior, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero: **REVOCAR** la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de fecha 19 de octubre de 1995.

Segundo: **CONFIRMAR** la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Especial, de fecha 12 de septiembre de 1995, mediante la cual se concedió la tutela impetrada, pero con la modificación de que se tutelan, los derechos a la participación, a la integridad étnica, cultural, social y económica y al debido proceso de la comunidad U'wa.

Tercero: **ORDENAR** que con el fin de hacer efectivo el derecho fundamental de participación de la comunidad U'wa, conforme al numeral 2 del art. 40 de la Constitución, se proceda en el término de 30 días hábiles, a partir de la notificación de esta sentencia a efectuar la consulta a la comunidad U'wa.

Cuarto: La tutela que se concede, sobre el derecho fundamental a la participación de la comunidad U'wa, estará vigente, mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncia en relación con la nulidad de la resolución que otorgó la licencia ambiental, en razón de la vulneración de dicho derecho. Para este efecto la comunidad U'wa deberá demandar dicha nulidad, si es del caso, en los términos del art. 76 de la ley 99 de 1993.

Quinto: **COMUNICAR** esta decisión al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, para que sean notificadas las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591 de 1995.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.